# DECRETO por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017

| PROCESO LEGISLATIVO | |
|---|---|
| 01 | **1)** 13-02-2014<br>Cámara de Senadores.<br>**INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.<br>Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD).<br>Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.<br>Diario de los Debates, 13 de febrero de 2014. |
| | **2)** 18-03-2015<br>Cámara de Senadores.<br>**INICIATIVA** con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.<br>Presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth (PAN).<br>Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con Opinión de la Comisión de Gobernación.<br>Gaceta Parlamentaria, 18 de marzo de 2015. |
| | **3)** 24-03-2015<br>Cámara de Senadores.<br>**INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas; y se Reforman y Adicionan los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.<br>Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD).<br>Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.<br>Diario de los Debates, 24 de marzo de 2015. |
| | **4)** 16-04-2015<br>Cámara de Senadores.<br>**INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.<br>Presentada por el Senador Omar Fayad Meneses (PRI).<br>Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.<br>Diario de los Debates, 16 de abril de 2015. |
| | **5)** 17-09-2015<br>Cámara de Senadores.<br>**INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares.<br>Presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth (PAN).<br>Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; Gobernación, de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.<br>Diario de los Debates, 17 de septiembre de 2015. |
| | **6)** 14-12-2015<br>Cámara de Senadores.<br>**INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas; y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.<br>Presentada por el Ejecutivo Federal.<br>Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.<br>Diario de los Debates, 14 de diciembre de 2015. |

| **PROCESO LEGISLATIVO** | |
|---|---|
| 02 | 27-04-2017<br>Cámara de Senadores.<br>**DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.<br>**Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 89 votos en pro, 3 en contra y 4 abstenciones.<br>Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.<br>Diario de los Debates, 27 de abril de 2017.<br>Discusión y votación, 27 de abril de 2017. |
| 03 | 02-05-2017<br>Cámara de Diputados.<br>**MINUTA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.<br>Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos.<br>Gaceta Parlamentaria, 2 de mayo de 2017. |
| 04 | 12-10-2017<br>Cámara de Diputados.<br>**DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.<br>**Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 396 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.<br>Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.<br>Diario de los Debates 10 de octubre de 2017.<br>Discusión y votación 12 de octubre de 2017. |
| 05 | 17-11-2017<br>Ejecutivo Federal.<br>**DECRETO** por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.<br>Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017. |

**1)** 13-02-2014
Cámara de Senadores.
**INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.
Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.
Diario de los Debates, 13 de febrero de 2014.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS**

# DIARIO DE LOS DEBATES

## Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 13 de Febrero de 2014

**(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)**

**- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez:** Con su venia, señor Presidente, muchas gracias. Señoras y señores Senadores:

La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos. Las cifras, sin duda, a todas luces se han incrementado de manera alarmante en nuestro país en los últimos años.

Según el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han presentado 390 quejas por desaparición forzada ante dicho organismo entre diciembre de 2006 y 2011, de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011.

Si analizamos los informes de diversas organizaciones no gubernamentales, coinciden en el señalamiento de esta evaluación que hace la Comisión Nacional de Derechos los Humanos respecto de que estos años, justamente, han sido los de mayor registro de reclamo de personas que han desparecido.

Por su parte, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas, señaló tras su visita al país en el mes de marzo de 2011 que más de 3 mil personas habrían desaparecido en México desde 2006.

Entre los elementos comunes de los casos de desaparición forzada, encontramos que una vez que se interponen denuncias formales, éstas no son debidamente investigadas como desaparición de personas u otro delito similar, argumentando que el delito no está tipificado o no hay elementos para generar una línea de investigación.

De acuerdo por lo expresado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil, en su informe, “el surgimiento de la desaparición forzada en México”, de enero 2013, se han identificado a 4 grandes grupos de personas que particularmente son vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual: las y los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o integrantes de movimientos sociales, personas migrantes y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada.

A nivel federal, la desaparición forzada fue tipificada el 25 de abril de 2001 en el artículo 215-A del Código Penal Federal. No obstante, como podemos ver en estas cifras que brevemente acabo de mencionar, el tipo penal ha resultado inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo y a que se restringe la autoría del delito únicamente a servidores públicos, dejando fuera del tipo penal a todas aquellas personas que con el apoyo, autorización, tolerancia o aquiescencia del Estado, cometen tal delito, por lo que no corresponde a los

estándares internacionales tal como ya ha sido señalado puntualmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estas consideraciones, por cierto, llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco, dicha sentencia data del 23 de noviembre de 2009, y además nos obliga a que tomemos medidas para reformarno solamente el Código Militar, sino también los preceptos sustantivos y adjetivos en materia penal. Sin embargo, a más de 4 años esto no ha sucedido.

También tengo que mencionar que entre las recomendaciones que México recibió en octubre pasado en el marco del examen periódico universal en Ginebra, por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también se nos recomienda que tomemos medidas para que legislemos debidamente en esta materia.

La presente iniciativa justamente se fundamenta en estas recomendaciones y, por supuesto, también en los diversos instrumentos internacionales de los que México es Estado parte.

Enumero las más importantes:

1. La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992.

2. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el marco del periodo número 24 de sesiones de la Asamblea General.

3. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, también aprobado el 17 de julio de 1998.

4. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 22 de junio de 2006.

Además responde a las diversas peticiones y exigencias de organizaciones de la sociedad civil de víctimas y familiares de personas desaparecidas, quienes han expresado ante la suscrita, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la problemática específica a la que se enfrenta.

Es verdaderamente, además de conmovedor, el sentimiento casi de incapacidad para poder responder adecuadamente. Yo creo que este es un primer paso.

Es por ello que el día de hoy presento, para que sea turnada a su revisión en comisiones, esta iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

Insisto, respondiendo no sólo a las observaciones internacionales respecto del tipo penal, sino también se propone, en esta iniciativa en comento, la creación del Registro Federal de Datos de Personas Detenidas a cargo del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se deberá de mantener un registro actualizado de todas y cada una de las personas en cualquier modalidad de detención por parte de cualquier autoridad federal.

Como hemos dicho, los tipos penales contemplan los sujetos activos del servidor público, pero también, a cualquier particular que actúe en colaboración o con la autorización, el apoyo, la tolerancia o la aquiescencia de éste.

Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, el omitir integrar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada. Existen gran cantidad de casos que nos obliga a legislar en esta particular materia.

Entre las circunstancias agravantes de la pena se establece: que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos, menor de 18 años de edad, mujer, que esta se encuentre embarazada, migrante o indígena, entre otras.

Una de las peticiones más sentidas de las víctimas indirectas, es que en muchos de los casos las familias quedan sin la persona que ofrecía sustento a la familia, o es aquella que era titular de diversos derechos patrimoniales, mismos que no pueden ser ejercidos en detrimento de ésta.

Es por ello que planteamos que el Ministerio Público cuente con un plazo máximo de 6 meses, a partir de iniciada la investigación, para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, y en caso afirmativo deberá consignar el caso al juez competente quien, en el mismo auto de radicación, deberá nombrar un apoderado legal de la persona desaparecida, dictar las medidas provisionales conducentes y emitir esta figura importante que incluimos en la iniciativa, la declaratoria especial de ausencia de persona por desaparición, misma que servirá a la familia para poder ejercer de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Señoras y señores Senadores:

Por todas estas argumentaciones que hoy acabo de esgrimir ante ustedes, ponemos a consideración esta iniciativa; y por lo tanto, les invitamos a que le demos la debida prioridad en la agenda legislativa de esta Soberanía, a efecto de dar respuesta, lo más pronto posible, a diversas recomendaciones de la comunidad internacional, y además porque constituye una de las demandas más sentidas de la sociedad mexicana.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"La suscrita **ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ** Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS**, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos, cuyas cifras se han incrementado alarmantemente en nuestro país en los últimos años.

Según el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se han presentado 390 quejas por desaparición forzada ante dicho organismo entre diciembre de 2006 y 2011, de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011 (más del 70%).

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI) señaló, tras su reciente visita al país en el mes de marzo de 2011, que más de 3,000 personas habrían sido desaparecidas desde el 2006.

Entre los elementos comunes de los casos de desaparición forzada encontramos que, una vez que se interponen denuncias formales, éstas no son investigadas como desaparición de personas u otro delito similar, argumentado que el delito no está tipificado o no hay elementos para generar una línea de investigación.

De acuerdo a lo expresado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos humanos A.C., en su informe "*El resurgimiento de la desaparición forzada en México*", de enero de 2013, se han identificado a cuatro grandes grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual: las y los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o en movimientos sociales; personas migrantes; y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada.

A nivel federal, la desaparición forzada fue tipificada el 25 de abril de 2001 en el artículo 215-A del Código Penal Federal. No obstante, el tipo penal resulta inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo, ya que restringe la autoría del delito únicamente a "servidores públicos", dejando fuera del tipo penal a todas aquellas personas que con el apoyo , autorización tolerancia o aquiescencia del Estado cometantal delito, por lo que no responde a los estándares internacionales, lo cual fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Estas consideraciones llevaron a la CoIDH a condenar al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2009) a reformar dicho artículo; sin embargo, a más de cuatro años, esto no ha sucedido.

La presente iniciativa se fundamenta en diversos instrumentos internacionales firmados por nuestro país, de los cuales destacan:

• La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992.

• La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el 24 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

•El Estatuto de la Corte Penal Internacional. A/CONF. 183/9 de 17 de julio de 1998.

• La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, A/HRC/1/L.2, 22 de junio de 2006.

Además, responde a las peticiones de diversas organizaciones de la sociedad civil de víctimas y familiares de personas desaparecidas, quienes han expresado ante la suscrita la problemática específica a la que se enfrentan.

Es por ello que se ha diseñado esta Ley, respondiendo no sólo a las observaciones internacionales respecto del tipo penal, sino también se propone la creación del Registro Federal de Datos de Personas Detenidas a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se deberá de mantener un registro actualizado de todas las personas en cualquier modalidad de detención, por parte de cualquier autoridad federal.

Como hemos dicho, los tipos penales contemplan los sujetos activos del servidor público, pero también, a cualquier particular que actúe en colaboración o con la autorización, el apoyo, la tolerancia o la aquiescencia de éste.

Se equipara al delito de desaparición forzada de persona, el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada.

Entre las circunstancias agravantes de la pena se establece: que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos, menor de 18 años de edad, mujer, que ésta se encuentre embarazada, migrante o indígena, entre otras.

Una de las peticiones más sentidas de las víctimas indirectas es que, en muchos de los casos, las familias quedan sin la persona que ofrecía sustento a la familia o es aquella que era titular de diversos derechos patrimoniales, mismos que no pueden ser ejercidos, en detrimento de ésta. Es por ello que plantamos que el Ministerio Público cuente con un plazo máximo de seis meses, a partir de iniciada la investigación, para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, en caso afirmativo, deberá consignar el caso al juez competente quien, en el mismo auto de radicación, deberá nombrar apoderado legal de la persona desaparecida, dictar las medidas provisionales conducentes y emitir la Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición misma que servirá a la familia para poder ejercer de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Senado de la República:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS.**

**ARTICULO UNICO.-** Se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, al tenor de la siguiente**:**

**LEY FEDERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS**

**CAPITULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1o.-** La presente Ley tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal.

**Artículo 2o.-** Es deber de todas las autoridades del gobierno Federal mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención.

**Artículo 3o.-** Los órganos dependientes del Ejecutivo Federal que entre sus facultades se encuentre la de realizar detenciones, especialmente los relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

**I.** La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

**II.** La organización de programas de formación de su personal para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

**III.** La profesionalización de las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y nacional en una cultura de respeto a los derechos humanos;

**IV.** La profesionalización de todo el personal de servicio público que participe en la detención, arresto y custodia de personas; y

**V**. La prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada.

**CAPITULO II**

**Artículo 4o.-** El Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo,detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, detención o internaciónen que se encuentren materialmente.

**Artículo 5o.-** Corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

**I.** Emitir las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

**II.** Diseñar y operar un sistema de atención telefónica gratuita que atienda las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, las solicitudes de registro y brinde información sobre personas en arresto o detención a autoridades, familiares o personas interesadas;

**III.** Operar, regular y mantener el Registro Nacional, así como procurar su buen funcionamiento;

**IV.** Integrar la información en el Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas que le proporcione las autoridades federales;

**V.** Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;y

**VI.** Las demás que dispongan otros ordenamientos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

**Artículo 6o.-** Será responsabilidad de la autoridad que realice la detención enviar la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas dentro de las seis horas posteriores a su detención, la cual deberá ser, como mínimo:

**I.** Nombre, sexo, edad, nacionalidad y lugar de procedencia de la persona detenida;

**II.** Fecha, hora y lugar en la que se realizó la detención;

**III.** Autoridad ante la cual se encuentra a disposición la persona detenida; y

**IV.** Lugar en el que se encuentra materialmente la persona detenida.

En caso de que la autoridad desconozca la identidad de la persona detenida, ya sea porque no fuere proporcionada por la misma o porque no recuerda sus datos de filiación o identidad, se deberá enviar la media filiación, señas particulares y demás datos que permitan su identificación.

**Artículo 7o.-** Cuando se ponga a cualquier persona a disposición de una autoridad administrativa o judicial, ésta debe verificar que se haya enviado la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, y en caso que no se hubiere hecho, deberá hacerlo de inmediato.

**Artículo 8o.-** Cuando haya algún cambio en la condición jurídica o ubicación física de la persona detenida, la autoridad que la ordene deberá de dar aviso de inmediato alRegistro Nacional de Datos de Personas Detenidas para mantener actualizada la información.

**CAPITULO III**

**DE LOS DELITOS DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS**

**Artículo 9o.-** Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público que realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y:

**I.** Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad;

**II.** Omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;

**III.** Oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

**IV.** Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima; o

**V.** Dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión, de cuatro mil a ocho mil días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 10.-** Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de persona el particular que:

**I.** Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; o

**II.** Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis descritas en el artículo anterior.

Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrán una pena de diez a veinticinco años de prisión y de quinientos a dos mil días multa.

**Artículo 11.-** Se equipara al delito de desaparición forzada de persona el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada de persona y se sancionará conforme a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

**Artículo 12.-**Se sancionarán, a quien sin ser autor o partícipe, incurra en alguna de las conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta Ley conforme a lo siguiente:

**I.** Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos de desaparición forzada de persona o su equiparado con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

**II.** Teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, omita dar aviso a la autoridad correspondiente con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

**III.** Pudiendo evitar la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, sin riesgo propio o ajeno, no lo evite con pena de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa.

**IV.** Teniendo conocimiento del destino final de una persona nacida de una mujer víctima de desaparición forzada de persona, no proporcione la información a la autoridad competente se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si fuere servidor público, además con inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 13.-** Al Agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su cargo la investigación de alguno de los delitos materia de esta Ley, la obstruya, retrase u omita realizarla adecuadamente, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión, multa de trescientos a quinientos días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 14.-** Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en una mitad, las siguientes:

**I.** Que la víctima fuere liberada espontáneamente durante los quince días siguientes a su privación de libertad; o

**II.** Que el activo proporcione información que conduzca a la liberación de la víctima.

**Artículo 15.-** Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en un tercio, las siguientes:

**I.** Que el activo proporcione información que conduzca a dar con el paradero de los restos corpóreos de la víctima; o

**II.** Que el autor material de delito proporcionen información relativa a la responsabilidad y paradero del autor intelectual y se logre la ubicación o captura de éste.

**Artículo 16.-** Serán agravantes punitivas y aumentarán la pena hasta en una cuarta parte, las siguientes:

**I.** Que durante la desaparición forzada a la víctima le sobrevenga la muerte;

**II.** Que se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima;

**III.** Que se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito;

**IV.** Que la víctima sea periodista o defensora de derechos humanos;

**V.** Que se haya realizado la conducta con el fin de obtener algún beneficio;

**VI.** Que la desaparición forzada se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito; o

**VII.** Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Para efectos de la fracción VII del presente artículo, se considera situación de vulnerabilidad la condición particular de la víctima derivada de una o más de las siguientes circunstancias:

**a)** Su origen, edad, sexo, preferencia u orientación sexual, identidad de género o condición socioeconómica precaria;

**b)** Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la consumación de alguno de los delitos previstos en esta Ley;

**c)** Trastorno físico o mental o discapacidad;

**d)** Pertenencia o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier otra equiparable;

**e)** Ser persona mayor de sesenta años de edad;

**f)** Ser persona menor de 18 años de edad;

**g)** Situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüístico; y

**h)** Otra condición personal, geográfica o circunstancial, preexistente o creada, que ponga a la víctima en desventaja respecto del sujeto activo del delito.

**Artículo 17.-** Los delitos de desaparición forzada de persona y su equiparable son delitos continuados e imprescriptibles y se investigarán y perseguirán de oficio. Se aplicarán las reglas de autoría y participación además de las del concurso. Igualmente será sancionada la tentativa, de acuerdo con lo establecido por los artículos 12 y 63 del Código Penal Federal.

Respecto de estos delitos no se admite como causa de justificación el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior, ni la restricción o suspensión de derechos y garantías, establecida en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos delitos no procede la amnistía, el indulto, beneficios preliberacionales, ni sustitutivo alguno, u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerar al activo de cualquier procedimiento o sanción penal; tampoco se les considerará de carácter político para efectos de extradición.

La práctica generalizada o sistemática de alguno de estos delitos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque se considera crimen de lesa humanidad.

**CAPITULO IV**

**DE LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DE DESAPARICION FORZADA**

**Artículo 18.-** Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda del desaparecido.

**Artículo 19.-** El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial de la Federación, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos.

**Artículo 20.-** Las personas a quienes se les impute cualquiera de los delitos materia de esta Ley sólo podrán ser investigados y juzgados por la jurisdicción ordinaria. No serán aplicables las disposiciones que sobre fueros especiales establezcan otras leyes.

**Artículo 21.-** Si durante la investigación de los delitos de desaparición forzada de persona se presume fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación federal las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

**Artículo 22.-** El Ministerio Público contará con un plazo máximo de seis meses a partir de iniciado el procedimiento para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, en cuyo caso consignará el asunto a los tribunales competentes.

**Artículo 23.-** Al inicio de la fase de Instrucción el Juez que emita el auto de radicación deberá, de manera oficiosa, nombrar apoderado legal de la persona desaparecida conforme a la legislación aplicable, dictar las medidas provisionales conducentes y emitir la Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición en el mismo acto.

**Artículo 24.-** La Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición surtirá los efectos legales de la Declaratoria de Ausencia a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

**CAPITULO V**

**DE LA ATENCION A VICTIMAS Y LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO**

**Artículo 25.-** Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición forzada de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a la legislación aplicable.

**TRANSITORIOS**

**Artículo Primero.-** La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo Segundo.-** A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la esta Ley contemple una descripción legal de una conducta delictiva que el Código Penal Federal contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre que las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

**I.** En la investigación de los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, el Ministerio Público efectuará la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades;

**II.** En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y

**III.** En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades.

**Artículo Tercero.-**Las autoridades competentes deberán emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de seis meses, a partir de la publicación a que se refiere el artículo transitorio primero.

**Artículo Cuarto.-** El Secretariado Ejecutivo deberá de tomar las medidas necesarias para migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas detenidas al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo Quinto.-** Para el cumplimiento del presente Decreto respecto del Registro Federal de Datos de Personas Detenidas, se utilizarán los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuente el Secretariado Ejecutivo, por lo que no se requerirán recursos adicionales para la creación y operación de dicho Registro.

Dado en el Salón de Pleno del Senado de la República, 11 de febrero de 2014.

Sen. **Angélica de La Peña Gómez".**

**- El C. Presidente Aispuro Torres:** Gracias, Senadora de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.



SEN. ROBERTO
GIL ZUARTH

El suscrito Senador **ROBERTO GIL ZUARTH**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL; DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS; DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES**, al tenor de la siguiente:

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En sesión de este Senado de la República de fecha 19 de noviembre de 2014, el suscrito presentó, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado B, fracciones III y V; apartado C, fracción V; 29, segundo párrafo y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar a este Congreso de la Unión la facultad para emitir una ley general contra la desaparición forzada que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, distribuya la competencia entre los órdenes de gobierno y establezca las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como para establecer la prisión preventiva oficiosa y reforzar el marco de derechos de las víctimas de estos delitos.

Dicha propuesta de reforma es fundamental para corregir las desviaciones técnicas que se aprecian en la investigación y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas, pues la dispersión normativa que actualmente existe en los órdenes de gobierno, provoca zonas grises que crean impunidad.

Mencioné en ese entonces que solo 22 entidades federativas han tipificado el delito de desaparición forzada de personas, de las cuales 20 lo han hecho en sus respectivos códigos penales y dos (Chiapas y Guerrero) han emitido leyes específicas para prevenir y castigar este ilícito.

Además, solamente una entidad federativa (Coahuila), ha expedido normas que abarcan más allá del espectro penal, configurando a través de una ley específica, el procedimiento y efectos jurídicos de una Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, que permite que las víctimas de este delito, puedan mantener sus derechos y asegurar la continuidad de su personalidad jurídica durante el lapso de su desaparición.

Por ello, la expedición de una ley general que tenga por objeto la prevención y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas es un paso indispensable para atender este fenómeno delincuencial de una manera integral, sin limitarse al ámbito meramente penal, y para establecer una normativa aplicable en todo el país, en el ámbito de competencia de todos los órdenes de gobierno.

Así, la facultad para establecer los tipos penales y las sanciones de estos delitos se depositará en el Congreso de la Unión, con lo que se homologará la punibilidad y los elementos del tipo en todo el territorio nacional.

Por tal motivo, ratificando todo lo señalado en la iniciativa de reforma constitucional antes aducida, en este acto presento ante esta Soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas, que resumiré a continuación:

La iniciativa expide la ley antes señalada y armoniza la legislación vigente para contar con un ordenamiento plenamente aplicable en la realidad. Por ello, se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de nueve leyes y códigos adicionales.

La iniciativa propone la expedición de una ley conformada por 55 artículos, contenidos en once capítulos, a saber:

- Capítulo I. Objeto, Interpretación y Aplicación
- Capítulo II. Competencias en materia de investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas
- Capítulo III. De los delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas
- Capítulo IV. Competencias en materia de Prevención y Coordinación
- Capítulo V. Protección de Personas
- Capítulo VI. Intervención de Comunicaciones
- Capítulo VII. Obligaciones de los Concesionarios de Redes Públicas de Telecomunicaciones
- Capítulo VIII. Del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
- Capítulo IX. Del Registro Nacional de Personas Detenidas
- Capítulo X. Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas
- Capítulo XI. Derechos de las Víctimas y sus Familiares.

En estos artículos se recoge la experiencia legislativa de diversas entidades federativas que han legislado en la materia, pero fundamentalmente, se consagran las disposiciones que derivan de los tratados internacionales vigentes en nuestro país, así como las recomendaciones de diversos organismos internacionales.

También se incorpora en esta iniciativa la experiencia legislativa de otros países latinoamericanos y muchas de las propuestas formuladas por diputados y senadores de este Congreso de la Unión de diversas legislaturas.

Entre las bondades que presenta la iniciativa en comento se puede destacar que el tipo penal recoge todos los elementos que integran la conducta de desaparición forzada de personas, que en resumen son:

a) Privación de la libertad de una o más personas, cualquiera fuere su forma, cometida por agentes del Estado.
b) Autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, cuando es cometida por particulares.
c) Negativa de información o no reconocimiento de la privación de libertad y el paradero de la persona.
d) Imposibilidad de ejercer los recursos legales y garantías procesales.
e) Penas adecuadas a la gravedad de la conducta.
f) Consideración como delito continuado o permanente mientras no se localice a la persona.
g) Posibilidad de establecer atenuantes para aquellos que colaboren al esclarecimiento de la desaparición.
h) No aplicabilidad de la prescripción o, en su defecto, igualarla al del delito con mayor término en la legislación nacional.
i) No admisión de la eximente de obediencia debida.

Así, se contempla que la desaparición forzada de personas puede ser cometida por servidores públicos directamente, o por particulares que actúen con la aquiescencia de aquellos, pero también se propone crear un tipo equiparado para aquellas desapariciones cometidas exclusivamente por particulares, las cuales son conocidas como desaparición involuntaria de personas.

Con esto, todo el espectro delictivo queda cubierto respecto de las conductas que directamente conforman la desaparición forzada, pero también se tipifican conductas de auxilio, complicidad o apoyo para la comisión de estos delitos, que son igualmente graves.

Asimismo, se establecen obligaciones para los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, pues es fundamental que se visibilice el fenómeno delincuencial y se procure su erradicación.

De igual forma, se fortalece la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno al establecer la obligación de que todas las personas desaparecidas por los delitos previstos en esta ley sean incluidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y que éste cuente con un módulo que incluya la información genética que sea necesaria para, en su caso, identificar a una persona.

En el mismo sentido, se refuerza la obligación de las autoridades que detengan a una persona de ponerla a disposición de la autoridad jurisdiccional lo antes posible y, además, se crea el Registro Nacional de Personas Detenidas, en el que se podrá saber públicamente, en tiempo real por vía telefónica o electrónica, el estatus de una persona que hubiera sido aprehendida por alguna fuerza policíaca.

También se crea el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas que concentrará las muestras biológicas de referencia y los perfiles genéticos que de ellas deriven, de las personas desaparecidas, ubicadas y de sus familiares, con lo que se avanzará definitivamente en la construcción de sistemas de identificación de las víctimas de estos delitos.

Finalmente, la iniciativa propone establecer derechos de las víctimas y sus familiares de manera específica, pues si bien es cierto, en el plano general aplicarán los establecidos en la Ley General de Víctimas, en lo particular debe también asegurarse el respeto de al menos tres derechos:

1. El derecho a la Verdad;
2. El derecho a la Memoria, y
3. El derecho a la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.

Al expedir esta ley general, el Congreso de la Unión establecerá un piso que todas las entidades federativas deberán acatar, con lo que sentaremos las bases normativas para contar con acciones coordinadas entre todos los órdenes de gobierno tendientes a prevenir y combatir este fenómeno delictivo, pero además se tendrá acceso a penas homogéneas que procuren el castigo a los agentes activos de este ilícito.

Por lo antes expuesto, por el digno conducto de usted C. Presidente, someto a la consideración del Senado de la República, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL; DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS; DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.**

**Artículo Primero.-** Se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas, para quedar como sigue:

**LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS**

**CAPÍTULO I**
**Objeto, Interpretación y Aplicación**

**Artículo 1.** La presente Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas. Es de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República.

**Artículo 2.**Esta Ley tiene por objeto:

**I.** Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas, sus tipos equiparados y sus sanciones;
**II.** Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;
**III.** Distribuir competencias y establecer formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos de desaparición forzada de personas, entre el Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los de los municipios;

**IV.** Distribuir competencias y establecer formas de coordinación en materia de protección, atención y asistencia a las víctimas de estos delitos, entre los órdenes de gobierno;

**Artículo 3.** Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

**I.** **Consejo Nacional**: El Consejo Nacional de Seguridad Pública;
**II.** **Constitución**: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
**III.** **Institución de Seguridad Pública**: Las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, el Instituto Nacional de Migración y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipios;
**IV.** **Ley**: La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Desaparición Forzada de Personas;
**V.** **Secretariado Ejecutivo**: El Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
**VI.** **Servidor Público:** Los contemplados en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las constituciones de las entidades federativas.
**VII.** **Sistema Nacional**: El Sistema Nacional de Seguridad Pública;
**VIII.** **Procuraduría:** La Procuraduría General de la República.
**IX.** **Registro Nacional**: El Registro Nacional de Personas Detenidas.
**X.** **Víctima**: Las personas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 4.**Esta Ley se interpretará favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las víctimas de los delitos previstos en este ordenamiento.

**Artículo 5.** La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento del objeto de esta Ley.

**Artículo 6.**Los Poderes Judiciales de la Federación y de las Entidades Federativas ordenarán de oficio el desahogo de las pruebas que consideren necesarias, así como todas las medidas que sirvan para mejor proveer, de conformidad con las circunstancias que se aprecien durante el desarrollo de los procesos penales de su competencia, privilegiando y garantizando en todo caso la libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas de los delitos previstos en el presente ordenamiento.

**Artículo 7.**Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados, según corresponda.

A falta de regulación suficiente en los códigos de procedimientos penales de las Entidades Federativas respecto de las técnicas para la investigación de los delitos

regulados en esta Ley, se podrán aplicar supletoriamente las técnicas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales.

**Artículo 8.**Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en esta Ley, estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa durante el proceso penal.

**Artículo 9.**Los delitos previstos en esta ley son delitos continuados y se perseguirán de oficio por el Ministerio Público y las policías.

Para los efectos de esta Ley, podrá ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, cualquier persona con parentesco consanguíneo, por afinidad o legal; la o el cónyuge; la concubinaria o el concubino; cualquier persona con un interés legítimo o con una relación cotidiana afectiva inmediata o cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

**Artículo 10.**El término de prescripción de los delitos materia de esta Ley se regirá conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, sin embargo, dicho término solo empezará a contarse a partir de que la víctima aparezca o se establezca su destino.

Cuando los delitos materia de esta ley sean cometidos contra un grupo poblacional de manera sistemática o generalizada, se considerarán delitos de lesa humanidad. En este caso, los delitos serán imprescriptibles.

**Artículo 11.**No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada de personas.

En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas.

**Artículo 12.**Toda persona privada de su libertad por Instituciones de Seguridad Pública debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora a la autoridad judicial competente.

Si durante la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas se presumiera fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación o inmueble perteneciente a las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

El Ministerio Público y las policías garantizarán el pleno y libre ejercicio del derecho de coadyuvancia de las víctimas.

**Artículo 13.** En los delitos previstos por esta Ley no procederá la reserva del expediente o el archivo temporal, aun si de las diligencias practicadas no resultan

elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras. El Ministerio Público y las policías estarán obligados en todo momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento delos hechos.

Sólo podrá suspenderse el procedimiento judicial iniciado por los delitos previstos en esta Ley o delitos por hechos conexos o derivados delos mismos, en el caso de que el inculpado evada la acción de la justicia o sea puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero.

La sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberá contemplar la reparación integral del daño a las víctimas, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes.

## CAPÍTULO II
## Competencias en materia de investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas

**Artículo 14**. La Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

- **I.** Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales;
- **II.** El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal;
- **III.** Se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;
- **IV.** El Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto; o
- **V.** El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo;

**Artículo 15.**En los casos no contemplados en el artículo anterior, serán competentes las autoridades del fuero común.

## CAPÍTULO III
## De los delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas

**Artículo 16**. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que prive u ordene, tolere, apoye o consienta privar de la libertad, a una o más personas, cualquiera sea su forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa, en su caso, a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero,

sustrayéndola del amparo de la ley e impidiendo el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Asimismo, comete el delito señalado en el párrafo anterior, el servidor público que aunque no haya participado en la detención de una o más personas, colabore, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención, o se niegue a reconocer la privación de libertad o a informar sobre su paradero.

**Artículo 17.** Comete igualmente el delito de desaparición forzada de personas el particular que prive de la libertad, cualquiera sea su forma, ordene, tolere, apoye o consienta la privación, o colabore, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento, cuando actúe con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.

**Artículo 18.**A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa.

**Artículo 19.**Al servidor público que haya sido condenado por la comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará por un término mínimo de la mitad de la pena privativa de la libertad a que haya sido condenado y máximo de tres cuartas partes de dicha pena, para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

**Artículo 20**. Las penas a que se refiere el artículo 18 de esta Ley se agravarán:

**I.** De treinta a cincuenta y cinco años de prisión y de cuatro mil a seis mil días multa si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

**a)** Que se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción;
**b)** Que se cometa en agravio de persona con discapacidad;
**c)** Que se cometa en agravio de persona menor de dieciocho o mayor de sesenta años de edad, o mujer embarazada, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;
**d)** Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
**e)** Que se realice con violencia;
**f)** Que para llevar a cabo la privación de la libertad se allane el inmueble en el que la persona se encuentra;
**g)** Que la privación sea con la finalidad de obligar a la víctima a prestar servicios ilícitos; o
**h)** Que en la comisión del delito se utilicen bienes del Estado.

**II.** De treinta y cinco a sesenta años de prisión y de seis mil a ocho mil días multa si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

**a)** Que la conducta se cometa, por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos; periodistas o comunicadores; defensores de derechos humanos; precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; quienes hayan sido testigos de conductas punibles; desplazados; migrantes; víctimas de trata; identidad diferente a la heterosexual; o contra cualquier otra persona por sus creencias u opiniones políticas o por motivo que implique alguna forma de discriminación o intolerancia;

**b)** Que la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las personas mencionadas en el inciso anterior;

**c)** Que el o los agentes activos tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima;

**d)** Que durante la privación de la libertad se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;

**e)** Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual; o

**f)** Que durante o después de la privación de la libertad, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la detención, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

**III.** De cuarenta a sesenta y cinco años de prisión y de ocho mil a diez mil días multa si la víctima es privada de la vida por los autores o partícipes del delito.

**IV.** De cuarenta y cinco a setenta años de prisión y de diez mil a doce mil días multa si se oculta o se comete cualquier acción sobre el cadáver de la víctima que evite o intente evitar su identificación posterior.

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

**Artículo 21.** Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, someter a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa, en su caso, a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, cuando sea cometida por un particular.

A quien cometa el delito previsto en este artículo se le impondrá la pena establecida en el artículo 18 de esta Ley o, en su caso, la correspondiente a la agravante que se actualice con la conducta, contemplada en el artículo 20 de esta Ley.

**Artículo 22**. A quien conociendo el paradero o destino final del infante nacido durante el periodo de ocultamiento de la madre desaparecida no proporcione información se impondrá de dos a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

A quien omita entregar a la autoridad competente o a la familia, al infante nacido durante el periodo de ocultamiento de la madre desaparecida, se impondrá una sanción de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa.

La misma pena establecida en el párrafo anterior se impondrá a quien lleve a cabo la desaparición forzada o involuntaria de una niña o niño, o de estos cuando su padre, madre, tutor o representante legal sean sometidos a una desaparición.

**Artículo 23.-** A quien conociendo los planes para la comisión del delito de desaparición forzada, sin ser partícipe, no diere aviso a las autoridades, se impondrá de uno a cinco años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

**Artículo 24.-**A quien siendo autoridad superior jerárquica que orgánica y legalmente tenga el deber jurídico de actuar e impedir la desaparición forzada y no lo hiciere, permitiendo por ausencia en el orden de mando la perpetración del delito, se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

**Artículo 25.-**Al servidor público que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial y permita por acción u omisión el ocultamiento de la víctima de desaparición forzada de personas en dichos lugares, se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

La misma pena aplicará para aquellos particulares que permitan el ocultamiento de la víctima de desaparición forzada de personas en su propiedad.

**Artículo 26.-** Al que instigue o incite a otro u otros a la comisión del delito de desaparición forzada de personas, se impondrá de tres a ocho años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

**Artículo 27.-**Al servidor público que teniendo a su cargo la investigación del delito de desaparición forzada de personas, la obstruya o evite realizarla adecuadamente, se impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de trescientos a quinientos días multa.

**Artículo 28.-**Se aplicará pena de tres a ocho años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al que:

- **I.** Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en esta Ley, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la liberación de la víctima;
- **II.** Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las conductas previstas en esta Ley, con conocimiento de esta circunstancia, así como los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe;
- **III.** Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos a que se refiere esta Ley, y

**IV.** Desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas previstas en esta Ley, o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

No se aplicará la pena prevista en este artículo en el caso de la fracción II, en lo referente al ocultamiento del infractor, cuando se trate de los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines directos; el cónyuge; la concubina; el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado.

**Artículo 29.** Se aplicará pena de dos a seis años de prisión, de doscientos a cuatrocientos días multa, al servidor público que:

**I.** Divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial, relacionada con las conductas sancionadas por esta Ley, salvo que se refiera a la información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, en este caso se aplicará lo dispuesto por el Código Penal Federal, o

**II.** Revele, sin motivo fundado, técnicas aplicadas a la investigación o persecución de las conductas previstas en la presente Ley.

Si el sujeto es o hubiere sido integrante de una Institución de Seguridad Pública, la pena será de cinco a trece años de prisión, y de trescientos a setecientos días multa.

**Artículo 30.** La tentativa para los delitos objeto de esta Ley tendrá el carácter de punible, y deberá sancionarse en los términos de los párrafos primero y segundo del artículo 12 del Código Penal, respectivamente.

**Artículo 31.** Las penas establecidas en los artículos 18, 20 y 21 de esta Ley, se atenuarán de la manera siguiente:

**I.** La pena se reducirá de la mitad a las cinco sextas partes cuando en un término no superior a diez días, los autores o partícipes liberen a la víctima voluntariamente en similares condiciones físicas y psíquicas a las que se encontraba en el momento de ser privada de la libertad, o suministren información que conduzca a su recuperación inmediata, en similares condiciones físicas y psíquicas.

**II.** La pena se reducirá de una tercera parte a la mitad cuando en un término mayor a diez días y no superior a veinte días, los autores o partícipes liberen a la víctima en las mismas condiciones previstas en el numeral anterior.

**III.** Si los autores o partícipes suministran información que conduzca a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida, la pena se reducirá hasta en una octava parte.

Las reducciones de penas previstas en este artículo se aplicarán únicamente al autor o partícipe que libere voluntariamente a la víctima o suministre la información.

**Artículo 32.** Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena.

Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de desaparición forzada de personas y para la localización y liberación de las víctimas, conforme a la legislación aplicable, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian:

**I.** Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión;
**II.** El sentenciado acepte la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento;
**III.** El sentenciado sea primo delincuente;
**IV.** En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación;
**V.** Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad penitenciaria el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado;
**VI.** Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando;
**VII.** Cuente con fiador, y
**VIII.** Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos.

**Artículo 33.** La autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido condenadas por conductas previstas en el presente ordenamiento queden sujetas a vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

La misma medida podrá imponerse de manera cautelar tratándose de inculpados en libertad con las reservas de ley e indiciados durante el tiempo que dure la averiguación previa o el proceso.

## CAPÍTULO IV
## Competencias en materia de Prevención y Coordinación

**Artículo 34.**Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para:

**I.** Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geo delictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que

permitan actualizar y perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos sancionados en esta Ley;

**II.** Obtener, procesar e interpretar la información geo delictiva por medio del análisis de los factores que generan las conductas antisociales previstas en esta Ley con la finalidad de identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus correlativos factores de protección;

**III.** Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos;

**IV.** Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan el fenómeno delictivo sancionado en esta Ley, así como difundir su contenido;

**V.** Observar las demás obligaciones establecidas en otros ordenamientos.

**Artículo 35.** La Federación, las entidades federativas y los municipios estarán obligados a remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos que se generen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su programa de prevención de delitos a que se refiere esta Ley. Además, deberán mantener actualizado un registro con información en materia de desaparición forzada de personas en su demarcación.

La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer un programa de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata, que incluya, al menos, lo siguiente:

I) Implementar la búsqueda ex oficio y sin dilación en casos de desapariciones;

II) Coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para localizar a la persona;

III) Eliminar cualquier obstáculo legal o fáctico que reduzca la efectividad de la búsqueda o evite que se inicie;

IV) Asignar los recursos humanos, financieros, logísticos, científicos, o de cualquier otro tipo necesarios para que la búsqueda se realice de forma exitosa;

V) Contar con personal altamente capacitado en la exhumación e identificación de restos mortales;

VI) Contrastar el reporte de la persona desaparecida con todas las bases de datos existentes en la materia;

VII) Dar prioridad a la zona de búsqueda en donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas;

VIII) Acceder y utilizar plenamente la Plataforma México, y

IX) Garantizar que el programa se ejecute con plena independencia presupuestaria y operativa.

**Artículo 36.**La Federación, las entidades federativas y los municipios deberán establecer programas de capacitación dirigidos a los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública que les corresponda, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos previstos en esta Ley.

Los programas de capacitación podrán ser impartidos también al resto de los servidores públicos de cada orden de gobierno, con las adecuaciones pertinentes.

## Capítulo V
## Protección de Personas

**Artículo 37.** En el ámbito de sus respectivas competencias, los titulares del Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas expedirán los correspondientes programas para la protección de personas.

El Ministerio Público incorporará a dichos programas a las personas cuya vida o integridad corporal pueda estar en peligro por su intervención en la averiguación previa o el proceso penal seguido por las conductas previstas en la presente Ley.

El juez que conozca del procedimiento penal, tomando en consideración al menos lo señalado en el párrafo anterior, podrá ordenar como parte de las medidas cautelares de protección de personas, que éstas sean incorporadas a dichos programas.

**Artículo 38.** La información y la documentación relacionada con las personas protegidas se mantendrán en estricta reserva en términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 39.** Los programas serán reservados y, en su caso, confidenciales, de conformidad con las disposiciones aplicables; tales programas deberán comprender, además de lo dispuesto en este Capítulo, lo relativo a los requisitos de ingreso, niveles de protección, tiempo de duración de la protección, obligaciones de la persona protegida, causas de revocación y demás características y condiciones necesarias para cumplir eficazmente con dicha protección.

El cumplimiento del Programa Federal de Protección a Personas se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y demás disposiciones aplicables.

El cumplimiento de los programas de protección a personas de las entidades federativas quedará a cargo del Procurador o Fiscal General, o el servidor público inmediato inferior en quien éste delegue esta responsabilidad, en coordinación con las autoridades cuya intervención sea necesaria de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 40.** Los programas establecerán, cuando menos, los requisitos de ingreso, protección física o electrónica para la víctima o testigo; apoyos para solventar sus necesidades personales básicas, cuando por su intervención en el procedimiento penal así se requiera. En casos necesarios, las medidas se podrán extender a familiares o personas cercanas.

Las erogaciones por concepto de otorgamiento de apoyo estarán sujetas a la normativa aplicable y a los presupuestos autorizados de las dependencias que los proporcionen.

**Artículo 41.** Las Entidades Federativas y la Federación celebrarán convenios de colaboración para establecer los mecanismos para incorporar a los programas a personas que deban ser sujetas de protección.

## CAPÍTULO VI
## Intervención de Comunicaciones

**Artículo 42**. El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, los Procuradores o Fiscales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como las autoridades facultadas en la ley para ello podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas.

La solicitud de autorización deberá contener los preceptos legales que la fundan, el razonamiento por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones a intervenir, en su caso, los sujetos o las líneas, aparatos, números, lugares que serán intervenidos, así como el tiempo que serán intervenidos, sin que el tiempo total exceda de seis meses. Para llevar a cabo la intervención, la autoridad investigadora podrá utilizar todos los medios tecnológicos que estime necesarios. En todo caso será obligación de los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones de las líneas a intervenir prestar auxilio para tal efecto.

La aportación de comunicaciones privadas para la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley constituye una excepción al deber de confidencialidad que establezcan otras leyes.

El Ministerio Público podrá ofrecer como prueba los resultados de la intervención asentados en cualquier medio tecnológico al juez que corresponda, en caso de no admitirse, deberán ser destruidas en los términos señalados por la autoridad judicial.

Cualquier actuación desarrollada en los términos del presente Capítulo será nulificada por el juez si se incurrió en conductas no autorizadas o ilegales, sin perjuicio de la aplicación de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

## CAPÍTULO VII
## Obligaciones de los Concesionarios de Redes Públicas de Telecomunicaciones

**Artículo 43**. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y, en lo aplicable, las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación de los delitos previstos en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para otros delitos y siempre que medie orden de autoridad judicial competente, están obligados a:

**I.** Proporcionar de forma inmediata y sin demora a los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución, la información relativa al

número telefónico que se le indique y los datos del usuario registrado como cliente;

**II.** Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución;

**III.** Colaborar con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir los delitos previstos en esta Ley, y

**IV.** Suspender el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente.

## CAPÍTULO VIII
## Del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**Artículo 44**. Toda autoridad administrativa o judicial de cualquier orden de gobierno que tenga conocimiento de una persona víctima de los delitos previstos en esta Ley, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de la legislación aplicable.

## CAPÍTULO IX
## Del Registro Nacional de Personas Detenidas.

**Artículo 45**. El Registro Nacional de Personas Detenidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica, la información sobre personas detenidas por cualquiera de las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, con el objeto de asegurar sus derechos procedimentales y prevenir la comisión de delitos.

**Artículo 46.** La operación del Registro Nacional le corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretariado Ejecutivo, el cual tendrá las siguientes facultades:

**I.** Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

**II.** Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional a través de una página electrónica alojada en su dominio virtual;

**III.** Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de registro o información sobre personas detenidas;

**IV.** Integrar en el Registro Nacional la información de las personas detenidas a partir de la siguiente clasificación:

**a)** Identidad;
**b)** Sexo;
**c)** Edad;

**d)** Nacionalidad;
**e)** Origen étnico;
**f)** Si se trata de personas con alguna discapacidad;
**g)** Día, hora, localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la detención y la autoridad que la ejecutó;
**h)** Autoridad que controla la detención;
**i)** Lugar en que se encuentra detenida la persona, el día y la hora de admisión en la instalación y la autoridad responsable de dicho lugar;
**j)** Elementos relativos a la integridad física de la persona detenida;
**k)** En caso de fallecimiento durante la detención, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos de la persona fallecida;
**l)** Día y hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la autoridad encargada del traslado
**m)** Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;

**V.** Operar, regular y mantener el Registro Nacional, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;
**VI.** Validar la información que debe incorporarse al Registro, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto; y
**VII.** Las demás que disponga esta Ley.

El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general.

**Artículo 47.**Las Instituciones de Seguridad Pública que en el ejercicio de sus funciones detengan a una persona, cualquiera sea la causa, deberán de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional.

Las comunicaciones que se envíen al Registro Nacional deberán de señalar:

**I.** El nombre completo de la persona detenida, edad, domicilio, procedencia, señas particulares y demás datos que permitan su identificación;
**II.** Fecha, hora y lugar en donde se le detuvo;
**III.** Fotografía de filiación y media filiación o en su defecto, descripción detallada de los rasgos físicos al momento de ser detenida;
**IV.** Datos de la Institución de Seguridad Pública que la detuvo;
**V.** Número de expediente o averiguación previa en su caso; y
**VI.** Instalación en la que se encuentra detenida.

En caso de que la persona detenida sea trasladada después de haber sido enviada la comunicación, se deberá informar, de inmediato, a qué instalación se ha trasladado.

Asimismo, la Institución de Seguridad Pública deberá informar al Registro Nacional la puesta en libertad de la persona, cuando ello ocurra.

**Artículo 48.** El Registro Nacional funcionará las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe.

El Secretariado Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Consejo Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las estadísticas que arroje el Registro. La información contenida en el informe será pública.

**Artículo 49.**El Secretariado Ejecutivo establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el Registro Nacional, de forma tal de garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos.

## CAPÍTULO X
## Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas

**Artículo 50**. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Información operará el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas, en el que se procesará, indexará, organizará e ingresará la información de los perfiles genéticos obtenidos de los cuerpos de personas desaparecidas, así como las muestras biológicas de referencia de los familiares de las mismas.

**Artículo 51**. Las muestras biológicas de referencia deberán ser entregadas de manera voluntaria, mediante consentimiento libre, previo e informado, autorizando también el procesamiento, ingreso y cruces a que haya lugar con la información contenida en el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, para la identificación de las personas desaparecidas.

La autoridad encargada de la toma de muestras deberá entregar una constancia de esta diligencia a la persona que la suministró.

**Artículo 52.**Durante todas las fases del proceso, el manejo de las muestras biológicas y la información obtenida de ellas, serán consideradas con carácter de información confidencial, en términos de la Ley en la materia y su uso será exclusivamente con fines de identificación de personas desaparecidas. Una vez obtenida la información de la misma, la autoridad ordenará de inmediato la destrucción de la muestra y de la información que se hubiere obtenido, informándose tal circunstancia a quien la haya suministrado.

**Artículo 53.** El Centro Nacional de Información deberá asegurar la protección del material genético y cualquier otra información obtenida de las personas desaparecidas o de los familiares que proporcionen muestras biológicas, estableciendo criterios éticos y legales de privacidad y de control de calidad de los

análisis, de resguardo de la cadena de custodia y de uso exclusivo de la información genética para fines de identificación.

## CAPÍTULO XI
## Derechos de las Víctimas y sus familiares

**Artículo 54.** Además de los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas, las víctimas de los delitos previstos en esta ley o sus familiares tendrán los siguientes derechos:

**I.** Derecho a la verdad;
**II.** Derecho a la memoria;
**III.** Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y de sus derechos civiles durante el periodo de su detención o desaparición.

**Artículo 55**. Para asegurar el cumplimiento de estos derechos, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, dentro del ámbito de su respectiva competencia deberán, al menos, llevar a cabo las reformas legales y reglamentarias necesarias para:

**I.** Permitir que las víctimas, familiares de éstas, personas que tengan un interés legítimo o una relación cotidiana afectiva inmediata, tengan acceso pleno y sin reserva al expediente, investigaciones, pruebas y demás documentos, relacionados con la desaparición, cuando así lo soliciten, salvo que existan indicios fundados de que ello pondría en riesgo la investigación;
**II.** Realizar todas las diligencias necesarias, con la coadyuvancia de las víctimas o familiares de éstas cuando así lo soliciten, para determinar los hechos al momento de la desaparición, sus causas y el paradero de la persona desaparecida;
**III.** Asegurar la presencia de los familiares de la víctima, cuando así lo soliciten, al momento de realizar operativos o diligencias en lugares en que se presuma se encuentra la persona desaparecida o su cuerpo, salvo que existan indicios fundados de que ello implicaría un riesgo para su vida o integridad corporal;
**IV.** Elaborar protocolos que permitan la entrega del cuerpo de una persona desaparecida a sus familiares, en condiciones de dignidad;
**V.** Elaborar planes nacional y estatales de búsqueda de personas desaparecidas, que contengan mapas precisos de los lugares en que se presuma puedan encontrarse personas desaparecidas o sus cuerpos y protocolos de protección de dichos sitios;
**VI.** Establecer vías de comunicación que permitan a cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de una persona desaparecida o su cuerpo, de manera anónima, colaborar con la búsqueda;
**VII.** Inhumar, en todos los casos, los restos y cadáveres no identificados de manera individualizada, con acta de defunción y examen médico-legal, en cementerios apropiados y con documentación rigurosa sobre su ubicación en el mismo, previa toma de muestras biológicas de referencia para identificación genética que deberán enviarse de inmediato al Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas, de acuerdo con

los lineamientos que para tal efecto expida el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

**VIII.** Prohibir la inhumación en fosas comunes, la destrucción o incineración de restos o cadáveres de personas no identificadas;

**IX.** Declarar y construir Monumentos a la Memoria en los lugares en los que se haya encontrado a víctimas de los delitos previstos en esta ley, sus cuerpos o sus restos. La declaratoria y construcción estará a cargo de la Federación, entidad federativa o municipio del que estuvieran adscritos los servidores públicos que hubieren cometido la desaparición forzada de persona. En caso de que la desaparición hubiere sido cometida exclusivamente por particulares, la declaratoria y construcción estará a cargo del orden de gobierno que hubiese substanciado la investigación;

**X.** Establecer fechas de conmemoración de la memoria de las víctimas de los delitos previstos en esta ley, en las que se les rinda homenajes que propicien el respeto de la verdad, la memoria, la vida y los derechos humanos;

**XI.** Asegurar el reconocimiento y continuidad de la personalidad jurídica y la vigencia de los derechos de las víctimas de los delitos previstos en esta ley, creando la acción de declaración de ausencia que corresponda;

**XII.** Elaborar los programas nacional, estatales y municipales de prevención de los delitos previstos en esta ley y

**XIII.** Las demás que la Federación, las entidades federativas y los municipios consideren necesarias para asegurar el respeto de los derechos señalados en el artículo anterior.

**Artículo 56**.- En cumplimiento del derecho al reconocimiento y continuidad de la personalidad jurídica y la vigencia de los derechos de las víctimas de los delitos previstos en esta ley, la Federación y las entidades federativas llevarán a cabo las reformas legales y normativas necesarias para permitir:

**I.** La condonación de impuestos a las víctimas y sus familiares directos;

**II.** La condonación de deudas o créditos contraídos con las instancias gubernamentales de seguridad social, vivienda, salud, entre otras;

**III.** La expedición de la declaratoria de ausencia por desaparición correspondiente;

**IV.** El pago de seguros y prestaciones sociales para la víctima y sus familiares;

**V.** La reparación integral por el delito en términos de la legislación aplicable en materia de atención a víctimas;

**VI.** La conservación de la patria potestad en relación con los hijos menores;

**VII.** La protección del patrimonio de la víctima y sus familiares;

**VIII.** La protección de los derechos de la familia y de los hijos a percibir los salarios, liquidación y beneficios económicos, laborales y de seguridad social;

**IX.** Otros que sean considerados necesarios para proteger los derechos de las víctimas y sus familiares.

**Artículo Segundo.-** Se adiciona una fracción VIII al artículo 2o y se reforma el segundo párrafo del artículo 3o, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

**Artículo 2o.-**…

**I.**a **VII.-** …

**VIII. Delitos en materia de desaparición forzada de personas, previstos y sancionados en el Capítulo Tercero de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y sus respectivas tentativas punibles.**

**Artículo 3o.-**...

Los delitos señalados en las fracciones V, **VI, VII y VIII** de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

**Artículo Tercero.-** Se reforman los artículos 20, tercer párrafo; 23, segundo párrafo; 36, segundo párrafo y 40 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 20.**...

...

En los casos que la solicitud provenga de la autoridad judicial en términos de lo dispuesto por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **o por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas**, se estará a lo dispuesto por el artículo 23 de la presente Ley.

**ARTÍCULO 23.**...

En los casos en que la incorporación al Programa sea ordenado por una autoridad jurisdiccional en términos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **o de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas,** el Centro deberá realizar el Estudio Técnico correspondiente, con la finalidad de determinar las Medidas de Protección aplicables.

**ARTÍCULO 36.**...

Cuando la incorporación al Programa se hubiese realizado por mandato de la autoridad jurisdiccional, en términos de lo previsto por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **o por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada,**

el Director deberá solicitar la revocación de la incorporación al Programa al juez que conozca del procedimiento penal, cuando se actualice lo dispuesto del artículo 29 de la citada Ley y las causas de revocación o terminación señaladas en el artículo siguiente.

**ARTÍCULO 40.** Las Medidas de Protección otorgadas a los Testigos Colaboradores se regirán por lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada**; la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada;** la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

**Artículo Cuarto.-** Se reforma la fracción VIII; se adiciona una fracción IX y se recorre la siguiente en su orden, del artículo 4, de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para quedar como sigue:

**Artículo 4**. …

**I. a VII**.- …

**VIII.** Realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las actividades de cooperación con otros países, para el intercambio de información relacionada con el Registro**;**

**IX. Crear y administrar un módulo dentro del Registro Nacional sobre las muestras biológicas de referencia recolectadas de las víctimas de desaparición forzada, de los familiares, así como de los perfiles obtenidos de dichas muestras, para mantener informados a los familiares de los procesos de identificación y utilización de sus muestras y de los resultados y pormenores de los análisis, en términos de lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada.**

**La información contenida en este módulo no se incluirá en el apartado de consulta accesible al público en general, establecido en el artículo siguiente; y**

**X.** Las demás que disponga esta Ley.

…

**Artículo Quinto.-** Se reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII, al artículo 19, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

**Artículo 19.-**…

**I. a IV**.- …

**V**. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia**;**

**VI**. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos**, y**

**VII. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos que integren el Registro Nacional de Personas Detenidas y el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas, en términos de lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada; así como expedir la reglamentación, protocolos, formatos y autorizaciones, que consideren los aspectos genéticos, técnicos y científicos, requeridos para su operación.**

**Artículo Sexto.-** Se adiciona una fracción XXIII al artículo 194, del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

**Artículo 194**.- …

**I. a XXII**. …

**XXIII. Los previstos en el Capítulo Tercero de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y sus respectivas tentativas punibles.**

...

**Artículo Séptimo.-** Se reforman los artículos 55, segundo y cuarto párrafos; 64, primer párrafo; 97, primer párrafo; se adiciona una fracción V, al artículo 85 y un segundo párrafo al artículo 92 y se derogan los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

**Artículo 55**.- …

No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que revele su peligrosidad social, ni los inculpados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **y en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada**.

...

Una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad, a juicio del juez o tribunal que la imponga de oficio o a petición de parte, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona, o por su senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente

innecesario que se compurgue dicha pena, a excepción de los sentenciados por las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **y las previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada**, que en todo caso deberán cumplir la pena impuesta.

...

**Artículo 64**. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el Título Segundo del Libro Primero, con excepción de los casos en que uno delos delitos por los que exista concurso ideal sea de los contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **o en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada, supuestos en los cuales se aplicarán** las reglas de concurso real.

…

…

**Artículo 85**. …

**I. a IV**.- …

**V. Los sentenciados por las conductas previstas en el Capítulo Tercero de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y sus respectivas tentativas punibles**

...

**Artículo 92**.- ...

**No se podrá otorgar amnistía por las conductas establecidas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas.**

**Artículo 97**.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad **públicas**, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, ni de reincidente por delito intencional, **ni de sentenciado por las conductas establecidas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas,** se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:

I. a III.- …

**215-A.- (Se deroga)**

**215-B.- (Se deroga)**

**215-C.- (Se deroga)**

**215-D.- (Se deroga)**

**Artículo Octavo.-** Se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

**Artículo 50 Bis**. En materia federal, la autorización para intervenir comunicaciones privadas será otorgada de conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de la Policía Federal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro**,** la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos **o la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas,** según corresponda.

**Artículo 50 Ter**. Cuando la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas, sea formulada en los términos previstos en las legislaciones locales, por el titular del Ministerio Público de alguna entidad federativa, exclusivamente se concederá si se trata de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, secuestro o esclavitud, **desaparición forzada de personas o sus equiparados,** trata de personas o explotación, previstos en el Código Penal Federal, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro**, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas** o la Ley General para Combatir y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, respectivamente, o sus equivalentes en las legislaciones penales locales.

La solicitud de autorización de intervención de comunicaciones de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **y en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas, se formularán de conformidad con esos ordenamientos**.

...

...

...

...

...

**Artículo Noveno.-** Se adiciona una fracción VI al artículo 51 de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

**Artículo 51**. …

**I. a V**.- …

**VI. Los previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas.**

**Artículo Décimo.-** Se reforman los artículos 109, fracción XXVI; 167, párrafos tercero y cuarto; 277, cuarto párrafo y 366, primer párrafo, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

**Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido**

…

**I a XXV**.- …

**XXVI**. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas**, desaparición forzada de personas** o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;

**Artículo 167. Causas de procedencia**

...

…

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, **desaparición forzada de personas,** delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro, **para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas** y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

...

…

**I. a XI**.- …

...

**Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas**

...

...

...

Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas**, desaparición forzada de personas** o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad.

…

**Artículo 366. Testimonios especiales**

Cuando deba recibirse testimonio de menores de edad víctimas del delito y se tema por su afectación psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de los delitos de violación**, desaparición forzada de personas** o secuestro, el Órgano jurisdiccional a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello deberán utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitarla confrontación con el imputado.

...

...

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO**. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo establecido en el siguiente artículo.

**SEGUNDO**. Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales entrarán en vigor en términos de lo previsto por el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

**TERCERO.** Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando

hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

**CUARTO.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**QUINTO.** La implementación del presente Decreto será con cargo a los respectivos presupuestos aprobados a las instancias de los tres órdenes de gobierno obligados a cumplir con lo establecido en el presente.

**SEXTO.** Las disposiciones relativas a los delitos en materia de desaparición forzada de personas previstas tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales y leyes locales vigentes hasta la entrada en vigor el presente Decreto seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos.

**SÉPTIMO.** El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá realizar las adecuaciones necesarias a las disposiciones aplicables para la conformación y operación del Registro Nacional de Personas Detenidas, del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas y del módulo de perfiles genéticos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, dentro de los 90 días después de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

**OCTAVO**. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán realizar las reformas legales y reglamentarias a que se refiere el artículo 55 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Senado de la República, a 10 de marzo de 2015.

**ROBERTO GIL ZUARTH**
**Senador de la República**

**3)** 24-03-2015
Cámara de Senadores.
**INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas; y se Reforman y Adicionan los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.
Diario de los Debates, 24 de marzo de 2015.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 109 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

# DIARIO DE LOS DEBATES

## Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 24 de Marzo de 2015

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora De la Peña.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 109 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**(Presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD)**

**La Senadora Angélica de la Peña Gómez:** Gracias, señor Presidente, con su venia.

Esta iniciativa, ciertamente la firmamos distintas Senadoras y Senadores.

Quiero hacer referencia que los graves acontecimientos de Iguala, Cocula y Ayotzinapa, derivaron, entre otras decisiones, que familiares de las personas heridas y desaparecidas recurrieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, para solicitar, de manera urgente, medidas cautelares al Estado mexicano, a principios de octubre del año pasado.

Entre las diversas acciones, que tanto el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acordaron, se encuentra la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en donde, además de dar seguimiento al proceso de investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, perpetrada por policías municipales de Iguala y de Cocula, también se propone la creación de una legislación nacional sobre desaparición de personas, fundada en los preceptos de los tratados internacionales, que México ha aprobado.

En el Senado, como ustedes saben, tenemos ya bastante tiempo, ante los graves acontecimientos, incluso antes de los graves acontecimientos que yo menciono, discutiendo la pertinencia de una ley general, no solamente de una ley federal, sino una ley general que pueda coordinar los tres órdenes de gobierno y que defina, entre otras cosas, la pertinencia de una implementación en todo el país, a partir de definiciones claras, precisas, únicas, de base de coordinación y coadyuvancia para la efectiva búsqueda, investigación, atención a víctimas y políticas públicas frente a este grave delito que necesariamente derivarán en una legislación de observancia nacional general en todo el territorio nacional, de conformidad con lo que necesariamente tiene que fundarse en el artículo 73, fracción XXI, proceso también en el que el Senado está trabajando.

El fundamento esencial de la iniciativa que hoy presentamos, establece que, al amparo de la ley, todas las autoridades de la Federación y las 32 entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a la coordinación de sus acciones para garantizar la prevención, la investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición involuntaria de personas acordes a los principios, procedimientos y protocolos establecidos para lograr que todas las actuaciones estén encaminadas a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y de testigos, así como a regresar a la persona con vida a su núcleo familiar.

La redacción de cada uno de los capítulos y el articulado de esta iniciativa que hoy comento, toma en consideración tanto la vinculación y preceptos de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, aprobada en 1992; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de junio de 1994, en el ámbito de la OEA; el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de julio de 1998; y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de junio de 2006.

Indispensable para fundar el bien jurídico tutelado, el análisis de la legislación internacional y la doctrina que se ha venido construyendo desde la expertiz de diversos especialistas y organismos de Naciones Unidas y de la propia OEA, como también de la Unión Europea.

Por lo tanto, resulta evidente que la comisión del crimen, de desaparición forzada, viola, en perjuicio de la víctima, el derecho a su libertad y la seguridad personal; pero no sólo es importante en esta construcción del tipo penal hacer una diferencia clara de otros tipos penales, como lo son el secuestro o la trata de personas.

Porque con la desaparición forzada se violan, además, una serie de derechos humanos, como la vida, la libertad en su más amplio sentido; porque a la persona desaparecida se le niega el ejercicio de todos y cada uno de sus derechos como persona a la seguridad e integridad física, y además, integridad psicológica.

Se priva a la persona desaparecida de su personalidad jurídica. El desparecido que oficialmente no existe ni vivo, ni muerto, ni en prisión, ni en libertad, queda sustraído de la protección de la ley.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera ocasión, en el caso de Anzualdo contra Perú, llegó a la conclusión de que en ese caso de desaparición forzada sí se violó el derecho a la personalidad jurídica, por eso es uno de los elementos importantes que analizamos en esta iniciativa.

De tal forma, que en el artículo 5o. de la misma, señala que: “comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, con el objeto de sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad; omita dolosamente rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad; se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad; oculte el paradero del sujeto pasivo; se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima; o dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso”.

Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas el particular que, aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público, realice alguna de las conductas descritas anteriormente o intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis que refería también.

Es importante, por lo tanto, señalar que la desaparición no sólo contempla desaparición forzada perpetrada por los sujetos que ya señalé. La desaparición involuntaria se emprende con el objeto de sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la priva de la libertad con fines distintos al del secuestro, que es finalmente el delito que definimos y, por supuesto, refrendamos con toda puntualidad. ¿Cuál es, en este caso, el bien jurídico que tutela la presente iniciativa?

La desaparición forzada también ha sido conocida como una estrategia de lucha y supresión política.

Es importante que mencione, de manera muy rápida, la historia que nos ha señalado, cómo aparece por primera ocasión en América Latina, en Guatemala, en 1962, y se extendió al resto de la región latinoamericana en los años 70's, 80's y 90's, y fue perpetrada por regímenes dictatoriales y de gobiernos militares de facto.

El estudio de este grave crimen deriva de la práctica que sufrieron países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, pero que también estuvo presente en países como Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y México.

Fue usada, como bien sabemos, por la Unión Soviética en los años 30's, y también fue perpetrada como una práctica genocida por el Tercer Reich alemán de Hitler, en la Alemania nazi.

En México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo fundamenta en la sentencia Rosendo Radilla Pacheco contra México, obligando a México, al Estado parte, cuando menos a las siguientes obligaciones: una de carácter administrativo, otra que tiene que ver con la no repetición, la reparación del daño, pero otra también que tiene que ver con la importancia, la definición de la ley, revisión del marco jurídico que establezca el cumplimiento de obligaciones legales para la prevención, para la investigación, para la justicia y verdad y, sobre todo, para la no repetición.

La definición, por lo tanto, del tipo penal, como lo he señalado, también considera la desaparición involuntaria; la desaparición equiparada de personas; los delitos relacionados a la desaparición forzada o involuntaria y a sus equiparados, los agravantes y atenuantes punitivos; el delito de carácter continuo; su imprescriptibilidad; así como la declaración de ausencia por desaparición de personas, para garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.

Éstas son algunas de las características importantes de la iniciativa que hoy presentamos.

Enuncio, de manera general, la constitución del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos sobre personas que se encuentran privadas de la libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto.

Del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, cuyo propósito es concentrar en una sola base de datos las personas que se aduce han desparecido.

Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, que integre los perfiles de las personas desaparecidas, de familiares en primer grado, en línea recta de las víctimas, y de los restos que eventualmente se encuentre de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización y ubicación de personas desaparecidas y sus familias.

Definir los protocolos de búsqueda desde un solo enfoque a nivel nacional o para la declaración de ausencia por desaparición, de la atención a víctimas y la reparación integral del daño, son indispensables para darle certidumbre a la resolución de esta grave violación a los derechos humanos.

Finalmente, la iniciativa señala que: “las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con criterios especificados en el artículo 16 de la iniciativa, deberán ser concedidos para su implementación en el Programa Nacional de Procuración de Justicia y en el Programa Nacional de Seguridad Pública”.

Acompaña, esta iniciativa, las reformas a los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que sigue, señoras y señores, es ponernos de acuerdo en la redacción de la reforma constitucional, que fundamente la aprobación de la Ley General, y con este proceso legislativo atender las recomendaciones que los organismos de Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, o de las relatorías, o de las comisiones encargadas de revisar el cumplimiento de los tratados que hemos aprobado, o del examen periódico universal y también de los organismos de la Organización de Estados Americanos, que le han hecho al Estado mexicano podamos cumplir de manera irrestricta. No hay ninguna justificación seria, responsable, genuina que se imponga al reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas creado por la Convención Interamericana para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En el camino andamos y debemos cumplir debidamente porque ese es el mandato que nos ha dado la ciudadanía.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa

Quienes suscriben, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 109 DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,** de conformidad con la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**El pasado 19 de marzo del presente año,** los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento y proporcionar asistencia técnica al Estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa, presentaron su informe1 correspondiente **a la primera visita a nuestro país** efectuada del 1 al 19 de marzo, la cual estuvo centrada en torno a las siguientes cuatro líneas de acción: proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada.

En este contexto, es importante destacar el llamado realizado por el GIEI para crear una legislación sobre desaparición de personas acorde a los estándares internacionales en la materia, con el objeto de establecer los criterios para una política integral y coordinar las acciones necesarias, incluyendo los mecanismos de búsqueda urgente, la declaración de ausencia por desaparición que dé respuesta a las necesidades psicosociales, socio laborales y educativas de los familiares, el manejo de las experticias forenses, y los mecanismos de alerta temprana y prevención de forma integral.

**De esta forma, la presente iniciativa recoge las recomendaciones y las preocupaciones del GIEI; así como las aportaciones de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desapariciones que acudieron al Senado de la República para participar en distintas actividades entre las que destacan de manera particular el foro "La desaparición forzada de personas en la agenda legislativa del Congreso de la Unión" y la entrega del "Conjunto de Principios y Recomendaciones Ciudadanas para los Procedimientos de Declaratoria de Ausencia por Desaparición"2.**

**También se retoman y fortalecen los principios y objetivos que, en su momento, dieron sustento a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas3, presentada el 13 de febrero de 2014 y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas4, presentada el 22 de abril de 2014.**

**Con base en lo anterior, la presente iniciativa de ley se compone de 60 artículos divididos en nueve capítulos y diez artículos transitorios, sus** disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional; y tiene por objeto tipificar los delitos de desaparición de personas con base en los criterios establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; así como determinar bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.

Al amparo de esta ley, todas las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse para garantizar la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada e involuntaria de personas, de conformidad con los principios, procedimientos y protocolos establecidos en la misma, y siempre buscando que todas las actuaciones estén encaminadas a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y testigos, así como a regresar a la persona desparecida con vida a su núcleo familiar.

**Es oportuno subrayar que sólo después de realizar un profundo estudio del derecho comparado aplicable y de la jurisprudencia internacional, ha sido posible identificar de manera clara la diferencia entre el delito de desaparición forzada de personas y las figura del secuestro o de la privación ilegal de la libertad como delitos ordinario alternativos que durante mucho tiempo fueron considerados o aplicados por distintos países en casos de desaparición forzada de personas.**

**De ahí que la desaparición forzada en el ámbito del derecho penal internacional no presente ningún caso concluido ni en trámite frente a la Corte Penal Internacional (CPI), por ejemplo. Pero sí hay numerosos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), naturalmente con miras al carácter de violación de derechos humanos y no de comisión de crímenes internacionales.**

**En la jurisprudencia de la Col DH se recuerda el mandato que obliga a los Estados parte a tipificar el delito en su derecho interno conforme a los estándares internacionales. México es Estado Parte de la Convención de** Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (la cual entró en vigor en 2010) y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (la cual entró en vigor en 1996), sin embargo, tal y como lo ha acreditado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI), persiste en nuestro país una disparidad en la tipificación, sanción y prescripción respecto de la desaparición forzada en las diferentes entidades de la República así como en el ámbito federal.

**El delito de desaparición forzada de personas en las legislaciones de las entidades federativas**

En México, la facultad de aprobar leyes penales es compartida por los Estados y el Gobierno Federal, sin embargo, hay algunos delitos que son de competencia exclusiva de la Federación. La desaparición forzada es un delito autónomo en el Código Penal Federal así como en la legislación penal de siete Estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca), mientras que en los 25 restantes no se encuentra tipificada. Asimismo, la legislación penal de la Federación y los Estados que han tipificado la desaparición forzada no utilizan la misma definición. Además, la mayoría no incluye la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre o con el apoyo del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, autorización o aquiescencia. En la mayoría de las legislaciones Estatales queda excluida la prescripción.

Esta desigualdad queda plasmada en el siguiente cuadro:

**ENTIDAD FEDERATIVA**

**NORMATIVIDAD**

**OBSERVACIONES**

Aguascalientes

Artículo 136 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Considera a la desaparición forzada de personas como la acción de detener y mantener oculta a una o varias personas, o Autorizar, apoyar o consentir que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o negar información sobre su paradero.

Tales acciones solo podrán imputarse a los servidores públicos del Estado de Aguascalientes que las lleven a cabo con motivo de sus atribuciones.

La sanción impuesta por esta legislación consiste en aplicar de 10 a 30 años de prisión y de 300 a 600 días multa y con la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Baja California

Artículo 167 Bis del Código Penal para el Estado de Baja California.

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que con motivo de sus atribuciones detenga o mantenga oculto a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

La sanción consiste en aplicar una pena de 15 a 40 años de prisión y de cien a quinientos días multa.

Contempla atenuantes para quienes suministren información que permita esclarecer los hechos, así como también, cuando se contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Baja California Sur

No se encuentra tipificado.

Campeche

Artículo 181 del Código Penal para el Estado de Campeche.

Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el agente estatal que, con motivo de sus atribuciones priva de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

Asimismo, contempla atenuantes para quienes suministren información y contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.

Chiapas

Ley para la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Chiapas.

Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, así como también, sancionar y establecer medias de reparación integral del daño.

Chihuahua

Artículo 165 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Establece una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días multa, así como, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

Asimismo, también se considera como sujeto activo, el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público, participe en la comisión de éste delito.

Finalmente, determina atenuantes tanto para quienes proporcionen información que permita esclarecer los hechos, como para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.

Coahuila

Artículos 212 Bis, 212 Bis 1, 212 Bis 2, 212 Bis 3, 212 Bis 4, 212 Bis 5 y 212 Bis 6 del Código Penal del Estado de Coahuila.

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma a una o varias personas, o bien autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad.

Asimismo, contempla como sujeto activo al particular que por orden, autorización, apoyo, consentimiento o aquiescencia de un servidor público participe en los actos tendientes a la desaparición forzada de personas.

Prevé el establecimiento de una pena de veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo público.

Se considera como un delito de ejecución permanente, en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima.

Finalmente, considera atenuantes para quienes proporcionen información que permita esclarecer los hechos, así como para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida o el paradero de la víctima.

Colima

Artículo 202 Bis y 202 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Colima.

Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público del Estado de Colima o sus Municipios que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Contempla una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil unidades de multa, e inhabilitación hasta por quince años para el desempeño de cualquier cargo público.

De igual manera, prevé una pena de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientas unidades de multa, para el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas.

Contempla atenuantes para quienes proporcionen información y contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.

Finalmente, equipara al delito de desaparición forzada de personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.

Distrito Federal

Artículo 168 del Código Penal para el Distrito Federal.

Considera como sujeto activo al servidor público del Distrito Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

La sanción impuesta es de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días multa, así como, inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

De igual modo, prevé sanciones para el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas, las cuales consisten en imponer una pena de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días multa.

Establece diversas atenuantes en torno a proporcionar información tendiente a lograr la aparición con vida de la víctima.

Finalmente, el delito de desaparición forzada de personas no se sujeta a las reglas de la prescripción.

Durango

Artículo 364 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango.

Se establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Establece sanciones de cinco a veinticinco años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, así como, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

Dichas penas se imponen de igual manera al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas.

Contempla atenuantes cuando se proporcione información que permita esclarecer los hechos, así como, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Refiere que éste delito no se sujeta a las reglas de la prescripción.

Guanajuato

Artículos 262-a y 262-b del Código Penal del Estado de Guanajuato.

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de una o varias personas que hubieren sido previamente detenidas por la autoridad.

Establece una sanción de cinco a cuarenta años de prisión y de mil a dos mil días multa, así como, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta.

Guerrero

Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero número 569.

Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, así como, sancionar a los autores, cómplices y encubridores de éste delito y, finalmente, establecer medidas de reparación integral del daño para las víctimas.

Hidalgo

Artículo 332 Ter del Código de Código Penal para el Estado de Hidalgo.

Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que actuando con ese carácter o aduciendo su cargo, por sí o a través de un tercero, tenga conocimiento o intervenga de cualquier modo, en la detención legal o privación ilegal de la libertad de una o varias personas, propiciando o manteniendo dolosamente su ocultamiento, al negarse a reconocer la privación de la libertad o a proporcionar información sobre el paradero de la víctima. Impone una sanción de veinte a cuarenta años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días, así como también, inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la pena.

Jalisco

Artículos 154-A, 154-B, 154-C, 154-D, 154-E, 154-F y 154-G de Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

En este sentido, determina que de igual modo es sujeto activo, aquel que intervenga actuando con la autorización, la ayuda, la aquiescencia o tolerancia directa o indirecta de servidores públicos o de integrantes de seguridad pública.

Asimismo, regula la desaparición forzada por particulares.

Establece una pena de doce a cuarenta años de prisión y multa de seiscientos a mil días de salario mínimo.

Considera como agravante incrementando la pena hasta en una tercera parte, cuando la víctima es menor de edad, mujer, persona con discapacidad, indígena o persona de la tercera edad.

Las penas aumentan hasta el doble es perpetrada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Contempla como atenuantes disminuyendo la pena hasta en un cincuenta por ciento, cuando se proporciona información que permita esclarecer los hechos.

México

No se encuentra tipificado.

Michoacán

Artículos 230, 231 y 232 del Código Penal del Estado de Michoacán.

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquél u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima.

Contempla una sanción de veinte a cuarenta años de prisión, e inhabilitación definitiva para ejercer la función pública. Se establecen como agravantes cuando el superior jerárquico de un servidor público participante en la comisión del delito, haya tenido conocimiento de su comisión y no ejerciere su autoridad para evitarlo; cuando el sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, migrante, menor de dieciocho años, mayor de setenta años, indígena o mujer embarazada, así como también, cuando se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito, y finalmente, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Se consideran como atenuantes cuando se proporciona información que permita la localización de la víctima, así como, cuando la ésta es liberada dentro de los diez días siguientes a su liberación, la pena será de dos a doce años de prisión.

El delito de desaparición forzada de personas es imprescriptible.

Morelos

No se encuentra tipificado.

Nayarit

Artículo 291 A

Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas y derivado de la privación de la libertad, mantenga oculta o desaparecida a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cuales quiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre el paradero de la o de las víctimas.

Asimismo, también considera como sujeto acto activo a todo aquel que aun cuando no sea servidor público, actúe mediante la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.

Contempla una sanción de cinco a veinte años de prisión y una multa de cien a cuatrocientos días de salario.

Nuevo León

Artículos 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquel u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima.

Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima.

Asimismo, se establece que si durante la comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicaran las reglas del concurso.

Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil cuotas.

Oaxaca

Artículos 348 Bis D y 348 Bis E del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, quien por orden o con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, priva de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el Servidor Público que ordene, autorice o apoye la desaparición.

Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.

Impone una pena de cinco a treinta años de prisión y multa de trescientos a setecientos salarios mínimos, así como, la inhabilitación por el tiempo de la pena fijada.

Implementa medidas tendientes a disminuir la pena cuando se proporciona información, así como también, cuando se contribuye a lograr la aparición con vida de la víctima. Refiere que, el Estado y los municipios serán solidariamente responsables del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.

Puebla

Artículos 304 Bis y 304 Ter del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Establece como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público que con motivo de sus atribuciones sin causa legítima, detenga a una o varias personas con la finalidad de ocultarlo, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Comprende una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días de salario mínimo, así como, la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años. En este sentido, de igual manera considera como sujeto activo, al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas, recibiendo una sanción de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de salario mínimo. Determina atenuantes para aquellos casos en que se proporcione información que permita esclarecer los hechos y, cuando se contribuye a lograr la aparición con vida de la víctima reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida.

Querétaro

En proceso de publicación, aprobada por comisiones.

Quintana Roo

No se encuentra tipificado.

San Luis Potosí

Artículos 136 quinque y 136 sexties.

Establece que el delito de desaparición forzada de personas, se configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas.

De igual modo, se considera como sujeto activo, el particular que por orden, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, participe en la comisión del delito de desaparición forzada de personas.

Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión, y sanción pecuniaria de trescientos a mil quinientos días de salario mínimo.

El delito al que se refiere éste artículo, es de ejecución permanente en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima, por lo que no prescribe ni la acción penal, ni las penas que deriven de su comisión.

Contempla atenuantes para quienes suministren información que permita esclarecer los hechos, así como, para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.

Sinaloa

Artículos 172 Bis, 172 Bis A, 172 Bis B, 172 Bis C, 172 Bis D, 172 Bis E, 172 Bis F, 172 Bis G, 172 Bis H, 172 Bis I. del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o la persona o grupo de personas que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o sus servidores públicos, arreste, detenga, secuestre o prive de cualquier otra forma de su libertad a una persona, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida.

Determina una pena de veinticinco a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, así como, la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de diez a veinte años.

Es considerado como un delito permanente e imprescriptible.

Sonora

Artículos 181 Bis, 181 Bis 2, 181 Bis 3, 181 Bis 4, 181 Bis 5, 181 Bis 6, 181 Bis 7, 181 Bis 8, 181 Bis 9 181 Bis 10 y 181 Bis 11 del Código Penal del Estado de Sonora.

Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público que, con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta, a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.

Es considerado como un delito permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima. Comprende una sanción de quince a cuarenta años de prisión, además de la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública de diez a veinte años.

Tabasco

No se encuentra tipificado.

Tamaulipas

No se encuentra tipificado.

Tlaxcala

No se encuentra tipificado.

Veracruz

No se encuentra tipificado.

Yucatán

No se encuentra tipificado.

Zacatecas

No se encuentra tipificado.

En ninguna de las legislaciones penales, ni de las entidades federativas, ni de la federación, se encuentra tipificada la desaparición involuntaria de personas. De ahí que el Capítulo II de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, denominado De los Delitos de Desaparición de Personas, desarrolle puntualmente lo siguiente;

**Bien jurídico tutelado**

Para Santiago Corcuera5, [e]l primer elemento constitutivo [del delito de desaparición forzada de personas] es la privación de libertad de la víctima, cualquiera que fuera su forma. Es decir, la privación de libertad puede inicialmente haber sido una detención o arresto legal, pero cuando es seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar dicho paradero de la personajes cuando comienza propiamente a perpetrarse el crimen de desaparición forzada, y desde luego, aquella privación de libertad que pudiera haber sido legal, se convierte automáticamente en ilegal, en la medida en que tiene como consecuencia impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes tanto para la víctima directa de la desaparición (la persona privada de libertad) como para sus familiares.

Sin embargo, de acuerdo al Folleto Informativo sobre la práctica de la desaparición forzada elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

La práctica de la desaparición forzada de personas viola toda una gama de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, así como en otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario.

Las desapariciones pueden entrañar también violaciones graves de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1957, así como del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobados por la Asamblea General en 1979 y 1988, respectivamente. En una desaparición pueden violarse también los derechos siguientes:

El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

El derecho a la libertad y seguridad de la persona;

El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y

El derecho a la vida.

Las desapariciones violan en general el derecho a llevar una vida de familia así como diversos derechos de carácter económico, social y cultural, como el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la educación. En efecto, se ha comprobado que la desaparición del principal sostén económico de la familia, en particular en las sociedades menos prósperas, suele dejarla en una situación socioeconómica desesperada, en la que es imposible ejercer la mayoría de los derechos enumerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres. Cuando las mujeres son víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo. Además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para

solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A este título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias.

Los niños son también afectados por las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos humanos.6

La Declaración prevé en su artículo 1.2 lo siguiente:

Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.

De lo enunciado en el párrafo anterior, se deriva claramente que la comisión de desaparición forzada implica la violación de diversos derechos humanos. Se trata de una conducta multiviolatoria de derechos y por lo tanto pluriofensiva.

Así lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos:

[...] Todo acto de desaparición de ese tipo constituye una violación de muchos de los derechos consagrados en el Pacto, como son el derecho a la libertad y la seguridad personales (art. 9), el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7) y el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (art. 10). Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro (art. 6).7

De lo dicho en el apartado inmediato anterior, resulta evidente y más allá de toda duda que la comisión del crimen de desaparición forzada viola en perjuicio de la víctima el derecho a su **libertad y la seguridad personales**.

Esto se desprende de la propia definición de desaparición forzada a la luz de los instrumentos internacionales mencionados. Además, el artículo 1.2 de la Declaración establece expresamente que la desaparición forzada constituye una violación al derecho a la libertad y a la seguridad de las personas. De manera consistente, en los casos en que la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos han encontrado a algún Estado responsable de desaparición forzada, se señala como derecho violado en perjuicio de la víctima el derecho a la libertad y a la seguridad personales.

Sin embargo, la acreditada organización Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial, en el Consejo de Derechos Humanos, en su exposición presentada por escrito por primer período de sesiones, 19 al 30 de junio de 2006. Afirma lo siguiente:

Con la desaparición forzada se violan una serie de derechos humanos: a la vida, a la libertad en su sentido más amplio porque al desaparecido se le niega el ejercicio de todos y cada lino de sus derechos como persona, a la seguridad y a la integridad física y psicológica, etc. En resumen, se priva al desaparecido de su personalidad jurídica.[...]el desaparecido (que oficialmente no existe, ni vivo, ni muerto, ni en prisión[,] ni en libertad) queda sustraído a la protección de la ley[.]8

Asimismo, la Corte Interamericana, por primera vez en el caso Anzualdo vs. Perú la Corte Interamericana llegó a la conclusión de que en ese caso de desaparición forzada sí se violó el derecho a la personalidad jurídica, cuando expresa que:

101. En consideración de lo anterior, la Corte estima que en casos de desaparición forzada de personas se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. Esto se tradujo en una violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Anzualdo Castro.

**El tipo penal de desaparición forzada de personas**

Cuatro instrumentos internacionales hacen una descripción de la conducta del delito de desaparición forzada de personas, a saber:

1. Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 18 de diciembre de 1992. Cuya definición establece que la desaparición forzada de personas es *que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndose así a la protección de la ley*.9

2. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, dictada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Para los efectos de la presente Convención, *se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes*.10

3. Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998.Establece que es [l]*a aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado*.11

4. Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 22 de junio de 2006.Lo configura como [e]*l arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley*.12

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia13 ha considerado que dada la particular relevancia de las transgresiones que conlleva y la naturaleza de los derechos lesionados, el concepto de desaparición forzada de personas se ha consolidado internacionalmente en tanto grave violación de derechos humanos.

Esta caracterización resulta consistente con otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada:

a. La privación de la libertad;

b. La intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos;

c. La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, y

d. Que con estas acciones se obtenga como resultado sustraer a la víctima de la protección de la justicia.

Por su parte, la Corte Interamericana en la sentencia del caso Radilla Pacheco, sostuvo:

La caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se desprende no sólo de la propia definición del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado mexicano es parte desde el 9 de abril de 2002, los *travaux préparatoinres* a ésta, su preámbulo y normativa, sino también de otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que, asimismo, señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Además la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias Cortes

Constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.14

Los elementos típicos de la desaparición forzada de personas se desprenden fundamentalmente de los cuatro instrumentos internacionales a los que ya se hizo referencia, a saber, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional sobre la Protección de todas las Personas contralas Desapariciones Forzadas.

La diferencia de la desaparición forzada de personas con otras formas de privación de la libertad, consiste primeramente en que esta se ejecute o pretenda ejecutar, por agentes estatales o por personas o grupos de personas que con la autorización, apoyo o aquiescencia de los primeros, o que se prive de la libertad a una persona -como lo sostiene el Estatuto de Roma- por una organización política, pero con la aquiescencia de los agentes del Estado; en segundo lugar, que luego de la privación de libertad -sea ésta legal o ilegal- los agentes estatales se nieguen a dar información o se nieguen a reconocer la privación de libertado de informar sobre el paradero de la víctima, y en tercer lugar, resulta fundamental que con la conducta omisiva se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes en perjuicio del sujeto pasivo de este delito.

Así, se hace necesaria una norma integral que comprenda un concepto del delito que contenga todos los elementos constitutivos del ilícito penal que sea acorde a los estándares adoptados fundamentalmente por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Así podemos afirmar que se desprenden de esta definición dos tipos penales, el establecido en el proyecto en el artículo 5 y el correspondiente al artículo 6.

En el primero encontramos como elementos objetivos: la conducta inicial, consistente en que se realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona; la conducta posterior, que el activo se niegue a proporcionar información o la que proporcione dolosamente sea falsa; el sujeto activo, una persona con calidad de servidor público; el sujeto pasivo, por supuesto es una persona sin importar la calidad de esta; y el elemento objetivo que consiste en que las conductas realizadas den como resultado el impedir el acceso a la justicia de la víctima y así se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

En el segundo caso (art. 6), los elementos objetivos son los mismos, con excepción de que el activo no es propiamente un servidor público, sino un particular que actúa con autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público, o que con concierto previo, ordene, ayude, planee, ejecute o participe en la realización de la desaparición forzada de personas.

**Desaparición involuntaria de personas**

El artículo 3 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que:

Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.

Esto significa, que si bien los particulares no cometen el delito de desaparición forzada de personas, los Estados parte tienen la obligación de tipificar el delito cuando es cometido por particulares que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. A esta conducta se le denomina desaparición involuntaria de personas y tiene como característica esencial, a diferencia del secuestro u otras modalidades de privación de libertad, que la víctima queda sin el recurso del acceso a la protección que el estado debe brindarle a toda persona. Es indispensable señalar que los propósitos de dicha privación de la libertad son distintos a los del secuestro, de manera que no se confundan ambas conductas.

**Desaparición equiparada de personas**

Es totalmente conocido, sobre todo por la experiencia de países latinoamericanos que sufrieron las consecuencias de este delito durante el periodo de dictaduras militares, que una vez que tenían ocultas y

privadas de su libertad a mujeres en centros de reclutamiento de victimas del citado delito, estas en ocasiones salían embarazadas concibiendo hijas e hijos, mismos que les eran sustraídos y dados en adopciones ilegales, o bien se les cambiaba la identidad y eran registrados como hijos de otras personas mediante actas falsas, motivo por el cual, es indispensable tipificar como delito equiparado a la desaparición de personas, el ocultamiento de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición durante el cautiverio.

En este sentido, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece en su artículo 25:

Artículo 25

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:

a ) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;

b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso a) supra.

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.

3. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización de los niños a los que hace referencia el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo.

4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, deberán existir en los Estados Partes que reconocen el sistema de adopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación o guarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción o colocación o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada.

5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez.

**Delitos relacionados a la desaparición forzada o involuntaria de personas y a sus equiparados**

Es materia de este proyecto de Ley establecer con claridad los delitos relacionados a las conductas típicas descritas en los artículos 5, 6, 7 y 8. Así, si bien para las conductas determinadas en los artículos 9, 10 y 11 no es posible determinar a los activos como autores o partícipes de los delitos de desaparición forzada o involuntaria o sus equiparados, por no haber concierto previo en sus acciones u omisiones, se considera que dichas conductas son en sí mismas lesivas y, de ocurrir, deberán estar penadas por la Ley.

**Agravantes y atenuantes punitivas.**

Los artículos 12 y 13 del presente proyecto proponen además que se pueda atenuar hasta en una mitad la pena privativa de libertad si el activo del delito proporciona cualquier información que pueda llevar a recuperar a la víctima del delito de desaparición forzada o involuntaria con vida. En el caso del segundo, se disminuirá la pena en un tercio cuando se puedan recuperar los restos corpóreos de la persona o se localice y aprenda al autor del delito.

El artículo 14 establece que los agravantes de los delitos de desaparición de personas, forzada, involuntaria o equiparada aplicarán en los casos que durante la desaparición a la víctima le sobrevenga la muerte; se haya

realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima; se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito; la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o candidata a cargo de elección popular; el autor o partícipe haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública; el autor o partícipe sea o haya sido integrante de alguna corporación privada o se ostente como tal sin serlo; la desaparición se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito; la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; se cometa en contra de persona protegida internacionalmente por el Derecho Internacional Humanitario o agente diplomático; o el delito se prepare, planifique, direccione o controle desde algún centro de reclusión.

**Delito de carácter continúo.**

Es indudable, que la desaparición forzada tiene una determinada duración o desarrollo en el tiempo. Es decir, es un crimen de carácter continuo o permanente, en tanto dure. La Convención Interamericana en su Artículo III, establece que:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona.

La Convención de la ONU, en su artículo 8 señala:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5,

1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:

b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito.

La Declaración en su Artículo 17, establece que:

1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.

Lo anterior se encuentra en sintonía con el Código Penal Federal, el cual establece por delito permanente o continuo en su artículo 7, fracción II: Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo.

**En el Capítulo III, relativo a la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas para la Prevención, Investigación y Sanción de Desaparición de Personas, se establece que** las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para cumplir con los objetivos y fines de esta Ley; diseñar, proponer e impulsar políticas de Prevención, Investigación y Sanción de la Desaparición de Personas; elaborar y aplicar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley, en la Ley General de Víctimas y en las leyes en la materia expedidas o que expidan las entidades federativas.

De igual forma, crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente Ley, compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad con los protocolos que al efecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública; establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos especializados en desaparición de personas de las Instituciones de Seguridad Pública; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas

Desaparecidas; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Perfiles Genéticos; y determinar y aplicar los protocolos de búsqueda y localización, entre otras.

Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas deberán crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función.

Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables. Las autoridades del gobierno federal y de las entidades federativas deberán establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos especializados en los delitos previstos en esta Ley.

Es deber de todas las autoridades federales y de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención.

Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda de la persona desaparecida.

El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a los organismos autónomos constitucionales de promoción y defensa de los derechos humanos.

Si durante la investigación de los delitos de desaparición de persona se presume fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

Los vehículos terrestres pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad de la federación y de las entidades federativas deberán estar permanentemente monitoreadas a través de cualquier medio de geolocalización que permita mantener un registro de por lo menos 90 días de quienes se encontraban a bordo del vehículo y de los lugares y horarios en los que estuvo dicho vehículo.

**En el Capítulo IV, relativo al** Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas se dispone que dicho registro es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, detención o internación en que se encuentren materialmente. Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas.

El **Capítulo V, correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, estipula que este registro** es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas desaparecidas y de aquellas de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

Corresponderá al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

III. Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de registro o información sobre personas desaparecidas;

IV. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas desaparecidas a partir de la siguiente clasificación:

a. Sexo;

b. Edad;

c. Nacionalidad;

d. Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la desaparición;

e. Origen étnico;

f. Si se trata de personas con alguna discapacidad;

g. Señas particulares; y

h. Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;

V. Operar, regular y mantener el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

VI. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como la que le suministren las Entidades;

El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de personas desaparecidas. Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas funcionará las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe, para solicitar información respecto del procedimiento que deberá de seguirse para la búsqueda de una persona desaparecida.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentar un informe anual al Consejo Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las estadísticas que arroje el Registro de Datos de Personas Desaparecidas. La información contenida en el informe será pública.

El Capítulo VI, denominado del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, de los perfiles genéticos de personas desaparecidas, de los familiares en primer grado en línea recta de las víctimas y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización o ubicación de personas desparecidas y su familia. Para ello, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos;

III. Integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que contendrá los al registro alfanumérico personal elaborado sobre la base de secuencias de ADN que sean polimórficas en la población y que aporten exclusivamente información reveladora de la identidad de la persona y de su sexo de las siguientes personas:

a. De las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

b. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta ascendente materna y paterna de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

c. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta descendiente de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible; y,

d. De los cuerpos o tejidos de personas encontradas de quienes se desconozca su identidad;

IV. Operar, regular y mantener el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

V. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, así como la que le suministren las Entidades Federativas;

VI. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Perfiles Genéticos, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VII. Realizar el cotejo de los perfiles genéticos con la totalidad de los perfiles contenidos en la base de datos, a los efectos de corroborar la existencia de un impacto identificatorio positivo;

El Capítulo VII, relativo al Procedimiento de Búsqueda de Emergencia tiene por objeto que las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas emitirán un procedimiento de búsqueda de emergencia a fin de que las unidades especiales, en el ámbito de su competencia, realicen la búsqueda de personas desaparecidas siempre que tengan conocimiento del hecho, durante las primeras 72 horas siguientes a la realización del hecho, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a disposición de la persona desaparecida ante el ministerio público o la autoridad judicial que se encuentre en los supuestos de esta Ley.

Dicho procedimiento facultará a las unidades especiales de búsqueda el acceso inmediato a cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud públicos o privados, donde se presuma fundadamente que la víctima pudiera encontrarse.

En todos los procedimientos de investigación y búsqueda de personas desparecidas, el ministerio público competente garantizará la conservación de los indicios durante todo el procedimiento a través de una correcta implementación de la cadena de custodia.

Para complementar lo anterior, los Capítulo VIII y IX, correspondientes al procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición y a la **Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño, respectivamente,** buscar reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima.

Estarán facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;

III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;

IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;

V. La pareja de la víctima que se encuentre bajo la figura del pacto civil de solidaridad u otra similar,

VI. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas.

VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil;

VIII. El Ministerio Público;

IX. Los organismos de protección de los derechos humanos.

Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.

Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

El Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá la averiguación con el objetivo de dar con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar en su caso la acción penal correspondiente.

En caso de que como resultado de la búsqueda e investigación se descubriera un fraude a la ley, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas quedará sin efecto.

La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos:

I. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez;

III. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

IV. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;

V. Salvaguardar sus derechos escolares;

VI. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida;

VII. Salvaguardar los derechos adquiridos y aquellos en los que tenía una expectativa de ejercerlos;

VIII. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo; y

IX. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente ley.

De igual modo, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de continuar las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.

A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente ley, se les dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva.

En el caso de las personas que han sido declaradas como ausentes por Desaparición de Personas se les otorgará la siguiente protección en materia laboral:

I. Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas;

II. Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad;

III. Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable;

IV. A los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable;

V. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a la persona.

VI. Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida, serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana.

VII. Los demás que determinen las autoridades competentes.

Los beneficiarios del trabajador a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de los beneficios y prestaciones hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona. Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición de persona, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.

En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la declaración de ausencia por desaparición de persona, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.

Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a lo establecido en esta ley, la Ley General de Víctimas, las leyes de las entidades federativas en materia de atención a víctimas, así como los protocolos de atención y reparación específico que en el ámbito de sus competencias establezcan las instituciones encargadas de la atención a víctimas.

Finalmente, por lo que tiene que ver con la reforma al sexto párrafo del artículo 15 y la adición de un último párrafo al artículo109 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que aun cuando el juicio de amparo es una institución importantísima para la defensa de los derechos humanos -que efectivamente es un recurso sencillo, rápido, generalmente puede incluso paralizar actos futuros-, para el caso de desaparición forzada de personas presenta dificultades que lo limitan para la localización de personas desaparecidas.

Si bien es cierto que en el marco jurídico mexicano, las garantías y los derechos humanos de las personas se encuentran amparadas y protegidas por los Tribunales Federales mediante el juicio de amparo, también lo es que tratándose del delito de desaparición forzada de personas, el individuo es sustraído de todo régimen jurídico vigente, en consecuencia, queda intempestivamente destruida toda la estructura técnico-jurídica del juicio de amparo.

Todo ello, propicia que el Estado se encuentre en condiciones de eludir su responsabilidad política de un acto arbitrario de suma gravedad que atenta contra la vida, la libertad y la seguridad física y jurídica de la víctima y de sus familiares, que se comete con la ventaja del sujeto activo que cuenta, por acción o por omisión con el respaldo y con recursos del Estado.

No obstante que el 2 de abril de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas correspondientes a la Ley de Amparo donde se establece que a nombre de la persona desaparecida pueda promover el juicio de amparo cualquier persona en su nombre, aún con esta disposición el Juicio de Amparo presenta problemas prácticos que básicamente se refieren a la ubicación y localización dela persona desaparecida, pues si se parte del hecho de que se trata de una situación donde pudiera requerir la intervención de una autoridad pública para mantener oculta el paradero de una persona, es evidente la facilidad con que cuenta para lograr su objetivo.

Diversos supuestos pueden presentarse al buscar a una persona desaparecida; por ejemplo, que la retención se realice en algún centro de reclusión clandestino, lo que de suyo hace imposible su localización; otro supuesto, el detenido está en una cárcel oficial, pero no se realiza el registro de la detención, o se demora el ingreso del servidor público para lograr su ocultamiento; un caso más, la persona desaparecida pueda estar en alguna instalación militar y, aun cuando es posible ingresar a estos lugares, el acceso es restringido y requiere autorizaciones previas que permiten perfectamente ganar tiempo que se emplea en su ocultamiento o extracción a un lugar distinto. En fin las posibilidades son diversas.

Pero la localización del paradero de una persona desaparecida no sólo es un problema práctico, también incide en el ámbito normativo, pues el órgano que dé seguimiento a una desaparición forzada debe tener la facultad de solicitar a las autoridades, información que contribuya a la localización rápida y oportuna de la persona, y además, la posibilidad de ingresar a todo tipo de centros de detención sin objeción alguna.

Si bien la Ley de Amparo cubre la primera parte porque en el trámite del juicio se solicita informe a las autoridades señaladas como responsables y permite hacer todas las gestiones necesarias para ubicar a la persona, no hay normatividad suficiente para ejecutar directamente la búsqueda. Por tanto, la iniciativa de reformas al sexto párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo que proponemos, plantea que cuando las circunstancias del caso la persona que presente la demanda de amparo, se trate de una posible desaparición, el Juez deberá ordenar el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a su disposición de la persona desaparecida. Dicha medida facultará a las Unidades encargadas de implementar el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia, el acceso inmediato a cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud tanto públicos como privados.

Por otra parte, el artículo 109 de la Ley de amparo establece que cuando se promueva un amparo en los términos del artículo 15, (es decir, los supuestos en materia de desaparición de personas), bastará para la admisión de la demanda, que se exprese el acto reclamado; la autoridad responsable, si fuere posible; el lugar en que se encuentre la víctima, y la autoridad que ejecute el acto. Con lo anterior, se restringe la efectiva protección de los derechos humanos, ya que, indica como requisitos de procedibilidad que se señalen la o las autoridades responsables, el lugar de la detención y la autoridad que ejecute el acto.

Al respecto, en el caso Miguel Orlando Muñoz Guzmán *versus* México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que al establecer como requisito que se señale el lugar de la detención, hace que el amparo resulte inadecuado en México para determinar el paradero de una presunta víctima de desaparición forzada, ya que es contrario a los parámetros establecidos por la jurisprudencia de ambos órganos del sistema interamericano. Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, si el recurso de exhibición personal exigiera identificar el lugar de detención y la autoridad respectiva, no sería un recurso adecuado para encontrar a una persona desaparecida, puesto que, en estos casos sólo existe prueba referencial de la detención y se ignora el paradero de la víctima.

Como bien lo sostiene la Corte Interamericana, en la mayor parte de los casos se desconocen tanto las autoridades como el lugar de la detención. En este sentido, el juicio de amparo no tiene efectividad en la protección de los derechos humanos, frente a casos de desaparición forzada de personas. Lo anterior motiva nuestra propuesta de adicionar un último párrafo al artículo 109 de la Ley de Amparo a fin de crear un verdadero recurso que pueda activarse a fin de prevenir este grave fenómeno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, para quedar como sigue**:**

**Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas**

**Capítulo I**
**Disposiciones Generales**

**Artículo 1.-** Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 2.-** El objeto de la presente ley es tipificar los delitos de desaparición de personas con base en los criterios establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; así como determinar bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.

**Artículo 3.-** Todas las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse para garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Toda persona desaparecida tiene derecho a que las autoridades Federales y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias realicen, con la debida diligencia, todas las acciones necesarias tendientes a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y testigos, así como regresarla con vida a su núcleo familiar, como objetivo principal de sus actuaciones.

**Artículo 4.-** Para los efectos de esta Ley se entenderá por Persona Desaparecida, toda persona que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

Asimismo, se entenderá la sustracción de la víctima del acceso a la justicia que se tenga como resultado el que se le impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, que no pueda tener acceso a la protección de la ley o que se le niegue su personalidad jurídica.

**Capítulo II**
**De los Delitos de Desaparición de Personas**

**Artículo 5.-** Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público que con el objeto de sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y:

I. Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad;

II. Omita dolosamente rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;

III. Se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;

IV. Oculte el paradero del sujeto pasivo;

V. Mantenga el ocultamiento del sujeto pasivo;

VI. Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima; o

VII. Dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de veinte a treinta años de prisión, de cuatro mil a ocho mil días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 6.-** Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de persona el particular que:

I. Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; o

II. Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis descritas en el artículo anterior.

Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrán una pena de quince a veinte años de prisión y de quinientos a dos mil días multa.

**Artículo 7.-** Comete el delito de desaparición involuntaria de persona el particular que con el objeto de sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la prive de la libertad, con fines distintos a los del secuestro. A quien cometa el delito de desaparición involuntaria de personas se le impondrá una pena de prisión de quince a veinte años y de quinientos a dos mil días multa.

**Artículo 8.-** Se equipara al delito de desaparición forzada o involuntaria de persona, según haya intervenido un servidor público o no, el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada o involuntaria de persona y se sancionará conforme a lo dispuesto en los tres artículos anteriores.

**Artículo 9.-** El servidor público que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial y sin acuerdo previo a la comisión del delito, permita por acción u omisión el ocultamiento de la víctima de desaparición de personas materia de esta Ley en dichos lugares, se les impondrá la pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación inconmutable para ejercer cargos públicos.

La misma pena privativa de libertad se impondrá al particular que sin acuerdo previo a la comisión del delito, permita el ocultamiento de la víctima de desaparición de personas materia de esta Ley en algún inmueble de su propiedad.

**Artículo 10.-** Se sancionarán, a quien sin ser autor o partícipe, incurra en alguna de las conductas relacionadas con los delitos descritos en los artículos 5, 6, 7 y 8 de esta Ley, conforme a lo siguiente:

I. Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos mencionados con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

II. Teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los delitos mencionados, omita dar aviso a la autoridad correspondiente con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

III. Pudiendo evitar la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, sin riesgo propio o ajeno, no lo evite con pena de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa.

IV. Teniendo conocimiento del destino final de una persona nacida de una mujer víctima de desaparición de persona, no proporcione la información a la autoridad competente se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si fuere servidor público, además con inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 11.-** Al Agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su cargo la investigación de alguno de los delitos materia de esta Ley, dolosamente la obstruya, retrase u omita realizarla adecuadamente, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión, multa de trescientos a quinientos días multa e inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 12.-** Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en una mitad, las siguientes:

I. Que la víctima fuere liberada espontáneamente durante las veinticuatro horas siguientes a su privación de libertad; o

II. Que el activo proporcione información que conduzca a la liberación de la víctima.

**Artículo 13.-** Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en un tercio, las siguientes:

I. Que el activo proporcione información que conduzca a dar con el paradero de los restos corpóreos de la víctima; o

II. Que el autor material de delito proporcionen información relativa a la responsabilidad y paradero del autor intelectual y se logre la ubicación o captura de éste.

**Artículo 14.-** Serán agravantes punitivas y aumentarán la pena hasta en una cuarta parte, las siguientes:

I. Que durante la desaparición a la víctima le sobrevenga la muerte;

II. Que se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima;

III. Que se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito;

IV. Que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o candidata a cargo de elección popular;

V. Que al autor o partícipe haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública;

VI. Que el autor o partícipe sea o haya sido integrante de alguna corporación privada o se ostente como tal sin serlo;

VII. Que la desaparición se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito;

VIII. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;

IX. Que se cometa en contra de persona protegida internacionalmente por el Derecho Internacional Humanitario o agente diplomático; o

X. Que el delito se prepare, planifique, direccione o controle desde algún centro de reclusión.

Para efectos de la fracción VIII del presente artículo, se considera situación de vulnerabilidad la condición particular de la víctima derivada de una o más de las siguientes circunstancias:

a. Condición de género;

b. Preferencia u orientación sexual o identidad de género;

c. Condición socioeconómica precaria;

d. Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la consumación de alguno de los delitos previstos en esta Ley;

e. Trastorno físico o mental o discapacidad;

f. Pertenencia o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier otra equiparable;

g. Ser persona mayor de sesenta y cinco años de edad;

h. Ser persona menor de 18 años de edad;

i. Situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüístico; y

j. Otra condición personal, geográfica o circunstancial, preexistente o creada, que ponga a la víctima en especial desventaja respecto del sujeto activo del delito.

**Artículo 15.-** Los delitos de desaparición de persona son delitos continuos e imprescriptibles y se investigarán y perseguirán de oficio. Se aplicarán las reglas de autoría y participación además de las del concurso. Igualmente será sancionada la tentativa.

Estos delitos se consideran violaciones graves a los derechos humanos y respecto de ellos no se admite como causa de justificación el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior; ni la restricción o suspensión de derechos y garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos delitos no procede la amnistía, el indulto, ni sustitutivo alguno u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerar al activo de cualquier procedimiento o sanción penal; tampoco se les considerará de carácter político para efectos de extradición.

La práctica generalizada o sistemática de alguno de estos delitos por agentes del Estado o con su tolerancia o aquiescencia contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque se considerará crimen de lesa humanidad.

## Capítulo III
## De la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas para la Prevención, Investigación y Sanción de Desaparición de Personas

**Artículo 16.-** Las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para:

I. Cumplir con los objetivos y fines de esta Ley;

II. Diseñar, proponer e impulsar políticas de Prevención, Investigación y Sanción de la Desaparición de Personas;

III. Elaborar y aplicar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley, en la Ley General de Víctimas y en las leyes en la materia expedidas o que expidan las entidades federativas;

IV. Formular políticas integrales sistemáticas, así como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;

V. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones contra las conductas previstas en la presente Ley;

VI. Distribuir, a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y prevención, investigación y persecución de las conductas previstas en la presente Ley;

VII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;

VIII. Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones policiales y de procuración de justicia para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley;

IX. Crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente Ley, compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad con los protocolos que al efecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

X. Regular la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley, así como de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;

XI. Realizar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y de procuración de justicia de las conductas previstas en la presente Ley;

XII. Rendir informes sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional de Procuración de Justicia y del Programa Nacional de Seguridad Pública, y remitirlo a las instancias correspondientes de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIII. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios con la finalidad de prevenir, perseguir y sancionar las conductas previstas en la presente Ley, en términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XIV. Dar seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere la fracción anterior. Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XV. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de las conductas previstas en la presente Ley con la finalidad de publicarlos periódicamente;

XVI. Colaborar en la prevención, persecución y sanción de las conductas previstas en la presente Ley;

XVII. Participar en la formulación de un Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar las conductas previstas en la presente Ley, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención, persecución y sanción del delito, así como la protección y atención a ofendidos, víctimas y familiares;

XVIII. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos especializados en desapariciones de personas de las Instituciones de Seguridad Pública;

XIX. Establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas;

XX. Establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

XXI. Establecer y regular el funcionamiento y la administración del Registro Nacional de Perfiles Genéticos; y,

XXII. Determinar y aplicar los protocolos de búsqueda y localización;

**Artículo 17.-** Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas deberán crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función.

La Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas capacitarán a su personal en materia de planeación de investigación.

**Artículo 18.-** Las unidades especiales de investigación tendrán las siguientes facultades:

I. Recibir, por cualquier medio, las denuncias sobre la desaparición de una persona e iniciar la investigación en un plazo no mayor a 8 horas.

II. Utilizar las técnicas de investigación previstas en esta Ley y en los demás ordenamientos aplicables;

III. Vigilar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las personas respecto de las cuales se tenga indicios de que se encuentran involucradas en los delitos previstos en esta Ley;

IV. Sistematizar la información obtenida para lograr la localización de la persona víctima de desaparición de personas y la detención de los probables responsables;

V. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de información que pueda ser relevante para la investigación del delito o la localización de las víctimas;

VI. Proponer políticas para la prevención e investigación de las conductas previstas en esta Ley;

VII. Proponer al Procurador General de la República o a los procuradores o fiscales de las entidades federativas, en su caso, la celebración de convenios con las empresas de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas;

VIII. Utilizar cualquier medio de investigación que les permita localizar a la víctima de desaparición de personas, identificar y ubicar a los presuntos responsables, y cumplir con los fines de la presente Ley, siempre y cuando dichas técnicas de investigación sean lícitas y con pleno respeto a los derechos humanos, y,

IX. Las demás que disponga la Ley.

**Artículo 19.-** Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 20.-** Las autoridades del gobierno federal y de las entidades federativas deberán establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos especializados en los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 21.-** Es deber de todas las autoridades federales y de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención.

**Artículo 22.-** Los órganos de la federación y de las entidades federativas que entre sus facultades se encuentre la de realizar detenciones, especialmente los relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

I. La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

II. La organización de programas de formación de su personal para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

III. La profesionalización de las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y nacional en una cultura de respeto a los derechos humanos;

IV. La profesionalización de todo el personal de servicio público que participe en la detención, arresto y custodia de personas; y

V. La prevención, sanción y erradicación de la desaparición de personas.

**Artículo 23.-** Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda de la persona desaparecida.

**Artículo 24.-** El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a los organismos autónomos constitucionales de promoción y defensa de los derechos humanos.

**Artículo 25.-** Las personas a quienes se les impute cualquiera de los delitos materia de esta Ley sólo podrán ser investigados y juzgados por la jurisdicción ordinaria. No serán aplicables las disposiciones que sobre fueros especiales establezcan otras leyes.

**Artículo 26.-** Si durante la investigación de los delitos de desaparición de persona se presume fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

**Artículo 27.-** Los vehículos terrestres pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad de la federación y de las entidades federativas deberán estar permanentemente monitoreadas a través de cualquier medio de geolocalización que permita mantener un registro de por lo menos 90 días de quienes se encontraban a bordo del vehículo y de los lugares y horarios en los que estuvo dicho vehículo.

## Capítulo IV
## Del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas

**Artículo 28.-** El Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad

de resguardo, detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, detención o internación en que se encuentren materialmente.

**Artículo 29.-** Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

I. Emitir las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar y operar un sistema de atención telefónica gratuita que atienda las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, las solicitudes de registro y brinde información sobre personas en arresto o detención a autoridades, familiares o personas interesadas;

III. Operar, regular y mantener el Registro Nacional, así como procurar su buen funcionamiento;

IV. Integrar la información en el Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas que le proporcione las autoridades federales;
V. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VI. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración, y

VII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

**Artículo 30.-** Será responsabilidad de la autoridad que realice la detención enviar la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas dentro de las seis horas posteriores a su detención, la cual deberá ser, como mínimo:

I. Nombre, sexo, edad, nacionalidad y lugar de procedencia de la persona detenida;

II. Fecha, hora y lugar en la que se realizó la detención;

III. Autoridad ante la cual se encuentra a disposición la persona detenida;

IV. Razón que motivó la detención; y

V. Lugar en el que se encuentra materialmente la persona detenida.

En caso de que la autoridad desconozca la identidad de la persona detenida, ya sea porque no fuere proporcionada por la misma o porque no recuerda sus datos de filiación o identidad, se deberá enviar la media filiación, señas particulares y demás datos que permitan su identificación.

**Artículo 31.-** Cuando se ponga a cualquier persona a disposición de una autoridad administrativa o judicial, ésta debe verificar que se haya enviado la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, y en caso que no se hubiere hecho, deberá hacerlo de inmediato.

**Artículo 32.-** Cuando haya algún cambio en la condición jurídica o ubicación física de la persona detenida, la autoridad que la ordene deberá de dar aviso de inmediato al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas para mantener actualizada la información.

**Capítulo V**
**Del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas**

**Artículo 33.-**. El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas desaparecidas y de aquellas de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

**Artículo 34.-** Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

III. Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de registro o información sobre personas desaparecidas;

IV. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas desaparecidas a partir de la siguiente clasificación:

V. Sexo;

VI. Edad;

VII. Nacionalidad;

VIII. Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la desaparición;

IX. Origen étnico;

X. Si se trata de personas con alguna discapacidad;

XI. Señas particulares; y

XII. Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;

V. Operar, regular y mantener el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

VI. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como la que le suministren las Entidades;

VII. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VIII. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las actividades de cooperación con otros países, para el intercambio de información relacionada con el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

IX. Establecer los procedimientos para la obtención y manejo de la información genética de personas, a efecto de integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que coadyuve a la identificación de personas desaparecidas.

X. Las demás que disponga esta Ley.

El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de personas desaparecidas.

**Artículo 35.-** Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

**Artículo 36.-** Las comunicaciones que se envíen al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas deberán de señalar:

**I.** El nombre completo de la persona desaparecida, edad, domicilio, procedencia, señas particulares y demás datos que permitan su identificación;

**II.** Fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez;

**III.** Fotografía con una antigüedad máxima de seis meses o, en su defecto, descripción detallada de los rasgos físicos al momento en que desapareció.

**IV.** Datos de la autoridad administrativa o judicial que conoció la denuncia o el reporte de desaparición, así como el número de expediente o averiguación previa en su caso, y,

**V.** Las autoridades obligadas deberán informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a ampliar la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

**Artículo 37.-** El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas funcionará las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe, para solicitar información respecto del procedimiento que deberá de seguirse para la búsqueda de una persona desaparecida.

El Registro Nacional será alimentado por autoridades competentes en los términos que el Reglamento de esta Ley establezca.

En el momento en el cual la autoridad tuviera conocimiento del paradero de una persona desaparecida, todos los datos de éste deberán ser borrados del Registro, previa notificación a los denunciantes y verificación por éstos de su localización, conservando la autoridad la información que tenga utilidad estadística.

**Artículo 38.-** La autoridad competente, previa autorización de los denunciantes, podrá requerir la colaboración de los medios de comunicación para transmitir la descripción de la persona desaparecida y, en caso de existir, la descripción de la o las personas a quienes se les atribuye la desaparición.

**Artículo 39.-** El Secretariado Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Consejo Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las estadísticas que arroje el Registro de Datos de Personas Desaparecidas. La información contenida en el informe será pública.

**Artículo 40.-** La reglamentación de la presente Ley establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, garantizando la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos de conformidad con la legislación aplicable.

## Capítulo VI
## Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos

**Artículo 41.-** El Registro Nacional de Perfiles Genéticos es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, de los perfiles genéticos de personas desaparecidas, de los familiares en primer grado en línea recta de las víctimas y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización o ubicación de personas desparecidas y su familia.

**Artículo 42.-** Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos;

III. Integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que contendrá los al registro alfanumérico personal elaborado sobre la base de secuencias de ADN que sean polimórficas en la población y que aporten exclusivamente información reveladora de la identidad de la persona y de su sexo de las siguientes personas:

a. De las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

b. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta ascendente materna y paterna de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

c. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta descendiente de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible, y

d. De los cuerpos o tejidos de personas encontradas de quienes se desconozca su identidad;

IV. Operar, regular y mantener el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

V. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, así como la que le suministren las Entidades Federativas;

VI. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Perfiles Genéticos, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VII. Realizar el cotejo de los perfiles genéticos con la totalidad de los perfiles contenidos en la base de datos, a los efectos de corroborar la existencia de un impacto identificatorio positivo;

VIII. Informar a la autoridad competente cuando se obtenga un impacto identificatorio positivo;

IX. Conservar el material biológico en un soporte adecuado, a los efectos de necesitarse la realización de una contraprueba;

X. Eliminar los registros de la base de datos del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y destruir el material biológico de donde se obtuvo dicho registro cuando sea ordenado por la autoridad judicial competente;

XI. Mantener estricta reserva respecto de la información contenida en el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, esta obligación que se extiende a todas aquellas personas que en razón de su función tengan conocimiento de su contenido y que subsistirá aún después de finalizada su relación con el Registro;

XII. Adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de modo que se evite su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar desviaciones de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado,

XIII. Las demás que disponga esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Perfiles Genéticos con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

**Capítulo VII**
**Del Procedimiento de Búsqueda de Emergencia**

**Artículo 43.-** Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas emitirán un procedimiento de búsqueda de emergencia a fin de que las unidades especiales, en el ámbito de su competencia realicen la búsqueda de personas desaparecidas siempre que tengan conocimiento del hecho, durante las primeras 72 horas siguientes a la realización del hecho, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a disposición de la persona desaparecida ante el ministerio público o la autoridad judicial que se encuentre en los supuestos de esta Ley.

Dicho procedimiento facultará a las unidades especiales de búsqueda el acceso inmediato a cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud públicos o privados, donde se presuma fundadamente que la víctima pudiera encontrarse.

En todos los procedimientos de investigación y búsqueda de personas desparecidas, el ministerio público competente garantizará la conservación de los indicios durante todo el procedimiento a través de una correcta implementación de la cadena de custodia.

**Capítulo VIII**
**De la Declaración de Ausencia por Desaparición**

**Artículo 44.-** La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima.

A falta de disposición expresa en esta ley se atenderá de manera supletoria en todo lo que beneficie y a solicitud de parte interesada, a las disposiciones aplicables en materia civil.

**Artículo 45.-** Están facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;

III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;

IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;

V. La pareja de la víctima que se encuentre bajo la figura del pacto civil de solidaridad u otra similar,

VI. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas.

VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil;

VIII. El Ministerio Público;

IX. Los organismos de protección de los derechos humanos.

**Artículo 45.-** Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.

Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

El Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá la averiguación con el objetivo de dar con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar en su caso la acción penal correspondiente.

En caso de que como resultado de la búsqueda e investigación se descubriera un fraude a la ley, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas quedará sin efecto.

**Artículo 47.-** Una vez concluido el plazo señalado en el artículo anterior, si el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, cualquiera de las personas e instituciones señaladas en el artículo 2º de esta Ley, podrán hacerlo.

**Artículo 48.-** Será competente para conocer el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil correspondiente al lugar de domicilio de la persona o sujeto legitimado para formular la solicitud.

**Artículo 49.-** La solicitud de Ausencia por Desaparición de Personas incluirá la siguiente información:

I. El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;

II. Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la desaparición;

III. La fecha y lugar de los hechos;

IV. El nombre y edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana;

V. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;

VI. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;

VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida.

VIII. Cualquier otra información que se estime relevante.

Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, así deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.

**Artículo 50.-** Recibida la solicitud, el Juez competente requerirá inmediatamente a las autoridades copias certificadas de las denuncias para que obren en el expediente para su análisis y resolución.

El Juez competente publicará la resolución sobre Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial Gubernamental de la entidad federativa de que se trate, así como en el portal de internet que se habilite para estos propósitos tanto en el ámbito federal como estatal y ordenará al Juez del Registro Civil competente la anotación marginal en el acta que corresponda. Los diarios de mayor circulación en el lugar de residencia de la persona desaparecida deberán publicar en tres ocasiones, con un intervalo de cinco días naturales, el extracto de la resolución que ordene el juez sin costo para los familiares.

El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición de Personas, aquel en el que se le haya visto por última vez, salvo prueba fehaciente en contrario.

**Artículo 51.-** El trámite del procedimiento se orientará por el derecho a la verdad y por los principios de gratuidad, inmediatez y celeridad. El Poder Judicial correspondiente erogará los costos durante todo el trámite, incluso las que se generen después de emitida la resolución.

**Artículo 52.-** La resolución del Juez Competente sobre Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, incluirá las medidas necesarias para garantizar la máxima protección a la víctima, a la familia y a las personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana.

Dichas medidas se basarán en la legislación local, nacional e internacional y podrán emitirse medidas urgentes, provisionales o de protección específica antes de la resolución definitiva.

**Artículo 53.-** La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos:

I. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez;

III. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

IV. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;

V. Salvaguardar sus derechos escolares;

VI. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida;

VII. Salvaguardar los derechos adquiridos y aquellos en los que tenía una expectativa de ejercerlos;

VIII. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo; y

IX. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente ley.

**Artículo 54.-** La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá efectos de carácter general y universal de acuerdo a los criterios del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre tomando en cuenta la norma que más beneficie a la persona desaparecida, a la familia, las personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana y a la sociedad.

**Artículo 55.-** La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de continuar las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.

A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente ley, se les dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva.

**Artículo 56.-** El Juez competente determinará a una persona que administrará los bienes de la persona desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albacea.

**Artículo 57.-** En el caso de las personas que han sido declaradas como ausentes por Desaparición de Personas se les otorgará la siguiente protección en materia laboral:

I. Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas;

II. Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad;

III. Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable;

IV. A los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable;

V. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a la persona.

VI. Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida, serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana.

VII. Los demás que determinen las autoridades competentes.

**Artículo 58.-** Los beneficiarios del trabajador a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de los beneficios y prestaciones hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona.

**Artículo 59.-** Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición de persona, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.

**Artículo 60.-** En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la declaración de ausencia por desaparición de persona, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.

**Artículo 61.-** La presente ley se interpretará de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y la legislación secundaria en la materia.

**Capítulo IX**
**De la Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño**

**Artículo 62.-** Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a lo establecido en esta ley, la Ley General de Víctimas, las leyes de las entidades federativas en materia de atención a víctimas, así como los protocolos

de atención y reparación específico que en el ámbito de sus competencias establezcan las instituciones encargadas de la atención a víctimas.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se reforma el sexto párrafo del artículo 15 y se adiciona un último párrafo al artículo 109 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15. …

…

…

…

…
Cuando, por las circunstancias del caso lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición de personas, el juez **ordenará el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición de Personas y** tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona.

**Artículo 109**. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese:

I. El acto reclamado;

II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;

III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y

IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso.

En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica.

**En los casos de que se trate de las conductas establecidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, podrán interponer la demanda de amparo los familiares de la víctima; pudiendo omitir expresar el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto.**

**TRANSITORIOS**

**Artículo Primero.-** La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo Segundo.-** A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la esta Ley contemple una descripción legal de una conducta delictiva que el Código Penal Federal contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre que las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

I. En la investigación de los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, el Ministerio Público efectuará la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades;

II. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y

III. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades.

**Artículo Tercero.-** Las autoridades competentes deberán emitir los reglamentos, protocolos y demás disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de noventa días, a partir de la publicación a que se refiere el artículo transitorio primero.

**Artículo Cuarto.-** El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá de tomar las medidas necesarias para migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas detenidas y personas desaparecidas al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo Quinto.-** El Ministerio Público, los jueces civiles y los defensores y asesores públicos deberán capacitarse conforme a este procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, para garantizar de manera adecuada una protección eficaz del derecho a la personalidad respectivo.

**Artículo Sexto.-** En relación a los casos de personas desaparecidas denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio Público correspondiente tendrá un plazo de treinta días para presentar la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas contado a partir del inicio de la vigencia del presente ordenamiento

**Artículo Séptimo.-** Las autoridades competentes tendrán un lapso no mayor a noventa días para dar cumplimiento al presente Decreto respecto del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y del Registro Nacional de Perfiles Genéticos.

**Artículo Octavo.-** Las autoridades competentes establecerán las partidas presupuestales necesarias para garantizar la instrumentación de la presente Ley.

**Artículo Noveno.-** Las autoridades competentes se coordinarán para emitir los protocolos correspondientes en materia de perfiles genéticos con base en los lineamientos establecidos a nivel internacional y las normas oficiales mexicanas, a los cuales se sujetarán las autoridades federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias.

**Artículo Décimo.-** En un lapso no mayor a noventa días, las autoridades competentes en materia de atención a víctimas emitirán los protocolos específicos para dar cumplimiento a la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición del delito de desaparición de personas de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en las leyes en la materia.

Dado en el salón de Pleno del Senado de la República, a 24 de marzo de 2015.

Sen. **Angélica de la Peña Gómez**.

1 http://www.idheas.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/19-03-15-BOLETIN-FINAL-GIEI-primera-visita-a-M%C3%A9xico-para-la-investigaci%C3%B3n-de-caso-Ayotzinapa.pdf

2 http://colaboracioncivica.org/esp/declaracion-de-ausencia-por-desaparicion/

3 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45641

4 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46884

5 Corcuera Cabezut, Santiago. *Los Estándares Internacionales en Materia de Desapariciones Forzadas. Análisis a partir del Caso Radilla Pacheco vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos*.

6 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Folleto informativo No. 6 (Revs.2) - Desapariciones forzados o involuntarias. Tomado de http://www2.0hchr.0rg/spanish/issues/disappear/members.htm#facts

7 Comité de Derechos Humanos. S. Jegatheeswarct Sarma y Sashi Kantra Rajan vs. Sri Lanka.

8 Tomado de http://alainet.org/active/11801&lang=es

9 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992.

10 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Aprobada por la Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994.

11 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.

12 Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.

13 Caso Gelman vs. Uruguay, "Edición Especial Boletín Trimestral de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resúmenes y extractos de las sentencias dictadas por la CIDH durante el año 2011", Ed. Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

14 Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Resolución de la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2009.

**El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez:** Gracias a usted, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

**4)** 16-04-2015
Cámara de Senadores.
**INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.
Presentada por el Senador Omar Fayad Meneses (PRI).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.
Diario de los Debates, 16 de abril de 2015.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS**

# DIARIO DE LOS DEBATES

## Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 16 de Abril de 2015

**(Presentada por el Senador Omar Fayad Meneses, con aval del grupo parlamentario del PRI)**

**El Senador Omar Fayad Meneses:** Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Vengo a esta tribuna con la intención de presentarles a todas y a todos ustedes una iniciativa con proyecto de Decreto para expedir una nueva ley general.

Y como la mayoría sabe, si pretendemos en este país expedir una ley de carácter general, habría que apegarse a lo que señala el artículo 73 de la Constitución, y hay una premisa fundamental, porque sobre el tema que vengo a platicar con ustedes, que es fundamentalmente un tema de derechos humanos, de protección de derechos humanos, y particularmente en el tema de desaparición forzada de personas, el imperativo categórico es que les encomiendo revisen, y a las comisiones dictaminen, a la brevedad que les sea posible, las iniciativas que han presentado varias compañeras y compañeros Senadores, a las que me uno, a las que me he sumado con compañeros de otros grupos parlamentarios, como es el caso de otra iniciativa que hoy mismo, por cuenta separada de ésta, vamos a presentar ante ustedes, Senadoras y Senadores como Angélica de la Peña, Gabriela Cuevas, Alejandro Encinas y un servidor, respecto de un tema que me parece quizá uno de los más relevantes en la agenda internacional de México, y el más importante en México en este momento.

Yo no sé si coincidan conmigo, pero el 26 de septiembre de 2014 marca un parteaguas en la historia de este país: la desaparición de 43 jóvenes normalistas rurales por parte de las autoridades municipales del ayuntamiento de Iguala, en el estado de Guerrero, ha puesto a reflexionar a todos en el país, y a pensar a todos en este Congreso, que resulta fundamental atender de manera precisa, inmediata, las debilidades del Estado mexicano.

Y sin haber hecho ejercicios de extrema rapidez, habiendo escuchado a la sociedad, habiendo escuchado a víctimas, habiendo trabajado en conjunto con quienes tienen que ver en este tema, tomamos la decisión de presentar esta importante iniciativa de reforma.

Hay que reformar, y ayer lo decía yo públicamente, vamos a reformar, estoy seguro porque conozco la voluntad de todas y todos ustedes, vamos a reformar el artículo 73 constitucional, para abrir la posibilidad de las facultades que tiene este Congreso de poder legislar en materia de leyes generales sobre la desaparición forzada de personas; estoy seguro que lo podemos lograr, que hay consenso, y vamos a invitarlos a que aceleremos y apresuremos una decisión que es muy importante para México y los mexicanos.

Les pido que lo analicen a la luz de ver junto con el tema de las desapariciones forzadas, aquellas conductas que se han incluido en tratados internacionales que obligan al Estado mexicano, que nos obligan a tipificar ciertas conductas como delitos.

Quiero señalarles que en estas iniciativas que hoy presentamos, queremos que se establezcan como mínimo tipos penales y sanciones, los supuestos de conexidad, atracción, delegación, coordinación y distribución de competencias para su investigación, para la persecución, para la sanción, pero que se tome en cuenta aquello de lo que México ha sido parte y está obligado en el derecho internacional.

Es por ello que anticipándome a la reforma del artículo 73, y pensando en que los grupos parlamentarios han presentado ya diversas iniciativas que tienen que ver con el tema, en el PRI pensamos lo mismo, y por eso hoy impulsamos esta posibilidad de expedir el Decreto de Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

Muchas cosas nos animaron en el camino, después de lo que he dicho, el fortalecimiento institucional, sin duda, pero una que debe ser muy importante para todas y para todos, tenemos que, de la experiencia que vivimos, hacer lo necesario para prevenir que nunca más vuelva a ocurrir, y para que, de ocurrir, reciba el procedimiento y la sanción necesaria y sea enfrentado el tema con claridad, y tenemos que dar esa claridad de la ley y para eso estamos aquí.

Hay que dejar establecidos todos los preceptos y protocolos que tengan que ver con el tema, en una ley que necesariamente debe ser de carácter general; los derechos humanos no son competencia de un orden de gobierno o de otro, no son un tema federal, o no son un tema estatal o no son un tema municipal, son de orden general, por eso hay que abrir la puerta con la reforma a la Constitución, que les pido a todas y a todos que aprobemos, y que aprobemos pronto, antes de que termine este periodo ordinario.

Y habrá que definir con claridad, y para eso esta Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, habrá que definir con claridad, ¿qué entendemos por desaparición forzada?

Ya se han dicho muchas cosas, conocemos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y creo que nosotros debemos de tener muy presente que al que arreste o detenga o traslade contra su voluntad a las personas, y que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma, ya sea por los agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados, por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, sin su autorización o su consentimiento, y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas, o a reconocer que éstas están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley, estará cometiendo un delito grave, que es la desaparición forzada de personas.

Es un tema delicado, importante, y que en ningún momento hemos soslayado. Como todas y ustedes saben, fue público, los expertos, los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidieron reunirse con algunas comisiones aquí en el Senado de la República.

Se reunieron con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y se reunieron con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.

Y si pudiera hacer yo un resumen y rescatar los muchos temas que tratamos y en los que debe de haber gran sensibilidad desde este órgano colegiado, es que nos hacían una pregunta para la que afortunadamente teníamos respuesta.

La pregunta era: ¿Cuándo van a legislar en materia de desaparición forzada de personas? Porque a juicio de los especialistas, es uno de los temas más relevantes para el fortalecimiento institucional para este país.

Y la respuesta de quienes estábamos ahí era, a estos especialistas en materia de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana, estamos listos. Están las iniciativas presentadas de diversos Senadores de diversos grupos parlamentarios, a la cual se suma hoy esta, y seguramente en los próximos días otra general por parte de mi grupo parlamentario, y conocemos de otros esfuerzos de apuntes que se están realizando, y sabemos que el gobierno de la República está haciendo un esfuerzo en el mismo sentido para que todas esas ideas y todas esas iniciativas puedan conjuntarse en una sola, que se llame: Gran Reforma en Materia de Derechos Humanos, Gran Reforma en Materia de Desaparición Forzada de Personas, para que en México, el 26 de septiembre de 2014 no vuelva a ocurrir, y para que si algo parecido ocurre, exista una fortaleza institucional para combatir todo lo que a todos nos indigna.

Espero que cuente con su respaldo y apoyo, y que se sumen a las iniciativas que se han presentado en esta materia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito **OMAR FAYAD MENESES**, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS**, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Hoy nuestro sistema jurídico acepta la preponderancia del derecho internacional como referente de la actuación del Estado mexicano, especialmente en el caso del reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos, así como para la provisión de un marco legal, orgánico y operativo para el acceso a la debida justicia en el caso de violaciones a los mismos, hasta conseguir castigo a los responsables y evitar la impunidad.

Esto sin duda es signo inequívoco de nuestro avance en la construcción de un estado democrático mucho más moderno, que da cabida a las nuevas generaciones de derechos, al tiempo que consolida las vías legales para la acceso y exigibilidad de los derechos sociales o civiles, y en general a nuevos y más eficaces instrumentos sustantivos y adjetivos a favor de los gobernados.

Pero no se trata de un asunto sencillo, porque para hacer una evaluación integral del cumplimiento de México respecto de sus compromisos derivados de los distintos tratados y convenciones en materia de derechos humanos, tenemos que hablar del ejercicio de derechos en rubros tan heterogéneos como la capacitación a cuerpos de seguridad para proteger la integridad y libertad de las personas o sobre el financiamiento de las viviendas en el país.

Es revisar los avances en el combate a la pobreza alimentaria, pero también sobre el empleo; es evaluar el avance de la igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a la educación, a la salud, y el ámbito laboral, así como para erradicar la violencia de género; al igual que garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad para garantizar su acceso a mejores niveles de vida. Eso entre muchos otros rubros.

En este sentido, el balance es también heterogéneo ya que como Nación hemos tenido avances significativos que registran tanto instancias nacionales como internacionales en la materia y que reconocen el fortalecimiento de todas las estructuras de derechos humanos en el país.

Existen numerosas reformas constitucionales entre las que destacan, la reforma en materia de derechos humanos de 2011, en materia de juicio de amparo y al sistema de justicia penal; la protección judicial de los derechos político-electorales y la acción de inconstitucionalidad en materia de derechos humanos.

Por otro lado, se reconoce el avance jurídico-institucional para la protección de los derechos de mujeres, personas con discapacidad y personas migrantes, entre otros grupos.

Ha habido un fortalecimiento de la autonomía y eficacia de los 33 órganos autónomos de derechos humanos que existen en todo el país.

Otro aspecto a destacar es un mayor acercamiento e interacción con la sociedad civil y mayores esfuerzos para proteger a las y los defensores de derechos humanos, a través de la instrumentación de las medidas cautelares dictadas por organismos nacionales o internacionales

El Estado mexicano en su conjunto, los tres poderes, han hecho un esfuerzo importante para que México cumpla sus compromisos en la materia.

Particularmente, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de las reformas estructurales y los diversos paquetes de reformas a leyes secundarias, así como mediante el fortalecimiento de políticas públicas y programas, busca hacer más asequibles para los mexicanos, los derechos civiles, políticos electorales, sociales, económicos, culturales y de grupos específicos.

Este Senado ha sido participe de reformas que dan una mayor certeza jurídica y protección a los ciudadanos en rubros como la igualdad, la no discriminación; la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información; la seguridad ciudadana; la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, el trabajo, la seguridad social; los derechos de la niñez, las mujeres, los discapacitados y los grupos indígenas.

La apertura democrática que se ha vivido en la gran mayoría de los países, la libertad de expresión y pluralidad ideológica que rige en el mundo, auspiciada por los avances tecnológicos de fácil acceso a la sociedad, la postura abierta e irrestricta adoptadas por los gobernante para facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, son algunos de los factores que han ido erradicando a los gobiernos autoritarios y limitando cada vez más a los gobernantes corruptos.

Con ello, se garantiza que las autoridades hagan prevalecer en su actuación los principios de legalidad, honradez, eficiencia, eficacia, transparencia e imparcialidad, tal y como lo mandata la Constitución y las leyes que de ella emanan; así como de los tratados internacionales que México ha suscrito, para proteger y hacer valer los derechos humanos de toda persona, más allá de credos, ideología, raza, género, preferencias sexuales y la situación económica y cultural.

Bajo estos criterios, los tres órdenes de gobierno de nuestro país, han basado su actuación en la protección de los derechos humanos, que mientras los amparan, los han tratado de fortalecer, estableciendo en su cuerpo normativo, las regulación que se debe seguir, ya que no estamos ante actos de buena fe, como pudiera parecer el ideal, los actos de autoridad, deben estar plasmados en ordenamientos legales que estructuren, regulen, fijen las pautas a seguir e incluso, contemplen los supuestos a las violaciones y establezcan las sanciones ya sea directamente en el cuerpo del ordenamiento, o bien a través de la vinculación con ordenamientos vigentes aplicables.

Ahora bien, se ha avanzado en esta regulación, pero no podemos hacer caso omiso al hecho de que quedan pendientes figuras de legislar, y entre estas destaca la de desaparición forzada de personas, un delito que lesiona gravemente a la sociedad, al interés público y al orden público, si se toma en consideración que el supuesto se da por la intervención directa o indirecta de servidores públicos, que rompen con el esquema de los principios que rigen la actuación pública más allá de actos de corrupción, sino que alcanzan el extremo más grave de la comisión de un delito en ejercicio de funciones y afectando los derechos fundamentales de las personas como lo son la libertad y la vida, con las agravantes del daño al entorno familiar y social, la tranquilidad social y el desarrollo físico, psicológico y emocional de todos aquellos que se ven afectados.

Los recientes acontecimientos ocurridos en Guerrero, ponen en la agenda el fortalecimiento de las instituciones jurídicas y orgánicas, para evitar que prácticas como ésta, se conviertan en una verdadera acción sistémica en nuestro país.

**Desaparición forzada**

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se producen desapariciones forzadas siempre que "se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley".

A partir del caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se puso en la agenda pública inmediata, la atención a los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas.

Recientemente nuestro país, presentó un informe sobre el avance del caso Ayotzinapa ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

El Gobierno de la República destacó la detención de 102 personas involucradas en los hechos; las labores del Grupo de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en materia de búsqueda, investigación y atención a víctimas; y las medidas anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en noviembre pasado, para fortalecer los instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos, a través de la presentacion próxima de iniciativas para dotar al Congreso de facultades para expedir leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; así como las leyes en la materia.

Así, derivado de la evaluación al informe de México el pasado febrero, dicho Comité emitió como recomendaciones, las siguientes:

● El Estado mexicano debe contar con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, para conocer la verdadera magnitud del fenómeno y adoptar políticas públicas para combatirlo con efectividad.

● El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas debe incluir información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada de forma confiable.

● El Estado debe asegurar la realización sin demora de una investigación exhaustiva e imparcial cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal.

● México debe adoptar las medidas legislativas para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, a nivel federal y estatal, como delito autónomo con penas para un delito de extrema gravedad.

● La existencia al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) de una unidad fiscal especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y personal capacitado.

● El Estado mexicano debe aprobar a la mayor brevedad posible una ley general sobre desaparición forzada.

En atención a estos resolutivos y encauzando las voces de organizaciones sociales y millones de mexicanos que pedimos una acción contundente para evitar la recurrencia de eventos tan lamentables como el de Ayotzinapa, su servidor trae a esta Soberanía el planteamiento precisamente de una Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

El Centro de Intercambio de Información sobre Desapariciones Forzadas, EDIEC por sus siglas en inglés (Enforced Disappearences Information Exchange Center) que como se autodescribe “es una colección de recursos de información en todos los ámbitos del fenómeno de desapariciones forzadas. Ha sido desarrollado por *Linking Solidarity,* uno de los programas de la organización de derechos humanos *Aim for human rights”* que recopila datos e información que permiten conocer el alcance del delito.

Para definirlo contempla lo señalado en:

a) En la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992, una desaparición forzada es “que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley “

b) La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, una desaparición forzada es “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de

información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes"

c) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define la desaparición forzada como "el arresto, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o conocimiento, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado".

d) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas de la Desaparición Forzada proporciona la siguiente definición del delito de desaparición forzada: "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley"

Partiendo de lo señalado, concluye con los tres elementos que como mínimo deben conjuntarse para la configuración del tipo y un cuarto, en la que el tipo penal recae sobre los particulares, sin que hasta el momento exista un consenso, pero que no debe dejar de tomarse en cuenta, ya que de manera indirecta, autoridades gubernamentales intervienen en las graves violaciones que recaen sobre los afectados:

Privación de libertad en cualquiera de sus manifestaciones

Negativa a reconocer la privación de libertad

Como consecuencia de los elementos mencionados, la sustracción de la persona desaparecida a la protección de la ley y a los derechos humanos reconocidos universalmente.

Desaparición como consecuencia de la acción directa del gobierno o con el conocimiento del mismo.

En un intento de clarificar, señala 8 supuestos, que si bien se han tratado de fijar como desaparición forzada, son materia de otras figuras, por lo que no se deben contemplar durante el momento de su regulación, siendo estas:

1. Personas que faltan a su domicilio

2. Detención de incógnito porque se reconoce su detención aunque por motivos fundados no se revela su identidad

3. Afiliación a grupos armados de oposición, considerada como desaparición voluntaria

4. Reclutamiento forzoso

5. Interpretación extraordinaria de la ley, para trasladar fuera del país a personas detenidas y someterlas a interrogatorios, que pudieran configurar el tipo en el caso de que se dieran los supuestos de la negativa de la autoridad

6. Delito de secuestro

7. Traslados ilegales por parte de grupos delincuenciales, pero que para configurar el tipo de desaparición forzada, se requiere la participación o conocimiento de autoridades gubernamentales

8. Ejecución extrajudicial, en las que en caso de que la autoridad niegue su paradero y no se conozca si ha sido asesinado, se considera desaparición forzada

La misma organización afirma que el daño no sólo se causa a la persona que es afectada directamente, sino que este incide en los familiares que se ven expuestos a consecuencias psicológicas, materiales y sociales:

Psicológicas durante el proceso de aceptación del hecho ya que “no hay una forma universal de duelo ni de llevar el dolor” a la vez que es recurrente la negación del hecho ante la incertidumbre generada.

Materiales por la pérdida del sostén económico, compartido o total, dejando la carga a la parte restante, que en muchos casos se dificulta por la negativa a contratarlos o mantenerlos en el trabajo, el tiempo que se emplea en la búsqueda no permite tener un trabajo estable, al cobro de pensiones y seguros al no existir un certificado de defunción y la imposibilidad legal de volver a contraer matrimonio

Sociales, por el rechazo que se puede generar en el entorno social de los familiares ya que se asume que la persona desaparecida ha tenido que hacer algo prohibido no hubiera recaído en el supuesto.

Durante las convenciones, se han considerado diversas obligaciones por parte del Estado; la protección, respeto y promoción de los derechos humanos para garantizar el disfrute pleno de ellos; la prevención como el remedio idóneo para evitar el fenómeno de las desapariciones forzadas; mantener vivo el recuerdo con conmemoraciones para evitar que las desapariciones forzadas caigan en el olvido y vuelvan a surgir; la reparación, no sólo en lo económico sino en la compensación de las necesidades de las víctimas y de sus familiares y; las exhumaciones para identificar a las personas que pudieran haber sido identificadas y los restos devueltos a sus familiares para un entierro digno y acabar con la incertidumbre.

Las organizaciones de derechos humanos, y en concreto las enfocadas al fenómeno de las desapariciones forzadas, señalan una serie de acciones en el campo legislativo que los Estados pueden asumir para inhibir y castigar el hecho, destacan la tipificación del delito en los códigos penales, expidiendo una legislación en concreto o adecuando procedimientos para demandas civiles y mecanismos administrativos. A esto añaden la creación de Comisiones de la Verdad y Reconciliación como organismos públicos con el objetivo específico de investigar las violaciones de derechos humanos en el campo de las desapariciones forzadas.

Bajo este criterio, tomando en consideración la evolución de los gobiernos democráticos que ante la apertura ideológica y pluralidad de pensamiento, y en un ejercicio de derecho comparado, se analizó la situación de la evolución legal en países hispanoparlantes, encontrando:

Colombia

Ley por medio de la cual se crea la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles

Que tiene por objeto crear la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles.

Argentina

Ley nº 24.321 certificado de “ausencia por desaparición forzada”

Expedida a fin de otorgar constancia de denuncia formal, con la que tramita en sede judicial, la declaración de sentencia de ausencia por desaparición forzada, de toda aquella persona que hubiera desaparecido involuntariamente de su domicilio o lugar de residencia hasta el 10 de diciembre de 1983.

En el artículo 2º de la Ley se define la desaparición forzada, señala que “a los efectos de esta ley se entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si esta hubiere sido alojada en lugares de detención, o privada bajo cualquier otra forma, del derecho a la jurisdicción. La misma deberá ser justificada mediante denuncia ya presentada ante autoridad judicial competente, la ex comisión sobre la desaparición de personas (decreto 158/83) o la subsecretaría de derechos humanos y sociales del ministerio del interior o la ex dirección nacional de derechos humanos.”

Facultando a presentarla a cualquier persona que tuviera un interés legítimo, considerando en este supuesto a familiares hasta el 4º grado de parentesco, una vez que se hayan cumplido los requisitos formales, consistentes en:

La denuncia puede realizarla cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

Datos filiatorios de la víctima (nº de d.n.i., partida de nacimiento, fotos, etc).

Acreditación del parentesco (partida de nacimiento, libreta de matrimonio, etc.)

Relato de los hechos, que incluya todo aquello que se pueda recordar, o se hubieran enterado en estos años, desde la desaparición, como el lugar de secuestro, fecha, personas conocidas de la víctima que hubieran sido detenidos, su militancia si la conocen, lugar de trabajo o estudio, etc.

Número de documento de identidad (dni, lc, le, ci) del familiar que realiza la denuncia.

Toda documentación o información sobre gestiones que hubiera realizado la familia, tales como denuncias en comisarías, habeas corpus, otros trámites judiciales, como presunción de fallecimiento, pedido de paradero, etc.

las secretarías y áreas de derechos humanos provinciales y municipales también actúan como órganos receptores de solicitudes remitiéndolas a la secretaría de derechos humanos.

Para la prosecución de este trámite no es necesario contar con patrocinio letrado, pero si para tramitar la declaración de ausencia por desaparición forzada, que se tramitará en la justicia en sede civil.

España

Si bien no contempla a la desaparición forzada bajo esa denominación, en el Código Penal Español en el capítulo de delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, señalan un supuesto que se acerca a la figura, aunque va en razón de detenciones ilegales, considerando que “La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.”

Chile

Ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas (Ley 20.337)

Considera desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del estado o personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado

Venezuela.

Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo

De conformidad con lo señalado por el propio texto es una ley que “tiene por objeto establecer los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad y sancionar a los responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, tales como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violaciones, lesiones físicas, psíquicas y morales, privaciones arbitrarias de libertad, desplazamientos forzados de personas, expulsiones, deportaciones o exilios arbitrarios, violaciones de domicilio, hostigamientos, incomunicaciones, aislamientos, difamaciones e injurias, perjuicio patrimonial, represiones masivas urbanas y rurales, simulación de hechos punibles o procedimientos administrativos fraudulentos, que como consecuencia de la aplicación de políticas de terrorismo de estado, fueron ejecutados por motivos políticos contra militantes revolucionarios y revolucionarias, luchadores y luchadoras populares víctimas de la represión, quienes perseguían el rescate de la democracia plena, la justicia social y el socialismo, así como la memoria histórica de tales hechos y la

reivindicación moral, social y política al honor y a la dignidad de las víctimas de la represión que se generó, por parte del estado venezolano, durante el período transcurrido entre los años 1958 a 1998."

Por otra parte, existen países, que no contemplan una legislación como tal, pero que lo plasman como delito en los ordenamientos penales, destacando a: Bolivia desde el año 2006, Cuba, Ecuador y Panamá; así como otros, que si bien no la contemplan en la legislación doméstica, se han adherido a los tratados internacionales de la materia, comprometiéndose a castigar el delito, entre ellos se encuentran Costa Rica y Nicaragua.

Destacando países que no contemplan la figura de desaparición forzada como El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Perú y República Dominicana.

De todo lo anterior, se observa que a nivel internacional, si bien se ha avanzado en la configuración del delito, existen aún omisiones que deben corregirse.

Nuestro país, se ha enfocado a plasmar legalmente a la desaparición forzada, conforme a los estándares fijados en los tratados internacionales y a la situación que se vive en la actualidad, considerando dos posibles tendencias legislativas, la primera con su inclusión como tipo penal en el Código Penal y la segunda con la expedición de una ley especial de la materia.

Incluirla en el Código Penal, si bien facilitaría su persecución y castigo, queda muy abierto el tipo penal y restringida su regulación en otros aspectos, de lo que se desprende la necesidad de crear una ley especial que permita la preeminencia sobre otras normas por la gravedad del delito y el ejercicio abusivo de funciones amparados en el poder público, ya que si bien, el delito de desaparición forzada no se contempla para particulares por ser un delito de autoridad en el ejercicio de sus funciones, se debe considerar que los particulares pueden incurrir en este, ya sea por apoyo a autoridades o por llevarlo a cabo con conocimiento de las autoridades y la omisión en su persecución, a la vez que es necesario establecer protocolos de búsqueda y mecanismos de control, ya que en muchos lugares, las autoridades no llevan un registro de personas que han sido afectadas por desapariciones forzadas, desconociéndose el impacto del delito, para fijar posturas acordes con la situación.

En nuestro país, en el tema de desaparición forzada, se contempla el fundamento legal en el artículo 29 en relación con los casos en que el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso o en su caso de la Comisión Permanente, restrinja o suspenda el ejercicio de los derechos o las garantías, prohibiendo expresamente que en el decreto que se emita, entre otras acciones, el de la desaparición forzada.

En el texto constitucional, no existe la facultad al Congreso para emitir leyes en materia de desaparición forzada, lo que pudiera inhibir la presente ley, pero en coherencia, es inevitable hacer mención de la iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a fin de modificar los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada, que al texto señalan:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ...

Artículo 20 fracción V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, desaparición forzada de personas o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para expedir:

Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. …

Por otra parte, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, presentó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 73 que señala:

Artículo 73. …

I. a XX. …

XXI. Para expedir:

Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

Lo que dota de congruencia, una vez aprobadas, la expedición de esta reforma.

Es conveniente señalar, a pesar de observarse a simple vista, que nuestro país, está obligado a respetar los tratados internacionales que ha suscrito, máxime en materia de derechos humanos y realizar las adecuaciones en la legislación doméstica, siendo el tema de desaparición forzada, uno de los grandes pendientes.

Es de mención la recomendación de la emisión de declaración de desaparición a solicitud de parte que tenga interés jurídico en razón del parentesco para que el Ministerio Público realice la solicitud y se declare por juez competente, para que proceda como declaración forzada, figura que tiene su origen en la declaración de ausencia, por la que cuando una persona no se encuentra en su domicilio ni en su lugar de residencia, sin tener contacto con las personas con las que mantiene relación y que ponen en duda su existencia o si vive o muere, es declarada como ausente para evitar la incertidumbre jurídica en la que quedan sus derechos; motivando la declaración de desaparición cuando, la ausencia se presupone por causas ajenas del afectado.

Es de mención la recomendación de la emisión de declaración de desaparición a solicitud de parte que tenga interés jurídico en razón del parentesco para que el Ministerio Público realice la solicitud y se declare por juez competente, para que proceda como declaración forzada, figura que tiene su origen en la declaración de ausencia, por la que cuando una persona no se encuentra en su domicilio ni en su lugar de residencia, sin tener contacto con las personas con las que mantiene relación y que ponen en duda su existencia o si vive o muere, es declarada como ausente para evitar la incertidumbre jurídica en la que quedan sus derechos; motivando la declaración de desaparición cuando, la ausencia se presupone por causas ajenas del afectado.

En relación con la declaración, el estado de Coahuila presenta grandes avances con la emisión de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del estado de Coahuila de Zaragoza, vigente desde el 20 de mayo de 2014, y que sirve de base para la figura a regular en la presente Ley.

No es de omitir, que si bien existe la tendencia de configurar el delito de desaparición involuntaria, en razón de personas que por actos de particulares, sin el conocimiento, intervención o bajo una supuesta protección de alguna autoridad, esta no debe ser considerada en el presente ordenamiento, ya que es un delito contemplado en el Código Penal Federal, bajo las figuras de privación ilegal de la libertad en sus distintas modalidades una vez que se tiene conocimiento del hecho, y en sentido contrario, aunque se dé un matiz de indiferencia, no puede considerarse como un delito cuando es alta la probabilidad de que sea una desaparición voluntaria, premisa fortalecida por el hecho de que entre particulares no puede darse la violación a los derechos humanos.

Bajo este mismo tenor, aunque el ideal es la promulgación de una ley general, como es la base de las propuestas a fin de armonizar la figura en los ámbitos federal, estatal y municipal, no existe el fundamento legal para expedirla ya que se requiere la modificación al artículo 73 y facultar al Congreso para expedir esta ley, situación que se está subsanando con las diversas propuestas de reformas constitucionales en la materia.

Considerando por último, que las iniciativas en comento para realizar esta adecuación de la legislatura doméstica a las recomendaciones emitidas en materia de desapariciones forzadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y reconociendo el gran esfuerzo que se ha realizado, se busca con la propuesta que se presenta, una punto intermedio entre las tendencias ideológicas de quienes las emiten y suscriben, a fin de buscar consensos que permitan que la promulgación de esta ley, transite de manera expedita.

Por ello y con fundamento en el artículo 73 fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el proyecto de iniciativa de ley que aplique para el delito de desaparición forzada en el ámbito federal, persiguiendo a la vez el ideal de que sea un modelo a seguir para la expedición de leyes a nivel local, y que con la aprobación de la reforma constitucional para dotar al Congreso de la facultad de expedir una ley general, esta sirva como base para que el delito de desaparición forzada y las reglas establecidas, se den en todo el territorio federal.

En esta misma línea, también es de considerar que una propuesta del alcance de las presentadas en la materia, cuentan con un alto impacto legislativo, que requiere de manera imperiosa una serie de reformas a distintos ordenamientos, mismas que han sido previstas en las iniciativas expuestas, por lo que sería ociosa repetirlo en la presente propuesta.

El proyecto de Ley busca sentar las bases para cumplir con una de las principales recomendaciones en el orden internacional y para atender una de las mayores preocupaciones de la sociedad mexicana para evitar, erradicar y en su caso sancionar los casos de desaparición forzada, con la emisión de éste marco normativo específico.

Busca instaurar los mecanismos legales y de actuación de la autoridad para que ante la sola presunción de la desaparición forzada de una persona, se investigue y atienda el caso de forma inmediata.

De igual forma, atendiendo las recomendaciones de organismos internacionales como los ya citados, se establece la tipificación del delito de desaparición forzada como autónomo y se establecen sanciones que van desde 2 hasta 60 años de prisión a quien conozca de un caso de desaparición forzada y no lo denuncie y hasta el extremo opuesto para los responsables de casos en donde la víctima pierda la vida.

De igual forma destaco el incremento de las penas en una mitad, en casos en donde la víctima sea menor de edad o adulto mayor, tenga incapacidad, sea mujer en estado de gravidez, o pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena.

Se establece el proceso para la emisión de una Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas y a partir de ella, proceder a la investigación inmediata de un caso de desaparición forzada hasta su resolución y el castigo a los responsables.

Asimismo, atendiendo a las recomendaciones para dejar claro que se trata de un delito que lesiona ampliamente el tejido social, quien cometa el delito de desaparición forzada no tendrá derecho a conmutar la pena, a la concesión de la remisión parcial de la pena, a tratamientos preliberatorios, libertad preparatoria o cualesquiera otros beneficios que las leyes respectivas concedan a los sentenciados.

Y un aspecto que sin duda a todos nos interesa, es la obligación para que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno brinden las medidas de protección y asistencia a las víctimas, testigos y personas que sean afectadas por la comisión del delito de desaparición forzada, en plena concordancia con ordenamientos como la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley General de Víctimas.

Se cumple además con la recomendación para fortalecer la disponibilidad de información estadística certera, mandatando que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas precise cuales son los casos de desaparición forzada y los integre en un Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares; para fortalecer los procesos de identificación de víctimas entre otros aspectos.

De igual manera se precisa que la sentencia condenatoria por la comisión de este delito, contemple la reparación integral del daño a las víctimas y a sus familiares.

Confío en que en su momento, este proyecto, sea enriquecido con su aporte y que juntos mantengamos a México en el camino de la transformación y el perfeccionamiento de nuestro estado de derecho.

Una ley como ésta, es una enorme oportunidad para dar una respuesta contundente del Estado mexicano a un fenómeno que no puede tener cabida, y para evitar la tentación de que ante las acciones del crimen organizado y de los delincuentes comunes, se propongan soluciones que restrinjan los derechos en lugar de expandirlos, particularmente en el caso de los derechos humanos.

Sigamos haciendo una construcción progresiva y sin regresiones de nuestros derechos, tal y como aspiramos las y los mexicanos.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Desaparición Forzada para quedar como sigue:

**Artículo Primero. Se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.**

**LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.**

**Capítulo I**

**Disposiciones Generales**

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés público y social, y de observancia general en toda la República

Artículo 2. El objetivo de la ley es regular las acciones derivadas de la comisión del delito de desaparición forzada a fin de inhibir la conducta y en su caso investigarla y sancionarla, así como establecer la creación del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares.

Artículo 3. Para todo lo no contemplado en esta Ley en relación con el delito de desaparición forzada de personas, se aplicará supletoriamente el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables

Artículo 4. El Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, instaurarán programas permanentes y los mecanismos destinados a:

I. La orientación y asistencia a la población civil de sus derechos y las acciones tendentes para prevenir la desaparición forzada

II. La profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública sobre los derechos de las personas

Artículo 5. Para la interpretación de la ley se entenderá por:

I. Autoridad. Todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho y que por lo mismo en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza que disponen.

II. Acto de autoridad. Cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativamente, unilateral o coercitivamente.

III. Debido proceso. Conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

IV. Derecho a la memoria. El derecho irrenunciable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

V. Derecho a la verdad. El derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos, así como a sus familias, en el marco del sistema jurídico interno de cada Estado, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionados con las violaciones.

VI. Desaparición forzada. La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa de la autoridad a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

VII. Ley. Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas

VIII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanentemente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.

IX. Presunción. Consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello.

X. Registro. Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares

XI. Servidor Público. A los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal.

XII. Víctima. Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito.

**Capítulo II**

**Sobre la Desaparición Forzada**

Artículo 6. Comete el delito de desaparición forzada el servidor público que en el ejercicio de sus funciones, o persona o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o el hecho sea del conocimiento de alguna autoridad federal, estatal o municipal, prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona y con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Artículo 7. Ante la presunción de que se haya configurado la desaparición forzada de personas o por simple denuncia de hechos, el Ministerio Público Federal actuará de oficio en la investigación y en su caso persecución.

Artículo 8. A quien cometa el delito de desaparición forzada no tendrá derecho a conmutar la pena, a la concesión de la remisión parcial de la pena, tratamientos preliberatorios, libertad preparatoria o cualesquiera otros beneficios que las leyes respectivas concedan a los sentenciados.

Los imputados por la comisión del delito de desaparición forzada, estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso penal.

Artículo 9. Son autores o participes del delito los que acuerden o preparen su realización, los que los realicen por si individualmente o en conjunto, y quien lo realice a través de otra persona sirviéndose de su puesto, encargo o función como servidor público.

Artículo 10. La imposición de penas por la comisión del delito de desaparición forzada, será independiente de otras responsabilidades en que puedan incurrir los servidores públicos, de conformidad con las leyes vigentes.

**Capítulo III**

**De las variantes del delito de desaparición forzada de personas**

Artículo 11. En relación con el delito de desaparición forzada, se le aplicarán:

I. De 2 a 5 años de prisión y de cien a doscientos días multa a quien sin ser autor o participe, tenga conocimiento de la comisión del delito de desaparición forzada y no lo denuncie

II. De 10 a 20 años de prisión y de doscientos a quinientos días multa al propietario, poseedor o a quien tenga bajo su cargo el o inmuebles públicos o privados, y que por comisión u omisión permita que en ellos se oculte a la víctima del delito

III. De 25 a 40 años de prisión y de mil a dos mil días multa al superior jerárquico que sin ser participe, tenga conocimiento y no tome las medidas necesarias para evitarlo o al particular que intervengan en la comisión del delito.

IV. De 40 a 60 años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa si la víctima hubiera sido sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o hubiera sido violentada sexualmente.

V. De 50 a 60 años de prisión y de dos mil quinientos a cuatro mil días multa si de la comisión del delito la víctima perdiera la vida o sufriera incapacidad parcial o total permanente

Artículo 12. Las penas a que se refiere el artículo anterior, se incrementarán en una mitad:

I. Si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60 años, o persona con discapacidad

II. Cuando la víctima sea mujer en estado de gravidez, miembro de algún pueblo o comunidad indígena o madre o padre de hijos menores de edad.

III. Cuando se realicen actos para ocultar o desaparecer el o los cadáveres de las víctimas del delito.

IV. Que la persona desaparecida sea testigo o víctima de algún hecho punible

V. Que con la desaparición forzada se pretenda impedir o desvirtuar alguna investigación o asegurar la impunidad de otro delito

VI. Que el delito se cometa como medida de coerción para obligar a otra persona a que haga o deje de hacer algo.

Artículo 13. La tentativa punible del delito de desaparición forzada será sancionada de conformidad con lo estipulado en el Código Penal Federal

**Capítulo III**

**De la Declaración de Desaparición Forzada de Personas**

Artículo 14. La Declaración de Desaparición Forzada de Personas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición forzada y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.

Artículo 15. Podrán solicitar la declaración de desaparición de personas, todos aquellos que demuestren tener un interés jurídico, además de:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que mantenga un estado civil similar de conformidad con las leyes de cada entidad federativa o bien su relación sea afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;

III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;

IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;

V. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas.

VI. Las Organizaciones de la Sociedad Civil;

VII. El Ministerio Público;

Artículo 16. Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.

Transcurrido el término de 20 días naturales, el Ministerio Público evaluará si la presunción o los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición forzada. De ser así, el Ministerio Público presentará inmediatamente la solicitud de Declaración de Desaparición Forzada de Personas ante un Juez de Primera Instancia competente, quien en un plazo no mayor de diez días naturales, dictará las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

Artículo 17. Una vez concluido el plazo señalado en el artículo anterior, si el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, cualquiera de las personas e instituciones señaladas en el artículo 3º de esta Ley, podrán hacerlo.

Artículo 18. Son competentes para conocer la declaración de Desaparición Forzada de Personas los jueces de primera instancia en Materia Penal del lugar de residencia o del que se tengan las últimas noticias ciertas de la ubicación de la posible víctima de desaparición forzada.

Artículo 19. La solicitud de Declaración de Desaparición Forzada de Personas incluirá la siguiente información:

I. El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;

II. Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la desaparición;

III. La fecha y lugar de los hechos;

IV. El nombre y edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana;

V. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;

VI. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;

VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida.

VIII. Cualquier otra información que se estime relevante.

Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, así deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 20. Una vez emitida la Declaración de Desaparición Forzada de Personas por el Juez competente, el Ministerio Público iniciará inmediatamente la investigación por el delito de desaparición forzada de conformidad con la legislación vigente.

**Capítulo IV**

**De la Protección de las personas**

Artículo 21. La Procuraduría General de la República y los organismos públicos federales, estatales y municipales en la medida de sus atribuciones, brindarán todas las medidas de protección y asistencia a las víctimas, testigos y personas que sean afectadas por la comisión del delito de desaparición forzada, de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley General de Víctimas y cualquier otra disposición legal vigente.

**Capítulo V**

**De los registros de las personas desaparecidas**

Artículo 22. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deberá contener de manera explícita el señalamiento de las personas que sean afectadas o exista la presunción de ser afectadas por el delito de desaparición forzada.

Artículo 23. Ante la presunción de que alguna persona sea víctima del delito de desaparición forzada, la autoridad deberá informarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**Capítulo VI**

**Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares**

Artículo 24. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas deberá contar un Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares, que tendrá por objeto:

I. Salvaguardar y facilitar el acceso a datos que permitan identificar a las víctimas del delito de desaparición forzada y cotejarlas con el de sus familiares

II. Asistir a las instancias de investigación del delito

III. Asistir a las instancias judiciales en sus resoluciones

IV. Garantizar los derechos de las víctimas y de sus familiares en cuanto al:

a) Derecho a la verdad

b) Derecho a la memoria

c) Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y de sus derechos humanos

d) Derecho al debido proceso

Artículo 25. Las muestras biológicas que se recaben para el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares deberán ser entregadas por decisión propia o de manera voluntaria a petición de autoridad competente, autorizando de manera expresa los fines a los que se podrán aplicar los resultados.

La autoridad encargada de la toma de muestras deberá entregar una constancia de esta diligencia a la persona que la suministró.

Artículo 26. La información obtenida de las muestras genéticas, será considerada con carácter de información confidencial, en términos de la Ley en la materia y su uso será exclusivamente con fines de identificación de personas desaparecidas. Una vez obtenida la información de la misma, la autoridad la está obligada a la destrucción inmediata de la muestra, resguardando la información que se hubiere obtenido, informándoselo por escrito a quien la haya suministrado.

**Capítulo VII**

**De la reparación**

Artículo 27. La sentencia condenatoria que se dicte por los delitos de desaparición forzada, deberá contemplar la reparación integral del daño a las víctimas y a sus familiares, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten y deben considerar la cuantificación material, las consecuencias psicológicas, laborales y sociales, la afectación al proyecto de vida.

Transitorios

**Artículo Primero.** La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo Segundo.** El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de esta ley en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de abril del año 2015.

Sen. **Omar Fayad Meneses.**

**El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez:** Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA POR PARTICULARES.**

**SEN. ROBERTO GIL ZUARTH**
**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA**
**H. CÁMARA DE SENADORES LXIII LEGISLATURA**
**PRESENTE**

Las que suscriben, Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y Layda Sansores San Román, senadoras de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA POR PARTICULARES, al tenor de la siguiente:

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desaparición forzada de personas fue iniciada por el régimen nazi de Alemania a partir de 1941, con la promulgación del decreto "Noche y niebla", decreto que consistía en reprimir y eliminar físicamente a los opositores al régimen nazi, los cuales debían ser detenidos durante *"la noche y la niebla"* para no dejar testimonio de las detenciones y tampoco ninguna información acerca de su paradero. Esta práctica de desarrollaría en el contexto global de la guerra fría, en la segunda mitad del siglo XX. Y se extendería a toda América Latina.

El delito de desaparición forzada de personas está tipificado como un delito y como una grave violación a los derechos humanos en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos porque se ejecuta con todas las ventajas que da el abuso del ejercicio del poder público, ya que el sólo hecho de desaparecer a una persona es un acto aberrante, con características infrahumanas.

La desaparición forzada tiene carácter múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo y se encuentra plasmada en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte, por lo cual, el Estado mexicano está obligado, de acuerdo al Artículo 1º Constitucional, en su párrafo segundo, a cumplir con los compromisos y obligaciones que ha contraído en materia de derechos humanos.

En este sentido el Estado mexicano también está obligado a tomar en cuenta dentro de la presente Ley, que la desaparición forzada, en el ámbito de los derechos humanos, está clasificada como un delito de lesa humanidad cuando es cometida de forma "generalizada o sistemática"[1].

La desaparición forzada además de ser una grave violación a los derechos humanos es un delito cometido por el Estado; planeado, ordenado, ejecutado y supervisado por agentes del Estado que debieran proteger a la población. Por ello, debe ser perseguido y castigado sin importar la jerarquía política, fuero[2], ni la condición económica de quienes la cometen, penalizando tanto a sus autores materiales como a aquellos que lo ordenan.

En América Latina, la práctica de las desapariciones forzadas de personas se inició a finales de los años sesenta en Guatemala y Brasil; cabe señalar que el término utilizado fue el de detenido-desaparecido el cual se utilizó por primera vez por las organizaciones civiles latinoamericanas, para posteriormente surgir el concepto de desaparición forzada.

A lo largo de dos décadas, el método se extendió en Latinoamérica en el Salvador, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití, Chile y México.

En México, durante décadas, se implementó una política de Estado para reprimir la oposición y disidencia política. A las personas detenidas y acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros, o por sospechas de ello, no se les presentaba ningún mandato judicial, eran sometidas sistemáticamente a torturas y posteriormente algunas fueron enviadas a cárceles clandestinas, otras fueron ejecutadas extrajudicialmente y otras más fueron desaparecidas de manera forzada, estatus que conservan hasta la actualidad y que afecta todavía a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. A este periodo ominoso de nuestro país se le reconoce como la etapa o el periodo de la "guerra sucia".

Sobre ese periodo, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el expediente denominado Radilla Pacheco versus México, en el cual los familiares del señor Rosendo Radilla demandaron al Estado mexicano por su desaparición desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejército en Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero.

---

[1]Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Artículo 5. La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable.

[2] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, Valentina Rosendo Cantú y otra vs México; 2 de agosto de 2009.

La Corte Interamericana resolvió que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, por lo que deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea y continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales.

Desde 1999 se han presentado diversas propuestas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada en nuestro país. Sin embargo, sólo después de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Búrgos" de Ayotzinapa, que la problemática de la desaparición forzada en México cobra relevancia para el Estado mexicano.

La reforma constitucional al Artículo 73, es uno de los primeros pasos que se han dado para atender el problema de la desaparición forzada en México, la cual permite que la Cámara de Diputados pueda legislar en materia de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

Sí bien es cierto que el incremento de las desaparición forzada en nuestro país se dio en el marco de la declaratoria de "guerra contra el narcotráfico" hecha por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)[3] cabe señalar que las desapariciones forzadas siguen ocurriendo en la actual administración federal en la mayoría de los estados de la república.[4]

La desaparición forzada en México es una práctica que se ha extendido a sectores de la población que no están organizadas y que no representan una oposición política al Estado: migrantes, mujeres, personas menores de edad y jóvenes. Aunado a este hecho y a la impunidad en materia de justicia, México enfrenta desapariciones cometidas por particulares, conducta que ha sido posible por la omisión del Estado respecto a sus obligaciones de brindar seguridad e investigar y sancionar a los responsables.

---

[3] La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada registra que del 2006 al 2012, ocurrieron 53 casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de los derechos humanos y 2 casos de desaparición forzada en contra de miembros de grupos insurgentes. http://comitecerezo.org/IMG/pdf/informeweb.pdf Pág. 93

[4] La campaña Nacional contra la Desaparición Forzada registra 29 personas defensoras de derechos humanos víctimas de desaparición forzada en los primeros 18 meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto. http://comitecerezo.org/IMG/pdf/informeweb.pdf Pág. 96

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en sus observaciones finales[5] presentadas el 13 de febrero del 2015, después de evaluar al Estado mexicano, muestra su preocupación al observar que las desapariciones forzadas son generalizadas, demostrándose con esto que éstas siguen cometiéndose en mayor grado y en diferentes modalidades en el presente sexenio, por lo tanto cada vez es más urgente atender las demandas legítimas de las familias en la creación de una Ley General que Prevenga, Investigue, Sancione y Repare tanto la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometidas por particulares.

Para que esta Ley General cumpla con los estándares internacionales y con la aprobación de las organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas y sociedad en general, deberá de tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias y del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU; las Sentencias de las Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Caso Ayotzinapa y, las demandas hechas por miles de familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas.

Por ello, la presente Ley General busca dar cumplimiento con las demandas, que desde hace décadas han hecho familiares de víctimas de desaparición forzada, familiares de víctimas de desaparición de personas, así como dar cumplimiento con las recomendaciones hechas recientemente por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa y El Comité contra la Tortura de la ONU[6].

Por lo anterior, y ante la necesidad de concretar una propuesta de ley general en la materia, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México[7],

---

[5] El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención (CED/C/MEX/1) en sus sesiones 119.ª, 120.ª y 121.ª (CED/C/SR.1119, 120 y 121), celebradas los días 2 y 3 de febrero de 2015.

[6] Observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptada por el Comité en su 49º período de sesiones (29 de octubre a 23 de noviembre de 2012). "El Comité insta al Estado parte a continuar la puesta en práctica de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, y en particular a:
a) Aprobar una ley general sobre las desapariciones forzadas;"

[7] Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada conformada por: Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos", Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)

organizaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, organizaciones populares, expertos en la materia[8] y sociedad civil, presentaron el pasado jueves 3 de septiembre ante distintas senadoras y senadores, una propuesta ciudadana que busca contribuir a la elaboración de una ley general en materia de desaparición forzada de personas

De esta forma, quienes suscribimos el presente proyecto, senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios, con el objetivo de darle formalidad e incluir el sentir ciudadano en el proceso de discusión y dictaminación de una ley general en la materia, decidimos retomar y presentar, en sus términos el contenido de la propuesta referida, la cual incluye el sentir y el conocimiento de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de desaparición forzada y se encuentra precedida por las exigencias de miles de víctimas al acceso a la justicia y a la verdad.

Por las razones antes expuestas, se somete a la Soberanía el siguiente:

## PROYECTO DE DECRETO

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se expide la LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA POR PARTICULARES, para quedar como sigue:

**LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA POR PARTICULARES.**

**Título Primero**
**Disposiciones Generales**
**Capítulo Único Generalidades**

**Artículo 1.º** La presente Ley general es de orden público de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o, párrafo tercero, artículo 17, y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano.
La Ley general tiene como objetivo:

**I.** Proteger a toda persona contra el delito desaparición forzada de personas,
**II.** Su sanción

[8] Aportaciones de los especialistas en el tema de desaparición forzada: Gabriella Citroni, Santiago Corcuera y Sandino Rivera

III. Prevención
IV. Reparación integral y erradicación de éste delito de lesa humanidad.
V. Así como proteger a toda persona contra el delito de desaparición de personas cometida por particulares, su sanción, prevención, reparación integral y erradicación.

Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es Parte, la jurisprudencia, sentencias y recomendaciones de los órganos de protección de los derechos humanos creados por Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

**Artículo 2 º.** El Estado mexicano está obligado a:

I. No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas ni aun en estados de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.
II. No permitir, ni tolerar la desaparición de personas cometida por particulares. En el caso de que esto suceda, el Estado está obligado a investigar y sancionar a todos los responsables.
III. En los dos delitos mencionados en los dos párrafos anteriores, el Estado mexicano también está obligado a:

   a. No practicar ni permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas migrantes dentro del territorio nacional, de personas menores de edad, mujeres y mujeres embarazadas, indígenas, personas adultas mayores, personas defensoras de derechos humanos o cualquier otro grupo que por sus características se encuentren en estado vulnerable.
   b. No permitir la desaparición de personas cometida por particulares en contra de migrantes dentro del territorio nacional, de personas menores de edad, mujeres y mujeres embarazadas, indígenas, personas adultas mayores, personas defensoras de derechos humanos o cualquier otro grupo que por sus características se encuentren en estado vulnerable.

IV. Realizar la búsqueda nacional y trasnacional de las personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares sin demora alguna. Así como continuar con la búsqueda nacional y trasnacional de las personas que se encuentren desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares al momento que entre en vigor la presente Ley hasta que no se establezca la suerte y paradero de las víctimas.

V. Garantizar en todo momento la seguridad física y psicológica de los familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, así como de las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones, testigos, personas o grupos de personas que se encuentren en riesgo como consecuencia de los delitos descritos en esta Ley.

VI. Procesar y sancionar de acuerdo a la gravedad del delito a las y los autores, cómplices y encubridores de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares, sin importar jerarquía, fuero, estatus económico y político.

VII. Cooperar con las entidades federativas en la prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

VIII. Promover las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole que sean necesarias para cumplir con lo previsto en la presente Ley.

IX. Establecer medidas de reparación integral del daño para las víctimas y familiares afectadas por los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, sin importar la nacionalidad de las víctimas y sus familiares.

## Título Segundo
## De los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas cometida por particulares

### Capítulo Primero
### De los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares.

Los delitos previstos en esta ley serán aplicables en todos los estados la República con pleno respeto a sus ámbitos competenciales.

Se derogan todas las legislaciones aprobadas en materia de desaparición forzada y desaparición de personas y se tomará la presente Ley como única aplicable en todo el Territorio Nacional.

**Artículo 3º.** Los delitos descritos en la presente Ley, serán calificados como graves y no son susceptibles de indulto, amnistía, fuero o figuras análogas que tengan por efecto eximir a los presuntos actores de cualquier sanción penal, ni se le considerará de carácter político para los efectos de extradición.

**Artículo 4º.** Las conductas delictivas descritas en la presente Ley se perseguirán de manera inmediata por cualquier Ministerio Público de los tres niveles de gobierno, en cuanto tengan conocimiento de la comisión de los delitos de desaparición forzada o desaparición de personas cometida por particulares aunque

no haya denuncia interpuesta, a petición de parte ofendida o denuncia anónima, y se considerarán de carácter permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la o las víctimas, por tanto, los delitos previstos en esta Ley serán imprescriptibles.

**Artículo 5º.** La Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados y el Distrito Federal, en los términos de sus respectivas Leyes y Reglamentos, estarán facultadas para que oficiosamente y/o mediante petición de parte ofendida denuncie y coadyuve ante el Ministerio Público en la búsqueda de los casos de desaparición forzada y desaparición de personas.

**Artículo 6º.** Los familiares y representantes legales de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, tienen el derecho a coadyuvar con las autoridades mencionadas en el artículo anterior de la presente Ley con la finalidad de conocer y colaborar con la investigación y búsqueda de sus familiares si así lo desean. Recordando que es responsabilidad del Estado y todos sus órganos de gobiernos de los tres niveles, realizar la búsqueda, investigación y sanción de todas las personas responsables.

## Capítulo Segundo
## Sobre el Delito de Desaparición Forzada de Personas

**Artículo 7º.** Para los efectos de esta ley el delito de desaparición forzada consiste en la privación de la libertad, a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

**Artículo 8º.** A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de noventa a ciento cincuenta años de prisión y multa de 400 mil a 700 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación de por vida a ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de pertenecer a cualquier agrupación de seguridad pública a nivel federal, estatal, municipal, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales administrativas; así como de pertenecer a cualquier fuerza castrense.

Las penas y sanciones impuestas en estos casos, serán independientes de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos.

Este delito es permanente e imprescriptible
**I.** La oposición o negativa o el suministro de información inexacta de la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida por parte de un agente

del Estado responsable del mismo, será sancionada con destitución e inhabilitación definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los demás delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta.

**II.** A quien sea superior jerárquico del sujeto activo de las conductas previstas en el artículo 7º de la presente Ley y, haya tenido conocimiento de que éste cometía o se proponía cometer el delito de desaparición forzada de personas, haya hecho caso omiso de la información que lo indicase; no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento teniendo éste el deber jurídico de evitarlo, se le impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y multa de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios o demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal.

**III.** Al agente del Estado que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial y permita el ocultamiento de la víctima de los delitos de desaparición forzada en dichos lugares, o la práctica de algún acto tendente a cometer dicho ilícito, que además incumpla con la obligación de registrar cualquier privación de la libertad, cuando registre con inexactitud los registros oficiales o de los expedientes que conocía o debía conocer. Se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y multa de 40 mil a 60 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal.

**IV.** Al particular que permita el ocultamiento de la víctima directa de los delitos contemplados en esta ley, en cualquier bien mueble o inmueble. Se le impondrá una pena de ocho a quince años de prisión y multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de quedar impedido de por vida para postularse o desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, y de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios o demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal.

**V.** Al agente del Estado que induzca o incite a otro u otros, intente, o sea cómplice o participe en la comisión de los delitos contemplados en este capítulo. Se le impondrá una pena de doce a veinte años de prisión, y multa de 20 mil a 35 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios o demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal.

**VI.** Los presuntos responsables de cometer los delitos de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por tribunales civiles, queda excluida toda jurisdicción especial, en particular la correspondiente a la Fuerzas Armadas.

**Capítulo Tercero**
**Sobre el Delito de Desaparición de Personas cometida por Particulares.**

**Artículo 9º.** El Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno tomará las medidas apropiadas para investigar sobre los delitos definidos en el artículo 7º de esta Ley, que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.

**Artículo 10º**. El Delito de desaparición de personas cometido por particulares se entenderá como la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, de una o más personas cometida por particulares que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, seguida de la falta de información, sustrayéndola así de la protección de la ley.

**Artículo 11º.** A quien cometa el delito de desaparición de personas se le impondrá una pena de cincuenta a ochenta años de prisión y multa de 100 mil a 300 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de quedar impedido de por vida para postularse o desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal o de pertenecer a cualquier agrupación de seguridad pública a nivel federal, estatal, municipal, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales administrativas; así como de pertenecer a cualquier fuerza castrense.

Las penas y sanciones impuestas en estos casos, serán independientes de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos.

Este delito es permanente e imprescriptible.
**I.** Al particular que induzca o incite a otro u otros a la comisión de los delitos contemplados en este capítulo. Se le impondrá una pena de quince a veinticinco años de prisión, y multa de 15 mil a 20 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. , además de quedar impedido de por vida para postularse o desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública

federal o de pertenecer a cualquier agrupación de seguridad pública a nivel federal, estatal, municipal, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales administrativas; así como de pertenecer a cualquier fuerza castrense

## Capítulo Cuarto
## Reglas aplicables para ambos delitos: Agravantes, atenuantes, e incentivos procesales.

**Artículo 12º.** Para efectos de la presente Ley se considerarán agravantes para ambos delitos los siguientes actos:

- **a)** Que durante el tiempo en el que la víctima directa se encuentra desaparecida pierda la vida a consecuencia de la desaparición a la que fue sometida;
- **b)** Que se oculten o realicen acciones tendentes a ocultar el cuerpo sin vida de la víctima directa;
- **c)** Que la víctima directa haya sido sometida a tortura, actos crueles, inhumanos, degradantes, lesiones o violencia sexual;
- **d)** Que la víctima directa sea persona menor de edad, mujer, mujer embarazada, mayor de sesenta años, persona que pertenezca a un grupo o comunidad indígena o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en condición de inferioridad física o discapacidad mental respecto de quien realiza el delito de desaparición;
- **e)** Que la desaparición sea cometida como consecuencia de una práctica policial o persecución de algún delito;
- **f)** Que la desaparición sea cometida contra testigos de hechos que la ley califique como delito;
- **g)** Que la desaparición sea cometida con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito;
- **h)** Que la desaparición sea cometida contra personas migrantes que se encuentren dentro del territorio nacional.
- **i)** Que la desaparición sea cometida contra personas Defensoras de Derechos Humanos.

**I**. Los agravantes mencionados en el presente Artículo, incrementarán en una mitad a las penas establecidas en los Artículos 8º y 11º de la presente Ley.

**II.** En estos casos no aplicará el máximo previsto para la prisión de acuerdo al artículo 25 del Código Penal Federal y se atendrá a lo dispuesto en la presente Ley

**Artículo 13º.** Se considerarán atenuantes para los delitos establecidos en esta Ley los siguientes actos:

- **a)** Cuando se suministre información fidedigna que permita esclarecer los hechos;

**b)** Cuando se contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima directa;
**c)** Cuando se proporcione información que conduzca a la localización del cuerpo sin vida o restos corpóreos de la víctima directa; y
**d)** Cuando se libere espontáneamente, durante las doce horas siguientes de la privación de su libertad, a la víctima directa.

**I.** Las atenuantes mencionadas en éste Artículo, disminuirán en una tercera parte las penas establecidas en los Artículos 8º y 11º de la presente Ley.

**II**. Estas atenuantes se considerarán como incentivos para personas que se encuentren sentenciadas al momento que entre en vigor esta Ley, siempre y cuando la información proporcionada por estos sea comprobada. Para tales casos se deberá contar con la aprobación de las familias por medio de un escrito realizado en presencia de los representantes legales de estas.

**III.** En ningún caso la pena de destitución, inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de pertenecer a cualquier agrupación de seguridad pública a nivel federal, estatal, municipal, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales administrativas; así como de pertenecer a cualquier fuerza castrense será disminuida o conmutada.

**IV.** La obediencia jerárquica o el cumplimiento de un deber, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia serán excluyentes ni atenuantes de la responsabilidad penal en que incurra el agente del Estado que comenta los delitos señalados en el Artículo 8º. Sin embargo el Estado está obligado a garantizar que cualquier persona que se rehúse a obedecer una orden para cometer el delito de desaparición forzada no sea sancionada o sea objeto de ninguna represalia.

## Capítulo Quinto
## De la Reclasificación del Delito

**Artículo 14º.** Cuando durante la investigación el Ministerio Público o cualquiera de los coadyuvantes previstos en el Título Primero de la presente Ley, tengan la sospecha y/o evidencia de la participación directa o indirecta de algún agente del Estado, éste estará obligado a reclasificar el delito por el de desaparición forzada de personas o por el delito de desaparición de personas cometida por particulares de acuerdo a como se establece en el Título Segundo, Capítulos Primero y Segundo de la presente Ley.

La reclasificación del delito, de acuerdo a lo establecido en esta Ley es aplicable para todos aquellos casos que se encuentran en curso de investigación, aún antes de la entrada en vigor de ésta; así hayan sido clasificados como secuestro, privación ilegal de la libertad, persona extraviada o no localizada.

De no hacerlo, se sancionará de acuerdo a lo establecido al Art. 225, del Título Decimoprimero, Libro Segundo del Código Penal Federal; referente a "Delitos cometidos contra la administración de Justicia".

## Título Tercero
## De la Búsqueda, Investigación, y Registro Nacional de Personas víctimas Desaparición forzada y a manos de particulares.

### Capítulo Primero
### De la creación de Fiscalías Especializadas de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas cometida por particulares.

**Artículo 15º.** Para los fines de la presente Ley, se creará una Fiscalía Especializada de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares a nivel federal, así como una Fiscalía Especializada de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares en cada estado de la República Mexicana y el Distrito Federal, las cuales serán dotadas de autonomía y recursos tecnológicos, materiales y personal especializado necesarios para su funcionamiento, de tal manera que puedan atender los casos que ya se encuentran en curso de investigación, así como de los delitos que se cometan al momento de la promulgación de esta Ley.

Todas las Fiscalías estatales y del Distrito Federal, así como la Fiscalía Federal deberán coadyuvar entre sí para la Búsqueda de las personas víctimas de los delitos descritos en esta Ley y, de ser el caso, hacer las diligencias necesarias para lograr la coadyuvancia con otros Estados del Continente Americano para dar con el paradero de las víctimas. Así como coadyuvar entre sí para la Investigación de los delitos, para lograr la sanción a las personas responsables de cometerlos.

**Artículo 16º.** La Fiscalía Especializada de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares a nivel federal será regulada y supervisada por dos órganos que serán creados y reconocidos a partir de la promulgación de la presente Ley.

**Artículo 17º.** Junta de Gobierno. La cual será la encargada de redactar y realizar la convocatoria abierta para la elección de los o las Fiscales Especiales que encabezarán la las 33 Fiscalías Especializadas; así como de tener reuniones cada 6 meses con el Fiscal y los Sub Fiscales para que rindan cuentas sobre los avances de la Búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares. Así como de los avances en las Investigaciones.

I.La Junta de Gobierno estará conformada de la siguiente manera:

- **a)** Un (a) representante de la Secretaría de Gobernación
- **b)** Un (a) representante de la Procuraduría General de la República

**c)** Un (a) representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores
**d)** Un (a) representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
**e)** Cuatro representantes de las Organizaciones de Derechos Humanos mexicanas que trabajen los temas de desaparición forzada y/o desaparición de personas cometida por particulares.
**f)** Cuatro familiares representantes de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas
**g)** Un (a) representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México

**II.** Los o las integrantes de las Organizaciones de Derechos Humanos y los o las familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, cubrirán un periodo de año y medio, pasado éste periodo deberán ser suplidas por otras organizaciones y familiares de víctimas por otro periodo igual. Por su participación en la Junta de Gobierno no recibirán sueldo o remuneración alguna.
**III.** Los o las representantes de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Secretaría de Relaciones exteriores y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU tendrán un mandato de 3 años.

**Artículo 18º**. Comité Regulador. Será el encargado de reunirse máximo cada tres meses con el Fiscal Especial para conocer los avances de la Búsqueda, las Investigaciones, y, en caso de que así sea, conocer de nuevos casos de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas y sus avances.

I. El Comité Regulador estará conformado de la siguiente manera:

**a)** Un (a) representante de la Secretaría de Gobernación
**b)** Cuatro representantes de Organizaciones de Derechos Humanos mexicanas que trabajen los temas de desaparición forzada y/o desaparición de personas cometida por particulares
**c)** Cuatro familiares representantes de víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas
**d)** Un (a) representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México

**II.** Los o las integrantes de las Organizaciones de Derechos Humanos y los o las familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, cubrirán un periodo de año y medio, pasado éste periodo deberán ser suplidas por otras organizaciones y familiares de víctimas por otro periodo igual. Por su participación en el Comité Regulador no recibirán sueldo o remuneración alguna.
**III.** La o el representante de la Secretaría de Gobernación, así como la o el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU tendrán un mandato de 3 años.

**Artículo 19º.** Las Fiscalías Especializadas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares de los estados y el Distrito Federal, solamente contarán con Comités Reguladores, conformados de acuerdo al Artículo anterior. Estos deberán de trabajar de manera conjunta entre ellos y con el Comité Regulador a nivel federal para poder evaluar correctamente el avance en la búsqueda e investigación de los casos de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

**Articulo 20**. Las Fiscalías Especializadas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares contarán con dos Sub Fiscalías: la Sub Fiscalía de Búsqueda Inmediata y Permanente y, la Sub Fiscalía de Investigación y Seguimiento.

**Artículo 21º.** Para la elección de los o las Fiscales Especiales, la Junta de Gobierno deberá redactar y publicar la convocatoria abierta para que los interesados (as) de la sociedad en general que cubran con los requisitos, puedan concursar para ocupar el puesto después de ser sometidas a escrutinio de la Junta todas y cada una de las solicitudes recibidas.

**I.** El mandato de los o las Fiscales Especiales tendrá una duración de 3 años; pudiendo ser re elegido por un periodo igual por una sola ocasión.
**II.** Será sometido a revisión su mandato cada año y medio y,
**III.** De ser necesario, en ese periodo, o en casos extraordinarios, será revocado de su mandato, nombrando a un (a) Fiscal Especial Interina.
**IV.** La revocación de mandato puede ser solicitada por los Comités Reguladores en cualquier momento, siendo responsabilidad de la Junta de Gobierno analizar la petición.
**V.** Es responsabilidad de la Junta de Gobierno abrir nueva convocatoria al día siguiente de la revocación de mandato.

**Artículo 22º**. Los o las Sub Fiscales Búsqueda Inmediata y Permanente y de Investigación y Seguimiento, serán propuestos por las o los Fiscales Especiales al momento de tomar posesión, y al igual que los o las Fiscales Especiales tendrán un mandato de 3 años.

**Artículo 23º.** Los o las Fiscales Especiales, serán ratificadas por el Congreso de la Unión, los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para cada caso que corresponda.

En caso de querer realizar alguna modificación a la estructura y a la Ley Orgánica deberá ser sometida a consulta a las organizaciones de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ser llevadas a los Congreso estatales o en su caso a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su aprobación.

## Capítulo Segundo
## De la Búsqueda de las víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares

**Artículo 24º.** Para los fines de esta Ley, la Búsqueda de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares estará a cargo de las Sub Fiscalías de Búsqueda Inmediata y Búsqueda Permanente.

**Artículo 25º**. Estas Sub Fiscalías deberán de dar atención las 24 horas los 365 del año. La Sub Fiscalía federal de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares; deberá implementar un teléfono de atención las 24 horas los 365 días del año, el cual será gratuito tanto para los familiares que se encuentren en territorio nacional o para familiares que se encuentren en el extranjero.

**Artículo 26º.** La actuación inmediata de las autoridades en las primeras 48 horas son de vital importancia para poder encontrar a las víctimas de cualquiera de los delitos descritos en la presente Ley, por lo que:

**I.** En cuanto el Ministerio Público de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos de los estados y del Distrito Federal tengan el conocimiento de que se ha cometido alguno de los delitos previstos en esta Ley, deberán activar los mecanismo necesarios en las primeras 12 horas para dar con el paradero de la víctima independientemente de que se presente la denuncia correspondiente y sin importar quién o quiénes sean los posibles responsables.

**II.** Las Fiscalías Especializadas deberán de poner en marcha un protocolo de alerta inmediata en las primeras 5 horas de que se conozca ~~de~~ la desaparición de una persona sin importar quién o quiénes sean los posibles responsables de la comisión del delito. En caso de que se sospeche de que la víctima haya sido desaparecida por la comisión de cualquiera de los delitos descritos en esta Ley, se deberá activar una alerta diferente a las ya establecidas para los casos de sustracción o desapariciones de personas menores de edad (Alerta Amber) y de la Alerta Alba para los casos de desaparición de mujeres; sin embargo estas Fiscalías están obligadas a activar también ambas alertas. Estás alertas deberán también ser activadas de manera trasnacional, para evitar que la o las personas víctimas de estos delitos sean sustraídas del territorio nacional; así como para permitir que los familiares que no se encuentren en territorio mexicano conozcan de la desaparición de algún familiar que se encontraba en tránsito o en territorio mexicano al ser víctima de cualquiera de los delitos descritos en la presente Ley.

III. La Procuraduría General de la República y las Procuradurías estatales y del Distrito Federal deberán de desplegar los elementos necesarios de manera inmediata para dar con el paradero de la víctima.

IV. Es obligación de las autoridades establecer tiempos de manera periódica para reunirse con los familiares y representantes legales para informar sobre el proceso de búsqueda de la víctima, así como a las organizaciones de derechos humanos que acompañen el proceso, de los avances de esta.

V. Para los casos que así apliquen, se deberá extender la búsqueda de manera trasnacional, por medio de acuerdos previamente firmados con los Estados del Sur, Centro y Norte del Continente.

**Artículo 27º.** Dado que los delitos que se describen en la presente Ley son de carácter permanente e imprescriptible, el Estado está obligado a continuar con la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, aun cuando estos se hayan cometido antes de la promulgación de la Ley. Por lo que:

I. Se deberá continuar con la búsqueda de todas las personas desaparecidas de manera forzada o desaparecidas a manos de particulares tanto para su localización con vida como, si fuera el caso, la localización, identificación y restitución a los familiares de sus restos mortuorios.

II. Las Fiscalías Especializadas estarán obligadas a solicitar la búsqueda de las personas desaparecidas en cualquier lugar donde pudieran están privadas de su libertad, como lo son cárceles civiles o militares, centros clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud o cualquier lugar donde se pueda presumir se tengan a personas realizando trabajos de manera forzada. Esta búsqueda deberá ser realizada en conjunto con los familiares de las víctimas, sí estos así lo desean, representantes legales, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, integrantes de organizaciones de derechos humanos, peritos especializados en búsqueda de personas.

III. En caso de que se tenga la sospecha de que la víctima haya sido privada de la vida, se deberán realizar las diligencias pertinentes para la exhumación de los restos conforme a los estándares internacionales, siendo derecho de las familias solicitar la participación de peritos especializados independientes, de igual manera las familias tienen el derecho de estar presentes junto con sus representantes legales y algún acompañante durante todo el proceso de exhumación y traslado de los restos. Es obligación del Estado proporcionar a las familias durante todo el proceso de búsqueda, exhumación e investigación el acompañamiento de personal especializado en atención psicosocial, teniendo el derecho las mismas familias de aceptarlo o no.

**Artículo 28º.** Las autoridades garantizarán los derechos de los familiares de las víctimas a participar en las diligencias de búsqueda e investigación, así como las condiciones de seguridad y los recursos económicos necesarios. Así también garantizarán el derecho de las víctimas a tener peritajes independientes y cubrir con los gastos que se requieran.

**Artículo 29º.** Cualquier cuerpo o resto mortuorio que sea localizado y, posteriormente identificado como el correspondiente al de alguna víctima de cualquiera de los delitos descritos en esta Ley, deberán de ser entregados a sus familiares en el estado en el cual fueron localizados; por lo cual queda estrictamente prohibida la cremación de cuerpos bajo cualquier argumentación.

**I.** Por lo que para los casos de personas no identificadas que se encuentren en los Servicios Médicos Forenses de los tres niveles de gobierno, sin importar cual haya sido la causa de su deceso, queda estrictamente prohibido la cremación, donación de órganos, tejidos o la donación de cadáveres para fines de investigación o prácticas en Universidades. Dichos cuerpos deberán de ser resguardados y entregados al Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicano, para que realice los registros y tomas de muestras necesarias para su posterior identificación y restitución a sus familiares.

**II.** Se reconoce el derechos de los familiares de las víctimas el determinar el cómo serán sepultados los restos de su ser querido, una vez que estás tengan la plena certeza que los restos entregados son de la persona desaparecida.

**Capítulo Tercero**
**De la Investigación de los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometidas por particulares.**

**Artículo 30º.** Para los efectos de la presente Ley, las Sub Fiscalías de Investigación y Seguimiento, pertenecientes a las Fiscalías Especializadas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, serán las responsables de llevar a cabo todas las investigaciones para la persecución y sanción de los delitos descritos en esta Ley.

**Artículo 31º.** Las Sub Fiscalías de Investigación y Seguimiento, por medio de sus Ministerios Públicos están obligadas a iniciar las investigaciones pertinentes en cuanto tengan conocimiento de que se ha cometido algunos de los delitos que se establecen en el Título Segundo de esta Ley.
**Artículo 32º.** Estas Sub Fiscalías tendrá la obligación de atraer los casos de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares que se encuentren en otra instancia de impartición de justicia, aunque estos ya se encuentren en proceso antes de la entrada en vigor de esta Ley.
Esto sólo se podrá hacer a petición de los familiares y/o representantes legales de las víctimas y familiares.

**Artículo 33º**. Es responsabilidad de estas Sub Fiscalías informar de manera inmediata a las Sub Fiscalías de Búsqueda Inmediata y Permanente en cuanto tengan conocimiento de la comisión de los delitos descritos en la presente Ley; aun cuando no haya denuncia interpuesta.

**Artículo 34º.** Los o las Ministerios Públicos que se encuentren dentro de las Sub Fiscalías deberán dar atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Siendo que para la localización, investigación y sanción de los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas el tiempo es un factor importante para localizar a las víctimas con vida.

**Artículo 35º.** Las autoridades de cualquier nivel de gobierno municipal, estatal o federal, tendrán la obligación de iniciar de oficio en cuanto tengan conocimiento del hecho, averiguaciones previas por los delitos previstos en esta ley, independientemente de que los hechos hayan ocurrido en esa entidad o no; sin importar la calidad migratoria de la víctima.

**Artículo 36º.** Coadyuvancia de los familiares en las investigaciones. Se deberá reconocer el derecho de los familiares a conocer los avances del caso, obtener información periódica cuando así lo requieran y solicitar copias del expediente, las cuales se les deberán proporcionar de manera gratuita.

**Artículo 37º.** El Estado está obligado a garantizar en todo momento la seguridad física y psicológica de:

**a)** Los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares
**b)** Todos los agentes del Estado que formen parte de las Fiscalías Especializadas y sus correspondientes Sub Fiscalías.
**c)** Los integrantes de la sociedad civil de la Junta de Gobierno y de los Comités Reguladores de las Fiscalías Especializadas en los tres órdenes de gobierno.
**d)** Los testigos o posibles testigos clave para el hallazgo de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometidas por particulares, así como de todos aquellos testigos que permitan el esclarecimiento de los delitos descritos en esta Ley
**e)** Los peritos y especialistas que integran el Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicana y;
**f)** Las personas Defensoras de Derechos Humanos y de las organizaciones a las que pertenezcan, las cuales acompañen casos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

## Capítulo Cuarto
## De las especificaciones en los casos de desaparición forzada y desaparición de niñas, niños y adolescentes cometida por particulares.

**Artículo 38º.** En el caso de que se reporte ante las Fiscalías Especializadas, por conducto de cualquier autoridad o persona particular, el caso de un niño, niña o adolescente desaparecido. Se procederá como se establece en el Capítulo Tercero, Artículo 26º de la presente Ley. La priorización de esta búsqueda se realizará con base en el interés superior del niño, niña o adolescente, manteniéndose hasta que se logre la localización del sujeto y/o se acredite otro tipo penal diferente a los delitos descritos en esta Ley.

**Artículo 39º.** Para la búsqueda y localización en los casos de desaparición forzada y desaparición de niñas, niños y adolescentes cometida por particulares, las Sub Fiscalías de Búsqueda Inmediata y Permanente, así como las Sub Fiscalías de Investigación y Seguimiento, contarán con un cuerpo de policías auxiliares especializados en infancia, los cuales deberán realizar un registro de los patrones de contexto familiar, social y territorial del caso, que permitan identificar los efectos y fines, de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de las personas menores de dieciocho años.

**Artículo 40º.** En los casos de personas menores de 18 años en los que las Fiscalías Especializadas, identifiquen durante la búsqueda e investigación que el o los delitos corresponden a otros que no están establecidos en la presente Ley, remitirán de forma inmediata a la determinación del tipo penal a la Procuraduría Federal o local de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes, requiriendo la representación jurídica y el acompañamiento integral de las víctimas, frente a las instancias competentes.

**Artículo 41º.** En todos los casos de niñas, niños y adolescentes, las Fiscalías Especializadas, informarán y se coordinarán con la Procuraduría de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de que esta coadyuve en la investigación. A su vez la Procuraduría de Protección tendrá la obligación de realizar la denuncia correspondiente frente a las Fiscalías Especializadas de forma inmediata ante la identificación o reporte de un probable caso de niña, niño o adolescente desaparecido de manera forzada o desaparecido a manos de particulares como lo establece la presente Ley.

**Artículo 42º.** El Registro Nacional de personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares, contendrá un sub-registro de niñas, niños y adolescentes, conformado con todos los casos que hayan sido reportados ante las Fiscalías, con la finalidad de desagregar información referente a las causas y fines de la desaparición de las personas menores de 18 años. El registro deberá encontrarse permanentemente actualizado, y deberá ser complementado con los resultados obtenidos a través de la Alerta Amber y la Alerta Alba. Dicho sub-registro

deberá compartirse con el Sistema Nacional de Información de Derechos de niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 43º.** En el caso de niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometidas por particulares, tendrán derecho a solicitar a nombre propio o a través de su tutor o representante legal tanto a las Fiscalías Especializadas, como al Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, sobre la información que tengan bajo su resguardo.

**Artículo 44º.** En los casos de niñas, niños y adolescentes, las medidas de reparación integral, así como de atención terapéutica y acompañamiento deberán realizarse por personal especializado en infancia.

## Capítulo Quinto
## De las sanciones por falta la falta de Investigación, Búsqueda y Persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas cometida por particulares

**Artículo 45º.** Las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos descritos en la presente Ley tienen la obligación oficiosa de iniciar de manera eficaz y urgente las acciones para lograr la localización y el rescate de la o las víctimas que hayan sido reportadas como desaparecidas de manera forzada o desaparecidas por particulares.

Toda víctima de desaparición forzada o desaparición de personas tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida, su integridad física y psicológica. Estas acciones también deben de llevarse a cabo para todas aquellas víctimas que se encuentren desaparecidas de manera forzada o hayan sido desaparecidas por particulares aún antes de la entrada en vigor de la presente Ley.

**Artículo 46º.** Incurrirán en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad de otra naturaleza a que hubiera lugar, los agentes del Estado que:

I. Impidan u obstaculicen el acceso de las víctimas y sus representantes a la información sobre sus casos;
II. Manipulen, pierdan o alteren las pruebas o datos de investigación;
III. Proporcionen información falsa sobre los hechos;
IV. Se nieguen a cumplir con sus obligaciones en materia de búsqueda, investigación y persecución del delito, por la causa que sea; o
V. Se nieguen a cumplir con las reparaciones a las que sus instituciones estén obligadas, incluyendo el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

**Artículo 47º.** Se impondrá de diez a quince años de prisión y, una multa de seiscientos a mil doscientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal a los agentes del Estado y, se impondrá de cinco a ocho años de prisión, de trescientos a seiscientos días de multa de acuerdo al salario mínimo vigente en el Distrito Federal al particular que en relación con las conductas sancionadas en la presente Ley:

**I.** A las personas y/o agentes del Estado que obstruyan la actuación de las autoridades.

**II.** A los agentes del Estado que teniendo la obligación de investigar las conductas tipificadas en la presente Ley, omitan efectuar dicha investigación.

**III.** A las personas, agentes del Estado que intimiden a la víctima, a sus familiares o a sus representantes durante o después de la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, para que no realicen la denuncia correspondiente o no colaboren con las autoridades competentes.

**IV.** A la persona y/o al agente del Estado que conociendo los planes para la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, sin ser partícipe, no diere aviso a la autoridad.

## Capítulo Quinto
## Registro Nacional de personas desaparecidas de manera forzada y a manos de particulares.

**Artículo 48º.** Se deroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Quedando como único Registro Nacional el que se establece en la presente Ley. La información recabada hasta la entrada en vigor de la presente Ley deberá ser depurada y proporcionada a la instancia responsable de resguardar, actualizar y dar seguimiento a la información del nuevo Registro Nacional.

**Artículo 49º.** Por medio de la presente Ley se crea el Registro Nacional especial para las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas a manos de particulares, el cual deberá ser actualizado y, de ser necesario, depurado, por la Sub Fiscalía de Búsqueda Inmediata y Permanente a nivel federal; el cual deberá tener información de casos de víctimas de desaparición forzada ocurridas en el periodo de la denominada época de la "guerra sucia" (60´s, 70´s, 80´s y 90´s) hasta los casos registrados a la entrada en vigor de la presente Ley; así como de los casos de víctimas de desaparición de personas cometida por particulares desde el 2000 hasta los casos registrados a la entrada en vigor de la presente Ley.

**Artículo 50º.** Todos los Registros estatales y federales de personas desaparecidas, que se encuentren en posesión de cualquier dependencia de gobierno dentro de los tres niveles deberán ser proporcionados íntegramente a la Sub Fiscalía de Búsqueda Inmediata y Permanente, con la finalidad de tener un solo Registro Nacional actualizado.

**Artículo 51º.** Será obligación de cada Sub Fiscalía de Búsqueda Inmediata y Permanente de los estados y el Distrito Federal, suministrar de manera diaria la información recabada de nuevos casos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

**Artículo 52º.** El Registro Nacional deberá contar con la siguiente información:

**I.** Del registro de personas desaparecidas de manera forzada
- a) Identidad de la persona detenida y posteriormente desaparecida
- b) Sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida
- c) Fotografía lo más actualizada posible de la persona desaparecida; en caso de no contar con una se procederá a hacer un retrato hablado de la víctima.
- d) Ocupación al momento de la detención desaparición
- e) Día, mes, año y hora de su detención desaparición
- f) Lugar, entidad federativa, municipio o delegación política del Distrito Federal donde ocurrió el hecho
- g) Agentes del Estado a los que se responsabiliza de la detención y posterior desaparición
- h) Breve narración de los hechos
- i) Lugar a donde fue trasladada la víctima después de su detención
- j) Agentes del Estado a cargo del lugar de detención
- k) Estado físico de la víctima al llegar al lugar de detención

**II.** Del registro de personas desaparecidas a manos de particulares
- a) Identidad de la persona desaparecida
- b) Sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida
- c) Fotografía lo más actualizada posible de la persona desaparecida; en caso de no contar con una se procederá a hacer un retrato hablado de la víctima.
- d) Ocupación al momento de ser desaparecida
- e) Día, mes, año y hora de la desaparición
- f) Lugar, entidad federativa, municipio o delegación política del Distrito Federal donde ocurrió el hecho
- g) Posibles responsables de la desaparición de la víctima
- h) Breve narración de los hechos

III. El Registro Nacional de Personas desaparecidas de manera forzada y manos de particulares deberá de ser actualizado conforme se tengan nuevos datos recabados durante la investigación, así como, de ser el caso, cambiar el registro cuando se tenga la evidencia de que se trata de una desaparición forzada.

IV. El Registro Nacional deberá establecer sí la víctima aún se encuentra desaparecida, ha sido encontrada viva o si fueron encontrados sus restos mortuorios; determinando lugar y fecha del hallazgo.

**Artículo 53º**. Se deberán crear dos niveles de acceso al Registro Nacional

1. Acceso público, que permita a cualquier persona a acceder a datos básicos del registro para fines de transparencia, estadísticas e investigaciones independientes. Los datos públicos contendrán:

    **a)** Nombre completo de la víctima
    **b)** Entidad federativa en la que fue desaparecida
    **c)** Edad al momento de su desaparición
    **d)** Fecha de desaparición
    **e)** Nacionalidad
    **f)** Sexo
    **g)** Si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida por particulares
    **h)** Si la víctima fue localizada con vida o en su caso fueron localizados sus restos mortuorios
        **i.** Lugar del hallazgo
        **ii.** Fecha del hallazgo

2. Acceso a familiares, representantes legales y agentes del Estado autorizados para llevar la búsqueda e investigación de los casos; éste acceso se deberá proporcionar con una clave específica para cada caso; con lo que las familias y representantes legales de éstas podrán tener acceso a todo el expediente, incluyendo las posibles líneas de investigación sobre el caso.

**Artículo 54º.** Bajo ninguna circunstancia se podrá alegar la restricción a la totalidad del expediente a las familias o representantes legales de éstas por cuestiones de seguridad nacional. Es derecho de los familiares conocer todos y cada uno de los avances en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de sus seres queridos.

## Título Cuarto
## Del Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano.
## Capítulo Primero

**Artículo 55º.** Para los fines de la presente Ley y, para dar certeza a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares; se creará el **Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano**, el cual se encontrará en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en Ciudad Universitaria.

Éste Instituto contará con recursos propios, al cual se le debe dotar de todos los recursos materiales y de infraestructura, así como también de personal especializado en las diferentes áreas como Antropología Forense, Arqueología Forense, especialistas en Biogenética, Investigación de contextos y Psicólogos sociales, todos ellos con enfoque en graves violaciones a Derechos Humanos.

**Artículo 56º.**Los especialistas del Instituto, serán reconocidos como peritos expertos, por lo que sus investigaciones y testimonio serán considerados indispensables para la investigación y sanción de los delitos descritos en esta Ley.

**Artículo 57º**. El Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, será el encargado de resguardar el Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional Ante-mortem / Post-mortem, así como del Registro Nacional de restos mortuorios No identificados (NN) y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes.

**Artículo 58º.** También estará a cargo, junto con las Sub Fiscalías de Búsqueda Inmediata y Permanente de realizar la identificación por medio de claves a cada resto mortuorio localizado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, así como tener a su resguardo en un área especial por un periodo de 365 días naturales dichos restos, antes de ser trasladados a algún panteón previamente establecido por las autoridades, en el cual dichos restos no identificados durante el lapso de tiempo antes establecido, serán debidamente sepultados e identificados de acuerdo a la clave que se le haya asignado previamente al momento de ser localizados, para que posteriormente puedan ser identificados y restituidos a sus familiares.

**Artículo 59º**. El Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, sólo podrá proporcionar la información que tiene a su resguardo por una orden judicial o a petición de los familiares y/o representantes legales de éstos. Así como ser partícipes activos de la búsqueda en vida de las personas desaparecidas de manera forzada o desaparecidas a manos de particulares.

**Artículo 60º.** Gratuidad. Todos los servicios prestados por este Instituto serán gratuitos para los familiares de las víctimas.

## Capítulo Segundo
## Del Banco Nacional de ADN para la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

**Artículo 61°.** El Banco Nacional de Información Genética tendrá como objeto garantizar la obtención, resguardo y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para lograr el esclarecimiento de los delitos previstos en esta ley y realizar la búsqueda en vida e identificación genética de los restos de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

**Artículo 62°.** El Banco Nacional de Información Genética tendrá como funciones:

**I.** Organizar, administrar y actualizar de manera continua el archivo nacional de datos genéticos;

**II.** Resguardar y velar por la reserva de los datos e información que obren en el mismo, de acuerdo a lo establecido en la ley de protección de datos personales y a los principios establecidos para las bases de datos genéticos indicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (**OMS**);

**III.** Actuar a través de su director y los profesionales que lo integren como peritos oficiales cuando así sean requeridos, ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 26º de la presente ley, emitiendo dictámenes técnicos y realizando las pericias genéticas que les sean requeridas;

**IV.** Adoptar las medidas necesarias para garantizar la veracidad de los estudios, análisis, dictámenes e informes que por su intermedio se realicen;

**Artículo 63°.** Cualquier familiar directo de personas víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares tendrá derecho a solicitar y a obtener los servicios del Banco Nacional de información Genética en los términos a los que se refiere esta ley, incluyendo el registro de sus datos en el Archivo Nacional de Datos Genéticos.

En el Archivo Nacional de Datos Genéticos se contendrá la información genética relativa a la búsqueda e identificación de las personas víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, así como de los familiares de las víctimas a efecto de realizar el entrecruzamiento de información y poder determinar la identidad de las personas.

**Artículo 64º.** Todos los Bancos de Información Genética que se encuentren en posesión de las dependencias en los tres niveles de gobierno, deberán compartir dicha información con el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, con la finalidad de no someter a las familiar a la extracción de nuevas muestras de material genético. Esto se deberá hacer con pleno conocimiento de las familias, siendo su derecho el negar que su muestra sea entregada al Instituto. De igual manera será derecho de las familias solicitar al Banco Nacional de información Genética sean tomadas nuevas muestras.

**Artículo 65°** Acreditación. Para los fines estipulados en el artículo anterior, el interesado deberá acreditar ante el Banco Nacional de Información Genética:

**I)** Las circunstancias en que desapareció la persona, proporcionando la mayor información posible.

**II)** El vínculo que tiene con la persona víctima de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de conformidad con la normativa legal vigente.

**Artículo 66**° Reserva de la información. El Banco Nacional de Información Genética no proporcionará información a particulares sobre los datos registrados, ni tampoco a entidades públicas o privadas cualquiera sea la índole de las razones alegadas.

La información genética resguardada sólo podrá ser proporcionada por requerimiento judicial, en causa determinada, a los fines exclusivos de respaldar las conclusiones de los dictámenes periciales elaborados por el mismo y posibilitar su control por los peritos de parte.

## Título Quinto
## De la declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

### Capítulo Único

**Artículo 67º.** Se derogan todas las Leyes de Declaración de Ausencia por Desaparición, entrando en vigor a nivel nacional la establecida en esta Ley.

**Artículo 68º.** La declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares a fin de que judicialmente se determine la representación de los intereses y derechos de dicha persona, aun y cuando no se conozca la identidad del responsable y sin importar el resultado de las investigaciones al respecto.

Este procedimiento podrá solicitarse en cualquier momento a partir de denunciados los hechos.

**Artículo 69°.** Podrán ejercer la acción de Declaración de Ausencia por Desaparición las siguientes personas, en el orden planteado:

**I.-** Cónyuge, concubina, concubino de la persona cuyo paradero se desconoce;
**II.-** Descendientes de la persona cuyo paradero se desconoce, en caso de ser menores a través de un representante
**III.-** Ascendientes en línea recta en primer y segundo grado;
**IV.-** Parientes colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado;
**V.-** El Ministerio Publico, cuando de su investigación se desprenda que se está ante un caso de desaparición de persona y no existiere ninguna de las personas anteriores; y
**VI.-** Quien tenga interés jurídico ya sea para litigar o defender los derechos de la persona cuyo paradero se desconoce.

**Artículo 70º.** Será competente para conocer del procedimiento de declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas por particulares el o la Juez de lo Civil que corresponda de acuerdo a lo siguiente:

**I.-** El último domicilio de la persona cuyo paradero se desconoce;
**II.-** El domicilio de la persona quien promueva la acción;
**III.-** El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición; o
**IV.-** El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.

**Artículo 71°.** La Solicitud de declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas por particulares deberá incluir por lo menos la siguiente información:

**I.-** El nombre, edad y domicilio del solicitante, así como documentos o información que acrediten el parentesco o relación con la persona cuyo paradero se desconoce;

**II.-** Toda aquella información con la que cuente respecto de la persona cuyo paradero se desconoce, entre la que puede detallarse:

**a)** Nombre, domicilio, edad, estado civil de la persona cuyo paradero se desconoce;
**b)** Generales de los hijos, en su caso;
**c)** Nombre del cónyuge, concubino o pareja sentimental;
**d)** Actividades de la persona cuyo paradero se desconoce.

**III.-** Copia de la denuncia de hechos realizada ante el Ministerio Publico, y en su caso, de la queja hecha ante la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos.

A la solicitud se deberá acompañar los documentos con los cuales se acredite la relación o parentesco con la persona cuyo paradero se desconoce, y todos los demás documentos que quieran utilizar como prueba. Bastará la presentación de copias simples de los documentos mencionados. En todo caso, el solicitante, señalará bajo protesta de decir verdad el archivo donde se encuentren los originales a fin de que el juez mediante oficio los recabe.

**Artículo 72°.** En caso de admitir la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición, el Juez requerirá al Ministerio Público que conozca de la denuncia penal o, en su caso, a la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, para que en el plazo no mayor de tres días hábiles remita la información que obre en el expediente para su análisis y resolución.

El juez estará obligado a suplir la deficiencia de los planteamientos de los hechos señalados en la solicitud y, en su caso, al admitirla ordenará la citación de la persona cuyo paradero se desconoce por medio de la publicación **de un edicto** que se publicará en el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial del Estado que corresponda, así como en las páginas electrónicas del Poder Judicial, de las dependencias del Poder Ejecutivo y de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, llamándole por dos ocasiones consecutivas mediando entre ellas un plazo de 15 días hábiles, y sin costo alguno para quien ejerza la acción, a fin de que la persona cuyo paradero se desconoce se presente al juzgado en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última publicación.

**Artículo 73°.** Si transcurren 30 días hábiles contados a partir de la última publicación del edicto a que se refiere el artículo anterior, no se tienen noticias de la localización de la persona cuyo paradero se desconoce, ni se ha aparecido con vida ni se ha confirmado su muerte, el juez citara al solicitante y al Agente del Ministerio Público a una audiencia en la cual con base en todo lo actuado dentro del expediente resolverá la procedencia o no de la declaración provisional de ausencia por desaparición y ordenará al Secretario del Juzgado emita la certificación correspondiente a fin de que se inscriba en el Registro Civil acta provisional de ausencia por desaparición forzada o desaparición de personas por particulares. Asimismo se ordenara que la declaratoria se publique en el Periódico Oficial del Estado que corresponda.

**Artículo 74°.** La resolución en la que el juez declare la Ausencia por Desaparición, tendrá los siguientes efectos:

**I.-** Nombrar un depositario de los bienes de la persona cuyo paradero se desconoce; y
**II.-** Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo con el Estado, los Municipios, o entidades paraestatales, continúen gozando de los beneficios.

**Título Sexto**
**De la Reparación Integral del Daño**
**Capítulo Único**

**Artículo 75º.** Tienen derecho a la reparación integral del daño en los casos de desaparición forzada y a la aplicación de una medida judicial provisional de protección:

**I.** La víctima y el ofendido; y

**II.** A falta de la víctima o el ofendido, sus dependientes económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale el derecho sucesorio y demás disposiciones aplicables.

Para los efectos de esta ley, se consideran víctimas del delito de desaparición forzada, quienes resienten directamente la conducta delictiva; en tanto que, también serán ofendidos, quienes resienten indirectamente los efectos de la conducta delictiva, o sea los familiares del desaparecido hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil.

**Artículo 76º**. Toda persona que ha sido víctima de la desaparición forzada y los ofendidos sin prejuicio de la nacionalidad tienen derecho a la reparación integral, la cual comprenderá la restitución, Indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

**Artículo 77º.** Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

*Restitución*: Restablecimiento de la víctima o del ofendido a la situación anterior a la violación de derechos humanos o del delito.

*Indemnización:* La desaparición forzada genera un daño en la víctima y en el ofendido, que implica la reparación monetaria equivalente al daño.

**I.** El daño material, consistente en la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivos de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario.
**II.** El lucro cesante, consistente en el pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando la víctima deje de percibir ingresos por lesiones o incapacidad para trabajar en algún oficio, arte o profesión.

**III.** El daño emergente, consistente en el pago de las erogaciones efectuadas para fines de investigación, demanda de justicia, servicios médicos o psicológicos, gastos y costos judiciales en lo referente a las acciones de búsqueda de la víctima ante las diversas autoridades.

*Rehabilitación:* Los costos de la rehabilitación física y mental de la víctima por causa de la desaparición forzada.

*Satisfacción:* Son medidas de carácter no pecuniario que está obligado a tomar el Estado encaminadas a reparar el daño inmaterial causado a las víctimas.

**I.** El daño inmaterial, que comprende tanto los sufrimientos como las aflicciones causados a la víctima directa y a sus familiares, el menoscabo de valores muy significativos, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima;
**II.** La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos;
**III.** La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad y sanción a los responsables.

*Garantías de no repetición:* Es el conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de erradicar las causas que producen la desaparición forzada y desaparición a manos de particulares.

**Artículo 78º** Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales en las que uno o más de sus miembros hayan sido víctimas de desaparición forzada, la cual comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

**Artículo 79º**. Derecho a la verdad. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de las víctimas, los hechos constitutivos de la desaparición forzada y de la desaparición a manos de particulares de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad y conocer la sanción a los responsables.

**Artículo 80º**. Para la reparación integral del daño, tanto de las víctimas como de sus familiares, se creará un Fondo Especial para Atención a víctimas y familiares de personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares.

## Título Séptimo
## De la Prevención de los delitos de desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares.

## Capítulo Primero
## Del Registro Oficial de Personas Detenidas

**Artículo 81º.** La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y cualquier otra institución de Seguridad Pública, llevarán un registro oficial y actualizado de las personas privadas de libertad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial o de toda otra autoridad o institución competente.

Los mencionados registros, tendrán, cuando menos, la información siguiente:

**a)** La identidad de la persona privada de libertad;
**b)** El día, la hora y el lugar donde la persona fue privada de libertad y la autoridad que procedió a la privación de libertad;
**c)** La autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos de ésta;
**d)** La autoridad que controla la privación de libertad;
**e)** El lugar de privación de libertad, el día y la hora de admisión en el mismo y la autoridad responsable de dicho lugar;
**f)** Los elementos relativos a la integridad física de la persona privada de libertad;
**g)** En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos de la persona fallecida;
**h)** El día y la hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la autoridad encargada del traslado.

**Artículo 82º.** Todos los agentes del Estado que en ejercicio de su encargo o comisión, tengan conocimiento de la privación de la libertad de una persona, garantizará a toda persona con un interés legítimo en esa información, a familiares o amigos estrechos de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el acceso, como mínimo, a las informaciones siguientes:

**a)** La autoridad que decidió la privación de libertad;
**b)** La fecha, la hora y el lugar en que la persona fue privada de libertad y admitida en un lugar de privación de libertad;
**c)** La autoridad que controla la privación de libertad;
**d)** El lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y, en caso de traslado hacia otro lugar de privación de libertad, el destino y la autoridad responsable del traslado;
**e)** La fecha, la hora y el lugar de la liberación;
**f)** Los elementos relativos al estado de salud de la persona privada de libertad;
**g)** En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos.

## Capítulo Segundo
## De la capacitación y sensibilización de los agentes del Estado sobre los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares

**Artículo 83º.** Las autoridades municipales, estatales y federales deberán contar la capacitación necesaria para realizar la búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada y desaparición de personas por particulares. Para ello se deberá contar con:

**a)** Capacitación periódica, regular y actualizada para prevenir la participación de servidores públicos en la comisión de los delitos previstos en esta ley.
**b)** Agentes del Estado capacitados en protocolos de búsqueda y actuación inmediata en casos de desaparición forzada y desaparición de Personas.
**c)** Personal capacitado y sensible en materia de Derechos Humanos y tratados internacionales en la materia
**d)** Personal suficiente para atender la investigación y seguimiento de los casos
**e)** Personal altamente capacitado en investigación forense
**f)** Personal altamente capacitado en atención y acompañamiento a víctimas con una perspectiva psicosocial.

## Transitorios

**Primero:** La presente Ley entrará en vigor en todo el Territorio Nacional al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

**Segundo:** Las Fiscalías Especializadas para investigar los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, deberán estar creadas y en pleno funcionamiento, en un plazo no mayor a 300 días naturales a partir de la aprobación de la presente Ley. De no cumplirse con el plazo establecido se sancionará a los agentes del Estado responsables de facilitar los recursos y medios necesarios para su funcionamiento.

**Tercero:** El Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano deberá ser creado y entrar en pleno funcionamiento en un plazo no mayor a 365 días naturales a partir de la aprobación de la Ley. De no cumplirse con el plazo establecido se sancionará a los agentes del Estado responsables de facilitar los recursos y medios necesarios para su funcionamiento.

**Cuarto:** El Registro Nacional de personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares deberá estar en funcionamiento y actualizado en un plazo no mayor a 200 días naturales a partir de la aprobación de ésta Ley. Siendo sancionados aquellos agentes del Estado que no proporcionen los Registros que tienen a sus resguardo en un plazo no mayor de 120 días naturales

**Quinto:** La Base Nacional Ante-mortem / Post-mortem , así como el Registro de resto mortuorios No identificados (NN) y la localización de fosas comunes deberán estar actualizados y bajo resguardo del Instituto Nacional Autónomo en Antropología Forense Mexicano en un plazo no mayor a 365 días naturales a partir de su creación.

**Sexto:** El Estado mexicano tendrá un plazo no mayor a 365 días naturales para asignar espacios donde se encontrarán los panteones especiales para los restos mortuorios que aún no hayan sido identificados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51º de la presente Ley.

**Séptimo:** Se deroga el Capítulo III Bis del Título Decimo, Libro Segundo del Código Penal Federal.

**Octavo:** Los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares se establecerán en el Título Tercero, Libro Segundo del Código Penal Federal, de acuerdo a lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley. La modificación del Código Penal Federal así como la correspondiente modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales se realizará en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley.

**Noveno.** Se derogan los Capítulo y Artículos establecidos en la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos que contravengan lo establecido en el Artículo 29º de la presente Ley.

**Salón de Sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de septiembre de 2015.**

**Sen. Angélica de la Peña Gómez**

**Sen. Adriana Dávila Fernández**

**Sen. Layda Sansores San Román**

*"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".*

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

**SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS**

Oficio No. SELAP/300/2809/15
México, D.F., a 10 de diciembre de 2015

**CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN**
P r e s e n t e s

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la **INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD**, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 315-A-03158 y 353.A.-0555, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

**El Subsecretario**

**LIC. FELIPE SOLÍS ACERO**

CÁMARA DE SENADORES SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
RECIBIDO
10 DIC 2015 7:12 PM
0103149

C.c.p.- **Lic. Miguel Ángel Osorio Chong**, Secretario de Gobernación.- Presente.
**Lic. Rodrigo Espeleta Aladro**, Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente. Ref. Oficio número 4.1788/2015.
**Mtro. Valentín Martínez Garza**, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
**Minutario**
UEL/311

VMG/RCC

Senado
(sel) 2809

CJEF
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

**CONSEJERÍA ADJUNTA DE LEGISLACIÓN Y ESTUDIOS NORMATIVOS**

**ASUNTO: INICIATIVA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS.**

**Oficio número: 4.1788/2015**

**México, D.F., a 10 de diciembre de 2015**

**LIC. FELIPE SOLÍS ACERO**
**SUBSECRETARIO DE ENLACE LEGISLATIVO Y**
**DE ACUERDOS POLÍTICOS DE LA**
**SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN**
**P R E S E N T E**

Me permito enviar en original la **INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD,** con la atenta petición de que sea presentada ante la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en términos de los dispuesto por el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se anexa: a) Copia simple del oficio 315-A-03158 del 16 de octubre de 2015, que contiene el dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y b) Copia simple del oficio 353.A.-0555 del 23 de octubre de 2015, suscrito por la Titular de la Dirección General Jurídica de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual manifestó no tener observaciones en el ámbito jurídico presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**
**EL CONSEJERO ADJUNTO**

**LIC. RODRIGO ESPELETA ALADRO**

REA/YRB/MAV
C.c.p. Lic. Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.- Presente
C.c.p. Control de Gestión CALEN.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA**
**DE LA CÁMARA DE SENADORES**
**DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN**
**P R E S E N T E**

Con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto, ante esa Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas; y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

La presente Iniciativa de Decreto que se somete a consideración de esa Soberanía, encuentra fundamento en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión a expedir "Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles", la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de julio.

Por tanto, el objetivo de esta Iniciativa es establecer, además de los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y de coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas; crear del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y garantizar el respeto irrestricto a los derechos de todas las víctimas de estos delitos.

## I. ANTECEDENTES

La desaparición de personas es uno de los fenómenos sociales con mayor impacto en el tejido social en México y América Latina y constituye una de las más crueles violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de violentar la dignidad humana, no solo causando dolor e incertidumbre en la víctima que se debate entre la esperanza y la desesperación sobre su futuro, sino también para los familiares y otras personas afines que sufren por desconocer su paradero.

No existe razón que justifique la desaparición de ninguna persona. Se trata de un delito artero, deleznable y de gran impacto para la sociedad, por lo que el conocer, atender y erradicar a fondo cualquier tipo de desaparición de personas es una tarea fundamental para la afirmación de un Estado de Derecho. Además, la demanda inaplazable de la sociedad para hacer efectivo el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición de una persona en un contexto criminal, es una asignatura pendiente que se reconoce y asume como compromiso de

esta Administración a mi cargo, para atenderla al más alto nivel de las decisiones públicas de manera consistente, integral, y de la mano con las familias alcanzadas por el dolor que causan estos delitos, así como de la sociedad civil organizada.

En este contexto, es indispensable e inaplazable asegurar el respeto, la promoción y la defensa de todos los derechos humanos de las personas en México, especialmente el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la vida, el derecho a la identidad, al reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de desaparición y, en especial, el reconocimiento del derecho a no ser desaparecido y la prohibición de cometer la desaparición de personas.

A lo anterior, se suma la prioridad que el Estado mexicano confiere al cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, en los que nuestro país es parte, como son:

- La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por México el 9 de abril de 2002;
- La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada el 18 de marzo de 2008, y
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que México se adhirió el 24 de marzo de 1981, y de cuyo artículo 2 se desprende la obligación de nuestro país de adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención.

Asimismo, es oportuno señalar que el pasado 15 de febrero del presente año, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, con base en las Observaciones finales sobre el Informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, recomendó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para asegurar que, tanto en el orden federal como local, el marco jurídico y las actuaciones de las autoridades se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en dicha Convención. Por ello, en la reunión que recientemente sostuvieron diversos funcionarios del Gobierno Federal en Ginebra con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se adelantó el compromiso de la presente Administración con la presentación de esta Iniciativa.

Al respecto, debe observarse que la Organización de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano a aprobar a la brevedad posible, una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en particular, aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas.

En este sentido, si bien existe legislación federal y local que cuentan con el tipo penal específico para el delito de desaparición forzada de personas como en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como el Distrito Federal, lo cierto es que se considera que dicha legislación no ha adoptado todavía, en la totalidad, las recomendaciones internacionales.

Por estas razones es que se vuelve patente la importancia de expedir una ley general en la materia, que permita distribuir competencias entre los distintos órdenes de gobierno respecto de áreas y facultades concurrentes, sentando las bases para la colaboración entre dichos órdenes y las diferentes instancias de gobierno.

Cabe destacar que la presente Iniciativa tiene como antecedentes los grandes esfuerzos realizados por diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal, gobiernos de las entidades federativas, organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como diversos colectivos constituidos por familiares de víctimas, quienes han implementado acciones de búsqueda incansable de las personas desaparecidas y que demandan mecanismos eficientes y eficaces que permitan a las instituciones de procuración e impartición de justicia del Estado mexicano llegar al conocimiento de la verdad.

Con el propósito de darle cauce a dichos esfuerzos y acciones, y como parte del proceso de elaboración de la presente Iniciativa, se llevó a cabo un importante ejercicio de Consulta Pública realizada por la Secretaría de Gobernación. Ello, con el propósito de mantener la apertura y cercanía del Gobierno de la República con los ciudadanos y sus perspectivas, así como la de todos los actores sociales involucrados o con interés en el tema, propiciando que pudieran sumarse al mismo con estudios, análisis, propuestas u observaciones. De esta manera, trabajamos juntos el Gobierno Federal, las entidades federativas, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, las familias de las víctimas y diversas organizaciones de la sociedad civil, en la identificación de las acciones y mecanismos de coordinación que se tradujeron en una serie de propuestas normativas que definen las estrategias que el Estado mexicano deberá seguir para enfrentar la problemática de la desaparición de personas.

Cabe destacar que dicha Consulta Pública también permitió que cualquier ciudadano que así lo deseara, pudiera participar en la construcción de este proyecto. A través del portal de Internet de la Secretaría de Gobernación fue posible acceder al llenado de un cuestionario sobre los elementos más importantes que debían considerarse como ejes rectores de una política nacional en materia de desaparición de personas, permitiéndose también que nos hicieran llegar de manera libre cualquier propuesta o sugerencia.

Por último, respecto de esta Consulta Pública, es preciso resaltar el apoyo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que a través de su Comisión de Derechos Humanos garantizó la

constante participación de todas las entidades federativas y permitió la armonización de criterios respecto de las competencias, facultades y obligaciones que supone este nuevo diseño normativo que busca armonizar una política de Estado común en la materia.

## II. POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional México en Paz, se busca promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer el ámbito de protección y defensa de los derechos humanos y abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito.

De manera particular, la estrategia 1.5.3 del Plan Nacional de Desarrollo, contempla "Instrumentar una Política de Estado en derechos humanos", estableciendo líneas de acción que generen información que favorezca la localización de personas desaparecidas y la creación de un Sistema Nacional Único de Datos para la Búsqueda e Identificación de las Personas Desaparecidas.

A este respecto, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, confirma la necesidad de instrumentar los Protocolos Alba y Amber, así como la promoción de un Sistema Nacional de Información sobre Personas Desaparecidas y fortalecer el Registro Nacional de Evidencias Genéticas.

En correspondencia con dichos compromisos y como parte de las "Diez medidas para fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad", me comprometí a impulsar leyes en favor de los derechos humanos, por lo que esta Iniciativa se erige para refrendar la obligación de todas las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de conformidad con los principios establecidos en la Constitución General y los Tratados Internacionales en la materia, mediante la instrumentación de la presente política de Estado, de carácter integral, incluyente y considerando los más altos estándares internacionales.

## III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente Iniciativa busca lograr su objetivo mediante cuatro componentes principales:

1. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las distintas autoridades de los órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición de personas. Es decir, se trata de una ley que incide válidamente en todos los órdenes de gobierno.
2. Establecer los tipos penales en materia de desaparición de personas, así como sus sanciones, que evidencian el compromiso del Estado de castigar con la mayor severidad aquellos delitos que lastiman y transgreden el tejido social.

3. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual se conformará por autoridades gubernamentales y en el que participan familiares, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, y será la instancia superior para la articulación de esfuerzos en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como de los procesos que conlleven la homologación de protocolos y registros en esta materia.
4. Garantizar la protección de los derechos y establecer las medidas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral de las víctimas de los delitos de desaparición de personas.

La propuesta de Ley se integra por diversos elementos que a continuación se señalan:

**Disposiciones Generales**

El ámbito de aplicación de la Ley es de orden público, interés social y de observancia en todo el territorio nacional, por tratarse de un fenómeno que merece y requiere la especial atención de todas las autoridades que conforman el Estado mexicano, mismas que deben contar con los mecanismos e instrumentos jurídicos idóneos para combatir la desaparición de personas en todas sus manifestaciones, y garantizar los derechos a los que se ha hecho alusión. Asimismo, en el glosario se introducen conceptos fundamentales como lo son el de Familiares, Persona Desaparecida, Persona no localizada, entre otras, a fin de distinguir entre las consecuencias jurídicas y los derechos que asisten a cada una de ellas.

**Delitos**

Uno de los principales objetos de la Iniciativa consiste en la tipificación de las conductas que configuran la comisión de delitos en materia de desaparición de personas, acorde con los estándares internacionales. En este sentido, se prevén tres delitos diferentes: el delito de desaparición forzada, el delito de desaparición por particulares y los delitos vinculados a los delitos de desaparición forzada o desaparición por particulares. La tipificación del delito de desaparición de personas es autónoma y se prevén las penas más severas que tengan en cuenta su extrema gravedad.

**Disposiciones Generales Aplicables a todos los Delitos de Desaparación de Personas**

Se propone que los delitos de desaparición de personas tengan el carácter de permanentes o continuos y sean perseguidos de oficio. Esto permitirá entender que el delito se sigue cometiendo hasta el momento en que la persona desaparecida es localizada y, en su caso, puesta en libertad.

Asimismo, otra medida que se adopta en la Iniciativa consiste en dar el carácter de imprescriptible a la acción penal para perseguir los delitos de desaparición de personas, estableciéndose que dicha acción penal no estará sujeta a los principios de oportunidad, formas de terminación anticipadas del proceso u otras de similar naturaleza.

Además, se propone que las personas que sean procesadas por la comisión de estos delitos no gocen de los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución y conmutación de la pena, así como de la inaplicabilidad de las causas de exclusión del delito, como por ejemplo, la obediencia debida, entre otras.

**Desaparición Forzada de Personas**

Se tipifica el delito de desaparición forzada como aquél cometido por servidores públicos, un particular o grupo de particulares que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o a proporcionar información sobre su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección del ordenamiento jurídico.

Las penas para este delito son las más graves que prevé nuestro ordenamiento, que van desde los cincuenta hasta los cien años de prisión, además de la destitución e inhabilitación en el desempeño de cargos públicos.

Es oportuno mencionar que también se establecen algunos supuestos en los cuales dichas penas se podrán reducir, cuando exista cooperación para el esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, para el hallazgo de las personas desaparecidas.

**Desaparición por Particulares**

De manera especial, esta Iniciativa atiende las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y el clamor de todos los mexicanos por reconocer como delito a la desaparición realizada por particulares. Dicho delito sancionará a la persona o grupo de personas que sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o a proporcionar información sobre su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección del ordenamiento jurídico.

Las penas previstas para la comisión de este delito pueden ser de entre cuarenta y noventa años de prisión, además de las penas económicas correspondientes.

**Delitos Vinculados**

Esta Iniciativa también prevé la tipificación de conductas que no constituyen propiamente el delito de desaparición forzada o por particulares, pero que se encuentran íntimamente relacionadas con éstas y ameritan diversas sanciones.

Por ello, se propone establecer penas severas a quienes omitan entregar a la autoridad o familiares de la madre desaparecida, al nacido durante el periodo de ocultamiento, o falsifiquen documentos de identidad de una niña, niño o adolescente cuando quien ejerza su patria potestad sea víctima del delito de desaparición forzada.

También serán sancionados, desde luego, los servidores públicos que obstaculicen dolosamente las acciones de búsqueda por delitos de desaparición de personas.

**Sistema Nacional de Búsqueda de Personas**

Uno de los principales aspectos de la Iniciativa consiste en la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se traducirá en la colaboración entre las distintas instancias gubernamentales de los órdenes de gobierno, víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil, a través de un amplio espectro de registros, procesos, protocolos y acciones públicas.

Dicho Sistema también considera la creación de un registro de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional que permitirá prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.

**Creación de Unidades Especializadas**

La Iniciativa propone la creación de Unidades Especializadas tanto en la Federación como en las entidades federativas. Las Unidades Especializadas se encontrarán adscritas a la Procuraduría General de la República, por lo que respecta al ámbito federal, en tanto que en las entidades federativas estarán adscritas a las Fiscalías o Procuradurías Locales.

Dichas Unidades contarán con un grado mayor de especialización sobre la búsqueda, investigación y persecución de los delitos en materia de desaparición de personas. Para cumplir con estos objetivos, estarán facultadas para coordinarse con otras autoridades e instituciones, nacionales e internacionales. También podrán hacer partícipes a los familiares de las víctimas durante los procedimientos de búsqueda.

**De la Búsqueda**

La Iniciativa que se presenta establece también un procedimiento de Búsqueda que se adecúa a los más altos estándares internacionales, el cual permitirá que cualquier persona levante un reporte, sin importar hora o día, a través de una llamada telefónica al número único que para tal efecto se habilite, al acudir ante el Ministerio Público más cercano, o a la autoridad municipal respectiva. Es importante que los medios para levantar dicho reporte respondan debidamente a los principios de oportunidad, celeridad, gratuidad, protección de datos personales y accesibilidad, los cuales estarán garantizados en la presente Iniciativa.

**El Consejo Nacional Ciudadano**

Se establece el Consejo Nacional Ciudadano como un órgano de consulta en materia de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.

Dicho Consejo estará integrado por los familiares de las víctimas; por especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, o en la investigación y persecución de los delitos de desaparición de personas, y por representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

El nombramiento de sus integrantes se determinará mediante convocatoria pública. La participación en el Consejo Nacional Ciudadano será de carácter honorífica y por tanto, no será susceptible de emolumento o contraprestación económica alguna.

El Consejo Nacional Ciudadano podrá realizar recomendaciones a las autoridades que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, respecto a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas o no localizadas.

**De los Derechos de las Víctimas**

Un aspecto de la mayor relevancia en esta Iniciativa se encuentra relacionado con las víctimas de este terrible crimen. En los casos de la comisión de delitos de desaparición de personas, se considera que la víctima no solamente es la persona desaparecida o no localizada, con independencia de la causa, sino también sus familiares u otras personas afines.

Para proteger a estas víctimas, además de establecer la participación de diversas instancias gubernamentales y sociales, y puntualizar los derechos y facilidades económicas para las mismas, se determinan las medidas de atención inmediata para brindar ayuda, asistencia y atención. Además, se realizan importantes modificaciones que deberán hacerse en todo el país, respecto de los procedimientos de declaración de ausencia, incluyéndo también medidas de reparación integral que por su importancia, merecen una especial consideración.

**Declaración Especial de Ausencia**

En efecto, la Iniciativa prevé la necesidad de disponer de un procedimiento especial y expedito para que los familiares de la persona desaparecida puedan solicitar a la autoridad judicial competente la emisión de una Declaración Especial de Ausencia, la cual debe cumplir con las prevenciones establecidas en la misma Ley.

Esta declaración tiene como finalidad reconocer y proteger la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.

En virtud de la facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia, se propone entonces diseñar las bases a partir de las cuales las entidades federativas puedan legislar en la materia, con absoluto respeto a su autonomía constitucional, pero también de manera congruente y armónica, buscando favorecer a las víctimas de los delitos en materia de desaparición de personas.

**Medidas de Reparación Integral a las Víctimas de Desaparición Forzada**

Otro apartado de la Iniciativa de gran importancia, es el correspondiente al derecho de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas.

Asimismo, se establece la responsabilidad de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de asegurar la reparación del daño a la víctima del delito de desaparición forzada de personas, cuando se compruebe la plena responsabilidad de la comisión de dicho delito por parte de los servidores públicos, en cuyo caso la Federación tendrá el carácter de responsable subsidiario.

**Protección de Personas**

Conforme a la presente Iniciativa, las autoridades competentes deberán establecer programas para la protección de las personas involucradas en el proceso de búsqueda, investigación o proceso penal de personas desaparecidas o no localizadas, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro en razón de su intervención en dichos procesos.

Como medidas de protección urgentes se encuentran la reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas. Asimismo, se podrá otorgar, como medida de protección para enfrentar el riesgo, la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados y los demás medios de protección que se requieran, según sea el caso, para protegerlas.

Se establece también la obligación de tratar con confidencialidad la información y documentación relacionada con las personas protegidas.

**Prevención de los Delitos**

Finalmente, cabe señalar que la Iniciativa también dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ejecutarán prioritariamente políticas, programas, acciones y otras medidas, con la finalidad de contribuir a prevenir los delitos de desaparición de personas.

Lo anterior será adoptado para la prevención de estos ilícitos e incluirán la cooperación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad, nacionales e internacionales.

Con esta Iniciativa, el Gobierno Federal busca dar un gran paso que esté a la altura del reto que tiene el Estado mexicano para combatir de manera decidida la desaparición de personas, así como de proveer de manera eficaz y coordinada, en todos los órdenes de gobierno, a la búsqueda de las mismas a través de un Sistema Nacional que conjunte esfuerzos, registros y recursos de todo tipo para prevenir la incidencia de estos delitos intolerables para nuestra sociedad en un futuro.

Por todo lo anterior, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa Soberanía, la siguiente Iniciativa de

**DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se EXPIDE la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, para quedar como sigue:

# LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS

## TÍTULO PRIMERO
## DISPOSICIONES GENERALES

### CAPÍTULO ÚNICO

**Artículo 1.-** La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.-** La presente Ley tiene por objeto:

**I.** Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas;

**II.** Establecer los tipos penales en materia de desaparición de personas, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

**III.** Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y

**IV.** Garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas o no localizadas y sus familiares.

**Artículo 3.-** La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias. Al hacerlo, se promueven, respetan, protegen y garantizan los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

**Artículo 4.-** Para efectos de esta Ley se entiende por:

**I.** **Comisión Ejecutiva**: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

**II.** **Comisiones de Víctimas**: las Comisiones Estatales y del Distrito Federal de Atención a víctimas;

**III.** **Consejo**: el Consejo Nacional Ciudadano;

**IV.** **Declaración Especial de Ausencia**: la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición;

V. **Entidades Federativas**: las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución;

VI. **Familiares**: las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la Persona Desaparecida o no Localizada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida o no Localizada, que así lo acrediten ante las autoridades competentes;

VII. **Instituciones de Seguridad Pública**: las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, así como las dependencias encargadas de la Seguridad Pública en los órdenes federal, local y municipal;

VIII. **Persona Desaparecida**: la persona cuya ubicación es desconocida y su desaparición obedece, de acuerdo con la información con que cuenta la autoridad, a la probable comisión de algún delito previsto en esta Ley;

IX. **Persona no Localizada**: la persona cuya ubicación es desconocida y su no localización obedece, de acuerdo con la información con que cuenta la autoridad, a causas distintas de la comisión de algún delito previsto en esta Ley;

X. **Procuraduría:** la Procuraduría General de la República;

XI. **Procuradurías Locales**: las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas;

XII. **Registro Forense**: el Registro Forense Nacional;

XIII. **Registro Nacional:** el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

XIV. **Reglamento**: el Reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas;

XV. **Reporte**: la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

XVI. **Sistema Nacional de Búsqueda**: al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

XVII. **Tratados:** a los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, y

XVIII. **Unidades Especializadas**: las Unidades Especializadas de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales, en materia de desaparición de personas.

**Artículo 5.-** Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley son diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

I. **Búsqueda en vida:** en todas las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda y desarrollo de las investigaciones, se debe presumir que la Persona Desaparecida o no Localizada está con vida;

II. **Búsqueda efectiva y exhaustiva:** todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o no Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, con base a información útil, encaminadas a la localización y atendiendo a todas las posibles líneas de investigación;

III. **Enfoque diferencial:** al aplicar la ley, las autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada por las mismas;

IV. **Gratuidad:** todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, no tendrán costo alguno para las personas;

V. **Igualdad y no discriminación:** para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas a los que se refiere esta Ley, las actuaciones y diligencias deben ser conducidas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos o la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial debe fundarse en razones de enfoque diferencial;

VI. **Máxima protección:** la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas a que se refiere esta Ley;

VII. **No victimización:** la obligación de aplicar las medidas necesarias y justificadas de conformidad con los principios en materia de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados, para evitar que la Persona Desaparecida o no Localizada y las víctimas a que se refiere esta Ley, sean

revictimizadas en cualquier forma, así como eliminar los obstáculos para que éstas tengan acceso efectivo a sus derechos, y

**VIII. Verdad:** el derecho de conocer la verdad y recibir información sobre los hechos constitutivos de los delitos de desaparición de personas previstos en esta Ley, en tanto que el objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la protección de las víctimas, el castigo de los responsables y la reparación de los daños causados, en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 6.-** En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la Ley General de Víctimas.

## TÍTULO SEGUNDO
## DE LOS DELITOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 7.-** Los delitos de desaparición forzada y de desaparición por particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la víctima esté privada de la libertad o sus restos no hayan sido localizados.

**Artículo 8.-** El ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de terminación anticipadas del proceso u otras de similar naturaleza.

**Artículo 9.-** Los sentenciados por los delitos de desaparición forzada y de desaparición por particulares no tienen derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, salvo en los casos previstos en el artículo 25 de esta Ley.

Lo mismo aplica tratándose de inmunidades, indulto, amnistía o figuras análogas.

**Artículo 10.-** La desaparición forzada de personas y la desaparición por particulares no serán considerados delitos de carácter político para efectos de extradición.

**Artículo 11.-** No constituyen causas de exclusión de los delitos establecidos en los capítulos Tercero y Cuarto del Título Segundo de esta Ley, la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la comisión de estos delitos.

En ningún caso pueden invocarse circunstancias especiales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, suspensión de derechos y sus garantías, perturbación grave de la paz pública, como causa de justificación o inculpabilidad para cometer los delitos a que se refiere esta Ley.

**Artículo 12.-** Para la imposición de una multa es aplicable el concepto días multa previsto en el Código Penal Federal.

**Artículo 13.-** Los delitos previstos en esta Ley deben ser perseguidos conforme a las reglas de autoría y participación previstas en los artículos 13 y 14 del Código Penal Federal.

**Artículo 14.-** La tentativa punible de los delitos previstos en esta Ley se sancionará en términos del artículo 63 del Código Penal Federal.

**Artículo 15.-** Queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada en el Estado al que sería entregada.

**Artículo 16.-** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos distintos a los previstos en esta Ley, el agente del Ministerio Público advierte la probable comisión de algún delito previsto en el presente ordenamiento, debe identificar y remitir copia de la investigación a la Unidad Especializada competente.

**Artículo 17.-** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos previstos en esta Ley, la Unidad Especializada advierte la probable comisión de alguno o varios delitos distintos a los previstos en el presente ordenamiento, deberá remitir copia de la investigación a las autoridades ministeriales competentes, salvo en el caso de delitos conexos.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS

**Artículo 18.-** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades federales cuando:

**I.** Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo del delito;

**II.** Se actualicen las hipótesis de la competencia federal previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o en cualquier otra disposición que otorgue competencia a la Federación para conocer de un delito;

**III.** El Ministerio Público de la Federación solicite a la Unidad Especializada de la Entidad Federativa, en ejercicio de la facultad de atracción, la remisión de la investigación correspondiente, cuando exista una sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado Internacional, que hubiere determinado su responsabilidad internacional por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley, o

**IV.** El Ministerio Público de la Federación solicite a la Unidad Especializada de la Entidad Federativa, en ejercicio de la facultad de atracción, la remisión de la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.

**Artículo 19.-** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades de las Entidades Federativas en los casos no previstos en el artículo anterior.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

**Artículo 20**.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el o los servidores públicos o el particular o grupo de particulares, que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad, o a proporcionar la información disponible sobre la misma o su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección del ordenamiento jurídico.

**Artículo 21.-** También comete el delito de desaparición forzada de personas:

**I.** El servidor público que siendo superior jerárquico de otros servidores públicos bajo su inmediata autoridad y control efectivos, haya tenido conocimiento de que sus subordinados se proponían cometer o estuvieren cometiendo el delito tipificado en el artículo anterior y, conscientemente, haya sido omiso en tomar las acciones necesarias para prevenirlo, impedirlo o hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes, y

**II.** El servidor público o persona que por orden, con autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de un servidor público, a sabiendas de la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en el presente Capítulo y sin haber participado directamente en las mismas, incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la Persona Desaparecida.

**Artículo 22.-** Se impondrá pena de cincuenta a cien años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en el artículo 20 de esta Ley.

Se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa a los servidores públicos o cualquier persona que incurra en las conductas previstas en el artículo 21 de esta Ley.

Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.

**Artículo 23.-** Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 24.-** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando:

**I.** Durante o después de la desaparición, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito;

**II.** La víctima pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños y adolescentes, indígenas, mujeres embarazadas, adultos mayores o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirlo;

**III.** Incinere, sepulte, o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la víctima, salvo lo establecido en la fracción II del artículo 21 de esta Ley;

**IV.** El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, o

**V.** Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

**Artículo 25.-** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas conforme a lo siguiente:

**I.** Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en cuatro quintas partes;

**II.** Si los autores o partícipes proporcionan información relevante que conduzca a la localización con vida de la Persona Desaparecida o a dar con el paradero de los restos humanos de la misma, disminuirán hasta en dos terceras partes, o

**III.** Si los autores o partícipes proporcionan información relevante que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una mitad.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LA DESAPARICIÓN POR PARTICULARES

**Artículo 26.-** Comete el delito de desaparición por particulares, la persona o grupo de personas que, sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas con la finalidad de ocultarlas, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información disponible sobre su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección del ordenamiento jurídico.

**Artículo 27.-** Se considerará como partícipe del delito de desaparición por particulares, para los efectos de la presente Ley, a la persona que a sabiendas de la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en este Capítulo, incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la Persona Desaparecida cuya muerte se haya producido durante la desaparición.

**Artículo 28.-** Se impondrá pena de cuarenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa a los particulares que incurran en la conducta prevista en el artículo 26 de esta Ley. Asimismo, se impondrá pena de treinta a cincuenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa a quien incurra en la conducta prevista en el artículo 27 de esta Ley.

**Artículo 29.-** Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición por particulares durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición por particulares, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 30.-** Las penas aplicables para el delito de desaparición por particulares pueden ser modificadas conforme a las reglas previstas en los artículos 24 y 25 de esta Ley.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LOS DELITOS VINCULADOS CON LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

**Artículo 31.-** Se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas a que se refiere el artículo 62 de esta Ley.

**Artículo 32.-** Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de cien a quinientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 33.-** Se impondrá pena de tres meses a tres años de prisión a quien, conociendo el paradero o destino final de la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

**Artículo 34.-** Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil días multa a quien falsifique documentos de identidad de una niña o niño nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas o de desaparición por particulares durante el periodo de ocultamiento, con conocimiento de dicha circunstancia.

Se aplicarán las mismas penas a la persona que, dolosamente, utilice los documentos falsificados de una niña o niño a que se refiere el párrafo anterior, con el conocimiento de dicha circunstancia.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**Artículo 35.-** Los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

**Artículo 36.-** Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerará grave el incumplimiento injustificado de cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas.

## TÍTULO TERCERO
## DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 37.-** El Sistema Nacional de Búsqueda es el conjunto de procesos y acciones para la operación y coordinación de autoridades federales, de las Entidades Federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la búsqueda y localización de personas.

**Artículo 38.-** El Sistema Nacional de Búsqueda está conformado, como mínimo, por:

**I.** Los protocolos previstos en el artículo 67 de esta Ley;

**II.** El Registro Nacional;

**III.** El Registro Forense;

**IV.** El Registro Nacional de Fosas Clandestinas, y

**V.** Otros registros necesarios para su operación en términos de lo que prevé esta Ley.

**Artículo 39.-** En la ejecución de los procesos del Sistema Nacional de Búsqueda participan:

**I.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales;

**II.** Las Instituciones de Seguridad Pública;

**III.** Las instituciones de protección civil de la Federación, de las Entidades Federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

**IV.** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, y

**V.** Las demás autoridades e instancias federales, locales y municipales que puedan contribuir al cumplimiento de la presente Ley, en el ámbito de sus competencias.

También participarán en el Sistema Nacional de Búsqueda, los Familiares y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, en los términos de los lineamientos a que se refiere la fracción V del artículo 40 de esta Ley.

**Artículo 40.-** La Procuraduría es la instancia coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda y le corresponde emitir:

**I.** Los lineamientos generales que determinen el funcionamiento y la articulación para la coordinación con las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas;

**II.** Los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional;

**III.** Los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Forense;

**IV.** Los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional de Fosas Clandestinas;

**V.** Los lineamientos que regulen la participación de los Familiares y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda de personas, al proporcionar la información que consideren relevante a quienes participen en la ejecución de los procesos del Sistema Nacional de Búsqueda, y

**VI.** Las disposiciones necesarias para garantizar la consulta e interconexión permanente entre los diversos registros de manera eficaz y eficiente para la búsqueda de personas.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMPETENCIA DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

**Artículo 41.-** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Unidades Especializadas para la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas.

Las Unidades Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar como mínimo, con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados que se requieran para su efectiva operación.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar, conforme a los más altos estándares internacionales, a los servidores públicos adscritos a las Unidades Especializadas en materia de derechos humanos, atención a las víctimas, sensibilización y relevancia específica de la desaparición de personas, aplicación de protocolos de búsqueda y de identificación forense, cadena de custodia, entre otros. De igual forma, podrán participar con las autoridades competentes, en la capacitación de los servidores públicos que los Ayuntamientos designen en términos de la fracción III del artículo 51 de esta Ley.

**Artículo 42.-** La Unidad Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

**I.** Recibir las denuncias y Reportes relacionados con la desaparición o no localización de personas;

**II.** Iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de las Personas Desaparecidas o no Localizadas, así como solicitar la colaboración de los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda o de otras autoridades competentes para tales efectos;

**III.** Ejecutar de manera inmediata los protocolos que correspondan, para iniciar y coordinar la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas;

**IV.** Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas;

**V.** Recabar la información necesaria para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida o no Localizada y, en su caso, para la persecución e investigación de los delitos previstos en esta u otras leyes;

**VI.** Remitir copia de la investigación y las actuaciones realizadas a las autoridades competentes cuando advierta la comisión de uno o varios delitos diferentes a los previstos en esta Ley;

**VII.** Solicitar la participación de las autoridades competentes en materia de atención a víctimas, derechos humanos y protección civil, así como de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda de personas, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**VIII.** Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de las exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de las Personas Desaparecidas o no Localizadas;

**IX.** Solicitar a las autoridades competentes el traslado de los internos a otros centros de reclusión salvaguardando sus derechos humanos, siempre que esta medida favorezca la búsqueda o localización de las Personas Desaparecidas o no Localizadas;

**X.** Permitir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley, la participación de los Familiares en el proceso de búsqueda, así como informarles periódicamente sobre sus derechos y los avances en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o no

Localizadas, y en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

**XI.** Resguardar la información obtenida para la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia, protección de datos personales y archivos;

**XII.** Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de los servidores públicos especializados;

**XIII.** Celebrar convenios de colaboración o cooperación con autoridades locales y nacionales, así como proponer la celebración de éstos con autoridades internacionales, para el óptimo cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con la presente Ley;

**XIV.** Brindar la información que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas le soliciten para mejorar la atención a las víctimas;

**XV.** Proporcionar asistencia técnica a las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas que lo soliciten, y

**XVI.** Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

La Unidad Especializada de la Procuraduría debe iniciar y dar seguimiento a la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas en los supuestos a que se refiere el artículo 18 de esta Ley.

**Artículo 43.-** Las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas deben contar al menos, con las atribuciones previstas en el artículo anterior.

Las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas deben iniciar y dar seguimiento a la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas cuando no esté contemplado expresamente como competencia de la Federación.

Cuando los hechos tengan lugar en más de una Entidad Federativa, la Unidad Especializada de la Procuraduría establecerá mecanismos de coordinación con las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas correspondientes. La Unidad Especializada de las Entidades Federativas que reciba la denuncia o Reporte debe iniciar la búsqueda inmediata.

**Artículo 44.-** Cuando existan indicios suficientes de que algún servidor público está relacionado con la desaparición de una persona, éste no podrá participar en la búsqueda e investigación correspondiente.

**Artículo 45.-** En el supuesto previsto en el artículo anterior, la Unidad Especializada de la Procuraduría debe continuar sin interrupción la búsqueda de la Persona Desaparecida y la investigación de los delitos previstos en esta Ley, en términos de lo que establezca el protocolo de búsqueda por probable desaparición forzada de personas.

**Artículo 46.-** Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deben proporcionar, en el ámbito de su competencia, el auxilio e información que las Unidades Especializadas les soliciten para la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, así como en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 47.-** La Procuraduría puede celebrar acuerdos interinstitucionales con autoridades e instituciones para coordinar las acciones de búsqueda de mexicanos en el extranjero y migrantes extranjeros en el país.

**Artículo 48.-** Cuando sea necesaria una búsqueda internacional, la Procuraduría gestionará las acciones necesarias para realizar dicha búsqueda. Las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas deberán solicitar a la Procuraduría la realización de una búsqueda internacional cuando lo estimen pertinente.

**Artículo 49.-** Las personas físicas o morales que cuenten con información que pueda contribuir a la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas o a la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, deben proporcionarla a las Unidades Especializadas directamente o, a través del número telefónico previsto en el artículo 51, fracción I de esta Ley.

Las Unidades Especializadas no pueden condicionar la recepción de la información a que se refiere el párrafo anterior al cumplimiento de formalidad alguna.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

### SECCIÓN PRIMERA
### DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA

**Artículo 50.-** Cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una Persona Desaparecida o no Localizada mediante:

**I.** Reporte, o

**II.** Denuncia.

Los medios a que se refiere este artículo pueden realizarse en forma anónima.

**Artículo 51.-** El Reporte puede realizarse las veinticuatro horas del día, todos los días del año, a través de los medios siguientes:

**I.** Telefónico, a través del número único nacional que la Procuraduría habilite para tal efecto;

**II.** Presencial, ante cualquier agente u oficina del Ministerio Público, o

**III.** Cuando la distancia o los medios de comunicación no permitan realizarlo en términos de las fracciones anteriores, se podrá realizar de manera presencial, ante la policía o la autoridad municipal que el Ayuntamiento designe para tal efecto y que cuente con la capacitación para aplicar el protocolo de búsqueda correspondiente.

El levantamiento de Reportes debe responder a los principios previstos en el artículo 5 de la presente Ley. La Procuraduría, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, podrá establecer medios adicionales a los previstos en el párrafo anterior.

Salvo en el caso de Reportes realizados en términos de la fracción I de este artículo, la instancia que los reciba debe entregar constancia de ello a quien lo realizó.

En el caso de que la autoridad durante el proceso de búsqueda e investigación encuentre indicios que hagan suponer la presunta comisión de los delitos previstos en esta Ley, debe proceder de oficio a iniciar la investigación correspondiente.

La presentación de denuncias se sujetará a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 52.-** Las oficinas consulares de México deben recibir las solicitudes de búsqueda de los Familiares de Personas Desaparecidas o no Localizadas en México y remitirán sin dilación el Reporte a la Unidad Especializada de la Procuraduría.

**Artículo 53.-** La autoridad que reciba el Reporte o denuncia, según corresponda, debe recabar por lo menos, la información siguiente:

**I.** Nombre, edad y demás datos generales de la persona que lo presenta, salvo que se trate de un Reporte anónimo;

**II.** La ubicación desde la cual se realiza el Reporte;

**III.** El número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con la persona que realizó el Reporte, salvo que se trate de un Reporte anónimo;

**IV.** La persona que se reporta como desaparecida o no localizada y, en su caso, sus características físicas o cualquier otro dato que permita su identificación y localización;

**V.** La narración pormenorizada de los hechos ocurridos, incluyendo las circunstancia de tiempo, modo y lugar;

**VI.** La mención de las personas probablemente involucradas, con el señalamiento de todos los datos que puedan conducir a su identificación, incluida su media filiación, y

**VII.** Cualquier otra información, documentos o elementos que faciliten la búsqueda de las Personas Desaparecidas o no Localizadas y la investigación de los hechos.

Si la persona que realiza el Reporte o denuncia no otorga la información señalada en este artículo, la instancia que recabe el Reporte o denuncia, según corresponda, debe asentar las razones de esa imposibilidad.

La autoridad que recabe la información, documentos y elementos a que se refiere el presente artículo deberá asentar su nombre, cargo y dependencia gubernamental a la que se encuentre adscrito al momento de recibir el Reporte o denuncia.

La autoridad a que se refiere el párrafo anterior, estará obligada a entregar una copia del Reporte o denuncia a la persona que haya acudido a dar noticia de los hechos.

**Artículo 54.-** La autoridad que recabe el Reporte o denuncia debe transmitirlo inmediatamente a la Unidad Especializada que resulte competente en términos de lo dispuesto en el Capítulo Segundo de este Título, la cual debe aplicar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización.

La Unidad Especializada que reciba el Reporte debe ingresar la información, de inmediato al registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas que corresponda en términos del artículo 73 de esta Ley y generar un folio único de búsqueda, el cual se debe proporcionar a quien realizó el Reporte.

En el caso de la presentación de una denuncia, se debe proceder sin dilación a asignar el número de expediente o investigación, así como a ingresar la información al registro señalado en el párrafo anterior.

Cuando la persona que realizó el Reporte o la denuncia no haya proporcionado la información a que se refiere el artículo anterior, la Unidad Especializada debe asentar en el registro a que se refeire el párrafo segundo de este artículo, la razón de la imposibilidad.

La Unidad Especializada que coordina la búsqueda debe actualizar constantemente el estado de la búsqueda, para lo cual puede solicitar información a los Familiares.

**Artículo 55.-** La autoridad que reciba el Reporte o denuncia debe:

**I.** Instrumentar las acciones de búsqueda inmediata, conforme al protocolo aplicable;

**II.** Solicitar, en su caso, a la Unidad Especializada correspondiente, sin dilación, el ingreso de la información al registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas que corresponda en términos del artículo 73 de esta Ley, así como la coordinación de la búsqueda y el inicio de la investigación respectiva, y

**III.** Confrontar la información ingresada al registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas en términos de la fracción anterior, con los registros o bases de datos a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

**Artículo 56.-** La Unidad Especializada que reciba el Reporte o denuncia debe iniciar de inmediato la búsqueda de la Persona Desaparecida o no Localizada, mediante la aplicación del protocolo que corresponda.

La Unidad Especializada no puede negarse a instrumentar las acciones de búsqueda e investigación aunque considere ser incompetente. La Unidad Especializada sólo podrá suspender dichas acciones cuando la Unidad Especializada en cuyo favor haya declinado la competencia inicie las acciones de búsqueda e investigación correspondientes.

**Artículo 57.-** Durante la búsqueda, se presumirá que la Persona Desaparecida o no Localizada, se encuentra con vida.

La Unidad Especializada sólo podrá concluir con la búsqueda, incluso en los casos en que la Persona Desaparecida o no Localizada sea declarada ausente o presuntamente muerta, hasta que la persona o sus restos hayan sido encontrados, los hechos hayan sido esclarecidos, o se decrete el no ejercicio de la acción penal.

**Artículo 58.-** La Unidad Especializada, al momento de recibir un Reporte o denuncia, debe informar a los Familiares sobre la posibilidad de canalizarlos a la autoridad de atención a víctimas que corresponda, de conformidad con el Título Cuarto de esta Ley.

**Artículo 59.-** La Unidad Especializada puede solicitar a los Familiares la información que estime necesaria para localizar e identificar a la Persona Desaparecida o no Localizada.

**Artículo 60.-** La Unidad Especializada debe permitir la participación de los Familiares en las diligencias de búsqueda de la Persona Desaparecida o no Localizada, así como en la investigación y persecución de los delitos a que se refiere esta Ley, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cuando la presencia de los Familiares en dichas diligencias obstaculice la búsqueda o condicione la validez de la investigación, la Unidad Especializada debe asegurar la existencia de mecanismos alternativos para que los Familiares tengan conocimiento de las evidencias y diligencias del caso.

**Artículo 61.-** A efecto de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida o no Localizada, la Unidad Especializada que realice la búsqueda debe consultar las bases de datos o registros de:

**I.** Hospitales públicos y privados;

**II.** Centros de detención;

**III.** Servicios Médicos Forenses;

**IV.** Instituciones de Asistencia Social, en términos de la Ley de Asistencia Social;

**V.** Panteones;

**VI.** Identidad de personas;

**VII.** Estaciones migratorias y listas de control migratorio, y

**VIII.** Los demás registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización de las personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Las autoridades o instituciones que administran las bases de datos o registros a que se refiere este artículo deben tomar las medidas necesarias para que en dichas bases de datos y registros contengan la información de las personas a las que prestan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales proporcionarán asistencia a las instituciones a que se refiere el párrafo anterior a fin de facilitar el acceso a la información contenida en sus bases de datos o registros.

**Artículo 62.-** Cuando sea necesario para la investigación o exista algún indicio para la búsqueda de personas por probable desaparición forzada de personas en muebles o inmuebles de la

Federación, Entidades Federativas, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Unidad Especializada de la Procuraduría procederá de forma inmediata, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, a ejecutar de manera eficaz la inspección.

**Artículo 63.-** Las instituciones a cargo de los muebles o inmuebles a que se refiere el artículo anterior deben permitir a las Unidades Especializadas el acceso a los registros y bases de datos, en los términos que se establezcan en la autorización correspondiente.

**Artículo 64.-** Si en cualquier momento durante la búsqueda la persona es localizada, la Unidad Especializada correspondiente debe, como mínimo:

**I.** Dar aviso inmediato a la autoridad competente en materia de atención a víctimas;

**II.** Confirmar su identidad, de acuerdo con los protocolos de identificación forense emitidos en términos del artículo 67 de esta Ley;

**III.** Una vez identificada, notificarlo a quien solicitó la búsqueda, a sus Familiares, o en su caso, a la persona que ésta designe;

**IV.** En caso de que se localizara sin vida a la persona, se deberá proteger, respetar y restituir de manera digna a sus Familiares los restos humanos, así como entregar un informe de las circunstancias de la muerte y la forma en que se identificaron dichos restos;

**V.** Actualizar el registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas que corresponda en términos del artículo 73 de esta Ley, y

**VI.** Obtener la declaración de la persona localizada, en la cual señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su desaparición o no localización, así como los motivos de ellos y los probables responsables de la misma.

**Artículo 65.-** Cuando alguna autoridad identifique a una persona que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de parentesco, identidad y domicilio, debe dar aviso a las Unidades Especializadas correspondientes, a efecto de que se verifique si su desaparición o no localización fue reportada en el Registro Nacional. En caso de no existir Reporte o denuncia, las Unidades Especializadas deberán incorporar al registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas que corresponda en términos del artículo 73 de esta Ley los datos respectivos.

**Artículo 66.-** Las autoridades involucradas en la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, en el ámbito de sus competencias, deben asegurar que la información e indicios recabados atiendan las etapas y registros de procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DE LOS PROTOCOLOS

**Artículo 67.-** Las Unidades Especializadas deben realizar la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas o no Localizadas conforme a los protocolos que emitan la Procuraduría y las Procuradurías Locales, en el ámbito de sus competencias, en apego al modelo de Protocolo Homologado que sea aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

El modelo de Protocolo Homologado deberá contener, al menos, los criterios a seguir para la búsqueda de las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, previendo las reglas diferenciadas para probable desaparición forzada de personas, desaparición por particulares y delitos del orden común, la búsqueda de mujeres, niñas, niños y adolescentes, migrantes nacionales y extranjeros, así como la no relacionada con hechos delictivos. Asimismo, establecerá las pautas de identificación forense y atención a víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 68.-** Para elaborar los protocolos a que se refiere el artículo anterior, la Procuraduría y las Procuradurías Locales deben considerar, entre otros, los elementos siguientes:

**I.** Instrumentos de investigación, consultas comunitarias, análisis de los actores involucrados, estudios comparativos de modelos o prácticas exitosas, referencias hemerográficas, y evaluaciones de impacto, entre otros;

**II.** Mapas de denuncias, victimización, incidencia delictiva y delincuencia georreferencial;

**III.** Estudios de agencias de cooperación y centros de investigación locales, nacionales o internacionales;

**IV.** La situación específica del grupo social al que se encuentra dirigido el protocolo específico;

**V.** Análisis de datos y estadísticas oficiales que muestren las tendencias históricas, y

**VI.** Las mejores prácticas internacionales y los avances de la ciencia.

**Artículo 69.-** Los protocolos de búsqueda deben estar diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, y deben contener los procesos de búsqueda inmediata que establezcan las acciones que las autoridades deben realizar dentro de las primeras setenta y dos horas a partir de la recepción del Reporte o denuncia.

**Artículo 70.-** En adición a lo dispuesto en el artículo anterior, los protocolos de búsqueda deben contener, al menos, lo siguiente:

**I.** Las acciones de búsqueda en el lugar de los hechos o del hallazgo;

**II.** El procedimiento para definir los perímetros en donde debe realizarse la búsqueda;

**III.** Las diligencias ministeriales y policiales que deben realizarse relacionadas con la búsqueda;

**IV.** Los casos y mecanismos de coordinación con otras autoridades para realizar la búsqueda;

**V.** El procedimiento para identificar, localizar y entrevistar a personas y autoridades que puedan tener información que contribuya a la búsqueda;

**VI.** El procedimiento para consultar la información en los registros y bases de datos a que se refiere el artículo 61 de esta Ley;

**VII.** Los mecanismos para confrontar información con otros registros o bases de datos locales, nacionales o internacionales;

**VIII.** Los mecanismos de aplicación de recursos de todo tipo, necesarios para que la búsqueda sea exhaustiva;

**IX.** Las medidas para atender a personas en situación de vulnerabilidad;

**X.** El mecanismo para ingresar a personas a los programas de protección, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y las disposiciones análogas en las Entidades Federativas;

**XI.** Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales;

**XII.** Los mecanismos para mantener a los Familiares informados respecto de las acciones de búsqueda realizadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**XIII.** Los plazos y procedimientos para realizar la búsqueda, y

**XIV.** Los parámetros para racionalizar los recursos empleados en la búsqueda.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LOS REGISTROS

### SECCIÓN PRIMERA
### DEL REGISTRO NACIONAL

**Artículo 71.-** El Registro Nacional es una herramienta del Sistema Nacional de Búsqueda que permite conocer en forma inmediata los casos de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

**Artículo 72.-** El Registro Nacional se conforma con las bases de datos de los registros de Personas Desaparecidas o no Localizadas con que deben contar la Federación y las Entidades Federativas.

**Artículo 73.-** La Procuraduría debe coordinar la operación del Registro Nacional, así como administrar el Registro Federal de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en términos de lo que establezca el Reglamento.

Corresponde a las Procuradurías Locales coordinar la operación de su respectivo registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en términos de lo que establezcan los lineamientos a que se refiere el artículo 40 de esta Ley.

**Artículo 74.-** Los registros de la Federación y de las Entidades Federativas de Personas Desaparecidas y no Localizadas deben estar interconectados y en permanente actualización.

Para cumplir con sus fines de búsqueda, las Unidades Especializadas pueden consultar en cualquier momento el Registro Nacional. Las consultas que se realicen en cualquiera de los registros deben reportar la información contenida en los demás.

**Artículo 75.-** Los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Federación y de las Entidades Federativas deben contener, como mínimo, lo siguiente:

**I.** En relación con la persona que reporta la desaparición o no localización, salvo que sea anónima:

**a)** Nombre completo;

**b)** Edad;

**c)** Relación con la Persona Desaparecida o no Localizada;

**d)** Registro federal de contribuyentes o clave única de registro de población;

**e)** Domicilio, y

**f)** Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con ella;

**II.** En relación con la Persona Desaparecida o no Localizada:

**a)** Nombre;

**b)** Edad;

**c)** Sexo;

**d)** Nacionalidad;

**e)** Clave única de registro de población;

**f)** Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la Persona Desaparecida o no Localizada;

**g)** Descripción morfológica, señas particulares y demás datos que permitan su identificación;

**h)** Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista;

**i)** Escolaridad;

**j)** Actividad ocupacional;

**k)** Pertenencia grupal;

**l)** Antecedentes judiciales;

**m)** Antecedentes médicos;

**n)** Antecedentes odontológicos;

**o)** Personas que pueden aportar muestras biológicas, y

**p)** Teléfonos, redes sociales y otros;

**III.** Los hechos relacionados con la desaparición o no localización;

**IV.** El nombre del servidor público que recibió el Reporte o denuncia;

**V.** El nombre del servidor público que ingresa la información al registro;

**VI.** El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y

**VII.** En caso de que hubiere investigación penal, el nombre de la autoridad encargada de dicha investigación.

Asimismo, los registros a que se refiere este artículo deben incorporar la información novedosa que resulte de las diligencias de búsqueda e investigación .

**Artículo 76.-** Los datos personales contenidos en el Registro Nacional deben ser utilizados exclusivamente con el fin de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida o no Localizada y esclarecer los hechos.

**Artículo 77.-** El Registro Nacional puede ser consultado de manera pública a través de la página electrónica que para tal efecto establezca la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La información pública debe contener, por lo menos, la información siguiente:

**I.** La información de la Persona Desaparecida o no Localizada a que se refiere la fracción II del artículo 75 de esta Ley;

**II.** La autoridad responsable de coordinar la búsqueda, así como sus datos de contacto, y

**III.** El procedimiento a seguir en caso de contar con información que pueda contribuir a la localización de la persona.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DE LOS REGISTROS FORENSES

**Artículo 78.-** El Registro Forense es una herramienta del Sistema Nacional de Búsqueda que tiene por objeto proporcionar apoyo a la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

El Registro Forense se conforma con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, los cuales deben estar interconectados en tiempo real.

**Artículo 79.-** Corresponde a la Procuraduría coordinar la operación y centralizar la información del Registro Forense, así como administrar el Registro Forense Federal, en términos de lo que establezca el Reglamento.

Corresponde a las Procuradurías Locales coordinar la operación de su respectivo registro forense, en términos de lo que establezcan los lineamientos a que se refiere el artículo 40 de esta Ley.

**Artículo 80.-** Los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las Entidades Federativas deben recabar información científica de los cadáveres y restos humanos no identificados, de conformidad con los protocolos a que se refiere el artículo 67 de esta Ley.

**Artículo 81.-** Los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las Entidades Federativas deben capturar en el registro forense que corresponda, en términos del artículo 79 de esta Ley, la información que recaben conforme al artículo anterior.

**Artículo 82.-** La autoridad encargada de la toma de muestras debe informar a la persona que suministra la muestra o a su representante legal el uso que le dará a la información que recabe y entregarle una constancia de la diligencia.

**Artículo 83.-** La persona que proporcione información para análisis pericial debe otorgar previamente su consentimiento por escrito, y tiene derecho a designar, a su cargo, a peritos independientes para que en su presencia se recabe la muestra.

Los peritos independientes a que se refiere el párrafo anterior deben contar con la certificación legalmente expedida por instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en la especialidad de que se trate el análisis pericial. Para tal efecto, los peritos deben solicitar la validación de sus conocimientos o experiencia ante la autoridad judicial o ministerial que corresponda, mismas que no pueden negarla injustificadamente.

La designación y aceptación de los peritos independientes, y los dictámenes periciales que éstos formulen deben cumplir las disposiciones de la legislación procesal penal aplicable.

**Artículo 84.-** Además de la información pericial útil para la identificación de una persona, el Registro Forense debe contar con una base de datos de información genética que contenga, como mínimo:

**I.** La información genética de los cadáveres o restos biológicos humanos cuya identidad es desconocida;

**II.** La información genética de los Familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o segundo grado en línea colateral, de las Personas Desaparecidas o no Localizadas, y

**III.** La información genética de terceras personas en los casos en que así lo requiera la autoridad ministerial o judicial que corresponda.

Las muestras para análisis pericial y su subsecuente incorporación al registro forense que corresponda en términos del artículo 79 de esta Ley, sólo pueden recabarse a las personas mencionadas en la fracción II del presente artículo con su aceptación expresa y por escrito.

**Artículo 85.-** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede utilizarse en otras investigaciones cuando aporte elementos para la localización de una persona, cuando sea de utilidad para otros procedimientos penales seguidos por los delitos de desaparición forzada de personas o para el ejercicio del derecho de la víctima a obtener la reparación del daño.

**Artículo 86.-** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede ser confrontada con la información que esté en poder de otras autoridades e instituciones y que pueda ser útil para identificar a una persona.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben establecer los mecanismos de colaboración necesarios para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior.

**Artículo 87.-** Los datos personales contenidos en el Registro Forense deberán ser tratados de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La obtención, administración, uso y conservación de información forense deben realizarse con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados.

El Reglamento establecerá el procedimiento para que, una vez identificada la Persona Desaparecida o no Localizada, los titulares de los datos personales soliciten su eliminación del Registro Forense.

## SECCIÓN TERCERA
## DE LA DISPOSICIÓN DE CADÁVERES DE PERSONAS

**Artículo 88.-** Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.

Cuando las investigaciones revelen la identidad del cadáver de la persona, el agente del Ministerio Público competente podrá autorizar que los Familiares dispongan de él y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios para continuar con las investigaciones o para el correcto desarrollo del proceso penal.

En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría de Salud.

**Artículo 89.-** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben recabar las muestras necesarias para identificar un cadáver o resto humano antes de inhumarlo.

Una vez recabadas las muestras a que se refiere el párrafo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá autorizar la inhumación de un cadáver o resto humano no identificado. En el caso de inhumación, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que ésta sea digna y en un lugar claramente identificado que permita su posterior localización.

**Artículo 90.-** Para efectos de lo dispuesto en esta Sección, la Procuraduría y la Secretaría de Salud, determinarán las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres, mediante lineamientos que deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación.

## SECCIÓN CUARTA
## DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

**Artículo 91.-** Los registros a que se refiere este Título deben estar diseñados de tal forma que:

**I.** No exista duplicidad de registros;

**II.** Cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Procuraduría, y

**III.** Permitan la actualización permanente por parte de las Unidades Especializadas.

**Artículo 92.-** Además de lo establecido en el artículo anterior, la Procuraduría debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros a que se refiere este Título cuenten con las características siguientes:

**I.** Reflejen automática e inmediatamente cada registro en el Registro Nacional para efectos estadísticos;

**II.** Estén interconectados en tiempo real y su información esté respaldada;

**III.** Una vez ingresada la información de un Reporte o denuncia en el Registro Nacional, puedan realizar una búsqueda automática en las bases de datos referidas en el artículo 61 de esta Ley, y

**IV.** No cuenten con la posibilidad de eliminar registros.

La Procuraduría emitirá los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los Registros Forenses se interconecten en tiempo real.

## CAPÍTULO QUINTO
## DEL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO

**Artículo 93.-** El Consejo en materia de búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas es un órgano ciudadano de consulta de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales.

**Artículo 94.-** El Consejo está integrado por:

**I.** Tres Familiares;

**II.** Seis especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, y

**III.** Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil que protejan los derechos e intereses de las víctimas y sus Familiares.

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados mediante convocatoria pública, de conformidad con lo que disponga el Reglamento.

**Artículo 95.-** Los integrantes del Consejo deben durar en su encargo dos años, prorrogables sólo por un periodo igual, y no pueden nombrar suplentes o representantes. Los integrantes del Consejo ejercerán su cargo en forma honorífica, y no deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño.

Los integrantes del Consejo deben elegir a su presidente por mayoría de votos, quien durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez.

El Consejo debe emitir sus reglas de funcionamiento.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo deben ser comunicadas al titular de la Procuraduría o titulares de las Procuradurías Locales, según corresponda, conforme a lo que determinen sus reglas de funcionamiento y en ningún caso serán vinculantes.

La Procuraduría debe facilitar las instalaciones y elementos indispensables para el desarrollo de las reuniones del Consejo.

**Artículo 96.-** El Consejo tiene las funciones siguientes:

**I.** Recomendar a la Procuraduría y a las Procuradurías Locales las acciones que deben implementar para acelerar o profundizar sus acciones;

**II.** Recomendar acciones para mejorar las capacidades de identificación forense de las instituciones encargadas de proveer servicios periciales para la impartición de justicia;

**III.** Sugerir la adopción de medidas adicionales que garanticen la seguridad de las víctimas, los Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, en términos del Capítulo Quinto del Título Cuarto de esta Ley;

**IV.** Proporcionar, previa solicitud de la Unidad Especializada que corresponda, asistencia técnica para la búsqueda e investigación de hechos relacionados con la desaparición o no localización de personas;

**V.** Acceder a la información pública contenida en el Registro Nacional y el Registro Forense, y

**VI.** Las demás que señale el Reglamento.

**Artículo 97.-** Las decisiones que el Consejo adopte son públicas, en apego a la legislación de transparencia y protección de datos personales.

## TÍTULO CUARTO
## DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 98.-** Para efectos de lo establecido en esta Ley, se entiende como víctima a la Persona Desaparecida o no Localizada, y a los Familiares de las mismas.

**Artículo 99.-** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y atención, por sí mismas o en coordinación con otras instituciones competentes, en los términos del presente Título y en la Ley General de Víctimas.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN

**Artículo 100.-** Los Familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición o no localización, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en la Ley General de Víctimas, y conforme a lo dispuesto en este Título.

**Artículo 101.-** Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las Cómisiones de Víctimas en tanto las instituciones públicas competentes brinden la atención respectiva.

La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere el presente Título, en forma individual, grupal o familiar, según corresponda.

**Artículo 102.-** Cuando concluya el otorgamiento de las medidas a que se refiere este Capítulo, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben orientar a las víctimas que lo soliciten sobre los programas sociales en los que puedan resultar beneficiarias conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 103.-** Con independencia de lo previsto en la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva será competente para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas relacionadas con la probable comisión de un delito federal de desaparición forzada de personas y en los casos previstos en el artículo 107 de esta Ley.

**Artículo 104.-** Las Comisiones de Víctimas están facultadas para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas distintas a las mencionadas en el artículo anterior.

**Artículo 105.-** Si al momento de solicitar las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere este Título, no se desprende la naturaleza federal o local de la desaparición o no localización, la comisión de atención a víctimas ante quien se presente la víctima deberá proporcionar dichas medidas de ayuda, asistencia y atención.

**Artículo 106.-** Cuando durante la búsqueda o investigación exista un cambio de fuero, las víctimas deben seguir recibiendo las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere este Título por la comisión de atención a víctimas del fuero que corresponda.

**Artículo 107.-** La Comisión Ejecutiva puede otorgar las medidas de ayuda provisional a las víctimas a que se refiere esta Ley, que corresponda brindar a las Comisiones de Víctimas, siempre y cuando:

**I.** La Comisión de Víctimas a la que corresponda originalmente la atención de la víctima lo solicite por no tener capacidad de otorgar las medidas con sus recursos, una vez agotadas las instancias competentes para proporcionarlas, y

**II.** La Comisión Ejecutiva cuente con los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para tal efecto.

Sin perjuicio de que deberán otorgarse dichas medidas cuando se reúnan los requisitos a que se refiere este artículo, la Comisión Ejecutiva convendrá con las Comisiones de Víctimas, los términos y condiciones bajo los cuales estas últimas colaborarán en la atención y, en su caso, resarcirán los gastos que realice aquélla. Asimismo, dichos convenios contemplarán los mecanismos de coordinación y para compensar los gastos que, en su caso, incurran las comisiones de atención a víctimas en los supuestos de los artículos 105 y 106 de esta Ley.

**Artículo 108.-** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para la atención de las víctimas a que se refiere esta Ley, tienen las atribuciones siguientes:

**I.** Planear, programar y dar seguimiento a las medidas de ayuda, asistencia y atención otorgadas a las víctimas;

**II.** Proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas, por sí misma o en coordinación con otras instituciones competentes;

**III.** Acompañar a las víctimas a lo largo del proceso de búsqueda o del proceso legal correspondiente, con el fin de que cuenten con una asesoría legal adecuada para la defensa de sus derechos;

**IV.** Solicitar a las instituciones que llevan a cabo la investigación de los delitos a que se refiere esta Ley, la información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones;

**V.** Solicitar información a la Unidad Especializada competente para mejorar la atención brindada a las víctimas y, en su caso, para facilitar su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas;

**VI.** Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas de la Federación, de las Entidades Federativas y de los municipios, así como con organismos e instituciones de carácter social o privado, nacionales e internacionales, para la atención a las víctimas, con el fin de mejorar el cumplimiento de sus atribuciones;

**VII.** Establecer protocolos de atención a víctimas y brindar capacitación en esa materia a las autoridades que lo soliciten;

**VIII.** Generar, compilar y sistematizar la información derivada de los programas y mecanismos de atención a las víctimas, en términos de lo previsto en esta Ley y la Ley General de Víctimas;

**IX.** Promover la participación en materia de atención a víctimas de los sectores público, social y privado en las actividades a su cargo;

**X.** Establecer módulos para apoyar la debida atención a las víctimas;

**XI.** Participar en el desarrollo de redes de información sobre la atención a las víctimas, y

**XII.** Las demás que establezca esta Ley y otras leyes.

**Artículo 109.-** Las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia y con sujeción a los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con que cuenten, pueden complementar las medidas de ayuda, asistencia y atención que otorguen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas.

Las erogaciones para cubrir las medidas de ayuda, asistencia y atención que la Comisión Ejecutiva proporcione en el marco de esta Ley, podrán ser cubiertas con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas.

**Artículo 110.-** Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones económicas derivadas de las medidas que brinden las Comisiones de Víctimas.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA

**Artículo 111.-** Los Familiares pueden solicitar al juez que corresponda según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo que disponga la legislación civil de la Federación y de las Entidades Federativas.

**Artículo 112.-** Las leyes de la Federación y de las Entidades Federativas deben establecer el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, sin que el plazo para resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia exceda de seis meses a partir de iniciado el procedimiento.

El procedimiento para emitir la Declaración Especial de Ausencia deberá ser gratuito, en términos de lo que prevé este Capítulo.

Los procedimientos a que se refiere este Capítulo deben contemplar la posibilidad de emitir medidas provisionales durante el procedimiento.

**Artículo 113.-** La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad:

**I.** Reconocer y proteger la personalidad jurídica de la Persona Desaparecida, y

**II.** Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares de la Persona Desaparecida o no Localizada.

**Artículo 114.-** La Federación y las Entidades Federativas deben prever, al menos, los siguientes efectos de la Declaración Especial de Ausencia cuando resulte aplicable:

**I.** Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida en relación con los hijos menores de edad o la designación de un tutor provisional cuando exista posibilidad de que ambos padres sean sujetos pasivos de los delitos establecidos en esta Ley, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;

**II.** Fijar los derechos de guarda y custodia de los menores de edad en los términos de la legislación civil aplicable;

**III.** Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

**IV.** Fijar la forma y plazos para que los Familiares de la Persona Desaparecida pueden acceder, a fin de atender sus necesidades y previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;

**V.** Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida, continúen gozando de los beneficios en materia de salud;

**VI.** Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles o civiles en contra de la Persona Desaparecida o sus bienes;

**VII.** Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, y

**VIII.** Proveer a la representación legal de la persona ausente cuando corresponda.

**Artículo 115.-** La Declaración Especial de Ausencia sólo tiene efectos de carácter civil, por lo que no produce efectos de prescripción penal ni constituyen prueba plena en otros procesos judiciales.

**Artículo 116.-** Las Unidades Especializadas deben continuar con la búsqueda e identificación de la Persona Desaparecida o no localizada, de conformidad con el artículo 57 de la Ley, así como con la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, aun cuando alguno de los Familiares haya solicitado la Declaración Especial de Ausencia.

**Artículo 117.-** Si la Persona Desaparecida o no localizada declarada ausente es localizada con vida, ésta puede solicitar ante el juez que declaró la ausencia la recuperación de sus bienes en el estado en que se hallen. En este caso, la persona no puede reclamar frutos ni rentas.

Si la Persona Desaparecida o no localizada declarada ausente es encontrada sin vida, los Familiares pueden solicitar al juez civil competente iniciar el procedimiento de sucesión, en términos de la legislación civil aplicable.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

**Artículo 118.-** Las víctimas del delito de desaparición forzada de personas tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 119.-** Para efectos de lo establecido en el artículo anterior, la reparación integral a las víctimas del delito de desaparición forzada de personas comprenderá, además de lo establecido en la Ley General de Víctimas, los elementos siguientes:

**I.** Medidas de satisfacción:

- **a)** Construcción de lugares o monumentos de memoria;
- **b)** Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas;
- **c)** Recuperación de escenarios de encuentro comunitario, o
- **d)** Recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante, y

**II.** Medidas de no repetición, que deben incluir la readscripción, suspensión o remoción de los servidores públicos investigados o sancionados por la comisión de del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso y previo desahogo de los procedimientos administrativos o judiciales que correspondan.

**Artículo 120.-** Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, son responsables de asegurar la reparación del daño a la víctima del delito de desaparición forzada de personas cuando sean responsables sus servidores públicos o particulares bajo la autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de éstos. La Federación será responsable subsidiaria para asegurar, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas, la reparación del daño causado a la víctima del delito de desaparición forzada de personas, siempre y cuando la Entidad Federativa lo solicite por escrito por no contar con disponibilidad de recursos y se comprometa a resarcir a dicho Fondo en un plazo determinado. 'En caso de que el Fondo no sea resarcido, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de repetir contra la Entidad Federativa y contra quienes hayan cometido el delito.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

**Artículo 121.-** Las Unidades Especializadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben establecer programas para la protección de las víctimas, los Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal o las leyes análogas de las Entidades Federativas.

**Artículo 122.-** Las Unidades Especializadas pueden otorgar como medida urgente de protección la reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo anterior, conforme a los procedimientos y con las autorizaciones aplicables.

**Artículo 123.-** Las Unidades Especializadas pueden otorgar, como medida de protección para enfrentar el riesgo, la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados, y demás medios de protección que se requieran para para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo 121 de esta Ley, conforme a los procedimientos y con las autorizaciones aplicables.

**Artículo 124.-** La incorporación a los programas de protección de personas a que se refiere el artículo 121 de esta Ley debe ser autorizada por los titulares de las Unidades Especializadas correspondientes.

**Artículo 125.-** La información y documentación relacionada con las personas protegidas debe ser tratada con estricta reserva o confidencialidad, según corresponda.

## TÍTULO QUINTO
## DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 126.-** La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deberán coordinarse para implementar las medidas de prevención previstas en el artículo 129 de esta Ley.

Lo anterior con independencia de las establecidas en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 127.-** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben administrar bases de datos estadísticas relativas a la incidencia de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 128.-** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben realizar diagnósticos y deben implementar las acciones específicas de prevención a que se refiere el artículo siguiente, a partir de la información contenida en las bases de datos previstas en el artículo 127 de esta Ley.

**Artículo 129.-** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben, respecto de los delitos previstos en esta Ley:

**I.** Llevar a cabo campañas dirigidas a fomentar la denuncia de los delitos;

**II.** Proponer acciones de capacitación a las instituciones ministeriales, policiales y periciales que tengan como objeto la adecuada investigación y sanción de los delitos;

**III.** Proponer e implementar programas que incentiven a la ciudadanía a proporcionar la información con que cuenten para la investigación de los delitos, así como para la ubicación y rescate de las Personas Desaparecidas o no Localizadas;

**IV.** Promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales para fortalecer la prevención de las conductas delictivas;

**V.** Recabar y generar información respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en materia de prevención e investigación de los mismos;

**VI.** Identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos, así como hacer pública dicha información de manera anual;

**VII.** Proporcionar información y asesoría a las personas que así lo soliciten, de manera presencial, telefónica o por escrito o por cualquier otro medio, relacionada con el objeto de esta Ley, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos;

**VIII.** Reunirse, por lo menos una vez al año, para intercambiar experiencias que permitan implementar políticas públicas en materia de prevención de los delitos;

**IX.** Emitir un informe anual respecto de las acciones realizadas para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, y

**X.** Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 130.**- Las Unidades Especializadas deben intercambiar la información que favorezca la investigación de los delitos previstos en esta Ley y que permita la identificación y sanción de los responsables.

**Artículo 131.-** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben diseñar los mecanismos de colaboración que correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

**Artículo 132.** La Procuraduría en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda debe diseñar y aplicar programas que permitan combatir las causas que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial referencia a la marginación y la desigualdad social.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA PROGRAMACIÓN

**Artículo 133.-** Los programas de prevención a que se refiere el presente Título deben incluir metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a servidores públicos.

**Artículo 134.-** La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal están obligados a remitir anualmente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos generados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estudios sobre las causas, distribución geográfica de la frecuencia delictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos previstos en esta Ley, así como su programa de prevención sobre los mismos.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA CAPACITACIÓN

**Artículo 135.-** Las Unidades Especializadas y la autoridad municipal que el titular del Ayuntamiento determine deben establecer programas obligatorios de capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a los principios referidos en el artículo 5 de esta Ley, para servidores públicos de Instituciones de Seguridad Pública y de seguridad nacional involucrados en la búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos.

**Artículo 136.-** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar a sus servidores públicos conforme a los más altos estándares internacionales, respecto de las técnicas de investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere esta Ley, con pleno respeto a los derechos humanos.

**Artículo 137.-** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben capacitar a sus servidores públicos, conforme a los más altos estándares internacionales, para brindar medidas de ayuda, asistencia y atención con un enfoque psicosocial para los delitos a que se refiere esta Ley.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben implementar programas de difusión a efecto de dar a conocer los servicios y medidas que brindan a las víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley, en términos de lo previsto en este ordenamiento.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se **REFORMA** el tercer párrafo del artículo 25; se **DEROGA** el Capítulo III Bis del Título Décimo conformado por los artículos 215-A a 215-D, y se **ADICIONA** un artículo 280-Bis al Título Décimo Séptimo, todos del Código Penal Federal, para quedar como siguen:

**Artículo 25.-** ...

...

El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo no es aplicable para los delitos que se sancionen de conformidad con lo estipulado en otras leyes.

## CAPITULO III BIS
## Desaparición forzada de personas

**Artículo 215-A.-** Derogado

**Artículo 215-B.-** Derogado

**Artículo 215-C.-** Derogado

**Artículo 215-D.-** Derogado.

## TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
## Delitos en Materia de Inhumaciones y Exhumaciones

### Capítulo Único
### Violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones

**Artículo 280 Bis.- Se impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcial el cadáver o restos humanos de una persona no identificada, sin autorización de las autoridades competentes en la materia.**

**ARTÍCULO TERCERO**. Se **REFORMAN** los artículos 348, segundo párrafo; 350 bis 3, segundo párrafo; 350 Bis 4 y 350 Bis 5, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

**Artículo 348.-**...

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. **Para el caso de cadáveres de personas no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas**.

...

**Artículo 350 Bis 3.-**...

Tratándose de cadáveres de personas desconocidas o no identificados se estará a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

**Artículo 350 Bis 4.-** Las instituciones educativas **sólo podrán utilizar cadáveres respecto de los que tengan el consentimiento, ante mortem de la persona fallecida o de sus familiares después de su muerte.**

**Las instituciones educativas que reciban cadáveres para efectos de investigación o de docencia deberán tener un registro que contenga, por lo menos:**

I. **Nombre completo de la persona fallecida;**

II. **El domicilio en el que habitaba la persona fallecida;**

III. **Edad que tenía la persona al fallecer;**

IV. **Sexo de la persona fallecida;**

V. **Estado civil de la persona fallecida;**

VI. **Nombre y domicilio del cónyuge, concubina o concubinario;**

VII. **Nombre y domicilio de los padres y en caso de haber fallecido éstos, la mención de este hecho;**

VIII. **En caso de no tener cónyuge, concubina o concubinario, o padres, el señalamiento del nombre y domicilio de alguno de sus familiares más cercanos, y**

IX. **El nombre de la institución educativa beneficiaria del cadáver.**

**Artículo 350 Bis 5.-** Los cadáveres que se hayan destinado para fines de docencia e investigación serán inhumados o incinerados.

## TRANSITORIOS

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la emisión de los instrumentos a que se refiere el artículo Décimo transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y demás autoridades deberán cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales, además de los protocolos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, continuarán aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad.

**SEGUNDO.** Se abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**TERCERO.** El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

Las Entidades Federativas deberán armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable.

**CUARTO**. Los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas que hayan sido cometidos antes de su entrada en vigor serán sancionados conforme a la legislación vigente al momento de su comisión. Lo anterior, sin perjuicio de la naturaleza de las conductas a que se refiere el artículo 7 de dicha Ley.

**QUINTO**. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir el Reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, así como armonizar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

**SEXTO.** Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Procuraduría debe emitir los lineamientos a que se refiere el artículo 40 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Federal de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro Federal de Personas Desaparecidas y no Localizadas, las Entidades Federativas deberán poner en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

**SÉPTIMO.** En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas a que se refiere el transitorio anterior, las Procuradurías Locales deberán incorporar en un registro provisional, electrónico o impreso, la información de los Reportes o denucnias recibidas conforme a lo que establece el artículo 75 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

La Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la información contenida en los registros provisionales a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

**OCTAVO.** Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá transferir a la Procuraduría General de la República las herramientas tecnológicas y la información que haya recabado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dentro de los sesenta días siguientes a que reciba la información a que se refiere el párrafo anterior, la Unidad Especializada de la Procuraduría deberá transmitir a la Unidad Especializada de cada Entidad Federativa la información de las Personas Desaparecidas o no Localizadas que correspondan al ámbito de su competencia.

Las Unidades Especializadas deberán actualizar el contenido del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, conforme a lo siguiente:

**I.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que reciban la información, la Unidad Especializada que corresponda deberá recabar información sobre las personas inscritas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que correspondan a su ámbito de competencia, a fin de que dicha información esté apegada a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas;

**II.** En términos de la fracción anterior, las Unidades Especializadas que estén impedidas materialmente para actualizar la información dentro del plazo previsto, deberán publicar un padrón con el nombre de las Personas Desaparecidas o no Localizadas cuya información no haya sido actualizada, a efecto de que, dentro de los ciento veinte días siguientes, los Familiares y organizaciones de la sociedad civil proporcionen la información necesaria para realizar dicha actualización;

**III.** Una vez actualizada la información, la Unidad Especializada deberá ingresarla al registro que corresponda, a excepción de que la actualización revele que la persona fue localizada, en cuyo caso, se asentará en el Registro, y

**IV.** En los casos en que, a pesar de haber agotado la acción prevista en la fracción II de este artículo, la Unidad Especializada está materialmente imposibilitada para actualizar un registro, éste permanecerá con la anotación de actualización pendiente y será migrado, con ese carácter, al registro que corresponda.

**NOVENO.** El Registro Forense Nacional, el Federal y el de las Entidades Federativas comenzarán a operar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los tres meses siguientes a que inicie la operación de dichos registros, las autoridades que posean información forense deberán incorporarla al registro que corresponda.

**DÉCIMO.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deberá emitir el modelo de Protocolo Homologado a que se refiere el artículo 67 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

Dentro de los noventa días siguientes a la emisión de modelo a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría y las Procuradurías Locales deberán emitir y aplicar los protocolos establecidos en el referido artículo 67 de la Ley, incluso en aquellos casos en los que el Reporte o denuncia se haya solicitado con anterioridad.

En tanto la Procuraduría y las Procuradurías Locales expidan los protocolos que les correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, continuarán aplicando lo dispuesto en las disposiciones y protocolos vigentes en la materia, siempre que no se opongan a lo previsto en dicha Ley.

**DÉCIMO PRIMERO.** Las autoridades e instituciones que administran las bases de datos o registos a que se refiere el artículo 61 deberán establecer dichas bases de datos o registros en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**DÉCIMO SEGUNDO.** En las Entidades Federativas en las que no exista una comisión de atención a víctimas, las instituciones públicas competentes de la Entidad Federativa deberán brindar la atención a víctimas conforme a lo establecido en el Título Cuarto de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

En el supuesto establecido en el párrafo anterior, la solicitud a que se refiere la fracción I del artículo 107 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas deberá ser suscrita por el Secretario de Gobierno de la Entidad Federativa, correspondiente.

**DÉCIMO TERCERO.** El Consejo deberá estar instalado dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

**DÉCIMO CUARTO.** Una vez que, en términos de lo dispuesto en el Sexto transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas, la Comisión Ejecutiva y la Procuraduría y las Procuradurías Locales, suscribirán convenios de colaboración para la transmisión de información de las víctimas de desaparición al Registro Nacional de Víctimas.

**DÉCIMO QUINTO.** En un periodo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Ejecutiva deberá llevar a cabo los actos necesarios para realizar las modificaciones orgánicas que sean indispensables para el cumplimiento de lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como al fideicomiso que administra los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

**DÉCIMO SEXTO.** Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, en los términos de la legislación aplicables, deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.

**DÉCIMO SÉPTIMO.-** La Procuraduría y la Secretaría de Salud emitirán los lineamientos a que se refiere el artículo 90 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de dicho ordenamiento.

**DÉCIMO OCTAVO**. Las Unidades Especializadas entrarán en funcionamiento dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HOJA DE FIRMA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Reitero a Usted Ciudadano Presidente, las seguridades de mi distinguida consideración.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil quince.

**EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**ENRIQUE PEÑA NIETO**

*HCC

R. 17

## HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, fueron turnadas para su estudio, análisis y elaboración del dictamen procedente las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. Iniciativas que se detallan en el apartado de Antecedentes de este dictamen.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las iniciativas citadas y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base a la expedición de la ley y las reformas planteadas.

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas formula su dictamen al tenor de la siguiente:

## METODOLOGÍA

**I.** En el apartado de "**ANTECEDENTES**" se da constancia de trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción y turno de las iniciativas para la elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas Comisiones Unidas, incluidas las Audiencias Públicas celebradas en torno al tema.

**II**. En el apartado relativo al "**AL OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS**" se sintetizan las propuestas de la ley que se expide en la materia y las reformas, adiciones y derogación de disposiciones legales relacionadas con la misma.

**III**. En el apartado de "**ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS O PROCESO PÚBLICO DE DELIBERACIÓN PARA ANALIZAR SU SENTIDO Y ALCANCE**", se relacionan las distintas modalidades de reuniones públicas, foros, mesas de discusión y debate con servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, especialistas, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales en el tema central que se impulsa con las iniciativas que se dictaminan. Reuniones en las que se dio entrada a recomendaciones puntuales, la recepción pública y abierta de opiniones técnicas y comentarios considerados para enriquecer el proyecto que se presenta.

**IV**. En el apartado de "**CONSIDERACIONES**" se plasman las razones que, a juicio de las Comisiones Unidas, determinan la viabilidad jurídica de las propuestas, su apego al marco constitucional y convencional asumido por el Estado mexicano. Razones que constituyen la base que motiva y sustenta el sentido del presente Dictamen.

**V**. En el apartado relativo al "**PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO**", se plantean las propuestas específicas de modificaciones o adecuaciones que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del H. Pleno de la Cámara de Senadores.

## I. ANTECEDENTES.

1. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 13 de febrero de 2014, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

En la misma fecha, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

2. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 18 de marzo de 2015, el Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 24 de marzo de 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática presentó la Iniciativa con proyecto con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas; y se reforman y adicionan los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

4. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 16 de abril de 2015, el Senador Omar Fayad Meneses, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

5. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 17 de septiembre de 2015, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández, Layda Sansores San Román y Silvia Guadalupe Garza Galván, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares.

En esa misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

6. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 14 de diciembre de 2015, en representación y por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas; y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la Iniciativa de

referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

7. Las iniciativas en estudio se orientan a la adopción de medidas eficaces para prevenir, sancionar y erradicar, en lo posible, una conducta que daña uno de los bienes más preciados del ser humano: su libertad en sentido amplio. Una conducta que, se manifiesta en la ocultación dolosa propiciada por agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de dicho Estado, o bien por particulares por si solos, seguida de la falta de información, o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de comunicar sobre el paradero de las víctimas. Asimismo, dichas iniciativas proponen la tipificación de delitos vinculados que no constituyen propiamente el delito de desaparición forzada o por particulares; un sistema nacional de búsqueda de personas, la creación de unidades especializadas, de protocolos de búsqueda, de consejos ciudadanos consultivos, de una regulación especial para la declaración especial de ausencia, así como la ampliación de los derechos de la víctimas por la comisión de este delito. En su orden, el objeto y la descripción de estos proyectos se traduce:

## II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

**1) INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. PRESENTADA POR LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ EL 13 DE FEBRERO DE 2014.**

Cimentada en el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal, la primera de las iniciativas responde a peticiones de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y familiares de personas desaparecidas. Esta iniciativa propone la creación del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia a la que se impone la obligación de mantener un registro actualizado de todas las personas en cualquier modalidad de detención, por parte de cualquier autoridad federal. Asimismo equipara al delito de desaparición forzada de personas, con la omisión de entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada. Por otra parte esta iniciativa establece circunstancias agravantes de la pena en los casos en que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos, menor de 18 años de edad, mujer que se encuentre embarazada; migrantes o indígenas, entre otras. Concede al Ministerio Público un plazo máximo de seis meses a partir de iniciado el procedimiento para determinar si ha lugar al ejercicio de la acción penal, en cuyo caso, debe consignar el asunto a los tribunales competentes. De igual modo impone al juez que emita el auto de radicación al inicio de la fase de instrucción, la obligación de nombrar, de manera oficiosa, apoderado legal de la persona desaparecida conforme a la legislación aplicable; así como dictar las medidas provisionales conducentes y emitir la Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición en el mismo acto.

Acorde con el propósito de consolidar un marco legal que propicie la defensa más enérgica de la libertad física de los mexicanos, esta iniciativa se presenta con veinticinco artículos principales y cinco

transitorios. Los primeros, distribuidos en cinco capítulos. En el Capítulo I, con el rubro de "Disposiciones Generales", se comprenden directrices que determinan el objeto y ámbito de validez espacial de la ley; la obligación a cargo de las autoridades federales de mantener a quienes estén privados de su libertad en lugares oficialmente reconocidos, presentarlos sin demora ante la autoridad judicial e ingresar sus datos correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención. Asimismo se establece: la obligación impuesta a los órganos del Ejecutivo Federal que tengan la facultad de realizar detenciones y a los órganos encargados de la seguridad nacional, para llevar a cabo programas permanentes y establecer procedimientos encauzados a la orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de las personas que se encuentren detenidas; la organización de programas de formación de su personal para garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos; la profesionalización de las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y nacional en una cultura de respeto a los derechos, así como y la prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada.

En un Capítulo II, innominado, de organización y de competencia, se describe el propósito del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas; se impone al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la obligación de implementar y actualizar ese Registro. Para cumplir con esta exigencia, se atribuyen al Secretariado Ejecutivo las facultades necesarias; se consigna a cargo de las autoridades que efectúen la detención, la obligación de enviar la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas dentro de las seis horas posteriores a su detención, verificar su envío y, en su caso, hacerlo de inmediato; y cuando haya algún cambio en la condición jurídica o ubicación física de la persona detenida, la autoridad que la ordene deberá de dar aviso de inmediato para mantener actualizada la información.

En un Capítulo III, denominado "De los Delitos de Desaparición Forzada de Personas", en los artículos 9o. al 17, se advierte la penalidad y tipos de este delito con algunos cambios de forma en su estructura y sustanciales en los extremos de la pena privativa de libertad considerados con relación a los que se contemplan en los artículos 215-A al 215-D del Código Penal Federal. Así, en el primero de los preceptos de la ley que se expide, se consumará el delito de desaparición forzada de persona por el servidor público que realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad, omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre éstas, oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo, se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima, o dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso. Bajo ese tenor, cuando el agente a través de cualquiera de los distintos modos de obrar que es dable asumir para consumar el delito, lesiona la libertad personal de obrar y de moverse del pasivo, el injusto criminal podrá aparecer de cuarenta y dos formas posibles. A saber:

A. Si el modo de obrar del agente se exterioriza a través de la conducta que conlleva el verbo transitivo realizar, que se traduce en efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción:

1. Al realizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer esta circunstancia;

2. Al realizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y omita dolosamente rendir informe sobre éstas;

3. Al realizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a rendir informe sobre dicha circunstancia;

4. Al realizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

5. Al realizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima;

6. Al realizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

B. Si el modo de obrar del agente se exterioriza a través de la conducta que conlleva el verbo transitivo ordenar, que se traduce en el mandato o la imposición dirigida a otro para que se lleve a cabo algo o ejecute una acción:

1. Al ordenar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer esta circunstancia;

2. Al ordenar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y omita dolosamente rendir informe sobre éstas;

3. Al ordenar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a rendir informe sobre dicha circunstancia;

4. Al ordenar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

5. Al ordenar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima;

6. Al ordenar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

C. Si el modo de obrar del agente se exterioriza a través de la conducta que conlleva el verbo transitivo autorizar, que se traduce en aprobar o abonar que se lleve a cabo algo o ejecute una acción, o dar o reconocer a alguien la facultad o el derecho para hacerlo:

1. Al autorizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer esta circunstancia;

2. Al autorizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y omita dolosamente rendir informe sobre éstas;

3. Al autorizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a rendir informe sobre dicha circunstancia;

4. Al autorizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

5. Al autorizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima;

6. Al autorizar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

D. Si el modo de obrar del agente se exterioriza a través de la conducta que conlleva el verbo transitivo consentir, que se traduce en permitir o condescender en que se haga algo o ejecute una acción:

1. Al consentir el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer esta circunstancia;

2. Al consentir el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y omita dolosamente rendir informe sobre éstas;

3. Al consentir el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a rendir informe sobre dicha circunstancia;

4. Al consentir el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

5. Al consentir el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima;

6. Al consentir el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

E. Si el modo de obrar del agente se exterioriza a través de la conducta omisiva que conlleva el verbo transitivo tolerar, que se traduce en permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente:

1. Al tolerar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer esta circunstancia;

2. Al tolerar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y omita dolosamente rendir informe sobre éstas;

3. Al tolerar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a rendir informe sobre dicha circunstancia;

4. Al tolerar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

5. Al tolerar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima;

6. Al tolerar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

F. Si el modo de obrar del agente se exterioriza a través de la conducta positiva que conlleva el verbo transitivo apoyar, que se traduce en favorecer, patrocinar o ayudar a que se haga algo o ejecute una acción:

1. Al apoyar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer esta circunstancia;

2. Al apoyar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y omita dolosamente rendir informe sobre éstas;

3. Al apoyar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a rendir informe sobre dicha circunstancia;

4. Al apoyar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

5. Al apoyar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima;

6. Al apoyar el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso. Y

G. Si el modo de obrar del agente se exterioriza a través de la conducta positiva que conlleva el verbo transitivo conocer, que se traduce en percibir que se lleva a cabo algo o ejecuta una acción:

1. Al conocer el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a reconocer esta circunstancia;

2. Al conocer el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y omita dolosamente rendir informe sobre éstas;

3. Al conocer el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a rendir informe sobre dicha circunstancia;

4. Al conocer el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

5. Al conocer el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima;

6. Al conocer el servidor público la detención o privación de la libertad de una persona y dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

En el caso particular, las condiciones o circunstancias indispensables que confieren el carácter de delictuosos a los diversos modos de obrar que se han puntualizado, consisten en la conciencia y voluntad del agente de negarse a reconocer la detención o privación de la libertad de una persona; omitir dolosamente o negarse a rendir informe sobre éstas; ocultar o mantener dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo; negarse a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima, o dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso. No se colige en la descripción típica de referencia, por consiguiente, la existencia de elementos normativos relacionados con la "ilegitimidad" de la privación de la libertad personal, de tránsito o de locomoción de la víctima, o bien, vinculados a una privación de esa libertad "fuera de los casos señalados por la ley", que delimiten con mayor claridad el dolo específico o elemento psíquico exigido en la conducta del autor de un delito de esa naturaleza. Injusto criminal que se castiga con una pena de veinte a cincuenta años de prisión, de cuatro mil a ocho mil días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

En el artículo 10, de la iniciativa en cita, se consigna una disposición que se construye solamente con la penalidad que habrá de imponerse por el delito de desaparición forzada de persona y la locución que identifica a su agente o sujeto activo, que puede serlo cualquier particular. Injusto criminal, cuya conducta rectora y pasivos del mismo, por remisión al artículo 9o. de la propia ley que se expide, se formula

solamente como prohibición genérica. Se trata de una disposición en la que los supuestos de hecho o presupuestos a los que se asocia dicha penalidad como su consecuencia jurídica, son definidos en su exacta dimensión por enunciados de otro precepto al que se acude para ese efecto. Aquí, no estamos en presencia de una norma penal en blanco o abierta, en sentido estricto, sino de una cuestión de deficiencia en la técnica legislativa que se utiliza en su formulación. Así, conforme a ese artículo 10, al particular que se aproveche de la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público, realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior, o bien, intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis descritas en el consabido artículo, es decir, el artículo 9o., será considerado como sujeto activo de la desaparición forzada de persona y se le impondrá una pena de diez a veinticinco años de prisión y de quinientos a dos mil días multa.

En el artículo 12, del proyecto de ley en estudio, constituido su contexto con dos párrafos y cuatro fracciones, se manifiesta una escala de penalidades y tipos de delitos de encubrimiento, vinculados específicamente con las conductas relacionadas con los delitos a que se refiere el propio proyecto. Conforme a estos tipos se aplicará una pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa, a quien ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos de desaparición forzada de persona o su equiparado; de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa, a quien teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los delitos materia de esa ley, omita dar aviso a la autoridad correspondiente; de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien pudiendo evitar la comisión de alguno de los delitos materia de la ley, sin riesgo propio o ajeno, no lo evite; y de tres a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien teniendo conocimiento del destino final de una persona nacida de una mujer víctima de desaparición forzada de persona, no proporcione la información a la autoridad competente. Si el encubridor fuere servidor público, la sanción comprenderá, además, la inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

Obran contenidos en la estructura normativa del proyecto de ley que se propone, preceptos que comprenden sendas atenuantes de la severidad en el castigo que reducirán la pena hasta en una mitad y en un tercio, cuando el sujeto activo del delito libere a la víctima de manera espontánea durante los quince días siguientes a la privación de la libertad; cuando proporcione información que conduzca a la liberación de la víctima; cuando el agente del delito proporcione información que conduzca a dar con el paradero de los restos corpóreos de la víctima; o bien, cuando quien lo ejecute materialmente proporcione información relativa a la responsabilidad y paradero del autor intelectual del mismo y se logre la ubicación o captura de éste. Se observan, también, disposiciones que contemplan agravantes del delito y aumentan la pena hasta en una cuarta parte, cuando durante la desaparición forzada a la víctima le sobrevenga la muerte de ésta; cuando se realice alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima; cuando la víctima sea periodista o defensora de derechos humanos; cuando la conducta se cometa con el fin de obtener algún beneficio; cuando la desaparición forzada se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito; o la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Finaliza el proyecto de ley que se analiza, con dos capítulos, el IV denominado "De la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada" y el V con el rubro "De la Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño", con artículos que establecen facultades para ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, y delimitan a sus titulares; imponen, al Ministerio Público investigador y el Poder Judicial de la Federación, la obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos por el delito, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos; constriñen la investigación y juzgamiento de las personas a quienes se les impute cualquiera de los delitos materia de la ley a la jurisdicción ordinaria, con exclusión de las disposiciones que sobre fueros especiales establezcan otras leyes; consignan a favor de las autoridades administrativas o judiciales competentes, el derecho de acceso libre e inmediato a

cualquier instalación federal en donde se presuma fundadamente que la víctima pueda encontrarse; e imponen a todas las autoridades la obligación de garantizar el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición forzada de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprendan la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a la legislación aplicable.

La iniciativa reconoce en la desaparición forzada de personas una grave violación a los derechos humanos. Delito, cuyas cifras se han incrementado alarmantemente en nuestro país en los últimos años. De acuerdo a lo expresado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos humanos A.C., en su informe "El resurgimiento de la desaparición forzada en México", de enero de 2013, se han identificado a cuatro grandes grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual: las y los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o en movimientos sociales; personas migrantes; y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada.

A nivel federal, es cierto, la desaparición forzada fue tipificada el 25 de abril de 2001 en el artículo 215-A del Código Penal Federal. No obstante, el tipo penal resulta inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo, ya que restringe la autoría del delito únicamente a "servidores públicos", dejando fuera del tipo penal a todas aquellas personas que con el apoyo, autorización tolerancia o aquiescencia del Estado cometan tal delito, por lo que no responde a los estándares internacionales, lo cual fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Estas consideraciones llevaron a la CoIDH a condenar al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2009) a reformar dicho artículo; sin embargo, a más de cuatro años, esto no ha sucedido.

Así, la iniciativa en estudio, además de fundarse en diversos instrumentos internacionales firmados por nuestro país —entre los cuales destacan: La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992; La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el 24 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General; El Estatuto de la Corte Penal Internacional. A/CONF. 183/9 de 17 de julio de 1998; La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, A/HRC/1/L.2, 22 de junio de 2006—, responde a las peticiones de diversas organizaciones de la sociedad civil de víctimas y familiares de personas desaparecidas, quienes han expresado ante la suscrita la problemática específica a la que se enfrentan.

Una de las peticiones más sentidas de las víctimas indirectas es que, en muchos de los casos, las familias quedan sin la persona que ofrecía sustento a la familia o es aquella que era titular de diversos derechos patrimoniales, mismos que no pueden ser ejercidos, en detrimento de ésta. Es por ello que se plantea que el Ministerio Público cuente con un plazo máximo de seis meses, a partir de iniciada la investigación, para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, en caso afirmativo, deberá consignar el caso al juez competente quien, en el mismo auto de radicación, deberá nombrar apoderado legal de la persona desaparecida, dictar las medidas provisionales conducentes y emitir la Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición misma que servirá a la familia para poder ejercer de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

**De este modo la iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el 13 de febrero de 2014 se lee en los siguientes términos:**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, al tenor de la siguiente:

**Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas**

**Capítulo I**

**Disposiciones Generales**

**Artículo 1o.-** La presente Ley tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal.

**Artículo 2o.-**Es deber de todas las autoridades del gobierno Federal mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención.

**Artículo 3o.-** Los órganos dependientes del Ejecutivo Federal que entre sus facultades se encuentre la de realizar detenciones, especialmente los relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

I. La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

II. La organización de programas de formación de su personal para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

III. La profesionalización de las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y nacional en una cultura de respeto a los derechos humanos;

IV. La profesionalización de todo el personal de servicio público que participe en la detención, arresto y custodia de personas; y

V. La prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada.

**Capítulo II**

**Artículo 4o.**- El Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, detención o internación en que se encuentren materialmente.

**Artículo 5o.-** Corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

I. Emitir las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar y operar un sistema de atención telefónica gratuita que atienda las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, las solicitudes de registro y brinde información sobre personas en arresto o detención a autoridades, familiares o personas interesadas;

III. Operar, regular y mantener el Registro Nacional, así como procurar su buen funcionamiento;

IV. Integrar la información en el Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas que le proporcione las autoridades federales;

V. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto; y

VI. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

**Artículo 6o.-** Será responsabilidad de la autoridad que realice la detención enviar la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas dentro de las seis horas posteriores a su detención, la cual deberá ser, como mínimo:

I. Nombre, sexo, edad, nacionalidad y lugar de procedencia de la persona detenida;

II. Fecha, hora y lugar en la que se realizó la detención;

III. Autoridad ante la cual se encuentra a disposición la persona detenida; y

IV. Lugar en el que se encuentra materialmente la persona detenida.

En caso de que la autoridad desconozca la identidad de la persona detenida, ya sea porque no fuere proporcionada por la misma o porque no recuerda sus datos de filiación o identidad, se deberá enviar la media filiación, señas particulares y demás datos que permitan su identificación.

**Artículo 7o.-**Cuando se ponga a cualquier persona a disposición de una autoridad administrativa o judicial, ésta debe verificar que se haya enviado la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, y en caso que no se hubiere hecho, deberá hacerlo de inmediato.

**Artículo 8o.-** Cuando haya algún cambio en la condición jurídica o ubicación física de la persona detenida, la autoridad que la ordene deberá de dar aviso de inmediato al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas para mantener actualizada la información.

## Capítulo III
## De los Delitos de Desaparición Forzada de Personas

**Artículo 9o.-** Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público que realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y:

I. Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad;

II. Omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;

III. Oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento del sujeto pasivo;

IV. Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima; o

V. Dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión, de cuatro mil a ocho mil días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 10.-** Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de persona el particular que:

I. Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; o

II. Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis descritas en el artículo anterior.

Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrán una pena de diez a veinticinco años de prisión y de quinientos a dos mil días multa.

**Artículo 11.-** Se equipara al delito de desaparición forzada de persona el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada de persona y se sancionará conforme a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

**Artículo 12.-**Se sancionarán, a quien sin ser autor o partícipe, incurra en alguna de las conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta Ley conforme a lo siguiente:

I. Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos de desaparición forzada de persona o su equiparado con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

II. Teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, omita dar aviso a la autoridad correspondiente con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

III. Pudiendo evitar la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, sin riesgo propio o ajeno, no lo evite con pena de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa.

IV. Teniendo conocimiento del destino final de una persona nacida de una mujer víctima de desaparición forzada de persona, no proporcione la información a la autoridad competente se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si fuere servidor público, además con inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 13.-** Al Agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su cargo la investigación de alguno de los delitos materia de esta Ley, la obstruya, retrase u omita realizarla adecuadamente, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión, multa de trescientos a quinientos días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 14.-** Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en una mitad, las siguientes:

I. Que la víctima fuere liberada espontáneamente durante los quince días siguientes a su privación de libertad; o

II. Que el activo proporcione información que conduzca a la liberación de la víctima.

**Artículo 15.-** Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en un tercio, las siguientes:

I. Que el activo proporcione información que conduzca a dar con el paradero de los restos corpóreos de la víctima; o

II. Que el autor material de delito proporcionen información relativa a la responsabilidad y paradero del autor intelectual y se logre la ubicación o captura de éste.

**Artículo 16.-** Serán agravantes punitivas y aumentarán la pena hasta en una cuarta parte, las siguientes:

I. Que durante la desaparición forzada a la víctima le sobrevenga la muerte;

II. Que se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima;

III. Que se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito;

IV. Que la víctima sea periodista o defensora de derechos humanos;

V. Que se haya realizado la conducta con el fin de obtener algún beneficio;

VI. Que la desaparición forzada se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito; o

VII. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Para efectos de la fracción VII del presente artículo, se considera situación de vulnerabilidad la condición particular de la víctima derivada de una o más de las siguientes circunstancias:

a) Su origen, edad, sexo, preferencia u orientación sexual, identidad de género o condición socioeconómica precaria;

b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la consumación de alguno de los delitos previstos en esta Ley;

c) Trastorno físico o mental o discapacidad;

d) Pertenencia o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier otra equiparable;

e) Ser persona mayor de sesenta años de edad;

f) Ser persona menor de 18 años de edad;

g) Situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüístico; y

h) Otra condición personal, geográfica o circunstancial, preexistente o creada, que ponga a la víctima en desventaja respecto del sujeto activo del delito.

**Artículo 17.-**Los delitos de desaparición forzada de persona y su equiparable son delitos continuados e imprescriptibles y se investigarán y perseguirán de oficio. Se aplicarán las reglas de autoría y participación además de las del concurso. Igualmente será sancionada la tentativa, de acuerdo con lo establecido por los artículos 12 y 63 del Código Penal Federal.

Respecto de estos delitos no se admite como causa de justificación el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior, ni la restricción o suspensión de derechos y garantías, establecida en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para estos delitos no procede la amnistía, el indulto, beneficios preliberacionales, ni sustitutivo alguno, u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerar al activo de cualquier procedimiento o sanción penal; tampoco se les considerará de carácter político para efectos de extradición.

La práctica generalizada o sistemática de alguno de estos delitos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque se considera crimen de lesa humanidad.

## Capítulo IV
## De la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada

**Artículo 18.-** Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda del desaparecido.

**Artículo 19.-** El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial de la Federación, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos.

**Artículo 20.-** Las personas a quienes se les impute cualquiera de los delitos materia de esta Ley sólo podrán ser investigados y juzgados por la jurisdicción ordinaria. No serán aplicables las disposiciones que sobre fueros especiales establezcan otras leyes.

**Artículo 21.-** Si durante la investigación de los delitos de desaparición forzada de persona se presume fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación federal las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

**Artículo 22.-** El Ministerio Público contará con un plazo máximo de seis meses a partir de iniciado el procedimiento para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, en cuyo caso consignará el asunto a los tribunales competentes.

**Artículo 23.-**Al inicio de la fase de Instrucción el Juez que emita el auto de radicación deberá, de manera oficiosa, nombrar apoderado legal de la persona desaparecida conforme a la legislación aplicable, dictar

las medidas provisionales conducentes y emitir la Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición en el mismo acto.

**Artículo 24.-** La Declaratoria Especial de Ausencia de Persona por Desaparición surtirá los efectos legales de la Declaratoria de Ausencia a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

## Capítulo V
## De la Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño

**Artículo 25.** Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición forzada de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a la legislación aplicable.

## TRANSITORIOS

**Artículo Primero**.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo Segundo**.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la esta Ley contemple una descripción legal de una conducta delictiva que el Código Penal Federal contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre que las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

I. En la investigación de los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, el Ministerio Público efectuará la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades;

II. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y

III. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades.

**Artículo Tercero**.- Las autoridades competentes deberán emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de seis meses, a partir de la publicación a que se refiere el artículo transitorio primero.

**Artículo Cuarto**.- El Secretariado Ejecutivo deberá de tomar las medidas necesarias para migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas detenidas al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo Quinto**.- Para el cumplimiento del presente Decreto respecto del Registro Federal de Datos de Personas Detenidas, se utilizarán los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuente el Secretariado Ejecutivo, por lo que no se requerirán recursos adicionales para la creación y operación de dicho Registro.

**2) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL; DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS; DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PUBLICADA EN LA GACETA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PRESENTADA POR EL SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH EL 18 DE MARZO DE 2015.**

En la exposición de motivos de la iniciativa en cita, se reconoce la importancia del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado B, fracciones III y V; apartado C, fracción V; 29, segundo párrafo y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar a este Congreso de la Unión la facultad para emitir una ley general contra la desaparición forzada que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, distribuya la competencia entre los órdenes de gobierno y establezca las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como para establecer la prisión preventiva oficiosa y reforzar el marco de derechos de las víctimas de estos delitos. Proyecto presentado con fecha 19 de noviembre de 2014, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la finalidad de corregir las desviaciones técnicas que se aprecian en la investigación y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas, pues la dispersión normativa que actualmente existe en los órdenes de gobierno, provoca zonas grises que crean impunidad.

En la iniciativa se menciona que en ese entonces solo 22 entidades federativas habían tipificado el delito de desaparición forzada de personas, de las cuales 20 lo lo consignaban en sus respectivos códigos penales y dos (Chiapas y Guerrero) han emitido leyes específicas para prevenir y castigar este ilícito. Además, solamente una entidad federativa (Coahuila), había expedido normas que van más allá del espectro penal, configurando a través de una ley específica, el procedimiento y efectos jurídicos de una Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, que permite que las víctimas de este delito, puedan mantener sus derechos y asegurar la continuidad de su personalidad jurídica durante el lapso de su desaparición.

Bajo esas circunstancias, a juicio del proponente la expedición de una ley general que tenga por objeto la prevención y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas es un paso indispensable para atender este fenómeno delincuencial de una manera integral, sin limitarse al ámbito meramente penal, y para establecer una normativa aplicable en todo el país, en el ámbito de competencia de todos los órdenes de gobierno, a través de la facultad para establecer los tipos penales y las sanciones de estos delitos que se depositará en el Congreso de la Unión, con lo que se homologará la punibilidad y los elementos del tipo en todo el territorio nacional.

La iniciativa propone la expedición de una ley conformada por 55 artículos, contenidos en once capítulos, a saber:

- *Capítulo I. Objeto, Interpretación y Aplicación*

- *Capítulo II. Competencias en materia de investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas*

- *Capítulo III. De los delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas*

- *Capítulo IV. Competencias en materia de Prevención y Coordinación*
- *Capítulo V. Protección de Personas*
- *Capítulo VI. Intervención de Comunicaciones*
- *Capítulo VII. Obligaciones de los Concesionarios de Redes Públicas de Telecomunicaciones*
- *Capítulo VIII. Del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.*
- *Capítulo IX. Del Registro Nacional de Personas Detenidas*
- *Capítulo X. Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas*
- *Capítulo XI. Derechos de las Víctimas y sus Familiares.*

En estos artículos se recoge la experiencia legislativa de diversas entidades federativas que han legislado en la materia, pero fundamentalmente, se consagran las disposiciones que derivan de los tratados internacionales vigentes en nuestro país, así como las recomendaciones de diversos organismos internacionales. También se incorpora en esta iniciativa la experiencia legislativa de otros países latinoamericanos y muchas de las propuestas formuladas por diputados y senadores de este Congreso de la Unión de diversas legislaturas.

Entre las bondades que presenta esta iniciativa se puede destacar que el tipo penal recoge todos los elementos que integran la conducta de desaparición forzada de personas, que en resumen son:

*a) Privación de la libertad de una o más personas, cualquiera fuere su forma, cometida por agentes del Estado.*

*b) Autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, cuando es cometida por particulares.*

*c) Negativa de información o no reconocimiento de la privación de libertad y el paradero de la persona.*

*d) Imposibilidad de ejercer los recursos legales y garantías procesales.*

*e) Penas adecuadas a la gravedad de la conducta.*

*f) Consideración como delito continuado o permanente mientras no se localice a la persona.*

*g) Posibilidad de establecer atenuantes para aquellos que colaboren al esclarecimiento de la desaparición.*

*h) No aplicabilidad de la prescripción o, en su defecto, igualarla al del delito con mayor término en la legislación nacional.*

*i) No admisión de la eximente de obediencia debida.*

Así, se contempla que la desaparición forzada de personas puede ser cometida por servidores públicos directamente, o por particulares que actúen con la aquiescencia de aquellos, pero también se propone crear un tipo equiparado para aquellas desapariciones cometidas exclusivamente por particulares, las

cuales son conocidas como desaparición involuntaria de personas. Con esto, todo el espectro delictivo queda cubierto respecto de las conductas que directamente conforman la desaparición forzada, pero también se tipifican conductas de auxilio, complicidad o apoyo para la comisión de estos delitos, que son igualmente graves.

De acuerdo con esta iniciativa, se establecen obligaciones para los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, pues es fundamental que se visibilice el fenómeno delincuencial y se procure su erradicación. Se fortalece, además, la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno al establecer la obligación de que todas las personas desaparecidas por los delitos previstos en esta ley sean incluidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y que éste cuente con un módulo que incluya la información genética que sea necesaria para, en su caso, identificar a una persona.

En el mismo tenor, se refuerza la obligación de las autoridades que detengan a una persona de ponerla a disposición de la autoridad jurisdiccional lo antes posible y, además, se crea el Registro Nacional de Personas Detenidas, en el que se podrá saber públicamente, en tiempo real por vía telefónica o electrónica, el estatus de una persona que hubiera sido aprehendida por alguna fuerza policíaca. Se crea, también, el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas que concentrará las muestras biológicas de referencia y los perfiles genéticos que de ellas deriven, de las personas desaparecidas, ubicadas y de sus familiares, con lo que se avanzará definitivamente en la construcción de sistemas de identificación de las víctimas de estos delitos. Finalmente, se propone establecer derechos de las víctimas y sus familiares de manera específica, pues si bien es cierto, en el plano general aplicarán los establecidos en la Ley General de Víctimas, en lo particular debe también asegurarse el respeto de al menos tres derechos:

1. *El derecho a la Verdad;*

2. *El derecho a la Memoria, y*

3. *El derecho a la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.*

En consecuencia, para mayor ilustración de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas que se expide, y las reformas, adiciones y derogación de las diversas disposiciones que se plantean, se presentan la primera en sus términos y las segundas comparativamente con el contexto vigente de los preceptos legales en los que se incluyen, para contemplar en ellas sin mayor preámbulo, el sentido y alcance que comprenden.

**De este modo, la iniciativa presentada por el senador Roberto Gil Zuarth el día 18 de marzo de 2015 se presenta en los siguientes términos:**

**Artículo Primero.-** Se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas, para quedar como sigue:

## LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

### CAPÍTULO I
### Objeto, Interpretación y Aplicación

**Artículo 1.** La presente Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas. Es de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República.

**Artículo 2.** Esta Ley tiene por objeto:

I. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas, sus tipos equiparados y sus sanciones;

II. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

III. Distribuir competencias y establecer formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos de desaparición forzada de personas, entre el Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los de los municipios;

IV. Distribuir competencias y establecer formas de coordinación en materia de protección, atención y asistencia a las víctimas de estos delitos, entre los órdenes de gobierno;

**Artículo 3.** Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. **Consejo Nacional**: El Consejo Nacional de Seguridad Pública;

II. **Constitución**: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. **Institución de Seguridad Pública**: Las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, el Instituto Nacional de Migración y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipios;

IV. **Ley**: La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Desaparición Forzada de Personas;

V. **Secretariado Ejecutivo**: El Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VI. **Servidor Público:** Los contemplados en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las constituciones de las entidades federativas.

VII. **Sistema Nacional**: El Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VIII. **Procuraduría:** La Procuraduría General de la República.

IX. **Registro Nacional**: El Registro Nacional de Personas Detenidas.

X. **Víctima**: Las personas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 4.** Esta Ley se interpretará favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las víctimas de los delitos previstos en este ordenamiento.

**Artículo 5.** La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento del objeto de esta Ley.

**Artículo 6.** Los Poderes Judiciales de la Federación y de las Entidades Federativas ordenarán de oficio el desahogo de las pruebas que consideren necesarias, así como todas las medidas que sirvan para mejor proveer, de conformidad con las circunstancias que se aprecien durante el desarrollo de los

procesos penales de su competencia, privilegiando y garantizando en todo caso la libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas de los delitos previstos en el presente ordenamiento.

**Artículo 7.**Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados, según corresponda.

A falta de regulación suficiente en los códigos de procedimientos penales de las Entidades Federativas respecto de las técnicas para la investigación de los delitos regulados en esta Ley, se podrán aplicar supletoriamente las técnicas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales.

**Artículo 8.**Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en esta Ley, estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa durante el proceso penal.

**Artículo 9.**Los delitos previstos en esta ley son delitos continuados y se perseguirán de oficio por el Ministerio Público y las policías.

Para los efectos de esta Ley, podrá ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, cualquier persona con parentesco consanguíneo, por afinidad o legal; la o el cónyuge; la concubinaria o el concubino; cualquier persona con un interés legítimo o con una relación cotidiana afectiva inmediata o cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

**Artículo 10.**El término de prescripción de los delitos materia de esta Ley se regirá conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, sin embargo, dicho término solo empezará a contarse a partir de que la víctima aparezca o se establezca su destino.

Cuando los delitos materia de esta ley sean cometidos contra un grupo poblacional de manera sistemática o generalizada, se considerarán delitos de lesa humanidad. En este caso, los delitos serán imprescriptibles.

**Artículo 11.** No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada de personas.

En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas.

**Artículo 12.**Toda persona privada de su libertad por Instituciones de Seguridad Pública debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora a la autoridad judicial competente.

Si durante la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas se presumiera fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación o inmueble perteneciente a las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales, las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

El Ministerio Público y las policías garantizarán el pleno y libre ejercicio del derecho de coadyuvancia de las víctimas.

**Artículo 13.** En los delitos previstos por esta Ley no procederá la reserva del expediente o el archivo temporal, aun si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la

consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras. El Ministerio Público y las policías estarán obligados en todo momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento delos hechos.

Sólo podrá suspenderse el procedimiento judicial iniciado por los delitos previstos en esta Ley o delitos por hechos conexos o derivados delos mismos, en el caso de que el inculpado evada la acción de la justicia o sea puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero.

La sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberá contemplar la reparación integral del daño a las víctimas, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes.

## CAPÍTULO II
## Competencias en materia de investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas

**Artículo 14**. La Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

I. Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales;

II. El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal;

III. Se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;

IV. El Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto; o

V. El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo;

**Artículo 15.**En los casos no contemplados en el artículo anterior, serán competentes las autoridades del fuero común.

## CAPÍTULO III
## De los delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas

**Artículo 16**. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que prive u ordene, tolere, apoye o consienta privar de la libertad, a una o más personas, cualquiera sea su forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa, en su caso, a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley e impidiendo el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Asimismo, comete el delito señalado en el párrafo anterior, el servidor público que aunque no haya participado en la detención de una o más personas, colabore, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención, o se niegue a reconocer la privación de libertad o a informar sobre su paradero.

**Artículo 17.** Comete igualmente el delito de desaparición forzada de personas el particular que prive de la libertad, cualquiera sea su forma, ordene, tolere, apoye o consienta la privación, o colabore, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento, cuando actúe con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.

**Artículo 18.**A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa.

**Artículo 19.**Al servidor público que haya sido condenado por la comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará por un término mínimo de la mitad de la pena privativa de la libertad a que haya sido condenado y máximo de tres cuartas partes de dicha pena, para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

**Artículo 20**. Las penas a que se refiere el artículo 18 de esta Ley se agravarán:

I. De treinta a cincuenta y cinco años de prisión y de cuatro mil a seis mil días multa si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción;

b) Que se cometa en agravio de persona con discapacidad;

c) Que se cometa en agravio de persona menor de dieciocho o mayor de sesenta años de edad, o mujer embarazada, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

d) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

e) Que se realice con violencia;

f) Que para llevar a cabo la privación de la libertad se allane el inmueble en el que la persona se encuentra;

g) Que la privación sea con la finalidad de obligar a la víctima a prestar servicios ilícitos; o

h) Que en la comisión del delito se utilicen bienes del Estado.

II. De treinta y cinco a sesenta años de prisión y de seis mil a ocho mil días multa si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que la conducta se cometa, por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos; periodistas o comunicadores; defensores de derechos humanos; precandidatos o candidatos a cargos de elección popular; quienes hayan sido testigos de conductas punibles; desplazados; migrantes; víctimas de trata; identidad diferente a la heterosexual; o contra cualquier otra persona por sus creencias u opiniones políticas o por motivo que implique alguna forma de discriminación o intolerancia;

b) Que la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las personas mencionadas en el inciso anterior;

c) Que el o los agentes activos tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima;

d) Que durante la privación de la libertad se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;

e) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual; o

f) Que durante o después de la privación de la libertad, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la detención, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

III. De cuarenta a sesenta y cinco años de prisión y de ocho mil a diez mil días multa si la víctima es privada de la vida por los autores o partícipes del delito.

IV. De cuarenta y cinco a setenta años de prisión y de diez mil a doce mil días multa si se oculta o se comete cualquier acción sobre el cadáver de la víctima que evite o intente evitar su identificación posterior.

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

**Artículo 21.** Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, someter a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa, en su caso, a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, cuando sea cometida por un particular.

A quien cometa el delito previsto en este artículo se le impondrá la pena establecida en el artículo 18 de esta Ley o, en su caso, la correspondiente a la agravante que se actualice con la conducta, contemplada en el artículo 20 de esta Ley.

**Artículo 22**. A quien conociendo el paradero o destino final del infante nacido durante el periodo de ocultamiento de la madre desaparecida no proporcione información se impondrá de dos a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

A quien omita entregar a la autoridad competente o a la familia, al infante nacido durante el periodo de ocultamiento de la madre desaparecida, se impondrá una sanción de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa.

La misma pena establecida en el párrafo anterior se impondrá a quien lleve a cabo la desaparición forzada o involuntaria de una niña o niño, o de estos cuando su padre, madre, tutor o representante legal sean sometidos a una desaparición.

**Artículo 23.-** A quien conociendo los planes para la comisión del delito de desaparición forzada, sin ser partícipe, no diere aviso a las autoridades, se impondrá de uno a cinco años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

**Artículo 24.-**A quien siendo autoridad superior jerárquica que orgánica y legalmente tenga el deber jurídico de actuar e impedir la desaparición forzada y no lo hiciere, permitiendo por ausencia en el orden de mando la perpetración del delito, se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

**Artículo 25.-**Al servidor público que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial y permita por acción u omisión el ocultamiento de la víctima de desaparición forzada de

personas en dichos lugares, se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

La misma pena aplicará para aquellos particulares que permitan el ocultamiento de la víctima de desaparición forzada de personas en su propiedad.

**Artículo 26.-** Al que instigue o incite a otro u otros a la comisión del delito de desaparición forzada de personas, se impondrá de tres a ocho años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

**Artículo 27.-**Al servidor público que teniendo a su cargo la investigación del delito de desaparición forzada de personas, la obstruya o evite realizarla adecuadamente, se impondrá de tres a ocho años de prisión y multa de trescientos a quinientos días multa.

**Artículo 28.-**Se aplicará pena de tres a ocho años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al que:

I. Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en esta Ley, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la liberación de la víctima;

II. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las conductas previstas en esta Ley, con conocimiento de esta circunstancia, así como los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe;

III. Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos a que se refiere esta Ley, y

IV. Desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas previstas en esta Ley, o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

No se aplicará la pena prevista en este artículo en el caso de la fracción II, en lo referente al ocultamiento del infractor, cuando se trate de los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines directos; el cónyuge; la concubina; el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado.

**Artículo 29.** Se aplicará pena de dos a seis años de prisión, de doscientos a cuatrocientos días multa, al servidor público que:

I. Divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial, relacionada con las conductas sancionadas por esta Ley, salvo que se refiera a la información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, en este caso se aplicará lo dispuesto por el Código Penal Federal, o

II. Revele, sin motivo fundado, técnicas aplicadas a la investigación o persecución de las conductas previstas en la presente Ley.

Si el sujeto es o hubiere sido integrante de una Institución de Seguridad Pública, la pena será de cinco a trece años de prisión, y de trescientos a setecientos días multa.

**Artículo 30.** La tentativa para los delitos objeto de esta Ley tendrá el carácter de punible, y deberá sancionarse en los términos de los párrafos primero y segundo del artículo 12 del Código Penal, respectivamente.

**Artículo 31.** Las penas establecidas en los artículos 18, 20 y 21 de esta Ley, se atenuarán de la manera siguiente:

I. La pena se reducirá de la mitad a las cinco sextas partes cuando en un término no superior a diez días, los autores o partícipes liberen a la víctima voluntariamente en similares condiciones físicas y psíquicas a las que se encontraba en el momento de ser privada de la libertad, o suministren información que conduzca a su recuperación inmediata, en similares condiciones físicas y psíquicas.

II. La pena se reducirá de una tercera parte a la mitad cuando en un término mayor a diez días y no superior a veinte días, los autores o partícipes liberen a la víctima en las mismas condiciones previstas en el numeral anterior.

III. Si los autores o partícipes suministran información que conduzca a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida, la pena se reducirá hasta en una octava parte.

Las reducciones de penas previstas en este artículo se aplicarán únicamente al autor o partícipe que libere voluntariamente a la víctima o suministre la información.

**Artículo 32.** Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena.

Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de desaparición forzada de personas y para la localización y liberación de las víctimas, conforme a la legislación aplicable, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian:

I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión;

II. El sentenciado acepte la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento;

III. El sentenciado sea primo delincuente;

IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación;

V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad penitenciaria el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado;

VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando;

VII. Cuente con fiador, y

VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos.

**Artículo 33.** La autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido condenadas por conductas previstas en el presente ordenamiento queden sujetas a vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

La misma medida podrá imponerse de manera cautelar tratándose de inculpados en libertad con las reservas de ley e indiciados durante el tiempo que dure la averiguación previa o el proceso.

## CAPÍTULO IV
## Competencias en materia de Prevención y Coordinación

**Artículo 34.**Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para:

I. Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geo delictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos sancionados en esta Ley;

II. Obtener, procesar e interpretar la información geo delictiva por medio del análisis de los factores que generan las conductas antisociales previstas en esta Ley con la finalidad de identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus correlativos factores de protección;

III. Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos;

IV. Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan el fenómeno delictivo sancionado en esta Ley, así como difundir su contenido;

V. Observar las demás obligaciones establecidas en otros ordenamientos.

**Artículo 35.** La Federación, las entidades federativas y los municipios estarán obligados a remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos que se generen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su programa de prevención de delitos a que se refiere esta Ley. Además, deberán mantener actualizado un registro con información en materia de desaparición forzada de personas en su demarcación.

La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer un programa de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata, que incluya, al menos, lo siguiente:

I) Implementar la búsqueda ex oficio y sin dilación en casos de desapariciones;

II) Coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para localizar a la persona;

III) Eliminar cualquier obstáculo legal o fáctico que reduzca la efectividad de la búsqueda o evite que se inicie;

IV) Asignar los recursos humanos, financieros, logísticos, científicos, o de cualquier otro tipo necesarios para que la búsqueda se realice de forma exitosa;

V) Contar con personal altamente capacitado en la exhumación e identificación de restos mortales;

VI) Contrastar el reporte de la persona desaparecida con todas las bases de datos existentes en la materia;

VII) Dar prioridad a la zona de búsqueda en donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas;

VIII) Acceder y utilizar plenamente la Plataforma México, y

IX) Garantizar que el programa se ejecute con plena independencia presupuestaria y operativa.

**Artículo 36.** La Federación, las entidades federativas y los municipios deberán establecer programas de capacitación dirigidos a los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública que les corresponda, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos previstos en esta Ley.

Los programas de capacitación podrán ser impartidos también al resto de los servidores públicos de cada orden de gobierno, con las adecuaciones pertinentes.

## Capítulo V
## Protección de Personas

**Artículo 37.** En el ámbito de sus respectivas competencias, los titulares del Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas expedirán los correspondientes programas para la protección de personas.

El Ministerio Público incorporará a dichos programas a las personas cuya vida o integridad corporal pueda estar en peligro por su intervención en la averiguación previa o el proceso penal seguido por las conductas previstas en la presente Ley.

El juez que conozca del procedimiento penal, tomando en consideración al menos lo señalado en el párrafo anterior, podrá ordenar como parte de las medidas cautelares de protección de personas, que éstas sean incorporadas a dichos programas.

**Artículo 38.** La información y la documentación relacionada con las personas protegidas se mantendrán en estricta reserva en términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 39.** Los programas serán reservados y, en su caso, confidenciales, de conformidad con las disposiciones aplicables; tales programas deberán comprender, además de lo dispuesto en este Capítulo, lo relativo a los requisitos de ingreso, niveles de protección, tiempo de duración de la protección, obligaciones de la persona protegida, causas de revocación y demás características y condiciones necesarias para cumplir eficazmente con dicha protección.

El cumplimiento del Programa Federal de Protección a Personas se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y demás disposiciones aplicables.

El cumplimiento de los programas de protección a personas de las entidades federativas quedará a cargo del Procurador o Fiscal General, o el servidor público inmediato inferior en quien éste delegue esta responsabilidad, en coordinación con las autoridades cuya intervención sea necesaria de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 40.** Los programas establecerán, cuando menos, los requisitos de ingreso, protección física o electrónica para la víctima o testigo; apoyos para solventar sus necesidades personales básicas, cuando por su intervención en el procedimiento penal así se requiera. En casos necesarios, las medidas se podrán extender a familiares o personas cercanas.

Las erogaciones por concepto de otorgamiento de apoyo estarán sujetas a la normativa aplicable y a los presupuestos autorizados de las dependencias que los proporcionen.

**Artículo 41.** Las Entidades Federativas y la Federación celebrarán convenios de colaboración para establecer los mecanismos para incorporar a los programas a personas que deban ser sujetas de protección.

## CAPÍTULO VI
## Intervención de Comunicaciones

**Artículo 42**. El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, los Procuradores o Fiscales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como las autoridades facultadas en la ley para ello podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas.

La solicitud de autorización deberá contener los preceptos legales que la fundan, el razonamiento por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones a intervenir, en su caso, los sujetos o las líneas, aparatos, números, lugares que serán intervenidos, así como el tiempo que serán intervenidos, sin que el tiempo total exceda de seis meses. Para llevar a cabo la intervención, la autoridad investigadora podrá utilizar todos los medios tecnológicos que estime necesarios. En todo caso será obligación de los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones de las líneas a intervenir prestar auxilio para tal efecto.

La aportación de comunicaciones privadas para la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley constituye una excepción al deber de confidencialidad que establezcan otras leyes.

El Ministerio Público podrá ofrecer como prueba los resultados de la intervención asentados en cualquier medio tecnológico al juez que corresponda, en caso de no admitirse, deberán ser destruidas en los términos señalados por la autoridad judicial.

Cualquier actuación desarrollada en los términos del presente Capítulo será nulificada por el juez si se incurrió en conductas no autorizadas o ilegales, sin perjuicio de la aplicación de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

## CAPÍTULO VII
## Obligaciones de los Concesionarios de Redes Públicas de Telecomunicaciones

**Artículo 43**. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y, en lo aplicable, las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación de los delitos previstos en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para otros delitos y siempre que medie orden de autoridad judicial competente, están obligados a:

I. Proporcionar de forma inmediata y sin demora a los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución, la información relativa al número telefónico que se le indique y los datos del usuario registrado como cliente;

II. Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución;

III. Colaborar con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir los delitos previstos en esta Ley, y

IV. Suspender el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente.

## CAPÍTULO VIII
## Del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**Artículo 44**. Toda autoridad administrativa o judicial de cualquier orden de gobierno que tenga conocimiento de una persona víctima de los delitos previstos en esta Ley, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de la legislación aplicable.

## CAPÍTULO IX
## Del Registro Nacional de Personas Detenidas.

**Artículo 45**. El Registro Nacional de Personas Detenidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar en una base de datos electrónica, la información sobre personas detenidas por cualquiera de las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, con el objeto de asegurar sus derechos procedimentales y prevenir la comisión de delitos.

**Artículo 46.** La operación del Registro Nacional le corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretariado Ejecutivo, el cual tendrá las siguientes facultades:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional a través de una página electrónica alojada en su dominio virtual;

III. Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de registro o información sobre personas detenidas;

IV. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas detenidas a partir de la siguiente clasificación:

a) Identidad;

b) Sexo;

c) Edad;

d) Nacionalidad;

e) Origen étnico;

f) Si se trata de personas con alguna discapacidad;

g) Día, hora, localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la detención y la autoridad que la ejecutó;

h) Autoridad que controla la detención;

i) Lugar en que se encuentra detenida la persona, el día y la hora de admisión en la instalación y la autoridad responsable de dicho lugar;

j) Elementos relativos a la integridad física de la persona detenida;

k) En caso de fallecimiento durante la detención, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos de la persona fallecida;

l) Día y hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la autoridad encargada del traslado

m) Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;

V. Operar, regular y mantener el Registro Nacional, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

VI. Validar la información que debe incorporarse al Registro, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto; y

VII. Las demás que disponga esta Ley.

El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general.

**Artículo 47.**Las Instituciones de Seguridad Pública que en el ejercicio de sus funciones detengan a una persona, cualquiera sea la causa, deberán de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional.
Las comunicaciones que se envíen al Registro Nacional deberán de señalar:

I. El nombre completo de la persona detenida, edad, domicilio, procedencia, señas particulares y demás datos que permitan su identificación;

II. Fecha, hora y lugar en donde se le detuvo;

III. Fotografía de filiación y media filiación o en su defecto, descripción detallada de los rasgos físicos al momento de ser detenida;

IV. Datos de la Institución de Seguridad Pública que la detuvo;

V. Número de expediente o averiguación previa en su caso; y

VI. Instalación en la que se encuentra detenida.

En caso de que la persona detenida sea trasladada después de haber sido enviada la comunicación, se deberá informar, de inmediato, a qué instalación se ha trasladado.

Asimismo, la Institución de Seguridad Pública deberá informar al Registro Nacional la puesta en libertad de la persona, cuando ello ocurra.

**Artículo 48.** El Registro Nacional funcionará las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe.

El Secretariado Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Consejo Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las estadísticas que arroje el Registro. La información contenida en el informe será pública.

**Artículo 49.**El Secretariado Ejecutivo establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el Registro Nacional, de forma tal de garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos.

## CAPÍTULO X
## Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas

**Artículo 50**. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Información operará el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas, en el que se procesará, indexará, organizará e ingresará la información de los perfiles genéticos obtenidos de los cuerpos de personas desaparecidas, así como las muestras biológicas de referencia de los familiares de las mismas.

**Artículo 51**. Las muestras biológicas de referencia deberán ser entregadas de manera voluntaria, mediante consentimiento libre, previo e informado, autorizando también el procesamiento, ingreso y cruces a que haya lugar con la información contenida en el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, para la identificación de las personas desaparecidas.

La autoridad encargada de la toma de muestras deberá entregar una constancia de esta diligencia a la persona que la suministró.

**Artículo 52.**Durante todas las fases del proceso, el manejo de las muestras biológicas y la información obtenida de ellas, serán consideradas con carácter de información confidencial, en términos de la Ley en la materia y su uso será exclusivamente con fines de identificación de personas desaparecidas. Una vez obtenida la información de la misma, la autoridad ordenará de inmediato la destrucción de la muestra y de la información que se hubiere obtenido, informándose tal circunstancia a quien la haya suministrado.

**Artículo 53.** El Centro Nacional de Información deberá asegurar la protección del material genético y cualquier otra información obtenida de las personas desaparecidas o de los familiares que proporcionen muestras biológicas, estableciendo criterios éticos y legales de privacidad y de control de calidad de los análisis, de resguardo de la cadena de custodia y de uso exclusivo de la información genética para fines de identificación.

## CAPÍTULO XI
## Derechos de las Víctimas y sus familiares

**Artículo 54.** Además de los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas, las víctimas de los delitos previstos en esta ley o sus familiares tendrán los siguientes derechos:

I. Derecho a la verdad;

II. Derecho a la memoria;

III. Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y de sus derechos civiles durante el periodo de su detención o desaparición.

**Artículo 55**. Para asegurar el cumplimiento de estos derechos, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, dentro del ámbito de su respectiva competencia deberán, al menos, llevar a cabo las reformas legales y reglamentarias necesarias para:

I. Permitir que las víctimas, familiares de éstas, personas que tengan un interés legítimo o una relación cotidiana afectiva inmediata, tengan acceso pleno y sin reserva al expediente, investigaciones, pruebas y demás documentos, relacionados con la desaparición, cuando así lo soliciten, salvo que existan indicios fundados de que ello pondría en riesgo la investigación;

II. Realizar todas las diligencias necesarias, con la coadyuvancia de las víctimas o familiares de éstas cuando así lo soliciten, para determinar los hechos al momento de la desaparición, sus causas y el paradero de la persona desaparecida;

III. Asegurar la presencia de los familiares de la víctima, cuando así lo soliciten, al momento de realizar operativos o diligencias en lugares en que se presuma se encuentra la persona desaparecida o su cuerpo, salvo que existan indicios fundados de que ello implicaría un riesgo para su vida o integridad corporal;

IV. Elaborar protocolos que permitan la entrega del cuerpo de una persona desaparecida a sus familiares, en condiciones de dignidad;

V. Elaborar planes nacional y estatales de búsqueda de personas desaparecidas, que contengan mapas precisos de los lugares en que se presuma puedan encontrarse personas desaparecidas o sus cuerpos y protocolos de protección de dichos sitios;

VI. Establecer vías de comunicación que permitan a cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de una persona desaparecida o su cuerpo, de manera anónima, colaborar con la búsqueda;

VII. Inhumar, en todos los casos, los restos y cadáveres no identificados de manera individualizada, con acta de defunción y examen médico-legal, en cementerios apropiados y con documentación rigurosa sobre su ubicación en el mismo, previa toma de muestras biológicas de referencia para identificación genética que deberán enviarse de inmediato al Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto expida el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VIII. Prohibir la inhumación en fosas comunes, la destrucción o incineración de restos o cadáveres de personas no identificadas;

IX. Declarar y construir Monumentos a la Memoria en los lugares en los que se haya encontrado a víctimas de los delitos previstos en esta ley, sus cuerpos o sus restos. La declaratoria y construcción estará a cargo de la Federación, entidad federativa o municipio del que estuvieran adscritos los

servidores públicos que hubieren cometido la desaparición forzada de persona. En caso de que la desaparición hubiere sido cometida exclusivamente por particulares, la declaratoria y construcción estará a cargo del orden de gobierno que hubiese substanciado la investigación;

X. Establecer fechas de conmemoración de la memoria de las víctimas de los delitos previstos en esta ley, en las que se les rinda homenajes que propicien el respeto de la verdad, la memoria, la vida y los derechos humanos;

XI. Asegurar el reconocimiento y continuidad de la personalidad jurídica y la vigencia de los derechos de las víctimas de los delitos previstos en esta ley, creando la acción de declaración de ausencia que corresponda;

XII. Elaborar los programas nacional, estatales y municipales de prevención de los delitos previstos en esta ley y

XIII. Las demás que la Federación, las entidades federativas y los municipios consideren necesarias para asegurar el respeto de los derechos señalados en el artículo anterior.

**Artículo 56**.- En cumplimiento del derecho al reconocimiento y continuidad de la personalidad jurídica y la vigencia de los derechos de las víctimas de los delitos previstos en esta ley, la Federación y las entidades federativas llevarán a cabo las reformas legales y normativas necesarias para permitir:

I. La condonación de impuestos a las víctimas y sus familiares directos;

II. La condonación de deudas o créditos contraídos con las instancias gubernamentales de seguridad social, vivienda, salud, entre otras;

III. La expedición de la declaratoria de ausencia por desaparición correspondiente;

IV. El pago de seguros y prestaciones sociales para la víctima y sus familiares;

V. La reparación integral por el delito en términos de la legislación aplicable en materia de atención a víctimas;

VI. La conservación de la patria potestad en relación con los hijos menores;

VII. La protección del patrimonio de la víctima y sus familiares;

VIII. La protección de los derechos de la familia y de los hijos a percibir los salarios, liquidación y beneficios económicos, laborales y de seguridad social;

IX. Otros que sean considerados necesarios para proteger los derechos de las víctimas y sus familiares.

**Artículo Segundo.-** Se adiciona una fracción VIII al artículo 2o y se reforma el segundo párrafo del artículo 3o, ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

**Artículo Tercero.-** Se reforman los artículos 20, tercer párrafo; 23, segundo párrafo; 36, segundo párrafo y 40 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

**Artículo Cuarto.-** Se reforma la fracción VIII; se adiciona una fracción IX y se recorre la siguiente en su orden, del artículo 4, de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**Artículo Quinto.-** Se reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII, al artículo 19, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo Sexto.-** Se adiciona una fracción XXIII al artículo 194, del Código Federal de Procedimientos Penales.

**Artículo Séptimo.-** Se reforman los artículos 55, segundo y cuarto párrafos; 64, primer párrafo; 97, primer párrafo; se adiciona una fracción V, al artículo 85 y un segundo párrafo al artículo 92 y se derogan los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D, del Código Penal Federal.

**Artículo Octavo.-** Se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

**Artículo Noveno.-** Se adiciona una fracción VI al artículo 51 de la Ley de la Policía Federal.

**Artículo Décimo.-** Se reforman los artículos 109, fracción XXVI; 167, párrafos tercero y cuarto; 277, cuarto párrafo y 366, primer párrafo, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

## TRANSITORIOS

**PRIMERO**. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo establecido en el siguiente artículo.

**SEGUNDO**. Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales entrarán en vigor en términos de lo previsto por el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

**TERCERO.** Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

**CUARTO.** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**QUINTO.** La implementación del presente Decreto será con cargo a los respectivos presupuestos aprobados a las instancias de los tres órdenes de gobierno obligados a cumplir con lo establecido en el presente.

**SEXTO.** Las disposiciones relativas a los delitos en materia de desaparición forzada de personas previstas tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales y leyes locales vigentes hasta la entrada en vigor el presente Decreto seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia.

Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos.

**SÉPTIMO.** El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá realizar las adecuaciones necesarias a las disposiciones aplicables para la conformación y operación del Registro Nacional de Personas Detenidas, del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas y del módulo de perfiles genéticos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, dentro de los 90 días después de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

**OCTAVO**. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán realizar las reformas legales y reglamentarias a que se refiere el artículo 55 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

3) **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15 Y 109 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESENTADA POR LA SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Y PUBLICADA EN LA GACETA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL 24 DE MARZO DE 2015.**

La presente iniciativa además de recoger las recomendaciones y las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento y proporcionar asistencia técnica al Estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa, centradas en torno a las siguientes cuatro líneas de acción: proceso de búsqueda, investigación, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada. También hace suyas las aportaciones de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desapariciones que acudieron al Senado de la República para participar en distintas actividades, entre las que destaca de manera particular el foro. "La desaparición forzada de personas en la agenda legislativa del Congreso de la Unión" y la entrega del "Conjunto de Principios y Recomendaciones Ciudadanas para los Procedimientos de Declaratoria de Ausencia por Desaparición".

También se retoman y fortalecen, en el caso particular, los principios y objetivos que, en su momento, dieron sustento a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, presentada el 13 de febrero de 2014 y la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas, presentada el 22 de abril de 2014.

Con base en lo anterior, la presente iniciativa de ley se compone de 60 artículos divididos en nueve capítulos y diez artículos transitorios, sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional; y tiene por objeto tipificar los delitos de desaparición de personas con base en los criterios establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; así como determinar bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.

Al amparo de esta ley, todas las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse para garantizar la prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada e involuntaria de personas, de conformidad con los principios, procedimientos y protocolos establecidos en la misma, y siempre buscando que todas las

actuaciones estén encaminadas a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y testigos, así como a regresar a la persona desparecida con vida a su núcleo familiar.

Conforme a la iniciativa, en estudio, sólo después de realizar un profundo estudio del derecho comparado aplicable y de la jurisprudencia internacional, ha sido posible identificar de manera clara la diferencia entre el delito de desaparición forzada de personas y las figura del secuestro o de la privación ilegal de la libertad como delitos ordinario alternativos que durante mucho tiempo fueron considerados o aplicados por distintos países en casos de desaparición forzada de personas.

De ahí que la desaparición forzada en el ámbito del derecho penal internacional no presente ningún caso concluido ni en trámite frente a la Corte Penal Internacional (CPI), por ejemplo. Pero sí hay numerosos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), naturalmente con miras al carácter de violación de derechos humanos y no de comisión de crímenes internacionales.

En la jurisprudencia de la CoIDH se recuerda el mandato que obliga a los Estados parte a tipificar el delito en su derecho interno conforme a los estándares internacionales. México es Estado Parte de la Convención de Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (la cual entró en vigor en 2010) y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (la cual entró en vigor en 1996), sin embargo, tal y como lo ha acreditado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI), persiste en nuestro país una disparidad en la tipificación, sanción y prescripción respecto de la desaparición forzada en las diferentes entidades de la República así como en el ámbito federal.

En México, la facultad de aprobar leyes penales es compartida por los Estados y el Gobierno Federal, sin embargo, hay algunos delitos que son de competencia exclusiva de la Federación. La desaparición forzada es un delito autónomo en el Código Penal Federal así como en la legislación penal de siete Estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca), mientras que en los 25 restantes no se encuentra tipificada. Asimismo, la legislación penal de la Federación y los Estados que han tipificado la desaparición forzada no utilizan la misma definición. Además, la mayoría no incluye la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre o con el apoyo del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, autorización o aquiescencia. En la mayoría de las legislaciones Estatales queda excluida la prescripción.

*Esta desigualdad queda plasmada en el siguiente cuadro:*

| ***ENTIDAD FEDERATIVA*** | ***NORMATIVIDAD*** | ***OBSERVACIONES*** |
|---|---|---|
| *Aguascalientes* | *Artículo 136 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.* | *Considera a la desaparición forzada de personas como la acción de detener y mantener oculta a una o varias personas, o Autorizar, apoyar o consentir que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o negar información sobre su paradero.*<br>*Tales acciones solo podrán imputarse a los servidores públicos del Estado de Aguascalientes que las lleven a cabo con motivo de sus atribuciones.* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *La sanción impuesta por esta legislación consiste en aplicar de 10 a 30 años de prisión y de 300 a 600 días multa y con la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.* |
| *Baja California* | *Artículo 167 Bis del Código Penal para el Estado de Baja California.* | *El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que con motivo de sus atribuciones detenga o mantenga oculto a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.*<br>*La sanción consiste en aplicar una pena de 15 a 40 años de prisión y de cien a quinientos días multa.*<br>*Contempla atenuantes para quienes suministren información que permita esclarecer los hechos, así como también, cuando se contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.* |
| *Baja California Sur* | *No se encuentra tipificado.* | |
| *Campeche* | *Artículo 181 del Código Penal para el Estado de Campeche.* | *Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el agente estatal que, con motivo de sus atribuciones priva de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.*<br>*Asimismo, contempla atenuantes para quienes suministren información y contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.* |
| *Chiapas* | *Ley para la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Chiapas.* | *Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, así como también, sancionar y establecer medias de reparación integral del daño.* |
| *Chihuahua* | *Artículo 165 del Código* | *Se establece que el delito de* |

| | | |
|---|---|---|
| | *Penal del Estado de Chihuahua.* | *desaparición forzada de personas se configura cuando el servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.*<br>*Establece una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días multa, así como, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.*<br>*Asimismo, también se considera como sujeto activo, el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público, participe en la comisión de éste delito.*<br>*Finalmente, determina atenuantes tanto para quienes proporcionen información que permita esclarecer los hechos, como para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.* |
| *Coahuila* | *Artículos 212 Bis, 212 Bis 1, 212 Bis 2, 212 Bis 3, 212 Bis 4, 212 Bis 5 y 212 Bis 6 del Código Penal del Estado de Coahuila.* | *Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma a una o varias personas, o bien autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad.*<br>*Asimismo, contempla como sujeto activo al particular que por orden, autorización, apoyo, consentimiento o aquiescencia de un servidor público participe en los actos tendientes a la desaparición forzada de personas.*<br>*Prevé el establecimiento de una pena de veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo público.* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *Se considera como un delito de ejecución permanente, en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima.*<br>*Finalmente, considera atenuantes para quienes proporcionen información que permita esclarecer los hechos, así como para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida o el paradero de la víctima.* |
| *Colima* | *Artículo 202 Bis y 202 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Colima.* | *Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público del Estado de Colima o sus Municipios que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.*<br>*Contempla una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil unidades de multa, e inhabilitación hasta por quince años para el desempeño de cualquier cargo público.*<br>*De igual manera, prevé una pena de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientas unidades de multa, para el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas.*<br>*Contempla atenuantes para quienes proporcionen información y contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.*<br>*Finalmente, equipara al delito de desaparición forzada de personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.* |
| *Distrito Federal* | *Artículo 168 del Código Penal para el Distrito Federal.* | *Considera como sujeto activo al servidor público del Distrito Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *privación o niegue información sobre su paradero.*<br>*La sanción impuesta es de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días multa, así como, inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.*<br>*De igual modo, prevé sanciones para el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas, las cuales consisten en imponer una pena de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días multa.*<br>*Establece diversas atenuantes en torno a proporcionar información tendiente a lograr la aparición con vida de la víctima.*<br>*Finalmente, el delito de desaparición forzada de personas no se sujeta a las reglas de la prescripción.* |
| *Durango* | *Artículo 364 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango.* | *Se establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.*<br>*Establece sanciones de cinco a veinticinco años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, así como, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.*<br>*Dichas penas se imponen de igual manera al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas.*<br>*Contempla atenuantes cuando se proporcione información que permita esclarecer los hechos, así como, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *Refiere que éste delito no se sujeta a las reglas de la prescripción.* |
| *Guanajuato* | *Artículos 262-a y 262-b del Código Penal del Estado de Guanajuato.* | *El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de una o varias personas que hubieren sido previamente detenidas por la autoridad.*<br>*Establece una sanción de cinco a cuarenta años de prisión y de mil a dos mil días multa, así como, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta.* |
| *Guerrero* | *Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero número 569.* | *Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, así como, sancionar a los autores, cómplices y encubridores de éste delito y, finalmente, establecer medidas de reparación integral del daño para las víctimas.* |
| *Hidalgo* | *Artículo 332 Ter del Código de Código Penal para el Estado de Hidalgo.* | *Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que actuando con ese carácter o aduciendo su cargo, por sí o a través de un tercero, tenga conocimiento o intervenga de cualquier modo, en la detención legal o privación ilegal de la libertad de una o varias personas, propiciando o manteniendo dolosamente su ocultamiento, al negarse a reconocer la privación de la libertad o a proporcionar información sobre el paradero de la víctima.*<br>*Impone una sanción de veinte a cuarenta años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días, así como también, inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la pena.* |
| *Jalisco* | *Artículos 154-A, 154-B, 154-C, 154-D, 154-E,* | *Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el* |

| | | |
|---|---|---|
| | *154-F y 154-G de Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.* | *servidor público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.*<br>*En este sentido, determina que de igual modo es sujeto activo, aquel que intervenga actuando con la autorización, la ayuda, la aquiescencia o tolerancia directa o indirecta de servidores públicos o de integrantes de seguridad pública.*<br>*Asimismo, regula la desaparición forzada por particulares.*<br>*Establece una pena de doce a cuarenta años de prisión y multa de seiscientos a mil días de salario mínimo.*<br>*Considera como agravante incrementando la pena hasta en una tercera parte, cuando la víctima es menor de edad, mujer, persona con discapacidad, indígena o persona de la tercera edad.*<br>*Las penas aumentan hasta el doble es perpetrada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.*<br>*Contempla como atenuantes disminuyendo la pena hasta en un cincuenta por ciento, cuando se proporciona información que permita esclarecer los hechos.* |
| *México* | *No se encuentra tipificado.* | |
| *Michoacán* | *Artículos 230, 231 y 232 del Código Penal del Estado de Michoacán.* | *El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquél u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *paradero de la víctima.*<br>*Contempla una sanción de veinte a cuarenta años de prisión, e inhabilitación definitiva para ejercer la función pública. Se establecen como agravantes cuando el superior jerárquico de un servidor público participante en la comisión del delito, haya tenido conocimiento de su comisión y no ejerciere su autoridad para evitarlo; cuando el sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, migrante, menor de dieciocho años, mayor de setenta años, indígena o mujer embarazada, así como también, cuando se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito, y finalmente, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.*<br>*Se consideran como atenuantes cuando se proporciona información que permita la localización de la víctima, así como, cuando la ésta es liberada dentro de los diez días siguientes a su liberación, la pena será de dos a doce años de prisión.*<br>*El delito de desaparición forzada de personas es imprescriptible.* |
| *Morelos* | *No se encuentra tipificado.* | |
| *Nayarit* | *Artículo 291 A* | *Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas y derivado de la privación de la libertad, mantenga oculta o desaparecida a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre el paradero de la o de las víctimas.*<br>*Asimismo, también considera como sujeto acto activo a todo aquel que aún cuando no sea servidor público, actúe mediante la autorización, el* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.*<br>*Contempla una sanción de cinco a veinte años de prisión y una multa de cien a cuatrocientos días de salario.* |
| *Nuevo León* | *Artículos 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.* | *El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquel u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima.*<br>*Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima.*<br>*Asimismo, se establece que si durante la comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicaran las reglas del concurso.*<br>*Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil cuotas.* |
| *Oaxaca* | *Artículos 348 Bis D y 348 Bis E del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.* | *Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, quien por orden o con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, priva de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el Servidor Público que ordene, autorice o apoye la desaparición.*<br>*Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.*<br>*Impone una pena de cinco a treinta años de prisión y multa de trescientos a setecientos salarios mínimos, así como, la inhabilitación por el tiempo de la pena fijada.*<br>*Implementa medidas tendientes a* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *disminuir la pena cuando se proporciona información, así como también, cuando se contribuye a lograr la aparición con vida de la víctima.*<br>*Refiere que, el Estado y los municipios serán solidariamente responsables del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.* |
| *Puebla* | *Artículos 304 Bis y 304 Ter del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.* | *Establece como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público que con motivo de sus atribuciones sin causa legítima, detenga a una o varias personas con la finalidad de ocultarlo, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.*<br>*Comprende una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días de salario mínimo, así como, la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años. En este sentido, de igual manera considera como sujeto activo, al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas, recibiendo una sanción de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de salario mínimo. Determina atenuantes para aquellos casos en que se proporcione información que permita esclarecer los hechos y, cuando se contribuye a lograr la aparición con vida de la víctima reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida* |
| *Querétaro* | *En proceso de publicación, aprobada por comisiones.* | |
| *Quintana Roo* | *No se encuentra tipificado.* | |
| *San Luis Potosí* | *Artículos 136 quinque y 136 sexties.* | *Establece que el delito de desaparición forzada de personas, se* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas.*<br>*De igual modo, se considera como sujeto activo, el particular que por orden, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, participe en la comisión del delito de desaparición forzada de personas.*<br>*Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión, y sanción pecuniaria de trescientos a mil quinientos días de salario mínimo.*<br>*El delito al que se refiere éste artículo, es de ejecución permanente en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima, por lo que no prescribe ni la acción penal, ni las penas que deriven de su comisión.*<br>*Contempla atenuantes para quienes suministren información que permita esclarecer los hechos, así como, para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.* |
| *Sinaloa* | *Artículos 172 Bis, 172 Bis A, 172 Bis B, 172 Bis C, 172 Bis D, 172 Bis E, 172 Bis F, 172 Bis G, 172 Bis H, 172 Bis I. del Código Penal para el Estado de Sinaloa.* | *Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o la persona o grupo de personas que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o sus servidores públicos, arreste, detenga, secuestre o prive de cualquier otra forma de su libertad a una persona, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida.*<br>*Determina una pena de veinticinco a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, así como, la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo,* |

| | | |
|---|---|---|
| | | *empleo o comisión públicos de diez a veinte años.*<br>*Es considerado como un delito permanente e imprescriptible.* |
| *Sonora* | *Artículos 181 Bis, 181 Bis 2, 181 Bis 3, 181 Bis 4, 181 Bis 5, 181 Bis 6, 181 Bis 7, 181 Bis 8, 181 Bis 9 181 Bis 10 y 181 Bis 11 del Código Penal del Estado de Sonora.* | *Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público que, con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta, a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.*<br>*Es considerado como un delito permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima.*<br>*Comprende una sanción de de quince a cuarenta años de prisión, además de la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública de diez a veinte años.* |
| *Tabasco* | *No se encuentra tipificado.* | |
| *Tamaulipas* | *No se encuentra tipificado.* | |
| *Tlaxcala* | *No se encuentra tipificado.* | |
| *Veracruz* | *No se encuentra tipificado.* | |
| *Yucatán* | *No se encuentra tipificado.* | |
| *Zacatecas* | *No se encuentra tipificado.* | |

De acuerdo con lo anterior, en ninguna de las legislaciones penales, ni de las entidades federativas, ni de la federación, se encuentra tipificada la desaparición involuntaria de personas. De ahí que el Capítulo II de la presente Iniciativa, denominado De los Delitos de Desaparición de Personas, desarrolle puntualmente lo siguiente;

**Bien jurídico tutelado**

Para Santiago Corcuera, señala la autora de la iniciativa, el primer elemento constitutivo del delito de desaparición forzada de personas es la privación de libertad de la víctima, cualquiera que fuera su forma. Es decir, la privación de libertad puede inicialmente haber sido una detención o arresto legal, pero cuando es seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de

informar dicho paradero de la personajes cuando comienza propiamente a perpetrarse el crimen de desaparición forzada, y desde luego, aquella privación de libertad que pudiera haber sido legal, se convierte automáticamente en ilegal, en la medida en que tiene como consecuencia impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes tanto para la víctima directa de la desaparición (la persona privada de libertad) como para sus familiares.

Sin embargo, de acuerdo al Folleto Informativo sobre la práctica de la desaparición forzada elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: La práctica de la desaparición forzada de personas viola toda una gama de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, así como en otros importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario.

Las desapariciones pueden entrañar también violaciones graves de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1957, así como del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobados por la Asamblea General en 1979 y 1988, respectivamente. En una desaparición pueden violarse también los derechos siguientes:

*El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;*

*El derecho a la libertad y seguridad de la persona;*

*El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y*

*El derecho a la vida.*

Las desapariciones violan en general el derecho a llevar una vida de familia así como diversos derechos de carácter económico, social y cultural, como el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la educación. En efecto, se ha comprobado que la desaparición del principal sostén económico de la familia, en particular en las sociedades menos prósperas, suele dejarla en una situación socioeconómica desesperada, en la que es imposible ejercer la mayoría de los derechos enumerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres. Cuando las mujeres son víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo. Además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A este título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias.

Los niños son también afectados por las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos humanos.

La Declaración prevé en su artículo 1.2 lo siguiente:

*"Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas*

*ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro."*

De lo enunciado en el párrafo anterior, se deriva claramente que la comisión de desaparición forzada implica la violación de diversos derechos humanos. Se trata de una conducta multiviolatoria de derechos y por lo tanto pluriofensiva.

Así lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos:

*[...] Todo acto de desaparición de ese tipo constituye una violación de muchos de los derechos consagrados en el Pacto, como son el derecho a la libertad y la seguridad personales (art. 9), el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7) y el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (art. 10). Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro (art. 6).*

De lo dicho en el apartado inmediato anterior, resulta evidente y más allá de toda duda que la comisión del crimen de desaparición forzada viola en perjuicio de la víctima el derecho a su libertad y la seguridad personales. Esto se desprende de la propia definición de desaparición forzada a la luz de los instrumentos internacionales mencionados. Además, el artículo 1.2 de la Declaración establece expresamente que la desaparición forzada constituye una violación al derecho a la libertad y a la seguridad de las personas. De manera consistente, en los casos en que la Corte Interamericana, el Comité de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos han encontrado a algún Estado responsable de desaparición forzada, se señala como derecho violado en perjuicio de la víctima el derecho a la libertad y a la seguridad personales.

Sin embargo, abunda la proponente, la acreditada organización Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial, en el Consejo de Derechos Humanos, en su exposición presentada por escrito por primer período de sesiones, 19 al 30 de junio de 2006. Afirma lo siguiente:

*"Con la desaparición forzada se violan una serie de derechos humanos: a la vida, a la libertad en su sentido más amplio porque al desaparecido se le niega el ejercicio de todos y cada lino de sus derechos como persona, a la seguridad y a la integridad física y psicológica, etc. En resumen, se priva al desaparecido de su personalidad jurídica.[...]el desaparecido (que oficialmente no existe, ni vivo, ni muerto, ni en prisión, ni en libertad) queda sustraído a la protección de la ley."*

Asimismo, se contempla en esta iniciativa, la Corte Interamericana, por primera vez en el caso Anzualdo vs. Perú, llegó a la conclusión de que en ese caso de desaparición forzada sí se violó el derecho a la personalidad jurídica, cuando expresa que:

*"101. En consideración de lo anterior, la Corte estima que en casos de desaparición forzada de personas se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. Esto se tradujo en una violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Anzualdo Castro."*

**El tipo penal de desaparición forzada de personas**

Cuatro instrumentos internacionales hacen una descripción de la conducta del delito de desaparición forzada de personas, a saber:

*1. Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 18 de diciembre de 1992. Cuya definición establece que la desaparición forzada de personas es que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndose así a la protección de la ley.*

*2. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, dictada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.*

*3. Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998.Establece que es [l]a aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.*

*4. Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 22 de junio de 2006.Lo configura como [e]l arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha considerado que dada la particular relevancia de las transgresiones que conlleva y la naturaleza de los derechos lesionados, el concepto de desaparición forzada de personas se ha consolidado internacionalmente en tanto grave violación de derechos humanos.

Esta caracterización resulta consistente con otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada:

*a. La privación de la libertad;*

*b. La intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos;*

*c. La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada, y*

*d. Que con estas acciones se obtenga como resultado sustraer a la víctima de la protección de la justicia.*

Por su parte, la Corte Interamericana en la sentencia del caso Radilla Pacheco, sostuvo:

*La caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se desprende no sólo de la propia definición del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado mexicano es parte desde el 9 de abril de 2002, los travaux préparatoinres a ésta, su preámbulo y normativa, sino también de otras definiciones contenidas en*

*diferentes instrumentos internacionales que, asimismo, señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Además la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias Cortes Constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.*

*Los elementos típicos de la desaparición forzada de personas se desprenden fundamentalmente de los cuatro instrumentos internacionales a los que ya se hizo referencia, a saber, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional sobre la Protección de todas las Personas contralas Desapariciones Forzadas.*

*La diferencia de la desaparición forzada de personas con otras formas de privación de la libertad, consiste primeramente en que esta se ejecute o pretenda ejecutar, por agentes estatales o por personas o grupos de personas que con la autorización, apoyo o aquiescencia de los primeros, o que se prive de la libertad a una persona -como lo sostiene el Estatuto de Roma- por una organización política, pero con la aquiescencia de los agentes del Estado; en segundo lugar, que luego de la privación de libertad -sea ésta legal o ilegal- los agentes estatales se nieguen a dar información o se nieguen a reconocer la privación de libertado de informar sobre el paradero de la víctima, y en tercer lugar, resulta fundamental que con la conducta omisiva se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes en perjuicio del sujeto pasivo de este delito.*

Así, se hace necesaria una norma integral que comprenda un concepto del delito que contenga todos los elementos constitutivos del ilícito penal que sea acorde a los estándares adoptados fundamentalmente por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Así podemos afirmar que se desprenden de esta definición dos tipos penales, el establecido en el proyecto en el artículo 5 y el correspondiente al artículo 6.

En el primero encontramos como elementos objetivos: la conducta inicial, consistente en que se realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona; la conducta posterior, que el activo se niegue a proporcionar información o la que proporcione dolosamente sea falsa; el sujeto activo, una persona con calidad de servidor público; el sujeto pasivo, por supuesto es una persona sin importar la calidad de esta; y el elemento objetivo que consiste en que las conductas realizadas den como resultado el impedir el acceso a la justicia de la víctima y así se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

En el segundo caso (art. 6), los elementos objetivos son los mismos, con excepción de que el activo no es propiamente un servidor público, sino un particular que actúa con autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público, o que con concierto previo, ordene, ayude, planee, ejecute o participe en la realización de la desaparición forzada de personas.

**Desaparición involuntaria de personas**

El artículo 3 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que:

*"Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables."*

Lo anterior significa, que si bien los particulares no cometen el delito de desaparición forzada de personas, los Estados parte tienen la obligación de tipificar el delito cuando es cometido por particulares

que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. A esta conducta se le denomina desaparición involuntaria de personas y tiene como característica esencial, a diferencia del secuestro u otras modalidades de privación de libertad, que la víctima queda sin el recurso del acceso a la protección que el estado debe brindarle a toda persona. Es indispensable señalar que los propósitos de dicha privación de la libertad son distintos a los del secuestro, de manera que no se confundan ambas conductas.

**Desaparición equiparada de personas**

Es totalmente conocido, sobre todo por la experiencia de países latinoamericanos que sufrieron las consecuencias de este delito durante el periodo de dictaduras militares, que una vez que tenían ocultas y privadas de su libertad a mujeres en centros de reclutamiento de victimas del citado delito, estas en ocasiones salían embarazadas concibiendo hijas e hijos, mismos que les eran sustraídos y dados en adopciones ilegales, o bien se les cambiaba la identidad y eran registrados como hijos de otras personas mediante actas falsas, motivo por el cual, es indispensable tipificar como delito equiparado a la desaparición de personas, el ocultamiento de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición durante el cautiverio.

En este sentido, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece en su artículo 25:

*Artículo 25*

*1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:*

*a ) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;*

*b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso a) supra.*

*2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.*

*3. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización de los niños a los que hace referencia el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo.*

*4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley, deberán existir en los Estados Partes que reconocen el sistema de adopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación o guarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción o colocación o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada.*

*5. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere a este artículo, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en función de su edad y madurez.*

**Delitos relacionados a la desaparición forzada o involuntaria de personas y a sus equiparados**

Es materia de este proyecto de Ley establecer con claridad los delitos relacionados a las conductas típicas descritas en los artículos 5, 6, 7 y 8. Así, si bien para las conductas determinadas en los artículos 9, 10 y 11 no es posible determinar a los activos como autores o partícipes de los delitos de desaparición forzada o involuntaria o sus equiparados, por no haber concierto previo en sus acciones u omisiones, se considera que dichas conductas son en sí mismas lesivas y, de ocurrir, deberán estar penadas por la Ley.

**Agravantes y atenuantes punitivas.**

Los artículos 12 y 13 del presente proyecto proponen además que se pueda atenuar hasta en una mitad la pena privativa de libertad si el activo del delito proporciona cualquier información que pueda llevar a recuperar a la víctima del delito de desaparición forzada o involuntaria con vida. En el caso del segundo, se disminuirá la pena en un tercio cuando se puedan recuperar los restos corpóreos de la persona o se localice y aprenda al autor del delito.

El artículo 14 establece que los agravantes de los delitos de desaparición de personas, forzada, involuntaria o equiparada aplicarán en los siguientes casos que durante la desaparición a la víctima le sobrevenga la muerte; se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima; se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito; la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o candidata a cargo de elección popular; el autor o partícipe haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública; el autor o partícipe sea o haya sido integrante de alguna corporación privada o se ostente como tal sin serlo; la desaparición se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito; la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; se cometa en contra de persona protegida internacionalmente por el Derecho Internacional Humanitario o agente diplomático; o el delito se prepare, planifique, direccione o controle desde algún centro de reclusión.

**Delito de carácter continuo.**
Es indudable, señala la proponente, que la desaparición forzada tiene una determinada duración o desarrollo en el tiempo. Es decir, es un crimen de carácter continuo o permanente, en tanto dure. La Convención Interamericana en su Artículo III, establece que:

*"Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.*

*Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona."*

La Convención de la ONU, en su artículo 8 señala:

*Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5,*

*1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:*

*b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito.*

*La Declaración en su Artículo 17, establece que:*

*1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.*

Lo anterior se encuentra en sintonía con el Código Penal Federal, el cual establece por delito permanente o continuo en su artículo 7, fracción II: Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo.

Así, acorde al Capítulo III, relativo a la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas para la Prevención, Investigación y Sanción de Desaparición de Personas, se establece que las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para cumplir con los objetivos y fines de esta Ley; diseñar, proponer e impulsar políticas de Prevención, Investigación y Sanción de la Desaparición de Personas; elaborar y aplicar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley, en la Ley General de Víctimas y en las leyes en la materia expedidas o que expidan las entidades federativas.

De igual forma, crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente Ley, compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad con los protocolos que al efecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública; establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos especializados en desaparición de personas de las Instituciones de Seguridad Pública; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas; establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Perfiles Genéticos; y determinar y aplicar los protocolos de búsqueda y localización, entre otras.

Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas deberán crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función.

Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables. Las autoridades del gobierno federal y de las entidades federativas deberán establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos especializados en los delitos previstos en esta Ley.

Es deber de todas las autoridades federales y de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención.

Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como

cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda de la persona desaparecida.

El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a los organismos autónomos constitucionales de promoción y defensa de los derechos humanos.

Si durante la investigación de los delitos de desaparición de persona se presume fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

Los vehículos terrestres pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad de la federación y de las entidades federativas deberán estar permanentemente monitoreadas a través de cualquier medio de geolocalización que permita mantener un registro de por lo menos 90 días de quienes se encontraban a bordo del vehículo y de los lugares y horarios en los que estuvo dicho vehículo.

En el Capítulo IV, relativo al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas se dispone que dicho registro es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, detención o internación en que se encuentren materialmente. Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas.

El Capítulo V, correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, estipula que este registro es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas desaparecidas y de aquellas de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

Corresponderá al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

*I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;*

*II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;*

*III. Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de registro o información sobre personas desaparecidas;*

*IV. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas desaparecidas a partir de la siguiente clasificación:*

*a. Sexo;*

*b. Edad;*

*c. Nacionalidad;*

*d. Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la desaparición;*

*e. Origen étnico;*

*f. Si se trata de personas con alguna discapacidad;*

*g. Señas particulares; y*

*h. Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;*

*V. Operar, regular y mantener el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;*

*VI. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como la que le suministren las Entidades;*

*El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de personas desaparecidas. Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.*

*El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas funcionará las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe, para solicitar información respecto del procedimiento que deberá de seguirse para la búsqueda de una persona desaparecida.*

*El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentar un informe anual al Consejo Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las estadísticas que arroje el Registro de Datos de Personas Desaparecidas. La información contenida en el informe será pública.*

El Capítulo VI, denominado del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, de los perfiles genéticos de personas desaparecidas, de los familiares en primer grado en línea recta de las víctimas y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización o ubicación de personas desparecidas y su familia.

Para ello, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

*I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;*

*II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos;*

*III. Integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que contendrá los al registro alfanumérico personal elaborado sobre la base de secuencias de ADN que sean polimórficas en la población y que aporten*

*exclusivamente información reveladora de la identidad de la persona y de su sexo de las siguientes personas:*

*a. De las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;*

*b. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta ascendente materna y paterna de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;*

*c. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta descendiente de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible; y,*

*d. De los cuerpos o tejidos de personas encontradas de quienes se desconozca su identidad;*

*IV. Operar, regular y mantener el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;*

*V. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, así como la que le suministren las Entidades Federativas;*

*VI. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Perfiles Genéticos, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;*

*VII. Realizar el cotejo de los perfiles genéticos con la totalidad de los perfiles contenidos en la base de datos, a los efectos de corroborar la existencia de un impacto identificatorio positivo;*

El Capítulo VII, relativo al Procedimiento de Búsqueda de Emergencia tiene por objeto quelas procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas emitirán un procedimiento de búsqueda de emergencia a fin de que las unidades especiales, en el ámbito de su competencia, realicen la búsqueda de personas desaparecidas siempre que tengan conocimiento del hecho, durante las primeras 72 horas siguientes a la realización del hecho, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a disposición de la persona desaparecida ante el ministerio público o la autoridad judicial que se encuentre en los supuestos de esta Ley.

Dicho procedimiento facultará a las unidades especiales de búsqueda el acceso inmediato a cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud públicos o privados, donde se presuma fundadamente que la víctima pudiera encontrarse. En todos los procedimientos de investigación y búsqueda de personas desparecidas, el ministerio público competente garantizará la conservación de los indicios durante todo el procedimiento a través de una correcta implementación de la cadena de custodia.

Para complementar lo anterior, los Capítulo VIII y IX, correspondientes al procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición y a la Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño, respectivamente, buscar reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima.

Estarán facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas:

*I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;*

*II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;*

*III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;*

*IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;*

*V. La pareja de la víctima que se encuentre bajo la figura del pacto civil de solidaridad u otra similar.*

*VI. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas.*

*VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil;*

*VIII. El Ministerio Público;*

*IX. Los organismos de protección de los derechos humanos.*
*Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.*

*Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.*

*El Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá la averiguación con el objetivo de dar con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar en su caso la acción penal correspondiente.*

*En caso de que como resultado de la búsqueda e investigación se descubriera un fraude a la ley, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas quedará sin efecto.*

*La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos:*

*I. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;*

*II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez;*

*III. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;*

*IV. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;*

*V. Salvaguardar sus derechos escolares;*

*VI. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida;*

*VII. Salvaguardar los derechos adquiridos y aquellos en los que tenía una expectativa de ejercerlos;*

*VIII. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo; y*

*IX. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente ley.*

*De igual modo, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de continuar las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.*

*A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente ley, se les dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva.*

*En el caso de las personas que han sido declaradas como ausentes por Desaparición de Personas se les otorgará la siguiente protección en materia laboral:*

*I. Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas;*

*II. Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad;*

*III. Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable;*

*IV. A los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable;*

*V. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a la persona.*

*VI. Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida, serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana.*

*VII. Los demás que determinen las autoridades competentes.*

*Los beneficiarios del trabajador a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de los beneficios y prestaciones hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona. Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición de persona, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.*

*En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la declaración de ausencia por desaparición de persona, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.*

*Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a lo establecido en esta ley, la Ley General de Víctimas, las leyes de las entidades federativas en materia de atención a víctimas, así como*

*los protocolos de atención y reparación específico que en el ámbito de sus competencias establezcan las instituciones encargadas de la atención a víctimas.*

Finalmente, por lo que tiene que ver con la reforma al sexto párrafo del artículo 15 y la adición de un último párrafo al artículo109 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que aun cuando el juicio de amparo es una institución importantísima para la defensa de los derechos humanos —que efectivamente es un recurso sencillo, rápido, generalmente puede incluso paralizar actos futuros—, para el caso de desaparición forzada de personas presenta dificultades que lo limitan para la localización de personas desaparecidas.

Si bien es cierto, señala la proponente, que en el marco jurídico mexicano, las garantías y los derechos humanos de las personas se encuentran amparadas y protegidas por los Tribunales Federales mediante el juicio de amparo, también lo es que tratándose del delito de desaparición forzada de personas, el individuo es sustraído de todo régimen jurídico vigente, en consecuencia, queda intempestivamente destruida toda la estructura técnico-jurídica del juicio de amparo. Todo ello, propicia que el Estado se encuentre en condiciones de eludir su responsabilidad política de un acto arbitrario de suma gravedad que atenta contra la vida, la libertad y la seguridad física y jurídica de la víctima y de sus familiares, que se comete con la ventaja del sujeto activo que cuenta, por acción o por omisión con el respaldo y con recursos del Estado.

No obstante que el 2 de abril de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas correspondientes a la Ley de Amparo donde se establece que a nombre de la persona desaparecida pueda promover el juicio de amparo cualquier persona en su nombre, aún con esta disposición el Juicio de Amparo presenta problemas prácticos que básicamente se refieren a la ubicación y localización de la persona desaparecida, pues si se parte del hecho de que se trata de una situación donde pudiera requerir la intervención de una autoridad pública para mantener oculta el paradero de una persona, es evidente la facilidad con que cuenta para lograr su objetivo.

Diversos supuestos pueden presentarse al buscar a una persona desaparecida; por ejemplo, que la retención se realice en algún centro de reclusión clandestino, lo que de suyo hace imposible su localización; otro supuesto, el detenido está en una cárcel oficial, pero no se realiza el registro de la detención, o se demora el ingreso del servidor público para lograr su ocultamiento; un caso más, la persona desaparecida pueda estar en alguna instalación militar y, aun cuando es posible ingresar a estos lugares, el acceso es restringido y requiere autorizaciones previas que permiten perfectamente ganar tiempo que se emplea en su ocultamiento o extracción a un lugar distinto.

Pero la localización del paradero de una persona desaparecida no sólo es un problema práctico, también incide en el ámbito normativo, pues el órgano que dé seguimiento a una desaparición forzada debe tener la facultad de solicitar a las autoridades, información que contribuya a la localización rápida y oportuna de la persona, y además, la posibilidad de ingresar a todo tipo de centros de detención sin objeción alguna.

Si bien la Ley de Amparo cubre la primera parte porque en el trámite del juicio se solicita informe a las autoridades señaladas como responsables y permite hacer todas las gestiones necesarias para ubicar a la persona, no hay normatividad suficiente para ejecutar directamente la búsqueda. Por tanto, la iniciativa de reformas al sexto párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo que se propone, plantea que cuando las circunstancias del caso la persona que presente la demanda de amparo, se trate de una posible desaparición, el Juez deberá ordenar el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a su disposición de la persona desaparecida. Dicha medida facultará a las Unidades encargadas de implementar el Procedimiento de Búsqueda de Emergencia, el acceso inmediato a cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud tanto públicos como privados.

Por otra parte, el artículo 109 de la Ley de amparo establece que cuando se promueva un amparo en los términos del artículo 15, (es decir, los supuestos en materia de desaparición de personas), bastará para la admisión de la demanda, que se exprese el acto reclamado; la autoridad responsable, si fuere posible; el lugar en que se encuentre la víctima, y la autoridad que ejecute el acto. Con lo anterior, se restringe la efectiva protección de los derechos humanos, ya que, indica como requisitos de procedibilidad que se señalen la o las autoridades responsables, el lugar de la detención y la autoridad que ejecute el acto.

Como bien lo sostiene la Corte Interamericana, en la mayor parte de los casos se desconocen tanto las autoridades como el lugar de la detención. En este sentido, el juicio de amparo no tiene efectividad en la protección de los derechos humanos, frente a casos de desaparición forzada de personas. Lo anterior motiva la propuesta de adicionar un último párrafo al artículo 109 de la Ley de Amparo a fin de crear un verdadero recurso que pueda activarse a fin de prevenir este grave fenómeno.

Para mayor ilustración de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas que se expide, y las reformas y adiciones que se plantean a los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presentan la primera en sus términos y las segundas comparativamente con el contexto vigente de los preceptos en los que se incluyen, para contemplar en ellas sin mayor preámbulo, el sentido y alcance que comprenden.

**De este modo, la iniciativa propuesta por la Senadora Angélica de la Peña Gómez el día 24 de marzo del 2015 propone el siguiente articulado:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas, para quedar como sigue:

**Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas**
**Capítulo I**
**Disposiciones Generales**

**Artículo 1.-** Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 2.-** El objeto de la presente ley es tipificar los delitos de desaparición de personas con base en los criterios establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; así como determinar bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.

**Artículo 3.-** Todas las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse para garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Toda persona desaparecida tiene derecho a que las autoridades Federales y de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias realicen, con la debida diligencia, todas las acciones necesarias tendientes a preservar la seguridad personal de la víctima, la seguridad de su familia y testigos, así como regresarla con vida a su núcleo familiar, como objetivo principal de sus actuaciones.

**Artículo 4.-** Para los efectos de esta Ley se entenderá por Persona Desaparecida, toda persona que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto

armado internacional o no, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente.

Asimismo, se entenderá la sustracción de la víctima del acceso a la justicia que se tenga como resultado el que se le impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, que no pueda tener acceso a la protección de la ley o que se le niegue su personalidad jurídica.

## Capítulo II
## De los Delitos de Desaparición de Personas

**Artículo 5.-** Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público que con el objeto de sustraer a la víctima del acceso a la justicia, realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y:

I. Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad;

II. Omita dolosamente rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;

III. Se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;

IV. Oculte el paradero del sujeto pasivo;

V. Mantenga el ocultamiento del sujeto pasivo;

VI. Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima; o

VII. Dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de veinte a treinta años de prisión, de cuatro mil a ocho mil días multa e inhabilitación definitiva e inconmutable para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 6.-** Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desaparición forzada de persona el particular que:

I. Aprovechando la autorización, apoyo, tolerancia o aquiescencia de algún servidor público realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior; o

II. Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de las hipótesis descritas en el artículo anterior.

Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrán una pena de quince a veinte años de prisión y de quinientos a dos mil días multa.

**Artículo 7.-** Comete el delito de desaparición involuntaria de persona el particular que con el objeto de sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la prive de la libertad, con fines distintos a los del secuestro. A quien cometa el delito de desaparición involuntaria de personas se le impondrá una pena de prisión de quince a veinte años y de quinientos a dos mil días multa.

**Artículo 8.-** Se equipara al delito de desaparición forzada o involuntaria de persona, según haya intervenido un servidor público o no, el omitir entregar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o

muerta, que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada o involuntaria de persona y se sancionará conforme a lo dispuesto en los tres artículos anteriores.

**Artículo 9.-** El servidor público que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial y sin acuerdo previo a la comisión del delito, permita por acción u omisión el ocultamiento de la víctima de desaparición de personas materia de esta Ley en dichos lugares, se les impondrá la pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación inconmutable para ejercer cargos públicos.

La misma pena privativa de libertad se impondrá al particular que sin acuerdo previo a la comisión del delito, permita el ocultamiento de la víctima de desaparición de personas materia de esta Ley en algún inmueble de su propiedad.

**Artículo 10.-**Se sancionarán, a quien sin ser autor o partícipe, incurra en alguna de las conductas relacionadas con los delitos descritos en los artículos 5, 6, 7 y 8 de esta Ley, conforme a lo siguiente:

I. Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos mencionados con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

II. Teniendo conocimiento de la comisión de alguno de los delitos mencionados, omita dar aviso a la autoridad correspondiente con pena de ocho a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa.

III. Pudiendo evitar la comisión de alguno de los delitos materia de esta Ley, sin riesgo propio o ajeno, no lo evite con pena de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa.

IV. Teniendo conocimiento del destino final de una persona nacida de una mujer víctima de desaparición de persona, no proporcione la información a la autoridad competente se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si fuere servidor público, además con inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 11.-** Al Agente del Ministerio Público o cualquiera de sus auxiliares que teniendo a su cargo la investigación de alguno de los delitos materia de esta Ley, dolosamente la obstruya, retrase u omita realizarla adecuadamente, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión, multa de trescientos a quinientos días multa e inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad para ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles.

**Artículo 12.-** Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en una mitad, las siguientes:

I. Que la víctima fuere liberada espontáneamente durante las veinticuatro horas siguientes a su privación de libertad; o

II. Que el activo proporcione información que conduzca a la liberación de la víctima.

**Artículo 13.-** Serán atenuantes punitivas, y reducirán la pena hasta en un tercio, las siguientes:

I. Que el activo proporcione información que conduzca a dar con el paradero de los restos corpóreos de la víctima; o

II. Que el autor material de delito proporcionen información relativa a la responsabilidad y paradero del autor intelectual y se logre la ubicación o captura de éste.

**Artículo 14.-** Serán agravantes punitivas y aumentarán la pena hasta en una cuarta parte, las siguientes:

I. Que durante la desaparición a la víctima le sobrevenga la muerte;

II. Que se haya realizado alguna acción tendiente a ocultar el cadáver de la víctima;

III. Que se haya realizado la conducta con el fin de ocultar o procurar la impunidad por la comisión de otro delito;

IV. Que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o candidata a cargo de elección popular;

V. Que al autor o partícipe haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública;

VI. Que el autor o partícipe sea o haya sido integrante de alguna corporación privada o se ostente como tal sin serlo;

VII. Que la desaparición se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación o persecución de algún delito;

VIII. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;

IX. Que se cometa en contra de persona protegida internacionalmente por el Derecho Internacional Humanitario o agente diplomático; o

X. Que el delito se prepare, planifique, direccione o controle desde algún centro de reclusión.

Para efectos de la fracción VIII del presente artículo, se considera situación de vulnerabilidad la condición particular de la víctima derivada de una o más de las siguientes circunstancias:

a. Condición de género;

b. Preferencia u orientación sexual o identidad de género;

c. Condición socioeconómica precaria;

d. Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la consumación de alguno de los delitos previstos en esta Ley;

e. Trastorno físico o mental o discapacidad;

f. Pertenencia o ser originario de un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente o a cualquier otra equiparable;

g. Ser persona mayor de sesenta y cinco años de edad;

h. Ser persona menor de 18 años de edad;

i. Situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüístico; y

j. Otra condición personal, geográfica o circunstancial, preexistente o creada, que ponga a la víctima en especial desventaja respecto del sujeto activo del delito.

**Artículo 15.-** Los delitos de desaparición de persona son delitos continuos e imprescriptibles y se investigarán y perseguirán de oficio. Se aplicarán las reglas de autoría y participación además de las del concurso. Igualmente será sancionada la tentativa.

Estos delitos se consideran violaciones graves a los derechos humanos y respecto de ellos no se admite como causa de justificación el cumplimiento de un deber por orden o instrucción de un superior; ni la restricción o suspensión de derechos y garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para estos delitos no procede la amnistía, el indulto, ni sustitutivo alguno u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerar al activo de cualquier procedimiento o sanción penal; tampoco se les considerará de carácter político para efectos de extradición.

La práctica generalizada o sistemática de alguno de estos delitos por agentes del Estado o con su tolerancia o aquiescencia contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque se considerará crimen de lesa humanidad.

## Capítulo III
## De la Coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas para la Prevención, Investigación y Sanción de Desaparición de Personas

**Artículo 16.-** Las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para:

I. Cumplir con los objetivos y fines de esta Ley;

II. Diseñar, proponer e impulsar políticas de Prevención, Investigación y Sanción de la Desaparición de Personas;

III. Elaborar y aplicar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley, en la Ley General de Víctimas y en las leyes en la materia expedidas o que expidan las entidades federativas;

IV. Formular políticas integrales sistemáticas, así como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;

V. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones contra las conductas previstas en la presente Ley;

VI. Distribuir, a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y prevención, investigación y persecución de las conductas previstas en la presente Ley;

VII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;

VIII. Realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones policiales y de procuración de justicia para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley;

IX. Crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente Ley, compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad con los protocolos que al efecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

X. Regular la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley, así como de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;

XI. Realizar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y de procuración de justicia de las conductas previstas en la presente Ley;

XII. Rendir informes sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional de Procuración de Justicia y del Programa Nacional de Seguridad Pública, y remitirlo a las instancias correspondientes de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIII. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios con la finalidad de prevenir, perseguir y sancionar las conductas previstas en la presente Ley, en términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XIV. Dar seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere la fracción anterior. Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XV. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de las conductas previstas en la presente Ley con la finalidad de publicarlos periódicamente;

XVI. Colaborar en la prevención, persecución y sanción de las conductas previstas en la presente Ley;

XVII. Participar en la formulación de un Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar las conductas previstas en la presente Ley, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención, persecución y sanción del delito, así como la protección y atención a ofendidos, víctimas y familiares;

XVIII. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos especializados en desapariciones de personas de las Instituciones de Seguridad Pública;

XIX. Establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas;

XX. Establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

XXI. Establecer y regular el funcionamiento y la administración del Registro Nacional de Perfiles Genéticos; y,

XXII. Determinar y aplicar los protocolos de búsqueda y localización;

**Artículo 17.** Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas deberán crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función.

La Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas capacitarán a su personal en materia de planeación de investigación.

**Artículo 18.** Las unidades especiales de investigación tendrán las siguientes facultades:

I. Recibir, por cualquier medio, las denuncias sobre la desaparición de una persona e iniciar la investigación en un plazo no mayor a 8 horas.

II. Utilizar las técnicas de investigación previstas en esta Ley y en los demás ordenamientos aplicables;

III. Vigilar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las personas respecto de las cuales se tenga indicios de que se encuentran involucradas en los delitos previstos en esta Ley;

IV. Sistematizar la información obtenida para lograr la localización de la persona víctima de desaparición de personas y la detención de los probables responsables;

V. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de información que pueda ser relevante para la investigación del delito o la localización de las víctimas;

VI. Proponer políticas para la prevención e investigación de las conductas previstas en esta Ley;

VII. Proponer al Procurador General de la República o a los procuradores o fiscales de las entidades federativas, en su caso, la celebración de convenios con las empresas de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas;

VIII. Utilizar cualquier medio de investigación que les permita localizar a la víctima de desaparición de personas, identificar y ubicar a los presuntos responsables, y cumplir con los fines de la presente Ley, siempre y cuando dichas técnicas de investigación sean lícitas y con pleno respeto a los derechos humanos, y,

IX. Las demás que disponga la Ley.

**Artículo 19.** Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 20.** Las autoridades del gobierno federal y de las entidades federativas deberán establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos especializados en los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 21.-** Es deber de todas las autoridades federales y de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, mantener a toda persona que esté privada de la libertad en lugares de detención oficialmente reconocidos, presentarla sin demora ante la autoridad judicial e ingresar los datos

correspondientes en el Registro Federal de Datos de Personas Detenidas en las primeras seis horas posteriores a su detención.

**Artículo 22.-** Los órganos de la federación y de las entidades federativas que entre sus facultades se encuentre la de realizar detenciones, especialmente los relacionados con la procuración de justicia y seguridad pública, en los términos de los artículos 1 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los órganos encargados de la seguridad nacional, de conformidad con las leyes respectivas, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para:

I. La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

II. La organización de programas de formación de su personal para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentren en detención;

III. La profesionalización de las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y nacional en una cultura de respeto a los derechos humanos;

IV. La profesionalización de todo el personal de servicio público que participe en la detención, arresto y custodia de personas; y

V. La prevención, sanción y erradicación de la desaparición de personas.

**Artículo 23.-** Para los efectos de esta Ley, podrán ejercer las acciones legales correspondientes a favor de la persona desaparecida, persona con parentesco consanguíneo en cualquier grado o por adopción, la o el cónyuge, la concubinaria o el concubino, o cualquier persona que tenga algún vínculo de amistad, así como cualquiera que haya sufrido daños al intervenir para evitar su desaparición o como consecuencia del ejercicio de los mecanismos jurídicos y materiales propios de búsqueda de la persona desaparecida.

**Artículo 24.-** El Ministerio Público investigador y el Poder Judicial, garantizarán el pleno y libre ejercicio de la coadyuvancia a las víctimas y ofendidos del delito, así como a los organismos autónomos constitucionales de promoción y defensa de los derechos humanos.

**Artículo 25.-** Las personas a quienes se les impute cualquiera de los delitos materia de esta Ley sólo podrán ser investigados y juzgados por la jurisdicción ordinaria. No serán aplicables las disposiciones que sobre fueros especiales establezcan otras leyes.

**Artículo 26.-** Si durante la investigación de los delitos de desaparición de persona se presume fundadamente que la víctima pudiera encontrarse dentro de alguna instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, las autoridades administrativas o judiciales competentes tendrán libre e inmediato acceso al mismo.

**Artículo 27.-** Los vehículos terrestres pertenecientes a todas las fuerzas de seguridad de la federación y de las entidades federativas deberán estar permanentemente monitoreadas a través de cualquier medio de geolocalización que permita mantener un registro de por lo menos 90 días de quienes se encontraban a bordo del vehículo y de los lugares y horarios en los que estuvo dicho vehículo.

## Capítulo IV
## Del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas

**Artículo 28.-**El Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información

en una base de datos electrónica, sobre personas que se encuentren privadas de su libertad en cualquier modalidad de resguardo, detención o arresto, así como del establecimiento de atención, resguardo, detención o internación en que se encuentren materialmente.

**Artículo 29.-** Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el diseño, implementación y actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, para lo cual tendrá las siguientes facultades:

I. Emitir las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar y operar un sistema de atención telefónica gratuita que atienda las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, las solicitudes de registro y brinde información sobre personas en arresto o detención a autoridades, familiares o personas interesadas;

III. Operar, regular y mantener el Registro Nacional, así como procurar su buen funcionamiento;

IV. Integrar la información en el Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas que le proporcione las autoridades federales;

V. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VI. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración, y

VII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

**Artículo 30.-** Será responsabilidad de la autoridad que realice la detención enviar la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas dentro de las seis horas posteriores a su detención, la cual deberá ser, como mínimo:

I. Nombre, sexo, edad, nacionalidad y lugar de procedencia de la persona detenida;

II. Fecha, hora y lugar en la que se realizó la detención;

III. Autoridad ante la cual se encuentra a disposición la persona detenida;

IV. Razón que motivó la detención; y

V. Lugar en el que se encuentra materialmente la persona detenida.

En caso de que la autoridad desconozca la identidad de la persona detenida, ya sea porque no fuere proporcionada por la misma o porque no recuerda sus datos de filiación o identidad, se deberá enviar la media filiación, señas particulares y demás datos que permitan su identificación.

**Artículo 31.-** Cuando se ponga a cualquier persona a disposición de una autoridad administrativa o judicial, ésta debe verificar que se haya enviado la información correspondiente al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, y en caso que no se hubiere hecho, deberá hacerlo de inmediato.

**Artículo 32.-** Cuando haya algún cambio en la condición jurídica o ubicación física de la persona detenida, la autoridad que la ordene deberá de dar aviso de inmediato al Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas para mantener actualizada la información.

## Capítulo V
## Del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas

**Artículo 33.-**. El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas desaparecidas y de aquellas de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

**Artículo 34.-** Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

III. Diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de registro o información sobre personas desaparecidas;

IV. Integrar en el Registro Nacional la información de las personas desaparecidas a partir de la siguiente clasificación:

a. Sexo;

b. Edad;

c. Nacionalidad;

d. Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó la desaparición;

e. Origen étnico;

f. Si se trata de personas con alguna discapacidad;

g. Señas particulares; y

h. Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;

V. Operar, regular y mantener el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

VI. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, así como la que le suministren las Entidades;

VII. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VIII. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las actividades de cooperación con otros países, para el intercambio de información relacionada con el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas;

IX. Establecer los procedimientos para la obtención y manejo de la información genética de personas, a efecto de integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que coadyuve a la identificación de personas desaparecidas.

X. Las demás que disponga esta Ley.

El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de personas desaparecidas.

**Artículo 35.** Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona, deberá de comunicarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

**Artículo 36.** Las comunicaciones que se envíen al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas deberán de señalar:

I. El nombre completo de la persona desaparecida, edad, domicilio, procedencia, señas particulares y demás datos que permitan su identificación;

II. Fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez;

III. Fotografía con una antigüedad máxima de seis meses o, en su defecto, descripción detallada de los rasgos físicos al momento en que desapareció.

IV. Datos de la autoridad administrativa o judicial que conoció la denuncia o el reporte de desaparición, así como el número de expediente o averiguación previa en su caso, y,

V. Las autoridades obligadas deberán informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir a ampliar la información del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

**Artículo 37**. El Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas funcionará las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página

electrónica que para el efecto se diseñe, para solicitar información respecto del procedimiento que deberá de seguirse para la búsqueda de una persona desaparecida.

El Registro Nacional será alimentado por autoridades competentes en los términos que el Reglamento de esta Ley establezca.

En el momento en el cual la autoridad tuviera conocimiento del paradero de una persona desaparecida, todos los datos de éste deberán ser borrados del Registro, previa notificación a los denunciantes y verificación por éstos de su localización, conservando la autoridad la información que tenga utilidad estadística.

**Artículo 38**. La autoridad competente, previa autorización de los denunciantes, podrá requerir la colaboración de los medios de comunicación para transmitir la descripción de la persona desaparecida y, en caso de existir, la descripción de la o las personas a quienes se les atribuye la desaparición.

**Artículo 39**. El Secretariado Ejecutivo deberá presentar un informe anual al Consejo Nacional de Seguridad Pública y remitir una copia al Congreso de la Unión que contenga las estadísticas que arroje el Registro de Datos de Personas Desaparecidas. La información contenida en el informe será pública.

**Artículo 40**. La reglamentación de la presente Ley establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, garantizando la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos de conformidad con la legislación aplicable.

## Capítulo VI
## Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos

**Artículo 41.** El Registro Nacional de Perfiles Genéticos es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, de los perfiles genéticos de personas desaparecidas, de los familiares en primer grado en línea recta de las víctimas y de los restos que eventualmente se encuentren de personas de las que se desconociesen sus datos de identificación, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización o ubicación de personas desparecidas y su familia.

**Artículo 42.** Corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

I. Acordar con las Entidades Federativas las reglas a que se sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y, en general, sobre su operación, funcionamiento y administración;

II. Diseñar, implementar y actualizar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos;

III. Integrar el Registro Nacional de Perfiles Genéticos que contendrá los al registro alfanumérico personal elaborado sobre la base de secuencias de ADN que sean polimórficas en la población y que aporten exclusivamente información reveladora de la identidad de la persona y de su sexo de las siguientes personas:

a. De las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

b. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta ascendente materna y paterna de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible;

c. Si lo anterior no fuera posible, de los familiares en primer grado en línea recta descendiente de las personas desaparecidas, cuando esto sea posible, y

d. De los cuerpos o tejidos de personas encontradas de quienes se desconozca su identidad;

IV. Operar, regular y mantener el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;

V. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, así como la que le suministren las Entidades Federativas;

VI. Validar la información que debe incorporarse al Registro Nacional de Perfiles Genéticos, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;

VII. Realizar el cotejo de los perfiles genéticos con la totalidad de los perfiles contenidos en la base de datos, a los efectos de corroborar la existencia de un impacto identificatorio positivo;

VIII. Informar a la autoridad competente cuando se obtenga un impacto identificatorio positivo;

IX. Conservar el material biológico en un soporte adecuado, a los efectos de necesitarse la realización de una contraprueba;

X. Eliminar los registros de la base de datos del Registro Nacional de Perfiles Genéticos y destruir el material biológico de donde se obtuvo dicho registro cuando sea ordenado por la autoridad judicial competente;

XI. Mantener estricta reserva respecto de la información contenida en el Registro Nacional de Perfiles Genéticos, esta obligación que se extiende a todas aquellas personas que en razón de su función tengan conocimiento de su contenido y que subsistirá aún después de finalizada su relación con el Registro;

XII. Adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de modo que se evite su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar desviaciones de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado,

XIII. Las demás que disponga esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

El Secretariado Ejecutivo contará con el Centro Nacional de Información para la integración física del Registro Nacional de Perfiles Genéticos con fundamento en lo establecido para su funcionamiento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento correspondiente.

## Capítulo VII
## Del Procedimiento de Búsqueda de Emergencia

**Artículo 43.-** Las procuradurías o fiscalías de la federación y de las entidades federativas emitirán un procedimiento de búsqueda de emergencia a fin de que las unidades especiales, en el ámbito de su competencia realicen la búsqueda de personas desaparecidas siempre que tengan conocimiento del hecho, durante las primeras 72 horas siguientes a la realización del hecho, con la finalidad de obtener la inmediata puesta a disposición de la persona desaparecida ante el ministerio público o la autoridad judicial que se encuentre en los supuestos de esta Ley.

Dicho procedimiento facultará a las unidades especiales de búsqueda el acceso inmediato a cualquier instalación, edificio, local o recinto de carácter oficial, así como en hospitales que presten servicios de salud públicos o privados, donde se presuma fundadamente que la víctima pudiera encontrarse.

En todos los procedimientos de investigación y búsqueda de personas desparecidas, el ministerio público competente garantizará la conservación de los indicios durante todo el procedimiento a través de una correcta implementación de la cadena de custodia.

## Capítulo VIII
## De la Declaración de Ausencia por Desaparición

**Artículo 44.-** La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima.

A falta de disposición expresa en esta ley se atenderá de manera supletoria en todo lo que beneficie y a solicitud de parte interesada, a las disposiciones aplicables en materia civil.

**Artículo 45.-** Están facultados para solicitar la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;

III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;

IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;

V. La pareja de la víctima que se encuentre bajo la figura del pacto civil de solidaridad u otra similar.

VI. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas.

VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil;

VIII. El Ministerio Público;

IX. Los organismos de protección de los derechos humanos.

**Artículo 45.-** Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.
Transcurrido el término de 30 días, el Ministerio Público evaluará si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas ante el Juez competente en un plazo no mayor de diez días, solicitando en su caso las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

El Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación dirigirá la averiguación con el objetivo de dar con el paradero de la persona desaparecida e investigar el delito para ejercitar en su caso la acción penal correspondiente.

En caso de que como resultado de la búsqueda e investigación se descubriera un fraude a la ley, la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas quedará sin efecto.

**Artículo 47.-** Una vez concluido el plazo señalado en el artículo anterior, si el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, cualquiera de las personas e instituciones señaladas en el artículo 2° de esta Ley, podrán hacerlo.

**Artículo 48.-** Será competente para conocer el procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil correspondiente al lugar de domicilio de la persona o sujeto legitimado para formular la solicitud.

**Artículo 49.-** La solicitud de Ausencia por Desaparición de Personas incluirá la siguiente información:

I. El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;

II. Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la desaparición;

III. La fecha y lugar de los hechos;

IV. El nombre y edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana;

V. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;

VI. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;

VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida.

VIII. Cualquier otra información que se estime relevante.

Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, así deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.

**Artículo 50.-** Recibida la solicitud, el Juez competente requerirá inmediatamente a las autoridades copias certificadas de las denuncias para que obren en el expediente para su análisis y resolución.

El Juez competente publicará la resolución sobre Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial Gubernamental de la entidad federativa de que se trate, así como en el portal de internet que se habilite para estos propósitos tanto en el ámbito federal como estatal y ordenará al Juez del Registro Civil competente la anotación marginal en el acta que corresponda. Los diarios de mayor circulación en el lugar de residencia de la persona desaparecida deberán publicar en tres ocasiones, con un intervalo de cinco días naturales, el extracto de la resolución que ordene el juez sin costo para los familiares.

El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición de Personas, aquel en el que se le haya visto por última vez, salvo prueba fehaciente en contrario.

**Artículo 51.-** El trámite del procedimiento se orientará por el derecho a la verdad y por los principios de gratuidad, inmediatez y celeridad. El Poder Judicial correspondiente erogará los costos durante todo el trámite, incluso las que se generen después de emitida la resolución.

**Artículo 52.-** La resolución del Juez Competente sobre Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, incluirá las medidas necesarias para garantizar la máxima protección a la víctima, a la familia y a las personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana.

Dichas medidas se basarán en la legislación local, nacional e internacional y podrán emitirse medidas urgentes, provisionales o de protección específica antes de la resolución definitiva.

**Artículo 53.-** La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá los siguientes efectos:

I. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez;

III. Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

IV. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias;

V. Salvaguardar sus derechos escolares;

VI. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida;

VII. Salvaguardar los derechos adquiridos y aquellos en los que tenía una expectativa de ejercerlos;

VIII. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo; y

IX. Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente ley.

**Artículo 54.-** La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tendrá efectos de carácter general y universal de acuerdo a los criterios del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre tomando en cuenta la norma que más beneficie a la persona desaparecida, a la familia, las personas que tengan una relación afectiva inmediata y cotidiana y a la sociedad.

**Artículo 55.-** La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas no eximirá a las autoridades de continuar las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la persona desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.

A las autoridades que incumplan con lo establecido en la presente ley, se les dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva.

**Artículo 56.-** El Juez competente determinará a una persona que administrará los bienes de la persona desaparecida, quien actuará conforme a las reglas del albacea.

**Artículo 57.-** En el caso de las personas que han sido declaradas como ausentes por Desaparición de Personas se les otorgará la siguiente protección en materia laboral:

I. Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que se sean localizadas;

II. Si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad;

III. Si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable;

IV. A los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable;

V. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a la persona.

VI. Los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida, serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana.

VII. Los demás que determinen las autoridades competentes.

**Artículo 58.-** Los beneficiarios del trabajador a que se refiere el artículo anterior continuarán gozando de los beneficios y prestaciones hasta en tanto no se localice a la persona declarada como ausente por desaparición de persona.

**Artículo 59.-** Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente por desaparición de persona, surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada.

**Artículo 60.-** En caso de aparecer con vida la persona declarada como ausente por desaparición, quedará sin efecto la declaración de ausencia por desaparición de persona, sin perjuicio de las acciones legales conducentes si existen indicios de una acción deliberada de evasión de responsabilidades.

**Artículo 61.-** La presente ley se interpretará de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y la legislación secundaria en la materia.

## Capítulo IX
## De la Atención a Víctimas y la Reparación Integral del Daño

**Artículo 62.** Todas las autoridades garantizarán el derecho de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición de personas a recibir las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así como las medidas de reparación integral que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición conforme a lo establecido en esta ley, la Ley General de Víctimas, las leyes de las entidades federativas en materia de atención a víctimas, así como los protocolos de atención y reparación específico que en el ámbito de sus competencias establezcan las instituciones encargadas de la atención a víctimas.

**ARTÍCULO SEGUNDO.**-Se reforma el sexto párrafo del artículo 15 y se adiciona un último párrafo al artículo 109 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

## TRANSITORIOS

**Artículo Primero.-** La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo Segundo.-**A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que la esta Ley contemple una descripción legal de una conducta delictiva que el Código Penal Federal contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre que las conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

1) En la investigación de los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, el Ministerio Público efectuará la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades;

2) En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y

3) En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades.

**Artículo Tercero.-** Las autoridades competentes deberán emitir los reglamentos, protocolos y demás disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley, en un plazo que no exceda de noventa días, a partir de la publicación a que se refiere el artículo transitorio primero.

**Artículo Cuarto.-** El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá de tomar las medidas necesarias para migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas detenidas y personas desaparecidas al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo Quinto.-** El Ministerio Público, los jueces civiles y los defensores y asesores públicos deberán capacitarse conforme a este procedimiento de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, para garantizar de manera adecuada una protección eficaz del derecho a la personalidad respectivo.

**Artículo Sexto.-** En relación a los casos de personas desaparecidas denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio Público correspondiente tendrá un plazo de treinta días para presentar la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas contado a partir del inicio de la vigencia del presente ordenamiento.

**Artículo Séptimo.-** Las autoridades competentes tendrán un lapso no mayor a noventa días para dar cumplimiento al presente Decreto respecto del Registro Nacional de Datos de Personas Detenidas, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y del Registro Nacional de Perfiles Genéticos.

**Artículo Octavo.-** Las autoridades competentes establecerán las partidas presupuestales necesarias para garantizar la instrumentación de la presente Ley.

**Artículo Noveno.-** Las autoridades competentes se coordinarán para emitir los protocolos correspondientes en materia de perfiles genéticos con base en los lineamientos establecidos a nivel internacional y las normas oficiales mexicanas, a los cuales se sujetarán las autoridades federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias.

**Artículo Décimo.-** En un lapso no mayor a noventa días, las autoridades competentes en materia de atención a víctimas emitirán los protocolos específicos para dar cumplimiento a la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición del delito de desaparición de personas de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en las leyes en la materia.

**4) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. PRESENTADA POR EL SENADOR OMAR FAYAD MENESES EL 16 DE ABRIL DE 2015.**

Conforme a esta iniciativa, los actos de autoridad, deben estar plasmados en ordenamientos legales que estructuren, regulen, fijen las pautas a seguir e incluso, contemplen los supuestos a las violaciones y establezcan las sanciones ya sea directamente en el cuerpo del ordenamiento, o bien a través de la vinculación con ordenamientos vigentes aplicables. Y si bien, se ha avanzado en esta regulación, no para hacer caso omiso al hecho de que quedan pendientes figuras de legislar, y entre estas destaca la de desaparición forzada de personas, un delito que lesiona gravemente a la sociedad, al interés público y al orden público, si se toma en consideración que el supuesto se da por la intervención directa o indirecta de servidores públicos, que rompen con el esquema de los principios que rigen la actuación pública más allá de actos de corrupción, sino que alcanzan el extremo más grave de la comisión de un delito en ejercicio de funciones y afectando los derechos fundamentales de las personas como lo son la libertad y la vida, con las agravantes del daño al entorno familiar y social, la tranquilidad social y el desarrollo físico, psicológico y emocional de todos aquellos que se ven afectados.

Los acontecimientos ocurridos en Guerrero, ponen en la agenda el fortalecimiento de las instituciones jurídicas y orgánicas, para evitar que prácticas como ésta, se conviertan en una verdadera acción sistémica en nuestro país.

**Desaparición forzada**

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se producen desapariciones forzadas siempre que "se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley".

A partir del caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se puso en la agenda pública inmediata, la atención a los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas. Recientemente nuestro país, presentó un informe sobre el avance del caso Ayotzinapa ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

En el informe de referencia, señala la proponente, el Gobierno de la República destacó la detención de 102 personas involucradas en los hechos; las labores del Grupo de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en materia de búsqueda, investigación y atención a víctimas; y las medidas anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en noviembre pasado, para fortalecer los instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos, a través

de la presentación próxima de iniciativas para dotar al Congreso de facultades para expedir leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; así como las leyes en la materia.

Así, derivado de la evaluación al informe de México el pasado febrero, dicho Comité emitió como recomendaciones, las siguientes:

- *El Estado mexicano debe contar con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, para conocer la verdadera magnitud del fenómeno y adoptar políticas públicas para combatirlo con efectividad.*

- *El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas debe incluir información para determinar si se trata de casos de desaparición forzada de forma confiable.*

- *El Estado debe asegurar la realización sin demora de una investigación exhaustiva e imparcial cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal.*

- *México debe adoptar las medidas legislativas para que el delito de desaparición forzada sea tipificado, a nivel federal y estatal, como delito autónomo con penas para un delito de extrema gravedad.*

- *La existencia al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) de una unidad fiscal especializada en la investigación de desapariciones forzadas que cuente con recursos y personal capacitado.*

- *El Estado mexicano debe aprobar a la mayor brevedad posible una ley general sobre desaparición forzada.*

En atención a estos resolutivos y encauzando las voces de organizaciones sociales y millones de mexicanos que pedimos una acción contundente para evitar la recurrencia de eventos tan lamentables como el de Ayotzinapa, la autora de la iniciativa trae a esta Soberanía el planteamiento precisamente de una Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

Sobre el tema en el que se discurre, abunda la proponente, el Centro de Intercambio de Información sobre Desapariciones Forzadas, EDIEC por sus siglas en inglés (Enforced Disappearences Information Exchange Center) que como se autodescribe "es una colección de recursos de información en todos los ámbitos del fenómeno de desapariciones forzadas. Ha sido desarrollado por Linking Solidarity, uno de los programas de la organización de derechos humanos Aim for human rights" que recopila datos e información que permiten conocer el alcance del delito.

Para definirlo contempla lo señalado en:

*a) En la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992, una desaparición forzada es "que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley "*

*b) La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, una desaparición forzada es "la privación de la*

*libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes"*

*c) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define la desaparición forzada como "el arresto, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o conocimiento, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado".*

*d) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas de la Desaparición Forzada proporciona la siguiente definición del delito de desaparición forzada: "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley"*

Partiendo de lo señalado, concluye con los tres elementos que como mínimo deben conjuntarse para la configuración del tipo y un cuarto, en la que el tipo penal recae sobre los particulares, sin que hasta el momento exista un consenso, pero que no debe dejar de tomarse en cuenta, ya que de manera indirecta, autoridades gubernamentales intervienen en las graves violaciones que recaen sobre los afectados:

*Privación de libertad en cualquiera de sus manifestaciones*

*Negativa a reconocer la privación de libertad*

*Como consecuencia de los elementos mencionados, la sustracción de la persona desaparecida a la protección de la ley y a los derechos humanos reconocidos universalmente.*

*Desaparición como consecuencia de la acción directa del gobierno o con el conocimiento del mismo.*

En un intento de clarificar, señala 8 supuestos, que si bien se han tratado de fijar como desaparición forzada, son materia de otras figuras, por lo que no se deben contemplar durante el momento de su regulación, siendo estas:

*1. Personas que faltan a su domicilio*

*2. Detención de incógnito porque se reconoce su detención aunque por motivos fundados no se revela su identidad*

*3. Afiliación a grupos armados de oposición, considerada como desaparición voluntaria*

*4. Reclutamiento forzoso*

*5. Interpretación extraordinaria de la ley, para trasladar fuera del país a personas detenidas y someterlas a interrogatorios, que pudieran configurar el tipo en el caso de que se dieran los supuestos de la negativa de la autoridad*

*6. Delito de secuestro*

*7. Traslados ilegales por parte de grupos delincuenciales, pero que para configurar el tipo de desaparición forzada, se requiere la participación o conocimiento de autoridades gubernamentales*

*8. Ejecución extrajudicial, en las que en caso de que la autoridad niegue su paradero y no se conozca si ha sido asesinado, se considera desaparición forzada*

La misma organización afirma que el daño no sólo se causa a la persona que es afectada directamente, sino que este incide en los familiares que se ven expuestos a consecuencias psicológicas, materiales y sociales:

*Psicológicas durante el proceso de aceptación del hecho ya que "no hay una forma universal de duelo ni de llevar el dolor" a la vez que es recurrente la negación del hecho ante la incertidumbre generada.*

*Materiales por la pérdida del sostén económico, compartido o total, dejando la carga a la parte restante, que en muchos casos se dificulta por la negativa a contratarlos o mantenerlos en el trabajo, el tiempo que se emplea en la búsqueda no permite tener un trabajo estable, al cobro de pensiones y seguros al no existir un certificado de defunción y la imposibilidad legal de volver a contraer matrimonio.*

*Sociales, por el rechazo que se puede generar en el entorno social de los familiares ya que se asume que la persona desaparecida ha tenido que hacer algo prohibido no hubiera recaído en el supuesto.*

Durante las convenciones, se han considerado diversas obligaciones por parte del Estado; la protección, respeto y promoción de los derechos humanos para garantizar el disfrute pleno de ellos; la prevención como el remedio idóneo para evitar el fenómeno de las desapariciones forzadas; mantener vivo el recuerdo con conmemoraciones para evitar que las desapariciones forzadas caigan en el olvido y vuelvan a surgir; la reparación, no sólo en lo económico sino en la compensación de las necesidades de las víctimas y de sus familiares y; las exhumaciones para identificar a las personas que pudieran haber sido identificadas y los restos devueltos a sus familiares para un entierro digno y acabar con la incertidumbre.

Las organizaciones de derechos humanos, y en concreto las enfocadas al fenómeno de las desapariciones forzadas, señalan una serie de acciones en el campo legislativo que los Estados pueden asumir para inhibir y castigar el hecho, destacan la tipificación del delito en los códigos penales, expidiendo una legislación en concreto o adecuando procedimientos para demandas civiles y mecanismos administrativos. A esto añaden la creación de Comisiones de la Verdad y Reconciliación como organismos públicos con el objetivo específico de investigar las violaciones de derechos humanos en el campo de las desapariciones forzadas.

Bajo este criterio, tomando en consideración la evolución de los gobiernos democráticos que ante la apertura ideológica y pluralidad de pensamiento, y en un ejercicio de derecho comparado, se analizó la situación de la evolución legal en países hispanoparlantes, encontrando:

*Colombia*

*Ley por medio de la cual se crea la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles*

*Que tiene por objeto crear la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles.*

*Argentina*

*Ley nº 24.321 certificado de "ausencia por desaparición forzada"*

*Expedida a fin de otorgar constancia de denuncia formal, con la que tramita en sede judicial, la declaración de sentencia de ausencia por desaparición forzada, de toda aquella persona que hubiera desaparecido involuntariamente de su domicilio o lugar de residencia hasta el 10 de diciembre de 1983.*

*En el artículo 2º de la Ley se define la desaparición forzada, señala que "a los efectos de esta ley se entiende por desaparición forzada de personas, cuando se hubiere privado a alguien de su libertad personal y el hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, o si esta hubiere sido alojada en lugares de detención, o privada bajo cualquier otra forma, del derecho a la jurisdicción. La misma deberá ser justificada mediante denuncia ya presentada ante autoridad judicial competente, la ex comisión sobre la desaparición de personas (decreto 158/83) o la subsecretaría de derechos humanos y sociales del ministerio del interior o la ex dirección nacional de derechos humanos."*

*Facultando a presentarla a cualquier persona que tuviera un interés legítimo, considerando en este supuesto a familiares hasta el 4º grado de parentesco, una vez que se hayan cumplido los requisitos formales, consistentes en:*

*La denuncia puede realizarla cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.*

*Datos filiatorios de la víctima (nº de d.n.i., partida de nacimiento, fotos, etc).*

*Acreditación del parentesco (partida de nacimiento, libreta de matrimonio, etc.)*

*Relato de los hechos, que incluya todo aquello que se pueda recordar, o se hubieran enterado en estos años, desde la desaparición, como el lugar de secuestro, fecha, personas conocidas de la víctima que hubieran sido detenidos, su militancia si la conocen, lugar de trabajo o estudio, etc.*

*Número de documento de identidad (dni, lc, le, ci) del familiar que realiza la denuncia.*

*Toda documentación o información sobre gestiones que hubiera realizado la familia, tales como denuncias en comisarías, habeas corpus, otros trámites judiciales, como presunción de fallecimiento, pedido de paradero, etc.*

*Las secretarías y áreas de derechos humanos provinciales y municipales también actúan como órganos receptores de solicitudes remitiéndolas a la secretaría de derechos humanos.*

*Para la prosecución de este trámite no es necesario contar con patrocinio letrado, pero si para tramitar la declaración de ausencia por desaparición forzada, que se tramitará en la justicia en sede civil.*

*España*

*Si bien no contempla a la desaparición forzada bajo esa denominación, en el Código Penal Español en el capítulo de delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, señalan un supuesto que se acerca a la figura, aunque va en razón de detenciones ilegales, considerando que "La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años."*

*Chile*

*Ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas (Ley 20.337)*

*Considera desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del estado o personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado*

*Venezuela.*

*Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo*

*De conformidad con lo señalado por el propio texto es una ley que "tiene por objeto establecer los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad y sancionar a los responsables de los hechos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, tales como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violaciones, lesiones físicas, psíquicas y morales, privaciones arbitrarias de libertad, desplazamientos forzados de personas, expulsiones, deportaciones o exilios arbitrarios, violaciones de domicilio, hostigamientos, incomunicaciones, aislamientos, difamaciones e injurias, perjuicio patrimonial, represiones masivas urbanas y rurales, simulación de hechos punibles o procedimientos administrativos fraudulentos, que como consecuencia de la aplicación de políticas de terrorismo de estado, fueron ejecutados por motivos políticos contra militantes revolucionarios y revolucionarias, luchadores y luchadoras populares víctimas de la represión, quienes perseguían el rescate de la democracia plena, la justicia social y el socialismo, así como la memoria histórica de tales hechos y la reivindicación moral, social y política al honor y a la dignidad de las víctimas de la represión que se generó, por parte del estado venezolano, durante el período transcurrido entre los años 1958 a 1998."*

Por otra parte, existen países, que no contemplan una legislación como tal, pero que lo plasman como delito en los ordenamientos penales, destacando a: Bolivia desde el año 2006, Cuba, Ecuador y Panamá; así como otros, que si bien no la contemplan en la legislación doméstica, se han adherido a los tratados internacionales de la materia, comprometiéndose a castigar el delito, entre ellos se encuentran Costa Rica y Nicaragua.

Destacando países que no contemplan la figura de desaparición forzada como El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Perú y República Dominicana. De todo lo anterior, se observa que a nivel internacional, si bien se ha avanzado en la configuración del delito, existen aún omisiones que deben corregirse.

Los proponentes señalan que en México se ha enfocado a plasmar legalmente a la desaparición forzada, conforme a los estándares fijados en los tratados internacionales y a la situación que se vive en la actualidad, considerando dos posibles tendencias legislativas, la primera con su inclusión como tipo penal en el Código Penal y la segunda con la expedición de una ley especial de la materia. Incluirla en el Código Penal, si bien facilitaría su persecución y castigo, queda muy abierto el tipo penal y restringida su regulación en otros aspectos, de lo que se desprende la necesidad de crear una ley especial que permita la preeminencia sobre otras normas por la gravedad del delito y el ejercicio abusivo de funciones amparados en el poder público, ya que si bien, el delito de desaparición forzada no se contempla para particulares por ser un delito de autoridad en el ejercicio de sus funciones, se debe considerar que los particulares pueden incurrir en este, ya sea por apoyo a autoridades o por llevarlo a cabo con conocimiento de las autoridades y la omisión en su persecución, a la vez que es necesario establecer protocolos de búsqueda y mecanismos de control, ya que en muchos lugares, las autoridades no llevan un registro de personas que han sido afectadas por desapariciones forzadas, desconociéndose el impacto del delito, para fijar posturas acordes con la situación.

En nuestro país, en el tema de desaparición forzada, se contempla el fundamento legal en el artículo 29 en relación con los casos en que el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso o en su

caso de la Comisión Permanente, restrinja o suspenda el ejercicio de los derechos o las garantías, prohibiendo expresamente que en el decreto que se emita, entre otras acciones, el de la desaparición forzada. En el texto constitucional, no existe la facultad al Congreso para emitir leyes en materia de desaparición forzada, lo que pudiera inhibir la presente ley, pero en coherencia, es inevitable hacer mención de la iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, a fin de modificar los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada, que al texto señalan:

*Artículo 19. ...*

*El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ...*

*Artículo 20 fracción V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, desaparición forzada de personas o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.*

*Artículo 73. El Congreso tiene facultad:*

*XXI. Para expedir:*

*Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. ...*

Destaca la proponente que, a pesar de observarse a simple vista que nuestro país está obligado a respetar los tratados internacionales que ha suscrito, máxime en materia de derechos humanos y realizar las adecuaciones en la legislación doméstica es la desaparición forzada uno de los grandes pendientes.

Bajo esa tesitura, cobra suma importancia la recomendación de la emisión de declaración de desaparición a solicitud de parte que tenga interés jurídico en razón del parentesco para que el Ministerio Público realice la solicitud y se declare por juez competente, para que proceda como declaración forzada, figura que tiene su origen en la declaración de ausencia, por la que cuando una persona no se encuentra en su domicilio ni en su lugar de residencia, sin tener contacto con las personas con las que mantiene relación y que ponen en duda su existencia o si vive o muere, es declarada como ausente para evitar la incertidumbre jurídica en la que quedan sus derechos; motivando la declaración de desaparición cuando, la ausencia se presupone por causas ajenas del afectado.

El proyecto de Ley busca sentar las bases para cumplir con una de las principales recomendaciones en el orden internacional y para atender una de las mayores preocupaciones de la sociedad mexicana para evitar, erradicar y en su caso sancionar los casos de desaparición forzada, con la emisión de éste marco normativo específico. Para ello:

*Busca instaurar los mecanismos legales y de actuación de la autoridad para que ante la sola presunción de la desaparición forzada de una persona, se investigue y atienda el caso de forma inmediata.*

*Establece la tipificación del delito de desaparición forzada como autónomo y se establecen sanciones que van desde 2 hasta 60 años de prisión a quien conozca de un caso de desaparición forzada y no lo denuncie y hasta el extremo opuesto para los responsables de casos en donde la víctima pierda la vida.*

*Incrementa las penas en una mitad, en casos en donde la víctima sea menor de edad o adulto mayor, tenga incapacidad, sea mujer en estado de gravidez, o pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena.*

*Establece el proceso para la emisión de una Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas y a partir de ella, proceder a la investigación inmediata de un caso de desaparición forzada hasta su resolución y el castigo a los responsables.*

*Prohíbe el derecho a conmutar la pena, la concesión de la remisión parcial de la pena, y tratamientos preliberatorios, libertad preparatoria o cualesquiera otros beneficios que las leyes respectivas concedan a los sentenciados.*

*Obliga a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno a brindar las medidas de protección y asistencia a las víctimas, testigos y personas que sean afectadas por la comisión del delito de desaparición forzada, en plena concordancia con ordenamientos como la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley General de Víctimas.*

**De este modo la iniciativa presentada por el Senador Omar Fayad Meneses el 16 de abril de 2016, se presenta en los siguientes términos:**

Artículo Primero. Se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.

Capítulo I

Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés público y social, y de observancia general en toda la República

Artículo 2. El objetivo de la ley es regular las acciones derivadas de la comisión del delito de desaparición forzada a fin de inhibir la conducta y en su caso investigarla y sancionarla, así como establecer la creación del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares.

Artículo 3. Para todo lo no contemplado en esta Ley en relación con el delito de desaparición forzada de personas, se aplicará supletoriamente el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables

Artículo 4. El Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, instaurarán programas permanentes y los mecanismos destinados a:

I. La orientación y asistencia a la población civil de sus derechos y las acciones tendentes para prevenir la desaparición forzada

II. La profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública sobre los derechos de las personas

Artículo 5. Para la interpretación de la ley se entenderá por:

I. Autoridad. Todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho y que por lo mismo en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza que disponen.

II. Acto de autoridad. Cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativamente, unilateral o coercitivamente.

III. Debido proceso. Conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

IV. Derecho a la memoria. El derecho irrenunciable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

V. Derecho a la verdad. El derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos, así como a sus familias, en el marco del sistema jurídico interno de cada Estado, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionados con las violaciones..

VI. Desaparición forzada. La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa de la autoridad a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

VII. Ley. Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas

VIII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanentemente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.

IX. Presunción. Consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello.

X. Registro. Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares

XI. Servidor Público. A los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal.

XII. Víctima. Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito.

Capítulo II

Sobre la Desaparición Forzada

Artículo 6. Comete el delito de desaparición forzada el servidor público que en el ejercicio de sus funciones, o persona o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o el hecho sea del conocimiento de alguna autoridad federal, estatal o municipal, prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona y con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Artículo 7. Ante la presunción de que se haya configurado la desaparición forzada de personas o por simple denuncia de hechos, el Ministerio Público Federal actuará de oficio en la investigación y en su caso persecución.

Artículo 8. A quien cometa el delito de desaparición forzada no tendrá derecho a conmutar la pena, a la concesión de la remisión parcial de la pena, tratamientos preliberatorios, libertad preparatoria o cualesquiera otros beneficios que las leyes respectivas concedan a los sentenciados.

Los imputados por la comisión del delito de desaparición forzada, estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso penal.

Artículo 9. Son autores o partícipes del delito los que acuerden o preparen su realización, los que los realicen por si individualmente o en conjunto, y quien lo realice a través de otra persona sirviéndose de su puesto, encargo o función como servidor público.

Artículo 10. La imposición de penas por la comisión del delito de desaparición forzada, será independiente de otras responsabilidades en que puedan incurrir los servidores públicos, de conformidad con las leyes vigentes.

Capítulo III

De las variantes del delito de desaparición forzada de personas

Artículo 11. En relación con el delito de desaparición forzada, se le aplicarán:

I. De 2 a 5 años de prisión y de cien a doscientos días multa a quien sin ser autor o partícipe, tenga conocimiento de la comisión del delito de desaparición forzada y no lo denuncie

II. De 10 a 20 años de prisión y de doscientos a quinientos días multa al propietario, poseedor o a quien tenga bajo su cargo el o inmuebles públicos o privados, y que por comisión u omisión permita que en ellos se oculte a la víctima del delito

III. De 25 a 40 años de prisión y de mil a dos mil días multa al superior jerárquico que sin ser partícipe, tenga conocimiento y no tome las medidas necesarias para evitarlo o al particular que intervengan en la comisión del delito.

IV. De 40 a 60 años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa si la víctima hubiera sido sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o hubiera sido violentada sexualmente.

V. De 50 a 60 años de prisión y de dos mil quinientos a cuatro mil días multa si de la comisión del delito la víctima perdiera la vida o sufriera incapacidad parcial o total permanente

Artículo 12. Las penas a que se refiere el artículo anterior, se incrementarán en una mitad:

I. Si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60 años, o persona con discapacidad

II. Cuando la víctima sea mujer en estado de gravidez, miembro de algún pueblo o comunidad indígena o madre o padre de hijos menores de edad.

III. Cuando se realicen actos para ocultar o desaparecer el o los cadáveres de las víctimas del delito.

IV. Que la persona desaparecida sea testigo o víctima de algún hecho punible

V. Que con la desaparición forzada se pretenda impedir o desvirtuar alguna investigación o asegurar la impunidad de otro delito

VI. Que el delito se cometa como medida de coerción para obligar a otra persona a que haga o deje de hacer algo.

Artículo 13. La tentativa punible del delito de desaparición forzada será sancionada de conformidad con lo estipulado en el Código Penal Federal

Capítulo III

De la Declaración de Desaparición Forzada de Personas

Artículo 14. La Declaración de Desaparición Forzada de Personas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición forzada y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.

Artículo 15. Podrán solicitar la declaración de desaparición de personas, todos aquellos que demuestren tener un interés jurídico, además de:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que mantenga un estado civil similar de conformidad con las leyes de cada entidad federativa o bien su relación sea afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;

III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;

IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;

V. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas.

VI. Las Organizaciones de la Sociedad Civil;

VII. El Ministerio Público;

Artículo 16. Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por Desaparición de Personas, deberá avocarse de manera inmediata a la búsqueda de la persona desaparecida y a la investigación de los hechos.

Transcurrido el término de 20 días naturales, el Ministerio Público evaluará si la presunción o los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición forzada. De ser así, el Ministerio Público presentará inmediatamente la solicitud de Declaración de Desaparición Forzada de Personas ante un Juez de Primera Instancia competente, quien en un plazo no mayor de diez días naturales, dictará las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.

Artículo 17. Una vez concluido el plazo señalado en el artículo anterior, si el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, cualquiera de las personas e instituciones señaladas en el artículo 3° de esta Ley, podrán hacerlo.

Artículo 18. Son competentes para conocer la declaración de Desaparición Forzada de Personas los jueces de primera instancia en Materia Penal del lugar de residencia o del que se tengan las últimas noticias ciertas de la ubicación de la posible víctima de desaparición forzada.

Artículo 19. La solicitud de Declaración de Desaparición Forzada de Personas incluirá la siguiente información:

I. El nombre, la edad y el estado civil de la persona desaparecida;

II. Cualquier denuncia presentada ante autoridades públicas en donde se narren los hechos de la desaparición;

III. La fecha y lugar de los hechos;

IV. El nombre y edad de los dependientes económicos o de aquellas personas que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana;

V. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la persona desaparecida;

VI. La actividad a la que se dedica la persona desaparecida;

VII. Toda aquella información que el peticionario haga llegar al Juez competente para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida.

VIII. Cualquier otra información que se estime relevante.

Si el solicitante no cuenta con alguna de la información referida en las fracciones anteriores, así deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 20. Una vez emitida la Declaración de Desaparición Forzada de Personas por el Juez competente, el Ministerio Público iniciará inmediatamente la investigación por el delito de desaparición forzada de conformidad con la legislación vigente.

Capítulo IV

De la Protección de las personas

Artículo 21. La Procuraduría General de la República y los organismos públicos federales, estatales y municipales en la medida de sus atribuciones, brindarán todas las medidas de protección y asistencia a las víctimas, testigos y personas que sean afectadas por la comisión del delito de desaparición forzada,

de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley General de Víctimas y cualquier otra disposición legal vigente.

Capítulo V

De los registros de las personas desaparecidas

Artículo 22. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deberá contener de manera explícita el señalamiento de las personas que sean afectadas o exista la presunción de ser afectadas por el delito de desaparición forzada.

Artículo 23. Ante la presunción de que alguna persona sea víctima del delito de desaparición forzada, la autoridad deberá informarlo de manera inmediata al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Capítulo VI

Del Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares

Artículo 24. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas deberá contar un Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares, que tendrá por objeto:

I. Salvaguardar y facilitar el acceso a datos que permitan identificar a las víctimas del delito de desaparición forzada y cotejarlas con el de sus familiares

II. Asistir a las instancias de investigación del delito

III. Asistir a las instancias judiciales en sus resoluciones

IV. Garantizar los derechos de las víctimas y de sus familiares en cuanto al:

a) Derecho a la verdad

b) Derecho a la memoria

c) Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y de sus derechos humanos

d) Derecho al debido proceso

Artículo 25. Las muestras biológicas que se recaben para el Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares deberán ser entregadas por decisión propia o de manera voluntaria a petición de autoridad competente, autorizando de manera expresa los fines a los que se podrán aplicar los resultados.

La autoridad encargada de la toma de muestras deberá entregar una constancia de esta diligencia a la persona que la suministró.

Artículo 26. La información obtenida de las muestras genéticas, será considerada con carácter de información confidencial, en términos de la Ley en la materia y su uso será exclusivamente con fines de identificación de personas desaparecidas. Una vez obtenida la información de la misma, la autoridad la

está obligada a la destrucción inmediata de la muestra, resguardando la información que se hubiere obtenido, informándoselo por escrito a quien la haya suministrado.

Capítulo VII

De la reparación

Artículo 27. La sentencia condenatoria que se dicte por los delitos de desaparición forzada, deberá contemplar la reparación integral del daño a las víctimas y a sus familiares, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten y deben considerar la cuantificación material, las consecuencias psicológicas, laborales y sociales, la afectación al proyecto de vida.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de esta ley en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor.

**5) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA POR PARTICULARES. PRESENTADA POR LAS SENADORAS ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, ADRIANA DÁVILA FERNANDEZ, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y SILVIA GUALDALUPE GARZA GALVÁN EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

Destacan las proponentes de la iniciativa, que el delito de desaparición forzada de personas está tipificado como un delito y como una grave violación a los derechos humanos en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos porque se ejecuta con todas las ventajas que da el abuso del ejercicio del poder público, ya que el sólo hecho de desparecer a una persona es un acto aberrante, con características infrahumanas.

Es un delito que tiene carácter múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo y se encuentra plasmada en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte, por lo cual, el Estado mexicano está obligado, de acuerdo con el artículo 1° Constitucional, en su párrafo segundo, a cumplir con los compromisos y obligaciones que ha contraído en materia de derechos humanos.

En consecuencia, afirman, el Estado mexicano también está obligado a tomar en cuenta dentro de la presente Ley, que la desaparición forzada, en el ámbito de los derechos humanos, está clasificada como un delito de lesa humanidad cuando es cometida de forma "generalizada o sistemática"[1].

[1] Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Artículo 5. La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas en el derecho internacional aplicable.

La desaparición forzada además de ser una grave violación a los derechos humanos es un delito cometido por el Estado; planeado, ordenado, ejecutado y supervisado por agentes del Estado que debieran proteger a la población. Por ello, debe ser perseguido y castigado sin importar la jerarquía política, fuero[2], ni la condición económica de quienes la cometen, penalizando tanto a sus autores materiales como aquellos que lo ordenan.

En América Latina, la práctica de las desapariciones forzadas de personas se inició a finales de los años sesenta en Guatemala y Brasil; cabe señalar que el término utilizado fue el de detenido- desaparecido el cual se utilizó por primera vez por las organizaciones civiles latinoamericanas, para posteriormente surgir el concepto de desaparición forzada.

En México, se contempla en la exposición de motivos de la iniciativa, durante décadas se implementó una política de Estado para reprimir la oposición y disidencia política. A las personas detenidas y acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros, o por sospechas de ello, no se les presentaba ningún mandato judicial, eran sometidas sistemáticamente a torturas y posteriormente algunas fueron enviadas a cárceles clandestinas, otras fueron ejecutadas extrajudicialmente y otras más fueron desaparecidas de manera forzada, estatus que conservan hasta la actualidad y que afecta todavía a sus familiares y a las sociedad en su conjunto. A este período ominoso de muestro país se le reconoce como la etapa o el período de la "guerra sucia".

Sobre ese período, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el expediente denominado Radilla Pacheco versus México, en el cual los familiares del señor Rosendo Radilla demandaron al Estado mexicano por su desaparición desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del Ejército en Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero.

La Corte Interamericana resolvió que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, por lo que deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea y continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales.

Desde 1999, abundan las proponentes, se han presentado diversas propuestas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas en nuestro país. Sin embargo, sólo después de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa, que la problemática de la desaparición forzada en México cobra relevancia para el Estado mexicano.

La reforma constitucional al artículo 73, es uno de los primeros pasos que se han dado para atender el problema de la desaparición forzada en México, la cual permite que la Cámara de Diputados pueda legislar en materia de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares. Y si bien es cierto que el incremento de la desaparición forzada en nuestro país se dio en el marco de la declaratoria de "guerra contra el narcotráfico" hecha por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)[3] cabe

---

[2] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, Valentina Rosendo Cantú y otra vs México; 2 de agosto de 2009.

[3] La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada registra que del 2006 al 2012, ocurrieron 53 casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de los derechos humanos y 2 casos de desaparición forzada en contra de miembros de grupos insurgentes. http://comitecerezo.org/IMG/pdf/informeweb.pdf Pág 93

señalar que las desapariciones forzadas siguen ocurriendo en la actual administración federal en la mayoría de los estados de la república.[4]

La desaparición forzada en México es una práctica que se ha extendido a sectores de la población que no están organizadas y que no representan una oposición política al Estado: migrantes, mujeres, personas menores de edad y jóvenes. Aunado a este hecho y a la impunidad en materia de justicia, México enfrenta desapariciones cometidas por particulares, conducta que ha sido posible por la omisión del Estado respecto a sus obligaciones de brindar seguridad e investigar y sancionar a los responsables.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en sus observaciones finales[5] presentadas el 13 de febrero de 2015, después de evaluar al Estado Mexicano, muestra su preocupación al observar que las desapariciones forzadas son generalizadas, demostrándose con esto que éstas siguen cometiéndose en mayor grado y en diferentes modalidades en el presente sexenio, por lo tanto cada vez es más urgente atender las demandas legítimas de las familias en la creación de una Ley General que Prevenga, Investigue, Sancione y Repare tanto la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares.

Luego, en el escenario que se describe, para que la Ley General cuya expedición se plantea se adecue a los estándares internacionales y la aprobación de las organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas y sociedad en general, deberá:

- *Tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias y del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU; las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Caso Ayotzinapa y, las demandas hechas por miles de familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas.*

- *Cumplir con las demandas, que desde hace décadas han hecho familiares de víctimas de desaparición forzada, familiares de víctimas de desaparición de personas.*

- *Cumplir con las recomendaciones hechas recientemente por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Caso Ayotzinapa y El Comité contra la Tortura de la ONU*[6].

**En este sentido, las Senadoras angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández, Layda Sansores San Román y Silvia Guadalupe Garza Galván, presentaron el siguiente articulado como iniciativa de ley:**

---

[4] La campaña Nacional contra la Desaparición Forzada registra 29 personas defensoras de derechos humanos víctimas de desaparición forzada en los primeros 18 meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto. http://comitecerezo.org/IMG/pdf/informeweb. pdf Pág. 96

[5] El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención (CED/C/MEX/1) en sus sesiones 119.ª, 120.ª y 121.ª (CED/C/SR.1119. 120 y 121), celebradas los días 2 y 3 de febrero de 2015.

[6] Observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptada por el Comité en su 49º período de sesiones (29 de octubre a 23 de noviembre de 2012). "El Comité insta al Estado parte a continuar la puesta en práctica de las recomendaciones del Grupo de Trabajo, y en particular a: a) Aprobar una ley general sobre las desapariciones forzadas;"

**ARTÍCULO ÚNICO**.- Se expide la LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA POR PARTICULARES, para quedar como sigue:

**LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS COMETIDA POR PARTICULARES.**

**Título Primero**
**Disposiciones Generales**
**Capítulo Único Generalidades**

**Artículo 1.°** La presente Ley general es de orden público de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o, párrafo tercero, artículo 17, y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano.
La Ley general tiene como objeto:

I. Proteger a toda persona contra el delito de desaparición forzada de personas,
II. Su sanción
III. Prevención
IV. Reparación integral y erradicación de este delito de lesa humanidad.
V. Así como proteger a toda persona contra el delito de desaparición de personas cometida por particulares, su sanción, prevención, reparación integral y erradicación.

Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es Parte, la jurisprudencia, sentencias y recomendaciones de los órganos de protección de los derechos humanos creados por Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

**Artículo 2°**. El Estado mexicano está obligado a:

I. No practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas ni aun en estados de emergencia, excepción y suspensión de garantías individuales.
II. No permitir, ni tolerar la desaparición de personas cometida por particulares. En el caso de que esto suceda, el Estado está obligado a investigar y sancionar a todos los responsables.
III. En los dos delitos mencionados en los dos párrafos anteriores, el Estado mexicano también está obligado a:

a. No practicar ni permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas migrantes dentro del territorio nacional, de personas menores de edad, mujeres y mujeres embarazadas, indígenas, personas adultas mayores, personas defensoras de derechos humanos o cualquier otro grupo que por sus características se encuentren en estado vulnerable.
b. No permitir la desaparición de personas cometida por particulares en contra de migrantes dentro del territorio nacional, de personas menores de edad, mujeres y mujeres embarazadas, indígenas, personas adultas mayores, personas defensoras de derechos humanos o cualquier otro grupo que por sus características se encuentren en estado vulnerable.

IV. Realizar la búsqueda nacional y transnacional de las personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares sin demora alguna. Así como continuar con la búsqueda nacional y transnacional de las personas que se encuentren desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares al momento que entre en vigor la presente Ley hasta que no se establezca la suerte y paradero de las víctimas.

V. Garantizar en todo momento la seguridad física y psicológica de los familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, así como de las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones, testigos, personas o grupos de personas que se encuentren en riesgo como consecuencia de los delitos descritos en esta Ley.

VI. Procesar y sancionar de acuerdo a la gravedad del delito a las y los autores, cómplices y encubridores de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares, sin importar jerarquía, fuero, estatus económico y político.

VII. Cooperar con las entidades federativas en la prevención, sanción y erradicación de la desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

VIII. Promover las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole que sean necesarias para cumplir con lo previsto en la presente Ley.

IX. Establecer medidas de reparación integral del daño para las víctimas y familiares afectadas por los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, sin importar la nacionalidad de las víctimas y sus familiares.

**Título Segundo**
**De los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas cometida por particulares.**

**Capítulo Primero**
**De los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares.**

Los delitos previstos en esta ley serán aplicables a todos los estados de la República con pleno respeto a sus ámbitos competenciales

Se derogan todas las legislaciones aprobadas en materia de desaparición forzada y desaparición de personas y se tomará la presente Ley como única aplicable en todo el Territorio Nacional

**Artículo 3°**. Los delitos descritos por la presente Ley, serán calificados como graves y no son susceptibles de indulto, amnistía, fuero o figuras análogas que tengan por efecto eximir a los presuntos actores de cualquier sanción penal, ni se le considerará de carácter político para los efectos de extradición

**Artículo 4°**. Las conductas delictivas descritas en la presente Ley se perseguirán de manera inmediata por cualquier Ministerio Público de los tres niveles de gobierno, en cuanto tengan conocimiento de la comisión de los delitos de desaparición forzada o desaparición de personas cometida por particulares aunque no haya denuncia interpuesta, a petición de parte ofendida o denuncia anónima, y se considerarán de carácter permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la o las víctimas, por tanto, los delitos previstos en esta Ley serán imprescriptibles.

**Artículo 5°**. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados y el Distrito Federal, en los términos de sus respectivas Leyes y Reglamentos, estarán facultadas para que oficiosamente y/o mediante petición de parte ofendida denuncie y coadyuve ante el Ministerio Público en la búsqueda de los casos de desaparición forzada y desaparición de personas.

**Artículo 6°**. Los familiares y representantes legales de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, tienen el derecho a coadyuvar con las autoridades mencionadas en el artículo anterior de la presente Ley con la finalidad de conocer y colaborar con la investigación y búsqueda de sus familiares si así lo desean. Recordando que es responsabilidad del Estado y todos sus órganos de gobierno de los tres niveles, realizar la búsqueda, investigación y sanción de todas las personas responsables.

**Capítulo Segundo**
**So0bre el Delito de Desaparición Forzada de Personas**

**Artículo 7°**. Para los efectos de esta ley el delito de desaparición forzada consiste en la privación de la libertad, a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

**Artículo 8°**. A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de noventa a ciento cincuenta años de prisión y multa de 400 mil a 700 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación de por vida ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de pertenecer a cualquier agrupación de seguridad pública a nivel federal, estatal, municipal, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales administrativas; así como de pertenecer a cualquier fuerza castrense.

Las penas y sanciones impuestas en estos casos, serán independientes a las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos.

Este delito es permanente e imprescriptible

I. La oposición o negativa o el suministro de información inexacta de la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida por parte de un agente del Estado responsable del mismo, será sancionada con destitución e inhabilitación definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los demás delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta.

II. A quien sea superior jerárquico del sujeto activo de las conductas previstas en el artículo 7° de la presente Ley y, haya tenido conocimiento de que éste cometía o se proponía cometer el delito de desaparición forzada de personas, haya hecho caso omiso de la información que lo indicase; no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento teniendo éste el deber jurídico de evitarlo, se le impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y multa de 30 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios o demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal.

III. Al agente del Estado que tenga a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial y permita el ocultamiento de la víctima de los delitos de desaparición forzada en dichos lugares, o la práctica de algún acto tendiente a cometer dicho ilícito, que además incumpla con la obligación de registrar cualquier privación de la libertad, cuando registre con inexactitud los registros oficiales o de los expedientes que conocía o debía conocer. Se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y multa de 40 mil a 60 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal.

IV. Al particular que permita el ocultamiento de la víctima directa de los delitos contemplados en esta ley, en cualquier bien mueble o inmueble. Se le impondrá una pena de ocho a quince años de prisión y multa de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de quedar impedido de por vida para postularse o desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, y de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios o demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal.

V. Al agente del Estado que induzca o incite a otro u otros, intente, o sea cómplice o partícipe en la comisión de los delitos contemplados en este capítulo. Se le impondrá una pena de doce a veinte años de prisión, y multa de 20 mil a 35 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios o demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal.

VI. Los presuntos responsables de cometer los delitos de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por tribunales civiles, queda excluida toda jurisdicción especial, en particular la correspondiente a la(sic) Fuerzas Armadas.

**Capítulo Tercero**
**Sobre el Delito de desaparición de Personas cometido por Particulares**

**Artículo 9º**. El Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno tomará las medidas apropiadas para investigar sobre los delitos definidos en el artículo 7º de esta Ley, que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.

**Artículo 10º**. El Delito de desaparición de personas cometido por particulares se entenderá como la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, de una o más personas cometida por particulares que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, seguida de la falta de información, sustrayéndola así de la protección de la ley.

**Artículo 11º**. A quien cometa el delito de desaparición de personas se le impondrá una pena de cincuenta a ochenta años de prisión y multa de 100 mil a 300 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de quedar impedido de por vida para postularse o desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal o de pertenecer a cualquier agrupación de seguridad pública a nivel federal, estatal, municipal, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales administrativas; así como de pertenecer a cualquier fuerza castrense.

Las penas y sanciones impuestas en estos casos, serán independientes de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos.

Este delito es permanente e imprescriptible.

I. El particular que induzca o incite a otro u otros a la comisión de los delitos contemplados en este capítulo. Se le impondrá una pena de quince a veinticinco años de prisión, y multa de 15 mil a 20 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. ,(sic) además de quedar impedido de por vida para postularse o desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal o de pertenecer a cualquier agrupación de seguridad pública a nivel federal, estatal, municipal, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales administrativas; así como de pertenecer a cualquier fuerza castrense.

**Capítulo Cuarto**
**Reglas aplicables para ambos delitos: Agravantes, atenuantes e incentivos procesales.**

**Artículo 12°**. Para efectos de la presente Ley se considerarán agravantes para ambos delitos los siguientes actos:

a) Que durante el tiempo en el que la víctima directa se encuentre desaparecida pierda la vida a consecuencia de la desaparición a la que fue sometida;
b) Que se oculten o realicen acciones tendentes a ocultar el cuerpo sin vida de la víctima directa;
c) Que la víctima directa haya sido sometida a tortura, actos crueles, inhumanos, degradantes, lesiones o violencia sexual;
d) Que la víctima directa sea persona menor de edad, mujer, mujer embarazada, mayor de sesenta años, persona que pertenezca a un grupo o comunidad indígena o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en condición de inferioridad física o discapacidad mental respecto de quien realiza el delito de desaparición;
e) Que la desaparición sea cometida como consecuencia de una práctica policial o persecución de algún delito;
f) Que la desaparición sea cometida contra testigos de hechos que la ley califique como delito;
g) Que la desaparición sea cometida con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito;
h) Que la desaparición sea cometida contra personas migrantes que se encuentren dentro del territorio nacional.
i) Que la desaparición sea cometida contra personas Defensoras de Derechos Humanos.

I. Los agravantes mencionados en el presente Artículo, incrementarán en una mitad a las penas establecidas en los Artículos 8° y 11° de la presente Ley.

II. En estos casos no aplicará el máximo previsto para la prisión de acuerdo al artículo 25 del Código Penal Federal y se atendrá a lo dispuesto en la presente Ley.

**Artículo 13°**. Se considerarán atenuantes paras los delitos establecidos en esta Ley los siguientes actos:

a) Cuando se suministre información fidedigna que permita esclarecer los hechos;
b) Cuando se contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima directa;
c) Cuando se proporciones información que conduzca a la localización del cuerpo sin vida o restos corpóreos de la víctima directa; y
d) Cuando se libere espontáneamente, durante las doce horas siguientes de la privación de su libertad, a la víctima directa.

I. Las atenuantes mencionadas en este Artículo, disminuirán en una tercera parte las penas establecidas en los Artículos 8° y 11° de la presente Ley.

II. Estas atenuantes se considerarán como incentivos para personas que se encuentren sentenciadas al momento que entre en vigor esta Ley, siempre y cuando la información proporcionada por estos(sic) sea comprobada. Para tales casos se deberá contar con la aprobación de las familias por medio de un escrito realizado en presencia de los representantes legales de estas(sic).

III. En ningún caso la pena de destitución, inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de pertenecer a cualquier agrupación de seguridad pública a nivel federal, estatal, municipal, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales administrativas; así como de pertenecer a cualquier fuerza castrense será disminuida o conmutada.

IV. La obediencia jerárquica o el cumplimiento de un deber, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia serán excluyentes ni atenuantes de la responsabilidad penal en que incurra el agente del Estado que cometa los delitos señalados en el Artículos 8°. Sin embargo el Estado está obligado a garantizar que cualquier persona que se rehúse a obedecer una orden para cometer el delito de desaparición forzada no sea sancionada o sea objeto de ninguna represalia.

**Capítulo Quinto**
**De la Reclasificación del Delito**

**Artículo 14°**. Cuando durante la investigación el Ministerio Público o cualquiera de los coadyuvantes previstos en el Título Primero de la presente Ley, tengan la sospecha y/o evidencia de la participación directa o indirecta de algún agente del Estado, éste estará obligado a reclasificar el delito por el de desaparición forzada de personas o por el delito de desaparición de personas cometida por particulares de acuerdo a como se establece en el Título Segundo, Capítulos Primero y Segundo de la presente Ley.

La reclasificación del delito, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley es aplicable para todos aquellos casos que se encuentren en curso de investigación, aún antes de la entrada en vigor de ésta; así hayan sido clasificados como secuestro, privación ilegal de la libertad, persona extraviada o no localizada.

De no hacerlo, se sancionará de acuerdo a lo establecido al Art.(sic) 225, del Título Decimoprimero, Libro Segundo del Código Penal Federal; referente a "Delitos cometidos contra la administración de justicia".

**Título Tercero**
**De la Búsqueda, Investigación, y Registro Nacional de Personas víctimas Desaparición forzada y a manos de particulares.**

**Capítulo Primero**
**De la creación de Fiscalías Especializadas de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas cometida por particulares.**

**Artículo 15°**. Para los fines de la presente Ley, se creará una Fiscalía Especializada de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares a nivel federal, así como una Fiscalía Especializada de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares en cada estado de la República Mexicana y el Distrito Federal, las cuales serán dotadas de autonomía y recursos tecnológicos, materiales y personal especializado necesarios para su funcionamiento, de tal manera que puedan atender los casos que ya se encuentran en curso de investigación, así como de los delitos que se cometan al momento de la promulgación de esta Ley.

Todas las Fiscalías estatales y del Distrito Federal, así como la Fiscalía Federal deberán coadyuvar entre sí para la búsqueda de las personas víctimas de los delitos descritos en esta Ley y, de ser el caso, hacer las diligencias necesarias para lograr la coadyuvancia con otros Estados del Continente Americano para dar con el paradero de las víctimas. Así como coadyuvar entre sí para la investigación de los delitos, para lograr la sanción de las personas responsables de cometerlos.

**Artículo 16°**. La Fiscalía Especializada de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares a nivel federal será regulada y supervisada por dos órganos que serán creados y reconocidos a partir de la promulgación de la presente Ley.

**Artículo 17°**. Junta de Gobierno. La cual será la encargada de redactar y realizar la convocatoria abierta para la elección de los o las Fiscales Especiales que encabezarán la las(sic) 33 Fiscalías Especializadas;

así como de tener reuniones cada 6 meses con el Fiscal y los Sub Fiscales para que rindan cuentas sobre los avances de la Búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares. Así como de los avances en las investigaciones.

I. La Junta de Gobierno estará conformada de la siguiente manera:

a) Un (a) representante de la Secretaría de Gobernación
b) Un (a) representante de la Procuraduría General de la República
c) Un (a) representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores
d) Un (a) representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
e) Cuatro representantes de las Organizaciones de Derechos Humanas mexicanas que trabajen los temas de desaparición forzada y/o desaparición de personas cometida por particulares.
f) Cuatro familiares representantes de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas
g) Un (a) representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México

II. Los o las integrantes de las Organizaciones de Derechos Humanos y los o las familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, cubrirán un período de año y medio, pasado este período deberán ser suplidas por otras organizaciones y familiares de víctimas por otro período igual. Por su participación en la Junta de Gobierno no recibirán sueldo o remuneración alguna.

III. Los o las representantes de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU tendrán un mandato de tres años.

**Artículo 18°**. Comité Regulador. Será el encargado de reunirse máximo cada tres meses con el Fiscal Especial para conocer los avances de la Búsqueda, las investigaciones, y, en caso de que así sea, conocer de nuevos casos de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas y sus avances.

I. El Comité Regulador estará conformado de la siguiente manera:

a) Un (a) representante de la Secretaría de Gobernación
b) Cuatro representantes de las Organizaciones de Derechos Humanas mexicanas que trabajen los temas de desaparición forzada y/o desaparición de personas cometida por particulares
c) Cuatro familiares representantes de víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas
d) Un (a) representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México

II. Los o las integrantes de las Organizaciones de Derechos Humanos y los o las familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, cubrirán un período de año y medio, pasado este período deberán ser suplidas por otras organizaciones y familiares de víctimas por otro período igual. Por su participación en el Comité Regulador no recibirán sueldo o remuneración alguna.

III. La o el representante de la Secretaría de Gobernación, así como la o el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU tendrán un mandato de tres años.

**Artículo 19°**. Las Fiscalías Especializadas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares de los estados y el Distrito Federal, solamente contarán con Comités Reguladores, conformados de acuerdo al Artículo anterior. Estos deberán de trabajar de manera conjunta entre ellos y con el Comité Regulador a nivel federal para poder evaluar correctamente el avance en la búsqueda e investigación de los casos de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

**Artículo 20°**. Las Fiscalías Especializadas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares contarán con dos Sub Fiscalías: la Sub Fiscalía de Búsqueda Inmediata y Permanente y, la Sub Fiscalía de Investigación y Seguimiento.

**Artículo 21°**. Para la elección de los o las Fiscales Especiales, la Junta de Gobierno deberá redactar y publicar la convocatoria abierta para que los interesados (as) de la sociedad en general que cubran con los requisitos, puedan concursar para ocupar el puesto después de ser sometidas a escrutinio de la Junta todas y cada una de las solicitudes recibidas.

I. El mandato de los o las Fiscales Especiales tendrá una duración de 3 años; pudiendo ser re elegido por un período igual por una sola ocasión.
II. Será sometido a revisión su mandato cada año y medio y,
III. De ser necesario, en ese período, o en casos extraordinarios, será revocado su mandato, nombrando a un (a) Fiscal Especial Interina.
IV. La revocación de mandato puede ser solicitada por los Comités Reguladores en cualquier momento, siendo responsabilidad de la Junta de Gobierno analizar la petición.
V. Es responsabilidad de la Junta de Gobierno abrir nueva convocatoria al día siguiente de la revocación de mandato.

**Artículo 22°**. Los o las Sub Fiscales Búsqueda Inmediata y Permanente y de Investigación y Seguimiento, serán propuestos por las o los Fiscales Especiales al momento de tomar posesión, y al igual que los o las Fiscales Especiales tendrán un mandato de 3 años.

**Artículo 23°**. Los o las Fiscales Especiales, serán ratificadas por el Congreso de la Unión, los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para cada caso que corresponda.

En caso de querer realizar alguna modificación a la estructura y a la Ley Orgánica deberá ser sometida a consulta a las organizaciones de Derechos Humanos, familiares de víctimas y ser llevadas a los Congresos estatales o en su caso a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su aprobación.

**Capítulo Segundo**
**De la Búsqueda de las víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares**

**Artículo 24°**. Para los fines de esta Ley, la Búsqueda de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares estará a cargo de las Sub Fiscalías de Búsqueda Inmediata y Búsqueda Permanente.

**Artículo 25°**. Estas Sub Fiscalías deberán de dar atención las 24 horas los 365(sic) del año. La Sub Fiscalía federal de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares; deberá implementar un teléfono de atención las 24 horas los 365 días del año, el cual será gratuito tanto para los familiares que se encuentren en territorio nacional o para familiares que se encuentren en el extranjero.

**Artículo 26°**. La actuación inmediata de las autoridades en las primeras 48 horas son de vital importancia para poder encontrar a las víctimas de cualquiera de los delitos descritos en la presente Ley, por lo que:

I. En cuanto el Ministerio Público de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos de los estados y del Distrito Federal tengan el conocimiento de que se ha cometido alguno de los delitos previstos en esta Ley, deberán activar los mecanismo(sic) necesarios en las primeras 12 horas para dar con el paradero de la

víctima independientemente de que se presente la denuncia correspondiente y sin importar quién o quiénes sean los posibles responsables.

II. Las Fiscalías Especializadas deberán de poner en marcha un protocolo de alerta inmediata en las primeras 5 horas de que se conozca de la desaparición de una persona sin importar quién o quiénes sean los posibles responsables de la comisión del delito. En caso de que se sospeche de que la víctima haya sido desaparecida por la comisión de cualquiera de los delitos descritos en esta Ley, se deberá activar una alerta diferente a las ya establecidas para los casos de sustracción o desapariciones de personas menores de edad (Alerta Amber) y de la Alerta Alba para los casos de desaparición de mujeres; sin embargo estas Fiscalías están obligadas a activar también ambas alertas. Estas alertas deberán también ser activadas de manera transnacional, para evitar que la o las personas víctimas de estos delitos sean sustraídas del territorio nacional; así como para permitir que los familiares que no se encuentren en territorio mexicano conozcan de la desaparición de algún familiar que se encontraba en tránsito o en territorio mexicano al ser víctima de cualquiera de los delitos descritos en la presente Ley.

III. La Procuraduría General de la República y las Procuradurías estatales y del Distrito Federal deberán de desplegar los elementos necesarios de manera inmediata para dar con el paradero de la víctima.

IV. Es obligación de las autoridades establecer tiempos de manera periódica para reunirse con los familiares y representantes legales para informar sobre el proceso de búsqueda de la víctima, así como a las organizaciones de derechos humanos que acompañen el proceso, de los avances de esta.

V. Para los casos que así apliquen, se deberá extender la búsqueda de manera transnacional, por medio de acuerdos previamente firmados con los Estados del Sur, Centro y Norte del Continente.

**Artículo 27°**. Dado que los delitos que se describen en la presente Ley son de carácter permanente e imprescriptible, el Estado está obligado a continuar con la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, aun cuando estos se hayan cometido antes de la promulgación de la Ley. Por lo que:

I. Se deberá continuar con la búsqueda de todas las personas desaparecidas de manera forzada o desparecidas a manos de particulares tanto para su localización con vida como, si fuera el caso, la localización, identificación y restitución a los familiares de sus restos mortuorios.

II. Las Fiscalías Especializadas estarán obligadas a solicitar la búsqueda de las personas desaparecidas en cualquier lugar donde pudieran están(sic) privadas de su libertad, como lo son cárceles civiles o militares, centros clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud o cualquier lugar donde se pueda presumir se tengan a personas realizando trabajos de manera forzada. Esta búsqueda deberá ser realizada en conjunto con los familiares de las víctimas, si estos así lo desean, representantes legales, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, integrantes de organizaciones de derechos humanos, peritos especializados en búsqueda de personas.

III. En caso de que se tenga sospecha de que la víctima haya sido privada de la vida, se deberán realizar las diligencias pertinentes para la exhumación de los restos conforme a los estándares internacionales, siendo derecho de las familias solicitar la participación de peritos especializados independientes, de igual manera las familias tienen el derecho de estar presentes junto con sus representantes legales y algún acompañante durante todo el proceso de exhumación y traslado de los restos. Es obligación del Estado proporcionar a las familias durante todo el proceso de búsqueda, exhumación e investigación el acompañamiento de personal especializado en atención psicosocial, teniendo el derecho las mismas familias de aceptarlo o no.

**Artículo 28°**. Las autoridades garantizarán los derechos de los familiares de las víctimas a participar en las diligencias de búsqueda e investigación, así como las condiciones de seguridad y los recursos económicos necesarios. Así también garantizarán el derecho de las víctimas a tener peritajes independientes y cubrir con los gastos que se requieran.

**Artículo 29°**. Cualquier cuerpo o resto mortuorio que sea localizado y, posteriormente identificado como el correspondiente al de alguna víctima de cualquiera de los delitos descritos en esta Ley, deberán de ser entregados a sus familiares en el estado en el cual fueron localizados; por lo cual queda estrictamente prohibida la cremación de cuerpos bajo cualquier argumentación.

I. Por lo que para los casos de personas no identificadas que se encuentren en los Servicios Médicos Forenses de los tres niveles de gobierno, sin importar cual haya sido la causa de su deceso, queda estrictamente prohibido la cremación, donación de órganos, tejidos o la donación de cadáveres para fines de investigación o prácticas en las Universidades. Dichos cuerpos deberán de ser resguardados y entregados al Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicano, para que realice los registros y toma de muestras necesarias para su posterior identificación y restitución a sus familiares.

II. Se reconoce el derechos(sic) de los familiares de las víctimas el determinar el cómo serán sepultados los restos de su ser querido, una vez que estás(sic) tengan la plena certeza que los restos entregados son de la persona desparecida.

**Capítulo Tercero**
**De la Investigación de los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometidas**(sic) **por particulares**.

**Artículo 30°**. Para los efectos de la presente Ley, las Sub Fiscalías de Investigación y Seguimiento, pertenecientes a las Fiscalías Especializadas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, serán las responsables de llevar a cabo todas las investigaciones para la persecución y sanción de los delitos descritos en esta Ley.

**Artículo 31°**. Las Sub Fiscalías de Investigación y Seguimiento, por medio de sus Ministerios Públicos están obligadas a iniciar las investigaciones pertinentes en cuanto tengan conocimiento de que se ha cometido algunos(sic) de los delitos que se establecen en el Título Segundo de esta Ley.

**Artículo 32°**. Estas Sub Fiscalías tendrá(sic) la obligación de atraer los casos de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares que se encuentren en otra instancia de impartición de justicia, aunque estos ya se encuentren en proceso antes de la entrada en vigor de esta Ley.
Esto sólo se podrá hacer a petición de los familiares y/o representantes legales de las víctimas y familiares.

**Artículo 33°**. Es responsabilidad de estas Sub Fiscalías de informar de manera inmediata a las Sub Fiscalías de Búsqueda Inmediata y Permanente en cuanto tengan conocimiento de la comisión de los delitos descritos en la presente Ley; aun cuando no haya denuncia interpuesta.

**Artículo 34°**. Los o las Ministerios Públicos que se encuentren dentro de las Sub Fiscalías deberán dar atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Siendo que para la localización, investigación y sanción de los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas el tiempo es un factor importante para localizar a las víctimas con vida.

**Artículo 35°**. Las autoridades de cualquier nivel de gobierno municipal, estatal o federal, tendrán la obligación de iniciar de oficio en cuanto tengan conocimiento del hecho, averiguaciones previas por los delitos previstos en esta ley, independientemente de que los hechos hayan ocurrido en esa entidad o no; sin importar la calidad migratoria de la víctima.

**Artículo 36°**. Coadyuvancia de los familiares en las investigaciones. Se deberá reconocer el derecho de los familiares a conocer los avances del caso, obtener información periódica cuando así lo requieran y solicitar copias del expediente, las cuales se les deberán proporcionar de manera gratuita.

**Artículo 37°**. El Estado obligado a garantizar en todo momento la seguridad física y psicológica de:

a) Los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares
b) Todos los agentes del Estado que formen parte de las Fiscalías Especializadas y sus correspondientes Sub Fiscalías.
c) Los integrantes de la sociedad civil de la Junta de Gobierno y de los Comités Reguladores de las Fiscalías Especializadas en los tres órdenes de gobierno.
d) Los testigos o posibles testigos clave para el hallazgo de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometidas(sic) por particulares, así como de todos aquellos testigos que permitan el esclarecimiento de los delitos descritos en esta Ley
e) Los peritos y especialistas que integran el Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicana y;
f) Las personas Defensoras de Derechos Humanos y de las organizaciones a las que pertenezcan, las cuales acompañen casos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

**Capítulo Cuarto**
**De las especificaciones en los casos de desaparición forzada y desaparición de niñas, niños y adolescentes cometida por particulares**.

**Artículo 38°**. En el caso de que se reporte ante las Fiscalías Especializadas, por conducto de cualquier autoridad o persona particular, el caso de un niño, niña o adolescente desaparecido. Se procederá como se establece en el Capítulo tercero, Artículo 26° de la presente Ley. La priorización de esta búsqueda se realizará con base en el interés superior del niño, niña o adolescente, manteniéndose hasta que se logre la localización del sujeto y/o se acredite otro tipo penal diferente a los delitos descritos en esta Ley.

**Artículo 39°**. Para la búsqueda y localización en los casos de desaparición forzada y desaparición de niñas, niños y adolescentes cometida por particulares, las Sub Fiscalías de Búsqueda Inmediata y Permanente, así como las Sub Fiscalías de Investigación y Seguimiento, contarán con un cuerpo de policías auxiliares especializados en infancia, los cuales deberán realizar un registro de los patrones de contexto familiar, social y territorial del caso, que permitan identificar los efectos y fines, de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de las personas menores de dieciocho años.

**Artículo 40°**. En los casos de personas menores de 18 años en los que las Fiscalías Especializadas, identifiquen durante la búsqueda e investigación que el o los delitos corresponden a otros que no están establecidos en la presente Ley, remitirán de forma inmediata a la determinación del tipo penal a la Procuraduría Federal o local de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes, requiriendo la representación jurídica y el acompañamiento integral de las víctimas, frente a las instancias competentes.

**Artículo 41°**. En todos los casos de niñas, niños y adolescentes, las Fiscalías Especializadas, informarán y se coordinarán con la Procuraduría de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de que esta(sic) coadyuve en la investigación. A su vez la Procuraduría de Protección tendrá la obligación de realizar la denuncia correspondiente frente a las Fiscalías Especializadas de forma inmediata ante la identificación o reporte de un probable caso de niña, niño o adolescente desparecido de manera forzada o desparecido a manos de particulares como lo establece la presente Ley.

**Artículo 42°**. El Registro Nacional de personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares, contendrá un sub-registro de niñas, niños y adolescentes, conformado con todos los casos que hayan sido reportados ante las Fiscalías, con la finalidad de desagregar información referente a las causas y fines de la desaparición de las personas menores de 18 años. El Registro deberá encontrarse permanentemente actualizado, y deberá ser complementado con los resultados obtenidos a través de la Alerta Amber y la Alerta Alba. Dicho sub-registro deberá compartirse con el Sistema Nacional de Información de Derechos de niñas, niños y adolescentes.

**Artículo 43°**. En el caso de niñas, niños y adolescentes hijos e hijas de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometidas(sic) por particulares, tendrán derecho a solicitar a nombre propio o a través de su tutor o representante legal tanto a las Fiscalías Especializadas, como al Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, sobre la información que tengan bajo su resguardo.

**Artículo 44°**. En los casos de niñas, niños y adolescentes, las medidas de reparación integral, así como de atención terapéutica y acompañamiento deberán realizarse por personal especializado en infancia.

**Capítulo Quinto**
**De las sanciones por la falta de Investigación, Búsqueda y Persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas cometida por particulares**

**Artículo 45°**. Las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos descritos en la presente Ley tienen la obligación oficiosa de iniciar de manera eficaz y urgente las acciones para lograr la localización y el rescate de la o las víctimas que hayan sido reportadas como desaparecidas de manera forzada o desaparecidas por particulares.

Toda víctima de desaparición forzada o desaparición de personas tienen derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida, su integridad física y psicológica. Estas acciones también deben de llevarse a cabo para todas aquellas víctimas que se encuentren desaparecidas de manera forzada o hayan sido desaparecidas por particulares aún antes de la entrada en vigor de la presente Ley.

**Artículo 46°**. Incurrirán en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad de otra naturaleza a que hubiera lugar, los agentes del Estado que:

I. Impidan u obstaculicen el acceso de las víctimas y sus representantes a la información sobre sus casos;
II. Manipulen, pierdan o alteren las pruebas o datos de investigación;
III. Proporcionen información falsa sobre los hechos;
IV. Se nieguen a cumplir con sus obligaciones en materia de búsqueda, investigación y persecución del delito, por la causa que sea; o
V. Se nieguen a cumplir con las reparaciones a las que sus instituciones estén obligadas, incluyendo el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

**Artículo 47°**. Se impondrá de diez a quince años de prisión y, una multa de seiscientos a mil doscientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, además de la destitución e inhabilitación definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisión en la administración pública federal, o de cualquier agrupación de seguridad pública o castrense en los estados, el Distrito Federal, los municipios y demarcaciones territoriales administrativas del Distrito Federal a los agentes del Estado y, se impondrá de cinco a ocho años de prisión, de trescientos a seiscientos días multa de acuerdo al salario mínimo vigente en el Distrito Federal al particular que en relación con las conductas sancionadas en la presente Ley.

I. A las personas y/o agentes del Estado que obstruyan la actuación de las autoridades.

II. A los agentes del Estado que teniendo la obligación de investigar las conductas tipificadas en la presente Ley, omitan efectuar dicha investigación.

III. A las personas, agentes del Estado que intimiden a la víctima, a sus familiares o a sus representantes durante o después de la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, para que no realicen la denuncia correspondiente o no colaboren con las autoridades competentes.

IV. A la persona y/o al agente del Estado que conociendo los planes para la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, sin ser partícipe, no diere aviso a la autoridad.

**Capítulo Quinto**(sic)
**Del Registro Nacional de personas desparecidas de manera forzada y a manos de particulares.**

**Artículo 48°**. Se deroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Quedando como único Registro Nacional el que se establece en la presente Ley. La información recabada hasta la entrada en vigor de la presente Ley deberá ser depurada y proporcionada a la instancia responsable de resguardar, actualizar y dar seguimiento a la información del nuevo Registro Nacional.

**Artículo 49°**. Por medio de la presente Ley se crea el Registro Nacional especial para las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas a manos de particulares, el cual deberá ser actualizado y, de ser necesario, depurado, por la Sub Fiscalía de Búsqueda Inmediata y Permanente a nivel federal; el cual deberá tener información de casos de víctimas de desaparición forzada ocurridas en el período de la denominada época de la "guerra sucia" (60's, 70's, 80's y 90's) hasta los casos registrados a la entrada en vigor de la presente Ley; así como de los casos de víctimas de desaparición de personas cometida por particulares desde el 2000 hasta los casos registrados a la entrada en vigor de la presente Ley.

**Artículo 50°**. Todos los Registros estatales y federales de personas desaparecidas que se encuentren en posesión de cualquier dependencia de gobierno dentro de los tres niveles deberán ser proporcionados íntegramente a la Sub Fiscalía de Búsqueda Inmediata y Permanente, con la finalidad de tener un solo Registro Nacional actualizado.

**Artículo 51°**. Será obligación de cada Sub Fiscalía de Búsqueda Inmediata y Permanente de los estados y el Distrito Federal, suministrar de manera diaria la información recabada de nuevos casos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

**Artículo 52°**. El Registro Nacional deberá contar con la siguiente información:

I. Del registro de personas desaparecidas de manera forzada
a) Identidad de la persona detenida y posteriormente desaparecida
b) Sexo, edad y nacionalidad de la persona desparecida
c) Fotografía lo más actualizada posible de la persona desaparecida; en caso de no contar con una se procederá a hacer un retrato hablado de la víctima.
d) Ocupación al momento de la detención desaparición
e) Día, mes, año y hora de su detención desaparición
f) Lugar, entidad federativa, municipio o delegación política del Distrito Federal donde ocurrió el hecho
g) Agentes del Estado a los que se responsabiliza de la detención y posterior desaparición
h) Breve narración de los hechos
i) Lugar a donde fue traslada la víctima después de su detención
j) Agentes del Estado a cargo del lugar de detención
k) Estado físico de la víctima al llegar al lugar de detención

II. Del registro de personas desaparecidas a manos de particulares

a) Identidad de la persona desaparecida
b) Sexo, edad y nacionalidad de la persona desparecida
c) Fotografía lo más actualizada posible de la persona desaparecida; en caso de no contar con una se procederá a hacer un retrato hablado de la víctima.
d) Ocupación al momento de ser desaparecida
e) Día, mes, año y hora de la desaparición
f) Lugar, entidad federativa, municipio o delegación política del Distrito Federal donde ocurrió el hecho
g) Posibles responsables de la desaparición de la víctima
h) Breve narración de los hechos

III. El Registro Nacional de Personas desparecidas de manera forzada y manos de particulares deberá de ser actualizado conforme se tengan nuevos datos recabados durante la investigación, así como, de ser el caso, cambiar el registro cuando se tenga la evidencia de que se trata de una desaparición forzada.

IV. El Registro Nacional deberá establecer si la víctima aún se encuentra desaparecida, ha sido encontrada viva o si fueron encontrados sus restos mortuorios; determinando lugar y fecha del hallazgo.

**Artículo 53°**. Se deberán crear dos niveles de acceso al Registro Nacional

1. Acceso público, que permita a cualquier persona a acceder a datos básicos del registro para fines de transparencia, estadísticas e investigaciones independientes. Los datos públicos contendrán:

a) Nombre completo de la víctima
b) Entidad federativa en la que fue desaparecida
c) Edad al momento de su desaparición
d) Fecha de desaparición
e) Nacionalidad
f) Sexo
g) Si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida por particulares
h) Si la víctima fue localizada con vida o en su caso fueron localizados sus restos mortuorios
i. Lugar del hallazgo
ii. Fecha del hallazgo

2. Acceso a familiares, representantes legales y agentes del Estado autorizados para llevar la búsqueda e investigación de los casos; éste(sic) acceso se deberá proporcionar con una clave específica para cada caso; con lo que las familias y representantes legales de éstas podrán tener acceso a todo el expediente, incluyendo las posibles líneas de investigación sobre el caso.

**Artículo 54°**. Bajo ninguna circunstancia se podrá alegar la restricción a la totalidad del expediente a las familias o representantes legales de éstas por cuestiones de seguridad nacional. Es derecho de los familiares conocer todos y cada uno de los avances en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de sus seres queridos.

**Título Cuarto**
**Del Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano.**
**Capítulo Primero**

**Artículo 55°**. Para los fines de la presente Ley y, para dar certeza a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares; se creará el **Instituto**

**Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano**, el cual se encontrará en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en Ciudad Universitaria.

Este Instituto contará con recursos propios, al cual se le debe dotar de todos los recursos materiales y de infraestructura, así como también de personal especializado en las diferentes áreas como Antropología Forense, Arqueología Forense, especialistas en Biogenética, Investigación de contextos y Psicólogos sociales, todos ellos con enfoque en graves violaciones a Derechos Humanos.

**Artículo 56°**. Los especialistas del Instituto serán reconocidos como peritos expertos, por lo que sus investigaciones y testimonio serán considerados indispensables para la investigación y sanción de los delitos descritos en esta Ley.

**Artículo 57°**. El Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, será el encargado de resguardar el Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional Ante-morten / Post-morten, así como del Registro Nacional de restos mortuorios No identificados (NN) y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes.

**Artículo 58°**. También estará a cargo, junto con las Sub Fiscalías de Búsqueda Inmediata y Permanente de realizar la identificación por medio de claves a cada resto mortuorio localizado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, así como tener a su resguardo en un área especial por un período de 365 días naturales dichos restos, antes de ser trasladados a algún panteón previamente establecido por las autoridades, en el cual dichos restos no identificados durante el lapso de tiempo antes establecido, serán debidamente sepultados e identificados de acuerdo a la clave que se le haya asignado previamente al momento de ser localizados, para que posteriormente puedan ser identificados y restituidos a sus familiares.

**Artículo 59°**. El Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, sólo podrá proporcionar la información que tiene a su resguardo por una orden judicial o a petición de los familiares y/o representantes legales de éstos. Así como ser partícipes activos de la búsqueda en vida de las personas desaparecidas de manera forzada o desaparecidas a manos de particulares.

**Artículo 60°**. Gratuidad. Todos los servicios prestados por este Instituto serán gratuitos para los familiares de las víctimas.

**Capítulo Segundo**
**Del Banco Nacional de ADN para la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.**

**Artículo 61°**. El Banco Nacional de Información Genética tendrá como objeto garantizar la obtención, resguardo y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para lograr el esclarecimiento de los delitos previstos en esta ley y realizar la búsqueda en vida e identificación genética de los restos de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.

**Artículo 62°**. El Banco Nacional de Información Genética tendrá como funciones:

I. Organizar, administrar y actualizar de manera continua el archivo nacional de datos genéticos;

II. Resguardar y velar por la reserva de los datos e información que obren en el mismo, de acuerdo a lo establecido en la ley de protección de datos personales y a los principios establecidos para las bases de datos genéticos indicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la organización Mundial de la Salud (**OMS**);

III. Actuar a través de director y los profesionales que lo integren como peritos oficiales cuando así sean requeridos, ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 26° de la presente ley, emitiendo dictámenes técnicos y realizando las pericias genéticas que les sean requerida;

IV. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la veracidad de los estudios, análisis, dictámenes e informes que por su intermedio se realice.

**Artículo 63°**. Cualquier familiar directo de personas víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares tendrá derecho a solicitar y a obtener los servicios del Banco Nacional de información Genética en los términos a los que se refiere esta ley, incluyendo el registro de sus datos en el Archivo Nacional de Datos Genéticos.

En el Archivo Nacional de Datos Genéticos se contendrá la información genética relativa a la búsqueda e identificación de las personas víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, así como de los familiares de las víctimas a efecto de realizar el entrecruzamiento de información y poder determinar la identidad de las personas.

**Artículo 64°**. Todos los Bancos de Información Genética que se encuentren en posesión de las dependencias de los tres niveles de gobierno, deberán compartir dicha información con el Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicano, con la finalidad de no someter a las familiar(sic) a la extracción de nuevas muestras de material genético. Esto se deberá hacer con pleno conocimiento de las familias, siendo su derecho el negar que su muestra sea entregada al Instituto. De igual manera será derecho de las familias solicitar al Banco Nacional de información Genética sean tomadas nuevas muestra.

**Artículo 65°**. Acreditación. Para los fines estipulados en el artículo anterior, el interesado deberá acreditar ante el Banco Nacional de Información Genética:

I) Las circunstancias en que desapareció la persona, proporcionando la mayor información posible.

II) El vínculo que tiene con la persona víctima de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de conformidad con la normativa legal vigente.

**Artículo 66°**. Reserva de información. El Banco Nacional de Información Genética no proporcionará información a particulares sobre los datos registrados, ni tampoco a entidades públicas o privadas cualquiera sea la índole de las razones alegadas.

La información genética resguardada sólo podrá ser proporcionada por requerimiento judicial, en causa determinada, a los fines exclusivos de respaldar las conclusiones de los dictámenes periciales elaborados por el mismo y posibilitar su control por los peritos de parte.

**Título Quinto**
**De la declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares**

**Capítulo Único**

**Artículo 67°**. Se derogan todas las Leyes de Declaración de Ausencia por Desaparición, entrando en vigor a nivel nacional la establecida en esta Ley.

**Artículo 68°**. La declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las

personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares a fin de que judicialmente se determine la representación de los intereses y derechos de dicha persona, aun y cuando no se conozca la identidad del responsable y sin importar el resultado de las investigaciones al respecto.

Este procedimiento podrá solicitarse en cualquier momento a partir de denunciados los hechos

**Artículo 69°**. Podrán ejercer la acción de Declaración de Ausencia por Desaparición las siguientes personas, en el orden planteado:

I. Cónyuge, concubina, concubino de la apersona cuyo paradero se desconoce;
II. Descendientes de la persona cuyo paradero se desconoce, en caso de ser menores a través de un representante;
III. Ascendientes en línea recta en primer y segundo grado;
IV. Parientes colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado;
V. El Ministerio Público, cuando de su investigación se desprenda que se está ante un caso de desaparición de persona y no existiere ninguna de las personas anteriores; y
VI. Quien tenga interés jurídico ya sea para litigar o defender los derechos de la persona cuyo paradero se desconoce.

**Artículo 70°**. Será competente para conocer del procedimiento de declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas por particulares el Juez de lo Civil que corresponda de acuerdo a lo siguiente:

I. El último domicilio de la persona cuyo paradero se desconoce;
II. El domicilio de la persona quien promueva la acción;
III. El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición; o
IV. El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.

**Artículo 71°**. La solicitud de declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas por particulares deberá incluir por lo mensos la siguiente información:

I. El nombre, edad y domicilio del solicitante, así como documentos o información que acrediten el parentesco o relación con la persona cuyo paradero se desconoce;

II. Toda aquella información con la que cuente respecto de la persona cuyo paradero se desconoce, entre la que puede detallarse:

a) Nombre, domicilio, edad, estado civil de la persona cuyo paradero se desconoce;
b) Generales de los hijos, en su caso;
c) Nombre del cónyuge, concubino o pareja sentimental;
d) Actividades de la persona cuyo paradero se desconoce.

III. Copia de la denuncia de hechos realizada ante el Ministerio Público, en su caso, de la queja hecha ante la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos.

A la solicitud se deberá acompañar los documentos con los que se acredite la relación o parentesco con la persona cuyo paradero se desconoce, y todos los demás documentos que quieran utilizar como prueba. Bastará la presentación de copias simples de los documentos mencionados. En todo caso, el solicitante señalará bajo protesta de decir verdad el archivo donde se encuentren los originales a fin de que el juez mediante oficio los recabe.

**Artículo 72º**. En caso de admitir la solicitud de Declaración de Ausencia por Desaparición, el Juez requerirá al Ministerio Público que conozca de la denuncia penal o, en su caso, a la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, para que en el plazo no mayor de tres días hábiles remita la información que obre en el expediente para su análisis y resolución.

El juez estará obligado a suplir la deficiencia de los planteamientos de los hechos señalados en la solicitud y, en su caso, al admitirla ordenará la citación de la persona cuyo paradero se desconoce por medio de la publicación de un edicto que se publicará en el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial del Estado que corresponda, así como en las páginas electrónicas del Poder Judicial, de las dependencias del Poder Ejecutivo y de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, llamándole por dos ocasiones consecutivos mediando entre ellas un plazo de 15 días hábiles, y sin costo alguno para quien ejerza la acción, a fin de que la persona cuyo paradero se desconoce se presente al juzgado en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última publicación.

**Artículo 73º**. Si transcurren 30 días hábiles contados a partir de la última publicación del edicto a que se refiere el artículo anterior, no se tienen noticias de la localización de la persona cuyo paradero se desconoce, ni se ha aparecido con vida ni se ha confirmado su muerte, el juez citará al solicitante y al Agente del Ministerio Público a una audiencia en la cual con base en todo lo actuado dentro del expediente resolverá la procedencia o no de la declaración provisional de ausencia por desaparición y ordenará al Secretario del Juzgado emita la certificación correspondiente a fin de que se inscriba en el Registro Civil acta provisional de ausencia por desaparición forzada o desaparición de personas por particulares. Asimismo se ordenara(sic) que la declaratoria se publique en el Periódico Oficial del Estado que corresponda.

**Artículo 74º**. La resolución en la que el juez declare la Ausencia por Desaparición, tendrá los siguientes efectos:

I. Nombrar un depositario de los bienes de la persona cuyo paradero se desconoce; y

II. Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo con el Estado, los Municipios, o entidades paraestatales, continúen gozando de los beneficios.

**Título Sexto**
**De la Reparación Integral del Daño**
**Capítulo Único**

**Artículo 75º**. Tienen derecho a la reparación integral del daño en los casos de desaparición forzada y a la aplicación de una medida judicial provisional de protección:

I. La víctima y el ofendido; y

II. A falta de la víctima o el ofendido, sus dependientes económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale el derecho sucesorio y demás disposiciones aplicables.

Para los efectos de esta ley, se consideran víctimas del delito de desaparición forzada, quienes resienten directamente la conducta delictiva; en tanto que, también serán ofendidos, quienes resienten indirectamente los efectos de la conducta delictiva, o sea los familiares del desaparecido hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil.

**Artículo 76°**. Toda persona que haya sido víctima de la desaparición forzada y los ofendidos sin perjuicio de la nacionalidad tienen derecho a la reparación integral, la cual comprenderá la restitución, Indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

**Artículo 77°**. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

*Restitución*: Restablecimiento de la víctima o del ofendido a la situación anterior a la violación de derechos humanos o del delito.

*Indemnización*: La desaparición forzada genera un daño en la víctima y en el ofendido, que implica la reparación monetaria equivalente al daño.

I. El daño material, consistente en la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario.
II. El lucro cesante, consistente en el pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando la víctima deje de percibir ingresos por lesiones o incapacidad para trabajar en algún oficio, arte o profesión.
III. El daño emergente, consistente en el pago de las erogaciones efectuadas para fines de investigación, demanda de justicia, servicios médicos o psicológicos, gastos y costos judiciales en lo referente a las acciones de búsqueda de la víctima ante las diversas autoridades.

*Rehabilitación*: Los costos de la rehabilitación física y mental de la víctima por causa de desaparición forzada.

*Satisfacción:* Son medidas de carácter no pecuniario que está obligado a tomar el Estado encaminadas a reparar el daño inmaterial causado a las víctimas.

I. El daño inmaterial, que comprende tanto los sufrimientos como las aflicciones causados a la víctima directa y a sus familiares, el menoscabo de valores muy significativos, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima;
II. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos;
III. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad y sanción a los responsables.

*Garantías de no repetición*: Es el conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de erradicar las causas que producen la desaparición forzada y desaparición a manos de particulares.

**Artículo 78°**. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales en las que uno o más de sus miembros hayan sido víctimas de desaparición forzada, la cual comprenderá la restitución, compensación rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

**Artículo 79°**. Derecho a la verdad. Las víctimas y la sociedad tienen el derecho de conocer la suerte o paradero de las víctimas, los hechos constitutivos de la desaparición forzada y de la desaparición a manos de particulares de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad y conocer la sanción a los responsables.

**Artículo 80°**. Para la reparación integral del daño, tanto de las víctimas como de sus familiares, se creará un Fondo Especial para la Atención a víctimas y familiares de personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares.

**Título Séptimo**
**De la Prevención de los delitos de desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares**
**Capítulo Primero**
**Del Registro Oficial de Personas Detenidas**

**Artículo 81°**. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y cualquiera otra institución de Seguridad Pública, llevarán un registro oficial y actualizado de las personas privadas de libertad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial o de toda otra autoridad o institución competente.

Los mencionados registros tendrán, cuando menos, la información siguiente:

a) La identidad de la persona privada de libertad;
b) El día, la hora y el lugar donde la persona fue privada de libertad y la autoridad que procedió a la privación de libertad;
c) La autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos de ésta;
d) La autoridad que controla la privación de libertad;
e) El lugar de privación de libertad, el día y la hora de admisión en el mismo y la autoridad responsable de dicho lugar;
f) Los elementos relativos a la integridad física de la persona privada de libertad;
g) En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos de la persona fallecida;
h) El día y la hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la autoridad encargada del traslado.

**Artículo 82°**. Todos los agentes del Estado que en ejercicio de su encargo o comisión, tengan conocimiento de la privación de la libertad de una persona, garantizará a toda persona con un interés legítimo en esa información, a familiares o amigos estrechos de la persona privada de libertad, su representante o abogado, el acceso, como mínimo, a las informaciones siguientes:

a) La autoridad que decidió la privación de libertad;
b) La fecha, la hora y el lugar en que la persona fue privada de libertad y admitida en un lugar de privación de libertad;
c) La autoridad que controla la privación de libertad;
d) El lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y, en caso de traslado hacia otro lugar de privación de libertad, el destino y la autoridad responsable del traslado;
e) La fecha, la hora y el lugar de la liberación;
f) Los elementos relativos al estado de salud de la persona privada de libertad;
g) En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos.

**Capítulo Segundo**
**De la capacitación y sensibilización de los agentes del Estado sobre los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares**

**Artículo 83°**. Las autoridades municipales, estatales y federales deberán contar con la capacitación necesaria para realizar la búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada y desaparición de personas por particulares. Para ello se deberá contar con:

a) Capacitación periódica, regular y actualizada para prevenir la participación de servidores públicos en la comisión de los delit5os previstos en esta Ley.
b) Agentes del Estado capacitados en protocolos de búsqueda y actuación inmediata en casos de desaparición forzada y desaparición de Personas.
c) Personal capacitado y sensible en materia de Derechos Humanos y tratados internacionales en la materia.
d) Personal suficiente para atender la investigación y seguimiento de los casos.
e) Personal altamente capacitado en investigación forense.
f) Personal altamente capacitado en atención y acompañamiento a víctimas con una perspectiva psicosocial.

**Transitorios**

**Primero**: La presente Ley entrará en vigor en todo el Territorio Nacional al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo**: Las Fiscalías Especializadas para investigar los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, deberán estar creadas y en pleno funcionamiento, en un plazo no mayor a 300 días naturales a partir de la aprobación de la presente Ley. De no cumplirse con el plazo establecido se sancionará a los agentes del Estado responsables de facilitar los recursos y medios necesarios para su funcionamiento.

**Tercero**: El Instituto nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano deberá ser creado y entrar en pleno funcionamiento en un plazo no mayor de 365 días naturales a partir de la aprobación de la Ley. De no cumplirse con el plazo establecido se sancionará a los agentes del Estado responsables de facilitar los recursos y medios necesarios para su funcionamiento.

**Cuarto**: El Registro Nacional de personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas por particulares deberá estar en funcionamiento y actualizado en un plazo no mayor a 200 días naturales a partir de la aprobación de ésta(sic) Ley. Siendo sancionados aquellos agentes del Estado que no proporcionen los Registros que tienen a su resguardo en un plazo no mayor de 120 días naturales.

**Quinto**: La Base Nacional Ante-morten / Post-morten, así como el Registro de resto(sic) mortuorios No Identificados (NN) y la localización de fosas comunes deberán estar actualizados y bajo resguardo del Instituto Nacional Autónomo en Antropología Forense Mexicano en un plazo no mayor a 365 días naturales a partir de su creación.

**Sexto**: El Estado mexicano tendrá un plazo no mayor a 365 días naturales para asignar espacios donde se encontrarán los panteones especiales para los restos mortuorios que aún no hayan sido identificados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51° de la presente Ley.

**Séptimo**: Se deroga el Capítulo III Bis del Título Décimo, Libro Segundo del Código Penal Federal.

**Octavo**: Los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares se establecerán en el Título Tercero, Libro Segundo del Código Penal Federal, de acuerdo a lo establecido en el Título Segundo de la presente Ley. La modificación del Código Penal Federal así como la correspondiente modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales se realizará en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley.

**Noveno**: Se derogan los Capítulos y Artículos establecidos en la Ley General de Salud en Materia de control Sanitario de la Disposición de Órganos , Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos que contravengan lo establecido en el Artículo 29° de la presente Ley.

**6) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS; Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y PUBLICADA EN LA GACETA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 2015.**

## I. ANTECEDENTES

La desaparición de personas, destaca el Presidente de la República, es uno de los fenómenos sociales con mayor impacto en el tejido social en México y América Latina y constituye una de las crueles violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de violentar la dignidad humana, no sólo causando dolor e incertidumbre en la víctima que se debate entre la esperanza y desesperación sobre su futuro, sino también para los familiares y otras personas afines que sufren por desconocer su paradero.

Añade, que no existe razón que justifique la desaparición de ninguna persona. Se trata de un delito artero, deleznable y de gran impacto para la sociedad, por lo que el conocer, atender y erradicar a fondo cualquier tipo de desaparición de personas es una tarea fundamental para la afirmación de un Estado de Derecho. Además, la demanda inaplazable de la sociedad para hacer efectivo el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición de una persona en un contexto criminal, es una asignatura pendiente que se reconoce y asume como compromiso de esta Administración a mi cargo, para atenderla en el más alto nivel de las decisiones públicas de manera consistente, integral, y de la mano con las familias alcanzadas por el dolor que causan estos delitos, así como de la sociedad civil organizada.

En este contexto, es indispensable e inaplazable asegurar el respeto, la promoción y la defensa de todos los derechos humanos de las personas en México, especialmente el derecho a la libertad y a la seguridad. El derecho a la vida, el derecho a la identidad, al reconocimiento, a la personalidad jurídica, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de desaparición y, en especial, el reconocimiento del derecho a no ser desparecido y la prohibición de cometer la desaparición de personas.

A lo anterior, se suma la prioridad que el Estado mexicano confiere al cumplimiento de los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, en los que nuestro país es parte, como son:

- *La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por México el 8 de abril de 2002;*

- *La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada el 18 de marzo de 2008, y*

- *La Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que México se adhirió el 24 de marzo de 1981, y de cuyo artículo 2 se desprende la obligación de nuestro país de adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención.*

Asimismo, es oportuno señalar que el pasado 15 de febrero del presente año, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, con base en las Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, recomendó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para asegurar que, tanto en el orden federal como local, el marco jurídico

y las actuaciones de las autoridades se ajustan plenamente a las obligaciones consagradas en dicha Convención. Por ello, en la reunión que recientemente sostuvieron diversos funcionarios del Gobierno Federal en Ginebra con el Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se adelantó el compromiso de la presente Administración con la presentación de esta iniciativa.

Al respecto, debe observarse que la Organización de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano a aprobar a la brevedad posible, una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en particular, aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas.

En este sentido, si bien existe legislación federal y local que cuentan con el tipo penal específico para el delito de desaparición forzada de personas como en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como el Distrito Federal, lo cierto es que se considera que dicha legislación no ha adoptado todavía, en la totalidad, las recomendaciones internacionales.

Por las razones que preceden, es que se vuelve patente la importancia de expedir una ley general en la materia, que permita distribuir competencias entre los distintos órdenes de gobierno respecto de áreas y facultades concurrentes, sentando las bases para la colaboración entre dichos órdenes y las diferentes instancias de gobierno.

Cabe destacar que la presente iniciativa tiene como antecedentes los grandes esfuerzos realizados por diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal, gobiernos de las entidades federativas, organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como diversos colectivos constituidos por familiares de víctimas, quienes han implementado acciones de búsqueda incansable de las personas desaparecidas y que demandan mecanismos eficientes y eficaces que permitan a las instituciones de procuración e impartición de justicia del Estado mexicano llegar al conocimiento de la verdad.

Con el propósito de darle cauce a dichos esfuerzos y acciones, y como parte del proceso de elaboración de la presente iniciativa, se llevó a cabo un importante ejercicio de Consulta Pública realizada por la Secretaría de Gobernación. Ello, con el propósito de mantener la apertura y cercanía del Gobierno de la República con los ciudadanos y sus perspectivas, así como la de todos los actores sociales involucrados o con interés en el tema, propiciando que pudieran sumarse al mismo con estudios, análisis, propuestas u observaciones. De esta manera, trabajamos juntos el Gobierno Federal, las entidades federativas, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, las familias de las víctimas y diversas organizaciones de la sociedad civil, en la identificación de las acciones y mecanismos de coordinación que se tradujeron en una serie de propuestas normativas que definen las estrategias que el Estado mexicano deberá seguir para enfrentar la problemática de la desaparición de personas.

Cabe destacar que dicha Consulta Pública también permitió que cualquier ciudadano que así lo deseara, pudiera participar en la construcción de este proyecto. A través del portal de Internet de la Secretaría de Gobernación, añade, fue posible acceder al llenado de un cuestionario sobre los elementos más importantes que debían considerarse como ejes rectores de una política nacional en materia de desaparición de personas, permitiéndose también que nos hicieran llegar de manera libre cualquier propuesta o sugerencia.

## *II. POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS*

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional México en Paz, se busca promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer el ámbito de protección y defensa de los derechos humanos y abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía mediante la prevención del delito.

De manera particular, añade el Ejecutivo Federal, la estrategia 1.5.3 del Plan Nacional de Desarrollo, contempla, "Instrumentar una Política de Estado en derechos humanos", estableciendo líneas de acción que generen información que favorezca la localización de personas desaparecidas y la creación de un Sistema Nacional Único de Datos para la Búsqueda e Identificación de las Personas Desaparecidas. A este respecto, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, confirma la necesidad de instrumentar los Protocolos Alba y Amber, así como la promoción de un Sistema Nacional de Información sobre Personas Desaparecidas y fortalecer el Registro Nacional de Evidencias Genéticas.

En correspondencia con dichos compromisos y como parte de las "Diez medidas para fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad", El Presidente de la república se comprometió a impulsar leyes en favor de los derechos humanos, por lo que esta iniciativa se erige para refrendar la obligación de todas las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de conformidad con los principios establecidos en la Constitución General y los Tratados Internacionales en la materia, mediante la instrumentación de la presente política de Estado, de carácter integral, incluyente y considerando los más altos estándares internacionales.

## *III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA*

Por consiguiente el Ejecutivo Federal señala que la presente iniciativa busca lograr su objetivo mediante cuatro componentes principales:

*1. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las distintas autoridades de los órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición de personas. Es decir, se trata de una ley que incide válidamente en todos los órdenes de gobierno.*

*2. Establecer los tipos penales en materia de desaparición de personas, así como sus sanciones, que evidencian el compromiso del Estado de castigar con la mayor severidad aquellos delitos que lastiman y transgreden el tejido social.*

*3. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual se conformará por autoridades gubernamentales y en el que participen familiares, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, y será la instancia superior para la articulación de esfuerzos en la búsqueda y localización de las personas desparecidas, así como de los procesos que conlleven la homologación de protocolos y registros en esta materia.*

*4. Garantizar la protección de los derechos y establecer las medidas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral de las víctimas de los delitos de desaparición de personas.*

De este modo, añade el Ejecutivo Federal, a propuesta de Ley se integra por diversos elementos que a continuación se señalan:

**Disposiciones Generales**
El ámbito de aplicación de la Ley es de orden público, interés social y de observancia en todo el territorio nacional, por tratarse de un fenómeno que merece y requiere la especial atención de todas las autoridades que conforman el Estado mexicano, mismas que deben contar con los mecanismos e instrumentos jurídicos idóneos para combatir la desaparición de personas en todas sus manifestaciones,

y garantizar los derechos a los que se ha hecho alusión. Asimismo, en el glosario se introducen conceptos fundamentales como lo son el de Familiares, Personas desaparecidas, Persona no localizada, entre otras, a fin de distinguir entre las consecuencias jurídicas y los derechos que asisten a cada una de ellas.

**Delitos**

Uno de los principales delitos de la iniciativa consiste en la tipificación de las conductas que configuran la comisión de delitos en materia de desaparición de personas, acorde con los estándares internacionales. En este sentido, se prevén tres delitos diferentes: el delito de desaparición forzada, el delito de desaparición por particulares y los delitos vinculados a los delitos de desaparición forzada o desaparición por particulares. La tipificación del delito de desaparición de personas es autónoma y se prevén las penas más severas que tengan en cuenta su extrema gravedad.

**Disposiciones Generales Aplicables a todos los Delitos de Desaparición de Personas**

Se propone que los delitos de desaparición de personas tengan el carácter de permanentes o continuos y sean perseguidos de oficio. Esto permitirá entender que el delito se sigue cometiendo hasta el momento en que la persona desaparecida es localizada y, en su caso, puesta en libertad.

Asimismo, otra medida que se adopta en la iniciativa consiste en dar el carácter de imprescriptible a la acción penal para perseguir los delitos de desaparición de personas, estableciéndose que dicha acción penal no estará sujeta a los principios de oportunidad, formas de terminación anticipada del proceso u otras de similar naturaleza.

Además, se propone que las personas que sean procesadas por la comisión de estos delitos no gocen de los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución y conmutación de la pena, así como de la inaplicabilidad de las causas de exclusión del delito, como por ejemplo, la obediencia debida, entre otras.

**Desaparición Forzada de Personas**

Se tipifica el delito de desaparición forzada como aquel cometido por servidores públicos, un particular o grupo de particulares que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o a proporcionar información sobre su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección del ordenamiento jurídico.

Las penas para este delito son las más graves que prevé nuestro ordenamiento, que van desde los cincuenta hasta los cien años de prisión, además de la destitución e inhabilitación en el desempeño de cargos públicos.

Es oportuno mencionar que también se establecen algunos supuestos en los cuales dichas penas se podrán reducir, cuando exista cooperación para el esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, para el hallazgo de las personas desaparecidas.

**Desaparición por Particulares**

De manera especial, esta iniciativa atiende las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y el clamor de todos los mexicanos por reconocer como delito a la desaparición realizada por particulares. Dicho delito sancionará a la persona o grupo de personas que sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o a proporcionar información sobre su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección del ordenamiento jurídico.

Las penas previstas para la comisión de este delito pueden ser de entre cuarenta y noventa años, además de las penas económicas correspondientes.

**Delitos Vinculados**
Esta iniciativa prevé la tipificación de conductas que no constituyen propiamente el delito de desaparición forzada o por particulares, pero que se encuentran íntimamente relacionadas con éstas y ameritan diversas sanciones.

Por ello, se propone establecer penas severas a quienes omitan entregar a la autoridad o familiares de la madre desaparecida, al nacido durante el período de ocultamiento, o falsifiquen documentos de identidad de una niña, niño o adolescentes cuando quien ejerza su patria potestad sea víctima del delito de desaparición forzada.

También serán sancionados, desde luego, los servidores públicos que obstaculicen dolosamente las acciones de búsqueda por delitos de desaparición de personas.

**Sistema Nacional de Búsqueda de Personas**
Uno de los principales aspectos de la iniciativa consiste en la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se traducirá en la colaboración entre las distintas instancias gubernamentales de los órdenes de gobierno, víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil, a través de un amplio espectro de registros, procesos, protocolos y acciones públicas.

Dicho Sistema también considera la creación de un registro de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional que permitirá prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito.

**Creación de Unidades Especializadas**
La iniciativa propone la creación de Unidades Especializadas tanto en la Federación como en las entidades federativas. Las Unidades Especializadas se encontrarán adscritas a la Procuraduría General de la República, por lo que respecta al ámbito federal, en tanto que en las entidades federativas estarán adscritas a las Fiscalías o Procuradurías Locales.

Dichas Unidades contarán con un grado mayor de especialización sobre la búsqueda, investigación y persecución de los delitos en materia de desaparición de personas. Para cumplir con estos objetivos, estarán facultadas para coordinarse con otras autoridades e instituciones, nacionales e internacionales. También podrán hacer partícipes a los familiares de las víctimas durante los procedimientos de búsqueda.

**De la Búsqueda**
La iniciativa que se presenta establece también un procedimiento de Búsqueda que se adecua a los más altos estándares internacionales, el cual permitirá que cualquier persona levante un reporte, sin importar hora y día, a través de una llamada telefónica al número único que para tal efecto se habilite, al acudir ante el Ministerio Público más cercano, o a la autoridad municipal respectiva. Es importante que los medios para levantar dicho reporte respondan debidamente a los principios de oportunidad, celeridad, gratuidad, protección de datos personales y accesibilidad, los cuales estarán garantizados en la presente iniciativa.

**El Consejo Nacional Ciudadano**
Se establece el Consejo Nacional Ciudadano como un órgano de consulta en materia de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.

Dicho Consejo estará integrado por los familiares de las víctimas; por especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de personas

desaparecidas o no localizadas, o en la investigación y persecución de los delitos de desaparición de personas, y por representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

El nombramiento de sus integrantes se determinará mediante convocatoria pública. La participación en el Consejo Nacional Ciudadano será de carácter honorífica y por tanto, no será susceptible de emolumento o contraprestación económica alguna.

El Consejo Nacional Ciudadano podrá realizar recomendaciones a las autoridades que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, respecto a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas o no localizadas.

**De los Derechos de las Víctimas**
Un aspecto de la mayor relevancia en esta iniciativa se encuentra relacionado con las víctimas de este terrible crimen. En los casos de la comisión de delitos de desaparición de personas, se considera que la víctima no solamente es la persona desaparecida o no localizada, con independencia de la causa, sino también sus familiares u otras personas afines.

Para proteger a estas víctimas, además de establecer la participación de diversas instancias gubernamentales y sociales, y puntualizar los derechos y facilidades económicas para las mismas, se determinan las medidas de atención inmediata para brindar ayuda, asistencia y atención. Además, se realizan importantes modificaciones que deberán hacerse en todo el país, respecto de los procedimientos de declaración de ausencia, incluyendo también medidas de reparación integral que por su importancia, merecen una especial consideración.

**Declaración Especial de Ausencia**
En efecto, la iniciativa prevé la necesidad de disponer de un procedimiento especial y expedito para que los familiares de la persona desaparecida puedan solicitar a la autoridad judicial competente la emisión de una Declaración Especial de Ausencia, la cual debe cumplir con las prevenciones establecidas en la misma Ley.

Esta declaración tiene como finalidad reconocer y proteger la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.

En virtud de la facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia, se propone entonces diseñar las bases a partir de las cuales las entidades federativas puedan legislar en la materia, con absoluto respeto a su autonomía constitucional, pero también de manera congruente y armónica, buscando favorecer a las víctimas de los delitos en materia de desaparición de personas.

**Medidas de Reparación Integral a las Víctimas de Desaparición de Personas**
Otro apartado de la iniciativa de gran importancia, es el correspondiente al derecho de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas.

Asimismo, se establece la responsabilidad de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de asegurar la reparación del daño a la víctima del delito de desaparición forzada de personas, cuando se compruebe la plena responsabilidad de la comisión de dicho delito por parte de los servidores públicos, en cuyo caso la Federación tendrá el carácter de responsable subsidiario.

**Protección de Personas**

Conforme a la presente Iniciativa, las autoridades competentes deberán establecer programas para la protección de las personas involucradas en el proceso de búsqueda, investigación o proceso penal de personas desaparecidas o no localizadas, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro en razón de su intervención en dichos procesos.

Como medidas de protección urgentes se encuentran la reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas. Asimismo, se podrá otorgar, como medida de protección para enfrentar el riesgo, la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados y los demás medios de protección que se requieran, según sea el caso, para protegerlas.

Se establece también la obligación de tratar con confidencialidad la información y documentación relacionada con las personas protegidas.

**Prevención de los Delitos**

Finalmente, contempla en la Iniciativa la obligación que se impone a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para ejecutar prioritariamente políticas, programas, acciones y otras medidas, con la finalidad de contribuir a prevenir los delitos de desaparición de personas. Lo anterior será adoptado para la prevención de estos ilícitos e incluirán la cooperación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad, nacionales e internacionales.

Con esta Iniciativa, señala en Presidente de la República, el Gobierno Federal busca dar un gran paso que esté a la altura del reto que tiene el Estado mexicano para combatir de manera decidida la desaparición de personas, así como de proveer de manera eficaz y coordinada, en todos los órdenes de gobierno, a la búsqueda de las mismas a través de un Sistema Nacional que conjunte esfuerzos, registros y recursos de todo tipo para prevenir la incidencia de estos delitos intolerables para nuestra sociedad en un futuro.

**En seguida, y para mayor ilustración de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas que se expide, y las reformas y derogación de diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, se presentan la primera en sus términos y las segundas comparativamente con el contexto de los preceptos del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, para contemplar en ellas sin mayor preámbulo, el sentido y alcance que comprenden.**

**ARTÍCULO PRIMERO.- Se EXPIDE la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, para quedar como sigue:**

## LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESPARACIÓN DE PERSONAS

### TÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

### CAPÍTULO ÚNICO

**Artículo 1.**- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia en todo el territorio nacional.

**Artículo 2.**- La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas;

II. Establecer los tipos penales en materia de desaparición de personas, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

III. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y

IV. Garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas o no localizadas y sus familiares.

**Artículo 3.**- La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias. Al hacerlo se promueven, respetan, protegen y garantizan los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

**Artículo 4.**- Para efectos de esta Ley se entiende por:

I. **Comisión Ejecutiva**: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

II. **Comisiones de Víctimas**: las Comisiones Estatales y del Distrito Federal de Atención a Víctimas;

III. **Consejo**: el Consejo Nacional Ciudadano;

IV. **Declaración Especial de Ausencia**: la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición

V. **Entidades Federativas**: las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución;

VI. **Familiares**: las personas que en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la Persona Desparecida o no Localizada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona Desparecida o no Localizada, que así lo acrediten ante las autoridades competentes;

VII. **Instituciones de Seguridad Pública**: las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, así como las dependencias encargadas de la Seguridad Pública en los órdenes federal, local y municipal;

VIII. **Persona Desparecida**: la persona cuya ubicación es desconocida y su desaparición obedece, de acuerdo con la información con que cuenta la autoridad, a la probable comisión de algún delito previsto en esta Ley;

IX. **Persona no Localizada**: la persona cuya ubicación es desconocida y su no localización obedece, de acuerdo con la información con que cuenta la autoridad, a causas distintas de la comisión de algún delito previsto en esta Ley;

X. **Procuraduría**: la Procuraduría General de la República;

XI. **Procuradurías Locales**: las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas;

XII. **Registro Forense**: el Registro Forense Nacional;

XIII. **Registro Nacional**: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

XIV. **Reglamento**: el Reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas;

XV. **Reporte**: la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

XVI. **Sistema Nacional de Búsqueda**: el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

XVII. **Tratados**: a los Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, y

XVIII. **Unidades Especializadas**: las Unidades Especializadas de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales, en materia de desaparición de personas.

**Artículo 5**.- Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley son diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

I. **Búsqueda en vida**: en todas las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda y desarrollo de las investigaciones, se debe presumir que la Persona Desaparecida o no Localizada está con vida;

II. **Búsqueda efectiva y exhaustiva**: todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o no Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, con base a información útil, encaminadas a la localización y atendiendo a todas las posibles líneas de investigación;

III. **Enfoque diferencial**: al aplicar la ley, las autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos, de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada por las mismas;

IV. **Gratuidad**: todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, no tendrán costo alguno para las personas;

V. **Igualdad y no discriminación**: para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas a los que se refiere esta Ley, las actuaciones y diligencias deben ser conducidas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos o la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial debe fundarse en razones de enfoque diferencial;

VI. **Máxima protección**: la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas a que se refiere esta Ley;

VII. **No victimización**: la obligación de aplicar las medidas necesarias y justificadas de conformidad con los principios en materia de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y en los Tratados, para evitar que la Persona Desaparecida o no Localizada y las víctimas a que se refiere esta Ley, sean revictimizadas en cualquier forma, así como eliminar los obstáculos para que éstas tengan acceso efectivo a sus derechos, y

VIII. **Verdad**: el derecho de conocer la verdad y recibir información sobre los hechos constitutivos de los delitos de desaparición de personas previstos en esta Ley, en tanto que el objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la protección de las víctimas, el castigo de los responsables y la reparación de los daños causados, en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 6.**- En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la Ley General de Víctimas.

## TÍTULO SEGUNDO
## DE LOS DELITOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 7.**- Los delitos de desaparición forzada y de desaparición por particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la víctima esté privada de la libertad o sus restos no hayan sido localizados.

**Artículo 8.**- El ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de terminación anticipadas del proceso u otras de similar naturaleza.

**Artículo 9.**- Los sentenciados por los delitos de desaparición forzada y de desaparición por particulares no tienen derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena, salvo en los casos previstos en el artículo 25 de esta Ley.

Lo mismo aplica tratándose de inmunidades, indulto, amnistía o figuras análogas.

**Artículo 10.**- La desaparición forzada de personas y la desaparición por particulares no serán considerados delitos de carácter político para efectos de extradición.

**Artículo 11.**- No constituyen causa de exclusión de los delitos establecidos en los capítulos Tercero y Cuarto del Título Segundo de esta Ley, la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la comisión de estos delitos.

En ningún caso pueden invocarse circunstancias especiales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, suspensión de derechos y sus garantías, perturbación grave de la paz pública, como causa de justificación o inculpabilidad para cometer los delitos a que se refiere esta Ley.

**Artículo 12.**- Para la imposición de una multa es aplicable el concepto días multa previsto en el Código Penal Federal.

**Artículo 13**.- Los delitos previstos en esta Ley deben ser perseguidos conforme a las reglas de autoría y participación previstas en los artículos 13 y 14 del Código Penal Federal

**Artículo 14**.- La tentativa punible de los delitos previstos en esta Ley se sancionará en términos del artículo 63 del Código Penal Federal.

**Artículo 15**.- Queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada en el Estado al que sería entregada.

**Artículo 16**.- Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos distintos a los previstos en esta Ley, el agente del Ministerio Público advierte la probable comisión de algún delito previsto en el presente ordenamiento, debe identificar y remitir copia de la investigación a la Unidad Especializada competente

**Artículo 17**.- Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos previstos en esta Ley, la Unidad Especializada advierte la probable comisión de alguno o varios delitos distintos a los previstos en el presente ordenamiento, deberá remitir copia de la investigación a las autoridades ministeriales competentes, salvo en el caso de delitos conexos.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS

**Artículo 18**.- La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades federales cuando:

I. Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable o como sujeto pasivo del delito;

II. Se actualicen las hipótesis de la competencia federal previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o en cualquier otra disposición que otorgue competencia a la Federación para conocer de un delito;

III. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Unidad Especializada de la Entidad Federativa, en ejercicio de la facultad de atracción, la remisión de la investigación correspondiente, cuando exista una sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado Internacional, que hubiere determinado su responsabilidad internacional por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley, o

IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Unidad Especializada de la Entidad Federativa, en ejercicio de la facultad de atracción, la remisión de la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.

**Artículo 19**.- La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades de las Entidades Federativas en los casos no previstos en el artículo anterior.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

**Artículo 20**.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el o los servidores públicos o el particular o grupo de particulares, que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad, o a proporcionar la información disponible sobre la misma o su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección del ordenamiento jurídico.

**Artículo 21**.- También comete el delito de desaparición forzada de personas:

I. El servidor público que siendo superior jerárquico de otros servidores públicos bajo su inmediata autoridad y control efectivos, haya tenido conocimiento de que sus subordinados se proponían cometer o estuvieren cometiendo el delito tipificado en el artículo anterior y, conscientemente, haya sido omiso en tomar las acciones necesarias para prevenirlo, impedirlo o hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes, y

II. El servidor público o persona que por orden, con autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de un servidor público, a sabiendas de la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en el presente Capítulo y sin haber participado directamente en las mismas, incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la Persona Desaparecida.

**Artículo 22**.- Se impondrá pena de cincuenta a cien años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en el artículo 20 de esta Ley.

Se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa a los servidores públicos o cualquier persona que incurra en las conductas previstas en el artículo 21 de esta Ley.

Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión

**Artículo 23**.- Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 24**.- Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando:

I. Durante o después de la desaparición, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o copartícipes del delito;

II. La víctima pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños y adolescentes, indígenas, mujeres embarazadas, adultos mayores o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad para resistirlo;

III. Incinere, sepulte, o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la víctima, salvo lo establecido en la fracción II del artículo 21 de esta Ley;

IV. El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, o

V. Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

**Artículo 25**.- Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas conforme a lo siguiente:

I. Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en cuatro quintas partes;

II. Si los autores o partícipes proporcionan información relevante que conduzca a la localización con vida de la Persona Desparecida o a dar con el paradero de los restos humanos de la misma, disminuirán hasta en dos terceras partes, o

III. Si los autores o partícipes proporcionan información relevante que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una mitad.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LA DESPARICIÓN POR PARTICULARES

**Artículo 26**.- Comete el delito de desaparición por particulares, la persona o grupo de personas que, sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas con la finalidad de ocultarlas, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información disponible sobre su suerte o paradero, con lo cual, quien fue privado de la libertad, queda sustraído de la protección del orden jurídico.

**Artículo 27**.- Se considerará como partícipe del delito de desaparición por particulares, para los efectos de la presente Ley, a la persona que a sabiendas de la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en este Capítulo, incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la Persona Desparecida cuya muerte se haya producido durante la desaparición.

**Artículo 28**.- Se impondrá pena de cuarenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa a los particulares que incurran en la conducta prevista en el artículo 26 de esta Ley. Asimismo, se impondrá pena de treinta a cincuenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa a quien incurra en la conducta prevista en el artículo 27 de esta Ley.

**Artículo 29**.- Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición por particulares durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición por particulares, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 30**.- Las penas aplicables para el delito de desaparición por particulares pueden ser modificadas conforme a las reglas previstas en los artículos 24 y 25 de esta Ley.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LOS DELITOS VINCULADOS CON LA DESPARICIÓN DE PERSONAS

**Artículo 31**.- Se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas a que se refiere el ar6tículo 62 de esta Ley.

**Artículo 32**.- Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de cien a quinientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 33**.- Se impondrá pena de tres meses a tres años de prisión a quien conociendo el paradero o destino final de la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

**Artículo 34**.- Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil días multa a quien falsifique documentos de identidad de una niña o niño nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas o de desaparición por particulares durante el período de ocultamiento, con conocimiento de dicha circunstancia.

Se aplicarán las mismas penas a la persona que, dolosamente, utilice los documentos falsificados de una niña o niño a que se refiere el párrafo anterior, con el conocimiento de dicha circunstancia.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINSTRATIVAS

**Artículo 35**.- Los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

**Artículo 36**.- Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerará grave el incumplimiento injustificado de cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas.

# TÍTULO TERCERO
# DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

## CAPÍTULO PRIMERO
## DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 37**.- El Sistema Nacional de Búsqueda es el conjunto de procesos y acciones para la operación y coordinación de autoridades federales, de las Entidades Federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la búsqueda y localización de personas.

**Artículo 38**.- El Sistema Nacional de Búsqueda está conformado, como mínimo, por:

I. Los protocolos previstos en el artículo 67 de esta Ley;

II. El Registro Nacional;

III. El Registro Forense;

IV. El Registro Nacional de Fosas Clandestinas, y

V. Otros registros necesarios para su operación en términos de lo que prevé esta Ley.

**Artículo 39**.- En la ejecución de los procesos del Sistema Nacional de Búsqueda participan:

I. La Procuraduría y las Procuradurías Locales;

II. Las Instituciones de Seguridad Pública;

III. Las instituciones de protección civil de la Federación, de las Entidades Federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;

IV. La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, y

V. Las demás autoridades e instancias federales, locales y municipales que puedan contribuir al cumplimiento de la presente Ley, en el ámbito de sus competencias.

También participarán en el Sistema Nacional de Búsqueda, los Familiares y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, en los términos de los lineamientos a que se refiere la fracción V del artículo 40 de esta Ley

**Artículo 40**.- La Procuraduría es la instancia coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda y le corresponde emitir:

I. Los lineamientos generales que determinen el funcionamiento y la articulación para la coordinación de las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas;

II. Los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional;

III. Los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Forense;

IV. Los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional de Fosas Clandestinas;

V. Los lineamientos que regulen la participación de los Familiares y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda de personas, al proporcionar la información que consideren relevante a quienes participen en la ejecución de los procesos del Sistema Nacional de Búsqueda, y

VI. Las disposiciones necesarias para garantizar la consulta e interconexión permanente entre los diversos registros de manera eficaz y eficiente para la búsqueda de personas.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMPETENCIA DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

**Artículo 41**.- La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Unidades Especializadas para la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desparecidas o no Localizadas.

Las Unidades Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar como mínimo, con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados que se requieran para su efectiva operación.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar, conforme a los más altos estándares internacionales, a los servidores públicos adscritos a las Unidades Especializadas en materia de derechos humanos, atención a las víctimas, sensibilización y relevancia específica de la desaparición de personas, aplicación de protocolos de búsqueda y de identificación forense, cadena de custodia, entre otros. De igual forma, podrán participar con las autoridades competentes, en la capacitación de los servidores públicos que los Ayuntamientos designen en términos de la fracción III del artículo 51 de esta Ley.

**Artículo 42**.- La Unidad Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

I. Recibir las denuncias y Reportes relacionados con la desaparición o no localización de personas;

II. Iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de las Personas Desparecidas o no Localizadas, así como solicitar la colaboración de los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda o de otras autoridades competentes para tales efectos;

III. Ejecutar de manera inmediata los protocolos que correspondan, para iniciar y coordinar la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas;

IV. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la búsqueda de Personas Desparecidas o no Localizadas;

V. Recabar la información necesaria para realizar la búsqueda de la Persona Desparecida o no Localizada y, en su caso, para la persecución e investigación de los delitos previstos en esta u otras leyes;

VI. Remitir copia de la investigación y las actuaciones realizadas a las autoridades competentes cuando advierta la comisión de uno o varios delitos diferentes a los previstos en esta Ley;

VII. Solicitar la participación de las autoridades competentes en materia de atención a víctimas, derechos humanos y protección civil, así como de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda de personas, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de las exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de las Personas Desparecidas o no Localizadas;

IX. Solicitar a las autoridades competentes el traslado de los internos a otros centros de reclusión salvaguardando sus

derechos humanos, siempre que esta medida favorezca la búsqueda o localización de las Personas Desparecidas o no Localizadas;

X. Permitir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley, la participación de los Familiares en el proceso de búsqueda, así como informales periódicamente sobre sus derechos y los avances en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, y en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XI. Resguardar la información obtenida para la búsqueda de Personas Desparecidas o no Localizadas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia, protección de datos personales y archivos;

XII. Esclarecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de los servidores públicos especializados;

XIII. Celebrar convenios de colaboración o cooperación con autoridades locales y nacionales, así como proponer la celebración de éstos con autoridades internacionales, para el óptimo cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con la presente Ley;

XIV. Brindar la información que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas le soliciten para mejorar la atención a las víctimas;

XV. Proporcionar asistencia técnica a las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas que lo soliciten, y

XVI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

La Unidad Especializada de la Procuraduría debe iniciar y dar seguimiento a la búsqueda de Personas Desparecidas o no Localizadas en los supuestos a que se refiere el artículo 18 de esta Ley.

**Artículo 43**.- Las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas deben contar al menos, con las atribuciones previstas en el artículo anterior.

Las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas deben iniciar y dar seguimiento a la búsqueda de Personas Desparecidas o no Localizadas cuando no esté contemplado expresamente como competencia de la Federación.

Cuando los hechos tengan lugar en más de una Entidad Federativa, la Unidad Especializada de la Procuraduría establecerá mecanismos de coordinación con las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas correspondientes. La Unidad Especializada de las Entidades Federativas que reciba la denuncia o Reporte debe iniciar la búsqueda de inmediato.

**Artículo 44**.- Cuando existan indicios suficientes de que algún servidor público está relacionado con la desaparición de una persona, éste no podrá participar en la búsqueda e investigación correspondiente.

**Artículo 45**.- En el supuesto previsto en el artículo anterior, la Unidad Especializada de la Procuraduría debe continuar sin interrupción la búsqueda de la Persona Desaparecida y la investigación de los delitos previstos en esta Ley, en términos de lo que establezca el protocolo de búsqueda por probable desaparición forzada de personas.

**Artículo 46**.- Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deben proporcionar, en el ámbito de su competencia, el auxilio e información que las Unidades Especializadas les soliciten para la búsqueda de Personas Desparecidas o no Localizadas, así como en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 47**.- La Procuraduría puede celebrar acuerdos interinstitucionales con autoridades e instituciones para coordinar las acciones de búsqueda de mexicanos en el extranjero y migrantes extranjeros en el país.

**Artículo 48**.- Cuando sea necesaria una búsqueda internacional, la Procuraduría gestionará las acciones necesarias para realizar dicha búsqueda. Las Unidades Especializadas de las Entidades Federativas deberán solicitar a la Procuraduría la realización de una búsqueda internacional cuando lo estimen pertinente.

**Artículo 49**.- Las personas físicas o morales que cuenten con información que pueda contribuir a la búsqueda de Personas Desparecidas o no Localizadas o a la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, deben proporcionarla a las Unidades Especializadas directamente o, a través del número telefónico previsto en el artículo 51, fracción I de esta Ley.

Las Unidades Especializadas no pueden condicionar la recepción de la información a que se refiere el párrafo anterior al cumplimiento de formalidad alguna.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

### SECCIÓN PRIMERA
### DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA

**Artículo 50**.- Cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una Persona Desaparecida o no Localizada mediante:

I. Reporte, o

II. Denuncia.

Los medios a que se refiere este artículo pueden realizarse en forma anónima.

**Artículo 51**.- El Reporte puede realizarse las veinticuatro horas del día, todos los días del año, a través de los medios siguientes:

I. Telefónico, a través del número único nacional que la Procuraduría habilite para tal efecto;

II. Presencial, ante cualquier agente u oficina del Ministerio Público, o

III. Cuando la distancia o los medios de comunicación no permitan realizarlo en términos de las fracciones anteriores, se podrá realizar de manera presencial, ante la policía o la autoridad municipal que

el Ayuntamiento designe para tal efecto y que cuente con la capacitación para aplicar el protocolo de búsqueda correspondiente.

El levantamiento de Reportes debe responder a los principios previstos en el artículo 5 de la presente Ley. La Procuraduría, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, podrá establecer medios adicionales a los previstos en el párrafo anterior.

Salvo en el caso de Reportes realizados en términos de la fracción I de este artículo, la instancia que los reciba debe entregar constancia de ello a quien lo realizó.

En el caso de que la autoridad durante el proceso de búsqueda e investigación encuentre indicios que hagan suponer la presunta comisión de los delitos previstos en esta Ley, debe proceder de oficio a iniciar la investigación correspondiente.

La presentación de denuncias se sujetará a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 52**.- Las oficinas consulares de México deben recibir las solicitudes de búsqueda de los Familiares de Personas Desaparecidas o no Localizadas en México y remitirán sin dilación el Reporte a la Unidad Especializada de la Procuraduría.

**Artículo 53**.- La autoridad que reciba el Reporte o denuncia, según corresponda, debe recabar por lo menos, la información siguiente:

I. Nombre, edad y demás datos generales de la persona que lo presenta, salvo que se trate de un Reporte anónimo;

II. La ubicación desde la cual se realiza el Reporte;

III. El número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con la persona que realizó el Reporte, salvo que se trate de un Reporte anónimo;

IV. La persona que se reporta como desaparecida o no localizada y, en su caso, sus características físicas o cualquier otro dato que permita su identificación y localización;

V. La narración pormenorizada de los hechos ocurridos, incluyendo las circunstancias de tiempo, modo o lugar;

VI. La mención de las personas probablemente involucradas, con el señalamiento de todos los datos que puedan conducir a su identificación, incluida su media filiación, y

VII. Cualquier otra información, documentos o elementos que faciliten la búsqueda de las Personas Desaparecidas o no Localizadas y la investigación de los hechos.

Si la persona que realiza el Reporte o denuncia no otorga la información señalada en este artículo, la instancia que recabe el Reporte o denuncia, según corresponda, debe asentar las razones de esa imposibilidad.

La autoridad que recabe la información, documentos y elementos a que se refiere el presente artículo deberá asentar su nombre, cargo y dependencia gubernamental a la que se encuentre adscrito al momento de recibir el Reporte o denuncia.

La autoridad a que se refiere el párrafo anterior, estará obligada a entregar una copia del Reporte o denuncia a la persona que haya acudido a dar noticia de los hechos.

**Artículo 54**.- La autoridad que recabe el Reporte o denuncia debe transmitirlo inmediatamente a la Unidad Especializada que resulte competente en términos de lo dispuesto en el Capítulo Segundo de este Título, la cual debe aplicar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización.

La Unidad Especializada que recabe el Reporte debe ingresar la información, de inmediato al registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas que corresponda en términos del artículo 73 de esta Ley y generar un folio único de búsqueda, el cual se debe proporcionar a quien realizó el Reporte.

En el caso de la presentación de una denuncia, se debe proceder sin dilación a asignar el número de expediente o investigación, así como a ingresar la información al registro señalado en el párrafo anterior.

Cuando la persona que realizó el Reporte o la denuncia no haya proporcionado la información a que se refiere el artículo anterior, la Unidad Especializada debe asentar en el registro a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, la razón de la imposibilidad.

La Unidad Especializada que coordina la búsqueda debe actualizar constantemente el estado de la búsqueda, para lo cual puede solicitar información a los Familiares.

**Artículo 55**.- La autoridad que reciba el Reporte o denuncia debe:

I. Instrumentar las acciones de búsqueda inmediata, conforme al protocolo aplicable;

II. Solicitar, en su caso, a la Unidad Especializada correspondiente, sin dilación, el ingreso de la información al registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas que corresponda en términos del artículo 73 de esta Ley, así como la coordinación de la búsqueda y el inicio de la investigación respectiva, y

III. Confrontar la información ingresada al registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas en términos de la fracción anterior, con los registros o bases de datos a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

**Artículo 56**.- La Unidad Especializada que reciba el Reporte o denuncia debe iniciar de inmediato la búsqueda de la Persona Desaparecida o no Localizada, mediante la aplicación del protocolo que corresponda.

La Unidad Especializada no puede negarse a instrumentar las acciones de búsqueda e investigación aunque considere ser incompetente. La Unidad Especializada sólo podrá suspender dichas acciones cuando la Unidad Especializada en cuyo favor haya declinado la competencia inicie las acciones de búsqueda e investigación correspondientes.

**Artículo 57**.- Durante la búsqueda, se presumirá que la Persona Desaparecida o no Localizada, se encuentra con vida.

La Unidad especializada sólo podrá concluir con la búsqueda, incluso en los casos en que la Persona Desaparecida o no Localizada sea declara ausente o presuntamente muerta, hasta que la persona o sus restos hayan sido encontrados, los hechos hayan sido esclarecidos, o se decrete el no ejercicio de la acción penal.

**Artículo 58**.- La Unidad Especializa, al momento de recibir un Reporte o denuncia, debe informar a los Familiares sobre la posibilidad de canalizarlos a la autoridad de atención a víctimas que corresponda, de conformidad con el Título Cuarto de esta Ley.

**Artículo 59**.- La Unidad especializada puede solicitar a los Familiares la información que estime necesaria para localizar e identificar a la Persona Desaparecida o no Localizada.

**Artículo 60**.- La Unidad especializada debe permitir la participación de los Familiares en las diligencias de búsqueda de la Persona Desparecida o no Localizada, así como en la investigación y persecución de los delitos a que se refiere esta Ley, en los términos previstos en el Código Nacional de procedimientos Penales.

Cuando la presencia de los Familiares en dichas diligencias obstaculice la búsqueda o condicione la validez de la investigación, la Unidad especializada debe asegurar la existencia de mecanismos alternativos para que los Familiares tengan conocimiento de las evidencias y diligencias del caso.

**Artículo 61**.- A efecto de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida o no Localizada, la Unidad especializada que realice la búsqueda debe consultar las bases de datos o registros de:

I. Hospitales públicos o privados;

II. Centros de detención;

III. Servicios Médicos Forenses;

IV. Instituciones de Asistencia Social, en términos de la Ley de Asistencia Social;

V. Panteones;

VI. Identidad de personas;

VII. Estaciones migratorias y listas de control migratorio, y

VIII. Los demás registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización de las personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Las autoridades o instituciones que administran las bases de datos o registros a que se refiere este artículo deben tomar las medidas necesarias para que en dichas bases de datos y registros contengan la información de las personas a las que prestan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales proporcionarán asistencia las instituciones a que se refiere el párrafo anterior a fin de facilitar el acceso a la información contenida en sus bases de datos o registros.

**Artículo 62**.- Cuando sea necesario para la investigación o exista algún indicio para la búsqueda de personas por probable desaparición forzada de personas en muebles o inmuebles de la Federación, Entidades Federativas, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Unidad Especializada de la Procuraduría procederá de forma inmediata, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, a ejecutar de manera eficaz la inspección.

**Artículo 63**.- las instituciones a cargo de los muebles o inmuebles a que se refiere el artículo anterior deben permitir a las Unidades Especializadas el acceso a los registros y bases de datos, en lso términos que se establezcan en la autorización correspondiente.

**Artículo 64**.- Si en cualquier momento durante la búsqueda la persona es localizada, la Unidad Especializada correspondiente debe, como mínimo:

I. Dar aviso inmediato a la autoridad competente en materia de atención a víctimas;

II. Confirmar su identidad, de acuerdo con los protocolos de identificación forense emitidos en términos del artículo 67 de esta Ley;

III. Una vez identificada, notificarlo a quien solicitó la búsqueda, a sus Familiares, o en su caso, a la persona que ésta designe;

IV. En caso de que se localizara sin vida a la persona, se deberá proteger, respetar y restituir de manera digna a sus Familiares los restos humanos, así como entregar un informe de las circunstancias de la muerte y la forma en que se identificaron dichos restos;

V. Actualizar el registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas que corresponda en términos del artículo 73 de esta Ley, y

VI. Obtener la declaración de la persona localizada, en la cual señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su desaparición o no localización, así como los motivos de ellos y los probables responsables de la misma.

**Artículo 65**.- Cuando una autoridad identifique a una persona que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de parentesco, identidad y domicilio, debe dar aviso a las Unidades Especializadas correspondientes, a efecto de que se verifique si su desaparición o no localización fue reportada en el Registro Nacional. En caso de no existir Reporte o denuncia, las Unidades Especializadas deberán incorporar al registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas que corresponda en términos del artículo 73 de esta Ley los datos respectivos.

**Artículo 66**.- Las autoridades involucradas en la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, en el ámbito de sus competencias, deben asegurar que la información e indicios recabados atiendan las etapas y registros de procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DE LOS PROTOCOLOS

**Artículo 67**.- Las Unidades Especializadas deben realizar la búsqueda e identificación de Personas Desparecidas o no Localizadas conforme a los protocolos que emitan la Procuraduría y las Procuradurías Locales, en el ámbito de sus competencias, en apego al modelo de Protocolo Homologado que sea aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

El modelo de Protocolo Homologado deberá contener, al menos, los criterios a seguir para la búsqueda de las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, previendo las reglas diferenciadas para probable desaparición forzada de personas, desaparición por particulares y delitos del orden común, la búsqueda de mujeres, niñas, niños y adolescentes, migrantes nacionales y extranjeros, así como la no relacionada con hechos delictivos. Asimismo, establecerá las pautas de identificación forense y atención a víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 68**.- Para elaborar los protocolos a que se refiere el artículo anterior, la Procuraduría y las Procuradurías Locales deben considerar, entre otros, los elementos siguientes:

I. Instrumentos de investigación, consultas comunitarias, análisis de los actores involucrados, estudios comparativos de modelos o prácticas exitosas, referencias hemerográficas, y evaluaciones de impacto, entre otros;

II. Mapas de denuncias, victimización, incidencia delictiva y delincuencia georreferencial;

III. Estudios de agencias de cooperación y centros de investigación locales, nacionales o internacionales;

IV. La situación específica del grupo social al que se encuentra dirigido el protocolo específico;

V. Análisis de datos y estadísticas oficiales que muestren las tendencias históricas, y

VI. Las mejores prácticas internacionales y los avances de la ciencia.

**Artículo 69**.- Los protocolos de búsqueda deben estar diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, y deben contener los procesos de búsqueda inmediata que establezcan las acciones que las autoridades deben realizar dentro de las primeras setenta y dos horas a partir de la recepción del Reporte o denuncia.

**Artículo 70**.- En adición a lo dispuesto en el artículo anterior, los protocolos de búsqueda deben contener, al menos, lo siguiente:

I. Las acciones de búsqueda en el lugar de los hechos o del hallazgo;

II. El procedimiento para definir los perímetros en donde debe realizarse la búsqueda

III. Las diligencias ministeriales y policiales que deben realizarse relacionadas con la búsqueda;

IV. Los casos y mecanismos de coordinación con otras autoridades para realizar la búsqueda;

V. El procedimiento para identificar, localizar y entrevistar a personas y autoridades que puedan tener información que contribuya a la búsqueda;

VI. El procedimiento para consultar la información en los registros y bases de datos a que se refiere el artículo 61 de esta Ley;

VII. Los mecanismos para confrontar información con otros registros o bases de datos locales, nacionales o internacionales;

VIII. Los mecanismos de aplicación de recursos de todo tipo, necesarios para que la búsqueda sea exhaustiva;

IX. Las medidas para atender a personas en situación de vulnerabilidad;

X. El mecanismo para ingresar a personas a los programas de protección, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y las disposiciones análogas en las Entidades Federativas;

XI. Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales;

XII. Los mecanismos para mantener a los Familiares informados respecto de las acciones de búsqueda realizadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XIII. Los plazos y procedimientos para realizar la búsqueda, y

XIV. Los parámetros para racionalizar los recursos empleados en la búsqueda.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LOS REGISTROS

### SECCIÓN PRIMERA
### DEL REGISTRO NACIONAL

**Artículo 71**.- El Registro nacional es una herramienta del Sistema Nacional de Búsqueda que permite conocer en forma inmediata los casos de Personas Desparecidas y no Localizadas.

**Artículo 72**.- El Registro Nacional se conforma con las bases de datos de los registros de Personas Desaparecidas o no Localizadas con que deben contar la Federación y las Entidades Federativas.

**Artículo 73**.- La Procuraduría debe coordinar la operación del Registro Nacional, así como administrar el Registro Federal de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en términos de lo que establezca el Reglamento.

**Artículo 74**.- Los registros de la Federación y de las Entidades Federativas de Personas Desaparecidas y no Localizadas deben estar interconectados y en permanente actualización.

Para cumplir con sus fines de búsqueda, las Unidades Especializadas pueden consultar en cualquier momento el Registro Nacional. Las consultas que se realicen en cualquiera de los registros deben reportar la información contenida en los demás.

**Artículo 75**.- Los registros de Personas Desparecidas y no Localizadas de la Federación y de las Entidades Federativas deben contener, como mínimo, lo siguiente:

I. En relación con la persona que reporta la desaparición o no localización, salvo que sea anónima:

a) Nombre completo;

b) Edad;

c) Relación con la Persona Desparecida o no Localizada;

d) Registro federal de contribuyentes o clave única de registro de población;

e) Domicilio, y

f) Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con ella;

II. En relación con la Persona Desaparecida o no Localizada:

a) Nombre;

b) Edad;

c) Sexo;

d) Nacionalidad;

e) Clave única de registro de población;

f) Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la Persona Desaparecida o no Localizada;

g) Descripción morfológica, señas particulares y demás datos que permitan su identificación;

h) Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista;

i) Escolaridad;

j) Actividad ocupacional;

k) Pertenencia grupal;

l) Antecedentes judiciales;

m) Antecedentes médicos;

n) Antecedentes odontológicos;

o) Personas que pueden aportar muestras biológicas, y

p) Teléfonos, redes sociales y otros;

III. Los hechos relacionados con la desaparición o no localización;

IV. El nombre del servidor público que recibió el Reporte o denuncia;

V. El nombre del servidor público que ingresa la información al registro;

VI. El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y

VII. En caso de que hubiere investigación penal, el nombre de la autoridad encargada de dicha investigación.

Asimismo, los registros a que se refiere este artículo deben incorporar la información novedosa que resulte de las diligencias de búsqueda e investigación.

**Artículo 76.**- Los datos personales contenidos en el Registro Nacional deben ser utilizados exclusivamente con el fin de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida o no Localizada y esclarecer los hechos.

**Artículo 77**.- El Registro Nacional puede ser consultado de manera pública a través de la página electrónica que para tal efecto establezca la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La información pública debe contener, por lo menos, la información siguiente:

I. La información de la Persona Desaparecida o no Localizada a que se refiere la fracción II del artículo 75 de esta Ley;

II. La autoridad responsable de coordinar la búsqueda, así como sus datos de contacto, y

III. El Procedimiento a seguir en caso de contar con información que pueda contribuir a la localización de la persona.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DE LOS REGISTROS FORENSES

**Artículo 78**.- El registro Forense es una herramienta del Sistema Nacional de Búsqueda que tiene por objeto proporcionar apoyo a la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

El Registro Forense se conforma con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, los cuales deben estar interconectados en tiempo real.

**Artículo 79**.- Corresponde a la Procuraduría coordinar la operación y centralizar la información del Registro Forense, así como administrar el Registro Forense Federal, en términos de lo que establezca el Reglamento.

Corresponde a las Procuradurías Locales coordinar la operación de su respectivo registro forense, en términos de lo que establezcan los lineamientos a que se refiere el artículo 40 de esta Ley.

**Artículo 80**.- Los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las Entidades Federativas deben recabar información cientifica de los cadáveres y restos humanos no identificados, de conformidad con los protocolos a que se refiere el artículo 67 de esta Ley.

**Artículo 81**.- Los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las Entidades Federativas deben capturar en el registro forense que corresponda, en términos del artículo 79 de esta Ley, la información que recaben conforme al artículo anterior.

**Artículo 82**.- La autoridad encargada de la toma de muestras debe informar a la persona que suministra la muestra o a su representante legal el uso que le dará a la información que recabe y entregarle una constancia de la diligencia.

**Artículo 83**.- La persona que proporcione información para análisis pericial debe otorgar previamente su consentimiento por escrito, y tiene derecho a designar, a su cargo, a peritos independientes para que en su presencia se recabe la muestra.

Los peritos independientes a que se refiere el párrafo anterior deben contar con la certificación legalmente expedida por instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en la especialidad de que se trate el análisis pericial. Para tal efecto, los peritos deben solicitar la validación de sus conocimientos o experiencia ante la autoridad judicial o ministerial que corresponda, mismas que no pueden negarla injustificadamente.

La designación y aceptación de los peritos independientes, y los dictámenes periciales que éstos formulen deben cumplir las disposiciones de la legislación procesal penal aplicable.

**Artículo 84**.- Además de la información pericial útil para la identificación de una persona, el Registro Forense debe contar con una base de datos de información genética que contenga, como mínimo:

I. La información genética de los cadáveres o restos biológicos humanos cuya identidad es desconocida;

II. La información genética de los Familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o segundo grado en línea colateral, de las Personas Desaparecidas o no Localizadas, y

III. La información genética de terceras personas en los casos en que así lo requiera la autoridad ministerial o judicial que corresponda.

Las muestras para análisis pericial y su subsecuente incorporación al registro forense que corresponda en términos del artículo 79 de esta Ley, sólo pueden recabarse a las personas mencionadas en la fracción II del presente artículo con su aceptación expresa y por escrito.

**Artículo 85**.- La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede utilizarse en otras investigaciones cuando aporte elementos para la localización de una persona, cuando sea de utilidad para otros procedimientos penales seguidos por los delitos de desaparición forzada de personas o para el ejercicio del derecho de la víctima a obtener la reparación del daño.

**Artículo 86**.- La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede ser confrontada con la información que esté en poder de otras autoridades e instituciones y que pueda ser útil para identificar a una persona.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben establecer los mecanismos de colaboración necesarios para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior.

**Artículo 87**.- Los datos personales contenidos en el Registro Forense deberán ser tratados de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La obtención, administración, uso y conservación de información forense deben realizarse con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados.

El Reglamento establecerá el procedimiento para que, una vez identificada la Persona Desaparecida o no Localizada, los titulares de los datos personales soliciten su eliminación del Registro Forense.

## SECCIÓN TERCERA
## DE LA DISPOSICIÓN DE CADÁVERES DE PERSONAS

**Artículo 88**.- Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.

Cuando las investigaciones revelen la identidad del cadáver de la persona, el agente del Ministerio Público competente podrá autorizar que los Familiares dispongan de él y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios para continuar con las investigaciones o para el correcto desarrollo del proceso penal.

En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría de Salud.

**Artículo 89**.- La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben recabar las muestras necesarias para identificar un cadáver o resto humano antes de inhumarlo.

Una vez recabadas las muestras a que se refiere el párrafo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá autorizar la inhumación de un cadáver o resto humano no identificado. En caso de inhumación, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que ésta sea digna y en un lugar claramente identificado que permita su posterior localización.

**Artículo 90**.- Para efectos de lo dispuesto en esta Sección, la Procuraduría y la Secretaría de Salud, determinarán las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres, mediante lineamientos que deberán publicar en el Diario oficial de la Federación.

## SECCIÓN CUARTA
## DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

**Artículo 91**.- Los registros a que se refiere este Título deben estar diseñados de tal forma que:

I. No exista duplicado de registros;

II. Cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Procuraduría, y

III. Permitan la actualización permanente por parte de las Unidades Especializadas.

**Artículo 92**.- Además de lo establecido en el artículo anterior, la Procuraduría debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros a que se refiere este Título cuenten con las características siguientes:

I. Reflejen automática e inmediatamente cada registro en el Registro Nacional para efectos estadísticos;

II. Estén interconectados en tiempo real y su información esté respaldada;

III. Una vez ingresada la información de un Reporte o denuncia en el Registro Nacional, puedan realizar una búsqueda automática en las bases de datos referidas en el artículo 61 de esta Ley, y

IV. No cuenten con la posibilidad de eliminar registros.

La Procuraduría emitirá los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los Registros Forenses se interconecten en tiempo real.

## CAPÍTULO QUINTO
## DEL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO

**Artículo 93**.- El Consejo en materia de búsqueda de Personas Desaparecida y no Localizadas es un órgano ciudadano de consulta de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales.

**Artículo 94**.- EL Consejo está integrado por:

I. Tres Familiares;

II. Seis especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, y

III. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil que protejan los derechos e intereses de las víctimas y sus Familiares.

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados mediante convocatoria pública, de conformidad con lo que disponga el Reglamento.

**Artículo 95.**- Los integrantes del Consejo deben durar en su encargo dos años, prorrogables sólo por un período igual, y no pueden nombrar suplentes o representantes. Los integrantes del Consejo ejercerán su cargo en forma honorífica, y no deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño.

Los integrantes del Consejo deben elegir a su presidente por mayoría de votos, quien durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez.

El Consejo debe emitir sus reglas de funcionamiento.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo deben ser comunicadas al titular de la Procuraduría o titulares de las Procuradurías Locales, según corresponda, conforme a lo que determinen sus reglas de funcionamiento y en ningún caso serán vinculantes.

La Procuraduría debe facilitar las instalaciones y elementos indispensables para el desarrollo de las reuniones del Consejo.

**Artículo 96.**- El Consejo tiene las funciones siguientes:

I. Recomendar a la Procuraduría y a las Procuradurías Locales las acciones que deben implementar para acelerar o profundizar sus acciones;

II. Recomendar acciones para mejorar las capacidades de identificación forense de las instituciones encargadas de proveer servicios periciales para la impartición de justicia;

III. Sugerir la adopción de medidas adicionales que garanticen la seguridad de las víctimas, los Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, en términos del Capítulo Quinto del Título Cuarto de esta Ley.

IV. Proporcionar, previa solicitud de la Unidad Especializada que corresponda, asistencia técnica para la búsqueda e investigación de hechos relacionados con la desaparición o no localización de personas;

V. Acceder a la información pública contenida en el Registro Nacional y el Registro Forense, y

VI. Las demás que señale el Reglamento.

**Artículo 97.**- Las decisiones que el Consejo adopte son públicas, en apego a la legislación de transparencia y protección de datos personales.

## TÍTULO CUARTO
## DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 98**.- Para efectos de lo establecido en esta Ley, se entiende como víctima a la Persona Desaparecida o no Localizada, y a los Familiares de las mismas.

**Artículo 99**.- La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y atención, por sí mismas o en coordinación con otras instituciones competentes, en los términos del presente Título y en la Ley General de Víctimas.

### CAPÍTULO SEGUNDO
### DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN

**Artículo 100**.- Los Familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición o no localización, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en la Ley General de Víctimas, y conforme a lo dispuesto en este Título.

**Artículo 101**.- Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas en tanto las instituciones públicas competentes brinden la atención respectiva.

La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere el presente Título, en forma individual, grupal o familiar, según corresponda.

**Artículo 102**.- Cuando concluya el otorgamiento de las medidas a que se refiere este Capítulo, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben orientar a las víctimas que lo soliciten sobre los programas sociales en los que puedan resultar beneficiarias conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 103**.- Con independencia de lo previsto en la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva será competente para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas relacionadas con la probable comisión de un delito federal de desaparición forzada de personas y en los casos previstos en el artículo 107 de esta Ley.

**Artículo 104**.- Las Comisiones de Víctimas están facultadas para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas distintas a las mencionadas en el artículo anterior.

**Artículo 105**.- Si al momento de solicitar las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere este Título, no se desprende la naturaleza federal o local de la desaparición o no localización, la comisión de atención a víctimas ante quien se presente la víctima deberá proporcionar dichas medidas de ayuda, asistencia y atención.

**Artículo 106**.- Cuando durante la búsqueda o investigación exista un cambio de fuero, las víctimas deben seguir recibiendo las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere este Título por la comisión de atención a víctimas del fuero que corresponda.

**Artículo 107**.- La Comisión Ejecutiva puede otorgar las medidas de ayuda provisional a las víctimas a que se refiere esta Ley, que corresponda brindar a las Comisiones de Víctimas, siempre y cuando:

I. La Comisión de Víctimas a la que corresponda originariamente la atención de la víctima lo solicite por no tener capacidad de otorgar las medidas con sus recursos, una vez agotadas las instancias competentes para proporcionarlas, y

II. La Comisión Ejecutiva cuente con los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para tal efecto.

Sin perjuicio de que deberán otorgarse dichas medidas cuando se reúnan los requisitos a que se refiere este artículo, la Comisión Ejecutiva convendrá con las Comisiones de Víctimas, los términos y condiciones bajo los cuales estas últimas colaborarán en la tención y, en su caso, resarcirán los gastos que realice aquélla. Asimismo, dichos convenios contemplaran los mecanismos de coordinación y para compensar los gastos que, en su caso, incurran las comisiones de atención a víctimas en los supuestos de los artículos 105 y 106 de esta Ley.

**Artículo 108**.- La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para la atención de las víctimas a que se refiere esta Ley, tienen las atribuciones siguientes:

I. Planear, programar y dar seguimiento a las medidas de ayuda, asistencia y atención otorgadas a las víctimas;

II. Proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas, por sí misma o en coordinación con otras instituciones competentes;

III. Acompañar a las víctimas a lo largo del proceso de búsqueda o del proceso legal correspondiente, con el fin de que cuenten con una asesoría legal adecuada para la defensa de sus derechos;

IV. Solicitar a las instituciones que llevan a cabo la investigación de los delitos a que se refiere esta Ley, la información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones;

V. Solicitar información a la Unidad Especializada competente para mejorar la atención brindada a las víctimas y, en su caso, para facilitar su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas;

VI. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas de la Federación, de las Entidades Federativas y de los municipios, así como con organismos e instituciones de carácter social o privado, nacionales e internacionales, para la atención a las víctimas, con el fin de mejorar el cumplimiento de sus atribuciones;

VII. Establecer protocolos de atención a víctimas y brindar capacitación en esa materia a las autoridades que lo soliciten;

VIII. Generar, compilar y sistematizar la información derivada de los programas y mecanismos de atención a las víctimas, en términos de lo previsto en esta Ley y la Ley General de Víctimas;

IX. Promover la participación en materia de atención a víctimas de los sectores público, social y privado en las actividades a su cargo;

X. Establecer módulos para apoyar la debida atención a las víctimas;

XI. Participar en el desarrollo de redes de información sobre la atención a las víctimas, y

XII. Las demás que establezca esta Ley y otras leyes.

**Artículo 109**.- Las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia y con sujeción a los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con que cuenten, pueden complementar las medidas de ayuda, asistencia y atención que otorguen la 0Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas.

Las erogaciones para cubrir las medidas de ayuda, asistencia y atención que la Comisión Ejecutiva proporcione en el marco de esta Ley, podrán ser cubiertas con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas.

**Artículo 110**.- Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones económicas derivadas de las medidas que brinden las Comisiones de Víctimas.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA

**Artículo 111**.- Los Familiares pueden solicitar al juez que corresponda según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo que disponga la legislación civil de la Federación y de las Entidades Federativas.

**Artículo 112**.- Las leyes de la Federación y de las Entidades Federativas deben establecer el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, sin que el plazo para resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia exceda de seis meses a partir de iniciado el procedimiento.

El procedimiento para emitir la Declaración Especial de Ausencia deberá ser gratuito, en términos de lo que prevé este Capítulo.

Los procedimientos a que se refiere este Capítulo deben contemplar la posibilidad de emitir medidas provisionales durante el procedimiento.

**Artículo 113**.- La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad:

I. Reconocer y proteger la personalidad jurídica de la Persona Desparecida, y

II. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares de la Persona Desaparecida o no Localizada.

**Artículo 114**.- La Federación y las Entidades Federativas deben prever, al menos, los siguientes efectos de la Declaración Especial de Ausencia cuando resulte aplicable:

I. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida en relación con los hijos menores de edad o la designación de un tutor provisional cuando exista posibilidad de que ambos padres sean sujetos pasivos de los delitos establecidos en esta Ley, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;

II. Fijar los derechos de guarda y custodia de los menores de edad en los términos de la legislación civil aplicable;

III. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

IV. Fijar la forma y plazos para que los Familiares de la Persona Desparecida puedan acceder, a fin de atender sus necesidades y previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;

V. Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida, continúen gozando de los beneficios en materia de salud;

VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles o civiles en contra de la Persona Desaparecida o sus bienes;

VII. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, y

VIII. Proveer a la representación legal de la persona ausente cuando corresponda.

**Artículo 115**.- La Declaración Especial de Ausencia sólo tiene efectos de carácter civil, por lo que no produce efectos de prescripción penal ni constituyen prueba plena en otros procesos judiciales.

**Artículo 116**.- Las Unidades Especializadas deben continuar con la búsqueda e identificación de la Persona Desaparecida o no Localizada de conformidad con el artículo 57 de la Ley, así como con la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, aun cuando alguno de los Familiares haya solicitado la Declaración Especial de Ausencia.

**Artículo 117**.- Si la Persona Desaparecida o no Localizada declarada ausente es localizada con vida, ésta puede solicitar ante el juez que declaró la ausencia la recuperación de sus bienes en el estado en que se hallen. En este caso, la persona no puede reclamar frutos ni rentas.

Si la Persona Desaparecida o no Localizada declarada ausente es encontrada sin vida, los Familiares pueden solicitar al juez civil competente iniciar el procedimiento de sucesión, en términos de la legislación civil aplicable.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

**Artículo 118**.- Las víctimas del delito de desaparición forzada de personas tienen derecho a ser reparadas integralmente co0nforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 119**.- Para efectos de lo establecido en el artículo anterior, la reparación integral a las víctimas del delito de desaparición forzada de personas comprenderá, además de lo establecido en la Ley General de Víctimas, los elementos siguientes:

I. Medidas de satisfacción:

a) Construcción de lugares o monumentos de memoria;

b) Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas;

c) Recuperación de escenarios de encuentro comunitario, o

d) Recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante, y

II. Medidas de no repetición, que deben incluir la readscripción, suspensión o remoción de los servidores públicos investigados o sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso y previo desahogo de los procedimientos administrativos o judiciales que correspondan.

**Artículo 120**.- Las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, son responsables de asegurar la reparación del daño a la víctima del delito de desaparición forzada de personas cuando sean responsables sus servidores públicos o particulares bajo la autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de éstos. La Federación será responsable subsidiaria para asegurar, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas, la reparación del daño causado a la víctima del delito de desaparición forzada de personas, siempre y cuando la Entidad Federativa lo solicite por escrito por no contar con disponibilidad de recursos y se comprometa a resarcir a dicho Fondo en un plazo determinado. En caso de que el Fondo no sea resarcido, la Comisión Ejecutiva ejercerá el derecho de repetir contra la Entidad Federativa y contra quienes hayan cometido el delito.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

**Artículo 121**.- Las Unidades Especializadas, en ámbito de sus respectivas competencias, deben establecer programas para la protección de las víctimas, los Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal o las leyes análogas de las Entidades Federativas

**Artículo 122**.- Las Unidades Especializadas pueden otorgar como medida urgente de protección la reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo anterior, conforme a los procedimientos y con las autorizaciones aplicables.

**Artículo 123**.- Las Unidades Especializadas pueden otorgar, como medida de protección para enfrentar el riesgo, la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados, y demás medios de protección que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo 121 de esta Ley, conforme a los procedimientos y con las autorizaciones aplicables.

**Artículo 124**.- La incorporación a los programas de protección de personas a que se refiere el artículo 121 de esta Ley debe ser autorizada por los titulares de las Unidades Especializadas correspondientes.

**Artículo 125**.- La información y documentación relacionada con las personas protegidas debe ser tratada con estricta reserva y confidencialidad, según corresponda.

## TÍTULO QUINTO
## DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS

## CAPÍTULO PRIMERO
## DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 126**.- La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deberán coordinarse para implementar las medidas de prevención previstas en el artículo 129 de esta Ley.

Lo anterior con independencia de las establecidas en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 127**.- La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben administrar bases de datos estadísticas relativas a la incidencia de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 128**.- La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben realizar diagnósticos y deben implementar las acciones específicas de prevención a que se refiere el artículo siguiente, a partir de la información contenida en las bases de datos previstas en el artículo 127 de esta Ley.

**Artículo 129**.- La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben, respecto de los delitos previstos en esta Ley:

I. Llevar a cabo campañas dirigidas a fomentar la denuncia de los delitos;

II. Proponer acciones de capacitación a las instituciones ministeriales, policiales y periciales que tengan por objeto la adecuada investigación y sanción de los delitos;

III. Proponer e implementar programas que incentiven a la ciudadanía a proporcionar la información con que cuenten para la investigación de los delitos, así como para la ubicación y rescate de las Personas Desparecidas o no Localizadas;

IV. Promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales para fortalecer la prevención de las conductas delictivas;

V. Recabar y generar información respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en materia de prevención e investigación de los mismos;

VI. Identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos, así como hacer pública dicha información de manera anual;

VII. Proporcionar información y asesoría a las personas que así lo soliciten, de manera presencial, telefónica o por escrito o por cualquier otro medio, relacionada con el objeto de esta Ley, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos;

VIII. Reunirse, por lo menos una vez al año, para intercambiar experiencias que permitan implementar políticas públicas en materia de prevención de los delitos;

IX. Emitir un informe anual respecto de las acciones realizadas para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 130**.- Las Unidades Especializadas deben intercambiar la información que favorezca la investigación de los delitos previstos en esta Ley y que permita la identificación y sanción de los responsables.

**Artículo 131**.- La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben diseñar los mecanismos de colaboración que correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

**Artículo 132**.- La Procuraduría en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda debe diseñar y aplicar programas que permitan combatir las causas que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial referencia a la marginación y la desigualdad social.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA PROGRAMACIÓN

**Artículo 133**.- Los programas de prevención a que se refiere el presente Título deben incluir metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a servidores públicos.

**Artículo 134**.- La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal están obligados a remitir anualmente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos generados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estudios sobre las causas, distribución geográfica de la frecuencia delictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos previstos en esta Ley, así como su programa de prevención de los mismos.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA CAPACITACIÓN

**Artículo 135**.- Las Unidades Especializadas y la autoridad municipal que el titular del Ayuntamiento determine deben establecer programas obligatorios de capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a los principios referidos en el artículo 5 de esta Ley, para servidores públicos de Instituciones de Seguridad Pública y de seguridad nacional involucrados en la búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos.

**Artículo 136**.- La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar a sus servidores públicos conforme a los más altos estándares internacionales, respecto de las técnicas de investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere esta Ley, con pleno respeto a los derechos humanos.

**Artículo 137**.- La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben capacitar a sus servidores públicos, conforme a los más altos estándares internacionales, para brindar medidas de ayuda, asistencia y atención con un enfoque psicosocial para los delitos a que se refiere esta Ley.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben implementar programas de difusión a efecto de dar a conocer los servicios y medidas que brindan a las víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley, en términos de lo previsto en este ordenamiento.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el tercer párrafo del artículo 25; se DEROGA el Capítulo III Bis del Título Décimo conformado por los artículos 215-A a 215-D, y se ADICIONA un artículo 280-Bis al Título Décimo Séptimo, todos del Código Penal Federal.**

**ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 348, segundo párrafo; 350 bis 3, segundo párrafo; 350 Bis 4 y 350 Bis 5, de la Ley General de Salud.**

## TRANSITORIOS

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la emisión de los instrumentos a que se refiere el artículo Décimo transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y demás autoridades deberán cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales, además de los protocolos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, continuaran aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad.

**SEGUNDO.** Se abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**TERCERO.** El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

Las Entidades federativas deberán armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable.

**CUARTO.** Los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas que hayan sido cometidos antes de su entrada en vigor serán sancionados conforme a la legislación vigente al momento de su comisión. Lo anterior, sin perjuicio de la naturaleza de las conductas a que se refiere el artículo 7 de dicha Ley.

**QUINTO.** El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir el Reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, así como armonizar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos conforme a los dispuesto en el presente Decreto.

**SEXTO.** Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Procuraduría debe emitir los lineamientos a que se refiere el articulo 40 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Federal de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Dentro de los noventa días a que comience la operación del Registro Federal de Personas

Desaparecidas y no Localizadas, las Entidades Federativas deberán poner en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

**SÉPTIMO.** En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas a que se refiere el transitorio anterior, las Procuradurías Locales deberán incorporar en un registro provisional, electrónico o impreso, la información de los Reportes o denuncias recibidas conforme a lo que establece el artículo 75 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

La Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la información contenida en los registros provisionales a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

**OCTAVO.** Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá transferir a la Procuraduría General de la República las herramientas tecnológicas y la información que haya recabado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

Dentro de los sesenta días siguientes a que reciba la información a que se refiere el párrafo anterior, la Unidad Especializada de la Procuraduría deberá transmitir a la Unidad Especializada de cada Entidad Federativa la información de las Personas Desaparecidas o no Localizadas que correspondan al ámbito de su competencia.

Las Unidades Especializadas deberán actualizar el contenido del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, conforme a lo siguiente:

I. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que reciban la información, la Unidad Especializada que corresponda deberá recabar información sobre las personas inscritas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que correspondan a su ámbito de competencia, a fin de que dicha información esté apegada a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

II. En términos de la fracción anterior, las Unidades Especializadas que estén impedidas materialmente para actualizar la información dentro del plazo previsto, deberán publicar un padrón con el nombre de las Personas Desaparecidas o no Localizadas cuya información no haya sido actualizada, a efecto de que, dentro de los ciento veinte días siguientes, los Familiares y organizaciones de la sociedad civil proporcionen la información necesaria para realizar dicha actualización.

III. Una vez actualizada la información, la Unidad Especializada deberá ingresarla al registro que corresponda, a excepción de que la actualización revele que la persona fue localizada, en cuyo caso, se asentará en el Registro, y

IV. En los casos en que, a pesar de haber agotado la acción prevista en la fracción II de este artículo, la Unidad Especializada está materialmente imposibilitada para actualizar un registro, éste permanecerá con la anotación de actualización pendiente y será migrado, con ese carácter, al registro que corresponda.

**NOVENO.** El Registro Forense Nacional, el Federal y el de las Entidades Federativas comenzarán a operar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los tres meses siguientes a que inicie la operación de dichos registros, las autoridades que

posean información forense deberán incorporarla al registro que corresponda.

**DÉCIMO.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deberá emitir el modelo de Protocolo Homologado a que se refiere el artículo 67 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

Dentro de los noventa días siguientes a la emisión del modelo a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría y las Procuradurías Locales deberán emitir y aplicar los protocolos establecidos en el referido artículo 67 de la Ley, incluso en aquellos casos en los que el Reporte o denuncia se haya solicitado con anterioridad.

En tanto la Procuraduría y las Procuradurías Locales expidan los protocolos que les correspondan de acuerdo con los dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, continuarán aplicando lo dispuesto en las disposiciones y protocolos vigentes en la materia, siempre que no se opongan a los previsto en dicha Ley.

**DÉCIMO PRIMERO.** Las autoridades e instituciones que administran las bases de datos o registros a que se refiere el artículo 61 deberán establecer dichas bases de datos o registros en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**DÉCIMO SEGUNDO.** En las Entidades Federativas en las que no exista una comisión de atención a víctimas, las instituciones públicas competentes de la Entidad Federativa deberán brindar la atención a víctimas conforme a lo establecido en el Título Cuarto de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

En el supuesto establecido en el párrafo anterior, la solicitud a que se refiere la fracción I del artículo 107 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas deberá ser suscrita por el Secretario de Gobierno de la Entidad Federativa, correspondiente.

**DÉCIMO TERCERO.** El Consejo deberá estar instalado dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

**DÉCIMO CUARTO.** Una vez que, en términos de lo dispuesto en el Sexto transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas, la Comisión Ejecutiva y la Procuraduría y las Procuradurías Locales, suscribirán convenios de colaboración para la transmisión de información de las víctimas de desaparición al Registro Nacional de Víctimas.

**DÉCIMO QUINTO.** En un período no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Ejecutiva deberá llevar a cabo los actos necesarios para realizar las modificaciones orgánicas que sean indispensables para el cumplimiento de lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como al fideicomiso que administra los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

**DÉCIMO SEXTO.** Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, en los términos de la legislación aplicables, deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** La Procuraduría y la Secretaría de Salud emitirán los reglamentos a que se refiere el artículo 90 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de dicho ordenamiento.

**DÉCIMO OCTAVO.** Las Unidades Especializadas entrarán en funcionamiento dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

## III. ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS O PROCESO PÚBLICO DE DELIBERACIÓN PARA ANALIZAR SU SENTIDO Y ALCANCE

Las Comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, acordaron el 18 de febrero la celebración de tres audiencias públicas regionales para atender las Iniciativas presentadas ante el Senado de la República en torno a la expedición de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

El objetivo de las audiencias fue enriquecer el análisis técnico de dictaminación con base en la visión y experiencias de los familiares de víctimas y expertos de todos los Estados de la República. De este modo, profundizar en los dilemas que contenían las iniciativas presentadas ante el Pleno, así como abrir el espacio para la discusión especializada. Como consecuencia de lo anterior, se puso en práctica un ejercicio democrático en el que comparecieron personas expertas y sujetos propios de la propia ley para mostrar su postura de manera pública.

En fechas 26 de febrero, 9 y 14 de marzo, las Comisiones de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos realizaron Audiencias Públicas Regionales en los estados de Tabasco, Distrito Federal y Coahuila sobre la Ley Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

Los temas que fueron abordados durante las audiencias públicas, así como las personas que comparecieron en las mismas, en su orden y términos correspondientes, se contemplan en los programas de los foros realizados en las Audiencias Públicas Regionales aludidas. Eventos que, en seguida se detallan:

### PROGRAMA DE LA PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL SOBRE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS

**Sede: Universidad Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco**
**Viernes 26 de febrero de 2016**
**De 10:00 a 15:00 horas**

| INAUGURACIÓN |
|---|
| **Lic. Arturo Núñez Jiménez**<br>Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. |
| **Sen. Fernando Yunes Márquez**<br>Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. |
| **Sen. Angélica de la Peña Gómez**<br>Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. |
| **Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu**<br>Integrante de la Comisión de Seguridad Pública |

| REUNIÓN PLENARIA |
|---|
| **Tema Búsqueda** |
| **Maricela Orozco**<br>Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C. |
| **Lucía Díaz Genao**<br>Colectivo el Solecito Veracruz. |
| **Heidy Anabella Orozco Rivera de Polanco**<br>(Hermana de Hessmin Sharon Orozco desaparecido en la ruta migratoria), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. |
| **Karla Pérez**<br>Familiares de Xalapa. |
| **Tema Investigación** |
| **Araceli Salcedo**<br>Familiares Orizaba-Córdoba. |
| **Sara González**<br>Colectivo Xalapa por la Paz. |

| |
|---|
| **María Elena Gutiérrez**<br>Colectivo Buscando a Nuestros desaparecidos/as Veracruz. |
| **Itzia Navarrete**<br>Red Retoño. |
| **Tema Derechos de víctimas** |
| **Teresa de Jesús Jiménez**<br>Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes Junax Ko´tantik. |
| **Carlos Saldaña**<br>Colectivo Xalapa por la Paz. |
| **Antonieta Muñoz**<br>Colectivo Buscando a Nuestros desaparecidos/as Veracruz. |
| **Willy Arturo Hernández**<br>Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. |
| **Intervenciones genéricas** |
| **Fray Tomás González**<br>Albergue La 72 Tenosique, Tabasco. |
| **Ana Enamorado**<br>Movimiento Migrante Mesoamericano, México. |
| **Zita Loyo Castellanos**<br>Comité Cerezo México. |
| **Intervenciones finales** |
| **Lucía Díaz Genao**<br>Colectivo el Solecito Veracruz. |
| **Antonieta Muñoz**<br>Colectivo Buscando a Nuestros desaparecidos/as Veracruz. |
| |
| **Mensaje final a cargo de la Sen. Angélica de la Peña Gómez**<br>Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. |

## PROGRAMA DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL SOBRE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS

**Sede: Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República,**
**México, D.F.**
**9 de marzo de 2016,**
**De 10:00 a 15:30 horas**

| Hora | Actividad | Ponentes |
|---|---|---|
| **INAUGURACIÓN** | | |
| 10:00-10:10 | Palabras de Bienvenida | **Sen. Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia.** |
| 10:10 - 10:20 | Palabras de Bienvenida | **Sen. Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.** |
| 10:20-10:30 | Palabras de Bienvenida | **Sen. Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación.** |
| 10:30-10:40 | Palabras de Bienvenida | **Sen. Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.** |
| 10:40-11:00 | **Intervención de Familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.** | 1. Janahuy Paredes - Cofaddem<br>2. Grace Mahogany Fernández - Fundem<br><br>(cada participante cuenta con 7 minutos para su intervención) |
| 11:00-12:30 | **Panel Búsqueda**<br><br>• Panorama sobre la situación de la búsqueda.<br>• Propuestas de los familiares y OSCs sobre el tema.<br><br>Mecanismo transnacional de Búsqueda para las personas migrantes. | 1. Yolanda Moran - Fundem<br>2. Sara Patricia Rodríguez López - Cofaddem<br>3. Araceli Rodríguez - Colectivo Colibrí<br>4. Adriana Vaena - Los Otros Desaparecidos de Iguala<br>5. Emma Mora - Familias de Acapulco en Busca<br>6. María Antonia Melo Cadena - Fundem<br>7. Amalia Hernández - Red |

| | | |
|---|---|---|
| | | Eslabones Morelos<br>8. Yadira González - Desaparecidos Justicia<br>9. Jorge Verastegui - Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios |
| 12:30-13:45 | **Panel de investigación**<br><br>- Panorama general sobre la situación en el tema de investigación y propuestas de los familiares y OSCs. | 1. Juan Carlos Trujillo - Familiares en Búsqueda María Herrera<br>2. Manuel Ramírez - Red Eslabones Estado de México<br>3. Brenda Rangel - Desaparecidos Justicia<br>4. Graciela Villagómez - Red Eslabones Región Centro Norte<br>5. Luz Escorza - Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad<br>6. Carlos Moreno<br>7. Nancy Roset - Deudos y Defensores Por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos<br>8. Nadín Reyes - Participante de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada<br>9. Juan Carlos Gutiérrez - Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos |
| 13:45-14:45 | **Derechos de las víctimas**<br><br>• Panorama y propuesta de los familiares y OSCs sobre el tema. | 1. Ma. Guadalupe Aguilar Jauregui - Fundej<br>2. Judith Tapia León - Comité de familiares de Guerrero<br>3. José Serrano - Red Eslabones Distrito Federal<br>4. Tranquilina Hernández Laguna - Familiares de Morelos<br>5. María Herrera - Familiares en Búsqueda<br>6. Omar Plancarte - Red Eslabones Michoacán<br>7. Pascual de Jesús González - |

| | | |
|---|---|---|
| | | Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada<br>8. Chasel Colorado - Amnistía Internacional-México |
| 14:45-15:30 | **Cierre** | 1. Intervención de Martín Villalobos, representante de Familiares.<br>2. Intervención de Humberto Guerrero, Fundar. Centro de Análisis e Investigación<br>3. Conclusiones por parte de las y los Senadores integrantes de las Comisiones |

**PROGRAMA DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL SOBRE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS**

**Sede: Universidad Autónoma de Coahuila**
**Auditorio "Antonio Guerra y Castellanos"**
**Saltillo, Coahuila**
**14 de marzo de 2016**
**De 10:00 a 15:00 horas**

| Hora | Actividad | Ponentes |
|---|---|---|
| **INAUGURACIÓN** | | |
| 10:00-10:10 | Palabras de Bienvenida | Sen. Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación. |
| 10:10 - 10:20 | Palabras de Bienvenida | Sen. Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. |
| 10:20-10:30 | Palabras de Bienvenida | Sen. Luis Fernando Salazar Fernández. Senador por el Estado de Coahuila. |
| 10:30-10:40 | **Intervención de dos representantes de las organizaciones.** | 3. 1.- Martha Alicia Camacho Loaiza – Unión De Familares Desaparecidos De Sinaloa De Los Años 70. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 4. Gabino Gómez – Centro De Derechos Humanos De Las Mujeres - Chihuahua |
| 11:40-12:30 | **Panel Búsqueda**<br><br>• Panorama sobre la situación de la búsqueda.<br>• Propuestas de los familiares y OSCs sobre el tema.<br><br>Mecanismo transnacional de Búsqueda para las personas migrantes. | 10. Silvia Elisa Ortíz – Grupo Vida - Coahuila<br>11. Alma Rosa Rojo Medina – Voces Unidas Por La Vida<br>12. Elonia Mojuca Villa – Eslabones Tamaulipas<br>13. Mirna Nereida Medina Quiñones - Desaparecidos Del Fuerte - Sinaloa<br>14. María Guadalupe Pérez Rodríguez - Familias Unidas De Piedras Negras - Coahuila<br>15. Rebeca Gómez - Unidos Por Los Desaparecidos - De Baja California<br>16. Gerardo Naca Portillo - CDH Paso Del Norte - Ciudad Juárez<br>17. Michael Chamberlin Ruiz - CDDH Fray Uan De Larios - Coahuila |
| 12:30-13:45 | **Panel de investigación**<br><br>- Panorama general sobre la situación en el tema de investigación y propuestas de los familiares y OSCs. | 10. Virginia Buenrostro – Amores Nuevo León<br>11. Guillermo Mario Gutiérrez – Colectivo De Familiares Y Amigos De Desaparecidos Tamaulipas<br>12. Mónica Martínez – Zacatecanos Por La Paz -Zacatecas<br>13. Adrián Ciriaco Salvador – Campaña Nacional Contra La Desaparición Forzada.<br>14. Miguel Alfonso Millán Camacho - Unión De Familiares De Desaparecidos De Sinaloa De Los Años 70<br>15. 6.-Yolanda Navarro Escobedo – Eslabones- Nuevo León<br>16. 7.- Leticia Hidalgo Rea - FUNDCL<br>17. 8.- Humberto Guerrero - |

| | | |
|---|---|---|
| | | Fundar |
| 13:45-14:45 | **Derechos de las víctimas**<br><br>• Panorama y propuesta de los familiares y OSCs sobre el tema. | 9. Ivonne Rascón – CEDHEM Colectivos De Familias -Chihuahua<br>10. Edith Pérez Rodríguez- Enlaces Nacionales - San Luis Potosí<br>11. María del Carmen Ramírez- Fuundec – Fundem Laguna Coahuila<br>12. Olga Lidia Saucedo- Alas De Vida - Coahuila<br>13. Gabriela Reyes Tovar – Pacto De Mujeres - Chihuahua<br>14. Reynaldo Saldívar – CADHAC - Nuevo León<br>15. Rosario Cano Mascorro- Justicia Para Nuestras Hijas - Chihuahua<br>16. Jorge Verástegui González – CDDH Fray Juan De Larios - Coahuila |
| 14:45-15:30 | **Cierre** | 1. Diana Iris García FUUNDEC – FUNDEM Región Saltillo<br>2. Daniel Alejandro Durán Calderón - CDH Paso Del Norte - Ciudad Juárez |

Asimismo, con fecha 10 de noviembre de 2016, los Presidentes de las Comisiones dictaminadoras sostuvieron una reunión pública con el grupo denominado "Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México" , en la cual, el grupo entregó a los Senadores más de 17 mil firmas de apoyo por parte de la sociedad civil, en la cual solicitaban que la ley contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que se está trabajando en el Senado contemplara mecanismos y procedimientos de búsqueda específicos, estos mecanismos consistían en los siguiente:

1. La creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, que diseñe y ejecute los Programas Nacionales de Búsqueda, de exhumaciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Registro Nacional de Fosas y el Registro Nacional de Personas fallecidas no identificadas.

2. La creación de un Programa Nacional de Búsqueda, que dé prioridad a la búsqueda de personas en vida y responda a las desapariciones sin condiciones de temporalidad o circunstancias.

3. La creación de un Programa Nacional de exhumaciones e identificación de restos, que incluya líneas de acción para la identificación y registro de fosas comunes y clandestinas, resguardo de restos, e identificación de cuerpos y fragmentos humanos.
4. La asignación de presupuesto suficiente, para toda su implementación, pero especialmente para investigación búsqueda e identificación.

5. Fijar las responsabilidades a superiores jerárquicos, de modo que la investigación contemple a todos aquellos que por omisión permiten que sigan ocurriendo esos delitos.

6. La participación activa de familiares y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda, investigación e identificación, así como en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

7. Las salvaguardas necesarias para garantizar que los casos que actualmente están siendo investigados por autoridades federales, no sean declinados nuevamente a autoridades del fuero común.

8. Eliminar la distinción entre persona desparecida y persona no localizada, de manera que no haya distinciones que afecten la búsqueda.

El proceso de deliberación dentro del cual se llevó a cabo el estudio y análisis sobre los temas planteados, es un ejercicio innovador, abierto, público y democrático en el ámbito legislativo de nuestro país.

Estas Comisiones Unidas integraron en la dictaminación las valiosas e importantes aportaciones de quienes participaron a las audiencias públicas regionales, ya sea, de familiares de víctimas de estos delitos o bien de miembros de las organizaciones de la sociedad civil.

Lo que ocupa a estas Comisiones, es la creación de un documento legal sólido y completo que vaya acorde a los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, y que involucre a los tres órdenes de gobierno para lograr que el delito de Desaparición Forzada sea resuelto de manera conjunta y así, brindar y garantizar una mayor seguridad jurídica para todos los mexicanos.

De este modo, estas Comisiones dictaminadoras consideraron fundamental enriquecer las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Senado, con las consideraciones,

propuestas, argumentos técnicos y experiencias que la sociedad civil y los familiares de las víctimas de este delito nos presentaron.

## IV. CONSIDERACIONES

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial. No afecta, únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse el día de hoy en situaciones complejas de conflicto interno, como método de represión política de los oponentes o, inclusive, en democracias por funcionarios públicos y por particulares.

Las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad. Lastiman y suprimen los derechos humanos y las libertades fundamentales. Inclusive, su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.

La desaparición forzada constituye una violación múltiple, grave y permanente de derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable. Tal como los derechos a la libertad, la integridad personal, la vida y la personalidad jurídica, consagrados en nuestra Ley Fundamental y en diversas normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales suscritos por México.

Debe decirse que nuestro país no ha sido ajeno a esta problemática. La desaparición forzada representa una grave violación a los derechos humanos en la historia de nuestro país. Su ineficiente persecución, al día de hoy, genera que la ciudadanía tenga un sentimiento de incertidumbre. Particularmente de falta de seguridad jurídica sobre las vías institucionales para su prevención y erradicación. La desaparición forzada, lejos de ser un fenómeno del pasado, es una constante en todo el país.

Por ello, es indispensable que el Estado Mexicano asuma su deber de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas. Que tenga las instituciones adecuadas para la acción de "buscar", así como para investigar los hechos constitutivos de delito. Llevar a quienes sean responsables ante la justicia y asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones.

Debe señalarse que, en promedio, durante los años recientes, se calcula que 10 personas desaparecen al día en México.[7] Debemos recordar que el problema de desaparición forzada de personas es gravísimo, no solamente por la frecuencia con que el fenómeno se perpetra, sino por las consecuencias que tiene en las personas que sufren por este crimen y el impacto general en la sociedad.

La realidad se presenta como un escenario en el que es preciso construir soluciones para evitar las serias afectaciones que provoca a los derechos humanos la desaparición forzada de personas. El presente dictamen parte precisamente de esa premisa: crear

[7] Instituto Belisario Domínguez, *La Desaparición de Personas en México,* Notas Estratégicas, no. 2, enero 2017, Senado de la República, Dirección General de Investigación Estratégica, pág. 1

un instrumento legal efectivo, que logre los fines para los cuales fue concebido y que cumpla con las obligaciones del Estado Mexicano en la materia.

Con base en estos argumentos, estas Comisiones Unidas proceden a la Dictaminación de las Iniciativas de las Iniciativas de las que en el apartado anterior se dio cuenta.

Recordemos que en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, con relación a las diversas iniciativas de Reformas Constitucionales en Materia de Desaparición Forzada y de Tortura, se coincidió con el hecho de que el tipo penal contenido en el Código Penal Federal estaba lejos de contemplar todos los elementos típicos de este delito y que se encuentran plasmados en los instrumentos internacionales en la materia.

En este contexto, en dicho Dictamen se mencionó la circunstancia de que la desaparición forzada de personas no se encuentra tipificada como delito en todo el territorio nacional y en las Entidades Federativas. Esto es, su tipificación no es uniforme. En ese sentido los integrantes de las Comisiones Unidas estimaron pertinente que el Poder Legislativo Federal expidiera una ley general en la que, a partir del concepto de la concurrencia entre órdenes de gobierno para la ejecución del ordenamiento, se establezcan claramente las competencias de cada uno de dicho órdenes, a fin de prevenir, combatir y disuadir la comisión de este delito, que vulnera significativamente los derechos humanos.

A su vez, se alude a los principales instrumentos ratificados por el Estado mexicano, en materia de desaparición forzada de personas, de los cuales se extrae la necesidad de tomar medidas de carácter legislativo para el cumplimiento de sus propósitos. De ahí que, con fundamento en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideró importante adecuar la Carta Magna, con el propósito de garantizarlos derechos humanos de las personas. En razón de ello, se consideró impostergable tomar medidas contundentes para que el delito se encuentre adecuadamente previsto en el ordenamiento legal.

En tanto se refirió la vital importancia que en la Ley Fundamental se otorgue la facultad al Poder Legislativo Federal para la creación de un ordenamiento que homologue la descripción de las conductas acreedoras de pena y las sanciones imponibles. Lo anterior, con base en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, así como las demás medidas que deben adoptarse para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción del delito, teniendo en perspectiva los derechos de las víctimas y su atención integral.

Asimismo, se instauró la facultad del Congreso de la Unión para legislar en ordenamientos cuya naturaleza es la de leyes en torno a los tipos penales y las sanciones de desaparición forzada de personas, como para otras formas de privación de libertad contraria a la ley, así como para el establecimiento en la legislación general

que se emita con motivo de esas atribuciones del Poder Legislativo Federal de la creación, regulación y funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por otra parte, estas Comisiones Unidas deben destacar y hacer un énfasis especial respecto a la participación de la sociedad civil y de las familias de personas desaparecidas en los trabajos preparatorios de esta legislación final. Con base en un proceso deliberativo que tomó las iniciativas presentadas en este Senado, el proceso en ese sentido, el proceso fue dirigido a lograr un instrumento legal que atienda de manera eficaz sus preocupaciones, y coadyuvar a la solución del problema que representa la alta incidencia de este delito.

De tal suerte, debe destacarse que las preocupaciones de la sociedad civil se circunscribieron, de forma general, en los puntos que a continuación se enlistan. Se destaca también que estas Comisiones Unidas consideran estos puntos han sido debidamente atenidos en el instrumento que se propone:

- Mecanismo de búsqueda con participación de la sociedad y con una estructura encuadrada en todos los órdenes de gobierno;
- Identificación y registro de personas fallecidas y un debido registro de los hallazgos en fosas clandestinas;
- Una Comisión Nacional de Búsqueda, que opere sobre un mecanismo de búsqueda en tres sentidos de intervención:

1. Coordinación con todas las instituciones involucradas en la búsqueda.
2. Política pública de prevención.
3. Facultad de atracción..

- Búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas de inicio y bajo los mismos protocolos de búsqueda.
- Delimitación del Sistema Nacional y Establecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda como un organismo operativo.
- Coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, y en su caso el cruce de la información.
- Intervención de la Policía Federal en la investigación de casos locales.

A continuación, se procede a argumentar en favor del Proyecto de Decreto que estas Comisiones Unidas Proponen.

**1.-** El análisis concreto que se plantea en el presente dictamen considera en su totalidad las características de las cinco iniciativas que se allegaron en la materia ante el Pleno de este Senado, así como el proceso deliberativo que tuvo lugar en tres regiones del país. En dicha lógica, estas Comisiones Unidas estiman que, a partir del estudio integral de la problemática que se pretende prevenir, atacar y sancionar, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares debe incluir, como un mínimo, los siguientes principios, atribuciones,

directrices, descripciones típicas, derechos, instituciones y distribución de competencias y obligaciones de los tres órdenes de gobierno en la materia:

i) El texto final de la Ley requiere, respecto a su ámbito de aplicación, ser de orden público, de interés social y de observancia en todo el territorio general, de acuerdo a lo establecido por el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución General.

ii) Debe existir una distinción clara entre distintos delitos en la materia:

1) **el delito de desaparición forzada** (cometido por el o los servidores públicos o el particular o grupo de particulares que, con la autorización o el apoyo de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad, o a proporcionar la información disponible sobre la misma o su suerte o paradero. Lo anterior incluye, por la propia naturaleza de las acciones y omisiones, la responsabilidad penal del superior jerárquico;

**2) el delito de desaparición por particulares**, esto es, el cometido por la persona o grupo de personas que sin la autorización, el apoyo o aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o a proporcionar información sobre su suerte o paradero;

3) **delitos vinculados**, es decir, la tipificación de conductas que no constituyen propiamente el delito de desaparición forzada o por particulares, pero que se encuentran sumamente relacionadas con éstas y ameritan una sanción.

iii) Como características inherentes de los delitos, se estimó necesario que, primeramente, sean perseguidos de oficio. A su vez, deben tener el carácter de permanentes o continuos, en tanto la víctima esté privada de la libertad o sus restos no hayan sido localizados; asimismo, se considera que las conductas que configuran los elementos constitutivos de los tipos penales son, por sus notas antijurídicas especialmente graves, imprescriptibles.

iv) De forma específica, el cuerpo normativo debe contener la distribución de competencias y la manera en que deben coordinarse las acciones entre las autoridades de los distintos ordenes de gobierno, a efecto de prevenir y sancionar los delitos en la materia, así como los vinculados y sus sanciones respectivas.

v) Como un entramado fundamental, es necesaria la creación un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esto es, un conjunto de normas distributivas de competencias y obligaciones para las autoridades responsables de los tres ámbitos de gobierno que tendrán como responsabilidad la ejecución de una serie de actos que tendrán como objeto la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. En dicha búsqueda, con base en facultades bien establecidas, podrán participar los familiares de las víctimas.

vi) La legislación de mérito debe establecer un protocolo de búsqueda de personas eficiente en el cumplimiento de su objeto. La claridad de éste debe de ser una característica fundamental para que pueda operar de manera inmediata.

vii) El articulado debe establecer la creación de Fiscalías Especializadas en materia de investigación y persecución de los delitos en materia de desaparición de personas para la Federación, como para las Entidades Federativas.

viii) Deben garantizarse la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas, de sus familiares, como de las personas físicas allegadas a ellos que puedan sufrir un daño o pérdida en su esfera jurídica por la desaparición de una persona.

ix) Debe regularse un Registro Nacional, herramienta del Sistema Nacional de Búsqueda que deberá ser actualizado en tiempo real y que se deberá conformar con las bases de datos de los registros de personas desaparecidas con que deben contar la Federación y las Entidades Federativas.

x) Debe establecerse un Banco de datos forenses, a fin de concentrar toda la información forense contenida en los registros forenses de la Federación y de las entidades de la Federación y de las entidades federativas.

xi) Debe regularse un protocolo de disposición de cadáveres de personas. Esto es las directrices normativas que deben seguir las autoridades públicas cuando encuentren el cuerpo sin vida de una persona desaparecida.

xii) La Ley debe establecer la institución de un Consejo Nacional Ciudadano de búsqueda personas. Esto es, un órgano ciudadano propositivo y de auditoría del Sistema Nacional de Búsqueda.

xiii) De forma fundamental, el nuevo articulado debe reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas, así como establecer medidas de atención inmediata que les deben ser aplicadas a fin de que sean reparadas integralmente. Para ello, debe considerarse como víctimas a las personas desaparecidas, como a las personas físicas que hayan sufrido la anulación, el daño o menoscabo de sus derechos como consecuencia de la desaparición de un familiar o allegado.

xiv) Asimismo, debe regularse una Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, a fin de reconocer y proteger la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.

**2.-** A partir de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que de un análisis de las iniciativas presentadas ante el Pleno del Senado, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 14 de diciembre de 2015 reúne, de manera genérica, los conceptos, directrices, principios e instituciones fundamentales que las demás iniciativas presentan en sus articulados para regular la prevención y sanción de los delitos en materia de desaparición de personas. Lo anterior representa una base de la cual parte la presente dictamen.

No obstante, a partir de las discusiones, retroalimentación y complementación que se ha recopilado a través de los procesos de discusión del cuerpo normativo, se considera necesario ahondar en el contenido de las instituciones que el mismo consagra.

**3.-** Estas Comisiones Unidas proceden a analizar el articulado del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, desglosando cada unos de los rubros pertinentes, a fin de dilucidar la motivación necesaria para su creación:

## I. Disposiciones generales.

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en que la desaparición de personas es un problema de índole nacional que lastima de manera grave la unidad familiar y social, menoscaba el respeto de los derechos humanos y merma la posibilidad de que exista en Estado de Derecho constitucional y democrático.

Por lo anterior, es menester atender esta problemática de manera integral y coordinada con la responsabilidad de las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, sentando de este modo las bases para que dichos órganos cumplan con su responsabilidad.

Si bien es cierto que existen herramientas jurídicas y materiales que las autoridades pueden utilizar para mejorar el combate a la desaparición de personas y prevenir, en lo posible, la comisión de este tipo de conductas que lastiman gravemente al tejido social, consideramos que ésta es una tarea que debe estar en constante renovación a efecto de encontrar cada vez mejores formas de atender a la población que sufre este tipo de problemas.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, es necesario precisar que la Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional. Ello responde al mandato que se encuentra consagrado en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de lo antes mencionado, la Ley incluye válidamente dentro de su objeto los siguientes rubros:

1) Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley;

2) Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

3) Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

4) Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas;

5) Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección, y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable

6) Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y

7) Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones y planes de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

De conformidad con las atribuciones que se enlistan en parágrafos anteriores, es menester mencionar que, al ser una Ley de carácter general, corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias su aplicación; para su interpretación, es conveniente puntualizar que ésta deberá realizarse siempre en apego a los principios de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro persona.

Ahora bien, es conveniente tener en cuenta el marco conceptual que utiliza el instrumento legal sobre el que pesa el presente dictamen. En ese tenor, la definición de los conceptos siguientes tiene enorme relevancia, ya que a partir de éstos es posible comprender con integralidad la legislación que se estudia. Entre las definiciones se considera conveniente destacar las siguientes:

a) Banco Nacional de Datos Forenses: a la herramienta del Sistema Nacional que concentra los registros forenses de las Entidades Federativas y de la Federación; así como, otros registros que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

b) Comisión Ejecutiva: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

c) Comisiones de Víctimas: a las Comisiones de Atención a Víctimas de las Entidades Federativas;

d) Comisión Nacional de Búsqueda: a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas;

e) Comisiones Locales de Búsqueda: a las Comisiones de Búsqueda de Personas en las Entidades Federativas;

f) Consejo Ciudadano: al Consejo Nacional Ciudadano, órgano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

g) Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia;

h) Entidades Federativas: a las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

i) Fiscalías Especializadas: la Fiscalía Especializada de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales cuyo objeto es la investigación y persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas, la cometida por Particulares y la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

j) Grupo de Búsqueda: al grupo de personas especializadas en materia búsqueda de personas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que realizarán la búsqueda de campo, entre otras;

k) Mecanismo de Apoyo Exterior: El Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación es el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño, en el ámbito de su competencia, a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones del ordenamiento jurídico mexicano establecidas en esta Ley, coadyuvar en la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda y en la investigación y persecución de los delitos que realicen las Fiscalías Especializadas en coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, así como para garantizar los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las víctimas y ofendidos del delito. El Mecanismo de Apoyo Exterior funciona a través del personal que labora en los Consulados, Embajadas y Agregadurías de México en otros países;

l) Noticia: a la comunicación hecha por cualquier medio, distinto al reporte o la denuncia, mediante la cual, la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

m) Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

n) Persona No Localizada: a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito previsto en esta Ley;

o) Protocolo Homologado: al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas e investigación de los delitos materia de esta Ley;

p) Registro Nacional: al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra la información de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la Federación como de las Entidades Federativas;

q) Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas: al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas que concentra la información procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final forense tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen;

r) Registro Nacional de Fosas: al Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen;

s) Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

Por otro lado, debemos traer a colación aquellas directrices que se consideran fundamentales en la aplicación e implementación del contenido de este instrumento normativo. En ese sentido, se incluye la efectividad y exhaustividad; la debida diligencia; el enfoque diferencial, especializado y humanitario; gratuidad; igualdad y no discriminación; igualdad y no discriminación; interés superior de la niñez; máxima protección; máxima protección; no revictimización; participación conjunta; perspectiva de género; presunción de vida, y; verdad.

Asimismo, se considera pertinente hace mención de las reglas de supletoriedad aplicables. En ese tenor, se hace referencia directa al Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Víctimas y legislaciones civiles aplicables. Cabe destacar que, en atención a la propia naturaleza del conjunto normativo que se analiza, se considera pertinente reiterar la aplicabilidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país ha firmado y ratificado.

## II. Disposiciones generales de los delitos

Una parte medular de la Ley es, como se ha indicado *supra*, aquella que enuncia los tipos penales en la materia. No obstante, es menester crear un marco normativo de aplicación general respecto de las hipótesis normativas mencionadas. Dicha normatividad encuentra sustento en los instrumentos internacionales antes mencionados.

De manera concreta, se estima adecuado que los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares sean perseguidos de manera oficiosa, toda vez que su especial gravedad justifica la vigilancia continua del Estado al respecto. A su vez, se denota que los delitos tienen un carácter de continuas o permanentes, en razón de que las conductas que constituyen la materialidad de los delitos configuran una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos; lo anterior responde a la tutela de aquellas acciones que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del instrumento normativo y persisten aún después, puesto que ellas se siguen cometiendo. Sostener lo contrario equivaldría a privar de su efecto útil a la Ley mismo y las garantías de protección que establece, con consecuencias negativas para aquellos que pugnan por el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto en la medida en que no se determine el paradero de la persona o su suerte, el delito no cesa.

Respecto de lo antes enunciado, el Pleno de la SCJN ha establecido que el delito es de naturaleza permanente o continua, ya que inicia su consumación cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero o suerte; dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino.

A partir de las consideraciones anotadas, es pertinente tener en cuenta que el ejercicio de la acción penal, así como la imposición de la sanción que ello conlleve no están sujetas a prescripción; lo antes mencionado como respuesta a su carácter de violación grave a derechos humanos y en la inteligencia que no resulta adecuado que las personas puedan excusarse de la responsabilidad respectiva. Además, dicha directriz responde directamente al contenido del artículo IV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante CIDFP) y al del numeral 8 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (en lo sucesivo CIPTPDF).

En ese mismo tenor y derivado de las obligaciones consignadas en los instrumentos referidos, tampoco están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de terminación anticipadas del proceso. Asimismo, a modo de prevenir cualquier medida que pueda

generar impunidad en la comisión de esta grave violación a derechos humanos, se prohíbe cualquier medidas de amnistía, indulto o cualquier acción similar. Ello, se instaura como un mecanismo para que no se impida conocer la verdad y permitir que las víctimas sean efectivamente reparadas respecto del menoscabo sufrido.

Por otro lado, de acuerdo al contenido del artículo V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, así como lo consagrado en el artículo 13 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares no se considera delito de índole política. De tal suerte, se evita con ello que se rechacen las solicitudes de extradición.

De igual manera, de conformidad con el artículo VIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como el artículo 6 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la obediencia debida a órdenes o instrucciones de superiores no constituye una causa de exclusión de los delitos que contiene la Ley.

También, del contenido del artículo 1 de la CIPTPDF y del artículo X de la CIDFP, se desprende la obligación de excluir la posibilidad de invocarse circunstancias especiales, tales como el tiempo, estado o amenaza de guerra, o emergencias públicas como justificación o inculpabilidad para la comisión de estos delitos.

A su vez, dentro de las obligaciones analizadas se estima adecuadamente la aplicación de las reglas de autoría y participación previstas en la Legislación Federal Penal de corte sustantivo. En ese mismo tenor, se considera adecuado prever la aplicación del mismo ordenamiento cuando se trate de casos de tentativa punible.

Igualmente, el articulado de la legislación analizada prevé válidamente la obligación de no extraditar, expulsar, deportar o devolver a una persona cuando existan razones para suponer que podría ser sometida a una Desaparición Forzada. Lo anterior de conformidad con el artículo 16 de la CIPTPDF.

## III. Competencia de los Delitos.

A efecto de delimitar adecuadamente la intervención de la autoridad federal y de las autoridades locales en la investigación, persecución y sanción de los delitos que se prevén en la ley. De tal suerte, es pertinente establecer que las autoridades locales serán a quienes correspondan tales acciones, salvo en los supuestos siguientes donde corresponderá a ámbito federal:

- Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley;
- Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal

Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación;

- Exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional en la que se determine la responsabilidad u obligación del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley;
- El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.
- Durante la investigación se encuentren indicios que en la comisión del hecho participó una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada.

Además, debe destacarse la posibilidad de que la víctima pueda pedir al Ministerio Público de la Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder de forma fundada y motivada. Esta previsión se considera de fundamental carácter, toda vez que se inserta en una mecánica de participación de víctimas ante un posible escenario de impunidad en los órdenes locales.

Debe destacarse que el instrumento normativo sobre el que se dictamina, incluye una tajante delimitación y exclusión del fuero militar en la investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos que contiene, estableciendo que únicamente es competencia del fuero civil. Lo anterior responde al contenido del artículo IX de la CISDFP, que excluye jurisdicciones especiales, con particularidad la militar.

Asimismo, lo anterior responde a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando en cuenta la naturaleza del crimen. En ese sentido, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. La Corte IDH ha indicado en múltiples ocasiones que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, *a fortiori*, el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia.

## IV. Delitos de Desaparición Forzada de Personas.

Como ya se ha mencionado, una de las partes fundamentales que conforman el Proyecto de Ley General en análisis, es el establecimiento de los tipos penales

necesarios para la sanción del fenómeno. Bajo tal aseveración, el primero tipo penal se configura de la manera siguiente:

*"Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero."*

El tipo penal antes establecido tiene sustento en el contenido del artículo II de la CISDF y en el artículo 2 de la CIPTPDF; es decir, contiene los elementos exigidos por dichas disposiciones que a la letra establecen lo siguiente:

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas:

*"Artículo II. Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes."*

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las desapariciones forzadas:

*"Artículo 21. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley."*

Del análisis de los preceptos anteriores se desprenden los elementos que conforman, precisamente, el tipo penal que se ha plasmado. En ese tenor, debemos mencionar que la hipótesis normativa que se dictamina se configura mediante la articulación de los siguientes:

a) el servidor público o el particular con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público;
b) Privación de la libertad en cualquier forma a una persona, y;

c) seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

Los rubros antes indicados se considera que coinciden medularmente con las definiciones contenidas en los instrumentos internacionales; a su vez, se adecuan al marco que ha consagrado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior ha sido destacado en el caso Radilla Pacheco contra México, donde se plasmó lo siguiente:

*La caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se desprende no sólo de la propia definición del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado mexicano es parte desde el 9 de abril de 2002, los travaux préparatoires a ésta, su preámbulo y normativa, sino también de otras de deniciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que, asimismo, señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Además, la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias Cortes Constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada. (Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 140)*

De manera complementaria, vale la pena destacar que el proyecto contenía un elemento subjetivo específico en el tipo penal que se comenta, es decir, contenía un *fin* hacia el que debía de orientarse la conducta del sujeto activo. Sin embargo, dentro de los trabajos preparatorios y dentro de la discusión que tuvo lugar respecto de todos los tipos penales, se consideró innecesaria la manifestación de un elemento subjetivo específico, toda vez que ello sólo contribuía a la difícil configuración y complementación de la tipicidad.

En efecto, el modelo de tipo penal que se proponía consagraba un elemento subjetivo dentro de su configuración, que constituía un requisito adicional. Desde la óptica de la Dogmática Jurídico Penal, los elementos subjetivos se presentan como aquellos que conforman el contenido de la voluntad que rige la acción; en cambio, los elementos objetivos que son susceptibles de conocerse y apreciase mediante los sentidos. La vertiente subjetiva es, a diferencia de la objetiva, mucho más difusa y difícil de probar, ya que refleja una tendencia que se puede deducir, pero no observar[8]. Los elementos subjetivos genéricos serán el dolo y la culpa, aunque en ocasiones existirán elementos subjetivos específicos en la descripción típica que encaminaran la realización de una

[8] Muñoz Conde, Francisco. *Teoría General del Delito*. Editorial Temis. Tercera Edición. Bogotá 2013. Pág 51

acción hacia determinado fin.

Así, existen tipos penales en los que hay una hipertrofia del tipo subjetivo, es decir, en los que se requiere algo más que querer el resultado típico. En tanto, el elemento subjetivo distinto al dolo o específico puede ser de dos clases: a) unos son claras ultrafinalidades; es decir, tipos en los que se exige que la finalidad tenga una particular dirección que exceda el tipo objetivo. Son los tipos que exigen un para, con el fin de, con el propósito de, etc. b) Otros son los elementos del ánimo, o sea, actitudes o expectativas del agente que acompañan su acción y que se manifiestan objetivamente de alguna manera o que, al menos, son incompatibles con la ausencia de ciertos datos objetivos.[9]

Dicho lo anterior, el tipo penal que se analizan, incluía en su parte final los vocablos "con el fin de"; es decir, consagraba la sustracción de la protección de la ley como el objetivo mismo que busca el autor al realizar los demás elementos objetivos del tipo penal y no como uno de los distintos resultados materiales y/o núcleo del injusto que produce la desaparición forzada.

Este tipo de elementos son fácilmente cuestionados en los procesos penales; su acreditación representa un verdadero obstáculo para el Ministerio Público, ya que al igual que el dolo, únicamente pueden acreditarse de manera circunstancial. Así, si la acreditación del dolo supone un reto, la acreditación de un elemento subjetivo específico tiene una dificultad mayor. Para corroborar lo anterior, baste consultar los criterios siguientes que, a pesar de haberse conformado de acuerdo al anterior sistema de justicia, nos dan luz respecto a estos elementos:

*Registro No. 189 744; Tesis Aislada; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Mayo de 2001; Pág. 1117. I.6o.P.20 P .*

***CUERPO DEL DELITO. FORMAN PARTE DE ÉL LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS DISTINTOS AL DOLO.*** *De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos 168 y 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 15, fracción II, del Código Penal Federal, se desprende que los elementos subjetivos específicos distintos al dolo forman parte del cuerpo del delito, en primer término, por encontrarse contenidos en la descripción típica (cuando así se observe de la misma), al igual que los elementos objetivos y normativos; en segundo lugar, en virtud de que los aspectos que integran la probable responsabilidad versan exclusivamente sobre la participación dolosa o culposa del indiciado en el injusto, la existencia de las causas de licitud y las excluyentes de culpabilidad. En este orden de ideas, al dictarse el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, según sea el caso, esas ultraintenciones -como se les conoce en la dogmática penal-, deben analizarse por los tribunales como elementos del cuerpo del delito; sin embargo, al dictarse el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, los*

[9] Zaffaroni, Eugenio Raul, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro. *Manual de Derecho Penal. Parte General*, Editorial Ediar. 2ª edición. Buenos Aires. 2006. Pág. 423

*elementos subjetivos específicos distintos al dolo no requieren acreditarse a plenitud, toda vez que las excluyentes del delito que se actualicen por falta de dichos elementos, deben analizarse por el juzgador con posterioridad al dictado de tales determinaciones.*

*Registro No. 181 416; Tesis Aislada; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, Mayo de 2004; Pág. 517. 1a. LVI/2004.*

***TIPO PENAL. SUS ELEMENTOS SUBJETIVOS, DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBEN SER ANALIZADOS CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PENAL Y PARA EFECTOS DEL LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN (ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE MAYO DE 1999).*** *Si bien el precepto aludido establece que, no obstante lo dispuesto por la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, el Ministerio Público podrá ejercer la acción penal y que, en su caso, las excluyentes del delito que se actualicen por la falta de los elementos subjetivos del tipo serán analizadas por el juzgador después de que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, según corresponda, sin perjuicio del derecho del inculpado de acreditar ante el propio Ministerio Público la inexistencia de los mencionados elementos, ello no significa que se postergue su estudio hasta después de dictarse el auto de procesamiento, sino que establece que serán las causas de exclusión del delito, por falta de dichos elementos, las que serán analizadas por el juzgador después de que se haya dictado el auto citado; además, del proceso legislativo que dio origen a la actual redacción del artículo 134 referido, se concluye que el hecho de que el Ministerio Público al ejercer la acción penal y el Juez al momento de librar la orden de aprehensión, adviertan la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate, a que se refiere el artículo 15, fracción II, del Código Penal Federal, no los releva de la obligación de atender a los datos que acreditan, aun cuando no plenamente, los elementos subjetivos del tipo penal, puesto que de ninguna manera se está facultando a las autoridades que procuran e imparten justicia, para que dejen de analizar dichos elementos en cada una de esas fases procedimentales.*

*Registro No. 2 003 152; Tesis Aislada; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Pág. 2115. VII.1o.(IV Región) 5 P (10a.).*

***ROBO. PARA DICTAR EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR ESTE DELITO, DEBEN ACREDITARSE, AL MENOS EN FORMA PROBABLE O INDICIARIA, LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS DISTINTOS DEL DOLO, PUES HACERLO HASTA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONTRAVIENE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL INCULPADO A UNA DEFENSA ADECUADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).*** *En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 16/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,*

*Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página 429, de rubro: "ELEMENTOS DEL DELITO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE ANALIZARLOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."; la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para librar una orden de aprehensión, así como para dictar el auto de formal prisión se requiere comprobar la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal. Asimismo, estableció que para acreditar el cuerpo del delito es necesario motivar que en la causa penal se advierta la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo, sin necesidad de acreditar plenamente la forma de realización de la conducta; **los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera**, así como las demás circunstancias que la ley prevea. Por su parte, el artículo 202 del Código Penal para el Estado de Veracruz que prevé el delito de robo, no se concreta a exigir para su configuración el acto material del apoderamiento de un bien (mueble y ajeno), sino que exige que ese acto esté regido finalísticamente por el ánimo de dominio, lucro o uso. En ese sentido, aun cuando del artículo 178 del Código de Procedimientos Penales para esa entidad se colige que para el dictado del auto de plazo constitucional tiene que acreditarse la existencia del cuerpo del delito, el cual consiste en el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyan la materialidad del hecho previsto por la ley, ello no significa que el Juez responsable, al dictarlo, omita el estudio de los elementos subjetivos distintos al dolo, pues si conforme al criterio de la referida Sala, aquéllos no deben acreditarse plenamente, sí deben demostrarse al menos en forma probable o indiciaria; pues de lo contrario se dejaría al inculpado en estado de indefensión, ya que sería hasta la sentencia definitiva que se hiciera sabedor de la hipótesis volitiva en que se le atribuyó la comisión del delito, lo cual, sin duda, le impide preparar adecuadamente su defensa contraviniendo con ello ese derecho fundamental.*

Por lo anterior, se consideró modificar el tipo penal en comento, toda vez que representaría una carga probatoria considerable para el Ministerio Público tener que acreditar que una persona cometió la conducta descrita en el tipo con una finalidad especial de dejar a la víctima sustraída de la protección de la ley. Por ello, se reconfiguro el conformación de la hipótesis normativa y remover el elemento en comento.

Además, el tipo penal se ajusta a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho órgano sostuvo que los tratados internacionales en la materia firmados por el Estado mexicano **no pretenden determinar directamente los elementos constitutivos de responsabilidad penal individual, sino fijar elementos mínimos, más no límites,** que los Estados partes deben observar al momento de adecuar su derecho penal interno y, en ese tenor, concluyó que el tipo penal debe contemplar las siguientes conductas típicas mínimas: a) La privación de la libertad de una o más personas; □b) Seguida de una negativa a reconocer tal detención; □c) o del ocultamiento de la persona o personas; □d) o de una negativa de

brindar información sobre el paradero o la suerte de las personas.[10]□

Ahora bien, respecto al segundo de los tipos penales, se considera adecuada su inclusión. En ese sentido, es pertinente traer a colación el contenido de la descripción típica:

*"También comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, omita, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida.*

*Para los efectos de este artículo, se entenderá por persona detenida la persona privada de su libertad en cualquiera de sus formas, legal o ilegalmente."*

El tipo penal que se trascribió anteriormente se vincula directamente con el ocultamiento de la persona o la negativa de reconocer la privación de la libertad. En este sentido, se entrelaza una conducta de acción u omisión dolosa con los elementos siguientes:

a) Un servidor público o un particular con la aquiescencia de un servidor público;
b) Omitan, oculten o se niegue a dar información;
c) Sobre la privación de la libertad de una persona;
d) O sobre el paradero de una persona detenida
e) U oculte una persona detenida

En este sentido, el dispositivo de carácter penal se refiere directamente a propiciar o mantener dolosamente a una persona oculta. Además, se patentiza que es una conducta posterior a la privación de la libertad, que puede ser legal o ilegal, es decir, no guarda relación de origen o de conexión, sino que se erige como una acción u omisión autónoma.

Dicho lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, de acuerdo a los instrumentos internacionales antes mencionados, no se contempla como un requisito indispensable para tener por acreditada la responsabilidad penal de una persona, que la misma realice tanto la privación de la libertad, como su ocultamiento o la omisión de información.[11] En ese tenor, como ya se ha mencionado con anterioridad, la Primera Sala determinó que los tratados internacionales en la materia firmados por el Estado

[10] AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3165/2016, PRIMERA SALA DE LA SCJN, PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO VILLEGAS.

[11] Idem.

mexicano no pretenden determinar directamente los elementos constitutivos de responsabilidad penal individual, **sino fijar elementos mínimos, más no límites**.

Por tanto, de acuerdo a los elementos mínimos que se requieren para la configuración de del delito de desaparición forzada, es decir, la privación de la libertad que ya ha acontecido al momento en que se configura la conducta típica contenida en el tipo penal en comento, seguida de la negativa de reconocer tal detención o del ocultamiento de la persona o de una negativa de brindar información sobre el paradero o al suerte de la persona. En tanto, los elementos mínimos se encuentran debidamente observados en la redacción.

Dicho lo anterior, la redacción del tipo penal se enlaza directamente con aquellas conductas u omisiones cometidas con posterioridad a la privación de la libertad; a modo de ejemplificar lo anterior, podría plantearse una situación en la que una persona, tras haber sido privada de su libertad y recluida en un centro destinado para ello, sea desaparecida mediante la omisión u ocultamiento por parte de autoridades que se encuentren a cargo de tal centro. Dicha negativa de dar información, la omisión o el ocultamiento, no tiene vínculo directo con la privación de la libertad, sino que, una persona privada de su libertad, en un momento posterior, es ocultada o se omite dar información respecto a su privación.

De tal manera, no es necesario que un solo sujeto activo cometa él mismo dos o mas conductas correspondientes a las fases enunciadas; a su vez, tampoco se considera necesario que exista alguna forma de vinculación entre quien priva de la libertad y quien niegue información, sea o omiso en brindarla u oculte el paradero de la persona; específicamente, este tipo penal responde a esta situación.

Además, la Primera Sala estimó que el contenido de los instrumentos internacionales antes mencionados se dirige, por una parte, a ampliar el listado de sujetos activos que pudieran cometer el delito – no así a restringirlos– y, a su vez, se enfocan en robustecer los supuestos que constituyen las conductas típicas, , para incluir la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de las personas, lo cual permite una mayor protección para las víctimas de ese delito.[12]

En diverso aspecto, la tercera hipótesis normativa que se ha considerado necesario incluir en el instrumento legal de mérito, es aquella que se relaciona directamente con la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos:

*"Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable."*

En ese sentido, se estima adecuada la redacción del artículo analizado, toda vez que las reglas clásicas de Autoría y Participación, incluidas en la legislación sustantiva, son suficientes para la imputación de todos los sujetos que intervengan, en la medida de su

[12] Idem.

propia culpabilidad, en la comisión de las conductas tipificadas.

Luego, las tres conductas antes descritas cuentan con una punibilidad específica; dicho rango debe oscilar entre los 40 y 60 años de prisión. El parámetro de sanción que se propone se considera adecuado, en atención a la especial gravedad de las violaciones a derechos humanos que implica la desaparición forzada de una persona. Lo anterior tomando en cuenta las directrices internacionales que al respecto establecen la especial brutalidad de los actos que configuran esta conducta. En ese mismo sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que debe comprenderse la desaparición forzada como una violación múltiple de derechos humanos y un delito grave de naturaleza permanente.[13] De manera complementaria y como consecuencia lógica y adecuada de la comisión de este tipo de delitos, se impone la destitución e inhabilitación de servidores públicas, según corresponda, para el desempeño de cargos, empleos o comisiones.

Por otro lado, el artículo 25 de la CIPTPDF mandata tomar todas aquellas medidas penales que sean necesarias para la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada. En tales consideraciones, se considera adecuada la inclusión del tipo penal contemplado en el artículo 25 del ordenamiento que se dictamina. A saber, el texto de tal hipótesis es el siguiente:

*Se impondrá pena de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.*

*Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.*

De tal manera, se considera que la medida de carácter penal se encuentra plenamente justificada; máxime, al contemplarse como una obligación del Estado Mexicano el interés superior de la niñez y tomando como parámetro el estándar internacional que se ha mencionado.

En diverso aspecto, aunque estrictamente vinculado a las conductas y omisiones que se pretenden sancionar, se establecen distintas circunstancias que agravan las sanciones contempladas para los tipos penales. Bajo tal orden de ideas, el artículo 7 de la CIPTPDF contempla la facultad de establecer circunstancias agravantes,

[13] Idem.

especialmente en caso de deceso de la persona desaparecida, o para quienes sean culpables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidades u otras personas particularmente vulnerables.

A partir de dicho estándar, el establecimiento de agravantes se ha considerado fundamental para destacar la especial gravedad que tienen las conductas cuando se cometen respecto de ciertos grupos poblacionales o con consecuencias determinadas. Las sanciones podrán ser aumentadas hasta por una mitad cuando:

1) Durante o después de la desaparición, la Persona Desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito;
2) La Persona Desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer, persona con discapacidad o persona mayor;
3) La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer el delito;
4) La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para cometer el delito;
5) La persona haya sido desaparecida por su actividad como defensora de derechos humanos;
6) La persona haya sido desaparecida en razón de su labor como periodista;
7) La Persona Desaparecida sea integrante de las Instituciones de Seguridad Pública;
8) El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, o
9) Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

Ahora bien, respecto de las agravantes que no se vinculan directamente con grupos poblacionales en situación de especial vulnerabilidad, es pertinente mencionar que el primer supuesto se vincula directamente con el caso en que una persona sufre, como consecuencia de la desaparición forzada, una afectación a su salud que termina privándola de la vida, ya sea durante la desaparición como en aquellos casos en que la persona ha sido encontrada. Lo anterior responde, además del mandato contenido en la Convención mencionada, a la realidad expresada por las autoridades en la Procuración de Justicia, puesto que las personas encontradas presentan graves secuelas y, en muchos de los casos han terminado con algún padecimiento que termina con sus vidas; empero, recordemos que cuando la víctima aparece con vida, la conducta típica cesa. Por ello, si a consecuencia de esa conducta, con posterioridad se cuenta con este tipo de secuelas, es aplicable esta agravante.

Por otro lado, de acuerdo al artículo 7 de la CIPTPDF, se otorga a los Estados la facultad de establecer circunstancias atenuantes, en particular para los que, habiendo

sido partícipes en la comisión de una desaparición forzada, hayan contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida o hayan permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar a los responsables de una desaparición forzada. Luego entonces, se establece la disminución de las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas, conforme lo siguiente:

I) Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en una mitad;
II) Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una tercera parte;
III) Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una cuarta parte, y;
IV) Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una quinta parte.

## V. Desaparición cometida por particulares

Otro de los propósitos de la Ley que se analiza es la sanción de la desaparición que comenten los particulares sin la intervención de las autoridades. Estas Comisiones Unidas estiman adecuada la redacción de dicho tipo penal como sigue:

**- Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.**

Respecto a la punibilidad asignada al tipo penal de desaparición cometida por particulares, se considera adecuada la punibilidad de veinticinco a cincuenta años de prisión, toda vez que, aun cuando no es un delito que posea la especial gravedad de haberse cometido por autoridades, sí cuenta con una gravedad especial.

Además, a efecto de diferenciar la conducta de cualquier otra que pudiera implicar una privación de la libertad, se estimó procedente definir el *fin de desaparecer* de manera casuística, con el propósito de denotar que existirá tal intención cuando la privación de la libertad tenga la finalidad de ocultar su suerte o paradero, es decir, sustraerlo de la sociedad sin que nadie pueda encontrarlo o; tenga la finalidad de ocultar, destruir o desintegrar de forma parcial o total los restos de la víctima.

Por otra parte, estas Comisiones Unidas estiman necesario incluir una descripción típica para la omisión de entregar la nacido durante el periodo de ocultamiento. El texto es el siguiente:

*Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.*

*Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.*

En tanto, se estima que cuenta con justificación suficiente para poder vislumbrarse dicha punibilidad. Además, en atención a las obligaciones en materia de derechos humanos que posee nuestro país, especialmente en materia de la niñez, se contempla también la retención u ocultamiento de niñas y niños nacidos durante el periodo de ocultamiento, circunstancia que ya ha sido justificada *supra*. Además de lo anterior, se plantea de manera adecuada la remisión de estos casos respecto de las reglas de las atenuantes y agravantes de las sanciones.

## VI. Delitos Vinculados con la Desaparición Forzada de personas.

A efecto de sancionar el cúmulo de conductas que están vinculadas con los delitos anteriores, el Proyecto incorpora una serie de hipótesis normativas cuya justificación radica en evitar la impunidad de todos aquellos que contribuyan a la realización de las conductas descritas, pero que no tengan un intervención directa en la realización de alguno de los elementos descritos en el tipo penal. En tales consideraciones, se pretende sancionar a todos aquellos que se encargan de desechar los restos de un ser humano, con el objetivo de borrar los indicios que revelen la comisión de un de los delitos principales de esta Ley. El texto es el siguiente:

*A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión del delito de desaparición forzada de personas o de desaparición cometida por particulares, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.*

A su vez, se contempla la responsabilidad de aquellos que, una vez que se han desplegado las funciones de búsqueda de una persona reportada como no desaparecida, impidan un acceso ya autorizado a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas. El texto revisado es el siguiente:

*Se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las*

*autoridades competentes encargadas de la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas, a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas.*

De igual manera, se considera pertinente sancionar la conducta de aquellos servidores públicos que obstaculicen de forma intencionada o dolosa las acciones de búsqueda que la Ley contempla y aquellas que se centren en la investigación de los delitos previstos en la Ley. La redacción contemplada es la que sigue:

*Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior.*

A su vez, en relación al cúmulo de obligaciones que existen respecto de la niñez, se hace énfasis en aquellas conductas que se encuentran vinculadas al conocimiento del destino o paradero de una niña o de un niño que ha nacido durante el periodo de desaparición de la madre y no proporcione, dolosamente, información acerca de su paradero. El texto de la hipótesis normativa, misma que se encuentra justificada en la opinión de estas Comisiones Unidas:

*Se impondrá pena de tres a siete años de prisión a quien, conociendo el paradero o destino final de la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.*

Finalmente, es pertinente mencionar que la Ley que se dictamina es un reflejo del estándar internacional contenido en el numeral 25 b) de la CIPTPDF; dicho artículo establece la obligación de sancionar penalmente la falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños. De tal suerte, el precepto se establece de la siguiente manera:

*Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil días multa a quien falsifique, oculte o destruya documentos que prueben la verdadera identidad de una niña o niño nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas o de desaparición cometida por particulares durante el período de ocultamiento, con conocimiento de dicha circunstancia.*

*Se aplicarán las mismas penas a la persona que, dolosamente, utilice los documentos falsificados de una niña o niño a que se refiere el párrafo anterior, con el conocimiento de dicha circunstancia.*

## VII. Responsabilidades Administrativas.

Estas Comisiones Unidas consideran adecuado, por lógica sistemática del ordenamiento jurídico mexicano, que deba establecerse en el proyecto de ley que se dictamina que, aquellos servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones que este cuerpo normativa establecerá, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes competentes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Asimismo, si bien estas Comisiones Dictaminadoras comparten con el Poder Ejecutivo Federal que para los efectos de la ley se considerará grave el incumplimiento injustificado de cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, creemos que esta hipótesis de sanción agravada debe ser normativamente más específica.

Por ello, se añade en este rubro que se considerará como *grave* el incumplimiento injustificado, por parte de un servidor público, de cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas durante la investigación ministerial, pericial y policial. De igual modo, debe considerarse como *grave* el incumplimiento de los procedimientos establecidos en los protocoles correspondientes. Esto es, el incumplimiento de las acciones y procedimientos establecidos por la Procuraduría General de la República y las Procuradurías o Fiscalías de Justicia estatales para la búsqueda de personas.

## VIII. Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Estas Comisiones Dictaminadoras consideran fundamental la propuesta respecto a la creación de este sistema como instancia superior para diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley.

Para hablar de un verdadero y eficaz Sistema Nacional de Búsqueda, es necesario que éste tenga una estructura orgánica más robusta, que incluya una instancia de coordinación similar a lo que se ha llamado comisiones nacionales de búsqueda en otros países. En este sentido, se propone en el articulado de este dictamen el objeto e integración del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esto es, como un conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, que tienen como objeto el fortalecimiento de la rendición de cuentas del Estado mexicano.

De igual modo, se comparte la iniciativa respecto al establecimiento y desarrollo de una estructura orgánica que permita la distribución de competencias para la ejecución de

procesos y acciones por parte de autoridades federales, de las Entidades Federativas y municipales. Estas Comisiones Unidas consideran que la estructura orgánica propuesta permitirá una mayor coordinación interinstitucional entre los órganos del Estado mexicano.

En este contexto, el Sistema Nacional de Búsqueda se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y la cometida por particulares, a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno.

El Sistema Nacional estará presidido por la persona titular de la Secretaría de Gobernación; a su vez, estará conformado por los titulares de la persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, titular de la Procuraduría General de la República, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien presida el Consejo Ciudadano, titular de de la Policía Federal, titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, y la persona designada por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Lo anterior, toda vez que para hablar de un verdadero y eficaz Sistema Nacional de Búsqueda, es necesario que éste tenga una estructura orgánica robusta.

Las herramientas que dispone el Sistema Nacional para el cumplimiento de sus funciones son el Registro Nacional; el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Registro Administrativo de Detenciones; la Alerta Amber; el Protocolo Homologado y los protocolos previstos, y; otros registros necesarios para su operación. Además de lo anterior, se considera adecuada la creación de un Sistema Nacional que cuente con las atribuciones que se enlistan a continuación:

1) Expedir modelos de lineamientos que permitan la coordinación entre autoridades en materia de búsqueda de personas así como de investigación de los delitos previstos en la Ley. La legislación de las Entidades Federativas deberá prever los mecanismos para incorporar a su sistema jurídico los modelos a que se refiere este apartado;
2) Establecer, en coordinación con las autoridades federales y las entidades federativas, la integración y funcionamiento de un sistema único de información tecnológica e informática que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o no Localizadas; así como para la investigación y persecución de los delitos materia de la Ley;
3) Proponer acuerdos de colaboración entre sus integrantes y los del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el intercambio, sistematización y actualización de la información de seguridad pública que contribuyan a la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;
4) Dar seguimiento y evaluar la aplicación del protocolo homologado;

5) Evaluar permanentemente las políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;
6) Generar mecanismos para favorecer que las capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas permitan la búsqueda eficiente y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;
7) Generar los mecanismos y acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones y requerimientos que hagan los integrantes del Sistema Nacional para el mejoramiento de políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;
8) Emitir los modelos de instrumentos rectores para el funcionamiento y la coordinación con las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas;
9) Evaluar el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones;
10) Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses;
11) Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional de Fosas;
12) Recomendar a las Procuradurías Locales el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda, así como la evaluación de las mismas;
13) Proporcionar la información que sea solicitada por el Consejo Ciudadano para el ejercicio de sus funciones;
14) Atender y dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas materia de la Ley;
15) Dictar los lineamientos que regulen la participación de los Familiares en las acciones de búsqueda;
16) Emitir el Protocolo Homologado de Búsqueda, y
17) Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de la Ley que se dictamina.

**IX. Comisión Nacional de Búsqueda.**

Estas Comisiones Unidas consideran atinada la creación de este órgano. A partir del establecimiento del objeto, finalidad y contenido mínimo de procesos del Sistema Nacional de Búsqueda, se considera adecuado que se establezca un organismo que participan en la ejecución de los procesos establecidos por el Sistema Nacional de Búsqueda.

En tales términos, se incorpora un Capítulo Segundo al Título Tercero, relativo a la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y

seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

Se establece que cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda.

En este sentido, se propone que la Comisión Nacional de Búsqueda esté a cargo de una persona titular nombrada y removida por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Gobernación.

Asimismo, el proyecto establece que algunas de las atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda son las siguientes:

- Emitir y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda.
- Emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro. Nacional y coordinar la operación del mismo.
- Atender y formular solicitudes a las Instituciones de Seguridad Pública.
- Solicitar el acompañamiento de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno.
- Integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda.
- Solicitar informes a las Comisiones Locales sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda.
- Emitir los protocolos rectores que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado.
- Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
- Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializa.
- Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable.
- Acceder sin restricciones a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada.
- Solicitar a la Policía Federal que se realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
- Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
- Integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda.

- Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la coordinación de acciones de búsqueda y localización.
- Evaluar las políticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, así como vigilar su cumplimiento.
- Evaluar las políticas y estrategias para la identificación de personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas comunes y clandestinas, así como vigilar su cumplimiento.
- Establecer medidas extraordinarias y emitir alertas cuando en una Entidad Federativa o municipio aumente significativamente el número de desapariciones.
- Diseñar, en colaboración con las Comisiones Locales que correspondan, programas regionales de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
- Dar seguimiento y, en su caso, atender las recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos en los temas relacionados con la búsqueda de personas.
- Recibir la información que aporten los particulares en los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
- Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Solicitar a la Comisión Ejecutiva y a las Comisiones de Víctimas que implementen los mecanismos necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los familiares de las Personas Desaparecidas.
- Incorporar a los procesos de búsqueda relacionados con Personas Desaparecidas o No Localizadas a expertos independientes o peritos internacionales.
- Emitir conforme a los más altos estándares internacionales, los criterios de capacitación, certificación y evaluación del personal que participe en las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
- Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en todo el territorio nacional.

Se propone que los servidores públicos integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda deban estar certificados y especializados en materia de búsqueda, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional.

Adicionalmente, estas Comisiones dictaminadoras proponemos que los informes relacionados con los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda deben contener información del número de personas reportadas como desaparecidas víctimas de los delitos materia de esta Ley y No Localizadas; número de personas localizadas, con vida y sin vida;

cadáveres o restos humanos que se han localizado e identificado; circunstancias de modo, tiempo y lugar de la localización, así como los resultados de la gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Sistema Nacional, el avance en la actualización y adecuado cumplimiento de los protocolos, y el resultado de la evaluación sobre el Sistema Nacional.

Se establece que la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, para realizar sus actividades, deben contar como mínimo con un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto, un área de gestión y procesamiento de información, y la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

## IX. Consejo Nacional Ciudadano.

Estas Comisiones Unidas estiman pertinente la creación de un Consejo Ciudadano como órgano de consulta del Sistema Nacional. En ese sentido, dicha instancia pretende el involucramiento de la Sociedad Civil en los procesos y actividades que desarrolla el Sistema en materia de búsqueda de personas.

En ese orden de ideas, se considera conducente que el Consejo cuente con las funciones que a continuación se enlistan:

a) Proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda acciones para acelerar o profundizar sus acciones, en el ámbito de sus competencias;
b) Proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema Nacional para ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y forenses;
c) Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y herramientas materia de la Ley;
d) Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas;
e) Solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes;
f) Acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con las que cuenta el Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones;
g) Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de la Ley;
h) Dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se le reconocerá interés legítimo dentro de las investigaciones para la determinación de responsabilidades de servidores públicos relacionados con la búsqueda e

investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y

i) Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda;
j) Elaborar, aprobar y modificar la Guía de procedimientos del Comité.
k) Las demás que señale el Reglamento.

La integración del Consejo responde, precisamente, a su naturaleza. En tales términos se estima necesario y adecuado que se conforme por:

a) Cinco Familiares;
b) Cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley. Además, se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense, y
c) Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

En tanto, el proceso de designación de dichos integrantes es conveniente que sea llevado a cabo por el Senado de la República, siempre con la consulta de los familiares de organizaciones de familiares, defensores de derechos humanos, grupos de expertos en las materias de la Ley, entre otros. Asimismo, se considera viable que la duración del cargo sea de tres años, sin la posibilidad de reelección y sin desempeñar cargo público alguno. En ese mismo tenor, el cargo serán honorífico, es decir, sin recibir emolumento en contraprestación.

Ahora, se estima necesario consignar, de manera puntual, que las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Ciudadano deberán ser comunicadas a los integrantes del Sistema Nacional, y podrán ser consideradas para la toma de decisiones. Así, el integrante del Sistema Nacional que determine no adoptar las recomendaciones que formule el Consejo Ciudadano, deberá explicar siempre las razones para ello.

Respeto a la operación del Consejo, es necesario mencionar que es la Secretaría de Gobernación la encargada de proveer los insumos y recursos necesarias para que desempeñe sus funciones; es decir, los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos.

A su vez, es menester mencionar que no se limita al ámbito federal, sino que las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda.

De igual manera, es importante destacar que todas las decisiones que tome el Consejo serán públicas, en los términos de la legislación de transparencia y protección de datos respectiva.

Finalmente, se considera adecuada y necesaria la creación de un Comité para la evaluación y seguimiento de la acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda; su ubicación sistemática dentro del Consejo le permitirá simplificar y eficientar sus funciones, permitiendo centralizar y concentrar los procesos de evaluación. Entre sus facultades se enlistan las siguientes, mismas que se estiman necesarias y adecuadas para el cumplimiento de sus funciones:

a) Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión Nacional;
b) Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la Comisión Nacional;
c) Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Búsqueda Personas Desaparecidas;
d) Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, a la participación directa de los familiares en el ejercicio de sus atribuciones; y,
e) Las demás que determine el Consejo Nacional Ciudadano, en el marco de sus atribuciones.

## X. De los Grupos de Búsqueda.

Las Comisiones Unidas consideran necesario que la Comisión Nacional de Búsqueda cuente con Grupos de Búsqueda integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas. Además, es preciso puntualizar que se estima adecuado que dicha Comisión pueda auxiliarse por personas especializadas en búsqueda de personas, así como por cuerpos policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables.

En ese tenor, los Grupos de Búsqueda, para el adecuado cumplimiento de sus acciones, se estima que deben contar con las siguientes atribuciones:

- Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo Homologado y otros existentes.
- Solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de investigación específicos sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los hechos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades con que cuentan las Comisiones de Búsqueda para realizar acciones relacionadas con la búsqueda de personas previstas en la ley;

- Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas y No Localizadas y salvaguarde sus derechos humanos, y
- Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas.

Además de lo anterior, debe mencionarse que las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben contar y **garantizar** la disponibilidad inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho personal debe atender las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, según corresponda. Sumado a lo anterior, se estimó correcto que el personal referido, además de cumplir con la certificación respectiva, deba acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comisión Nacional.

## XI. Fiscalías Especializadas.

Una de las características fundamentales de la Legislación que se dictamina y que se valora es la concerniente a la investigación de los delitos en la materia. Para ello, se dispone la creación de Fiscalías especializadas, adscritas a la Procuraduría General de la República (por lo que respecta al ámbito federal) y a las Fiscalías o Procuradurías Locales (por lo que respecta a las Entidades Federativas), a fin de tener autoridades especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas, así como en el procesamiento de los delitos vinculados a esta Ley, con base en los más altos estándares internacionales.

Por razones de lógica constitucional y de armonización del sistema jurídico mexicano, estas Comisiones Dictaminadoras estimó idónea la denominación de "Fiscalías especializadas" en el articulado que se propone. Lo anterior es así ya que, con base en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la Procuraduría General de la República pasará a denominarse "Fiscalía General de la República". Este cambio estructural ha sido, igualmente, reproducido en buena parte por las Entidades Federativas.

Así, se incorpora un Capítulo relativo a las Fiscalías Especializadas; por lo que estas Comisiones dictaminadoras estimamos pertinente incluir que la Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Asimismo, se establece que los servidores públicos que integran las Fiscalías Especializadas deben cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia de la institución respectiva, tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, según corresponda.

En este mismo sentido, se establece que la Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar, conforme a los más altos estándares internacionales, a los servidores públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a las víctimas, sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas, aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros.

Se propone que La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tenga las siguientes atribuciones:

- Recibir las denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de esta Ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.
- Mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley.
- Dar aviso de manera inmediata, a través del Registro Nacional, a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos materia de esta Ley.
- Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda.
- Informar de manera inmediata a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Comisión Local de Búsqueda, según sea el caso, la localización o identificación de una Persona.
- Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes.
- Solicitar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados.
- Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones.
- Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos de los delitos materia de esta Ley.
- Recabar la información necesaria para la persecución e investigación de los delitos previstos en esta u otras leyes.

- Solicitar al Juez de Control competente las medidas cautelares que sean necesarias.
- Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas; así como a las instituciones y organizaciones de derechos humanos y de protección civil.
- Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de los servidores públicos especializados en la materia.
- Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas, en coordinación con las instituciones correspondientes, para poder hacer la entrega de cadáveres o restos humanos.
- Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de las exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas.
- Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los delitos previstos en esta Ley.
- Brindar la información que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas le soliciten para mejorar la atención a las Víctimas.
- Proporcionar asistencia técnica a las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas que lo soliciten.

Asimismo, se propone que el servidor público que sea señalado como imputado por el delito de desaparición forzada de personas, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las acciones de búsqueda o las investigaciones, podrá ser sujeto de medidas cautelares como la suspensión temporal de su encargo. El superior jerárquico puede adoptar las medidas administrativas y adicionales necesarias para impedir que el servidor público interfiera con las investigaciones.

Las Fiscalías Especializadas deberán generar criterios y metodología específica para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas.

Se propone que las autoridades de todos los órdenes de gobierno estén obligadas a proporcionar, en el ámbito de su competencia, el auxilio e información que las Fiscalías Especializadas les soliciten para la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley.

Adicionalmente, se establece que las personas físicas o jurídicas que cuenten con información que pueda contribuir a la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, están obligadas a proporcionarla a las Fiscalías Especializadas.

## XII. De la Búsqueda de Personas.

Estas Comisiones Unidas comparten, en términos generales, la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el procedimiento de búsqueda. Por ello, se incorpora un Capítulo relativo a la búsqueda de personas, así como una sección primera referente a la solicitud de búsqueda; respecto de este rubro, las Comisiones dictaminadoras proponemos que la búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados.

Por estas razones, las Comisiones Unidas proponemos que la búsqueda a que se refiere la presente Ley se realice de forma conjunta, coordinada y simultánea por la Comisión Nacional y las Comisiones Locales. Asimismo, se establece que los mecanismos de búsqueda deberán agotarse totalmente hasta que se determine la suerte o paradero de la persona.

Asimismo, el proyecto establece que cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una Persona Desaparecida o No Localizada mediante:

- Noticia;
- Reporte; o
- Denuncia.

El Reporte puede realizarse las veinticuatro horas del día, todos los días del año, a través de cualquiera de los siguientes medios:

- Telefónico.
- Medios Digitales.
- Presencial.
- Tratándose de personas que no residen en el territorio nacional, a través de las oficinas consulares o embajadas de México en el extranjero.

Estas Comisiones dictaminadoras estiman pertinente señalar que cuando se trate de una Noticia, las autoridades que no pertenezcan a la Comisión Nacional o a las Comisiones Locales y que tengan conocimiento de ésta, deben recabar los datos mínimos que se desprendan de la Noticia y transmitir la información de manera inmediata a la Comisión correspondiente.

De este modo, estas Comisiones dictaminadoras proponemos que la autoridad que recabe la denuncia, Reporte o Noticia debe transmitirlo inmediatamente, a través de cualquier medio tecnológico o de telecomunicación, a la Comisión o Comisiones que resulten competentes en términos de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, se encuentra obligada a aplicar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización.

Las autoridades que reciban la denuncia, el Reporte o Noticia deberán implementar, inmediatamente, las acciones de búsqueda que les correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo correspondiente.

Adicionalmente, se establece que la Comisión Nacional o la Comisión Local que corresponda reciba un Reporte o Noticia de una Persona Desaparecida, debe ingresar de inmediato la información correspondiente al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y generar un folio único de búsqueda, el cual debe contener como mínimo la información sobre la Persona Desaparecida o no Localizada a que hace referencia el artículo 79 de la Ley, y el nombre del servidor público de la Comisión o autoridad que recibió la Noticia, Reporte o denuncia.

Asimismo, en el articulado que proponemos estas Comisiones Unidas consideramos que la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda deben actualizar constantemente el expediente de búsqueda, para lo cual puede solicitar, y debe proporcionar, información a los Familiares en los términos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Estas Comisiones dictaminadoras hemos estimado necesario incluir que la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente iniciará la búsqueda de inmediato e informará sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando considere que la desaparición de la persona se debe a la comisión de un delito.

Además, las Comisiones planteamos que la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe instrumentar acciones de búsqueda inmediatamente, conforme al Protocolo Homologado, el cual incluirá, entre otros, el cruce de la información ingresada al Registro Nacional con los registros o bases de datos a que se refiere el artículo 88 de esta Ley. Asimismo, al momento de iniciar la búsqueda, debe informar a los Familiares sobre la posibilidad de canalizarlos a la autoridad de atención a víctimas que corresponda, de conformidad con la legislación en materia de víctimas.

Asimismo, se propone que la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe asegurar la existencia de mecanismos eficientes para que los Familiares y sus representantes siempre tengan acceso a los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda, y puedan proponer acciones de investigación para la búsqueda y localización de la persona.

En este mismo sentido, proponemos que la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe implementar mecanismos para que los Familiares tengan conocimiento del resultado de las acciones de búsqueda, las diligencias, los indicios, evidencias y pruebas que surjan de los mismos.

De este modo, las Comisiones dictaminadoras estimamos conducente que durante la búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda

correspondiente presumirá que la Persona Desaparecida o No Localizada, se encuentra con vida.

Adicionalmente, se propone que a efecto de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida o No Localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe consultar de manera periódica y exhaustiva las bases de datos o registros de hospitales, centros de Desarrollo Integral para la Familia, centros de salud, centros de atención de adicciones y rehabilitación, centros de detención y reclusorios a cargo del sistema penitenciario; registros de los centros de detención administrativos; Servicios Médicos Forenses, albergues públicos y privados, panteones, estaciones migratorias, terminales de autotransporte terrestre, aéreo y marítimo, y os demás registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización e identificación de las personas.

El proyecto establece que si en cualquier momento durante la búsqueda la persona es localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe, como mínimo: dar aviso a la Fiscalía Especializada que corresponda; dar aviso inmediato a la autoridad competente en materia de atención a víctimas; aplicar el procedimiento correspondiente a la identificación de identidad regulado en el Protocolo Homologado.

Una vez identificada, declarar localizada a la persona y notificarlo a quien solicitó la búsqueda, a sus Familiares o, en su caso, a la persona que ésta designe; en caso de que se localizara sin vida a la persona, se deberá aplicar los protocolos para el Tratamiento e Identificación Forense y el de Notificación y Entrega de restos a Familiares y actualizar el Registro Nacional.

Estas Comisiones dictaminadoras proponemos que las autoridades involucradas en la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, deben asegurar la cadena de custodia de la información e indicios, dando vista inmediata a la Fiscalía Especializada para su procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

## XIII. Protocolos.

Estas Comisiones Unidas comparten la propuesta respecto de el establecimiento de un "protocolo" emitido por las procuradurías de justicia de las Entidades Federativas como de la Procuraduría General de la República para la búsqueda de personas. En ese tenor, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos

correspondientes.

En tanto, será el Sistema Nacional la instancia la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda; mientras tanto, corresponderá a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la emisión del Protocolo Homologado de Investigación.

A efecto de dar a la Comisión Nacional de Búsqueda las intervención necesaria, se estima condecente que emita su opinión previo a la elaboración de los protocolos, que deberán siempre contar con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos. Así, el contenido de los Protocolos versará respecto de los siguientes rubros, mismos con los que se coincide por su pertinencia:

**a)** Las formas en las que las autoridades recibirán el Reporte, denuncia o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada;
**b)** Los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, incluidos en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares;
**c)** Las acciones de búsqueda en el lugar de los hechos o del hallazgo;
**d)** El procedimiento para definir los polígonos en donde debe realizarse la búsqueda;
**e)** El mecanismo de búsqueda inmediata, el cual deberá considerar la intervención de las autoridades desde el momento que se recibe el Reporte denuncia o Noticia de hechos de la desaparición, partiendo del supuesto de que la víctima se encuentra con vida;
**f)** Los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial para buscar y localizar con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;
**g)** Los procedimientos de búsqueda e investigación específicos para niños, niñas y adolescentes;
**h)** Los procedimientos de búsqueda e investigación para desapariciones cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos políticos;
**i)** Los procedimientos de búsqueda y localización de personas migrantes, sin importar su calidad migratoria, que hayan desaparecido durante su estancia en el país, conforme los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior;
**j)** Los procedimientos de Actuación e Identificación Forense, que contendrá como mínimo los procedimientos para la localización, recuperación e identificación forense, con los criterios de actuación en antropología, odontología forense, autopsia médico legal, entre otros;
**k)** El mecanismo de notificación a Familiares y acciones de investigación a realizar cuando se ha localizado con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;
**l)** Los procedimientos para notificar y entregar de restos a Familiares de personas localizadas sin vida;
**m)** Los mecanismos de coordinación con otras autoridades para realizar la búsqueda y la investigación;
**n)** El proceso para levantar el cuestionario de información ante mortem con Familiares, personas allegadas y autoridades que puedan tener información que contribuya a la

búsqueda, localización e identificación;

o) El procedimiento para consultar la información en los registros y bases de datos;
p) Los mecanismos para confrontar información con otros registros o bases de datos locales, nacionales o internacionales;
q) El procedimiento para entrevistar a autoridades y personas que puedan tener información que contribuya a la búsqueda;
r) El mecanismo para ingresar a personas a los programas de protección, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y las disposiciones análogas en las Entidades Federativas;
s) Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales; y para la difusión del perfil de la Persona Desaparecida o No Localizada;
t) Las medidas para atender a personas en situación de vulnerabilidad;
u) Los mecanismos para mantener a los Familiares informados respecto de las acciones de búsqueda realizadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
v) Los plazos y procedimientos para realizar la búsqueda,
w) Los procedimientos para la participación de los Familiares en la búsqueda e investigación, y
x) Los criterios para definir las acciones óptimas para la búsqueda y racionalizar los recursos empleados en la búsqueda.
y) Aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley.

En el tenor de las consideraciones anteriormente apuntadas, es pertinente mencionar que para elaborar y actualizar los protocolos a que se refiere el presente capítulo, se debe considerar, entre otros, instrumentos de investigación, consultas comunitarias, análisis de actores, practicas exitosas, prácticas internacionales, avances de la ciencia, circunstancias específicas de grupos sociales, estadísticas, entre otros.

## XIV. Del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Estas Comisiones dictaminadoras coinciden respecto de la importancia de contar con un Registro Nacional como una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación. De tal suerte, se estima pertinente que, para su conformación, se recabe la información en posesión de las autoridades federales y locales. Se atribuye a la Comisión Nacional la coordinación y operación del Registro Nacional.

En cuanto a las Procuradurías Locales, se precisa que será su obligación recabar la información necesaria para alimentar el Registro Nacional; a su vez, deben proporcionar dicha información de forma oportuna a la Procuraduría.

Como mecanismo eficaz, debe esta interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación que prevé el instrumento respecto del que dictamina; asimismo, debe contar con información actualizada en tiempo real.

Cabe destacar que estas Comisiones Unidas estimaron necesario recoger las observaciones de la sociedad civil respecto a los casos en que se haya registrado como desaparición cometida por particulares y se encuentre evidencia de que fue desaparición forzada, deberá cambiarse el estatus en el Registro Nacional, en el federal y en los registros de las Entidades Federativas.

En cuanto a la información con que debe contener, se estiman necesarios los datos siguientes:

**I.** En relación con la persona que reporta la desaparición o no localización, salvo que sea anónima:

- **a)** Nombre completo;
- **b)** Sexo;
- **c)** Edad;
- **d)** Relación con la Persona Desaparecida;
- **e)** Clave Única de Registro de Población o cualquier documento de identificación oficial;
- **f)** Domicilio, y
- **g)** Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con ella;

**II.** En relación con la Persona Desaparecida o no localizada:

- **a)** Nombre;
- **b)** Edad;
- **c)** Sexo;
- **d)** Nacionalidad;
- **e)** Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona, videos u otros medios gráficos;
- **f)** Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos que permitan su identificación;
- **g)** Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista;
- **h)** Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;
- **i)** Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación oficial;
- **j)** Escolaridad;
- **k)** Ocupación al momento de la desaparición;
- **l)** Pertenencia grupal o étnica;
- **m)** Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o

equipos;

n) Historia clínica, dental, cirugías, y demás datos que permitan su identificación;
o) Estatus migratorio;
p) Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles;
q) Información sobre toma de muestras biológicas a familiares y perfiles genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses;
r) Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco Nacional de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro, y
s) Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar con el paradero de la Persona;

**III.** Los hechos relacionados con la desaparición o no localización, así como si existen elementos para suponer que está relacionada con la comisión de un delito;
**IV.** El nombre del servidor público que recibió el Reporte, denuncia o Noticia;
**V.** El nombre del servidor público que ingresa la información al registro;
**VI.** El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y
**VII.** El rubro o registro de la carpeta de investigación que indique el delito por el que se inició y el nombre de la autoridad ministerial encargada de dicha investigación.

Además, al momento en que la autoridad competente genere un registro debe de asignar un folio único que deberá proporcionar a la persona que realizó el Reporte, denuncia o Noticia. Se considera importante destaca que el personal que lleve a cabo las entrevistas para la obtención de los datos, debe contar con la adecuada capacitación psicosocial.

También debe señalarse como adecuada la facultad de los Familiares respecto de la información que aporten para el Registro Nacional, en relación al derecho a manifestar que dicha información sea utilizada exclusivamente para la búsqueda e identificación de la Persona Desaparecida o No Localizada.
Finalmente, se estima conducente y estas Comisiones Unidas coinciden en que el Registro Nacional pueda ser consultado en su versión pública, a través de la página electrónica que para tal efecto establezca la Procuraduría General de le República, de conformidad con lo que determine el protocolo respectivo y las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

## XV. Registro Nacional de Personas Fallecidas No identificadas y No Reclamadas.

Estas Comisiones Unidas coinciden con la propuesta respecto de la creación del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. Dicha herramienta se encontrará a cargo de la Procuraduría y formará parte del Banco Nacional de Datos Forenses; además, es pertinente que contenga información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior identificación.

Así, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas se integra con la información proporcionada por las autoridades competentes la Federación y las Entidades Federativas. Se propone entonces que el objetivo de este sea Registro Nacional concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de los familiares de personas fallecidas no reclamadas.

Respecto de su contenido, el articulado propone como mínimo el siguiente contenido:

- Información homologada sobre los datos del cadáver o los restos, la ropa, calzado y otras prendas u objetos. También, cuando sea posible, señas particulares como tatuajes, lunares y cualquier otro dato que permita la identificación;
- Informe homologado sobre necropsia médico legal y dictámenes, antropología forense, odontología forense, dactiloscopia, genética forense, entre otras, así como las fotografías del cadáver o los restos;
- Información sobre el lugar, la fecha y las circunstancias de la localización y recuperación del cadáver o los restos. En caso de provenir de una exhumación se generará también la información arqueológica forense y otra información relevante;
- Información sobre la inhumación o destino final del cadáver o los restos;
- Información que se desprenda de la cadena de custodia de los informes y el tratamiento del cadáver o los restos;
- Datos de la carpeta de investigación, averiguación previa, Noticia o acta circunstanciada vinculada al hallazgo;
- En caso de un accidente, una catástrofe o cualquier otra situación en donde exista un número de víctimas en lugar determinado, se deberá incluir la información disponible sobre ese evento;
- Datos sobre las personas identificadas no reclamadas, tales como su nombre, fotografía, lugar de destino final y, cuando se requiera conforme, al Protocolo Homologado, el informe forense multidisciplinario en que se confirma la identificación, y
- Lugar donde se encuentra el soporte documental de la información vertida en el registro.

Se establece como obligación el que, una vez que se logra la identificación del cadáver

o de los restos de la persona, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá notificar a los familiares de la persona fallecida de acuerdo al Protocolo Homologado. Además, se estima pertinente la obligación de identificar y localizar a los familiares de la persona fallecida.

Además, se estima conducente que, al ser una herramienta consgnada para la búsqueda e identificación, la información contenida se actualice en tiempo real por parte de los servicios periciales o los servicios médicos forenses en cuanto se recabe la información. Asimismo, para cumplir con sus obligaciones de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisiones Locales pueden consultar en cualquier momento este registro.

En la misma lógica, es necesario que el personal de servicios periciales y servicio médicos forenses esté permanentemente capacitado y actualizado de conformidad con el protocolo que corresponda.

## XVI. Banco Nacional de Datos Forenses.

Estas Comisiones Unidas estiman adecuada la creación del Banco de Datos Forenses que fungirá como herramienta que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos materia de esta Ley. En ese tenor, el Banco Nacional de Datos Forenses se conforma con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real.

Además, el Banco Nacional de Datos Forenses debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley que conforman del Sistema Nacional y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello. La información deberá ser recabada de conformidad con los protocolos correspondientes.

Es importante destacar que el Banco Nacional de Datos Forenses deberá realizar cruces de información de manera permanente y continua con el Registro Nacional y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas. Así como, con otros registros que no forman parte del Sistema Nacional que contengan información forense relevante para la búsqueda de personas.

La Procuraduría será la encargada de coordinar la operación y centralizar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, así como administrar el Registro Forense Federal, en términos de lo que establezca el Reglamento. A su vez, son las Procuradurías Locales quienes coordinarán la operación de su respectivo registro

forense y deberán compartir la información con la Procuraduría, en términos de lo que establece esta Ley.

En este orden de ideas, los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las Entidades Federativas deben capturar en el registro forense que corresponda, la información que recaben, de conformidad con la presente sección y el protocolo correspondiente.

Debe destacarse también que, de manera congruente con el espíritu del ordenamiento, la información genética suministrada por los Familiares será utilizada exclusivamente con fines de identificación de Personas Desaparecidas.

Ahora bien, estas Comisiones Unidas coinciden en el contenido mínimo del Banco Nacional de Datos Forenses que, además de la información pericial y forense, será útil para la identificación de una persona:

- La información genética de los Familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o segundo grado en línea colateral, de las Personas Desaparecidas y No Localizadas, conforme se requiera, y
- La información genética de terceras personas en los casos en que así lo requiera la autoridad ministerial o judicial que corresponda, como datos o medios de prueba.

Por otro lado, se considera adecuado que la información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección pueda utilizarse en otras investigaciones cuando aporte elementos para la localización de una persona, cuando sea de utilidad para otros procedimientos penales o para el ejercicio del derecho de la víctima a obtener la reparación integral.

## XVII. Disposición de Cadáveres.

Estas Comisiones Unidas comparten la opinión respecto del manejo de cadáveres. Así, los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias. En tanto, las Procuradurías y otras autoridades que tengan a su cargo servicios forenses deben tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados.

## XVIII. Programa Nacional de Búsqueda y del Plan Nacional de Exhumaciones.

Estas Comisiones Unidas corroboran la importancia del establecimiento de un Programa Nacional de Búsqueda y del Plan Nacional de Exhumaciones. Por una parte, el Programa Nacional de Búsqueda y Localización, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deberá contener, como mínimo:

- Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del Programa.
- El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre la desaparición y los posibles paraderos de personas.
- Las metodologías y procesos para recopilar y sistematizar información de las diferentes fuentes disponibles y para su incorporación y procesamiento en bases de datos o sistemas particulares para facilitar las labores de búsqueda y localización.
- La identificación de tiempo y lugar de episodios críticos de desaparición de personas en el país, la definición de los contextos de las desapariciones y las metodologías a emplearse para la búsqueda y localización en cada uno de esos contextos.
- Las estrategias regionales o locales de búsqueda que se determinen de acuerdo a contextos y temporalidades específicas.
- Las estrategias específicas a seguir con base en la información y el análisis de contexto, para la búsqueda de personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores u otras personas o grupos que dadas sus características requieran medidas o mecanismos diferenciados de búsqueda.
- Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado.
- El método específico de análisis de contexto que contribuya en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en episodios de violencia política del pasado, en términos de las disposiciones aplicables.
- El proceso para la depuración y organización de la información contenida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y su integración y armonización con otros registros que contengan información relevante para la búsqueda y localización de personas.
- Los procesos, sistemas y mecanismos para la coordinación con el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
- Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa.
- La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación.
- El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa.

- Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición.
- El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

Por otro lado, se estima pertinente que sea la Procuraduría General de la República quien elabore el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, mismo que como mínimo debe contener los siguientes rubros:

- Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del programa;
- El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre las personas fallecidas sin identificar que permita aportar información sobre la hipótesis de identificación de las personas inhumadas;
- Información estadística sobre el número de cuerpos inhumados sin identificar;
- El listado de todos los panteones y cementerios del país, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar inhumados en cada uno y las circunstancias y contextos correspondientes;
- El listado de todos los lugares de inhumación clandestina de cuerpos que se hayan localizado, a partir de la información que proporcionen las Procuradurías y Fiscalías Especializadas, especificando si ya se ha procesado la zona y si se han localizado restos, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar recuperados en cada uno, las circunstancias y contextos correspondientes y el estatus de los procesos de identificación respectivos;
- Las estrategias regionales o locales de exhumación que se determinen de acuerdo a contextos y/o patrones específicos;
- Los criterios logísticos de priorización de las actuaciones de exhumaciones e identificación forense, de acuerdo a información recabada;
- La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación;
- El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa;
- Las actuaciones previstas para la identificación de las personas inhumadas y para proceder a las inhumaciones controladas, así como los tiempos previstos para su realización;
- Los procesos para el intercambio de información y coordinación con el Programa Nacional de Búsqueda y Localización;
- Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado;

- Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa;
- Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición, y
- El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

## XIX. De los Derechos de las Víctimas.

En relación a los Derechos de las Víctimas, estas Comisiones Unidas estiman que es un tema cuyo desarrollo implica un énfasis especial, puesto que son las propias víctimas y la sociedad civil las que motivan el desarrollo de la legislación.

De manera fundamental, será la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Locales de Víctimas las instancias que deben, en el ámbito de sus competencias, proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y atención, ya sea por sí mismas o a través de otras instituciones competentes, en términos de la legislación victimal.

Debe destacarse que, las víctimas directas de los delitos desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes:

**a)** A la protección de sus derechos, personalidad e intereses jurídicos;
**b)** A que las autoridades inicien las acciones de búsqueda y localización, bajos los principios de esta Ley, desde el momento en que se tenga Noticia de su desaparición;
**c)** A ser restablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado con vida;
**d)** A proceder en contra de quienes de mala fe hagan uso de los mecanismos previstos en esta Ley para despojarlo de sus bienes o derechos;
**e)** A recibir tratamiento especializado desde el momento de su localización para la superación del daño sufrido producto de los delitos previstos en la presente Ley, y
**f)** A que su nombre y honra sean restablecidos en casos donde su defensa haya sido imposible debido a su condición de Persona Desaparecida.

Por otro lado, además de las prerrogativas que se han anotado en parágrafos anteriores, estas Comisiones Unidas estiman pertinente que los familiares de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tengan los siguientes derechos:

I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida;
II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los planes y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser fundada y motivada por escrito
III. Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación;
IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los expedientes de búsqueda;
V. Acceder a las medidas de ayuda asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial.
VI. Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promueva ante autoridad competente;
VII. Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales en las acciones de búsqueda;
VIII. Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia;
IX. Acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y mecanismos que emanen de la Ley;
X. Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la presente Ley;
XI. Participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de familiares, de acuerdo a los protocolos en la materia, y
XII. Acceder a los programas y servicios especializados que las autoridades competentes diseñen e implementen para la atención y superación del daño producto de los delitos contemplados en la Ley.

## XX. Medidas de Ayuda, Asistencia y Atención.

Las medidas y atención inmediata a los familiares, constituyen uno de los aspectos más relevantes del presente dictamen, toda vez que el Estado tiene la obligación de brindar a los familiares o allegados, las gestiones y acciones necesarias para garantizar su protección y tratamiento integral, atendiendo a la gravedad del daño sufrido.

En ese tenor, debemos recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece en su Tesis: I.9o.P.59 P (10a.), de rubro **DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL SER EL JUICIO DE AMPARO LA MATERIALIZACIÓN DEL**

**DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO, RECONOCIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, NO SE REQUIERE DE UNA LEY ADJETIVA PARA INVESTIGAR VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS, TRATÁNDOSE DE ESTE DELITO[14];** lo siguiente:

*"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la obligación de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 1, numeral 1, se cumple de diferentes maneras en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de* ***protección****, lo que implica el* ***deber del Estado de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público que fueren necesarias para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.*** *Como parte de dicho compromiso, debe investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se cometan dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación.*

..."

Con base en los criterios antes mencionados, se concluye que la obligación de garantizar medidas y atención a las víctimas, es del Estado, en este sentido éstas Comisiones Unidas, estiman pertinente establecer el presente proyecto de ley que las medidas y atención inmediata estarán a cargo de la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas.

Estas Comisiones Unidas estiman necesario que se instauren medidas de ayuda, asistencia y atención; éstas podrán ser solicitadas por los familiares a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente. Las medidas deben de recibirse de forma inmediata y sin restricción, de conformidad con la legislación victimal.

En consecuencia, las medidas deben ser proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas en tanto realizan las gestiones para que otras instituciones públicas brinden la atención respectiva.

## XXI. Declaración Especial de Ausencia.

Las Comisiones Unidas que realizan el presente, consideran atinada la inclusión de la

[14]Tesis: I.9o.P.59 P (10a.)Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época: 2007; 427 ; 3 de 5; Tribunales Colegiados de Circuito; Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III. Pag. 2394. Tesis Aislada(Constitucional).

figura de Declaración Especial de Ausencia. En ese sentido, su justificación radica en la indefinición que se genera ante una eventual desaparición respecto de los derechos y obligaciones de la víctima.

Así, son los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público quienes podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo que dispuesto en esta Ley y las leyes aplicables.

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia o Reporte de desaparición, o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante un organismo público de protección de los derechos humanos de las Entidades Federativas.

La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida o No Localizada, y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares de la Persona Desaparecida o No Localizada.

Luego, se estima necesario que la Declaración Especial de Ausencia cuente, como mínimo, los siguientes efectos:

- Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;
- Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en los términos de la legislación civil aplicable;
- Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;
- Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por la ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;
- Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida, continúen gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen;
- Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes dela Persona Desaparecida;
- Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo;

- Proveer sobre la representación legal de la persona ausente cuando corresponda, y
- Establecer las reglas aplicables en caso de que la persona sea localizada con vida para el restablecimiento de sus derechos y cumplimiento de obligaciones.

Además, se considera pertinente precisar que esta figura sólo tiene efectos de carácter civil, por lo que no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

**XXII. Medidas de Reparación Integral a las Víctimas.**

Las Comisiones Unidas estiman necesario que las víctimas de los delitos establecidos en la Ley tengan derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas. En ese tenor, debe puntualizarse que el derecho para que la víctima solicite la reparación integral es imprescriptible.

Como parte de la reparación integral a las víctimas de los delitos establecidos en la Ley comprenderá, además de lo establecido en la Ley General de Víctimas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en normas del derecho internacional, los elementos siguientes:

- Medidas de satisfacción:
- Construcción de lugares o monumentos de memoria;
- Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas;
- Recuperación de escenarios de encuentro comunitario;
- Recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas, o
- Recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante, y

- De acuerdo con los estándares internacionales, las garantías de no repetición, mismas que son requisito sine qua non garantizar reparaciones integrales a las víctimas, y deben considerar la particularidad de las víctimas; entre otras acciones, deben incluir la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de los servidores públicos investigados o sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso y previo desahogo de los procedimientos administrativos y/o judiciales que correspondan.

**XXIII. Protección de Personas.**

Otra de las partes fundamentales del instrumento analizado, en la óptica de estas Comisiones Unidas, son los programas de protección de víctimas. Estos deben ser establecidos por las Fiscalías Especializadas para la protección de las víctimas, los Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en la Ley. Aplicarán cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal o las leyes análogas de las Entidades Federativas.

**XXIV. Prevención de los Delitos.**

Estas Comisiones Unidas estiman necesario denotar la obligación de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deberán coordinarse para implementar medidas de prevención.

Como medida de apoyo a lo anterior, todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Además, a efecto de garantizar la disponibilidad de ese material, las grabaciones deberán almacenarse de forma segura por dos años.

El Sistema Nacional, a través de la Comisión Nacional Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, Procuraduría y las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, respecto de los delitos previstos en la Ley debe:

- Llevar a cabo campañas informativas dirigidas a fomentar la denuncia de los delitos y sobre instituciones de atención y servicios que brindan;
- Proponer acciones de capacitación a las Instituciones de Seguridad Pública, a las áreas ministeriales, policiales y periciales y otras que tengan como objeto la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación y sanción de los delitos previstos en la Ley, así como la atención y protección a víctimas con una perspectiva psicosocial;
- Proponer e implementar programas que incentiven a la ciudadanía, incluyendo a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, a proporcionar la información con que cuenten para la investigación de los delitos previstos en la Ley, así como para la ubicación y rescate de las Personas Desaparecidas o No Localizadas;

- Promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales para fortalecer la prevención de las conductas delictivas;
- Recabar y generar información respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en materia de búsqueda de personas, prevención e investigación;
- Identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos, así como hacer pública dicha información de manera anual;
- Proporcionar información y asesoría a las personas que así lo soliciten, de manera presencial, telefónica o por escrito o por cualquier otro medio, relacionada con el objeto de la Ley, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos;
- Reunirse, por lo menos dos veces al año, para intercambiar experiencias que permitan implementar políticas públicas en materia de prevención de los delitos;
- Emitir un informe anual respecto de las acciones realizadas para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley;
- Diseñar instrumentos de evaluación e indicadores para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la Ley, en donde se contemple la participación voluntaria de familiares;
- Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre la problemática de desaparición de personas y otras conductas delictivas conexas o de violencia vinculadas a este delito, que permitan la elaboración de políticas públicas que lo prevengan, y
- Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

## XXV. Programación

Estas Comisiones Unidas coinciden en la importancia de la evaluación. Por ello, los programas de prevención deben incluir metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a servidores públicos.

## XXVI. Capacitación.

Las Comisiones dictaminadoras consideran adecuado establecer programas obligatorios de capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a los principios referidos en la Ley, para servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública involucrados en la búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos. La Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y la autoridad municipal que el titular del Ayuntamiento determine deben establecer dichos programas.

A su vez, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deben capacitar, en el ámbito de sus competencias, al personal ministerial, policial y pericial conforme a los más altos estándares internacionales, respecto de las técnicas de búsqueda, investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere esta Ley, con pleno respeto a los derechos humanos y con enfoque psicosocial.

## XXVII. Disposiciones en relación a la Niñez.

Mención particular merece la inclusión y visibilización de la problemática que en materia de desapariciones abarca a niñas, niños y adolescentes. Por ello, y en aras de que el Estado Mexicano cumpla a cabalidad con el compromiso que adquirió el 7 de abril de 2016 en la Audiencia Temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las comisiones dictaminadoras acordamos incluir un capítulo específico de Niñez Desaparecida, en razón principalmente del alto porcentaje de mujeres adolescentes desaparecidas, en el que establecemos claramente la importancia de que se cuente con un protocolo específico de búsqueda inmediata, un sistema de información que identifique las particularidades de niñas y niños, atención psicológica, protección especial y prioritaria a hijas e hijos de personas desaparecidas. Adicionalmente, a lo largo del proyecto, incluimos diversas disposiciones entre las que estimamos oportuno destacar las siguientes:

1. El principio de interés superior de la niñez.
2. El principio de enfoque diferenciado y especializado.
3. Agravante cuando se cometen los delitos contra niñas, niños y adolescentes.
4. Tipos penales para ocultamiento de niñas y niños que nacen de una mujer víctima de desaparición forzada y cometida por particulares.
5. Facultad expresa de la Comisión Nacional de Búsqueda de emplear metodología especializada para búsqueda de niñas, niños y adolescentes.
6. Contendido en el Programa Nacional de metodología especializada para búsqueda de niñas, niños y adolescentes.
7. Presunción de comisión de delito y carpeta de investigación siempre que se reporte la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

## XXVIII. Régimen Transitorio.

Estas Comisiones Unidas estiman que es fundamental un régimen transitorio adecuado, toda vez que favorecerá la operación, funcionamiento y actividades que la legislación analizada establece. En tal orden de ideas, se establece y considera pertinente lo siguiente:

I) Estas Comisiones Unidas consideran adecuado incluir, como primer transitorio, la entrada en vigor del decreto a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la emisión de los instrumentos a que se refiere el Artículo Décimo Cuarto Transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y demás autoridades deberán cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a esta Ley.

II) Asimismo, la Procuraduría y las Procuradurías Locales, además de los protocolos previstos en esta Ley, continuarán aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad.

III) Atentos al contenido de la Ley, estas Comisiones Unidas estiman pertinente abrogar la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

IV) A su vez, es adecuado que las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entren en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. También, es adecuado que dentro de los treinta días siguientes a que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los protocolos rectores para su funcionamiento previstos en el artículo 53, fracción VIII, de esta Ley. Aunado a lo anterior, es correcto establecer que, dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, ésta deberá emitir el Programa Nacional de Búsqueda.

V) Por otro lado, los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda deberán estar certificados dentro del año posterior a su creación. A efecto de ello, la Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los criterios previstos en el artículo 53, fracción L, de esta Ley, dentro de los noventa días posteriores a su entrada en funciones.

VI) Finalmente, las Comisiones Unidas que dictaminan consideran adecuado que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales podrán, a partir de que entren en funcionamiento, ejercer las atribuciones que esta Ley les confiere con relación a los procesos de búsqueda que se encuentren pendientes. La Comisión Nacional de Búsqueda coordinará la búsqueda de las personas desaparecidas relacionadas con búsquedas en las que, a la entrada en vigor de esta Ley, participen autoridades federales.

VII) En el entendido de generar búsqueda de manera inmediata en las Entidades Federativas, y de dar un plazo racional para la adecuación de sus estructuras, se estima que las Comisiones Locales de Búsqueda deberán entrar en funciones a partir de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. En ese sentido, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá brindar la asesoría necesaria a las entidades federales para el establecimiento de sus Comisiones Locales de Búsqueda.

VIII) Por otro lado, es conveniente que el Consejo Ciudadano esté conformado dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. Además, en un plazo de treinta días posteriores a su conformación el Consejo Ciudadano deberá emitir sus reglas de funcionamiento.

IX) En la lógica del instrumento que se analiza, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto. Asimismo, los lineamientos y modelos a que refiere el artículo 55, fracciones I, VII, XIV y XV de la Ley, deberán emitirse en la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda; en la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, que se lleve conforme a lo dispuesto por esta Ley, se deberán emitir los criterios de certificación y especialización previstos en el artículo 55.

X) Se considera pertinente establecer dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos previstos transitorio anterior, el que la Comisión Nacional de Búsqueda deba contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas; en igualdad de circunstancias, dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, las Entidades Federativas deberán poner en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

XI) Por otro lado, mientras comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas, las Procuradurías Locales deberán incorporar en

un registro provisional, electrónico o impreso, la información de los Reportes, denuncias o Noticias recibidas conforme a lo que establece el artículo 106 de esta Ley. A su vez, la Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la información contenida en los registros provisionales a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

XII) Por otra parte, estas Comisiones Unidas estiman pertinente que el Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto. En su caso, las Entidades Federativas deberán emitir y armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

XIII) Además, en aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable.

XIV) Asimismo, es preciso mencionar que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que las disposiciones contenidas en el mismo contemplen la descripción legal de conductas previstas en otras normas como delitos y por virtud de la presente Ley se denominan, tipifican, penalizan o agravan de forma diversa, siempre y cuando la conducta y los hechos correspondan a la descripción que ahora se establece, se estará a lo siguiente:

I. En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos de esta ley, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la presente Ley;
II. En las investigaciones iniciadas en las que aún no se ejerza acción penal, el Ministerio Público la ejercitará de conformidad con la traslación del tipo que resulte procedente;
III. En los procesos iniciados conforme al sistema penal mixto en los que el Ministerio Público aún no formule conclusiones acusatorias, procederá a su elaboración y presentación de conformidad con la traslación del tipo penal que, en su caso, resultare procedente;
IV. En los procesos iniciados conforme al sistema acusatorio adversarial, en los que el Ministerio Público aún no presente acusación, procederá a su preparación y presentación atendiendo a la traslación del tipo que pudiera proceder;

V. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal que corresponda, podrá efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado, incluyendo sus modalidades, sin exceder el monto de las penas señaladas en la respectiva ley vigente al momento de la comisión de los hechos, y
VI. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, según las modalidades correspondientes.

I) En la línea de las anteriores consideraciones, se estima adecuado el Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

II) También, las Comisiones dictaminadoras estiman adecuado que dentro de los treinta días siguientes a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le transferirá las herramientas tecnológicas y la información que haya recabado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dentro de los noventa días siguientes a que reciba la información a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá transmitir a las fiscalías especializadas la información de las Personas Desaparecidas o No Localizadas que correspondan al ámbito de su competencia.

Las Fiscalías Especializadas deberán actualizar el contenido del Registro Nacional, conforme a lo siguiente:

I. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que reciban la información, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá recabar información sobre las personas inscritas en el Registro previsto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que correspondan a su ámbito de competencia, a fin de que dicha información esté apegada a lo dispuesto en el artículo 106 y, en su caso, al artículo 112 de esta Ley;
II. En términos de la fracción anterior, las Fiscalías Especializadas que estén impedidas materialmente para actualizar la información dentro del plazo previsto, deberán publicar un padrón con el nombre de las Personas Desaparecidas o no Localizadas cuya información no haya sido actualizada, a efecto de que, dentro de los ciento veinte días siguientes, los Familiares y organizaciones de la sociedad civil proporcionen la información que pudiera resultar útil para realizar dicha actualización;

III. Una vez actualizada la información, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá ingresarla al registro que corresponda, a excepción de que la actualización revele que la persona fue localizada, en cuyo caso, se asentará en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y

IV. Al haberse realizado la acción prevista en la fracción II de este artículo, de no haberse actualizado el registro, la Fiscalía Especializada que corresponda estará materialmente imposibilitada para actualizarlo. En este supuesto, el registro permanecerá con la anotación de actualización pendiente y será migrado, con ese carácter, al registro que corresponda.

I) Por otro lado, del análisis se desprende la factibilidad de que el Banco Nacional de Datos Forenses, los registros forenses Federal y el de las Entidades Federativas comenzarán a operar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto. Asimismo, dentro de los tres meses siguientes a que inicie la operación de dichos registros, las autoridades que posean información forense deberán incorporarla al registro que corresponda.

II) Al igual que en diversos transitorios anteriores, las Comisiones Unidas consideran propio que antes de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deberá emitir el Protocolo Homologado de Investigación a que se refiere el artículo 93 de esta Ley.

III) Asimismo, se estima necesario establecer que las autoridades e instituciones que recaban la información a que se refiere el artículo 97 la deberán incorporar en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

IV) Por otra parte, es preciso puntualizar que las Entidades Federativas en las que no exista una Comisión de Atención a Víctimas, las instituciones públicas competentes de la Entidad Federativa deberán brindar la atención a Víctimas conforme a lo establecido en el Título Cuarto de esta Ley.

V) Estas Comisiones Unidas consideran pertinente que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Además de lo anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.

VI) Estas Comisiones Unidas estiman pertinente determinar que los lineamientos para determinar las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la

conservación de cadáveres o restos de personas a que refiere el artículo 124 de esta Ley deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

VII) Por otro lado, la Procuraduría General de la República debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, conforme a lo previsto en los artículos 131, fracción III y 132, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

VIII) Además, es pertinente puntualizar que dentro del plazo previsto en el párrafo anterior la Procuraduría General de la República emitirá los lineamientos necesarios para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan en forma homologada la información que será integrada al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y al Banco Nacional de Datos Forenses previstos en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por Particulares.

IX) Estas Comisiones Unidas consideran que, además, que tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de Búsqueda, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad. Asimismo, las Entidades Federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto.

X) Finalmente, se estima que dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá emitir los lineamientos a que se refiere la fracción XVI del artículo 53 de la Ley.

## V. PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

Así, y con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

## DECRETO

**ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:**

## LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

### TÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES
### CAPÍTULO PRIMERO

**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 2.** La presente Ley tiene por objeto:

**I.** Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley;

**II.** Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

**III**. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**IV.** Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas;

**V.** Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección, y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;

**VI.** Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y

**VII.** Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

**Artículo 3.** La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro persona.

**Artículo 4.** Para efectos de esta Ley se entiende por:

**I. Banco Nacional de Datos Forenses**: **a** la herramienta del Sistema Nacional que concentra las bases de datos de las Entidades Federativas y de la Federación; así como, otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**II. Comisión Ejecutiva**: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

**III. Comisiones de Víctimas**: **a** las Comisiones de Atención a Víctimas de las Entidades Federativas;

**IV. Comisión Nacional de Búsqueda:** a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

**V. Comisiones Locales de Búsqueda:** a las Comisiones de Búsqueda de Personas en las Entidades Federativas;

**VI.** Consejo **Ciudadano**: **a**l Consejo Nacional Ciudadano, órgano del Sistema Nacional

de Búsqueda de Personas;

**VII. Declaración Especial de Ausencia**: a la Declaración Especial de Ausencia por desaparición;

**VIII. Entidades Federativas**: **a** las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**IX. Familiares**: a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la Persona Desaparecida o No Localizada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; el o la cónyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida o No Localizada, que así lo acrediten ante las autoridades competentes;

**X. Fiscalías Especializadas**: la Fiscalía Especializada de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales cuyo objeto es la investigación y persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por Particulares;

**XI. Grupo de Búsqueda:** al grupo de personas especializadas en materia búsqueda de personas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que realizarán la búsqueda de campo, entre otras;

**XII. Instituciones de Seguridad Pública**: **a** las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, y otras autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encargadas o que realicen funciones de Seguridad Pública en los órdenes federal, local y municipal;

**XIII. Mecanismo de Apoyo Exterior:** El Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación es el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño, en el ámbito de su competencia, a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones del ordenamiento jurídico mexicano establecidas en esta Ley, coadyuvar en la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda y en la investigación y persecución de los delitos que realicen las Fiscalías Especializadas en coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, así como para garantizar los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las víctimas y ofendidos del delito. El Mecanismo de Apoyo Exterior funciona a través del personal que labora en los Consulados, Embajadas y Agregadurías de México en otros países;

**XIV. Noticia:** a la comunicación hecha por cualquier medio, distinto al reporte o la denuncia, mediante la cual, la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

**XV. Persona Desaparecida**: **a** la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

**XVI. Persona No Localizada:** a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito;

**XVII. Protocolo Homologado de Búsqueda**: al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas;

**XVIII. Protocolo Homologado de Investigación:** al Protocolo Homologado para la investigación de los delitos materia de esta ley;

**XIX. Procuraduría: a** la Procuraduría General de la República;

**XX. Procuradurías Locales**: a las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas;

**XXI. Registro Nacional: a**l Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra la información de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la Federación como de las Entidades Federativas;

**XXII. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas:** al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas que concentra la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen;

**XXIII. Registro Nacional de Fosas:** al Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen;

**XXIV. Reglamento**: al Reglamento de esta Ley;

**XXV. Reporte**: a la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

**XXVI. Sistema Nacional**: al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**XXVII. Tratados:** a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

**XXVIII. Víctimas:** Aquellas a las que hace referencia la Ley General de Víctimas.

**Artículo 5.** Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley son diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

**I. Efectividad y exhaustividad:** todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación. Bajo ninguna circunstancia se podrán invocar condiciones particulares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o la actividad que realizaba previa o al momento de la desaparición para no ser buscada de manera inmediata;

**II. Debida diligencia:** todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos. En toda investigación y proceso penal que se inicie por los delitos previstos en esta Ley, las autoridades deben garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo;

III. **Enfoque diferencial y especializado:** al aplicar esta ley, las autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las Víctimas. De igual manera, tratándose de las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones las autoridades deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos materia de esta Ley;

**IV. Enfoque humanitario: a**tención centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los Familiares;

**V. Gratuidad:** todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, no tendrán costo alguno para las personas;

VI. **Igualdad y no discriminación:** para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos y garantías de las Víctimas a los que se refiere esta Ley, las actuaciones y diligencias deben ser conducidas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos o la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial debe fundarse en razones de enfoque diferencial y especializado;

VII. **Interés superior de la niñez:** las autoridades deberán proteger primordialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar que cuando tengan la calidad de

Víctimas o testigos; la protección que se les brinde sea armónica e integral, atendiendo a su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

**VIII. Máxima protección:** la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno, la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas a que se refiere esta Ley;

**IX. No revictimización:** la obligación de aplicar las medidas necesarias y justificadas de conformidad con los principios en materia de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados, para evitar que la Persona Desaparecida o No Localizada y las víctimas a que se refiere esta Ley, sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición; obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoseles a sufrir un nuevo daño;

**X. Participación conjunta: l**as autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, permitirán la participación directa de los Familiares, en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, en las tareas de búsqueda, incluido el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares, como en políticas públicas y prácticas institucionales;

**XI. Perspectiva de género**: en todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como para investigar y juzgar los delitos previstos en esta Ley, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad;

**XII. Presunción de vida:** en las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deben presumir que la Persona Desaparecida o No Localizada está con vida; y

**XIII. Verdad:** el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos constitutivos de los delitos previstos en esta Ley, en tanto que el objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la protección de las Víctimas, el castigo de las personas responsables y la reparación de los daños causados, en términos de los artículos 1 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 6.** En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y las legislaciones civiles aplicables, así como la Ley General de Víctimas y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

## CAPÍTULO SEGUNDO

### Disposiciones generales para personas desaparecidas menores de 18 años

**Artículo 7.** Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda.

**Artículo 8.** Las autoridades que administran las herramientas del Sistema Nacional deben tomar en cuenta el Interés Superior de la Niñez, y deben establecer la información segmentada por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación.

La divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de telecomunicación sobre la información de una persona menor de 18 años de edad desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones aplicables.

**Artículo 9.** Todas las acciones que se emprendan para la investigación y búsqueda de personas menores de dieciocho años de edad desparecidas, garantizarán un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos de la niñez, que tome en cuenta las características particulares, incluyendo su identidad y nacionalidad.

**Artículo 10.** Las autoridades de búsqueda e investigación en el ámbito de sus competencias se coordinarán con las Procuradurías de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para efectos de salvaguardar sus derechos, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 11.** En los casos de niñas, niños o adolescentes, las medidas de reparación integral, así como de atención terapéutica y acompañamiento deberán realizarse por personal especializado en derechos de la niñez y adolescencia y de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 12.** Para el diseño de las acciones, herramientas y el protocolo especializado para la búsqueda e investigación de niñas, niños y adolescentes el Sistema Nacional tomará en cuenta la opinión de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

## TÍTULO SEGUNDO
## DE LOS DELITOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 13.** Los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.

En los casos de los delitos previstos en esta Ley no procederá el archivo temporal de la investigación, aún cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal y no aparece que se puedan practicar otras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público estará obligada en todo momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

**Artículo 14.** El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza.

**Artículo 15.** Se prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad que impidan la investigación, procesamiento o sanción y cualquier otra medida para determinar la verdad y obtener reparación plena de los delitos materia de esta Ley.

**Artículo 16.** A efectos de la extradición, la desaparición forzada de personas y la

desaparición cometida por particulares no serán considerados delitos de carácter político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este motivo.

**Artículo 17.** No constituyen causas de exclusión de los delitos establecidos en los capítulos Tercero y Cuarto del Título Segundo de esta Ley, ni de responsabilidad en términos de lo previsto en las disposiciones aplicables, la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten **a** la comisión de estos delitos.

En ningún caso pueden invocarse circunstancias especiales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, suspensión de derechos y sus garantías, perturbación grave de la paz pública, como causa de justificación o inculpabilidad para cometer los delitos a que se refiere esta Ley.

El Estado está obligado a garantizar que cualquier persona que se rehúse a obedecer una orden para cometer el delito de desaparición forzada no sea sancionada o sea objeto de ninguna represalia.

**Artículo 18.** Para la imposición de una multa es aplicable el concepto días multa previsto en el Código Penal Federal.

**Artículo 19.** Los delitos previstos en esta Ley deben ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados conforme a las reglas de autoría, participación y concurso previstas en la legislación penal aplicable, y las reglas de acumulación de procesos previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 20.** La tentativa punible de los delitos previstos en esta Ley se sancionará en términos del artículo 63 del Código Penal Federal.

**Artículo 21.** Queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a una Desaparición Forzada de Personas o una Desaparición cometida por Particulares en el Estado al que sería entregada.

**Artículo 22.** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos

probablemente constitutivos de delitos distintos a los previstos en esta Ley, el agente del Ministerio Público advierte la probable comisión de algún delito previsto en el presente ordenamiento, debe identificar y remitir copia de la investigación a la Fiscalía Especializada competente.

**Artículo 23.** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos previstos en esta Ley, la Fiscalía Especializada advierte la probable comisión de alguno o varios delitos distintos a los previstos en el presente ordenamiento, deberá remitir copia de la investigación a las autoridades ministeriales competentes, salvo en el caso de delitos conexos.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS

**Artículo 24.** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades federales cuando:

**I.** Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley;

**II.** Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación;

**III.** Exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional en la que se determine la responsabilidad u obligación del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley;

**IV.** El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.

**V.** Durante la investigación se encuentren indicios que en la comisión del hecho participó una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada.

La víctima podrá pedir al Ministerio Público de la Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder de forma fundada y motivada.

**Artículo 25.** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades de las Entidades Federativas en los casos no previstos en el artículo anterior.

**Artículo 26.** La investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos previstos en esta Ley deberá ser competencia exclusiva de las autoridades federales o estatales del orden civil, aún cuando esté involucrado un servidor público.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

**Artículo 27.** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

**Artículo 28.** Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.

**Artículo 29.** Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.

**Artículo 30**. Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años, y de diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28.

Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.

**Artículo 31.** Se impondrá pena de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de veinticinco a treinta y cinco años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 32.** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando:

I. Durante o después de la desaparición, la Persona Desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito;

**II.** La Persona Desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor;

III. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer el delito;

**IV.** La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para cometer el delito;

**V.** La persona haya sido desaparecida por su actividad como defensora de derechos humanos;

**VI.** La persona haya sido desaparecida en razón de su labor como periodista;

**VII.** La Persona Desaparecida sea integrante de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VIII.** El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, o

**IX.** Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

**Artículo 33.** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas, conforme lo siguiente:

I. Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en una mitad;

II. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una tercera parte;

III. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una cuarta parte, y

IV. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una quinta parte.

## CAPÍTULO CUARTO

## DE LA DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES

**Artículo 34.** Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

**Artículo 35.** Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 36.** Las penas aplicables para los delitos establecios en los artículos 34 y 35 de esta Ley pueden ser determinadas y modificadas conforme a las reglas previstas en los artículos 32 y 33 de esta Ley.

## CAPÍTULO QUINTO

## DE LOS DELITOS VINCULADOS CON LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

**Artículo 37.** A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

**Artículo 38.** Se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas o de la investigación de los delitos establecidos en los artículos 27, 28, 31, 34 y 35 de la Ley a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas.

**Artículo 39.** Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 40.** Se impondrá pena de tres a siete años de prisión a quien, conociendo el paradero o destino final de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecidos en los artículos 31 y 35 de la Ley, y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

**Artículo 41.** Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil días multa a quien falsifique, oculte o destruya documentos que prueben la verdadera identidad de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecido en los artículos 31 y 35 de la Ley durante el período de ocultamiento, con conocimiento de dicha circunstancia.

Se aplicarán las mismas penas a quien, dolosamente, utilice los documentos falsificados de una niña o niño a que se refiere el párrafo anterior, con el conocimiento de dicha circunstancia.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**Artículo 42.** Los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos

**Artículo 43.** Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerará grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes.

# TÍTULO TERCERO
# DEL SISTEMA NACIONAL

## CAPÍTULO PRIMERO
## DEL SISTEMA NACIONAL

**Artículo 44.** El Sistema Nacional tiene como objetivo diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley.

**Artículo 45.** El Sistema Nacional se integra por:

**I.** La persona titular de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

**II.** La persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

**III.** La persona titular de la Procuraduría General de la República;

**IV.** La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Ejecutiva;

**V.** La persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

**VI.** Tres personas del Consejo Ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo integran;

**VII.** La persona titular de la Policía Federal;

**VIII.** Las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, y

**IX.** La persona que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Las personas integrantes del Sistema Nacional deben nombrar a sus respectivos suplentes, los cuales deben contar con el nivel jerárquico inmediato inferior. Para el caso de las fracciones VI y IX, el suplente será designado por los propios órganos a los que refieren las citadas fracciones.

Las personas integrantes e invitados del Sistema Nacional no recibirán pago alguno por su participación en el mismo.

La persona que preside el Sistema Nacional podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de los órganos con autonomía constitucional, de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los municipios de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como organismos internacionales según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz pero sin voto.

Las instancias y las personas que integran el Sistema Nacional están obligadas, en el marco de sus competencias, a cumplir con las acciones que deriven del ejercicio de las atribuciones de dicho órgano.

**Artículo 46.** El Sistema Nacional sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes y sus resoluciones deben ser tomadas por mayoría de votos. El presidente tiene voto dirimente en caso de empate.

**Artículo 47.** Las sesiones del Sistema Nacional deben celebrarse de manera ordinaria, por lo menos, cada seis meses por convocatoria del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, por instrucción de su Presidente, y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario a propuesta de un tercio de sus integrantes.

Las convocatorias deben realizarse por oficio o por cualquier medio electrónico que asegure y deje constancia de su recepción, con al menos cinco días hábiles a la fecha de celebración de la sesión correspondiente, y dos días hábiles de anticipación para las sesiones extraordinarias. En ambos casos debe acompañarse el orden del día correspondiente.

**Artículo 48.** El Sistema Nacional para el ejercicio de sus facultades contará con las

siguientes herramientas:

I. El Registro Nacional;

II. El Banco Nacional de Datos Forenses;

III. El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas;

IV. El Registro Nacional de Fosas;

V. El Registro Administrativo de Detenciones;

VI. La Alerta Amber;

VII. El Protocolo Homologado de Búsqueda y los protocolos previstos en el artículo 73 de esta Ley; y

VIII. Otros registros necesarios para su operación en términos de lo que prevé esta Ley.

**Artículo 49.-** El Sistema Nacional tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Expedir modelos de lineamientos que permitan la coordinación entre autoridades en materia de búsqueda de personas así como de investigación de los delitos previstos en esta Ley. La legislación de las Entidades Federativas deberá prever los mecanismos para incorporar a su sistema jurídico los modelos a que se refiere esta fracción;

**II.** Establecer, en coordinación con las autoridades federales y las entidades federativas, la integración y funcionamiento de un sistema único de información tecnológica e informática que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o no Localizadas; así como para la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley;

**III.** Proponer acuerdos de colaboración entre sus integrantes y los del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el intercambio, sistematización y actualización de la información de seguridad pública que contribuyan a la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**IV.** Dar seguimiento y evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda;

**V.** Evaluar permanentemente las políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VI.** Generar mecanismos para favorecer que las capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas permitan la búsqueda eficiente y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VII.** Generar los mecanismos y acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones y requerimientos que hagan los integrantes del Sistema Nacional para el mejoramiento de políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VIII.** Emitir los modelos de instrumentos rectores para el funcionamiento y la coordinación con las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas;

**IX.** Evaluar el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones;

**X.** Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses;

**XI.** Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional de Fosas;

**XII.** Recomendar a las Procuradurías Locales el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda, así como la evaluación de las mismas;

**XIII**. Proporcionar la información que sea solicitada por el Consejo Ciudadano para el ejercicio de sus funciones;

**XIV**. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas materia de esta Ley;

**XV**. Dictar los lineamientos que regulen la participación de los Familiares en las acciones de búsqueda;

**XVI.** Emitir el Protocolo Homologado de Búsqueda, y

**XVII.** Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA

**Artículo 50.-** La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y

seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Nacional de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley.

Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 51.-** La Comisión Nacional de Búsqueda está a cargo de una persona titular nombrada y removida por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Gobernación.

Para el nombramiento, la Secretaría de Gobernación realizará una consulta pública previa a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Para ser titular se requiere:
**I.** Ser ciudadana o ciudadano mexicano;

**II.** No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

**III.** Contar con título profesional;

**IV.** No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento;

**V.** Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, y

**VI.** Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.

En el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, debe garantizarse el respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación.

La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Las Entidades Federativas deben prever, como mínimo, los mismos requisitos que contempla el presente artículo para la selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda Local que corresponda.

**Artículo 52.** Para la consulta pública a la que se hace referencia en el artículo anterior, la Secretaría de Gobernación deberá observar, como mínimo, las siguientes bases:

I. Generar un mecanismo a través del cual la sociedad civil presente candidatos;

II. Publicar toda la información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados; y

III. Hacer público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.

**Artículo 53.** La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Emitir y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda, rector en la materia, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

**II.** Emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional y coordinar la operación del mismo, en términos de lo que establezca esta Ley y las leyes aplicables;

**III.** Atender y formular solicitudes a las Instituciones de Seguridad Pública, previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de cumplir con su objeto;

**IV.** Solicitar el acompañamiento de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno, así como del personal al que se refiere el artículo 67 de esta Ley, cuando sea necesario que el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda realice trabajos de campo;

**V.** Integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de esta Ley;

**VI.** Presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, los informes sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, en coordinación con las autoridades competentes;

**VII.** Solicitar informes a las Comisiones Locales sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda;

**VIII.** Emitir los protocolos rectores que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

**IX.** Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda;

**X.** Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XI.** Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada para que, de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente;

**XII.** Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con las Comisiones Locales, realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo;

**XIII.** Acceder sin restricciones a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, de conformidad con las disposiciones aplicables;

**XIV.** Emitir los lineamientos para acceder a la información a que se refiere la fracción anterior;

**XV.** Solicitar a la Policía Federal que se realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XVI.** Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XVII**. Mantener comunicación con autoridades estatales y municipales, y establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación del Consejo;

**XVIII.** Integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda, así como analizar el fenómeno de desaparición, incluso a nivel regional.

**XIX**. Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de intercambiar experiencias y buscar las mejores prácticas para la localización de personas;

**XX.** Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que corresponda sobre la existencia de información relevante y elementos que sean útiles para la investigación de los delitos materia de ésta y otras leyes, de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda;

**XXI.** Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos;

**XXII**. Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con la normativa aplicable;

**XXIII.** Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información obtenida en la investigación de los delitos materia de esta Ley;

**XXIV.** Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinarse en la ejecución de las acciones de búsqueda y localización de personas migrantes;

**XXV.** Evaluar las políticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y Entidades Federativas;

**XXVI.** Conocer y opinar sobre las políticas y estrategias para la identificación de personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas comunes y clandestinas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y Entidades Federativas;

**XXVII.** Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional, así como de sus atribuciones;

**XVIII.** Proponer la celebración de convenios con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para la expedición de visas humanitarias a familiares de personas extranjeras desaparecidas en territorio mexicano;

**XXIX.** Disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro medio de comunicación de acceso gratuito para proporcionar información, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXX.** Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la materia y por conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXXI.** Establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de personas vinculadas con movimientos políticos.

En caso de que durante las acciones de búsqueda se encuentre algún indicio de la probable comisión de un delito, se dará aviso inmediato a la fiscalía correspondiente;

**XXXII.** Establecer medidas extraordinarias y emitir alertas cuando en una Entidad Federativa o municipio aumente significativamente el número de desapariciones, que serán atendidas por las autoridades competentes a quienes vayan dirigidas;

**XXXIII.** Diseñar, en colaboración con las Comisiones Locales que correspondan, programas regionales de búsqueda de personas;

**XXXIV.** Proponer celebrar los convenios que se requieran con las autoridades competentes, nacionales y extranjeras, para la operación de los mecanismos de búsqueda transnacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXXV.** Recibir de las embajadas, consulados y agregadurías las denuncias o Reportes de personas migrantes desaparecidas o no localizadas en territorio mexicano. Así como, establecer los mecanismos de comunicación e intercambio de información más adecuados que garanticen la efectividad en la búsqueda de las personas migrantes en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Mecanismo de Apoyo Exterior;

**XXXVI.** Dar seguimiento y, en su caso, atender las recomendaciones y sentencias de órganos internacionales de derechos humanos en los temas relacionados con la búsqueda de personas;

**XXXVII.** Dar seguimiento y atender a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas relacionados con las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda;

**XXXVIII.** Recibir la información que aporten los particulares en los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y remitir a la Comisión de búsqueda correspondiente y, en su caso, a la Fiscalía Especializada competente;

**XXXIX.** Proponer al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

**XL.** Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sobre las acciones u omisiones que puedan constituir una violación a esta Ley;

**XLI.** Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en términos que prevean las leyes;

**XLII.** Solicitar a la Comisión Ejecutiva y a las Comisiones de Víctimas que implementen los mecanismos necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los familiares de las Personas Desaparecidas por la presunta comisión de los delitos materia de esta Ley, de conformidad con la ley en la materia;

**XLIII.** Recomendar a las autoridades que integran el Sistema Nacional el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda;

**XLIV.** Incorporar a los procesos de búsqueda relacionados con Personas Desaparecidas o No Localizadas a expertos independientes o peritos internacionales, cuando no cuente con personal nacional capacitado en la materia y lo considere pertinente o así lo soliciten los Familiares. Dicha incorporación se realizará de conformidad con las leyes;

**XLV.** Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda;

**XLVI.** Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer la existencia de características y patrones de desaparición, de conformidad con el principio de enfoque diferenciado;

**XLVII.** Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información de hechos y datos sobre la desaparición de personas, así como de los delitos en materia de esta Ley;

**XLVIII.** Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las acciones de búsqueda;

**XLIX.-** Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar la información contenida en las bases de datos y registros que establece esta Ley, así como con la información contenida en otros sistemas que puedan contribuir en la búsqueda, localización e identificación de una Persona Desaparecida o No Localizada;

**L.-** Emitir conforme a los más altos estándares internacionales, los criterios de capacitación, certificación y evaluación del personal que participe en las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**LI.** Asesorar a las Comisiones Locales de Búsqueda;

**LII.** Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en todo el territorio nacional, independientemente de aquellas que se hayan iniciado localmente;

**LIII.** Promover, en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo y otras disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en peligro; y

**LIV.** Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento.

La información que la Comisión Nacional de Búsqueda genere con motivo del ejercicio de sus facultades estará sujeta a las reglas de acceso a la información previstas en la legislación en la materia.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Nacional de Búsqueda contará con las áreas necesarias en términos de lo establecido en el Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 54.** En la integración y operación de los grupos a que se refiere el artículo 53, fracción XVIII, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:

I. Determinar las autoridades que deben integrar los grupos, en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno;

II. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo;

III. Solicitar al área de análisis de contexto informes para el cumplimiento de sus facultades, y

IV. Disolver los grupos de trabajo cuando hayan cumplido su finalidad.

**Artículo 55.** Los servidores públicos integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda deben estar certificados y especializados en materia de búsqueda, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional.

**Artículo 56.** Los informes previstos en el artículo 53, fracción V, deben contener, al menos, lo siguiente:

**I.** Avance en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Búsqueda con información del número de personas reportadas como desaparecidas víctimas de los delitos materia de esta Ley y No Localizadas; número de personas localizadas, con vida y sin vida; cadáveres o restos humanos que se han localizado e identificado; circunstancias de modo, tiempo y lugar de la localización;

**II.** Resultados de la gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Sistema Nacional;

**III.** Avance en la actualización y adecuado cumplimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda a que se refiere el artículo 99 de esta Ley;

**IV.** Resultado de la evaluación sobre el sistema al que se refiere el artículo 49, fracción II, de esta Ley, y

**V.** Las demás que señale el Reglamento.

**Artículo 57.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizará los informes sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en la ejecución de los programas previstos en esta Ley, a fin de adoptar en coordinación con el Sistema Nacional todas aquellas medidas y acciones que se requieran para su cumplimiento.

**Artículo 58.** La Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, para realizar sus actividades, deben contar como mínimo con:

**I.** Grupo especializado de búsqueda, cuyas funciones se encuentran en el artículo 66 de esta Ley.

**II.** Área de Análisis de Contexto, la cual desempeñará, además de las funciones que esta Ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se refieren las fracciones XLV, XLVI, XLVII y XLVIII del artículo 53;

**III.** Área de Gestión y Procesamiento de Información, la cual desempeñará, además de las funciones que esta ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se refiere la fracción XLIX del artículo 53, y

**IV.** La estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

## CAPÍTULO TERCERO

## DEL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO

**Artículo 59.** El Consejo Ciudadano es un órgano ciudadano de consulta del Sistema Nacional, en materia de búsqueda de Personas.

**Artículo 60.** El Consejo Ciudadano está integrado por:

**I.** Cinco Familiares;

**II.** Cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley. Se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense, y

**III.** Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados por el Senado de la República previa consulta pública con las organizaciones de Familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de Víctimas y expertos en las materias de esta Ley.

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.

**Artículo 61.** Los integrantes del Consejo Ciudadano ejercerán su función en forma honorífica, y no deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño.

Los integrantes del Consejo Ciudadano deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por mayoría de votos, quien durará en su encargo un año.

El Consejo Ciudadano emitirá sus reglas de funcionamiento en las que determinará los requisitos y procedimientos para nombrar a su Secretario Técnico, la convocatoria a sus sesiones bimestrales y contenidos del orden del día de cada sesión.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Ciudadano deberán ser comunicadas a los integrantes del Sistema Nacional, y podrán ser consideradas para la toma de decisiones. El integrante del Sistema Nacional que determine no adoptar las recomendaciones que formule el Consejo Ciudadano, deberá explicar las razones para ello.

La Secretaría de Gobernación proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.

**Artículo 62.** El Consejo Ciudadano tiene las funciones siguientes:

**I.** Proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda acciones para acelerar o profundizar sus acciones, en el ámbito de sus competencias;

**II.** Proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema Nacional para ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y forenses;

**III.** Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y herramientas materia de esta Ley;

**IV.** Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas;

**V.** Solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes;

**VI.** Acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con las que cuenta el Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones;

**VII.** Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;

**VIII.** Dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se le reconocerá interés legítimo dentro de las investigaciones para la determinación de responsabilidades de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**IX.** Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda;

**X.** Elaborar, aprobar y modificar la Guía de procedimientos del Comité, y

**XI.** Las demás que señale el Reglamento.

Las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda.

**Artículo 63.** Las decisiones que el Consejo Ciudadano adopte son públicas, en apego a la legislación de transparencia y protección de datos personales.

**Artículo 64.** El Consejo Ciudadano integrará de entre sus miembros un Comité para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá las siguientes atribuciones:

**I.** Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión Nacional;

**II.** Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la Comisión Nacional;

**III.** Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Búsqueda Personas Desaparecidas;

**IV.** Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, a la participación directa de los familiares en el ejercicio de sus atribuciones; y,

**V.** Las demás que determine el Consejo Nacional Ciudadano, en el marco de sus atribuciones.

## CAPÍTULO CUARTO

## DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA

**Artículo 65.** La Comisión Nacional de Búsqueda contará con Grupos de Búsqueda integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas.

Con independencia de lo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda podrá auxiliarse por personas especializadas en búsqueda de personas, así como por cuerpos policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 66.** Los Grupos de Búsqueda, para el adecuado cumplimiento de sus acciones, tienen las siguientes atribuciones:

**I.** Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo Homologado de Búsqueda y otros existentes.

**II.** Solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de investigación específicos sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los hechos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades con que cuentan las Comisiones de Búsqueda para realizar acciones relacionadas con la búsqueda de personas previstas en esta ley;

**III.** Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas y No Localizadas y salvaguarde sus derechos humanos, y

**IV.** Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas.

**Artículo 67.** Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho personal debe atender las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, según corresponda.

El personal al que se refiere el párrafo anterior, además de cumplir con la certificación respectiva, debe acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comisión Nacional.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS

**Artículo 68.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas.

Las Fiscalías Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con las fiscalías especializadas para el cumplimiento de la Ley.

**Artículo 69.** Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:

I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de la institución respectiva, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

**II.** Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y

**III.** Acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, según corresponda.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar, conforme a los más altos estándares internacionales, a los servidores públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a las víctimas, sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas, aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros. De igual forma, podrán participar con las autoridades competentes, en la capacitación de los servidores públicos conforme a los lineamientos que sobre la materia emita el Sistema Nacional, en términos de esta Ley.

**Artículo 70.** La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

**I.** Recibir las denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de esta Ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

**II.** Mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme al Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;

**III**. Dar aviso de manera inmediata, a través del Registro Nacional, a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos materia de esta Ley, a fin de que se inicien las acciones correspondientes a la búsqueda; así como compartir la información relevante, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;

**IV.** Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de compartir información que pudiera contribuir en las acciones para la búsqueda y localización de personas, en términos de las disposiciones aplicables;

**V.** Informar de manera inmediata a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Comisión Local de Búsqueda, según sea el caso, la localización o identificación de una Persona;

**VI.** Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes para recibir, recabar y proporcionar información sobre las acciones de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley cometidos en contra de personas migrantes.

**VII.** Solicitar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados, en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales;

**VIII**. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables;

**IX.** Realizar y comunicar sin dilación todos aquellos actos que requieran de autorización judicial que previamente hayan sido solicitados por la Comisión que corresponda para la búsqueda y localización de una Persona Desaparecida

**X.** Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos de los delitos materia de esta Ley, cuando de la información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más Entidades Federativas o se trata de una persona extrajera en situación de migración, independientemente de su situación migratoria.

**XI.** Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las tareas de investigación en campo.

**XII.** Recabar la información necesaria para la persecución e investigación de los delitos previstos en esta u otras leyes.

**XIII.** Remitir la investigación y las actuaciones realizadas a las autoridades competentes

cuando advierta la comisión de uno o varios delitos diferentes a los previstos en esta Ley.

**XIV.** Solicitar al Juez de Control competente las medidas cautelares que sean necesarias, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**XV.** Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas; así como a las instituciones y organizaciones de derechos humanos y de protección civil, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

**XVI**. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de los servidores públicos especializados en la materia;

**XVII.** Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas, en coordinación con las instituciones correspondientes, para poder hacer la entrega de cadáveres o restos humanos, conforme a lo señalado por el Protocolo Homologado de Investigación y demás normas aplicables;

**XVIII.** Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de las exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas;

**XIX.** Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes el traslado de las personas internas a otros centros de reclusión salvaguardando sus derechos humanos, siempre que esta medida favorezca la búsqueda o localización de las Personas Desaparecidas o a la investigación de los delitos materia de esta Ley, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal;

**XX.** Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los delitos previstos en esta Ley, incluido brindar información periódicamente a los Familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

**XXI.** Celebrar convenios de colaboración o cooperación, para el óptimo cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con la presente Ley;

**XXII.** Brindar la información que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas le soliciten para mejorar la atención a las Víctimas, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;

**XXIII.** Brindar la información que el Consejo Ciudadano le solicite para el ejercicio de sus funciones, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;

**XXIV.** Proporcionar asistencia técnica a las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas que lo soliciten, y

**XXV.** Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 71.** Las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas deben contar al menos, con las características y atribuciones previstas en el artículo anterior.

Las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas deben remitir inmediatamente a Fiscalía Especializada de la Procuraduría los expedientes de los que conozcan cuando se actualicen los supuestos previstos en el artículo 24 de la presente Ley, o iniciar inmediatamente la carpeta de investigación, cuando el asunto no esté contemplado expresamente como competencia de la Federación.

**Artículo 72.** El servidor público que sea señalado como imputado por el delito de desaparición forzada de personas, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las acciones de búsqueda o las investigaciones, podrá ser sujeto de medidas cautelares como la suspensión temporal de su encargo, entre otras, por la autoridad jurisdiccional competente, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, el superior jerárquico puede adoptar las medidas administrativas y adicionales necesarias para impedir que el servidor público interfiera con las investigaciones.

**Artículo 73.** Las Fiscalías Especializadas deberán generar criterios y metodología específica para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas. En el caso de las desapariciones forzadas por motivos políticos de décadas pasadas, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y esta Ley, las Fiscalías Especializadas deberán emitir criterios y metodología específicos que deberán permitir realizar, al menos, lo siguiente:

A) Los procedimientos de búsqueda permanente que se lleven a cabo para buscar personas en cualquier lugar donde se presuma pudieran estar privadas de libertad como son centros penitenciarios, centros clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud y cualquier otro lugar en donde se pueda presumir pueda estar la persona desaparecida;

B) Cuando se sospeche que la víctima ha sido privada de la vida, realizar las diligencias pertinentes para la exhumación de los restos en los lugares que se presume pudieran estar, de acuerdo a los estándares internacionales, siendo derecho de los familiares solicitar la participación de peritos especializados independientes, en términos de las disposiciones legales aplicables.□□En la generación de los criterios y metodología específicos, se tomaran en cuenta las sentencias y resoluciones nacionales e internacionales en materia de búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada.

**Artículo 74.** En el supuesto previsto en el artículo 66, la Fiscalía Especializada de la Procuraduría debe continuar sin interrupción la investigación de los delitos previstos en esta Ley, en términos de lo que establezca el Protocolo Homologado de Investigación y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 75.** Las autoridades de todos los órdenes de gobierno están obligadas a proporcionar, en el ámbito de su competencia, el auxilio e información que las Fiscalías Especializadas les soliciten para la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 76.** La Procuraduría celebrará acuerdos interinstitucionales con autoridades e instituciones para coordinar las acciones de investigación de mexicanos en el extranjero y migrantes extranjeros en el país.

**Artículo 77.** Las personas físicas o jurídicas que cuenten con información que pueda contribuir a la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, están obligadas a proporcionarla a las Fiscalías Especializadas directamente, a través del número telefónico previsto en esta Ley o cualquier otro medio, en términos de la normativa aplicable.

**Artículo 78.** Las Fiscalías Especializadas no pueden condicionar la recepción de la información a que se refiere el párrafo anterior al cumplimiento de formalidad alguna.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

### SECCIÓN PRIMERA
### DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA

**Artículo 79.** La búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados.

La búsqueda a que se refiere la presente Ley se realizará de forma conjunta, coordinada y simultánea por la Comisión Nacional y las Comisiones Locales.

Los mecanismos de búsqueda deberán agotarse totalmente hasta que se determine la suerte o paradero de la persona. La Comisión Nacional de Búsqueda garantizará que los mecanismos se apliquen conforme a las circunstancias propias de cada caso, de conformidad con esta Ley y el Protocolo Homologado de Búsqueda.

**Artículo 80.** Cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una Persona Desaparecida o No Localizada mediante:

**I.** Noticia;

**II.** Reporte; o

**III.** Denuncia.

La Noticia, el Reporte o la denuncia pueden realizarse en forma anónima.

Tratándose de denuncia, no será necesaria su ratificación. Tanto la búsqueda como la investigación se llevarán a cabo sin dilación.

**Artículo 81.** El Reporte puede realizarse las veinticuatro horas del día, todos los días del año, a través de cualquiera de los siguientes medios:

**I.** Telefónico, a través del número único nacional habilitado para tal efecto;

**II.** Medios Digitales;

**III.** Presencial, ante la Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda y el Ministerio Público; o

**IV.** Tratándose de personas que no residen en el territorio nacional, a través de las oficinas consulares o embajadas de México en el extranjero, las cuales deberán remitir sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría y a la Fiscalía Especializada que corresponda.

**V.** El Sistema Nacional, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, puede establecer medios adicionales a los previstos en este artículo para recibir Reportes.

Cuando la distancia o los medios de comunicación no permitan realizar el Reporte en términos de las fracciones anteriores, este puede realizarse ante la policía o la autoridad municipal que el Ayuntamiento designe para tal efecto y que cuente con la capacitación para aplicar el protocolo de búsqueda correspondiente.

En el caso de Reportes realizados en términos de la fracción I de este artículo, la autoridad que reciba el reporte deberá proporcionar el folio único de búsqueda a la persona que lo realizó. En el caso de la fracción III, quien reciba el Reporte deberá entregar a la persona que lo realizó constancia por escrito en el que constará el folio único de búsqueda.

**Artículo 82.** La presentación de denuncias se sujetará a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 83.** Cuando se trate de una Noticia, las autoridades que no pertenezcan a la Comisión Nacional o a las Comisiones Locales y que tengan conocimiento de ésta, deben:

**a)** Recabar los datos mínimos que se desprendan de la Noticia, como se señala en el artículo 85, y

**b)** Transmitir la información de manera inmediata a la Comisión correspondiente.

**Artículo 84.** Las oficinas consulares de México deben recibir las solicitudes de búsqueda de los Familiares en México y remitirán sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional.

Cuando la búsqueda requiera de diligencias en otro país, bien sea el de origen, el de tránsito o el de llegada de la persona migrante, se deberá activar el Mecanismo de Apoyo Exterior a fin de garantizar que la información y elementos probatorios que sean necesarios puedan ser tramitados de forma inmediata y efectiva a lo largo del proceso de búsqueda.

**Artículo 85.** La autoridad distinta a la Comisión Nacional de Búsqueda que reciba el Reporte debe recabar por lo menos, la información siguiente:

**I.** El nombre, la edad y demás datos generales de la persona que lo presenta, salvo que se trate de Noticia o Reporte anónimo;

**II.** La ubicación desde la cual se realiza el Reporte, Denuncia o Noticia;

**III.** El número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con la persona, salvo que se trate de Noticia o Reporte anónimo;

**IV**. La persona que se reporta como desaparecida o No Localizada y, en su caso, sus características físicas o cualquier otro dato que permita su identificación y localización;

**V.** La narración pormenorizada de los hechos ocurridos, incluyendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar;

**VI.** La mención de las personas probablemente involucradas, con el señalamiento de todos los datos que puedan conducir a su identificación, incluida su media filiación, y

**VII**. Cualquier otra información, documentos o elementos que faciliten la búsqueda de las Personas Desaparecidas o No Localizadas y la investigación de los hechos.

Si la persona que realiza el Reporte o Denuncia no otorga la información señalada en este artículo, la instancia que la recabe debe asentar las razones de esa imposibilidad. La objeción de señalar datos por temor o imposibilidad de aportarlos por parte de quien haga la denuncia o Reporte, no será obstáculo para el inicio de la búsqueda inmediata por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La autoridad que recabe la información, documentos y elementos a que se refiere el presente artículo deberá asentar su nombre, cargo y dependencia gubernamental a la que se encuentre adscrito al momento de recibir el Reporte o Denuncia. La autoridad estará obligada a entregar una copia del Reporte o denuncia a la persona que haya acudido a realizarla.

**Artículo 86.** La autoridad que recabe la denuncia, Reporte o Noticia debe transmitirlo inmediatamente, a través de cualquier medio tecnológico o de telecomunicación, a la comisión que corresponda en términos de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, se encuentra obligada a aplicar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización.

Las autoridades que reciban la denuncia, el Reporte o Noticia deberán implementar, inmediatamente, las acciones de búsqueda que les correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo correspondiente.

El incumplimiento por parte de la autoridad obligada a la transmisión inmediata será sancionado de conformidad con la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

**Artículo 87.** Una vez que la Comisión Nacional o la Comisión Local que corresponda reciba, en términos del artículo anterior, un Reporte o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada, debe ingresar de inmediato la información correspondiente al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y generar un folio único de búsqueda.

El folio único de búsqueda debe contener como mínimo:

**a)** La información sobre la Persona Desaparecida o no Localizada a que hace referencia el artículo 85 de la Ley, y

**b)** El nombre del servidor público de la Comisión o autoridad que recibió la Noticia, Reporte o denuncia.

La Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda deben actualizar constantemente el expediente de búsqueda, para lo cual pueden solicitar, y deben proporcionar, información a los Familiares en los términos previstos en las disposiciones legales aplicables. Cuando la persona desaparecida o no localizada sea de una nacionalidad distinta a la mexicana, las autoridades involucradas en la búsqueda de dicha persona deben proveer información a los familiares que se encuentren en el exterior, a través de las autoridades consulares correspondientes o de la persona que hubieren designado para tales efectos.

Los Familiares y sus representantes tienen acceso de manera íntegra al expediente de búsqueda de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 88.** En el caso de la presentación de una denuncia, el agente del Ministerio Publico que la reciba debe proceder sin dilación a aplicar el Protocolo Homologado de Investigación y remitir la información a la Fiscalía Especializada competente, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 89.** Cuando la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente tenga noticia o reporte de una Persona Desaparecida o No Localizada, iniciará la búsqueda de inmediato.

Asimismo, informará sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando considere que la desaparición de la persona se debe a la comisión de un delito.

Para establecer la presunción de un delito se atenderá a los siguientes criterios:

**I.** Cuando la persona de la que se desconoce su paradero es menor de 18 años de edad;

**II.** Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito;

**III.** Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito;

**IV.** Cuando, aun sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener Noticia de la suerte, ubicación o paradero de

la persona, y

**V.** Cuando antes del plazo establecido en el inciso anterior aparezcan indicios o elementos que hagan suponer la probable comisión de un delito.

En todos los casos, la Unidad de Gestión podrá solicitar constituirse como coadyuvante en los procesos que se sigan por los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares.

**Artículo 90.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe instrumentar acciones de búsqueda inmediatamente, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual incluirá, entre otros, el cruce de la información ingresada al Registro Nacional con los registros o bases de datos a que se refiere el artículo 94 de esta Ley.

Asimismo, al momento de iniciar la búsqueda, debe informar a los Familiares sobre la posibilidad de canalizarlos a la autoridad de atención a víctimas que corresponda, de conformidad con la legislación en materia de víctimas.

**Artículo 91.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe solicitar a los Familiares, preferentemente a través del cuestionario establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda, la información que estime necesaria para localizar e identificar a la Persona Desaparecida o No Localizada.

**Artículo 92.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe asegurar la existencia de mecanismos eficientes para que los Familiares y sus representantes siempre tengan acceso a los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda, y puedan proponer acciones de investigación para la búsqueda y localización de la persona.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe implementar mecanismos para que los Familiares tengan conocimiento del resultado de las acciones de búsqueda, las diligencias, los indicios, evidencias y pruebas que surjan de los mismos.

Los Familiares y sus representantes podrán acompañar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, lo cual estará garantizado en todo momento, de acuerdo con las medidas previstas en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en el Protocolo Homologado de Investigación y siempre velando por salvaguardar su integridad física y emocional.

Lo dispuesto en este artículo está sujeto a lo previsto en el Código Nacional de

Procedimientos Penales.

**Artículo 93.** Durante la búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente presumirá que la Persona Desaparecida o No Localizada, se encuentra con vida.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente no podrá concluir con las acciones búsqueda, incluso en los casos en que la Persona Desaparecida o No Localizada sea declarada ausente, en términos de lo establecido en esta Ley y la legislación aplicable, salvo que haya certeza sobre la suerte o paradero de la persona o hasta que sus restos hayan sido encontrados y plenamente identificados.

**Artículo 94.** A efecto de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida o No Localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe consultar, mediante los sistemas informáticos instrumentados para ello, de manera periódica y exhaustiva las bases de datos o registros de:

**I.** Hospitales clínicas, centros de atención psiquiátrica, centros de Desarrollo Integral para la Familia, centros de salud, centros de atención de adicciones y rehabilitación, públicos y privados;

**II.** Centros de detención y reclusorios a cargo del sistema penitenciario;

**III.** Los registros de los centros de detención administrativos;

**IV.** Servicios Médicos Forenses y banco de datos forenses;

**V.** Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas;

**VI.** Albergues públicos y privados, e instituciones de Asistencia Social, en términos de la Ley de Asistencia Social;

**VII.** Panteones o lugares en los que se depositan restos mortales o cadáveres, públicos y privados;

**VIII.** Identidad de personas;

**IX.** Estaciones migratorias y listas de control migratorio;

**X.** Terminales de autotransporte terrestre, aéreo y marítimo, de pasajeros y carga; y

**XI.** Los demás registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización e identificación de las personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Las autoridades o instituciones, públicas o privadas, que administran las bases de datos o registros a que se refiere este artículo deben tomar las medidas necesarias para que

en dichas bases de datos y registros contengan la información de las personas a las que prestan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente proporcionará asistencia a las autoridades e instituciones a que se refiere el párrafo anterior a fin de facilitar el acceso a la información contenida en sus bases de datos o registros, para lo cual celebrarán los convenios correspondientes

**Artículo 95.** Cuando sea necesario para la búsqueda de una Persona Desaparecida, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente podrá solicitar al Ministerio Público que ordene los actos de investigación previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o que recabe autorización judicial para efectuar actos de investigación que requieran tal autorización previa, de acuerdo con el mismo ordenamiento, indicando, en su caso, las que tengan el carácter de urgentes.

Las peticiones señaladas tendrán que ser resueltas sin dilación alguna cuando sean urgentes, debiendo la Comisión motivar dicho carácter.

**Artículo 96.** Si en cualquier momento durante la búsqueda la persona es localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe, como mínimo:

**I.** Dar aviso a la Fiscalía Especializada que corresponda, cuando exista carpeta de investigación. En caso de que no se haya cometido ningún delito, deberá darse por concluida la carpeta de investigación.

**II.** Dar aviso inmediato a la autoridad competente en materia de atención a víctimas;

**III**. Aplicar el procedimiento correspondiente a la identificación de identidad regulado en el Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual establecerá el modo de obtención de la declaración de la persona localizada, en la cual señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su desaparición o no localización, así como los motivos de ésta y los probables responsables de la misma;

**IV**. Una vez identificada, declarar localizada a la persona y notificarlo a quien solicitó la búsqueda, a sus Familiares o, en su caso, a la persona que ésta designe;

**V.** En caso de que se localizara sin vida a la persona, se deberán aplicar las reglas para el Tratamiento e Identificación Forense y el de Notificación y Entrega de restos a Familiares, contenido en el Protocolo Homologado que corresponda, garantizando siempre proteger, respetar y restituir de manera digna a sus Familiares los restos humanos, así como entregar un informe de las circunstancias de la muerte y la forma en que se identificaron dichos restos. En este caso, las autoridades competentes deberán continuar con la investigación para la ubicación y sanción de los probables

responsables, y

**VI.** Actualizar el Registro Nacional que corresponda en términos del artículo 105 de esta Ley.

**Artículo 97.** Cuando alguna autoridad identifique a una persona que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de parentesco, identidad y domicilio, debe dar aviso a la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente, a efecto de que se verifique si su desaparición o no localización fue reportada en el Registro Nacional. En caso de no existir Reporte o denuncia, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente deberá informarlo a la Fiscalía Especializada que corresponda para incorporar los datos respectivos al Registro Nacional en términos del artículo 106 de esta Ley.

**Artículo 98.** Las autoridades involucradas en la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en el ámbito de sus competencias, deben asegurar la cadena de custodia de la información e indicios, dando vista inmediata a la Fiscalía Especializada para su procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El servidor público que incumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, será sancionado conforme a la normativa correspondiente.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DE LOS PROTOCOLOS

**Artículo 99.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que le confiere esta Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos correspondientes.

Corresponderá al Sistema la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la del Protocolo Homologado de Investigación. La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá opinión previo a la emisión de los protocolos.

Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos

humanos.

En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente:

I. Las formas en las que las autoridades recibirán el Reporte, denuncia o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada;
II. Los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, incluidos en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares;
III. Las acciones de búsqueda en el lugar de los hechos o del hallazgo;
IV. El procedimiento para definir los polígonos en donde debe realizarse la búsqueda;
V. El mecanismo de búsqueda inmediata, el cual deberá considerar la intervención de las autoridades desde el momento que se recibe el Reporte denuncia o Noticia de hechos de la desaparición, partiendo del supuesto de que la víctima se encuentra con vida;
VI. Los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial para buscar y localizar con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;
VII. Los procedimientos de búsqueda e investigación específicos para niños, niñas y adolescentes;
VIII. Los procedimientos de búsqueda e investigación para desapariciones cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos políticos;
IX. Los procedimientos de búsqueda y localización de personas migrantes, sin importar su calidad migratoria, que hayan desaparecido durante su estancia en el país, conforme los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior;
X. Los procedimientos de Actuación e Identificación Forense, que contendrá como mínimo los procedimientos para la localización, recuperación e identificación forense, con los criterios de actuación en antropología, odontología forense, autopsia médico legal, entre otros;
XI. El mecanismo de notificación a Familiares y acciones de investigación a realizar cuando se ha localizado con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;
XII. Los procedimientos para notificar y entregar de restos a Familiares de personas localizadas sin vida;
XIII. Los mecanismos de coordinación con otras autoridades para realizar la búsqueda y la investigación;
XIV. El proceso para levantar el cuestionario de información ante mortem con Familiares, personas allegadas y autoridades que puedan tener información que contribuya a la búsqueda, localización e identificación;
XV. El procedimiento para consultar la información en los registros y bases de datos a que se refiere el artículo 94 de esta Ley;

**XVI.** Los mecanismos para confrontar información con otros registros o bases de datos locales, nacionales o internacionales;
**XVII.** El procedimiento para entrevistar a autoridades y personas que puedan tener información que contribuya a la búsqueda;
**XVIII.** El mecanismo para ingresar a personas a los programas de protección, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y las disposiciones análogas en las Entidades Federativas;
**XIX.** Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales; y para la difusión del perfil de la Persona Desaparecida o No Localizada;
**XX.** Las medidas para atender a personas en situación de vulnerabilidad;
**XXI.** Los mecanismos para mantener a los Familiares informados respecto de las acciones de búsqueda realizadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
**XXII.** Los plazos y procedimientos para realizar la búsqueda,
**XXIII.** Los procedimientos para la participación de los Familiares en la búsqueda e investigación, y
**XXIV.** Los criterios para definir las acciones óptimas para la búsqueda y racionalizar los recursos empleados en la búsqueda.
**XXV.** Aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley.

Ambos protocolos deberán elaborarse con la participación de expertos en la materia, sociedad civil y familiares, conforme a estándares internacionales.

**Artículo 100**. Para elaborar y actualizar los protocolos a que se refiere el presente capítulo, se debe considerar, entre otros, los elementos siguientes:

**I.** Instrumentos de investigación, consultas comunitarias, análisis de los actores involucrados, estudios comparativos de modelos o prácticas exitosas, referencias hemerográficas, recorridos exploratorios y evaluaciones de impacto, entre otros;
**II.** Mapas de denuncias, victimización, incidencia delictiva y delincuencia georreferencial;
**III.** Estudios de agencias de cooperación y centros de investigación locales, nacionales o internacionales;
**IV.** En su caso, la situación específica del grupo social al que se encuentra dirigido el protocolo específico;
**V.** El uso de herramientas tecnológicas en términos que establece esta Ley;
**VI.** Análisis de datos y estadísticas oficiales que muestren las tendencias históricas;
**VII.** Evaluaciones participativas a través de diferentes medios como encuestas

voluntarias, estructuradas o semiestructuradas a Familiares para evaluar la percepción o la eficacia de las medidas y procedimientos contemplados en la presente Ley, y

**VIII.** Las mejores prácticas internacionales y los avances de la ciencia.

Los protocolos deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo 101**. Además de lo establecido en el artículo anterior, los protocolos contendrá las medidas que deberán realizar la Comisión Nacional y las Comisiones Locales así como las Fiscalías Especializadas en colaboración con otras dependencias e instituciones, públicas y privadas. Dichas medidas serán obligatorias a todas las instancias que integran el Sistema Nacional.

## CAPÍTULO SÉPTIMO
## DE LOS REGISTROS

### SECCIÓN PRIMERA
### DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS

**Artículo 102**. El Registro Nacional es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación.

**Artículo 103**. El Registro Nacional se conforma con la información que recaban las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas.

El Registro Nacional contendrá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

**Artículo 104.** Corresponde a la Comisión Nacional administrar y coordinar la operación del Registro Nacional.

Es obligación de las autoridades de las Entidades Federativas y de la Federación recopilar la información para el Registro Nacional y proporcionar dicha información de forma oportuna a la Comisión Nacional, en términos de lo que establece esta Ley y su reglamento.

**Artículo 105.** El Registro Nacional debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello. La información deberá ser recabada de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Para cumplir con sus fines de búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda, las Procuradurías Locales y las Fiscalías Especializadas pueden consultar en cualquier momento el Registro Nacional.

La Fiscalía Especializada competente debe actualizar el Registro Nacional, indicando si la carpeta corresponde al delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.

Si de las investigaciones se desprende que se trata de un delito diferente a los previstos en esta Ley, así se hará constar en el Registro Nacional actualizando el estado del folio, sin perjuicio de que continúe la investigación correspondiente.

Si la Persona Desaparecida o No Localizada ha sido encontrada viva o si fueron encontrados sus restos, se dará de baja del Registro Nacional y se dejará constancia de ello, sin perjuicio del seguimiento de la investigación correspondiente.

**Artículo 106.** El Registro Nacional debe contener los siguientes campos:

I. En relación con la persona que reporta la desaparición o no localización, salvo que sea anónima:

   a) Nombre completo;
   b) Sexo;
   c) Edad;
   d) Relación con la Persona Desaparecida;
   e) Clave Única de Registro de Población o cualquier documento de identificación oficial;
   f) Domicilio, y
   g) Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con ella;

II. En relación con la Persona Desaparecida o no localizada:

a) Nombre;
b) Edad;
c) Sexo;
d) Nacionalidad;
e) Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona, videos u otros medios gráficos;
f) Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos que permitan su identificación;
g) Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista;
h) Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;
i) Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación oficial;
j) Escolaridad;
k) Ocupación al momento de la desaparición;
l) Pertenencia grupal o étnica;
m) Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o equipos;
n) Historia clínica, dental, cirugías, y demás datos que permitan su identificación;
o) Estatus migratorio;
p) Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles;
q) Información sobre toma de muestras biológicas a familiares y perfiles genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses;
r) Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco Nacional de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro, y
s) Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar con el paradero de la Persona;

III. Los hechos relacionados con la desaparición o no localización, así como si existen elementos para suponer que está relacionada con la comisión de un delito;
IV. El nombre del servidor público que recibió el Reporte, denuncia o Noticia;
V. El nombre del servidor público que ingresa la información al registro;
VI. El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y
VII. El rubro o registro de la carpeta de investigación que indique el delito por el que se inició y el nombre de la autoridad ministerial encargada de dicha investigación.

Cuando la autoridad competente genere un registro debe de asignar un folio único que deberá proporcionar a la persona que realizó el Reporte, denuncia o Noticia.

Asimismo, se deben incorporar toda la información novedosa que resulte de las diligencias de búsqueda o investigación.

**Artículo 107**. Los datos obtenidos inicialmente a través de la denuncia, Reporte o Noticia deberán asentare en el Registro Nacional de manera inmediata.

Los datos e información que no puedan ser asentados de forma inmediata o que por su naturaleza requieran de un procedimiento para su obtención previsto en los protocolos a que se refiere esta Ley, deberán ser recabados por personal debidamente capacitado. Asimismo, se deberán llevar a cabo una o más entrevistas con familiares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o con otras personas, de conformidad con el protocolo homologado que corresponda, con el fin de obtener la información detallada sobre la persona. Una vez que se recabe la información deberá incorporarse inmediatamente al Registro Nacional.

El personal que lleve a cabo las entrevistas para la obtención de datos forenses deberá ser capacitado en atención psicosocial.

En caso de que la persona que denuncie o reporte la desaparición o no localización de una persona, desconozca información para su incorporación en el registro, se asentará en el reporte y no podrá negarse el levantamiento de su reporte o denuncia.

**Artículo 108.** Los datos personales contenidos en el Registro Nacional deben ser utilizados exclusivamente con el fin de determinar la suerte o paradero de la Persona Desaparecida o No Localizada y esclarecer los hechos.

Los Familiares que aporten información para el Registro Nacional tendrán el derecho a manifestar que dicha información sea utilizada exclusivamente para la búsqueda e identificación de la Persona Desaparecida o No Localizada. Los Familiares deberán ser informados sobre este derecho antes de proporcionar la información. De igual forma, podrán solicitar que no se haga pública la información de la Persona Desaparecida o No Localizada que se refieren los incisos a) al g) de la fracción II del artículo 106 de esta Ley por motivos de seguridad.

Las muestras biológicas y perfiles genéticos únicamente podrán ser utilizados para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

**Artículo 109.** El Registro Nacional puede ser consultado en su versión pública, a través de la página electrónica que para tal efecto establezca la Comisión Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo que determine el protocolo respectivo y las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

**Artículo 110.** El Registro Nacional deberá contener como mínimo los siguientes criterios de clasificación de Personas Localizadas:

I. Persona localizada que no fue víctima de ningún delito;
II. Persona localizada víctima de un delito materia de esta Ley, y
III. Persona localizada víctima de un delito diverso.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS FALLECIDAS NO IDENTIFICADAS Y NO RECLAMADAS

**Artículo 111.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas se encuentra a cargo de la Procuraduría, formará parte del Banco Nacional de Datos Forenses y contiene información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior identificación.

El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas se integra con la información proporcionada por las autoridades competentes la Federación y las Entidades Federativas.

El objetivo de este Registro Nacional es el de concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de los familiares de personas fallecidas no reclamadas.

La Procuraduría emitirá los lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan dicha información de forma homologada.

**Artículo 112.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contener como mínimo, los siguientes campos:

I. Información homologada sobre los datos del cadáver o los restos, la ropa, calzado y otras prendas u objetos. También, cuando sea posible, señas particulares como tatuajes, lunares y cualquier otro dato que permita la identificación;
II. Informe homologado sobre necropsia médico legal y dictámenes, antropología forense, odontología forense, dactiloscopia, genética forense,

entre otras, así como las fotografías del cadáver o los restos;

**III.** Información sobre el lugar, la fecha y las circunstancias de la localización y recuperación del cadáver o los restos. En caso de provenir de una exhumación se generará también la información arqueológica forense y otra información relevante;

**IV.** Información sobre la inhumación o destino final del cadáver o los restos;

**V.** Información que se desprenda de la cadena de custodia de los informes y el tratamiento del cadáver o los restos;

**VI.** Datos de la carpeta de investigación, averiguación previa, Noticia o acta circunstanciada vinculada al hallazgo;

**VII.** En caso de un accidente, una catástrofe o cualquier otra situación en donde exista un número de víctimas en lugar determinado, se deberá incluir la información disponible sobre ese evento;

**VIII.** Datos sobre las personas identificadas no reclamadas, tales como su nombre, fotografía, lugar de destino final y, cuando se requiera conforme, al protocolo homologado que corresponda, el informe forense multidisciplinario en que se confirma la identificación, y

**IX.** Lugar donde se encuentra el soporte documental de la información vertida en el registro.

Una vez que se logra la identificación del cadáver o de los restos de la persona, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá notificar a los familiares de la persona fallecida de acuerdo al Protocolo Homologado de Investigación.

Las autoridades tendrán la obligación de identificar y localizar a los familiares de la persona fallecida. En caso de que no se pueda identificar o localizar a algún familiar, la información contenida en este registro deberá enviarse al subregistro de personas identificadas no reclamadas, a fin de iniciar el proceso de localización de familiares conforme al protocolo correspondiente.

Una vez realizada la identificación positiva, la notificación a las familias y la aceptación de las familias del resultado o que se haya realizado el peritaje independiente solicitado, se podrán hacer las modificaciones respectivas al Registro Nacional y cesar las acciones de búsqueda, sin perjuicio del derecho de los Familiares de interponer los recursos legales correspondientes para impugnar la identificación.

**Artículo 113.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas es una herramienta de búsqueda e identificación. La información contenida se actualiza en tiempo real por parte de los servicios periciales o los servicios médicos forenses de la Federación y las Entidades Federativas, en cuanto se recabe la información, de

conformidad con los lineamientos que emita la Procuraduría y la Secretaría de Salud o en su caso, el protocolo que corresponda.

Para cumplir con sus obligaciones de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisiones Locales pueden consultar en cualquier momento este registro.

**Artículo 114.** El personal de servicios periciales y servicio médicos forenses deberá estar permanentemente capacitado y actualizado de conformidad con el protocolo que corresponda.

**Artículo 115**. La Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y de los servicios periciales y servicios médicos forenses se encuentran obligados a realizar las acciones pertinentes para la verificación de una probable hipótesis de identificación a partir de la información contenida en los registros previstos en esta Ley, dejando constancia del resultado.

**Artículo 116.** La información contenida en el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas estará sujeta a las disposiciones en materia de protección de datos personales y se utilizará únicamente para lograr la identificación de las personas fallecidas.

**Artículo 117.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contar con las herramientas tecnológicas necesarias para permitir la interrelación, el resguardo y la confiabilidad de la información.

**Artículo 118.** Ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación, en fosas comunes, de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de cumplir obligatoriamente con lo que establece el protocolo homologado aplicable.

## SECCIÓN TERCERA
## DEL BANCO NACIONAL DE DATOS FORENSES

**Artículo 119.** El Banco Nacional de Datos Forenses está a cargo de la Procuraduría y que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos materia de esta Ley.

El Banco Nacional de Datos Forenses se conforma con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, incluidos los de

información genética, los cuales deben estar interconectados

El Banco Nacional de Datos Forenses debe estar interconectado de búsqueda e identificación previstas en esta Ley que establezca y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado

La información deberá ser recabada de conformidad con correspondientes.

El Banco Nacional de Datos Forenses deberá realizar coincidencias permanente y continua con el Registro Nacional de Personas y el Fallecidas y No Identificadas. Así como, con otros registros del Sistema Nacional que contengan información forense de personas.

La Procuraduría emitirá los lineamientos para que las órdenes de gobierno remitan dicha información. Estos lineamientos se elaborarán considerando la opinión de expertos en la materia y de acuerdo a estándares internacionales.

**Artículo 120.** Corresponde a la Procuraduría coordinar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, con el Banco Forense Federal, en términos de lo que establezca el Reglamento.

Corresponde a las Procuradurías Locales coordinar el registro forense y compartir la información con la Procuraduría como establece esta Ley.

**Artículo 121.** Los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las Entidades Federativas deben capturar en el registro forense la información que recaben, de conformidad con la Plataforma Nacional correspondiente.

Las autoridades correspondientes en la Federación y las Entidades Federativas deben garantizar que el personal de los servicios periciales y de la Procuraduría esté capacitado de forma permanente y continua en las diferentes especialidades para el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

**Artículo 122.** La autoridad pericial encargada de la

la persona que suministra la muestra o a su representante legal el uso que le dará a la información que recabe y entregarle una constancia de la diligencia ministerial.

La información genética suministrada por los Familiares será utilizada exclusivamente con fines de identificación de Personas Desaparecidas.

**Artículo 123.** La persona que proporcione información para análisis pericial debe otorgar previamente su consentimiento por escrito, y tiene derecho a designar, a su cargo, a peritos independientes para que en su presencia se recabe la muestra.

Los servicios periciales deberán almacenar las muestras y otros objetos relevantes para la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con lo que establezca esta Ley, el protocolo correspondiente y los estándares internacionales en la materia.

Los peritos independientes a que se refiere el párrafo anterior deben contar con la certificación legalmente expedida por instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, asegurando que cumplan con los estándares de certificación nacional o internacional y cuenten con una especialidad acreditada en el ramo de las ciencias forenses que correspondan. Los peritos serán acreditados ante la autoridad judicial o ministerial que corresponda, mismas que no pueden negarla injustificadamente ni demorarse en hacer la acreditación correspondiente.

La designación y aceptación de los peritos independientes, y los dictámenes periciales que éstos formulen deben cumplir las disposiciones de la legislación procesal penal aplicable.

**Artículo 124.** El Banco Nacional de Datos Forenses, además de la información pericial y forense, útil para la identificación de una persona, debe contar con una base de datos de información genética que contenga, como mínimo:

I. La información genética de los Familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o segundo grado en línea colateral, de las Personas Desaparecidas y No Localizadas, conforme se requiera, y
II. La información genética de terceras personas en los casos en que así lo requiera la autoridad ministerial o judicial que corresponda, como datos o medios de prueba.

Las muestras para análisis pericial y su subsecuente incorporación al registro forense que corresponda en términos de esta Ley, sólo pueden recabarse a las personas

mencionadas en la fracción I del presente artículo con su aceptación expresa, informada y por escrito en una diligencia ministerial.

**Artículo 125.** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede utilizarse en otras investigaciones cuando aporte elementos para la localización de una persona, cuando sea de utilidad para otros procedimientos penales o para el ejercicio del derecho de la víctima a obtener la reparación integral.

**Artículo 126.** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede ser confrontada con la información que esté en poder de otras autoridades e instituciones, nacionales o extranjeras, así como otros bancos forenses que puedan ser útiles para identificar a una persona.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben establecer los mecanismos de colaboración necesarios para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior. Asimismo, podrán coordinarse con las autoridades de otros países que posean bases de datos, prioritariamente con aquellos países que tengan frontera o flujo migratorio relevante con México.

Cuando se trate de personas migrantes desaparecidas en México, se estará a lo que establece las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 127.** Los datos personales contenidos en el Banco Nacional de Datos Forenses deberán ser tratados de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La obtención, administración, uso y conservación de información forense deben realizarse con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, así como otros acuerdos con las instituciones internacionales que cuenten con bases de datos o bancos de datos forenses.

Una vez identificada la Persona Desaparecida o no Localizada, los titulares de los datos personales o sus familiares, según sea el caso, podrán solicitar el tratamiento de sus datos en los términos de la legislación de la materia.

## SECCIÓN CUARTA
## DE LA DISPOSICIÓN DE CADÁVERES DE PERSONAS

**Artículo 128.** Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.

Las Procuradurías y otras autoridades que tengan a su cargo servicios forenses deben tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados.

Cuando las investigaciones revelen la identidad del cadáver o los restos de la persona, el agente del Ministerio Público competente podrá autorizar que los Familiares dispongan de él y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios para continuar con las investigaciones o para el correcto desarrollo del proceso penal, en cuyo caso dictará las medidas correspondientes.

En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría de Salud.

**Artículo 129.** Las autoridades correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificas con propósito de la identificación un cadáver o resto humano antes de inhumarlo, a partir de los procedimientos establecidos por el protocolo homologado aplicable.

Una vez recabadas las muestras a que se refiere el párrafo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá autorizar la inhumación de un cadáver o resto humano no identificado. En el caso de inhumación, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que ésta sea digna, en una fosa individualizada, con las medidas que garanticen toda la información requerida para el adecuado registro y en un lugar claramente identificado que permita su posterior localización.

**Artículo 130.** Para efectos de lo dispuesto en esta Sección, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Secretaría de Salud, determinarán las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres o restos de personas, mediante lineamientos conforme a los más altos estándares internacionales que deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación.

## SECCIÓN QUINTA
## DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

**Artículo 131.** Las bases y los registros a que se refiere esta Ley deben estar diseñados de tal forma que:

I. No exista duplicidad de registros;
II. Permitan utilizar en la búsqueda y en la investigación de los delitos, las herramientas de análisis de contexto, con enfoque transnacional, a fin de determinar patrones de criminalidad, modo de operación, mapas criminológicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada, entre otros;
III. Cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Procuraduría, los que deberán ser acordes con los lineamientos que emita la Comisión Nacional en términos de la fracción XIV del artículo 53 de esta Ley, y
IV. Permitan su actualización permanente por parte de las Fiscalías Especializadas y demás autoridades competentes, en términos de lo previsto en esta Ley.

**Artículo 132.** La Procuraduría, debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses a que se refiere este Título cuenten con las características siguientes:

I. Reflejen automática e inmediatamente cada registro en el Registro Nacional para efectos estadísticos;
II. Estén interconectados en tiempo real y su información esté respaldada;
III. Una vez ingresada la información de un Reporte, denuncia o Noticia en el Registro Nacional, puedan realizar una búsqueda automática en las bases de datos referidas en esta Ley, y
IV. No cuenten con la posibilidad de eliminar registros.

La Procuraduría, con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, emitirá los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas se interconecten en tiempo real con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

**Artículo 133.** Además de lo establecido en este Capítulo, la Federación y las Entidades Federativas, deberán contar, al menos, con:

I. El Registro Administrativo de Detenciones, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y
II. El Registro Nacional de Fosas, el cual deberá contar con la información respecto

de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen.

## CAPÍTULO OCTAVO
## DEL PROGRAMA NACIONAL DE BÚSQUEDA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE EXHUMACIONES

**Artículo 134.** El Programa Nacional de Búsqueda y Localización, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deberá contener, como mínimo:

I. Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del Programa.
II. El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre la desaparición y los posibles paraderos de personas.
III. Las metodologías y procesos para recopilar y sistematizar información de las diferentes fuentes disponibles y para su incorporación y procesamiento en bases de datos o sistemas particulares para facilitar las labores de búsqueda y localización.
IV. La identificación de tiempo y lugar de episodios críticos de desaparición de personas en el país, la definición de los contextos de las desapariciones y las metodologías a emplearse para la búsqueda y localización en cada uno de esos contextos.
V. Las estrategias regionales o locales de búsqueda que se determinen de acuerdo a contextos y temporalidades específicas.
VI. Las estrategias específicas a seguir con base en la información y el análisis de contexto, para la búsqueda de personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores u otras personas o grupos que dadas sus características requieran medidas o mecanismos diferenciados de búsqueda.
VII. Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado.
VIII. El método específico de análisis de contexto que contribuya en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en episodios de violencia política del pasado, en términos de las disposiciones aplicables.
IX. El proceso para la depuración y organización de la información contenida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y su integración

y armonización con otros registros que contengan información relevante para la búsqueda y localización de personas.

**X.** Los procesos, sistemas y mecanismos para la coordinación con el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

**XI.** Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa.

**XII.** La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación.

**XIII.** El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa.

**XIV.** Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición.

**XV.** El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

**Artículo 135.** La elaboración del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, a cargo de la Procuraduría General de la República, deberá contener, como mínimo:

**I.** Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del programa;

**II.** El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre las personas fallecidas sin identificar que permita aportar información sobre la hipótesis de identificación de las personas inhumadas;

**III.** Información estadística sobre el número de cuerpos inhumados sin identificar;

**IV.** El listado de todos los panteones y cementerios del país, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar inhumados en cada uno y las circunstancias y contextos correspondientes;

**V.** El listado de todos los lugares de inhumación clandestina de cuerpos que se hayan localizado, a partir de la información que proporcionen las Procuradurías y Fiscalías Especializadas, especificando si ya se ha procesado la zona y si se han localizado restos, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar recuperados en cada uno, las circunstancias y contextos correspondientes y el estatus de los procesos de identificación respectivos;

**VI.** Las estrategias regionales o locales de exhumación que se determinen de acuerdo a contextos y/o patrones específicos;

**VII.** Los criterios logísticos de priorización de las actuaciones de exhumaciones e identificación forense, de acuerdo a información recabada;

**VIII.** La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación;

**IX.** El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa;

**X.** Las actuaciones previstas para la identificación de las personas inhumadas y para proceder a las inhumaciones controladas, así como los tiempos previstos para su realización;

**XI.** Los procesos para el intercambio de información y coordinación con el Programa Nacional de Búsqueda y Localización;

**XII.** Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado;

**XIII.** Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa;

**XIV.** Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición, y

**XV.** El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

La Procuraduría, al ejercer la facultad a la que se refiere este artículo, deberá solicitar información a las autoridades competentes que cuenten con información necesaria y considerar la opinión de la Comisión Nacional de Búsqueda y expertos en la materia.

## TÍTULO CUARTO
## DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 136.** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y atención, por sí mismas o en coordinación con otras instituciones competentes, en los términos del presente Título y de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 137.** Las víctimas directas de los delitos desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes:

**I.** A la protección de sus derechos, personalidad e intereses jurídicos;

II. A que las autoridades inicien las acciones de búsqueda y localización, bajos los principios de esta Ley, desde el momento en que se tenga Noticia de su desaparición;
III. A ser restablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado con vida;
IV. A proceder en contra de quienes de mala fe hagan uso de los mecanismos previstos en esta Ley para despojarlo de sus bienes o derechos;
V. A recibir tratamiento especializado desde el momento de su localización para la superación del daño sufrido producto de los delitos previstos en la presente Ley, y
VI. A que su nombre y honra sean restablecidos en casos donde su defensa haya sido imposible debido a su condición de Persona Desaparecida.

El ejercicio de los derechos contenidos en las fracciones I, II, IV y VI de este artículo, será ejercido por los familiares y personas autorizadas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y en la legislación aplicable.

**Artículo 138.** Los familiares de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:

I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida;
II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser fundada y motivada por escrito
III. Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación;
IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los expedientes de búsqueda;
V. Acceder a las medidas de ayuda asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial.
VI. Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promueva ante autoridad competente;
VII. Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o

internacionales en las acciones de búsqueda, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable;

**VIII.** Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia;

**IX.** Acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y mecanismos que emanen de la presente Ley;

**X.** Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la presente Ley;

**XI.** Participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de familiares, de acuerdo a los protocolos en la materia, y

**XII.** Acceder a los programas y servicios especializados que las autoridades competentes diseñen e implementen para la atención y superación del daño producto de los delitos contemplados en la presente Ley.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN

**Artículo 139.** Los Familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 140.** Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas en tanto realizan las gestiones para que otras instituciones públicas brinden la atención respectiva.

La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere el presente Título y la Ley General de Victimas, en forma individual, grupal o familiar, según corresponda.

**Artículo 141.** Cuando durante la búsqueda o investigación exista un cambio de fuero, las Víctimas deben seguir recibiendo las medidas de ayuda, asistencia y atención por la Comisión de Atención a Víctimas que le atiende al momento del cambio, en tanto se establece el mecanismo de atención a Víctimas del fuero que corresponda.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA

**Artículo 142.** Los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo que dispuesto en esta Ley y las leyes aplicables.

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia será estrictamente voluntario. Las autoridades en contacto con los Familiares deberán informar del procedimiento y efectos de la Declaración a éstos.

**Artículo 143.** Para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional que conozca de la Declaración Especial de Ausencia se estará a cualquiera de los siguientes criterios:

**I.** El último domicilio de la Persona Desaparecida;
**II.** El domicilio de la persona quien promueva la acción;
**III.** El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición; o
**IV.** El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.

**Artículo 144.** Las leyes de la Federación y de las Entidades Federativas deben establecer el procedimiento a que se refiere este capítulo, sin que el plazo para resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia exceda de seis meses a partir de iniciado el procedimiento.

Los procedimientos deberán contemplar aquellos casos en los cuales se haya declarado la presunción de ausencia o de muerte de una persona desaparecida, para permitirle acceder a la Declaratoria Especial de Ausencia y corregir el estatus legal de la persona desaparecida.

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia o Reporte de desaparición, o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante un organismo público de protección de los derechos humanos de las Entidades Federativas.

El procedimiento para emitir la Declaración Especial de Ausencia se regirá bajo los principios de inmediatez, celeridad y gratuidad. Los gastos derivados de este procedimiento, incluyendo publicación de edictos, no causarán contribución alguna en el caso de publicación en medios oficiales. La Comisión Ejecutiva, o a la Comisión de

Víctimas que corresponda, podrá otorgar las medidas de asistencia necesarias a los Familiares durante el procedimiento, incluido el gasto que se genere con motivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y demás normativa aplicable.

Los procedimientos a que se refiere este Capítulo deben contemplar la posibilidad de emitir medidas provisionales durante el procedimiento y deberán omitir requisitos que resulten onerosos para la emisión de las declaratorias. Los Familiares podrán en cualquier momento antes de emitida la Declaratoria desistirse de continuar con el procedimiento.

**Artículo 145**. La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad:

I. Reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida o No Localizada, y
II. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares de la Persona Desaparecida o No Localizada.

**Artículo 146.** La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:

I. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;
II. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en los términos de la legislación civil aplicable;
III. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;
IV. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por la ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;
V. Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida, continúen gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen;
VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes dela Persona Desaparecida;
VII. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la

Persona Desaparecida tenía a su cargo;

**VIII.** Proveer sobre la representación legal de la persona ausente cuando corresponda, y

**IX.** Establecer las reglas aplicables en caso de que la persona sea localizada con vida para el restablecimiento de sus derechos y cumplimiento de obligaciones.

**Artículo 147.** La Declaración Especial de Ausencia sólo tiene efectos de carácter civil, por lo que no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

**Artículo 148.** La Comisión Nacional de Búsqueda debe continuar con la búsqueda, de conformidad con esta la Ley, así como de las Fiscalías Especializadas de continuar con la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, aun cuando alguno de los Familiares o persona legitimada haya solicitado la Declaración Especial de Ausencia.

**Artículo 149.** Si la Persona Desaparecida declarada ausente es localizada con vida, ésta puede solicitar, ante el órgano jurisdiccional que declaró la ausencia, la recuperación de sus bienes.

Si la persona declarada ausente es encontrada sin vida, sus Familiares pueden solicitar al juez civil competente iniciar los procedimientos que conforme a la legislación civil aplicable correspondan.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

**Artículo 150.** Las víctimas de los delitos establecidos en la presente Ley tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas.

El derecho para que la víctima solicite la reparación integral es imprescriptible.

**Artículo 151.** La reparación integral a las víctimas de los delitos establecidos en la presente Ley comprenderá, además de lo establecido en la Ley General de Víctimas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en normas del derecho internacional, los elementos siguientes:

I. Medidas de satisfacción:
   a) Construcción de lugares o monumentos de memoria;
   b) Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas;
   c) Recuperación de escenarios de encuentro comunitario;
   d) Recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas, o
   e) Recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante, y

II. Medidas de no repetición que, entre otras acciones, deben incluir la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de los servidores públicos investigados o sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso y previo desahogo de los procedimientos administrativos y/o judiciales que correspondan.

**Artículo 152.** La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, son responsables de asegurar la reparación integral a las víctimas por Desaparición Forzada de Personas cuando sean responsables sus servidores públicos o particulares bajo la autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de éstos.

La Federación y las Entidades Federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a las víctimas de desaparición cometida por particulares en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

**Artículo 153.** Las Fiscalías Especializadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben establecer programas para la protección de las víctimas, los Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal o las leyes análogas de las Entidades Federativas.

También deberán otorgar el apoyo ministerial, pericial, policial y de otras fuerzas de seguridad a las organizaciones de Familiares y a Familiares en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas en campo, garantizando todas las medidas de protección a su integridad física.

**Artículo 154.** Las Fiscalías Especializadas pueden otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas, como medida urgente de protección la reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo anterior, conforme a los procedimientos y con las autorizaciones aplicables.

**Artículo 155.** Las Fiscalías Especializadas pueden otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas, como medida de protección para enfrentar el riesgo, la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados, y demás medios de protección que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, conforme a la legislación aplicable.

Cuando se trate de personas defensoras de los derechos humanos o periodistas se estará también a lo dispuesto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas.

**Artículo 156.** La incorporación a los programas de protección de personas a que se refiere el artículo 153 de esta Ley debe ser autorizada por el agente del Ministerio Público encargado de la investigación o por los titulares de las Fiscalías Especializadas correspondientes.

**Artículo 157.** La información y documentación relacionada con las personas protegidas debe ser tratada con estricta reserva o confidencialidad, según corresponda.

## TÍTULO QUINTO
## DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 158.** La Secretaría de Gobernación, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deberán coordinarse para implementar las medidas de prevención previstas en el artículo 161 de esta Ley.

Lo anterior con independencia de las establecidas en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 159.** Todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Las grabaciones deberán almacenarse de forma segura por dos años.

**Artículo 160.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben administrar bases de datos estadísticas relativas a la incidencia de los delitos previstos en esta Ley, garantizando que los datos estén desagregados, al menos, por género, edad, nacionalidad, Entidad Federativa, sujeto activo, rango y dependencia de adscripción, así como si se trata de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

Las bases de datos a que se refiere el párrafo que antecede deben permitir la identificación de circunstancias, grupos en condición de vulnerabilidad, modus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de alto riesgo en los que aumente la probabilidad de comisión de alguno de los delitos previstos en esta ley para garantizar su prevención.

**Artículo 161.** El Sistema Nacional, a través de la Comisión Nacional Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, Procuraduría y las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, debe respecto de los delitos previstos en esta Ley:

I. Llevar a cabo campañas informativas dirigidas a fomentar la denuncia de los delitos y sobre instituciones de atención y servicios que brindan;
II. Proponer acciones de capacitación a las Instituciones de Seguridad Pública, a las áreas ministeriales, policiales y periciales y otras que tengan como objeto la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación y sanción de los delitos previstos en esta Ley, así como la atención y protección a víctimas con una perspectiva psicosocial;
III. Proponer e implementar programas que incentiven a la ciudadanía, incluyendo a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, a proporcionar la

información con que cuenten para la investigación de los delitos previstos en la presente Ley, así como para la ubicación y rescate de las Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**IV.** Promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales para fortalecer la prevención de las conductas delictivas;

**V.** Recabar y generar información respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en materia de búsqueda de personas, prevención e investigación;

**VI.** Identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos, así como hacer pública dicha información de manera anual;

**VII.** Proporcionar información y asesoría a las personas que así lo soliciten, de manera presencial, telefónica o por escrito o por cualquier otro medio, relacionada con el objeto de esta Ley, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos;

**VIII.** Reunirse, por lo menos dos veces al año, para intercambiar experiencias que permitan implementar políticas públicas en materia de prevención de los delitos;

**IX.** Emitir un informe anual respecto de las acciones realizadas para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

**X.** Diseñar instrumentos de evaluación e indicadores para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, en donde se contemple la participación voluntaria de familiares;

**XI.** Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre la problemática de desaparición de personas y otras conductas delictivas conexas o de violencia vinculadas a este delito, que permitan la elaboración de políticas públicas que lo prevengan, y

**XII.** Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 162.** Las Fiscalías Especializadas deben intercambiar la información que favorezca la investigación de los delitos previstos en esta Ley y que permita la identificación y sanción de los responsables.

**Artículo 163.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben diseñar los mecanismos de colaboración que correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

**Artículo 164.** El Sistema Nacional, a través de la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, debe coordinar el diseño y aplicación de programas que permitan combatir las causas que generan condiciones de

mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial referencia a la marginación las condiciones de pobreza, la violencia comunitaria, la presencia de grupos delictivos, la operación de redes de trata, los antecedentes de otros delitos conexos y la desigualdad social.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA PROGRAMACIÓN

**Artículo 165.** Los programas de prevención a que se refiere el presente Título deben incluir metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a servidores públicos.

**Artículo 166.** La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligados a remitir anualmente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos generados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estudios sobre las causas, distribución geográfica de la frecuencia delictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos previstos en esta Ley, así como su programa de prevención sobre los mismos. Estos estudios deberán ser públicos y podrán consultarse en la página de internet del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA CAPACITACIÓN

**Artículo 167.** La Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y la autoridad municipal que el titular del Ayuntamiento determine deben establecer programas obligatorios de capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a los principios referidos en el artículo 5 de esta Ley, para servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública involucrados en la búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos.

**Artículo 168.** La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deben capacitar, en el ámbito de sus competencias, al personal ministerial, policial y pericial conforme a los más altos estándares internacionales, respecto de las técnicas de búsqueda, investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere esta Ley, con pleno respeto a los derechos humanos y con enfoque psicosocial.

**Artículo 169.** Las Instituciones de Seguridad Pública seleccionarán, de conformidad con los procedimientos de evaluación y controles de confianza aplicables, al personal policial que conformará los Grupos de Búsqueda.

**Artículo 170.** La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los lineamientos que permitan a cada orden de gobierno determinar el número de integrantes que conformarán los Grupos de Búsqueda de conformidad con las cifras de los índices del delito de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como de Personas No Localizadas que existan en cada Entidad Federativa o Municipio.

**Artículo 171.** La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar y certificar, a su personal conforme a los criterios de capacitación y certificación que al efecto establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

**Artículo 172.** Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 170 y 171, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar a todo el personal policial respecto de los protocolos de actuación inmediata y las acciones específicas que deben realizar cuando tengan conocimiento, por cualquier medio, de la desaparición o no localización de una persona.

**Artículo 173.** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben capacitar a sus servidores públicos, conforme a los más altos estándares internacionales, para brindar medidas de ayuda, asistencia y atención con un enfoque psicosocial y técnicas especializadas para el acompañamiento de las víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben implementar programas de difusión a efecto de dar a conocer los servicios y medidas que brindan a las víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley, en términos de lo previsto en este ordenamiento.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se **REFORMA** el tercer párrafo del artículo 25; se **DEROGA** el Capítulo III Bis del Título Décimo conformado por los artículos 215-A a 215-D, y se

**ADICIONA** un artículo 280-Bis al Título Décimo Séptimo, todos del Código Penal Federal, para quedar como siguen:

**Artículo 25.-** ...

...

El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo no es aplicable para los delitos que se sancionen de conformidad con lo estipulado en otras leyes.

**CAPITULO III BIS**
**Desaparición forzada de personas**

**Artículo 215-A.-** Derogado

**Artículo 215-B.-** Derogado

**Artículo 215-C**.- Derogado

**Artículo 215-D**.- Derogado.

**TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO**
**Delitos en Materia de Inhumaciones y Exhumaciones**

**Capítulo Único**
**Violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones**

**Artículo 280 Bis.- Se impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcial el cadáver o restos humanos de una persona no identificada, sin autorización de las autoridades competentes en la materia.**

**ARTÍCULO TERCERO**. Se **REFORMAN** los artículos 348, segundo párrafo; 350 bis 3, segundo párrafo; 350 Bis 4 y 350 Bis 5, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

**Artículo 348.-**...

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. **Para el caso de cadáveres de personas no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas**.

...

**Artículo 350 Bis 3.-**...

Tratándose de cadáveres de personas desconocidas o no identificados se estará a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.

**Artículo 350 Bis 4.-** Las instituciones educativas **sólo podrán utilizar cadáveres respecto de los que tengan el consentimiento, ante mortem de la persona fallecida o de sus familiares después de su muerte.**

**Las instituciones educativas que reciban cadáveres para efectos de investigación o de docencia deberán tener un registro que contenga, por lo menos:**

I. **Nombre completo de la persona fallecida;**

II. **El domicilio en el que habitaba la persona fallecida;**

III. **Edad que tenía la persona al fallecer;**

IV. **Sexo de la persona fallecida;**

V. **Estado civil de la persona fallecida;**

**VI. Nombre y domicilio del cónyuge, concubina o concubinario;**

**VII. Nombre y domicilio de los padres y en caso de haber fallecido éstos, la mención de este hecho;**

**VIII. En caso de no tener cónyuge, concubina o concubinario, o padres, el señalamiento del nombre y domicilio de alguno de sus familiares más cercanos, y**

**IX. El nombre de la institución educativa beneficiaria del cadáver.**

**Artículo 350 Bis 5.-** Los cadáveres que se hayan destinado para fines de docencia e investigación serán inhumados o incinerados.

## TRANSITORIOS

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la emisión de los instrumentos a que se refiere el Artículo Décimo Cuarto Transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y demás autoridades deberán cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a esta Ley.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales, además de los protocolos previstos en esta Ley, continuarán aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad.

**SEGUNDO.** Se abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**TERCERO.** Las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los treinta días siguientes a que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los protocolos rectores para su funcionamiento previstos en el artículo 53, fracción VIII, de esta Ley.

Dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, ésta deberá emitir el Programa Nacional de Búsqueda.

Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda deberán estar certificados dentro del año posterior a su creación.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los criterios previstos en el artículo 53, fracción L, de esta Ley, dentro de los noventa días posteriores a su entrada en funciones.

La Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales podrán, a partir de que entren en funcionamiento, ejercer las atribuciones que esta Ley les confiere con relación a los procesos de búsqueda que se encuentren pendientes. La Comisión Nacional de Búsqueda coordinará la búsqueda de las personas desaparecidas relacionadas con búsquedas en las que, a la entrada en vigor de esta Ley, participen autoridades federales.

**CUARTO.** Las Comisiones Locales de Búsqueda deberán entrar en funciones a partir de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

La Comisión Nacional de Búsqueda deberá brindar la asesoría necesaria a las entidades federales para el establecimiento de sus Comisiones Locales de Búsqueda.

**QUINTO.** El Consejo Ciudadano deberá estar conformado dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

En un plazo de treinta días posteriores a su conformación el Consejo Ciudadano deberá emitir sus reglas de funcionamiento.

**SEXTO.** El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto.

En la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, se deberán emitir los lineamientos y modelos a que refiere el artículo 49, fracciones I, VIII, XV y XVI de esta Ley.

En la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, que se lleve conforme a lo dispuesto por esta Ley, se deberán emitir los criterios de certificación y especialización previstos en el artículo 55.

**SÉPTIMO.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos previstos en el artículo transitorio anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, las Entidades Federativas deberán poner en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

**OCTAVO.** En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas, las Procuradurías Locales deberán incorporar en un registro provisional, electrónico o impreso, la información de los Reportes, denuncias o Noticias recibidas conforme a lo que establece el artículo 106 de esta Ley.

La Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la información contenida en los registros provisionales a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

**NOVENO.** El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable.

**DÉCIMO.** A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que las disposiciones contenidas en el mismo contemplen la descripción legal de conductas previstas en otras normas como delitos y por virtud de la presente Ley se denominan,

tipifican, penalizan o agravan de forma diversa, siempre y cuando la conducta y los hechos correspondan a la descripción que ahora se establece, se estará a lo siguiente:

I. En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos de esta ley, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la presente Ley;
II. En las investigaciones iniciadas en las que aún no se ejerza acción penal, el Ministerio Público la ejercitará de conformidad con la traslación del tipo que resulte procedente;
III. En los procesos iniciados conforme al sistema penal mixto en los que el Ministerio Público aún no formule conclusiones acusatorias, procederá a su elaboración y presentación de conformidad con la traslación del tipo penal que, en su caso, resultare procedente;
IV. En los procesos iniciados conforme al sistema acusatorio adversarial, en los que el Ministerio Público aún no presente acusación, procederá a su preparación y presentación atendiendo a la traslación del tipo que pudiera proceder;
V. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal que corresponda, podrá efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado, incluyendo sus modalidades, sin exceder el monto de las penas señaladas en la respectiva ley vigente al momento de la comisión de los hechos, y
VI. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, según las modalidades correspondientes.

**DÉCIMO PRIMERO.** El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Dentro de los treinta días siguientes a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le transferirá las herramientas tecnológicas y la información que haya recabado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dentro de los noventa días siguientes a que reciba la información a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá transmitir a las fiscalías especializadas la información de las Personas Desaparecidas o No Localizadas que correspondan al ámbito de su competencia.

Las Fiscalías Especializadas deberán actualizar el contenido del Registro Nacional, conforme a lo siguiente:

I. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que reciban la información, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá recabar información sobre las personas inscritas en el Registro previsto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que correspondan a su ámbito de competencia, a fin de que dicha información esté apegada a lo dispuesto en el artículo 106 y, en su caso, al artículo 112 de esta Ley;
II. En términos de la fracción anterior, las Fiscalías Especializadas que estén impedidas materialmente para actualizar la información dentro del plazo previsto, deberán publicar un padrón con el nombre de las Personas Desaparecidas o no Localizadas cuya información no haya sido actualizada, a efecto de que, dentro de los ciento veinte días siguientes, los Familiares y organizaciones de la sociedad civil proporcionen la información que pudiera resultar útil para realizar dicha actualización;
III. Una vez actualizada la información, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá ingresarla al registro que corresponda, a excepción de que la actualización revele que la persona fue localizada, en cuyo caso, se asentará en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y
IV. Al haberse realizado la acción prevista en la fracción II de este artículo, de no haberse actualizado el registro, la Fiscalía Especializada que corresponda estará materialmente imposibilitada para actualizarlo. En este supuesto, el registro permanecerá con la anotación de actualización pendiente y será migrado, con ese carácter, al registro que corresponda.

**DÉCIMO TERCERO.** El Banco Nacional de Datos Forenses, los registros forenses Federal y el de las Entidades Federativas comenzarán a operar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los tres meses siguientes a que inicie la operación de dichos registros, las autoridades que posean información forense deberán incorporarla al registro que corresponda.

**DÉCIMO CUARTO.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deberá emitir el Protocolo Homologado de Investigación a que se refiere el artículo 99 de esta Ley.

**DÉCIMO QUINTO.** Las autoridades e instituciones que recaban la información a que se refiere el artículo 103 la deberán incorporar en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**DÉCIMO SEXTO.** En las Entidades Federativas en las que no exista una Comisión de Atención a Víctimas, las instituciones públicas competentes de la Entidad Federativa deberán brindar la atención a Víctimas conforme a lo establecido en el Título Cuarto de esta Ley.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Las legislaturas de las Entidades Federativas, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.

**DÉCIMO OCTAVO.** Los lineamientos para determinar las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres o restos de personas a que refiere el artículo 130 de esta Ley deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

**DÉCIMO NOVENO.** La Procuraduría General de la República debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, conforme a lo previsto en los artículos 131, fracción III y 132, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior la Procuraduría General de la República emitirá los lineamientos necesarios para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan en forma homologada la información que será integrada al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y al Banco Nacional de Datos Forenses previstos en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por Particulares.

**VIGÉSIMO.** En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de Búsqueda, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

Asimismo, las Entidades Federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto.

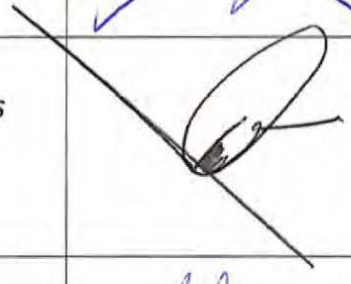
**VIGÉSIMO PRIMERO.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá emitir los lineamientos a que se refiere la fracción XIV del artículo 53 de la Ley.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE ABRIL DE 2017.

COMISIÓN DE
JUSTICIA
SENADO DE LA REPUBLICA

| COMISIÓN DE JUSTICIA | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN |
| *SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ PRESIDENTA* | | | |
| *SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA SECRETARIA* | | | |
| *SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES SECRETARIO* | | | |
| *SEN. DOLORES PADIERNA LUNA INTEGRANTE* | | | |
| *SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS INTEGRANTE* | | | |
| *SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA INTEGRANTE* | | | |

COMISIÓN DE
JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

| COMISIÓN DE JUSTICIA | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| ***SEN. MIGUEL ROMO MEDINA INTEGRANTE*** |  | | |
| ***SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO INTEGRANTE*** |  | | |
| ***SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN INTEGRANTE*** |  | | |
| ***SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR INTEGRANTE*** |  | | |
| ***SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ INTEGRANTE*** |  | | |
| **SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ *INTEGRANTE*** |  | | |

COMISIÓN DE
JUSTICIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

| COMISIÓN DE JUSTICIA | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
| **SEN. HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS** *INTEGRANTE* | | | |
| **SEN. DAVID MONREAL ÁVILA** *INTEGRANTE* | | | |
| **SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ** *INTEGRANTE* | | | |

**Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.**

**27 DE ABRIL DE 2017**

**VOTACIÓN**

| SENADOR (A) | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN |
|---|---|---|---|
| Senadora Cristina Díaz Salazar (Presidenta) | | | |
| Senador Héctor Larios Córdova (Secretario) | | | |
| Senador Armando Ríos Piter (Secretario) | | | |
| Senador Carlos Alberto Puente Salas (Secretario) | | | |
| Senador Miguel Ángel Chico Herrera (Integrante) | | | |
| Senador Esteban Albarrán Mendoza (Integrante) | | | |
| Senador Gerardo Sánchez García (Integrante) | | | |
| Senadora María Verónica Martínez Espinoza (Integrante) | | | |

**Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación y de Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.**

| SENADOR (A) | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN |
|---|---|---|---|
| Senadora Patricia Leal Islas (Integrante) | | | |
| Senador Salvador Vega Casillas (Integrante) | | | |
| Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (Integrante) | | | |
| Senador Raúl Morón Orozco (Integrante) | | | |
| Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (integrante) | | | |
| Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza (Integrante) | | | |
| Senador Manuel Cárdenas Fonseca (integrante) | | | |

**Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.**

| | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN |
|---|---|---|---|
|  SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA INTEGRANTE | | | |
|  SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON INTEGRANTE | | | |
|  SEN. DAVID MONREAL ÁVILA INTEGRANTE | | | |

**Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.**

| | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN |
|---|---|---|---|
|  SEN. LORENA CUELLAR CISNEROS INTEGRANTE | | | |
|  SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA INTEGRANTE | | | |

**Por la Comisión de Estudios Legislativos**

Senadora Graciela Ortiz González

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma

Senadora Irma Patricia Leal Islas

27-04-2017
Cámara de Senadores.
**DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.
**Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 89 votos en pro, 3 en contra y 4 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates, 27 de abril de 2017.
Discusión y votación, 27 de abril de 2017.

**DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD**

# DIARIO DE LOS DEBATES

## Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 27 de Abril de 2017

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. El dictamen está disponible en sus escaños.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo que sí se autoriza, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Ha quedado de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Ahora le consultaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que sí se autoriza.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. Tengo registrados, para presentar el dictamen, a la Senadora Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia; a la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; y a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega Martínez.

**La Senadora María del Pilar Ortega Martínez:** Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Vengo a nombre de la Comisión de Justicia a presentar el dictamen referente al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos de esta Cámara de Senadores, después de muchos meses de trabajo, hemos concluido un trabajo que comenzó desde la aprobación del inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, por la cual se facultó al Congreso Federal para expedir una Ley General de Desaparición Forzada de Personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley.

Hoy nos encontramos satisfechas por el arduo trabajo realizado en la construcción de acuerdos.

Es importante recordar que a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el texto del artículo 1o. otorga una jerarquía constitucional en el orden jurídico mexicano al establecer que: "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte".

En México hemos venido avanzando hacia la construcción de un Estado democrático, de derecho, en donde el eje transversal es justamente la protección a los derechos humanos.

Sin embargo, debemos reconocer que en nuestro país, pese a los esfuerzos legislativos, vivimos una dura realidad en materia de derechos humanos, que todavía duele y que todavía representa una crisis para el Estado mexicano.

Y es obligación de este Senado y del Congreso de la Unión, generar las condiciones necesarias para que la legislación aplicable genere medidas que permitan y obliguen al Estado mexicano a responder a las víctimas de violaciones a derechos humanos e ir transitando hacia una nueva realidad para nuestro país.

La desaparición forzada de personas ha sido y sigue siendo un lamentable fenómeno, un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, pues destroza la dignidad de la víctima, pone en riesgo su integridad física, psicológica y su vida, destruye su seguridad personal y familiar y niega la personalidad jurídica a la persona.

Diversos organismos internacionales han formulado al Estado mexicano recomendaciones sobre la necesidad de contar con medidas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y hoy, sin duda, con este dictamen damos un paso más en esta materia.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación, al corte del 30 de noviembre de 2016, se tiene un total de 29 mil 917 casos de personas desaparecidas y no localizadas en México.

Sin embargo, al diferenciar por sexo, resulta que el 65 por ciento de las mujeres tenía entre 11 y 30 años de edad; mientras que el 63 por ciento de los hombres tenía entre 18 y 40 años cuando desapareció. En los rasgos de edad, de 1 a 10 años y mayores de 50, no hay diferencias importantes en los porcentajes.

El dictamen que hoy ponemos a su consideración, y que contiene este importante dictamen, cuyo objeto es el de establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar, para generar certeza sobre, por un lado, el establecimiento de bases penales que establezcan un andamiaje en materia de tipos penales para combatir y sancionar estos delitos y, por otro, una base administrativa a partir de la Comisión Nacional de Búsqueda y sus atribuciones, enmarcados en un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, contiene los siguientes elementos que son importantes y destacables y se consideran importantes avances en esta ley.

Por un lado, se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es el de diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas, procedimientos entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Dicho sistema estará integrado por las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como Secretaria Ejecutiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la persona titular de la Policía Federal, de las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda y de la persona que designe la Comisión Nacional de Procuración de Justicia, y también de quien presida el Consejo Ciudadano.

Se establece, y fue parte, yo creo, de las partes fundamentales de las conquistas importantes, trascendentes de esta ley, que no hubieran sido posible, y lo referiré más adelante, sin la participación, impulso y convicción de los colectivos de víctimas y de la representación de organizaciones de defensa de derechos humanos, que es la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones de Búsqueda Locales.

Se crea esta Comisión Nacional de Búsqueda a quien se mandata la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional.

Se crea un Consejo Ciudadano como órgano de consulta del Sistema Nacional de Busqueda de Personas, en la que tiene como objetivo fundamental el involucramiento de la sociedad civil, de las víctimas, en el seguimiento de las actividades que desarrollará el Sistema de Búsqueda de Personas.

Los grupos de búsqueda que se crean, también la Comisión Nacional de Búsqueda contará con grupos de búsqueda, los cuales deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas, los que podrán auxiliarse por expertos, y también por cuerpos policiales especializados, y las instituciones de seguridad pública tendrán de manera inmediata la obligación de dotar de estos elementos especializados a los grupos de trabajo para su auxilio.

Las fiscalías especializadas, una de las características fundamentales de la legislación, que se pone a su consideración, corresponde a la investigación de los delitos en la materia, y para ello se dispone de la creación de una fiscalía especializada adscrita a la Procuraduría General de la República y a fiscalías o procuradurías locales a fin de tener subprocuradurías locales, con el fin de tener autoridades especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas.

Se establecen, por supuesto, tipos penales, tipos penales que se refieren justamente al delito de desaparición forzada de personas y su denominación, y esto se construyó en acorde a las convenciones internacionales.

Se establecen también las penas previstas para quien incurra en estas conductas; y otro de los propósitos de la ley también tiene que ver con la sanción a los superiores jerárquicos en los términos que dispone la propia ley.

Es fundamental señalar que aún tenemos algunas observaciones que nos hicieron llegar, que probablemente sean materia de un análisis más exhaustivo para, en su momento, perfeccionar este cuerpo normativo.

Se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los Registros Forenses y los Protocolos, es importante señalar que en la ley se describen y se crean protocolos necesarios que incluyen las directrices de actuación en los procesos de búsqueda atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrieron las conductas, las formas en que se recibirán los reportes, las denuncias o noticias de la desaparición,

los procedimientos de investigación ministerial, pericial, policial, entre otros; la declaratoria especial de ausencia, derechos de las víctimas, y los mecanismos de apoyo en el exterior.

Se incluye también en este mecanismo de apoyo en el exterior, un conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país, y requieran acceder directamente a las instituciones del ordenamiento jurídico mexicano establecidos en la ley.

Estamos conscientes en las comisiones unidas y en este trabajo que hemos desarrollado a lo largo de varios meses en donde habrá también, yo quiero reconocer al Presidente que me antecedió, al Senador, en su momento, Fernando Yunes, que estuvo acompañando este trabajo por varios meses, pero que en este trabajo, quienes ahora presidimos las comisiones, las cuatro presidentas, hemos suscrito compromisos para que en lo inmediato podamos perfeccionar este instrumento normativo.

Todo instrumento legislativo, sabemos que es perfectible, pero también es necesario señalar que hay un compromiso imperante de avanzar en la construcción de esta ley, y por ello, hoy estamos proponiendo las cuatro comisiones, que recogimos una votación unánime en la discusión que se llevó a cabo en comisiones de las compañeras y compañeros Senadores que denota la intención clara, de no detener este importante instrumento normativo, este instrumento histórico para fortalecer los derechos humanos de los mexicanos, pero sobre todo, para prevenir y erradicar un flagelo trascendente, importante, que lastima al pueblo de México, como la desaparición forzada, y la desaparición por particulares.

Sin embargo, también hemos sido conscientes de que esta ley, hay que atender algunos aspectos, y existe un compromiso entre las comisiones para fortalecer en el corto plazo a la misma, y dotarle de los elementos que sean necesarios para su perfeccionamiento en su diseño y organización, que sean acordes al mandato constitucional.

Lo anterior, para que sea un instrumento legislativo óptimo, que sea eficaz, para, por un lado, regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la fase administrativa de búsqueda y estas normas que tendrán trascendencia en el ámbito local y, por otro lado, la fase penal que quede debidamente establecida en la parte que le corresponda.

Esto será un trabajo posterior, pero hoy dejamos un cuerpo normativo robusto, un cuerpo normativo que contiene normas que fortalecerán la prevención, el combate y la erradicación de un flagelo que lastima a nuestro país, y que es la desaparición forzada.

Esta ley que hoy ponemos a su consideración responde a las necesidades latentes de la sociedad mexicana y, hoy ponemos a su consideración este esfuerzo de mucho tiempo, con el reconocimiento de quienes trabajaron en el diseño de esta reforma, de los Senadores y Senadoras que aportaron en la construcción de los acuerdos y de su perfeccionamiento, pero, por supuesto, y de manera muy especial, a los subcolectivos de víctimas y sociedad civil, organizaciones de derechos humanos que con su impulso hicieron posible que hoy estemos aquí presentando esta ley y que solicitamos a las Senadoras y Senadores voten a favor la misma, porque será un paso trascendental, histórico, en México, en la búsqueda de un país en donde haya un pleno respeto a los derechos humanos de todas y de todos.

Es cuanto, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias, Senadora Pilar Ortega.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña, también para presentar el dictamen, como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

**La Senadora Angélica de la Peña Gómez:** Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y señores Senadores:

Hoy presentamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Estudios Legislativos; y de Derechos Humanos del proyecto de Decreto que expide una ley general en términos del cumplimiento del mandato inscrito en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de nuestra Constitución. Que el 22 de abril de 2014 se

inicia el proceso de presentación de reformas a la Constitución, y que finalmente nos llevó a reformarla, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2015, y de manera formal se inician los trabajos para desarrollar, discutir, debatir y, finalmente, concretar este Decreto que hoy ponemos a su consideración de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

No ha sido un proceso fácil, porque la materia no es fácil. Nosotros discutimos aquí en el Senado de la República, cuando presentamos la reforma constitucional, si era suficiente dotarnos de un año de vacatio legis, para hacer la ley general, o más o menos.

Finalmente concretamos un año y pasaron algunos periodos ordinarios de sesiones y no logramos cumplir con la vacatio legis que nosotros mismos determinamos aquí en el Senado de la República en el Decreto que reformaba la Constitución.

Ahora bien, eso no puede ser de ninguna manera un cuestionamiento al enorme trabajo que se ha realizado, sobre todo, por la particularidad que tiene esta ley al integrar paralelamente al trabajo de comisiones las negociaciones, y quiero destacarlo de manera puntual, con representantes de familias de desaparecidos del país. Esa fue la característica del trabajo de esta ley, de este Decreto, que esperemos que pronto sea ley, porque así nos lo han exigido estas organizaciones, a pesar de los distintos pendientes que pueda haber, que al final no logramos concretar.

Por eso es muy importante señalar que este proceso ha sido muy importante, ha tenido presencia de expertos, de expertas, lo hemos discutido tomando las recomendaciones del GIEI en materia de desaparición forzada, las recomendaciones de Naciones Unidas de los distintos relatores en esta materia.

Hemos escuchado, de manera puntual, las preocupaciones de las instituciones, particularmente de quienes tienen que aplicarla.

La discusión de los tipos penales de los dos delitos nos ha llevado horas y horas, y todavía en la madrugada seguimos discutiendo para definir cómo tienen que quedar inscritos los delitos de desaparición forzada, y el de la desaparición cometida por particulares.

Me parece que la Senadora Pilar Ortega ha hecho una puntual intervención destacando las bondades jurídicas que tiene este Decreto.

Yo solamente quiero mencionar que, nuevamente es un gran mérito trabajar con mis compañeras Presidentas, tanto la Senadora Cristina Díaz como la Senadora Graciela Ortiz, y por supuesto, antes el Senador Fernando Yunes, y ahora la Senadora Pilar Ortega, que tengo que, además, destacar que lo sustituye y nunca sentimos un cambio respecto al ritmo, frente al debate, los asuntos que estábamos viendo, porque ella inmediatamente se integró en la misma dinámica, eso lo tengo que destacar.

Además, la definición puntual es algo que no tenía ninguna de las distintas iniciativas que presentamos distintos Senadores, quiero destacar la iniciativa del Senador Roberto Gil, del Senador, en su momento, Omar Fayad, de las organizaciones, dos proyectos de distintas organizaciones de colectivos que presentamos y, por supuesto, la que yo presenté y la que presentó el Ejecutivo Federal.

Materia tuvimos, sin embargo, la construcción del Decreto que hoy ponemos a su consideración, y lo quiero destacar de manera puntual, tiene configurada la comisión de búsqueda, la comisión de búsqueda como uno de los preceptos más característicos de esta ley, que se separa de la investigación, a solicitud de las familias de personas desaparecidas, y es totalmente comprensible. Algunas tienen diez años, nueve, ocho, siete, cuatro, incluso destacamos en la ley las desapariciones de la época de la guerra sucia.

Definimos el delito como un delito continúo e imprescriptible, como lo mandatan las convenciones.

Decidimos configurar, efectivamente, la búsqueda separada de la investigación, pero siempre de manera integral van a tener que estar trabajando juntas cuando se trate justamente de los delitos materia de esta ley.

Hay un debate, ciertamente, alrededor del concepto de personas no localizadas que nos llevó meses discutiendo, meses.

¿A qué conclusión llegamos? Y lo quiero decir de una manera puntual para que no haya interpretaciones incorrectas.

La primera tiene que ver, que el concepto de personas no localizadas, está inscrito cuando no se tiene ningún indicio en la noticia, reporte o denuncia de que una persona ha desaparecido.

La búsqueda comienza en el primer minuto que se recurre a las autoridades o por noticia o por reporte o por denuncia respecto de que una persona está desaparecida.

Si hay dudas respecto de que esa desaparición puede ser no voluntaria, inmediatamente, además de la búsqueda, se abre la carpeta de investigación.

El segundo elemento es que, aunque no hay indicios y queda desde el aspecto de la búsqueda como persona no localizada, si a las 72 horas no se encuentra la persona, también, inmediatamente a las 72 horas se abre la carpeta de investigación.

El precepto de persona no localizada no se aplica a las personas menores de 18 años de edad.

Desde que se va a una demarcación a presentar una denuncia que una persona menor de edad ha desaparecido, más allá de su circunstancia, inmediatamente se abre la carpeta de investigación y se ponen en funcionamiento todas las alertas, entre otras, la Alerta Amber.

Es importante señalar que nos preocupa mucho atender esta parte de la búsqueda, y ustedes van a ver que hay 53 atribuciones expresas a la Comisión Nacional de Búsqueda.

La articulación y obligación para que las comisiones estatales de búsqueda tomen en consideración estos preceptos, y obviamente, la configuración de la personalidad jurídica como órgano desconcentrado, cuyo funcionario al frente de esta comisión tiene que tener una coordinación con las comisiones estatales de búsqueda, entre otras cosas, para que quienes decidan por parte de los gobiernos estatales estén en esas comisiones, se garantice, se certifique, no haya la menor duda de que quienes están ahí le dan confianza y certidumbre a las familias de las personas desaparecidas de las entidades federativas.

Esta discusión, señoras y señores, nos llevó mucho tiempo, porque, además de conocer cada una de las historias de las miles de familias que están buscando a sus seres queridos, también escuchar, escuchar el problema que tenemos, particularmente en las entidades federativas, por la omisión, a veces señalamientos de comisión de funcionarios en la desaparición forzada.

Cómo ha sido un real viacrucis de todas estas familias al estar enfrentando a las autoridades para que sean tomadas en cuenta en la búsqueda de sus seres queridos.

Por eso me parece muy importante la configuración de estos dos delitos, que tienen que corresponder, efectivamente, a la búsqueda, pero también a la investigación y a la sanción.

Otro aspecto importante tiene que ver con la integración de un capítulo, como nos lo han pedido las organizaciones de derechos de la niñez, un capítulo expreso que refiere a disposiciones generales para las personas menores de 18 años de edad. Es importante destacar que hemos cumplido con esa solicitud de las organizaciones, y todos los demás principios: perspectiva de género, interés superior de la niñez.

Atención específica a migrantes fue también otra discusión que nos llevó mucho tiempo.

Y termino diciendo a ustedes, que ojalá podamos cumplir, aunque sea pidiéndole a la Cámara de Diputados su comprensión, entendiendo que aun cuando puedan tener algunas comisiones información del proceso que hemos seguido en la Cámara de Diputados, es importante tomar en cuenta la preocupación de las familias que

nos piden que este Decreto sea aprobado en este periodo de sesiones, y que confíen en el trabajo de las comisiones.

En la aportación también de las preocupaciones de algunas Senadoras y Senadores que también hicieron aportaciones importantes, pero sobre todo, sobre todo confíen en la construcción, aun cuando faltan cosas, aun cuando faltan pendientes, aun cuando no correspondimos al 100 por ciento de las exigencias de las familias de personas desaparecidas, está aquí, en cada uno de sus artículos, el espíritu de la aportación de ellas y de ellos. Eso lo quiero destacar.

De tal manera que, además se puede comprobar, porque no corresponde este Decreto a ninguna de las iniciativas que presentamos, porque fue construida así, y en función de esos méritos, pedimos las cuatro presidentas, que se apruebe de manera unánime este Decreto para que tengamos en el espectro del marco jurídico nacional esta ley contra la desaparición forzada y contra la desaparición cometida por particulares.

Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación.

**La Senadora María Cristina Díaz Salazar:** Con su venia, señor Presidente.

"Sin las familias, no".

Cuando iniciamos este proceso de análisis para la expedición de la ley en materia de desaparición forzada, escuchamos el sentir de cientos de familias en las diversas regiones del país. Por todas esas familias que han exigido que sus voces sean verdaderamente escuchadas, hoy, las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, presentamos el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La desaparición forzada, como bien lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas, afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, constituye un ultraje a la dignidad humana, a la libertad y a la seguridad de las personas.

Este dictamen es el producto de un amplio proceso de consulta, análisis y discusión con familiares de víctimas, colectivos, organizaciones sociales y organismos de gobierno. Por ello, hago un reconocimiento a todos los grupos parlamentarios representados en esta Soberanía quien con su esfuerzo y disposición en la construcción de acuerdos abonaron para que hoy podamos contar con un proyecto de ley que permita al Estado mexicano atender la problemática de las desapariciones en nuestro país.

Por ello expreso mi más profundo reconocimiento al Presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes, y hoy, sin duda, a una gran amiga, como es la Presidenta de la comisión, Pilar Ortega, a nuestras amigas Angélica de la Peña y Graciela Ortiz. Estamos, Senadores, quienes integran estas comisiones y el Pleno del Senado, muy cerca de lograr el objetivo.

La desaparición de personas en los últimos años ha tomado dimensiones como nunca antes en la historia reciente, vulnerando la dignidad, la libertad y la seguridad de los mexicanos.

El dictamen que hoy está a discusión tiene como propósito atender las preocupaciones de las familias de personas desaparecidas, quien con mucha insistencia nos solicitaron que la ley contara con los requisitos mínimos siguientes:

Primero.- Un mecanismo de búsqueda con participación de la sociedad y con una estructura encuadrada en todos los órdenes de gobierno que vaya desde lo federal hacia las entidades federativas.

Segundo.- La identificación y registro de personas encontradas muertas y un debido registro de los hallazgos en fosas clandestinas.

Tercero.- Que la Comisión Nacional de Búsqueda trabaje sobre un mecanismo de búsqueda en tres sentidos de intervención: coordinación con todas las instituciones involucradas en la búsqueda, con una política pública de prevención y una facultad de atracción bajo criterios específicos.

Cuarto.- Búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas de inicio y bajo los mismos protocolos de búsqueda.

Sexto.- La revisión de los tipos de delitos concurrentes como son: desaparición, trata, secuestro, tortura, delincuencia organizada, delimitación del Sistema Nacional y establecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda como un organismo operativo.

La coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y, en su caso, el traspaso de la información.

La intervención de la Policía Federal en la investigación de casos locales y la actuación de la Comisión Nacional de Busqueda cuando las autoridades locales estén plenamente rebasadas.

Me congratula poder informarles que el dictamen elaborado por estas comisiones unidas atiende de manera importante todas las preocupaciones de las familias de personas desaparecidas otorgándole al Estado una herramienta eficaz que atienda el problema de la desaparición en todas sus dimensiones.

Entre los elementos fundamentales del proyecto de ley, debemos destacar la existencia de una Comisión Nacional de Búsqueda como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con facultades plenas para llevar a cabo la búsqueda, sin que ello signifique la anulación de una investigación penal.

Segundo.- La integración de las víctimas al Consejo Nacional de Búsqueda teniendo una participación activa dentro de los grupos de trabajo.

Tercero.- La participación activa de las víctimas en tarea de búsqueda, siempre buscando garantizar que las víctimas estén informadas en todo momento de todas las actuaciones.

Cuarto.- El derecho de las víctimas de participar en la búsqueda directa y sugerir acciones de búsqueda y fuerza de tarea.

Quinto.- El fortalecimiento de la función de coordinación entre todos los niveles de gobierno a través de una instancia de coordinación general de búsqueda. Y

Sexto.- La obligación de las entidades federativas de establecer en el ámbito de su competencia instancias de coordinación de búsqueda que se encarguen de la vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones de la autoridad de las entidades federativas encargadas de la ejecución de los procesos previstos en la ley.

Senadores: Hoy hemos llegado a este lugar con una propuesta que acerca las posiciones de las diferentes fuerzas políticas, con una gran voluntad política, debo de reconocer, de todos los Senadores para atender el problema de las desapariciones que refleja las demandas de las familias de las víctimas y que sin duda será útil para el Estado mexicano.

En el Senado de la República reconocemos la verdadera dimensión y profundidad de la desaparición forzada, estamos conscientes de que nos encontramos frente a un problema que no sólo afecta a las víctimas, sino también a padres, hijos, parejas o amigos de quienes han desaparecido; mujeres y hombres angustiados que buscan desesperadamente todos los días, a todas horas y a cada minuto información de cualquier tipo, aunque sea sólo un indicio que les permita encontrar a sus seres queridos.

Gracias a todos mis compañeros por mostrar siempre sensibilidad social y voluntad para poder llevar a cabo los trabajos, aún en las diferencias de las opiniones, aún en los supuestos que les asiste a cada uno de ustedes, desde el punto de vista jurídico, logramos consolidar este proyecto de dictamen, que estoy segura, que esto va a derivar en un acuerdo importante a futuro para seguir construyendo y perfeccionando una ley que dote al Estado mexicano de un instrumento eficaz y eficiente al servicio de todos.

Quiero, por ello, antes de concluir, reconocer a los equipos de trabajo, de cada uno de nuestros secretarios técnicos que trabajaron muchas horas, todavía anoche las últimas horas atendiendo posiciones de diferentes grupos y construyendo siempre los acuerdos.

A estos grupos de trabajo mi reconocimiento, a los secretarios técnicos, a Luis Felipe Nava, a Gabriel Delgadillo, a Héctor Eduardo Muñiz, a mi amigo Publio Rivera y, sin duda, a Olivia Rubio y Edith López, muchas gracias a todos.

Y los invito a que votemos a favor de este dictamen que contiene una ley, desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas.

Muchas gracias.

Mi más profundo reconocimiento a todos ustedes.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias, Senadora Cristina Díaz.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

**La Senadora Graciela Ortiz González:** Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Es de verdad una distinción para mí, acompañar, en este proyecto de dictamen que estamos sometiendo a su consideración, a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; a la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación; y a la Senadora Pilar Ortega, Presidenta de la Comisión de Justicia, presentándoles este dictamen que me parece, establece en su contenido y en su capitulado, un instrumento jurídico de la mayor importancia para el Estado mexicano, pero fundamentalmente para las familias de todas y todos aquellos que hoy están desaparecidos y cuya ubicación no se conoce.

Dice Juan José Gómez Camacho, en su ensayo "La Desaparición Forzada de Personas, Avances del Derecho Internacional", publicado en la revista mexicana de política exterior, dice y concordamos en ello, que: "La desaparición forzada es un fenómeno tan grave, como complejo, cuya atención requiere una comprensión integral de su naturaleza". Incluso, dice el abogado: "La complejidad misma del fenómeno ha impedido que a pesar de los múltiples esfuerzos por conceptualizarlo, se pueda alcanzar una definición universalmente aceptada en los distintos instrumentos jurídicos internacionales que se ocupan de esta particular temática".

Desde luego, me parece que todos coincidimos en que las desapariciones forzadas afectan valores o los valores más profundos de toda sociedad. El arrancar del seno familiar a una persona, lastima y suprime los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Es un problema que lastima de manera grave la unidad familiar y social, y aun cuando la persecución penal de esta práctica ha ido acrecentándose en los últimos años, ha ido visibilizándose y haciendo patente la necesidad de establecerlo, lo cierto es que los problemas dogmáticos, tanto materiales como procesales, relacionados con la construcción típica de esta figura, aún subsisten. Y éste es un tema con el que nos topamos en la construcción de los trabajos de esta figura.

Por ello, las iniciativas de ley presentadas por el Presidente de la República, y de manera subrayada, de legisladores de esta Cámara, han propuesto la expedición de esta ley para prevenir, para sancionar, para erradicar los delitos en esta materia, y han sido motivo de la dictaminación, por las comisiones, que presentamos este proyecto de dictamen a ustedes para su aprobación.

Sin duda, la normatividad que se expide proviene de un trabajo arduo, de un compromiso de las comisiones dictaminadoras, de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, que en todo momento, lo dijo bien la Senadora De la Peña, en todo momento apoyaron el proceso de dictaminación, sobre todo, en las definiciones más trascendentales.

Por supuesto, hay que reconocer la aportación de especialistas en la materia, que enriquecieron y fortalecieron este proyecto de dictamen, y hay que señalar la aportación valiosísima y muy enriquecedora también, de las organizaciones de la sociedad civil, que en todo momento han puesto un gran empeño para que las familias de las víctimas puedan tener una legislación que verdaderamente atienda esta problemática con una visión de respeto irrestricto a los derechos humanos y la garantía, sobre todo, la garantía de búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.

No ha sido un camino sencillo, indudablemente, encontrar la convergencia en aspectos sustanciales de la ley que desarrollen, efectivamente, el mandato que el Constituyente Permanente expresó en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución General, ha constituido una tarea verdaderamente encomiable, como he dicho, para legisladores, organizaciones de la sociedad civil, y desde luego, el gobierno federal.

Yo considero, y estoy absolutamente convencida, que este dictamen recoge en buena medida las peticiones de organizaciones de la sociedad civil y de familiares de desaparecidos, en cuanto a generar lo que es necesarísimo, un Sistema Nacional de Búsqueda fortalecido, homologar los registros que hagan las entidades federativas en las bases de datos, garantizar la profesionalización de las autoridades en el tema de la desaparición forzada, y proporcionar atención integral a las víctimas, entre otros aspectos que me parecen relevantes, y que no quiero ya reproducir lo que aquí se ha dicho, ni mucho menos ser exhaustiva en la definición de cada uno de ellos, pero solamente destacaría algunos aspectos.

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que realizará el diseño y evaluación eficiente y armónica de todos los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, las políticas públicas y los procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización, identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en la materia.

La Comisión Nacional de Búsqueda, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional.

El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, ya se dijo aquí, son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad, ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza, da cuenta de la importancia que se le da a la tipificación de este delito.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como una herramienta indispensable, fundamental, de búsqueda e identificación, que organiza y concentra la información sobre personas desaparecidas y no localizadas, con el fin de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, para su localización, para su identificación.

Desde luego, se prevé la atención, la asistencia, la protección y en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición y se establece la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones y planes de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Señoras y señores Senadores: Yo tengo la convicción de que este modelo propuesto constituye un gran avance, un avance sin parangón, en la implementación de un sistema de búsqueda de personas que responde, me parece, de manera cabal, a la intención del legislador expresada en el artículo 73 de la Constitución Federal.

No es nada sencillo, lo vimos en el trabajo que realizaron las comisiones sustantivas de manera fundamental a lo largo de estos dos años, el lograr la armonía de todas las posiciones, muy válidas, seguramente, todas ellas, con lo que marca nuestro actual sistema jurídico constitucional y legal vigente, como aquellas que enmarcan las facultades del Ministerio Público y la adscripción de policías.

Debe considerarse también, que aún se encuentran pendientes en este Congreso de la Unión, importantes reformas al orden constitucional y legal que inciden directamente en los propósitos de esta legislación, como la de seguridad interior y mando mixto en las que aún tenemos una importante tarea por desarrollar y complementar nuestro sistema jurídico nacional.

Pero la presentación hoy de este ordenamiento que busca ser aprobado por ustedes, sin duda es un enorme avance en lo que debe ser siempre un compromiso indeclinable del Estado mexicano, el establecer los ordenamientos jurídicos para que la autoridad en todos y cada uno de los fenómenos sociales, tan graves, como es el de desaparición de personas, actúe y actúe de inmediato protegiendo lo más sagrado que tiene un país, que es la vida, la integridad de sus familias y de sus ciudadanos.

Ojalá contemos con la aprobación de todas y todos y cada uno de ustedes, de esta ley, que viene a dar respuesta a un reclamo nacional al que hoy, estoy segura, habremos de atender como nos compete hacerlo, con compromiso y, sobre todo, con responsabilidad y con lealtad a quienes sufren este dolorosísimo fenómeno en su vida familiar.

Muchas gracias.

**PRESIDENCIA DEL SENADOR**
**CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN**

**El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán:** Muchas gracias, Senadora Graciela Ortiz González.

Está a discusión en lo general. Hace uso de la tribuna la Senadora Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.

**La Senadora Layda Sansores San Román:** Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

Butacas vacías de este Senado que expresan el enorme interés que tienen los Senadores en este tema.

No hay quórum, pero así seguimos trabajando, porque hay que irnos de vacaciones.

Esta no es la ley que merecían las víctimas del delito más deleznable que puede haber, la desaparición forzada, perdónenme, pero ésta no es la ley que necesitaba México por el ayer vivido, el presente doloroso, ardiente en nuestros días, por el futuro de amenazas, más aún si insisten en militarizar el país y menos cuando lleguen las transnacionales a arrebatarle sus tierras a los campesinos.

El gobierno no está para regateos cuando está sentado en el banquillo de los acusados, más parece un documento para cumplir con las presiones internacionales y lavarse la cara.

¿Qué si tiene algunos avances?

Sí, ya hay base de datos, en fin, algunos reconocemos el esfuerzo de los familiares de las víctimas, de legisladores, de organizaciones, pero se aluden aspectos medulares.

La ley, en primer lugar, no está acorde con los estándares internacionales ni pretende combatir la impunidad, suprimió nada más y nada menos que el artículo 6 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que obliga al Estado mexicano a establecer la responsabilidad en estos delitos de todos aquellos agentes del Estado que formen parte de la cadena de mando.

El dictamen no es contundente con la responsabilidad de los cargos militares y policiacos, a éstos se les debe sancionar también como responsables y se debe castigar la omisión de los altos mandos, no solamente es quien jale el gatillo, también a los autores intelectuales, y eso no se toca.

La búsqueda podrá hacerse en las cárceles del sistema penitenciario, que cada vez que va una visita limpian de cucarachas, pero eso sí, no podrán ir a buscar a las cárceles clandestinas ni a los cuarteles militares donde está el avispero.

Peña debió empezar por ratificar la jurisdicción del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir casos individuales, ¿qué espera?

Este Senado debería exhortarlo a no desafiar a las autoridades internacionales.

¿A qué le teme Peña? Se hace pasar por el paladín de la impunidad, pero le tiene horror a la verdad.

Propone un Sistema Nacional de Búsqueda, que aquí nos han presumido.

Miren, es complejo, burocrático, tiene 54 funciones con un súper comisionado, servir al Secretario de Gobernación y, por lo tanto, al Presidente de la República.

Se tendrá que usar toda la fuerza del Estado para buscar a una persona no localizada cuando incluyeron el concepto de persona no localizada como una figura aledaña a la de desaparecido y una persona localizada, pues bien podría ser un señor que se fue de parranda.

La desaparición forzada es un delito complejo que viola múltiples derechos a la vida, a la libertad, a un trato humano y digno, el derecho a que sus familiares sepan dónde se encuentran, están en la absoluta indefensión jurídica, es un delito que no termina con la desaparición del ciudadano, se extiende a los familiares, en lo que se reconoce como abuso continuo y a veces eterno, con consecuencias indescriptibles para sus seres queridos.

Las desapariciones forzadas en México son crímenes de impunidad y olvido, con niveles similares, dice la ONU, a países que han experimentado guerras civiles como Irak y Afganistán. Por ello se requería una ley a fondo, les quedamos a deber.

Si de las nueve mil denuncias por tortura han sido castigados sólo cinco funcionarios de mediano nivel, de las casi 27 mil denuncias de desaparición forzada en la historia en nuestro país, desde la década de los 60's, de la Guerra Sucia en Guerrero, ¿saben cuántos funcionarios han sido castigados? Ninguno, absolutamente ninguno.

México ha creado un nicho de impunidad para generales, para altos mandos policiacos, para funcionarios, para gobernadores y amigos corruptos de Peña, para el propio Peña.

El caso de Ayotzinapa es el más emblemático de todos, y no ha sido resuelto, no por incapacidad, para qué tanto sistema de seguridad y tanta militarización hay en Guerrero, no, es por complicidad, porque Peña sabe, que militares, que agentes del Estado tienen las manos manchadas de sangre.

Ayotzinapa sigue siendo un dardo en el corazón del pueblo mexicano.

Peña le apostó a la desmemoria, lo que el gobierno no calculó, fueron las medidas del amor de los padres de los 43, y el coraje de seguir luchando hasta encontrarlos a pesar de las represiones que ahora sufren.

Su estoicismo y la solidaridad de la ciudadanía no permitirá que los alcance el olvido.

Los ojos desquiciados de Duarte durante su detención, son la elocuencia del desquiciamiento y el terror que vive el país, inolvidable estampa.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, que no debe ser teñido con otros colores, como decía Sade: "Que no sean los del infierno".

Nuestro voto será en contra.

¡Libertad para Mireles!

**El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán:** Muchas gracias, Senadora Layda Sansores San Román.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

**La Senadora Marcela Torres Peimbert:** Con su permiso, señor Presidente.

El 26 de septiembre de 2014 es una fecha que vivirá en la infamia.

Aquella noche, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" en Ayotzinapa, fueron desparecidos por elementos de la Policía Municipal de Iguala, sembrando un dolor inconsolable en sus familias y recordándonos a las y los mexicanos la imperdonable ausencia de legislación que impida este tipo de sucesos, vuelvan a suceder en nuestro país.

El 6 de enero de 2015 venció el plazo que tenía el Congreso de la Unión para emitir la Ley General de Desaparición Forzada, sin embargo, éste es un pendiente que data de mucho tiempo atrás.

Durante el periodo conocido como "Guerra Sucia", en aquellos 70 años en los cuales el PRI-gobierno no era muy distinto de las dictaduras latinoamericanas que también desaparecían a sus opositores políticos más radicales, cientos, quizá miles de mexicanas y mexicanos perdieron a sus seres queridos sin tener ningún mecanismo institucional disponible para encontrarlos.

La desaparición forzada no es, para desgracia de nuestro país, un fenómeno nuevo, ha sido un siniestro compañero de viaje de nuestra Patria durante toda su vida independiente.

Soy parte de la generación que creció escuchando cómo luchadores sociales, tales como Lucio Cabañas o Rosendo Radilla, entre otros, de pronto desaparecían sin más, a manos de soldados y nunca se volvía a saber su paradero.

La desaparición forzada es un crimen que daña no sólo a las víctimas y a sus familiares, sino también a nuestra sociedad en sus valores más profundos.

La desaparición forzada es la muestra tangible de la permanente tentación de un gobierno de abusar del poder, del uso indebido de las instituciones del Estado para satisfacer intereses individuales o de grupo.

Quienes cometen desaparición forzada olvidan que el monopolio legítimo de la violencia recae en el Estado para proteger a sus ciudadanas y ciudadanos, no para proteger los intereses de quienes encabezan el gobierno en turno.

Desaparecer a ciudadanas y ciudadanos es un acto horroroso que debería ser impensable en cualquier régimen, pero en particular, en un estado democrático, constitucional, de derecho, como pretendemos ser.

Si la desaparición forzada es un crimen indeseable en una sociedad democrática, su negación u ocultamiento por parte del gobierno debe ser una infamia mayúscula porque a las víctimas se les niega justicia y reparación del daño, y a la sociedad el derecho a la verdad y a la no repetición.

Las cifras de desaparición forzada en México son alarmantes, y según el Instituto Belisario Domínguez, se comparan con países como Pakistán o Sri Lanka.

¿Qué quieren que no sepamos, al confundir las cifras, incluyendo en este proyecto de ley el término "persona no localizada"?

¿Qué tipo de impunidad y corrupción buscan proteger y perpetuar maquillando los números?

Mezclar los conceptos en esta ley es un grave error, usar como cajón de sastre a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas para meter en un mismo frasco a las víctimas de desaparición con otras personas no localizadas, es un insulto a la sociedad.

Esta estrategia de controlar la estadística a través del diseño normativo de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas mermará la ya de por sí poca credibilidad del Estado respecto a su compromiso de contar con un registro de información adecuado, y lo advertimos.

Sin embargo, la aprobación de una ley general que prevenga la desaparición forzada, facilite la localización de las personas, garantice la reparación del daño a los familiares de las víctimas y provea a las ciudadanas y ciudadanos de un registro confiable, es una deuda histórica con el pueblo de México.

Como Estado, aún no les hemos podido pedir perdón a las cientos de miles de familias que sufren este problema.

Como sociedad, aún no hemos cerrado ciclos.

Ellas y ellos son víctimas del delito más grave que se puede cometer en una democracia constitucional. Y lo peor, es que son víctimas de nuestro olvido e indiferencia.

Si miramos la verdad oficial, las cifras institucionales calculadas con leyes a modo, entonces entenderemos por qué durante el mismo periodo de la "Guerra Sucia" la Procuraduría sólo reconoce oficialmente 49 casos de desaparición forzada.

En cambio, la ONU nos dice que son más de 250 casos.

La inclusión de este término en la ley continuará esta tradición. Las cifras de la sociedad civil y de las Naciones Unidas seguirán sin cuadrar con las de la Procuraduría y la Secretaría de Gobernación.

Han pasado casi ocho años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le enmendara la plana al Estado mexicano.

La sentencia del 23 de noviembre de 2009, que obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada de Rosendo Radilla y armonizar su legislación conforme a lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es un memorándum del reto colosal que tenemos como sociedad mexicana.

Hoy damos un paso, y con esto termino, hacia ser un Estado con mayores límites en el ejercicio del poder que detenta y comprometido con dar a su ciudadanía un acceso real al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño pero, sobre todo, a que nunca se vuelva a repetir esta infamia en nuestro país.

Hoy saldamos con reservas, una deuda histórica con las y los mexicanos.

La urgencia de contar con un instrumento normativo nos impidió tener uno mucho más completo y coherente con el reto que tenemos frente.

Votaremos, votaré a favor del dictamen, con reservas, porque es inconcebible, ante la realidad terrible, nacional, que no haya, por lo menos, un esfuerzo por detener este penoso crimen a nivel nacional y a nivel internacional.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

**El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán:** Muchas gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, ¿con qué objeto, Senadora?

**La Senadora Layda Sansores San Román:** (Desde su escaño) Señor Presidente, de acuerdo al artículo 106, rectificación de quórum, aquí no llegamos ni a 30 Senadores.

**El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán:** Se atiende su solicitud.

Solicito a Servicios Parlamentarios se abra el sistema electrónico para verificar el quórum, por 10 minutos.

**La Senadora Layda Sansores San Román:** (Desde su escaño) ¿No quiere para mañana, mejor?

**El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán:** En tanto, me permito informar a la Asamblea que están registrados para la discusión en lo general las siguientes Senadoras y Senadores:

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Senador Carlos Alberto Puente Salas, Senadora Patricia Leal Islas, Senador Benjamín Robles Montoya, Senador Héctor David Flores Ávalos, Senador Raúl Morón Orozco, Senadora Adriana Dávila Fernández, todos ellos para hablar en pro.

Además, quiero informar que hay 60 artículos reservados en este dictamen. Por lo cual, solicito de la manera más respetuosa a las Senadoras y Senadores se sirvan ceñirse al tiempo establecido para sus intervenciones, esto con el objeto de permitir la participación de todas las Senadoras y Senadores que se han registrado.

Sonido en el escaño del Senador Demédicis Hidalgo, ¿con qué objeto, Senador?

**El Senador Fidel Demédicis Hidalgo:** (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Vicepresidente.

Solamente para que me anote en el debate en lo general, por favor.

Muchas gracias.

**El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán:** Para hablar en pro.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

**La Senadora Layda Sansores San Román:** (Desde su escaño) Señor Presidente, me parece que es usted un hombre respetable, no sé si sepa bien el Reglamento, pero nada más le recuerdo el artículo 106, y aquí dice muy claramente que: "cuando uno de los miembros solicita, reclama el quórum, y es notorio, bastará simplemente con una declaración del Presidente", a simple vista se ve, y esto es una irresponsabilidad de parte de los Senadores que usted solapa, es una ley muy importante para que se vayan, pues no sé, están de fiesta y de despedida, pero esto no es correcto, no es respetuoso para los ciudadanos.

Entonces, no sé a qué llama usted a un tablero de 10 minutos, cuando es evidente que aquí esto está vacío.

Si no, ahí le voy a mandar unas fotos del recuerdo.

**El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán:** Aprecio y respeto su intervención, Senadora Sansores San Román.

Debo de comunicarle a usted y a la Asamblea, como es sabido por todos, que en este momento se están llevando a cabo diversas reuniones de comisiones, todavía en el procesamiento de diversos dictámenes que se pretende sean agendados en la propia sesión del día de hoy. El tablero electrónico nos dará el resultado final del quórum. Gracias, Senadora Sansores San Román.

Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Iris Vianey Mendoza.

**La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza:** Gracias, señor Presidente.

Hoy es un día muy importante para las víctimas, para las víctimas de desaparición forzada y cometida por particulares.

Para este Congreso, para este país, en ese orden de importancia, es también un día más importante, pues se está emitiendo una legislación que desde hace más de 50 años nos ha venido haciendo falta en nuestra normatividad nacional.

Una ley para buscar e investigar sobre el paradero de personas que para sus familiares cercanas y conocidas aún no saben dónde están.

En lo general participo a favor de este tan importante dictamen, ya que durante la época de los 60's, 70's y 80's se inició en nuestro país una práctica de privar de su libertad a las personas, disidentes sociales y políticas, del régimen de en ese entonces, partido único, desde entonces, las madres agrupadas en el entonces Comité de Familiares de Desaparecidos, ahora "Eureka", y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas a las Violaciones a los Derechos Humanos en México, Afadem, empezaron a buscar a sus seres queridos.

No es un fenómeno que iniciara hace 10 años, como se ha afirmado, sino hace muchos años más.

Las características de la desaparición forzada, según la doctrina internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, es una deuda histórica con las víctimas y con sus familias.

Hace una década el fenómeno de desaparición forzada se incrementó, al mismo tiempo que la violencia se fue volviendo epidémica, y a partir de mayo de 2011 miles de víctimas rompieron el silencio al que los obligaban las amenazas, tanto de autoridades, como de criminales, cuando iban a denunciar la negligencia o la interferencia de los poderes, también incluido el propio Poder Legislativo, que a pesar de que la exigencia de esta ley de desaparición tiene al menos 14 años, desde que se presentaron las primeras iniciativas, fue omiso, y demandaron que sus vivencias como víctimas del delito y víctimas de la violencia a derechos humanos tuvieran una respuesta, y obviamente, se lograra institucionalizar estructuralmente la exigencia de buscar y encontrar a sus seres queridos desaparecidos como la primera acción, y también, obviamente, investigar y sancionar este delito.

Las dolorosas y terribles circunstancias de la violencia criminal e institucional que crecen exponencialmente, nos rebasó, y fue por ello que este día es de gran relevancia para nuestro país, porque estamos atendiendo una exigencia humana primaria: el derecho a la libertad y el derecho a la vida.

Felicito y reconozco a los colectivos de víctimas de desaparición forzada, a los grupos del Comité "Eureka", al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México; reconozco también a Afadem en el comité del Cereso, y en mi más profunda solidaridad hago un reconocimiento por su fortaleza humana a las organizaciones de derechos humanos que hoy acompañan a las familias.

También, con enorme cariño y respeto, a las presidentas de las comisiones; a esas mujeres que se han esforzado por sacar un producto legislativo lo mejor posible. No sin antes recordar que votaremos a favor, pero aún es insuficiente, nos falta mucho por hacer en esta materia.

Suscribo las reservas presentadas por mi compañero, el Senador Armando Ríos Piter, en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Enhorabuena por los colectivos de víctimas, por las presidentas de las comisiones que han realizado tan excelente trabajo.

Muchas gracias.

**El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán:** Muchas gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza.

Ciérrese el sistema electrónico del tablero, hay en este momento 70 Senadores registrados, hay quórum.

Continuamos con la relación de oradores sobre el presente dictamen.

Toca el turno de la tribuna a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor.

**La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa:** Señor Presidente, le agradezco el turno, quiero hacer un voto razonado.

A mí me parece que es muy atendible que las víctimas exijan, y tenemos la obligación de servir a ellos.

Lo que creo es que podríamos haber hecho una ley mejor; pero quisiera significar que la presente ley crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se encargará de buscar a todas las personas no localizadas que pudieran ser víctimas de un delito.

Se genera la transversalidad, por eso yo creía que tendríamos que tener una ley especial del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pero queda en esta ley, y vamos a tratar de que mejore un poquito, más adelante, para coadyuvar a los delitos especiales que generó el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contempla secuestros, desaparición forzada, trata, tortura y otras formas relacionadas con la privación de la libertad, pudiendo generar indicios para la localización de alguna persona mediante protocolos de búsqueda, y en el caso de que se relacione con la comisión de algún delito, los encargados de la procuración de justicia deberán activar los protocolos necesarios para la investigación del delito.

Es importante destacar que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas funcionará de manera transversal, pues permite la articulación de las dependencias de seguridad pública, procuración de justicia para la búsqueda de personas, generando una instancia inmediata para la atención temprana para el inicio de la búsqueda de alguna persona por extravío o no localizarse.

Esta legislación, por supuesto que es perfectible, sin embargo, cumple con el requisito del Segundo Transitorio que originó la reforma constitucional del 10 de julio de 2015.

Agradezco, señor Presidente.

**PRESIDENCIA DEL SENADOR**
**PABLO ESCUDERO MORALES**

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias, Senadora Luisa María Calderón.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Patricia Leal Islas, para hablar a favor.

**La Senadora Patricia Leal Islas:** Gracias, señor Presidente.

El día de hoy hago uso de la voz en esta alta tribuna del país para expresar mis argumentos en pro de un dictamen importante para el orden jurídico mexicano, se trata de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que hoy sometemos a consideración de esta Soberanía.

Este ordenamiento atiende un justo reclamo de las organizaciones de la sociedad civil que agrupan a las víctimas de este lamentable ilícito que se ha convertido en un problema grave para México, se trata de agrupaciones y colectivos que están desesperados por conocer el paradero de sus familiares, pero además, que tienen la firme esperanza de obtener resultados en cada uno de sus casos. Es por ello que este esfuerzo es un anhelo de justicia.

En segundo término, este ordenamiento tiene la finalidad de cumplir con un mandato constitucional contenido en la reforma del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de nuestra Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que nos concedió la facultad para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley: trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En el Decreto mediante el cual se reforma la disposición mencionada, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015, y en él se determinó, además, mediante un Artículo Segundo Transitorio, que en la legislación a que se refiere el citado inciso a), fracción XXI del artículo 73 constitucional, debía regularse el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Es así que ante estos justos reclamos de la sociedad civil organizada, y en cumplimiento a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, conscientes además de la transcendencia del tema sobre el que había que legislar, el grupo parlamentario que represento se dio a la tarea de recoger todas esas inquietudes para analizar su pertinencia e incorporarlos a los trabajos, que aclaro, ya se venían realizando en la construcción del dictamen para enriquecer las iniciativas que se consideraron para obtener el resultado que hoy se presenta.

Así pues, nos dimos a la tarea de realizar una revisión intensa del trabajo con el que ya se contaba, y se consideró que en general cumplía con los estándares requeridos para una ley como la que se pretendía.

Sin embargo, después de ese análisis se advirtió que era necesario fortalecer el dictamen en dos temas que para el PAN eran fundamentales: El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y los tipos penales en la materia.

En relación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, si bien es cierto, estaba considerada en el proyecto del dictamen final; se analizó y se planteó la necesidad de que dicho sistema no estuviera referido únicamente al tema de desaparición forzada de personas, dado que el dispositivo constitucional contemplaba materias adicionales, así como otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley.

Consecuentemente era necesario diseñar un sistema integral, es decir, que tuviera una naturaleza transversal, como ya lo apuntó la Senadora Cocoa, para que fuera comprensivo de todos estos temas.

Considerando que era fundamental que mediante este sistema las familias de las víctimas de todos estos delitos tuvieran una instancia a la cual acudir para obtener información respecto de sus familiares.

Fue así como surge el diseño de este Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que hoy sometemos a la consideración de todos ustedes, el cual tiene como principal objetivo, desde luego, que sea útil para la sociedad, y que sin duda, debe fortalecerse.

En otro tema en el que pusimos especial cuidado, fue en relación a la construcción legislativa de los tipos penales, consideramos que era un tema de la más absoluta importancia para este ordenamiento.

Todos sabemos que la hipótesis normativa contenida en la descripción del tipo penal, es fundamental para un adecuado ejercicio de la acción penal, para que tenga como resultado que los perpetradores de los delitos tengan el castigo que se merecen.

De ahí que nos empeñamos que los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares quedaran establecidos en el dictamen con la mayor claridad posible.

En ese tenor, del análisis realizado en la versión final del dictamen, se advirtió que en la redacción de los artículos que preveían las conductas punibles, quedaban confusas las acciones que determinaban la comisión de los delitos, lo cual podía ocasionar que aquellos que tienen a su cargo la aplicación de la ley penal pudieran incurrir en el error de apreciación al momento de procesar a una persona por estos ilícitos.

Por ello, sin perder la esencia de las directrices establecidas en las convenciones internacionales sobre el particular, con los comentarios de expertos en la materia y las aportaciones de todos los que estuvieron trabajando en este proyecto, se obtuvo como resultado que los tipos penales descritos en el dictamen que hoy presentamos quedaran claros, pues tienen, como ya se ha dicho, la finalidad de que los responsables de estos ilícitos no queden impunes, y que con algún resquicio legal provocado por algún vacío en la ley, los delincuentes se pudieran quedar sustraídos a la acción de la justicia.

En consecuencia, con la finalidad de cumplir con una deuda social histórica y con la idea de que los tipos penales establecidos en la ley quedaran lo suficientemente claros para los que aplican la ley, se trabajó arduamente en estos conceptos en los últimos días y horas para obtener el resultado que hoy presentamos.

Ya termino, señor Presidente.

Y sólo quiero agradecer la apertura que tuvieran las presidentas de las Comisiones de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, para escuchar las inquietudes y preocupaciones de nuestro grupo parlamentario, y que pudieran incorporar, en su mayoría, las inquietudes de nuestro grupo.

Muchas gracias.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias, Senadora Patricia Leal Islas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández para hablar a favor, hasta por cinco minutos.

**El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes:** Buenas tardes. Con su venia, sus señorías.

La desaparición forzada es uno de los hechos más dolorosos de la realidad nacional, genera angustia y dolor, y es un hecho que impacta a familias y regiones. Hoy como Senado y como Estado estamos dando respuesta a esta circunstancia.

Con esta ley, el Estado, sin duda, tendrá más y mejores herramientas para enfrentar la desaparición forzada.

Si bien en los últimos años ha tenido más visibilidad, este fenómeno no es nuevo. Y para nosotros, como izquierda, es un hecho fundacional y celebramos que avancemos en esta ley.

La izquierda se define, como hoy la vemos, por el grito de "Vivos se los llevaron, y vivos los queremos", que ha sido una bandera que refleja la urgencia de legislar en la materia.

Celebramos el trabajo incluyente y, en particular, el trabajo tan intenso de todas las secretarías, de todas las comisiones, todas las secretarías, y además, de los promoventes de las diferentes iniciativas y de las organizaciones.

Este hecho, aunque no es nuevo, debemos de recordar en este acto las lamentables desapariciones forzadas que ocurrieron en los 60's y 70's en la llamada "Guerra Sucia" y los ataques a los grupos sociales, un pasaje negro de la historia nacional, donde la versión oficial del gobierno no sólo se ocultó, sino que negó a los movimientos el derecho y dándoles trato de delincuentes comunes.

Hoy, con este acto, los recordamos a quienes hicieron estos sacrificios y los traemos a la memoria, que han sido víctimas involuntarias de un flagelo que sigue vigente.

No voy a entrar más en lo de las cifras, todos sabemos los números de desaparecidos, pero también es momento de llamar a la memoria que hoy estamos discutiendo esta ley en gran parte, por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Burgos".

Con esta ley recordamos y debemos de tener presente que a partir de esto se generó la conciencia y la urgencia de esto.

Esta ley tiene muchas bondades, voy a entrar en ellas de manera muy breve, porque ha sido abordada con detalle por quien me antecedió en la palabra.

Garantiza la protección de derechos de personas desaparecidas; al final del día da una organización, una estructura de cómo el Estado mexicano puede enfrentar este reto; crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; establece una distribución de competencias más ágil; crea los tipos penales. Las bondades que ya se han comentado.

Pero quiero llamar a su atención a tres puntos que creo que le darían mayor fortaleza:

La primera, es que es deseable que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se incorpore al sistema, toda vez que ha realizado trabajos muy importantes en la materia en los últimos años.

También es muy importante aclarar y puntualizar que las recomendaciones que hace la comisión en la materia tengan el mismo nivel que las recomendaciones internacionales que sí está especificada en el cuerpo de la ley.

También hay elementos que valdría la pena darles mayor claridad, como es el tema de no localizados y algunas definiciones que están en la ley.

Sin duda, de aprobarse esta ley, hoy tendremos un instrumento legal que el Estado mexicano no tenía, pero yo estoy seguro que con éstas y otras reservas de las que hablarán mis compañeros, podremos darle mayor fortaleza al instrumento que hoy aprobamos, por lo que llamo a su voto en lo general, pero también les suplico consideren la bondad de estas observaciones.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Intervención **(1)**

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias, Senador Luis Humberto Fernández.

Tiene el uso de la palabra, también para hablar a favor, el Senador Héctor David Flores Ávalos.

**El Senador Héctor David Flores Ávalos:** Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras Senadoras:

Vengo a dar un posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del PAN, a favor del dictamen que hoy se vota, pero vengo también a acompañar con algunos argumentos que hemos presentado a lo largo de las distintas sesiones de trabajo, algunos argumentos de precisiones al texto y a solicitar de cada uno de ustedes el respaldo y un voto razonado, pretendiendo, desde luego, aprobar en lo general este texto, pero un voto razonado sobre algunos contenidos del texto, que consideramos que presentan serias deficiencias e inconsistencias, sobre todo de carácter constitucional.

Primero, considero oportuno reconocer el trabajo de la Comisión de Justicia, a cargo de la Senadora Pilar Ortega; de la Comisión de Derechos Humanos, a cargo de mi compañera Angélica de la Peña; y de la Comisión de Gobernación, a cargo de la Senadora Cristina Díaz; y desde luego, de la Comisión de Estudios Legislativos, a cargo de la Senadora Graciela Ortiz, creo que el trabajo que se hizo es un trabajo digno de reconocerse por la complejidad del tema, una complejidad que tiene una carga histórica para este país y que desde luego, representaba la necesidad de conjugar no solamente los puntos de vista de los diversos grupos parlamentarios y los puntos de vista de los Senadores y Senadoras que integran las comisiones, sino también, y de manera muy relevante, el punto de vista y la opinión de las víctimas, de las familias, de las organizaciones de la sociedad que de alguna manera recoge el dolor de quienes han padecido un ilícito, como el que se refiere o la materia que trata este dictamen.

El dictamen, decíamos, sabemos, recoge una buena parte de las demandas de estas organizaciones, de las familias, de los parientes, de las personas que durante años han padecido la frustración de la insuficiencia del Estado mexicano para resolver un problema que toma dimensiones de tragedia cuando se aterriza en un hombre y en un apellido, cuando se concreta en la desaparición de un hombre o de una mujer que es padre o madre, que es hija, que es esposo o esposa, o hermano, pero además, es una tragedia que se reproduce permanentemente y sin cesar, se trata éste, el de la desaparición forzada, de un hecho ilícito que no se agota en sí mismo, sino prolonga sus efectos en el tiempo, y esos efectos, los de la desaparición de las personas, están ligados indudablemente al dolor y al vacío de una ausencia irreparable.

Reconozco, y así lo hace mi grupo parlamentario, el enorme avance que representa trabajar en uno de los aspectos más sentidos de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, al lado de trata, al lado de otros temas como tortura, que recientemente se aprobó.

Sin embargo, a lo largo de esta discusión, el grupo parlamentario del PAN ha puesto de manifiesto diversos aspectos que son de gran preocupación y respecto de los cuales hemos presentado reservas.

En ese sentido, le pedimos a este Pleno hagamos una reflexión, decía yo, seria, sobre las reservas presentadas y permitamos que el logro que representa la expedición de esta ley no se vea empañado por defectos de carácter constitucional que no son menores.

Debemos evitar, compañeras y compañeros Senadores, que por vicios y defectos en la estructura normativa, las familias, decía yo, las esposas, los esposos, hijos, en fin, de aquellas personas desaparecidas, vean frustradas sus esperanzas de que esta ley, la que hoy votamos, les dé, efectivamente, una respuesta para encontrar ya sea a la víctima o para castigar a los responsables.

Enumero nuevamente algunas de las deficiencias que encontramos, que ya han sido mencionadas por mis compañeras y mis compañeros Senadores anteriormente.

Me voy a referir, primeramente, a la que considero de mayor relevancia.

En el grupo parlamentario del PAN pensamos que no es acertado incluir de manera entrelazada y sin distingo claro, en este mismo texto, la parte que tiene que ver con desaparición forzada de personas con la que se refiere al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Consideramos que la facultad que se deriva del artículo 73 constitucional, fracción XXI, que es eminentemente de contenido penal, no faculta a esta Asamblea, al Congreso de la Unión, para legislar sobre una materia de contenido civil, como es la declaración de ausencia.

Y más grave aún, que en este texto se pretenda mandatar o condicionar facultades de los congresos locales para legislar en esa misma materia, la materia de contenido civil de declaración de ausencia.

Nos parece, compañeros y compañeras Senadoras, que este tema, el del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la comisión que va relacionada con el mismo, debe tratarse en una ley específica de materia y contenido diferente, eso sería no solamente lo que consideramos jurídicamente pulcro, sino lo que también estimamos que le va a dar mayores garantías a las familias y a las personas que han sido víctimas de estos delitos.

Finalmente, sólo por mencionar dos temas adicionales, y con eso concluyo, señor Presidente, está el tema ya mencionado de la poca claridad con la que se recoge en este dictamen el tema sensible de la llamada persona no localizada, en contra o versus, o frente, a la persona desaparecida.

Estimamos que la confusión que se da en los términos del texto no solamente no permite a la autoridad a actuar con claridad, sino eventualmente también confundiría las cifras con las que se reportara este delito.

Y para concluir, el artículo 28 que hoy votamos, en el grupo parlamentario del PAN consideramos que los elementos del tipo no solamente no corresponden a los de desaparición forzada, sino que de manera quizá más grave deja a discreción del Ministerio Público la posibilidad de enjuiciar a personas que no están necesariamente relacionadas con la comisión de este delito.

Concluyo diciendo que en lo general, el grupo parlamentario del PAN aprueba este esfuerzo, reconocemos el trabajo que se ha hecho, pero sí le solicitamos que haya una reflexión puntual y responsable para los temas que han quedado puestos ya de manifiesto.

Gracias, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias, Senador Héctor David Flores Ávalos.

Tiene el uso de la palabra, también para hablar a favor, la Senadora Adriana Dávila Fernández.

**La Senadora Adriana Dávila Fernández:** Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores. Con su permiso, señor Presidente.

Por supuesto que es válido señalar el esfuerzo que significó construir esta iniciativa y también hacer énfasis en las horas de trabajo que se ocuparon para este producto final; sin embargo, lo que hoy se aprobará en este Senado, en este tiempo, en este momento y en estas condiciones, debería motivarnos específicamente a la reflexión, a la reflexión sobre la enorme responsabilidad que el Poder Legislativo tiene en sus acciones y también en sus omisiones en la construcción de cualquier ley o modificación de ley.

Lo que hagamos bien o mal, tarde que temprano nos alcanzará con sus consecuencias, como nos ha venido alcanzando como país.

Hace casi cinco años que entramos a este Senado, debo reconocer que me entusiasmaba, a pesar de haber sido ya Diputada Federal y servidora pública, el enorme cúmulo de experiencias que aquí se ha planteado, que aquí se refleja, gobernadores, secretarios de Estado, servidores públicos con amplios años de experiencia, una acumulación que a mi criterio, serviría justamente para hacer lo mejor en cada ordenamiento legal que tuviéramos.

Siempre pensé que la construcción de las leyes, especialmente la construcción de las leyes relacionadas en materia de derechos humanos, estaría alejada de los intereses electorales, tanto del gobierno como de la oposición. Con el paso del tiempo y la experiencia vivida, lamentablemente comprobé, como lo sabía, que no siempre fue así, y que al contrario, esos intereses siempre intervienen para la construcción de cualquier ordenamiento.

En específico en esta ley, en donde tipificamos uno de los delitos más deleznables e inconcebibles, porque en éste participan agentes del Estado, que deberían cuidar, proteger y defender a los mexicanos. El sabor que a mí me queda es agridulce.

No es ésta una conquista del Poder Ejecutivo, y tampoco vengamos a decir en esta tribuna que es una conquista del Poder Legislativo, ésta es, como siempre, la conquista de actores, ciudadanos, ciudadanas, organizaciones civiles y víctimas de estos delitos que siempre tienen que estarnos empujando para poder hacer los ordenamientos.

Lo que de este Senado debería de ser una conquista, es hacer mejor nuestro trabajo, es aprender a discutir lo que no estamos de acuerdo, y hablar con la verdad; hablar con la verdad a los ciudadanos que vienen y nos visitan, a los colectivos y a las víctimas, para decirles qué sí se puede y qué no se puede, de acuerdo a los ordenamientos legales.

Qué sí debemos hacer y qué no está en nuestras facultades hacer, no sólo establecer en las leyes la letra muerta que ha sido en los últimos años la constante, la permanente, aquí en este Senado, con tal de darle gusto a todos, para evitar pagar los costos políticos que se tengan que pagar, porque siempre estamos en procesos electorales.

Decir la verdad es parte de nuestras obligaciones, decir la verdad y cumplir nuestro compromiso sería también darle seguimiento a que lo que hoy se aprueba no se quede en esta ley, que se convertiría en una letra muerta. Tenemos que medir, tenemos que evaluar, es parte de nuestras obligaciones, y saber si somos capaces de reformar lo que estamos haciendo mal y reconocer nuestros errores.

He escuchado en muchas ocasiones lo mal calificado que está el Ejecutivo Federal, hoy, en el sexenio pasado y en otros, como los ejecutivos estatales. Y a los legisladores nos encanta decir u omitir lo que piensan los ciudadanos de nosotros. Sin duda, tampoco minimizo, éste es un paso importante.

No creo que el resultado tenga que ser prejuzgado, pero creo que lo verdaderamente relevante es hacer y dar cumplimiento a esta ley, aún con los errores que hemos señalado con tiempo y con oportunidad desde hace semanas los legisladores del PAN, desde nuestra visión, perspectiva y experiencia.

No basta cuidar la técnica legislativa, tampoco revisar y decirle a los ciudadanos, reitero, que todo es posible, el diálogo con ellos no se puede construir sólo diciendo que sí, o negando todo lo que se puede mejorar, porque

el ordenamiento que estamos haciendo no vaya a evidenciar las fallas del Estado mexicano, las fallas del Ejecutivo, las fallas del Legislativo.

La intención del grupo parlamentario del PAN, la de su servidora, siempre fue que el ordenamiento legal fuera lo más pulcro posible, es cierto, aún eso es perfectible, cualquier ley es perfectible.

Max Weber decía: "que el político debe tener amor apasionado por sus causas".

Lo cierto es que prueba mayor en este país es saber primero si seguimos los políticos teniendo causas, si los partidos políticos tenemos todavía causas o si nos está ganando la tentación electoral.

También vale la pena señalar si esas causas hoy, que se luchan, que se buscan, que se pelean, se le llama "necedad", ante la indiferencia total de quienes estamos obligados a hacer servicio público.

Sin duda éste es un avance, lo reitero, pero todavía hay muchos pendientes que resolver, que planteamos, y en cuyos compromisos hechos en las reuniones de las últimas semanas, confío, se puedan dar en esta Cámara de Senadores, más allá del receso que sigue, porque los periodos extraordinarios también existen.

Seguiré insistiendo, como lo hará el grupo parlamentario, en la propuesta que hicimos hace tres años, sobre la creación en este Senado, del Observatorio Legislativo en materia de Derechos Humanos, que no pretende sustituir ninguna comisión, que lo único que busca es saber si las leyes que estamos aprobando funcionan.

El PAN planteó sus dudas, hizo sus observaciones, generó sus discusiones, pero debo asegurarles que siempre fue con la intención de hacer un mejor ordenamiento y luchar hasta el último momento, con pasión, para lograrlo.

Confío en que la prevención, sanción y erradicación de estos delitos serán prioridad del Ejecutivo Federal, pero también de los ejecutivos locales, que no evadan su responsabilidad.

Confío también en que los compromisos hechos para perfeccionar más este instrumento, sean cumplidos. Espero y deseo sinceramente, que todos los partidos políticos venzamos la tentación de usar estos temas en la arena electoral. Creo, estoy convencida de que las cosas pueden mejorar.

Este ordenamiento jurídico debe traducirse concretamente en algunas cosas, castigar a quienes cometen estos delitos, buscar a las víctimas de estos delitos, cumplir correctamente con lo que nos mandata en la prevención y sanción, el artículo 73 constitucional. Pero más confío en que la justicia para las familias no sea inflar las cifras derivadas de las fallas que hemos señalado con la tentación, justamente, de decir que hay una labor cumplida.

Termino, señor Presidente, diciendo e invitando a todos mis compañeros, y reitero, que la tentación no nos venza, estamos a muy poco de un proceso electoral, local primero, federal después, pero las víctimas no tienen que pagar las consecuencias del estira y afloja permanente, en ésta y en la Cámara de Diputados, que nos evita que los ordenamientos salgan lo mejor posible para ceder un ordenamiento por el otro.

Ésta es una ley que debe perfeccionarse, éste es un ordenamiento que debe mejorar. Y estoy segura que si hay voluntad política, que si no hay mezquindad y que si hay compromiso, lo podemos hacer, independientemente del tiempo que nos quede.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias, Senadora Adriana Dávila.

Tiene el uso de la palabra, para hablar a favor, también, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

**El Senador Fidel Demédicis Hidalgo:** Con su venia, señor Presidente.

Desde lo más profundo del dolor infinito de quienes han padecido las desapariciones de sus familiares, de parte del Estado, surgió un grito que se hizo popular en todas las manifestaciones donde exigíamos que los compañeros y compañeras que habían sido víctimas de la violencia del Estado, nos lo entregaran.

"Vivos se los llevaron y vivos los queremos".

Esa seguirá siendo la exigencia de quienes hemos estado cerca de compañeros y compañeras que seguimos con la esperanza, a pesar de los pasos de los años, que sigan vivos, y que un día este instrumento legal que el día de hoy, yo espero que lo aprobemos por unanimidad, a pesar de las diferencias o de que pensamos que algo le falta a la ley, le digamos al pueblo de México que el Senado mexicano por fin, por fin, después de miles y miles de desapariciones forzadas, emite un instrumento legal para ver cómo se corrige este terrible problema que vive el país.

Las cifras oficiales ya todos ustedes las conocen, todos aquí han venido a decir que son miles, pero hay que revisar a cuántos se han castigado por este delito gravísimo que atenta contra la estabilidad no sólo de las familias, atenta contra la estabilidad de la sociedad entera.

Cuántas desapariciones forzadas hubo en el México 68, no sólo fue una masacre, no, de miles de estudiantes nunca se supo su paradero, los responsables tienen nombre y tienen apellido. Por eso este Senado no puede ser cómplice vergonzante de que aunque sea el de hasta arriba, como fue el caso de Gustavo Díaz Ordaz, se le tiene que sancionar con todo el peso de la ley, porque el sufrimiento del pueblo es inmenso.

¿Qué delito cometieron los luchadores sociales que se atrevieron a desafiar el régimen que oprimía al pueblo?

¿Qué delito cometieron? Querer democracia, querer que el voto fuera libre, universal, secreto y consciente.

¿Qué delito cometieron? Querer comer tres veces al día alimentos sanos, nutritivos y suficientes.

¿Qué delito cometieron? Querer salud universal para sus familias.

¿Qué delito cometieron? Querer tener una vida digna.

Ese es el delito de los luchadores sociales, miles tuvieron que entregar sus vidas mediante este método horrendo y criminal para que hoy estemos sacando a la luz esta ley.

¿Qué son las desapariciones forzadas? Son aquellas, aquellas que desaparecen personas, principalmente por el Estado o sus agentes, y lo más grave, es que siempre se niegan a reconocerlo.

Por eso, desde esta tribuna seguiremos exigiendo que en México, que en México existan comisiones de la verdad, como existen en casi todos los países del mundo, hasta en Uganda, en Chile, en Honduras, en casi todos los países donde ha habido crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas de aquellos que se opusieron a los regímenes autoritarios y asesinos, tuvieron y tienen sus comisiones de la verdad.

No solapemos, sea quien sea, el pueblo exige justicia y mientras el pueblo no tenga justicia, entiéndanlo bien, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, el gobierno no tendrá paz, no falla, nos ocultan a la suerte.

Y el paradero a su suerte y el paradero de la víctima, normalmente jamás se sabe, de una luchadora ejemplar, doña Rosario Ybarra de Piedra, ella sigue esperando que su hijo aparezca vivo, porque vivo se lo llevaron, y vivo se lo tienen que entregar.

Normalmente, estas personas nos dejan fuera del alcance de la protección de la ley, la mayoría de las veces no se conforman con desaparecerlos, los someten a torturas, a torturas de la Edad Media que les generan dolores indecibles y después, y después viene la muerte.

Hay una muerte que es lenta, que se llama muerte psicológica de los familiares. Por eso este Senado no puede caer en complicidades. Compañeras, compañeros, esta ley es perfectible, no le busquemos, no le busquemos las fallas, veamos las bondades. Hoy México va a tener un instrumento legal para que los que cometen este

tipo de crímenes sean sancionados con todo el peso de la ley, el tema aquí es que no haya impunidad absolutamente para nadie, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, porque si hay impunidad, porque tienen el más alto rango en este país, entonces esta ley va a servir de poco, porque los crímenes de Estado, algunos, algunos pueden señalar que el de hasta arriba no tiene nada qué ver, pero normalmente un crimen de Estado, una desaparición forzada que se ordena, el de hasta arriba siempre se le entera y más si es una persona como la que señalaba la compañera de Acción Nacional, Marcela Torres, nombró aquí a un gran hombre, al maestro Genaro Vázquez Rojas. Todos sabemos qué quería Genaro, más los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, todos sabíamos lo que quería, que su pueblo de Guerrero viviera dignamente, se fue y no lo logró, porque hoy Guerrero es uno de los estados más pobres de este país, en donde se violentan, en donde se violentan todos los días los derechos humanos de nuestros paisanos guerrerenses.

Concluyo diciéndoles, compañeros, que voy a votar a favor de este instrumento legal, porque hay que tenerlo, si faltaran algunas cosas luego buscaremos cómo incorporárselas, es muy importante.

Exigimos la aparición con vida de los desaparecidos forzados en México y castigo ejemplar, sean quienes sean los autores materiales e intelectuales.

"Vivos se los llevaron, y vivos los queremos".

Por su atención, muchas gracias.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias, Senador Fidel Demédicis.

Los Senadores Carlos Alberto Puente, Benjamín Robles y Raúl Morón, me han pedido que se registren sus intervenciones en el Diario de los Debates.

**El Senador Carlos Alberto Puente Salas:** Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(2)**

**El Senador Benjamín Robles Montoya:** Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(3)**

**El Senador Raúl Morón Orozco:** Intervención. Con el permiso de la Presidencia. **(4)**

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** En consecuencia, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

Por parte del Senador Armando Ríos Piter, quien presenta propuestas de modificación a los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 24, 28, 29, 33, 34, 44, 49, 50, 53, 56, 60, 62, 66, 67, 80, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 123, 124, 127, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 161, 170, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Segundo Transitorios y la adición de un nuevo artículo 31 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por parte del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: 45, 53, 60, 66, 85, 99 y 164 de la misma ley.

De la Ley General de Salud, la Senadora Iris Vianey Mendoza, adición de los artículos 347, 348, 349, 350 Bis, 350 Bis 1 y 350 Bis 2.

¿Alguna otra reserva?

Si no hay ninguna reserva, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

**VOTO POR OFICIO**

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Doy cuenta de la votación. Se emitieron 89 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muy bien. Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto que expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para que presente sus reservas. Senador Armando Ríos Piter, ¿las presenta en una exhibición? Muy bien.

Va a presentar todas sus reservas en una exhibición, por lo tanto, le vamos a dar el tiempo que requiera.

**El Senador Armando Ríos Piter:** Con su permiso, señor Presidente.

Ya han comentado, quienes me han antecedido en el uso de la voz, la trascendencia, la importancia de este dictamen, un dictamen que no solamente ha implicado un año o dos desde que el famoso decálogo del Presidente Peña Nieto nos pusiera como Congreso a discutir y a debatir, sino que desde las horas terribles de la "Guerra Sucia" en México, pues no había encontrado en el Congreso de la Unión un espacio que se pusiera a analizar y, sobre todo, a crear una ley que permitiera tener condiciones institucionales para atender este terrible flagelo.

Yo lo decía hoy en la Comisión de Gobernación, me parece que hay que celebrar que tengamos este dictamen, pero también debo señalar que no puedo quitarme el mal sabor de boca, de que en un tema que me parece realmente importante, y estoy presentando un conjunto de reservas, pero es sobre el que más quiero enfatizar, el que tiene que ver con llamarle a los desaparecidos "personas no localizadas", no haya querido ceder el gobierno.

Me parece, y todos los que estuvimos atentos a esta discusión que duró varios meses, que no haber querido ceder en quitar, en eliminar el concepto de "personas no localizadas" podría parecer algún argumento legal, alguna suerte de planteamiento legítimamente jurídico para tratar de darle orden y cauce al proceso, especialmente de buscar aquellas personas desaparecidas, y ese argumento podría entenderse de alguna manera.

Pero, desde mi punto de vista, esa forma de entender uno de los principales fenómenos delictivos, uno de los principales ejemplos del colapso institucional que prevalece en muchas partes de nuestro país es, no un asunto de forma, sino es un asunto de un gran trasfondo político, no se quiere reconocer la realidad, se legisla, qué bueno, voté a favor.

Pero me parece que es indispensable que quitemos este concepto de "personas no localizadas" y llamarle a las cosas como son, son personas que están desaparecidas, son personas que tal vez han sido desaparecidas por alguna autoridad municipal que, coludida con criminales, hoy está sepultando a gente en distintas partes del territorio; le estoy dando la vuelta al país en este momento. Estuve en Veracruz, 256 personas en una fosa clandestina, esa fue la noticia con la que llegué a la capital, en Xalapa.

Después me fui a Coahuila, y cerca, ahí en Torreón la gente me decía "aquí no se habla de esto, pero es una realidad", y es una realidad en Tamaulipas, y es una realidad en Guerrero, y es una realidad en Michoacán, y hoy los desaparecidos tienen que ver con que este país se ha convertido en una enorme fosa clandestina.

De tal manera, amigos y amigas, que quererle llamar a los desaparecidos no localizados o no localizadas y tratar de argumentarlo solamente por un contexto de tipo jurídico, me parece que es rehusar la importante voluntad política que hay que mandarle como señal y como mensaje a tantas personas, a tantos hombres y mujeres que hoy tienen familiares que no encuentran, no solamente son 43 de Ayotzinapa, son los cinco que se perdieron allá en Tierra Blanca, Veracruz, o son tantos hombres y mujeres que en distintos foros llegan y con lágrimas exhiben la problemática del Estado mexicano.

Yo los exhorto, y aquí están las reservas presentadas, a que quitemos la palabra "no localizados".

No existe un referente internacional que le llame a los desaparecidos "no localizados", y será, amigos y amigas, como queremos que sea esta ley, una muestra de que el terrible problema de inseguridad y de violencia que hoy prevalece en el país tenemos la altura para reconocerlo en su profundidad y en toda la dimensión de lo que significa.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuestas de modificación



**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias, Senador Armando Ríos Piter.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas que ha presentado el Senador Ríos Piter.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas que anteriormente fueron enunciadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

De manera visible, señor Presidente, no se admiten las reservas.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. La votación de los artículos se hará conjuntamente con los demás artículos reservados. Las propuestas de adición se dan por desechadas.

Tiene el uso de la palabra, para presentar sus reservas, el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

Senador, ¿las presentaría en una exhibición? Ya las ha presentado el Senador, en su intervención hizo mención a los artículos que iba a reservar, por lo tanto, las propuestas de modificación están disponibles en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos 45, 53, 60, 66, 85, 99 y 164.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

De manera visible, señor Presidente, no se admiten.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. La votación de los artículos se hará conjuntamente con los demás artículos reservados. Las propuestas de adición se dan por desechadas.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar sus reservas respecto a la Ley General de Salud. Y Senadora, le preguntaré lo mismo, ¿las presenta en una sola exhibición? Muchas gracias, Senadora.

**La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza:** Gracias, señor Presidente.

Quiero presentar una serie de reservas a la Ley General de Salud, para reformar artículos de esta ley que están estrechamente relacionados con la reforma en materia de desaparición, que estamos formulando, y que fueron presentados ya en una iniciativa con proyecto de Decreto, donde se proponía reformas a 23 ordenamientos que presentamos antes en este honorable cuerpo legislativo.

Y fue el 20 de septiembre de 2016 que se presentó la primer miscelánea, acompañada por los colectivos de víctimas, como una miscelánea en derechos humanos que se presentara ante este Congreso donde se tocaban diversos temas que hoy queremos replantear.

Uno de los ordenamientos que propusimos incorporar fue, precisamente, la reforma a la Ley General de Salud, y por ello me atrevo a incorporar en este dictamen de la Ley General de Salud, artículos que seguramente por la intensidad y densidad de los consensos a los que hubo que llegar para dotarnos de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, no fueron considerados por las comisiones unidas.

La propuesta de reforma a los 23 ordenamientos que presentamos varios Senadores, les fue turnada desde el mismo 20 de septiembre para incorporar tanto la reforma a la Ley General de Víctimas como la emisión de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares.

Por lo que proponer estas reformas a la Ley General de Salud en este dictamen, cuenta como una iniciativa de reformar ya las que estamos hoy aprobando.

Lo que proponemos nos fue solicitado por las víctimas que han decidido, con el riesgo de sus vidas y su integridad, realizar las tareas de búsqueda que las autoridades competentes no realizan: búsqueda en el campo, búsqueda en fosas clandestinas, la negligencia de las autoridades, la omisión, la justificación para no realizar de inmediato y sin demora la búsqueda, el desconocimiento deliberado y no deliberado del Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2015; y el homologado de investigación del delito de desaparición forzada, se elaboró con la participación permanente de los colectivos de víctimas, organizaciones de derechos humanos, de Amnistía Internacional, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Delegación de México y El Caribe, del Comité Internacional de la Cruz Roja, del personal sustantivo de todas las fiscalías y procuradurías del país, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2015.

A casi dos años de publicados estos protocolos, que señalan paso a paso todas las acciones a realizar en materia de búsqueda e investigación, particularmente en materia forense, no los conocen del todo las autoridades competentes de las instancias de seguridad pública, peritos, agentes del Ministerio Público y policías, y si los conocen, intencionalmente deciden no usarlos.

Por ello, creemos importante complementar la emisión de esta ley en materia de desaparición con la reforma a cinco artículos de la Ley General Salud.

He entregado ya a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios esta propuesta de cinco artículos que serían:

El 347, para efecto de los títulos de clasificación de cadáveres.

El 349, para los casos de exhumación.

El 350 Bis, en el caso de personas no identificadas.

Y un artículo adicional, el 350 Bis 1.

Consideramos que tratándose de un tema tan importante valdría la pena pensar en estos cinco artículos para reforzar esta reforma.

Es cuanto, señor Presidente, gracias.

Propuestas de modificación



**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias, Senadora Iris Vianey.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas de la Senadora Iris Mendoza.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas anteriormente presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. La votación de los artículos se hará conjuntamente con los demás artículos reservados.

**El Senador Héctor David Flores Ávalos:** (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Denle volumen, por favor, al Senador Flores Ávalos.

**El Senador Héctor David Flores Ávalos:** (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En virtud de que la votación económica que se levantó hace un momento reflejaba, a mi parecer y de varios, que el sentido era inverso, pido que se haga votación nominal.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Le propongo algo, Senador, evidentemente en la Mesa, las Secretarias siempre actúan de buena fe, le voy a pedir a la Secretaría que repita la votación. Si después de eso queda duda, la hacemos nominal. ¿Le parece, Senador?

**El Senador Héctor David Flores Ávalos:** (Desde su escaño) Me parece bien.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias. Senadores, les pido atención, por favor.

Ahora sí, proceda la Secretaría.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Por solicitarse, hacemos nuevamente la votación. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Visible negativa, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias. La votación se realizará al final con los artículos reservados y se hace de manera conjunta.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Rosario Guzmán Avilés, para presentar una reserva al artículo 4 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

**La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés:** Con su permiso, señor Presidente.

Los suscritos, Senadores integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, venimos a presentar formal reserva sobre el artículo 4, fracción XVI del proyecto de Decreto, contenido en el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, respecto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, fundado lo anterior en las siguientes consideraciones:

Como se ha dicho ya a lo largo de este debate y en el presente dictamen, al mezclar los conceptos de persona no localizada, y personas desaparecidas, se comete un grave error.

Lo que se pretende, con esa confusión, es controlar la estadística a través del diseño normativo de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, al no contar con un registro de información adecuado, que permita identificar o distinguir los casos en los que se trate de un delito, de los que se trate de personas que no se conoce su paradero por alguna razón, el propósito de la ley debe ser:

Prevenir la desaparición forzada, facilitar la localización de las personas, garantizar la reparación del daño a los familiares de las víctimas y proveer a la sociedad de un registro confiable en la materia.

Las cifras institucionales, calculadas con leyes a modo, han generado que a la fecha sólo reconozcan 49 casos de desaparición forzada. Seguramente todas las demás son reconocidas como no localizadas, como si se hubieran perdido por casualidad y no por desaparición forzada.

La inclusión de este término en la ley, es un intento por negar la existencia de la desaparición forzada y desvirtuar la responsabilidad del Estado en la comisión de un delito de gran impacto para la sociedad, como ya se ha dicho a lo largo de toda esta discusión sobre la ley que estamos viendo.

En el artículo 4, en el texto del proyecto de Decreto, en la fracción XVI, se define a la persona no localizada como aquella cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito; y debe quedar: "Se elimina tal dispositivo y recorre la numeración de las fracciones subsecuentes".

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta de modificación

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias, Senadora Guzmán Avilés. Muy amable.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

**La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza:** Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva de la Senadora Guzmán Avilés. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. La votación del artículo se hará conjuntamente con los demás artículos reservados.

Les doy el uso de la palabra. ¿Quién quiere hablar?

Denle, por favor, volumen en el escaño de la Senadora Calderón Hinojosa.

**La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa:** (Desde su escaño) Pediría que fuera votación nominal, en este caso.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** ¿Le parece si repetimos el procedimiento?

**La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa:** (Desde su escaño) Le pediría que fuera una votación nominal, y me acompañan los cinco compañeros para poder solicitarla.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muy bien. A ver, Senadora, cuando queda duda se puede hacer, nos están haciendo una solicitud conforme al Reglamento, les pediría que todos estemos atentos cuando se esté votando. Tiene fundamento la solicitud que están haciendo a esta Mesa Directiva.

Ábrase el tablero electrónico hasta por cinco minutos. A ver, el objeto de la votación es si se admite a discusión, eso es lo que estamos votando en este momento, para eso está abierto el tablero.

Si es positiva la votación, se abrirá la discusión.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Damos cuenta de la votación, 43 votos en contra y 33 favor.

Como resultado, no se admite a discusión, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. No se admite a discusión la votación del artículo reservado.

Tiene el uso de la tribuna el Senador José María Martínez Martínez, para referirse al artículo 28 del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

**El Senador José María Martínez Martínez:** Le agradezco mucho, señor Presidente, seré lo más breve posible.

Sin demérito y sin desvirtuar las preocupaciones que nos han externado familiares u organizaciones de la sociedad civil, que nos han pedido impulsar esta legislación, quiero compartir con ustedes una preocupación que se contiene en el cuerpo del dictamen, pidiéndoles, por supuesto, que escuchen y que me ayuden a que la votación, para su discusión, sea positiva.

En el cuerpo del dictamen en concreto, o en particular el artículo 28, de manera sucinta establece que debe interpretarse que comete desaparición forzada el servidor público que oculte o se niegue a dar información respecto de un particular detenido.

Esta conducta equiparada al tipo penal principal, nos tiene con una preocupación, creemos, en consecuencia, que desvirtúa el objetivo que persigue no sólo la ley, sino también la conducta que deba castigarse en relación al tipo penal de desaparición forzada.

¿Cuál es el riesgo?

Vemos, ante un lamentable caso de desaparición forzada, que el Estado tiende a saber, cuando menos cuatro obligaciones: la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

De dejar este artículo podría darse el supuesto de que la autoridad muestre la verdad de lo sucedido, pero la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, estaría en duda porque el Estado tendría, en consecuencia, un incentivo perverso de responsabilidad ante las víctimas a personas denominadas "chivos expiatorios" en lugar del verdadero responsable.

¿Qué es esto? En esta conducta equiparable habremos, entonces, de encontrar que el Estado por exculpar o exculparse en su responsabilidad, estaría señalando solamente una conducta de omisión de un servidor público y no llegando al fondo y menos castigando al responsable.

Esta es la preocupación que queríamos compartirles los compañeros Senadores Adriana Dávila Fernández, Patricia Leal, Jorge Luis Preciado y un servidor.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Propuesta de modificación

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias, Senador José María Martínez.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Senadores, guardemos el orden, si quieren, miren la Mesa actúa de buena fe, la Secretaria está contando bien, todos los trámites que se han repetido han sido en el mismo sentido que se recogió la votación, si ustedes me lo solicitan nominal, abrimos el tablero con mucho gusto.

Ábrase el tablero, por favor, hasta por cinco minutos. Justamente lo que vamos a votar es si se admite a discusión.

Denle volumen, por favor, en el escaño de la Senadora Dávila Fernández.

**La Senadora Adriana Dávila Fernández:** (Desde su escaño) Señor Presidente, quizá sea mi vista la que esté fallando, pero estoy viendo que el nombre del Senador Neyra Chávez está marcado y no lo veo en el Pleno.

Quisiera saber por qué está marcado, a lo mejor estoy equivocada, por eso dije quizá sea mi vista que está fallando, pero no lo ubico desde el momento en que apareció el voto, quisiera saber dónde está el Senador Neyra Chávez.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Sí, que revise Servicios Parlamentarios, muchos Senadores vienen, votan y van al baño, Senadora.

**La Senadora Adriana Dávila Fernández:** (Desde su escaño) Sí, pero estamos hablando menos de dos minutos, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Que lo revise Servicios Parlamentarios, con gusto.

**La Senadora Adriana Dávila Fernández:** (Desde su escaño) Justo por eso estoy haciendo el señalamiento, señor Presidente.

**La Senadora Layda Sansores San Román:** (Desde su escaño) Es una vergüenza para el Senado. No está el Senador Neyra Chávez, no está.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Consulte la Secretaría si falta alguien por votar.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Doy a conocer la votación, se emitieron 29 votos a favor y 51 en contra.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias. No se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos reservados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett, para presentar su reserva al artículo 29 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

¿Es así, verdad Senador Bartlett, de esa ley? Adelante, por favor.

**El Senador Manuel Bartlett Díaz:** Con su venia, señor Presidente.

El artículo 29 es muy significativo, ya lo había dicho la Senadora Sansores San Román, elimina la responsabilidad de los superiores jerárquicos que está en el artículo 6 de la convención respectiva, que se ha dicho que es la que se está siguiendo.

No necesitamos ir más a fondo, la responsabilidad de los superiores jerárquicos ha sido una reclamación de los organismos internacionales, porque es muy fácil atribuir a terceros, a cuadros, al policía de la esquina y nunca llega a la responsabilidad de los cuadros superiores.

En consecuencia, todo es una simulación, porque sabemos muy bien que este delito y que esta tragedia procede de los mandos superiores.

Cuando se habla de crimen organizado, cuando se habla de la asociación de las autoridades con los criminales, cuando se trata de asesinatos a mansalva o de caídos en combate, son las autoridades superiores las responsables.

¿No es autoridad superior el que mandó un helicóptero a ametrallar una zona habitacional?

¿No es una autoridad superior o unas autoridades superiores quienes participaron en la desaparición de los profesores de Ayotzinapa?

¿No se acuerdan de eso?

Hay pruebas que ahí estaban militares, que estaban policías judiciales, que estaban representantes del gobierno mismo, porque el C4, se acuerdan ustedes, había informado de todo esto, y están los datos de estas personalidades ligadas a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Si escamoteamos la responsabilidad de los superiores, pues ya se acabó, ¿para qué seguimos? Porque éste es un asunto de superiores jerárquicos, éste es un asunto de altos niveles, éste es un asunto que vincula a quienes ordenan y a quienes están responsabilizados por el mando, por la superioridad jerárquica de los hechos.

Eso nos demuestra, para no ir más allá, que esta ley no es la ley, como decía Layda, que necesitábamos, no es, es un acuerdo, es una aceptación a medias, y quienes estuvimos pendientes de este debate largo, de años, y de ese esfuerzo enorme por lograr cosas, ¿qué encontramos? ¿Qué recordamos? Que tuvieron que vencer. ¿Cuál era el debate con el gobierno?

El debate era con los representantes de Gobernación que cerraban aquí y que cerraban allá, con resistencias permanentes del gobierno de la República. Entonces este esfuerzo nos lleva a esa simulación tan corriente en esta Asamblea, de que logramos un poquito, de que con esto ya tenemos una ley, y no teníamos nada, que es un avance significativo, pero todos los que pasaron a defender la ley dijeron que era incompleta, que tenía serios problemas, pero que en el futuro se van a corregir.

Y si se presentan más de 60 artículos en lo particular, pues es una ley que no ha sido aceptada por quienes votaron en lo general, que es otra vieja maña también, vamos a votar en lo general pero con la determinación de que tenemos que cambiar tales y tales artículos sabiendo que pasa lo que aquí ha ocurrido, han levantado la mano para que no se discuta nada, no han querido discutir nada, es la cerrazón absoluta, eso no es un debate, eso es, primero que nada, un acuerdo con el gobierno para sacar lo que les permitieron, en ese esfuerzo monumental, heroico de tanto tiempo.

La resistencia, eso sí fíjate que no, y eso aquí no, y logran finalmente algo, ese algo no sirve, por eso hemos votado en contra.

Y queremos aclarar una y otra vez, que el juego éste parlamentario falso, no es más que un arreglo cupular, que se cierra en lo que el gobierno permitió. El señor Campa que discutió con ustedes meses, y que les dijo que no 20 veces, lograron un poquito.

Pero vamos a decirles a los familiares de los desaparecidos, que es un poquito que logramos, que no teníamos nada y ahora sí tenemos mucho o un poquito, pero nos faltó, pero teníamos que haber hecho tal, y las 60 reservas, y el no, no, no del PRI, que es una vergüenza, señores Senadores, llegar a este límite de la desvergüenza de no querer discutir nada.

¿Para qué están sentados aquí?

¿No podían defender su obra?

¿Le tienen miedo a la discusión?

No se debate nada, no se discute nada, que los mandos superiores estén tranquilos, que el señor Campa vaya y les diga: "Ya está, eh, ya tenemos esta ley, ya cumplimos, ya cumplimos, en consecuencia, pues que siga la feria como va". Eso es lo malo de este tipo de arreglos.

Eso es lo que se logra en las negociaciones para decir eso es lo máximo que se podía eh. Estábamos sin nada, pero ahora tenemos ese poquito, ese poquito no sirve para nada, porque los mandos superiores, los que

mandan, los que mandan matar, los que permiten que maten, los que permiten que desaparezcan, los mandos superiores no están responsabilizados, pues no se ha responsabilizado a nadie.

¡Qué grave!

Esta es una tragedia, y lo han repetido todos, es que el sufrimiento, es que lo que han sufrido los familiares, es que estamos, es que los oímos a todos, es que los oímos a todos.

Sí, pero no le respondieron a nadie, a final de cuentas nadie.

El método que ha seguido estos cinco años el Congreso y el Senado, en este caso, es una falsedad, llegar a un acuerdo, presenta cada quien sus reservas, sabiendo que no se va a sentar ninguna, que aquí van a estar como un bloque austero, no me va a permitir que nadie hable, que se mantenga la idea de que esto ya resolvió el problema de los desaparecidos y que sigue todo igual.

Mientras no sean responsables los más altos niveles, que son los responsables de las policías, del Ejército, de la Marina, de los gobiernos de los estados, va a seguir todo igual, va a seguir todo igual, independientemente de que los acusados terminan en libertad en cuanto se olvida cada asunto.

La tragedia de México, este holocausto brutal, esto no se detiene con esa ley, no digan mentiras, no lleguen a acuerdos para que el gobierno pueda presumir que ya tiene una ley que ya avanzaron. No, no han avanzado, no han cumplido con los elementos fundamentales de los organismos internacionales, están solapando, han aprobado en lo general, no permiten que se mueva una coma.

¡Es una vergüenza!

Lo que va a salir hoy no va a tener ningún impacto, ningún impacto contra esta masacre, asesinatos y tumbas, y todo lo que está ocurriendo, porque no se va a la raíz, no se va a la raíz y seguirá pasando lo que está pasando. Esa ley es una simulación.

Muchas gracias, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Visible mayoría, no se admite, señor Presidente.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Gracias. No se admite a discusión, y la votación se reserva para hacerse en su conjunto con los demás artículos reservados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, para presentar sus reservas.

**El Senador Carlos Alberto Puente Salas:** Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros:

Quiero comenzar destacando el arduo trabajo que este dictamen representa, y el cual es producto de más de cuatro años de trabajo intenso, que iniciaron con la primera iniciativa presentada en el año 2013.

Los Senadores que hemos participado en el estudio y el tema del diseño de dictamen, tenemos el firme propósito de lograr la mejor ley posible para todas esas familias que sufren la zozobra de no saber dónde se encuentra un hijo, un padre, o bien, un hermano.

En otras ocasiones he tenido la oportunidad de mencionar que toda ley es perfectible. Qué mejor que se logre dar el mejor resultado antes de que ésta comience su vigencia.

Con la finalidad de lograr mayor certeza y seguridad jurídica para las familias que buscan a un ser querido, y lograr la colaboración de la ciudadanía en ello, es que en este momento presento en un mismo acto, las reservas sobre los artículos 53 en su fracción XXX y 99 fracción XIX.

Conforme al artículo 53, la Comisión Nacional de Búsqueda, tiene la atribución de solicitar la difusión de boletines relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.

La rapidez con que se actúe es fundamental para lograr su localización, por la importancia del caso y la urgencia de la situación, los boletines deben transmitirse a la brevedad, y el Estado debe usar todos los medios que tenga a su alcance para lograr la mayor y la mejor difusión de la información que permita localizar y poner a salvo a la persona.

Los tiempos oficiales son un recurso con el que cuenta el Estado mexicano y que le permiten tener un espacio en los medios de comunicación del que puede disponer, y su contenido tenga la utilidad para la sociedad.

Dar con el paradero de una persona y poder hacer que regrese a casa con las personas que lo estiman, es motivo suficiente para disponer de estos espacios oficiales.

Por tal motivo, resulta necesario precisar esta situación en el artículo 53 y modificar su fracción XXX.

Situación parecida ocurre en el artículo 99, donde se mencionan los requisitos mínimos que tendrán los protocolos de búsqueda, en su elaboración, deberá incluirse los mecanismos de difusión en medios de comunicación y redes sociales para difundir el perfil de la persona desaparecida, no localizada.

En este supuesto, nuevamente es pertinente precisar que el Estado debe disponer de los tiempos oficiales para hacer públicos los datos que permitan localizar a la persona y darles inmediata publicidad.

En los casos donde una persona desaparece o no es localizada, el tiempo de respuesta de la autoridad es crucial y se deben tomar todas las acciones necesarias para difundir información que colabore a su ubicación.

Por las razones anteriores, presento reservas para modificar los artículos 53 y 99, para quedar de la siguiente manera:

"Artículo 53. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:

XXX. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos de Estado, y por conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los familiares, la difusión de boletines relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.

Artículo 99. Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos.

En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente:

XIX. Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales; y para la difusión del perfil de la persona desaparecida o no localizada; en los

términos de la legislación aplicable, y en su caso, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado".

Esas son las reservas que someto a consideración de este Pleno, esperando sean atendidas para que pueda ser más ágil al servicio de la ciudadanía.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuestas de modificación **(5)**

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas del Senador Carlos Puente. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Por unanimidad, señor Presidente, se admiten a discusión.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. Sí se admiten a discusión.

Y consulto si hay algún orador para referirse a las propuestas de modificación.

Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas a los artículos 53 y 99 anteriormente presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Le informo, señor Presidente, que son aprobadas.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muy bien. Han sido aprobadas las modificaciones, incorpórense a los artículos del dictamen.

Procederemos a la votación de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 24, 28, 29, 33, 34, 44, 45, 49, 50, 56, 60, 62, 66, 67, 80, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 123, 124, 127, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 161, 164, 170 y los Transitorios Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Segundo del proyecto de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en los términos del dictamen; y de los artículos 53 y 99 con las modificaciones aprobadas. Asimismo, votaremos el artículo 348 de la Ley General de Salud, en los términos del dictamen.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos.

**La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora:** Señor Presidente, damos cuenta de la votación, se emitieron 84 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones.

**El Presidente Senador Pablo Escudero Morales:** Muchas gracias. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 24, 28, 29, 33, 34, 44, 45, 49, 50, 56, 60, 62, 66, 67, 80, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 123, 124, 127, 134, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 161, 164, 170 y los Transitorios Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Segundo del proyecto de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; y los artículos 347, 348, 349, 350 Bis, 350Bis 1 y 350 Bis 2 de la Ley General de Salud.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. **Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.**

**Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares**

- La desaparición forzada es uno de los hechos más dolorosos de la realidad nacional, genera angustia. Es un hecho que impacta a familias y regiones.

- Hoy como Senado y como Estado damos respuesta a esta dolorosa circunstancia.

- Con esta Ley el Estado tiene más y mejores herramientas para enfrentar y sancionar la desaparición forzada.

- Si bien en los últimos años el tema ha tenido mayor visibilidad, el fenómeno no es nuevo.

- Para nosostros como izquierda es un tema fundamental. El grito de "vivos se los llevaron, vivos los queremos" ha sido una bandera que refleja la urgencia de legislar en la materia.

- Celebramos el trabajo incluyente que considera en mucho la posición de las organizaciones.

- Las lamentables desapariciones forzadas de personas han ocurrido en México en diferentes momentos de su historia. Las décadas de 1960 y 1970 están ligadas al contexto de la llamada "Guerra Sucia" contra los grupos sociales.

- Se trata de un pasaje negro en la historia nacional, donde la versión oficial del gobierno no sólo ocultó y negó a esos movimientos, sino que dándoles el trato de delincuentes comunes y recurriendo a la retórica, deshumanizó la represión para encubrir crímenes de Estado.

- Hoy rendimos un sentido homenaje a la memoria de todas aquellas mujeres y hombres, que han sido víctimas involuntarias de un flagelo que se extiende hasta nuestros días y se encuentra sin castigo.

- ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos lo queremos! Fue el grito para exigir justicia, abanderado por doña Rosario Ibarra, quien hizo acompañar su lucha con la demanda de miles de familias que hoy todavía salen a las calles para pedir les sean devueltos sus hijos e hijas, esposos o hermanos.

- De acuerdo con cifras oficiales, al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba **26.798** personas "**no localizadas**" o desaparecidas a nivel nacional, cifra que en algunas entidades del país registra una tendencia a la alza[1].

- La desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en el Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, constituye una grave tragedia y una asignatura pendiente en la vida de México.

[1] Situación de los derechos humanos en México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015

- Este hecho representa una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural en la que incurren agentes del Estado e integrantes del crimen organizado.

- El diseño de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por particulares responde a directrices fundamentales para la correcta aplicación de su contenido. Incluye la efectividad y exhaustividad; la debida diligencia; el enfoque diferencial, especializado y humanitario; gratuidad; igualdad y no discriminación; interés superior de la niñez; máxima protección; no revictimización; participación conjunta y perspectiva de género.

**La Ley:**

- **Garantiza la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección, y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable.**

- **Crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.**

- Establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas, y esclarecer los hechos.

- Crea los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones.

- Da vida al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

- Crea la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas.

- Establece la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones y planes de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus

opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

- **Reconociendo la bondad de lo aprobado, en justicia también tenemos que reconocer los aspectos en los que nos quedamos en deuda.**

    - Es deseable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se incorpore al Sistema, toda vez que tiene trabajos importantes en la materia.

    - Así mismo es conveniente que las recomendaciones de la CNDH tengan el mismo peso que la de los organismos internacionales.

- Quiero llamar la atención y ponder particular acento a que se incorpore el castigo a los mandos y la responsabilidad de la cadena de mando en estos hechos, como lo consideran las Convenciones Internacionales.

- Estos puntos darían mayor fortaleza al instrumento que hoy aprobaremos, por lo que los llamo a su voto en lo general, pero también les suplico consideren la bondad de estas observaciones.

**CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA, COMPAÑEROS SENADORES:**

El tema que nos ocupa es uno de los más sensibles que puede preocupar a una sociedad:

Poner freno y prevenir las desapariciones forzadas, y al mismo tiempo que se proteja a las familias que además de la angustia, quedan expuestas frecuentemente a una segunda victimización.

El dictamen que en este momento discutimos, analiza cinco iniciativas presentadas por senadores de diversos grupos parlamentarios y una más presentada por el Ejecutivo Federal.

Esto demuestra la preocupación compartida respecto a un fenómeno que lastima a nuestra sociedad.

No hay peor sentimiento que el desconocer el paradero o el destino de nuestros seres queridos.

No saber si nuestra esposa, hijo, hermano o padre, tiene hambre, tiene frío o peor: no tener la seguridad de que sigue vivo.

El presente dictamen es respuesta a las demandas de todas esas familias, que desde el momento en que perdieron el rastro de uno de sus integrantes, los días les parecen todos igual, ya no existen para ellos festividades y son pocos los motivos para celebrar.

El contenido de la Ley General que se propone, recoge las voces de los colectivos que agrupan a estas familias que siguen viviendo en la angustia.

- Gran parte del contenido del presente dictamen es de autoría de la sociedad civil, quienes se mantuvieron en estrecha coordinación con las comisiones dictaminadoras.

Resultado de este interés de la sociedad organizada, es que se reconoce y garantiza su participación en la investigación.

La propuesta de decreto de ley, establece que en casos de las Declaratoria Especial, la federación y las entidades deberán seguir protocolos para su búsqueda así como difundir en radio, televisión y redes sociales, información útil para su localización, propiciando con ello, la participación de la sociedad.

- En su carácter de general, distribuye competencias entre Federación, Entidades Federativas y Municipios con la finalidad de prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas.

*Comete el delito de desaparición forzada de personas,* ***el servidor público o el particular*** *que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público,* ***prive de la libertad*** *en cualquier forma a una persona,* ***seguida de la abstención o negativa a reconocer*** *dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre su paradero.*

Para evitar la impunidad de todos aquellos que contribuyan a la realización de las conductas descritas, pero argumenten no tener intervención directa en los delitos, se castigará a todos aquellos que de una u otra manera actúen para deshacerse de evidencia (restos de un ser humano).

- Además, se confirma la corresponsabilidad entre autoridades federales, estatales y municipales, en la prevención y creación coordinada de instrumentos para combatir y atender la desaparición de personas.

- Por otra parte, debemos destacar la creación de conceptos y mecanismos novedosos para hacer frente a este problema, tales como:

  - La distinción entre desaparición forzada cometida por servidores públicos, y desaparición cometida por particulares;

  - La determinación de la calidad de una persona desaparecida o no localizada, y

  - Los protocolos de búsqueda e investigación.

- Asimismo, destaca el tratamiento diferenciado para las personas desaparecidas menores de 18 años, en su calidad de menores de edad e integrantes de un grupo vulnerable que amerita la adopción de medidas especiales.

- En resumen, mediante esta Ley estamos estableciendo un régimen jurídico especial, para combatir y atender este flagelo que no sólo azota a las víctimas y a sus familias, sino que indigna al Estado mexicano en su conjunto.

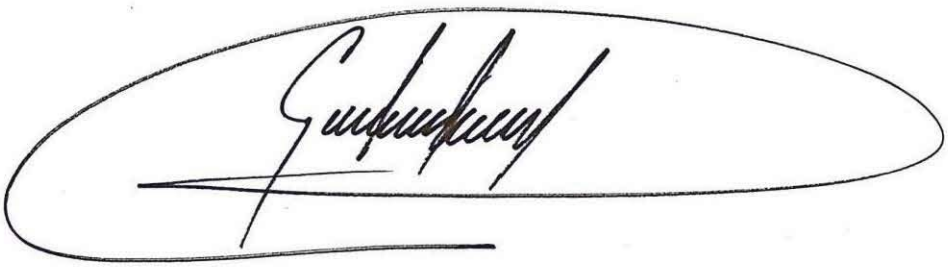
**Compañeros senadores:**

- Ante fenómenos que lastiman a todo el país, como la desaparición de mexicanos, el Poder Legislativo Federal tiene la alta responsabilidad de emitir las leyes necesarias para investigar los hechos y atender los legítimos reclamos de justicia de sus familiares.

- A los legisladores del Partido Verde, no nos queda la menor duda de que con la aprobación de esta Ley, habremos de fortalecer la certeza jurídica en materia de desaparición de personas.

- Pero sobre todo, confiamos plenamente en que el Senado de la República contribuirá a encender una lámpara, que dará un poco de luz a las familias de los mexicanos desaparecidos.

Es cuanto señor Presidente.



**Benjamín Robles Montoya**
**SENADOR DE LA REPÚBLICA**

Compañeras y compañeros Senadores:

El día de ayer, cuando aprobábamos la minuta sobre la ley contra la tortura, hice memoria y me remonté a febrero de 2015, cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe presentado por el Estado mexicano, relativo a la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Y recordé sus conclusiones que, por cierto, fueron contundentes.

El Comité consideró que la información aportada por México*"ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…".*

La reacción del gobierno federal, fue tratar de desvirtuar las conclusiones de una manera por demás agresiva.

En aquel entonces, las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contabilizaban 23 mil 689 personas desde 2007, de las cuales 9 mil 672 casos tuvieron lugar durante el actual sexenio.

Hoy la cifra del Registro es de 30 mil 973. El dato es de esta mañana.

Eso nos demuestra que lo que hasta ahora se ha hecho para combatir el problema, es insuficiente y se requiere redoblar esfuerzos, cambiar estrategias.

Creo que este proyecto es, en general, un buen producto legislativo.

Pero también soy consciente de las legítimas preocupaciones que existen alrededor del concepto de persona no localizada.

No sólo tiene que ver con el uso estadístico y el maquillaje de cifras sobre desapariciones en nuestro país por parte del gobierno, como algunas compañeras y compañeros lo han expresado.

Tiene que ver con algo más grave aún, que es la omisión por parte de la autoridad, de iniciar de forma inmediata la búsqueda de la persona, bajo el pretexto de que no hay indicios de que su ausencia sea producto de la comisión del delito.

No debemos permitir que eso siga ocurriendo.

Me parece que esta ley, en particular en el artículo 89, obliga a iniciar la búsqueda de manera inmediata, con independencia de la calidad de desaparecido o no localizado.

Pero de lo que creo que no queda duda, es de que por muy buena que sea esta ley, de muy poco servirá si las autoridades encargadas de aplicarla, continúan actuando con indolencia e indiferencia.

Reitero lo que dije cuando aprobamos la reforma constitucional que dio origen a esta ley:

Si el gobierno continúa asumiendo las cifras, las exigencias de la sociedad, los reclamos de los familiares de desaparecidos, las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, como un golpeteo político y no como una llamada de atención sobre la necesidad de hacer mejor las cosas, estaremos condenados a seguir contabilizando casos de desapariciones por miles, durante muchos años más.

En la reunión de comisiones unidas, hubo reconocimientos de que habrá cosas que mejorar en este proyecto.

Mi llamado a ustedes es que, en lo inmediato, velemos porque ni un solo caso se quede sin ser investigado, ni una sola persona se quede sin ser buscada con el pretexto del carácter de no localizado. Esa debe ser nuestra primera urgencia.

Y por supuesto que asumo el compromiso de sumarme a los esfuerzos para mejorar lo que haya que mejorar en esta ley.

Mi voto será a favor.

Senadoras y senadores:

México carece de una auténtica política de Estado en relación con las desapariciones de personas. El incremento alarmante en la última década de las desapariciones forzadas, que deja a las víctimas en una situación de indefensión jurídica, se suma a la falta de herramientas y estrategias de búsqueda de personas y a la incapacidad de las instituciones de justicia para que sus investigaciones estén a la altura de la tragedia que vive México en materia de desapariciones.

Todavía más grave es que el Gobierno federal haya simulado dialogar con los familiares de las víctimas de desaparición forzada y particularmente haya dado la espalda a las madres y padres de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa. No basta con una Ley para erradicar la desaparición forzada en nuestro país, falta mucha voluntad política por parte del Estado mexicano. "Justicia, verdad y memoria" son hoy las exigencias más apremiantes de miles de mexicanos.

***La Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares*** que hoy votaremos, representa sobre todo un esfuerzo de familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos por despertar en la sociedad mexicana la conciencia de que es urgente una herramienta jurídica que permita detener y erradicar este tipo de delitos y de delitos asociados a las desapariciones.

Pero los primeros que se deben concientizar y convencer de que México exige una transformación de gran calado en su sistema de justicia es el Gobierno federal, los tres poderes de la Unión y todas y todos nosotros, como legisladores y representantes de la sociedad. Es por eso que, a pesar de que votaremos a favor

de esta Ley, no podemos dejar de advertir que nace incompleta y con bastantes opiniones de familiares de víctimas y de organizaciones en contra. No es suficiente y muy posiblemente no detendrá la impunidad y el círculo estructural de violencia que genera la desaparición forzada en México. Esta Ley, si no nos ponemos a trabajar inmediatamente en sus deficiencias, puede terminar siendo una simulación y desactivar e inmovilizar los elementos positivos que presenta.

Señalaré tan sólo dos puntos controversiales de la mayor importancia y que debieron atenderse. El primero de ellos es que el tipo penal que conceptualiza la desaparición forzada en nuestro país no cumple con los ordenamientos internacionales. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entiende, en su Artículo 21, como "desaparición forzada": "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley."

Sin embargo, en su Artículo 27, la Ley que hoy se somete a votación borra esta responsabilidad directa del Estado en los delitos desaparición forzada y su redacción es magra respecto al de la Convención Internacional; cito la Ley propuesta a esta Asamblea: "Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero".

Las víctimas de desaparición forzada y sus familias no sólo tiene derecho a la justicia, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición, también debe ser objeto de una Ley como ésta los derechos a la verdad y a la memoria; el derecho a la verdad aparece tan sólo mencionado de manera muy velada en el Artículo 137, y el derecho a la memoria ni siquiera se menciona y mucho menos está desarrollado jurídicamente. Al menos estos dos derechos, a la verdad y a la memoria, merecían cada uno un capítulo aparte en la misma Ley.

Incluso, se debería garantizar que las investigaciones e indagatorias en materia de desaparición forzada no se lleven a cabo por autoridades judiciales tanto estatales como federales que presuntamente estén involucradas en la comisión o complicidad con este delito y con otros asociados a la desaparición, pero esto es prácticamente imposible en esta Ley por carecer de la autonomía, capacidad y figuras judiciales y ministeriales necesarias para ello tanto en la Comisión Nacional de Búsqueda como en las comisiones estatales.

Senadoras y senadores:

No obstante, esta Ley representa también un gran avance para la sociedad mexicana porque reconoce como problema nacional la desaparición forzada o cometida por particulares. Además, crea la Comisión Nacional de Búsqueda y ordena la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas; garantiza la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección, y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición; crea también el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y establece la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones y planes de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Convoco a esta Asamblea para que nos detengamos a reflexionar nuestro voto, que debe ser a favor siempre y cuando reconozcamos que mañana mismo debemos empezar el proceso atender las observaciones críticas a esta Ley para no perpetuar la impunidad en nuestro país y el dolor de miles de mexicanas y mexicanos.

Cada víctima tiene un rostro, una historia, una familia y seres queridos que la esperan y la buscan, la mayoría de las veces por cuenta propia y a pesar de que el sistema de justicia esté en su contra.

**Muchas gracias**

**Senador Raúl Morón Orozco**

27 ABR 2017 se aceptó por la asamblea

**CARLOS A. PUENTE SALAS**
SENADOR DE LA REPÚBLICA

**Senado de la República, a 27 de abril de 2017**
**"Año del Centenario de la Constitución"**

**Sen. Pablo Escudero Morales**
**Presidente de la Mesa Directiva**
**De la Cámara de Senadores**

**P r e s e n t e**

Con fundamento en los artículos 200 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, me permito remitir reserva a los **artículos 53, fracción XXX, y 99, fracción XIX,** del dictamen de las ***Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud***, y se considere mi participación en el Pleno, para exponer los argumentos que sustentan la redacción propuesta:



AV. PASEO DE LA REFORMA No.135, HEMICICLO. NIVEL 03 OFICINA 24, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, MÉXICO, D.F.
TEL. DIR. 5345 3563 carlospuente@senado.gob.mx

| PROYECTO DE DECRETO | RESERVA PROPUESTA |
|---|---|
| **Artículo 53.** La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:<br><br>...<br><br>**XXX.** Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la materia y por conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, | **Artículo 53.** La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:<br><br>...<br><br>**XXX.** Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la materia, **dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado,** y por conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, |
| **Artículo 99.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que le confiere esta Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos correspondientes.<br><br>Corresponderá al Sistema la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la del Protocolo Homologado de Investigación. La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá opinión previo a la emisión de los protocolos.<br><br>Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos.<br><br>En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente:<br><br>X a XVIII ...<br><br>XIX. Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales; y para la difusión del perfil de la Persona Desaparecida o No Localizada; | **Artículo 99.** ...<br><br>...<br><br>Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos.<br><br>En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente:<br><br>X a XVIII ...<br><br>**XIX.** Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales; y para la difusión del perfil de la Persona Desaparecida o No Localizada; **en los términos de la legislación aplicable, y en su caso, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado;** |



AV. PASEO DE LA REFORMA No.135, HEMICICLO. NIVEL 03 OFICINA 24, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, MÉXICO, D.F.
TEL. DIR. 5345 3563 carlospuente@senado.gob.mx

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



AV. PASEO DE LA REFORMA No.135, HEMICICLO. NIVEL 03 OFICINA 24, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, MÉXICO, D.F.
TEL. DIR. 5345 3563 carlospuente@senado.gob.mx

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

# Gaceta Parlamentaria

| Año XX | Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 2 de mayo de 2017 | Número 4770-I |
|---|---|---|

## CONTENIDO

**Minutas**

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud

# Anexo I

## Martes 2 de mayo

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"*

**MESA DIRECTIVA**

**OFICIO No. DGPL-2P2A.-4640**

**CS-LXIII-II-2P-193**

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.

**CC. SECRETARIOS DE LA**
**CÁMARA DE DIPUTADOS**
**P R E S E N T E**

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD**, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

A t e n t a m e n t e

**SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ**
**Vicepresidenta**

PROYECTO DE DECRETO
**CS-LXIII-II-2P-193**

**POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD.**

**ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:**

## LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

### TÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES
### CAPÍTULO PRIMERO

**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 2.** La presente Ley tiene por objeto:

**I.** Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley;

**II.** Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

**III.** Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**IV.** Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas;

**V.** Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección, y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;

**VI.** Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y

**VII.** Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

**Artículo 3.** La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro persona.

**Artículo 4.** Para efectos de esta Ley se entiende por:

**I. Banco Nacional de Datos Forenses**: **a** la herramienta del Sistema Nacional que concentra las bases de datos de las Entidades Federativas y de la Federación; así como, otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**II. Comisión Ejecutiva**: a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

**III. Comisiones de Víctimas**: **a** las Comisiones de Atención a Víctimas de las Entidades Federativas;

**IV. Comisión Nacional de Búsqueda:** a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

**V. Comisiones Locales de Búsqueda:** a las Comisiones de Búsqueda de Personas en las Entidades Federativas;

**VI.** Consejo **Ciudadano**: **a**l Consejo Nacional Ciudadano, órgano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**VII. Declaración Especial de Ausencia**: a la Declaración Especial de Ausencia por desaparición;

**VIII. Entidades Federativas**: **a** las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**IX. Familiares**: a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la Persona Desaparecida o No Localizada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; el o la cónyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida o No Localizada, que así lo acrediten ante las autoridades competentes;

**X. Fiscalías Especializadas**: a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales cuyo objeto es la investigación y persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares;

**XI. Grupo de Búsqueda:** al grupo de personas especializadas en materia búsqueda de personas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que realizarán la búsqueda de campo, entre otras;

**XII. Instituciones de Seguridad Pública**: **a** las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, y otras autoridades dél Consejo Nacional de Seguridad Pública, encargadas o que realicen funciones de Seguridad Pública en los órdenes federal, local y municipal;

**XIII. Mecanismo de Apoyo Exterior:** El Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación es el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño, en el ámbito de su competencia, a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones del ordenamiento jurídico mexicano establecidas en esta Ley, coadyuvar en la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda y en la investigación y persecución de los delitos que realicen las Fiscalías Especializadas en coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, así como para garantizar los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las víctimas y ofendidos del delito. El Mecanismo de Apoyo Exterior funciona a través del personal que labora en los Consulados, Embajadas y Agregadurías de México en otros países;

**XIV. Noticia:** a la comunicación hecha por cualquier medio, distinto al reporte o la denuncia, mediante la cual, la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

**XV. Persona Desaparecida**: **a** la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

**XVI. Persona No Localizada:** a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito;

**XVII. Protocolo Homologado de Búsqueda**: al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas;

**XVIII. Protocolo Homologado de Investigación:** al Protocolo Homologado para la investigación de los delitos materia de esta ley;

**XIX. Procuraduría: a** la Procuraduría General de la República;

**XX. Procuradurías Locales**: a las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas;

**XXI. Registro Nacional: a**l Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra la información de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la Federación como de las Entidades Federativas;

**XXII. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas:** al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas que concentra la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen;

**XXIII. Registro Nacional de Fosas:** al Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen;

**XXIV. Reglamento**: al Reglamento de esta Ley;

**XXV. Reporte**: a la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

**XXVI. Sistema Nacional**: al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**XXVII. Tratados:** a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

**XXVIII. Víctimas:** Aquellas a las que hace referencia la Ley General de Víctimas.

**Artículo 5.** Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley son diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

**I. Efectividad y exhaustividad:** todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación. Bajo ninguna circunstancia se podrán invocar condiciones particulares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o la actividad que realizaba previa o al momento de la desaparición para no ser buscada de manera inmediata;

**II. Debida diligencia:** todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos. En toda investigación y proceso penal que se inicie por los delitos previstos en esta Ley, las autoridades deben garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo;

III. **Enfoque diferencial y especializado:** al aplicar esta Ley, las autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las Víctimas. De igual manera, tratándose de las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones las autoridades deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos materia de esta Ley;

**IV. Enfoque humanitario: a**tención centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los Familiares;

**V. Gratuidad:** todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, no tendrán costo alguno para las personas;

VI. **Igualdad y no discriminación:** para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos y garantías de las **V**íctimas a los que se refiere esta Ley, las actuaciones y diligencias deben ser conducidas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos o la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial debe fundarse en razones de enfoque diferencial y especializado;

VII. **Interés superior de la niñez:** las autoridades deberán proteger primordialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar que cuando tengan la calidad de Víctimas o testigos, la protección que se les brinde sea armónica e integral, atendiendo a su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

**VIII. Máxima protección:** la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno, la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas a que se refiere esta Ley;

**IX. No revictimización:** la obligación de aplicar las medidas necesarias y justificadas de conformidad con los principios en materia de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados, para evitar que la Persona Desaparecida o No Localizada y las víctimas a que se refiere esta Ley, sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoseles a sufrir un nuevo daño;

**X. Participación conjunta:** las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, permitirán la participación directa de los Familiares, en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, en las tareas de búsqueda, incluido el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares, como en políticas públicas y prácticas institucionales;

**XI. Perspectiva de género**: en todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, así como para investigar y juzgar los delitos previstos en esta Ley, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad;

**XII. Presunción de vida:** en las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deben presumir que la Persona Desaparecida o No Localizada está con vida, y

**XIII. Verdad:** el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos constitutivos de los delitos previstos en esta Ley, en tanto que el objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la protección de las Víctimas, el castigo de las personas responsables y la reparación de los daños causados, en términos de los artículos 1 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 6.** En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y las legislaciones civiles aplicables, así como la Ley General de Víctimas y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

## CAPÍTULO SEGUNDO

## Disposiciones generales para personas desaparecidas menores de 18 años

**Artículo 7.** Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda.

**Artículo 8.** Las autoridades que administran las herramientas del Sistema Nacional deben tomar en cuenta el Interés superior de la niñez, y deben establecer la información segmentada por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación.

La divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de telecomunicación sobre la información de una persona menor de 18 años de edad desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones aplicables.

**Artículo 9.** Todas las acciones que se emprendan para la investigación y búsqueda de personas menores de dieciocho años de edad desparecidas, garantizarán un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos de la niñez, que tome en cuenta las características particulares, incluyendo su identidad y nacionalidad.

**Artículo 10.** Las autoridades de búsqueda e investigación en el ámbito de sus competencias se coordinarán con las Procuradurías de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para efectos de salvaguardar sus derechos, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 11.** En los casos de niñas, niños o adolescentes, las medidas de reparación integral, así como de atención terapéutica y acompañamiento, deberán realizarse por personal especializado en derechos de la niñez y adolescencia y de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 12.** Para el diseño de las acciones, herramientas y el protocolo especializado para la búsqueda e investigación de niñas, niños y adolescentes, el Sistema Nacional tomará en cuenta la opinión de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

## TÍTULO SEGUNDO
## DE LOS DELITOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 13.** Los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.

En los casos de los delitos previstos en esta Ley no procederá el archivo temporal de la investigación, aún cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal y no aparece que se puedan practicar otras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público estará obligada en todo momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

**Artículo 14.** El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza.

**Artículo 15.** Se prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad que impidan la investigación, procesamiento o sanción y cualquier otra medida para determinar la verdad y obtener reparación plena de los delitos materia de esta Ley.

**Artículo 16.** A efectos de la extradición, la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares no serán considerados delitos de carácter político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este motivo.

**Artículo 17.** No constituyen causas de exclusión de los delitos establecidos en los capítulos Tercero y Cuarto del Título Segundo de esta Ley, ni de responsabilidad en términos de lo previsto en las disposiciones aplicables, la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten **a** la comisión de estos delitos.

En ningún caso pueden invocarse circunstancias especiales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, suspensión de derechos y sus garantías, perturbación grave de la paz pública, como causa de justificación o inculpabilidad para cometer los delitos a que se refiere esta Ley.

El Estado está obligado a garantizar que cualquier persona que se rehúse a obedecer una orden para cometer el delito de desaparición forzada no sea sancionada o sea objeto de ninguna represalia.

**Artículo 18.** Para la imposición de una multa es aplicable el concepto días multa previsto en el Código Penal Federal.

**Artículo 19.** Los delitos previstos en esta Ley deben ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados conforme a las reglas de autoría, participación y concurso previstas en la legislación penal aplicable, y las reglas de acumulación de procesos previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 20.** La tentativa punible de los delitos previstos en esta Ley se sancionará en términos del artículo 63 del Código Penal Federal.

**Artículo 21.** Queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a una Desaparición Forzada de Personas o una Desaparición cometida por Particulares en el Estado al que sería entregada.

**Artículo 22.** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos distintos a los previstos en esta Ley, el agente del Ministerio Público advierte la probable comisión de algún delito previsto en el presente ordenamiento, debe identificar y remitir copia de la investigación a la Fiscalía Especializada competente.

**Artículo 23.** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos previstos en esta Ley, la Fiscalía Especializada advierte la probable comisión de alguno o varios delitos distintos a los previstos en el presente ordenamiento, deberá remitir copia de la investigación a las autoridades ministeriales competentes, salvo en el caso de delitos conexos.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS

**Artículo 24.** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades federales cuando:

**I.** Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley;

**II.** Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación;

**III.** Exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional en la que se determine la responsabilidad u obligación del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley;

**IV.** El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.

**V.** Durante la investigación se encuentren indicios que en la comisión del hecho participó una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada.

La víctima podrá pedir al Ministerio Público de la Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder de forma fundada y motivada.

**Artículo 25.** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades de las Entidades Federativas en los casos no previstos en el artículo anterior.

**Artículo 26.** La investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos previstos en esta Ley deberá ser competencia exclusiva de las autoridades federales o estatales del orden civil, aún cuando esté involucrado un servidor público.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

**Artículo 27.** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

**Artículo 28.** Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.

**Artículo 29.** Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.

**Artículo 30**. Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años, y de diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28.

Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.

**Artículo 31.** Se impondrá pena de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de veinticinco a treinta y cinco años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 32.** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando:

I. Durante o después de la desaparición, la Persona Desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito;

**II.** La Persona Desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor;

III. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer el delito;

**IV.** La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para cometer el delito;

**V.** La persona haya sido desaparecida por su actividad como defensora de derechos humanos;

**VI.** La persona haya sido desaparecida en razón de su labor como periodista;

**VII.** La Persona Desaparecida sea integrante de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VIII.** El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, o

**IX.** Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

**Artículo 33.** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas, conforme lo siguiente:

I. Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en una mitad;

II. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una tercera parte;

III. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una cuarta parte, y

IV. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una quinta parte.

## CAPÍTULO CUARTO

## DE LA DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES

**Artículo 34.** Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

**Artículo 35.** Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el período de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 36.** Las penas aplicables para los delitos establecios en los artículos 34 y 35 de esta Ley pueden ser determinadas y modificadas conforme a las reglas previstas en los artículos 32 y 33 de esta Ley.

## CAPÍTULO QUINTO

## DE LOS DELITOS VINCULADOS CON LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

**Artículo 37.** A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

**Artículo 38.** Se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas o de la investigación de los delitos establecidos en los artículos 27, 28, 31, 34 y 35 de la Ley a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas.

**Artículo 39.** Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 40.** Se impondrá pena de tres a siete años de prisión a quien, conociendo el paradero o destino final de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecidos en los artículos 31 y 35 de la Ley, y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

**Artículo 41.** Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil días multa a quien falsifique, oculte o destruya documentos que prueben la verdadera identidad de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecido en los artículos 31 y 35 de la Ley durante el período de ocultamiento, con conocimiento de dicha circunstancia.

Se aplicarán las mismas penas a quien, dolosamente, utilice los documentos falsificados de una niña o niño a que se refiere el párrafo anterior, con el conocimiento de dicha circunstancia.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**Artículo 42.** Los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos

**Artículo 43.** Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerará grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes.

# TÍTULO TERCERO
# DEL SISTEMA NACIONAL

## CAPÍTULO PRIMERO
## DEL SISTEMA NACIONAL

**Artículo 44.** El Sistema Nacional tiene como objetivo diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley.

**Artículo 45.** El Sistema Nacional se integra por:

**I.** La persona titular de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

**II.** La persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

**III.** La persona titular de la Procuraduría General de la República;

**IV.** La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Ejecutiva;

**V.** La persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

**VI.** Tres personas del Consejo Ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo integran;

**VII.** La persona titular de la Policía Federal;

**VIII.** Las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, y

**IX.** La persona que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Las personas integrantes del Sistema Nacional deben nombrar a sus respectivos suplentes, los cuales deben contar con el nivel jerárquico inmediato inferior. Para el caso de las fracciones VI y IX, el suplente será designado por los propios órganos a los que refieren las citadas fracciones.

Las personas integrantes e invitados del Sistema Nacional no recibirán pago alguno por su participación en el mismo.

La persona que preside el Sistema Nacional podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de los órganos con autonomía constitucional, de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los municipios de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como organismos internacionales según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz pero sin voto.

Las instancias y las personas que integran el Sistema Nacional están obligadas, en el marco de sus competencias, a cumplir con las acciones que deriven del ejercicio de las atribuciones de dicho órgano.

**Artículo 46.** El Sistema Nacional sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes y sus resoluciones deben ser tomadas por mayoría de votos. El presidente tiene voto dirimente en caso de empate.

**Artículo 47.** Las sesiones del Sistema Nacional deben celebrarse de manera ordinaria, por lo menos, cada seis meses por convocatoria del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, por instrucción de su Presidente, y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario a propuesta de un tercio de sus integrantes.

Las convocatorias deben realizarse por oficio o por cualquier medio electrónico que asegure y deje constancia de su recepción, con al menos cinco días hábiles a la fecha de celebración de la sesión correspondiente, y dos días hábiles de anticipación para las sesiones extraordinarias. En ambos casos debe acompañarse el orden del día correspondiente.

**Artículo 48.** El Sistema Nacional para el ejercicio de sus facultades contará con las siguientes herramientas:

I. El Registro Nacional;

II. El Banco Nacional de Datos Forenses;

III. El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas;

IV. El Registro Nacional de Fosas;

V. El Registro Administrativo de Detenciones;

VI. La Alerta Amber;

VII. El Protocolo Homologado de Búsqueda y los protocolos previstos en el artículo 73 de esta Ley; y

VIII. Otros registros necesarios para su operación en términos de lo que prevé esta Ley.

**Artículo 49.-** El Sistema Nacional tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Expedir modelos de lineamientos que permitan la coordinación entre autoridades en materia de búsqueda de personas así como de investigación de los delitos previstos en esta Ley. La legislación de las Entidades Federativas deberá prever los mecanismos para incorporar a su sistema jurídico los modelos a que se refiere esta fracción;

**II.** Establecer, en coordinación con las autoridades federales y las entidades federativas, la integración y funcionamiento de un sistema único de información tecnológica e informática que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o no Localizadas; así como para la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley;

**III.** Proponer acuerdos de colaboración entre sus integrantes y los del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el intercambio, sistematización y actualización de la información de seguridad pública que contribuyan a la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**IV.** Dar seguimiento y evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda;

**V.** Evaluar permanentemente las políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VI.** Generar mecanismos para favorecer que las capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas permitan la búsqueda eficiente y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VII.** Generar los mecanismos y acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones y requerimientos que hagan los integrantes del Sistema Nacional para el mejoramiento de políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VIII.** Emitir los modelos de instrumentos rectores para el funcionamiento y la coordinación con las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas;

**IX.** Evaluar el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones;

**X.** Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses;

**XI.** Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional de Fosas;

**XII.** Recomendar a las Procuradurías Locales el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda, así como la evaluación de las mismas;

**XIII**. Proporcionar la información que sea solicitada por el Consejo Ciudadano para el ejercicio de sus funciones;

**XIV**. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas materia de esta Ley;

**XV**. Dictar los lineamientos que regulen la participación de los Familiares en las acciones de búsqueda;

**XVI.** Emitir el Protocolo Homologado de Búsqueda, y

**XVII.** Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA

**Artículo 50.-** La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Nacional de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley.

Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 51.-** La Comisión Nacional de Búsqueda está a cargo de una persona titular nombrada y removida por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Gobernación.

Para el nombramiento, la Secretaría de Gobernación realizará una consulta pública previa a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Para ser titular se requiere:
**I.** Ser ciudadana o ciudadano mexicano;

**II.** No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

**III.** Contar con título profesional;

**IV.** No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento;

**V.** Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, y

**VI.** Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.

En el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, debe garantizarse el respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación.

La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Las Entidades Federativas deben prever, como mínimo, los mismos requisitos que contempla el presente artículo para la selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda Local que corresponda.

**Artículo 52.** Para la consulta pública a la que se hace referencia en el artículo anterior, la Secretaría de Gobernación deberá observar, como mínimo, las siguientes bases:

I. Generar un mecanismo a través del cual la sociedad civil presente candidatos;

II. Publicar toda la información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados; y

III. Hacer público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.

**Artículo 53.** La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Emitir y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda, rector en la materia, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

**II.** Emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional y coordinar la operación del mismo, en términos de lo que establezca esta Ley y las leyes aplicables;

**III.** Atender y formular solicitudes a las Instituciones de Seguridad Pública, previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de cumplir con su objeto;

**IV.** Solicitar el acompañamiento de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno, así como del personal al que se refiere el artículo 67 de esta Ley, cuando sea necesario que el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda realice trabajos de campo;

**V.** Integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de esta Ley;

**VI.** Presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, los informes sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, en coordinación con las autoridades competentes;

**VII.** Solicitar informes a las Comisiones Locales sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda;

**VIII.** Emitir los protocolos rectores que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

**IX.** Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda;

**X.** Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XI.** Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada para que, de ser el caso, realicen la denuncia correspondiente;

**XII.** Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con las Comisiones Locales, realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo;

**XIII.** Acceder sin restricciones a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, de conformidad con las disposiciones aplicables;

**XIV.** Emitir los lineamientos para acceder a la información a que se refiere la fracción anterior;

**XV.** Solicitar a la Policía Federal que se realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XVI.** Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XVII.** Mantener comunicación con autoridades estatales y municipales, y establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación del Consejo;

**XVIII.** Integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda, así como analizar el fenómeno de desaparición, incluso a nivel regional.

**IX.** Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de intercambiar experiencias y buscar las mejores prácticas para la localización de personas;

**XX.** Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que corresponda sobre la existencia de información relevante y elementos que sean útiles para la investigación de los delitos materia de ésta y otras leyes, de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda;

**XXI.** Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos;

**XXII.** Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con la normativa aplicable;

**XXIII.** Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información obtenida en la investigación de los delitos materia de esta Ley;

**XXIV.** Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinarse en la ejecución de las acciones de búsqueda y localización de personas migrantes;

**XXV.** Evaluar las políticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y Entidades Federativas;

**XXVI.** Conocer y opinar sobre las políticas y estrategias para la identificación de personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas comunes y clandestinas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y Entidades Federativas;

**XXVII.** Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional, así como de sus atribuciones;

**XVIII.** Proponer la celebración de convenios con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para la expedición de visas humanitarias a familiares de personas extranjeras desaparecidas en territorio mexicano;

**XXIX.** Disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro medio de comunicación de acceso gratuito para proporcionar información, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXX.** Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXXI.** Establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de personas vinculadas con movimientos políticos.

En caso de que durante las acciones de búsqueda se encuentre algún indicio de la probable comisión de un delito, se dará aviso inmediato a la fiscalía correspondiente;

**XXXII.** Establecer medidas extraordinarias y emitir alertas cuando en una Entidad Federativa o municipio aumente significativamente el número de desapariciones, que serán atendidas por las autoridades competentes a quienes vayan dirigidas;

**XXXIII.** Diseñar, en colaboración con las Comisiones Locales que correspondan, programas regionales de búsqueda de personas;

**XXXIV.** Proponer celebrar los convenios que se requieran con las autoridades competentes, nacionales y extranjeras, para la operación de los mecanismos de búsqueda transnacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXXV.** Recibir de las embajadas, consulados y agregadurías las denuncias o Reportes de personas migrantes desaparecidas o no localizadas en territorio mexicano. Así como, establecer los mecanismos de comunicación e intercambio de información más adecuados que garanticen la efectividad en la búsqueda de las personas migrantes en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Mecanismo de Apoyo Exterior;

**XXXVI.** Dar seguimiento y, en su caso, atender las recomendaciones y sentencias de órganos internacionales de derechos humanos en los temas relacionados con la búsqueda de personas;

**XXXVII.** Dar seguimiento y atender a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas relacionados con las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda;

**XXXVIII.** Recibir la información que aporten los particulares en los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y remitir a la Comisión de búsqueda correspondiente y, en su caso, a la Fiscalía Especializada competente;

**XXXIX.** Proponer al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

**XL.** Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sobre las acciones u omisiones que puedan constituir una violación a esta Ley;

**XLI.** Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en términos que prevean las leyes;

**XLII.** Solicitar a la Comisión Ejecutiva y a las Comisiones de Víctimas que implementen los mecanismos necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los familiares de las Personas Desaparecidas por la presunta comisión de los delitos materia de esta Ley, de conformidad con la ley en la materia;

**XLIII.** Recomendar a las autoridades que integran el Sistema Nacional el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda;

**XLIV.** Incorporar a los procesos de búsqueda relacionados con Personas Desaparecidas o No Localizadas a expertos independientes o peritos internacionales, cuando no cuente con personal nacional capacitado en la materia y lo considere pertinente o así lo soliciten los Familiares. Dicha incorporación se realizará de conformidad con las leyes;

**XLV.** Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda;

**XLVI.** Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer la existencia de características y patrones de desaparición, de conformidad con el principio de enfoque diferenciado;

**XLVII.** Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información de hechos y datos sobre la desaparición de personas, así como de los delitos en materia de esta Ley;

**XLVIII.** Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las acciones de búsqueda;

**XLIX.-** Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar la información contenida en las bases de datos y registros que establece esta Ley, así como con la información contenida en otros sistemas que puedan contribuir en la búsqueda, localización e identificación de una Persona Desaparecida o No Localizada;

**L.-** Emitir conforme a los más altos estándares internacionales, los criterios de capacitación, certificación y evaluación del personal que participe en las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**LI.** Asesorar a las Comisiones Locales de Búsqueda;

**LII.** Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en todo el territorio nacional, independientemente de aquellas que se hayan iniciado localmente;

**LIII.** Promover, en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo y otras disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en peligro; y

**LIV.** Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento.

La información que la Comisión Nacional de Búsqueda genere con motivo del ejercicio de sus facultades estará sujeta a las reglas de acceso a la información previstas en la legislación en la materia.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Nacional de Búsqueda contará con las áreas necesarias en términos de lo establecido en el Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 54.** En la integración y operación de los grupos a que se refiere el artículo 53, fracción XVIII, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:

I. Determinar las autoridades que deben integrar los grupos, en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno;

II. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo;

III. Solicitar al área de análisis de contexto informes para el cumplimiento de sus facultades, y

IV. Disolver los grupos de trabajo cuando hayan cumplido su finalidad.

**Artículo 55.** Los servidores públicos integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda deben estar certificados y especializados en materia de búsqueda, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional.

**Artículo 56.** Los informes previstos en el artículo 53, fracción V, deben contener, al menos, lo siguiente:

**I.** Avance en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Búsqueda con información del número de personas reportadas como desaparecidas víctimas de los delitos materia de esta Ley y No Localizadas; número de personas localizadas, con vida y sin vida; cadáveres o restos humanos que se han localizado e identificado; circunstancias de modo, tiempo y lugar de la localización;

**II.** Resultados de la gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Sistema Nacional;

**III.** Avance en la actualización y adecuado cumplimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda a que se refiere el artículo 99 de esta Ley;

**IV.** Resultado de la evaluación sobre el sistema al que se refiere el artículo 49, fracción II, de esta Ley, y

**V.** Las demás que señale el Reglamento.

**Artículo 57.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizará los informes sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en la ejecución de los programas previstos en esta Ley, a fin de adoptar en coordinación con el Sistema Nacional todas aquellas medidas y acciones que se requieran para su cumplimiento.

**Artículo 58.** La Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, para realizar sus actividades, deben contar como mínimo con:

**I.** Grupo especializado de búsqueda, cuyas funciones se encuentran en el artículo 66 de esta Ley.

**II.** Área de Análisis de Contexto, la cual desempeñará, además de las funciones que esta Ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se refieren las fracciones XLV, XLVI, XLVII y XLVIII del artículo 53;

**III.** Área de Gestión y Procesamiento de Información, la cual desempeñará, además de las funciones que esta Ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se refiere la fracción XLIX del artículo 53, y

**IV.** La estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

## CAPÍTULO TERCERO

## DEL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO

**Artículo 59.** El Consejo Ciudadano es un órgano ciudadano de consulta del Sistema Nacional, en materia de búsqueda de personas.

**Artículo 60.** El Consejo Ciudadano está integrado por:

**I.** Cinco Familiares;

**II.** Cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley. Se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense, y

**III.** Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados por el Senado de la República previa consulta pública con las organizaciones de Familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de Víctimas y expertos en las materias de esta Ley.

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.

**Artículo 61.** Los integrantes del Consejo Ciudadano ejercerán su función en forma honorífica, y no deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño.

Los integrantes del Consejo Ciudadano deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por mayoría de votos, quien durará en su encargo un año.

El Consejo Ciudadano emitirá sus reglas de funcionamiento en las que determinará los requisitos y procedimientos para nombrar a su Secretario Técnico, la convocatoria a sus sesiones bimestrales y contenidos del orden del día de cada sesión.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Ciudadano deberán ser comunicadas a los integrantes del Sistema Nacional, y podrán ser consideradas para la toma de decisiones. El integrante del Sistema Nacional que determine no adoptar las recomendaciones que formule el Consejo Ciudadano, deberá explicar las razones para ello.

La Secretaría de Gobernación proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.

**Artículo 62.** El Consejo Ciudadano tiene las funciones siguientes:

**I.** Proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda acciones para acelerar o profundizar sus acciones, en el ámbito de sus competencias;

**II.** Proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema Nacional para ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y forenses;

**III.** Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y herramientas materia de esta Ley;

**IV.** Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas;

**V.** Solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes;

**VI.** Acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con las que cuenta el Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones;

**VII.** Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;

**VIII.** Dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se le reconocerá interés legítimo dentro de las investigaciones para la determinación de responsabilidades de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**IX.** Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda;

**X.** Elaborar, aprobar y modificar la Guía de procedimientos del Comité, y

**XI.** Las demás que señale el Reglamento.

Las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda.

**Artículo 63.** Las decisiones que el Consejo Ciudadano adopte son públicas, en apego a la legislación de transparencia y protección de datos personales.

**Artículo 64.** El Consejo Ciudadano integrará de entre sus miembros un Comité para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá las siguientes atribuciones:

**I.** Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión Nacional;

**II.** Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la Comisión Nacional;

**III.** Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Búsqueda Personas Desaparecidas;

**IV.** Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, a la participación directa de los familiares en el ejercicio de sus atribuciones; y,

**V.** Las demás que determine el Consejo Nacional Ciudadano, en el marco de sus atribuciones.

## CAPÍTULO CUARTO

## DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA

**Artículo 65.** La Comisión Nacional de Búsqueda contará con Grupos de Búsqueda integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas.

Con independencia de lo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda podrá auxiliarse por personas especializadas en búsqueda de personas, así como por cuerpos policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 66.** Los Grupos de Búsqueda, para el adecuado cumplimiento de sus acciones, tienen las siguientes atribuciones:

**I.** Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo Homologado de Búsqueda y otros existentes.

**II.** Solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de investigación específicos sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los hechos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades con que cuentan las Comisiones de Búsqueda para realizar acciones relacionadas con la búsqueda de personas previstas en esta ley;

**III.** Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas y No Localizadas y salvaguarde sus derechos humanos, y

**IV.** Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas.

**Artículo 67.** Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho personal debe atender las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, según corresponda.

El personal al que se refiere el párrafo anterior, además de cumplir con la certificación respectiva, debe acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comisión Nacional.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS

**Artículo 68.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas.

Las Fiscalías Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con las Fiscalías Especializadas para el cumplimiento de la Ley.

**Artículo 69.** Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:

I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de la institución respectiva, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

**II.** Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y

**III.** Acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, según corresponda.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar, conforme a los más altos estándares internacionales, a los servidores públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a las víctimas, sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas, aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros. De igual forma, podrán participar con las autoridades competentes, en la capacitación de los servidores públicos conforme a los lineamientos que sobre la materia emita el Sistema Nacional, en términos de esta Ley.

**Artículo 70.** La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

I. Recibir las denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de esta Ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

II. Mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme al Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;

III. Dar aviso de manera inmediata, a través del Registro Nacional, a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos materia de esta Ley, a fin de que se inicien las acciones correspondientes a la búsqueda; así como compartir la información relevante, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;

IV. Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de compartir información que pudiera contribuir en las acciones para la búsqueda y localización de personas, en términos de las disposiciones aplicables;

V. Informar de manera inmediata a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Comisión Local de Búsqueda, según sea el caso, la localización o identificación de una Persona;

VI. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes para recibir, recabar y proporcionar información sobre las acciones de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley cometidos en contra de personas migrantes.

VII. Solicitar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados, en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales;

VIII. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables;

IX. Realizar y comunicar sin dilación todos aquellos actos que requieran de autorización judicial que previamente hayan sido solicitados por la Comisión que corresponda para la búsqueda y localización de una Persona Desaparecida.

X. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos de los delitos materia de esta Ley, cuando de la información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más Entidades Federativas o se trata de una persona extrajera en situación de migración, independientemente de su situación migratoria.

XI. Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las tareas de investigación en campo.

**XII.** Recabar la información necesaria para la persecución e investigación de los delitos previstos en esta u otras leyes.

**XIII.** Remitir la investigación y las actuaciones realizadas a las autoridades competentes cuando advierta la comisión de uno o varios delitos diferentes a los previstos en esta Ley.

**XIV.** Solicitar al Juez de Control competente las medidas cautelares que sean necesarias, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**XV.** Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas; así como a las instituciones y organizaciones de derechos humanos y de protección civil, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

**XVI**. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de los servidores públicos especializados en la materia;

**XVII.** Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas, en coordinación con las instituciones correspondientes, para poder hacer la entrega de cadáveres o restos humanos, conforme a lo señalado por el Protocolo Homologado de Investigación y demás normas aplicables;

**XVIII.** Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de las exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas;

**XIX.** Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes el traslado de las personas internas a otros centros de reclusión salvaguardando sus derechos humanos, siempre que esta medida favorezca la búsqueda o localización de las Personas Desaparecidas o a la investigación de los delitos materia de esta Ley, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal;

**XX.** Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los delitos previstos en esta Ley, incluido brindar información periódicamente a los Familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

**XXI.** Celebrar convenios de colaboración o cooperación, para el óptimo cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con la presente Ley;

**XXII.** Brindar la información que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas le soliciten para mejorar la atención a las Víctimas, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;

**XXIII.** Brindar la información que el Consejo Ciudadano le solicite para el ejercicio de sus funciones, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;

**XXIV.** Proporcionar asistencia técnica a las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas que lo soliciten, y

**XXV.** Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 71.** Las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas deben contar al menos, con las características y atribuciones previstas en el artículo anterior.

Las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas deben remitir inmediatamente a Fiscalía Especializada de la Procuraduría los expedientes de los que conozcan cuando se actualicen los supuestos previstos en el artículo 24 de la presente Ley, o iniciar inmediatamente la carpeta de investigación, cuando el asunto no esté contemplado expresamente como competencia de la Federación.

**Artículo 72.** El servidor público que sea señalado como imputado por el delito de desaparición forzada de personas, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las acciones de búsqueda o las investigaciones, podrá ser sujeto de medidas cautelares como la suspensión temporal de su encargo, entre otras, por la autoridad jurisdiccional competente, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, el superior jerárquico puede adoptar las medidas administrativas y adicionales necesarias para impedir que el servidor público interfiera con las investigaciones.

**Artículo 73.** Las Fiscalías Especializadas deberán generar criterios y metodología específica para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas. En el caso de las desapariciones forzadas por motivos políticos de décadas pasadas, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y esta Ley, las Fiscalías Especializadas deberán emitir criterios y metodología específicos que deberán permitir realizar, al menos, lo siguiente:

A) Los procedimientos de búsqueda permanente que se lleven a cabo para buscar personas en cualquier lugar donde se presuma pudieran estar privadas de libertad como son centros penitenciarios, centros clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud y cualquier otro lugar en donde se pueda presumir pueda estar la persona desaparecida;

B) Cuando se sospeche que la víctima ha sido privada de la vida, realizar las diligencias pertinentes para la exhumación de los restos en los lugares que se presume pudieran estar, de acuerdo a los estándares internacionales, siendo derecho de los familiares solicitar la participación de peritos especializados independientes, en términos de las disposiciones legales aplicables. En la generación de los criterios y metodología específicos, se tomaran en cuenta las sentencias y resoluciones nacionales e internacionales en materia de búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada.

**Artículo 74.** En el supuesto previsto en el artículo 66, la Fiscalía Especializada de la Procuraduría debe continuar sin interrupción la investigación de los delitos previstos en esta Ley, en términos de lo que establezca el Protocolo Homologado de Investigación y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 75.** Las autoridades de todos los órdenes de gobierno están obligadas a proporcionar, en el ámbito de su competencia, el auxilio e información que las Fiscalías Especializadas les soliciten para la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 76.** La Procuraduría celebrará acuerdos interinstitucionales con autoridades e instituciones para coordinar las acciones de investigación de mexicanos en el extranjero y migrantes extranjeros en el país.

**Artículo 77.** Las personas físicas o jurídicas que cuenten con información que pueda contribuir a la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, están obligadas a proporcionarla a las Fiscalías Especializadas directamente, a través del número telefónico previsto en esta Ley o cualquier otro medio, en términos de la normativa aplicable.

**Artículo 78.** Las Fiscalías Especializadas no pueden condicionar la recepción de la información a que se refiere el párrafo anterior al cumplimiento de formalidad alguna.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

### SECCIÓN PRIMERA
### DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA

**Artículo 79.** La búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados.

La búsqueda a que se refiere la presente Ley se realizará de forma conjunta, coordinada y simultánea por la Comisión Nacional y las Comisiones Locales.

Los mecanismos de búsqueda deberán agotarse totalmente hasta que se determine la suerte o paradero de la persona. La Comisión Nacional de Búsqueda garantizará que los mecanismos se apliquen conforme a las circunstancias propias de cada caso, de conformidad con esta Ley y el Protocolo Homologado de Búsqueda.

**Artículo 80.** Cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una Persona Desaparecida o No Localizada mediante:

**I.** Noticia;

**II.** Reporte, o

**III.** Denuncia.

La Noticia, el Reporte o la denuncia pueden realizarse en forma anónima.

Tratándose de denuncia, no será necesaria su ratificación. Tanto la búsqueda como la investigación se llevarán a cabo sin dilación.

**Artículo 81.** El Reporte puede realizarse las veinticuatro horas del día, todos los días del año, a través de cualquiera de los siguientes medios:

**I.** Telefónico, a través del número único nacional habilitado para tal efecto;

**II.** Medios Digitales;

**III.** Presencial, ante la Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda y el Ministerio Público; o

**IV.** Tratándose de personas que no residen en el territorio nacional, a través de las oficinas consulares o embajadas de México en el extranjero, las cuales deberán remitir sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría y a la Fiscalía Especializada que corresponda.

**V.** El Sistema Nacional, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, puede establecer medios adicionales a los previstos en este artículo para recibir Reportes.

Cuando la distancia o los medios de comunicación no permitan realizar el Reporte en términos de las fracciones anteriores, este puede realizarse ante la policía o la autoridad municipal que el Ayuntamiento designe para tal efecto y que cuente con la capacitación para aplicar el protocolo de búsqueda correspondiente.

En el caso de Reportes realizados en términos de la fracción I de este artículo, la autoridad que reciba el reporte deberá proporcionar el folio único de búsqueda a la persona que lo realizó. En el caso de la fracción III, quien reciba el Reporte deberá entregar a la persona que lo realizó constancia por escrito en el que constará el folio único de búsqueda.

**Artículo 82.** La presentación de denuncias se sujetará a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 83.** Cuando se trate de una Noticia, las autoridades que no pertenezcan a la Comisión Nacional o a las Comisiones Locales y que tengan conocimiento de ésta, deben:

**a)** Recabar los datos mínimos que se desprendan de la Noticia, como se señala en el artículo 85, y

**b)** Transmitir la información de manera inmediata a la Comisión correspondiente.

**Artículo 84.** Las oficinas consulares de México deben recibir las solicitudes de búsqueda de los Familiares en México y remitirán sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional.

Cuando la búsqueda requiera de diligencias en otro país, bien sea el de origen, el de tránsito o el de llegada de la persona migrante, se deberá activar el Mecanismo de Apoyo Exterior a fin de garantizar que la información y elementos probatorios que sean necesarios puedan ser tramitados de forma inmediata y efectiva a lo largo del proceso de búsqueda.

**Artículo 85.** La autoridad distinta a la Comisión Nacional de Búsqueda que reciba el Reporte debe recabar por lo menos, la información siguiente:

**I.** El nombre, la edad y demás datos generales de la persona que lo presenta, salvo que se trate de Noticia o Reporte anónimo;

**II.** La ubicación desde la cual se realiza el Reporte, Denuncia o Noticia;

**III.** El número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con la persona, salvo que se trate de Noticia o Reporte anónimo;

**IV**. La persona que se reporta como desaparecida o No Localizada y, en su caso, sus características físicas o cualquier otro dato que permita su identificación y localización;

**V.** La narración pormenorizada de los hechos ocurridos, incluyendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar;

**VI.** La mención de las personas probablemente involucradas, con el señalamiento de todos los datos que puedan conducir a su identificación, incluida su media filiación, y

**VII**. Cualquier otra información, documentos o elementos que faciliten la búsqueda de las Personas Desaparecidas o No Localizadas y la investigación de los hechos.

Si la persona que realiza el Reporte o Denuncia no otorga la información señalada en este artículo, la instancia que la recabe debe asentar las razones de esa imposibilidad. La objeción de señalar datos por temor o imposibilidad de aportarlos por parte de quien haga la denuncia o Reporte, no será obstáculo para el inicio de la búsqueda inmediata por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La autoridad que recabe la información, documentos y elementos a que se refiere el presente artículo deberá asentar su nombre, cargo y dependencia gubernamental a la que se encuentre adscrito al momento de recibir el Reporte o Denuncia. La autoridad estará obligada a entregar una copia del Reporte o denuncia a la persona que haya acudido a realizarla.

**Artículo 86.** La autoridad que recabe la denuncia, Reporte o Noticia debe transmitirlo inmediatamente, a través de cualquier medio tecnológico o de telecomunicación, a la comisión que corresponda en términos de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, se encuentra obligada a aplicar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización.

Las autoridades que reciban la denuncia, el Reporte o Noticia deberán implementar, inmediatamente, las acciones de búsqueda que les correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo correspondiente.

El incumplimiento por parte de la autoridad obligada a la transmisión inmediata será sancionado de conformidad con la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

**Artículo 87.** Una vez que la Comisión Nacional o la Comisión Local que corresponda reciba, en términos del artículo anterior, un Reporte o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada, debe ingresar de inmediato la información correspondiente al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y generar un folio único de búsqueda.

El folio único de búsqueda debe contener como mínimo:

**a)** La información sobre la Persona Desaparecida o no Localizada a que hace referencia el artículo 85 de la Ley, y

**b)** El nombre del servidor público de la Comisión o autoridad que recibió la Noticia, Reporte o denuncia.

La Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda deben actualizar constantemente el expediente de búsqueda, para lo cual pueden solicitar, y deben proporcionar, información a los Familiares en los términos previstos en las disposiciones legales aplicables. Cuando la persona desaparecida o no localizada sea de una nacionalidad distinta a la mexicana, las autoridades involucradas en la búsqueda de dicha persona deben proveer información a los familiares que se encuentren en el exterior, a través de las autoridades consulares correspondientes o de la persona que hubieren designado para tales efectos.

Los Familiares y sus representantes tienen acceso de manera íntegra al expediente de búsqueda de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 88.** En el caso de la presentación de una denuncia, el agente del Ministerio Publico que la reciba debe proceder sin dilación a aplicar el Protocolo Homologado de Investigación y remitir la información a la Fiscalía Especializada competente, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 89.** Cuando la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente tenga noticia o reporte de una Persona Desaparecida o No Localizada, iniciará la búsqueda de inmediato.

Asimismo, informará sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando considere que la desaparición de la persona se debe a la comisión de un delito.

Para establecer la presunción de un delito se atenderá a los siguientes criterios:

**I.** Cuando la persona de la que se desconoce su paradero es menor de 18 años de edad;

**II.** Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito;

**III.** Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito;

**IV.** Cuando, aun sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener Noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona, y

**V.** Cuando antes del plazo establecido en el inciso anterior aparezcan indicios o elementos que hagan suponer la probable comisión de un delito.

En todos los casos, la Unidad de Gestión podrá solicitar constituirse como coadyuvante en los procesos que se sigan por los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares.

**Artículo 90.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe instrumentar acciones de búsqueda inmediatamente, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual incluirá, entre otros, el cruce de la información ingresada al Registro Nacional con los registros o bases de datos a que se refiere el artículo 94 de esta Ley.

Asimismo, al momento de iniciar la búsqueda, debe informar a los Familiares sobre la posibilidad de canalizarlos a la autoridad de atención a víctimas que corresponda, de conformidad con la legislación en materia de víctimas.

**Artículo 91.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe solicitar a los Familiares, preferentemente a través del cuestionario establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda, la información que estime necesaria para localizar e identificar a la Persona Desaparecida o No Localizada.

**Artículo 92.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe asegurar la existencia de mecanismos eficientes para que los Familiares y sus representantes siempre tengan acceso a los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda, y puedan proponer acciones de investigación para la búsqueda y localización de la persona.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe implementar mecanismos para que los Familiares tengan conocimiento del resultado de las acciones de búsqueda, las diligencias, los indicios, evidencias y pruebas que surjan de los mismos.

Los Familiares y sus representantes podrán acompañar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, lo cual estará garantizado en todo momento, de acuerdo con las medidas previstas en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en el Protocolo Homologado de Investigación y siempre velando por salvaguardar su integridad física y emocional.

Lo dispuesto en este artículo está sujeto a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 93.** Durante la búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente presumirá que la Persona Desaparecida o No Localizada, se encuentra con vida.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente no podrá concluir con las acciones búsqueda, incluso en los casos en que la Persona Desaparecida o No Localizada sea declarada ausente, en términos de lo establecido en esta Ley y la legislación aplicable, salvo que haya certeza sobre la suerte o paradero de la persona o hasta que sus restos hayan sido encontrados y plenamente identificados.

**Artículo 94.** A efecto de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida o No Localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe consultar, mediante los sistemas informáticos instrumentados para ello, de manera periódica y exhaustiva las bases de datos o registros de:

**I.** Hospitales clínicas, centros de atención psiquiátrica, centros de Desarrollo Integral para la Familia, centros de salud, centros de atención de adicciones y rehabilitación, públicos y privados;

**II.** Centros de detención y reclusorios a cargo del sistema penitenciario;

**III.** Los registros de los centros de detención administrativos;

**IV.** Servicios Médicos Forenses y banco de datos forenses;

**V.** Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas;

**VI.** Albergues públicos y privados, e instituciones de Asistencia Social, en términos de la Ley de Asistencia Social;

**VII.** Panteones o lugares en los que se depositan restos mortales o cadáveres, públicos y privados;

**VIII.** Identidad de personas;

**IX.** Estaciones migratorias y listas de control migratorio;

**X.** Terminales de autotransporte terrestre, aéreo y marítimo, de pasajeros y carga; y

**XI.** Los demás registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización e identificación de las personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Las autoridades o instituciones, públicas o privadas, que administran las bases de datos o registros a que se refiere este artículo deben tomar las medidas necesarias para que en dichas bases de datos y registros contengan la información de las personas a las que prestan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente proporcionará asistencia a las autoridades e instituciones a que se refiere el párrafo anterior a fin de facilitar el acceso a la información contenida en sus bases de datos o registros, para lo cual celebrarán los convenios correspondientes

**Artículo 95.** Cuando sea necesario para la búsqueda de una Persona Desaparecida, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente podrá solicitar al Ministerio Público que ordene los actos de investigación previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o que recabe autorización judicial para efectuar actos de investigación que requieran tal autorización previa, de acuerdo con el mismo ordenamiento, indicando, en su caso, las que tengan el carácter de urgentes.

Las peticiones señaladas tendrán que ser resueltas sin dilación alguna cuando sean urgentes, debiendo la Comisión motivar dicho carácter.

**Artículo 96.** Si en cualquier momento durante la búsqueda la persona es localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe, como mínimo:

**I.** Dar aviso a la Fiscalía Especializada que corresponda, cuando exista carpeta de investigación. En caso de que no se haya cometido ningún delito, deberá darse por concluida la carpeta de investigación.

**II.** Dar aviso inmediato a la autoridad competente en materia de atención a víctimas;

**III.** Aplicar el procedimiento correspondiente a la identificación de identidad regulado en el Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual establecerá el modo de obtención de la declaración de la persona localizada, en la cual señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su desaparición o no localización, así como los motivos de ésta y los probables responsables de la misma;

**IV.** Una vez identificada, declarar localizada a la persona y notificarlo a quien solicitó la búsqueda, a sus Familiares o, en su caso, a la persona que ésta designe;

**V.** En caso de que se localizara sin vida a la persona, se deberán aplicar las reglas para el Tratamiento e Identificación Forense y el de Notificación y Entrega de restos a Familiares, contenido en el Protocolo Homologado que corresponda, garantizando siempre proteger, respetar y restituir de manera digna a sus Familiares los restos humanos, así como entregar un informe de las circunstancias de la muerte y la forma en que se identificaron dichos restos. En este caso, las autoridades competentes deberán continuar con la investigación para la ubicación y sanción de los probables responsables, y

**VI.** Actualizar el Registro Nacional que corresponda en términos del artículo 105 de esta Ley.

**Artículo 97.** Cuando alguna autoridad identifique a una persona que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de parentesco, identidad y domicilio, debe dar aviso a la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente, a efecto de que se verifique si su desaparición o no localización fue reportada en el Registro Nacional. En caso de no existir Reporte o denuncia, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente deberá informarlo a la Fiscalía Especializada que corresponda para incorporar los datos respectivos al Registro Nacional en términos del artículo 106 de esta Ley.

**Artículo 98.** Las autoridades involucradas en la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en el ámbito de sus competencias, deben asegurar la cadena de custodia de la información e indicios, dando vista inmediata a la Fiscalía Especializada para su procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El servidor público que incumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, será sancionado conforme a la normativa correspondiente.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DE LOS PROTOCOLOS

**Artículo 99.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que le confiere esta Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos correspondientes.

Corresponderá al Sistema la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la del Protocolo Homologado de Investigación. La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá opinión previo a la emisión de los protocolos.

Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos.

En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente:

I. Las formas en las que las autoridades recibirán el Reporte, denuncia o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada;
II. Los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, incluidos en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares;
III. Las acciones de búsqueda en el lugar de los hechos o del hallazgo;
IV. El procedimiento para definir los polígonos en donde debe realizarse la búsqueda;
V. El mecanismo de búsqueda inmediata, el cual deberá considerar la intervención de las autoridades desde el momento que se recibe el Reporte denuncia o Noticia de hechos de la desaparición, partiendo del supuesto de que la víctima se encuentra con vida;
VI. Los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial para buscar y localizar con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;
VII. Los procedimientos de búsqueda e investigación específicos para niños, niñas y adolescentes;
VIII. Los procedimientos de búsqueda e investigación para desapariciones cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos políticos;
IX. Los procedimientos de búsqueda y localización de personas migrantes, sin

importar su calidad migratoria, que hayan desaparecido durante su estancia en el país, conforme los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior;

**X.** Los procedimientos de Actuación e Identificación Forense, que contendrá como mínimo los procedimientos para la localización, recuperación e identificación forense, con los criterios de actuación en antropología, odontología forense, autopsia médico legal, entre otros;

**XI.** El mecanismo de notificación a Familiares y acciones de investigación a realizar cuando se ha localizado con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;

**XII.** Los procedimientos para notificar y entregar de restos a Familiares de personas localizadas sin vida;

**XIII.** Los mecanismos de coordinación con otras autoridades para realizar la búsqueda y la investigación;

**XIV.** El proceso para levantar el cuestionario de información ante mortem con Familiares, personas allegadas y autoridades que puedan tener información que contribuya a la búsqueda, localización e identificación;

**XV.** El procedimiento para consultar la información en los registros y bases de datos a que se refiere el artículo 94 de esta Ley;

**XVI.** Los mecanismos para confrontar información con otros registros o bases de datos locales, nacionales o internacionales;

**XVII.** El procedimiento para entrevistar a autoridades y personas que puedan tener información que contribuya a la búsqueda;

**XVIII.** El mecanismo para ingresar a personas a los programas de protección, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y las disposiciones análogas en las Entidades Federativas;

**XIX.** Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales; y para la difusión del perfil de la Persona Desaparecida o No Localizada; en los términos de la legislación aplicable, y en su caso, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado;

**XX.** Las medidas para atender a personas en situación de vulnerabilidad;

**XXI.** Los mecanismos para mantener a los Familiares informados respecto de las acciones de búsqueda realizadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**XXII.** Los plazos y procedimientos para realizar la búsqueda,

**XXIII.** Los procedimientos para la participación de los Familiares en la búsqueda e investigación, y

**XXIV.** Los criterios para definir las acciones óptimas para la búsqueda y racionalizar los recursos empleados en la búsqueda.

**XXV.** Aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley.

Ambos protocolos deberán elaborarse con la participación de expertos en la materia, sociedad civil y familiares, conforme a estándares internacionales.

**Artículo 100**. Para elaborar y actualizar los protocolos a que se refiere el presente capítulo, se debe considerar, entre otros, los elementos siguientes:

I. Instrumentos de investigación, consultas comunitarias, análisis de los actores involucrados, estudios comparativos de modelos o prácticas exitosas, referencias hemerográficas, recorridos exploratorios y evaluaciones de impacto, entre otros;
II. Mapas de denuncias, victimización, incidencia delictiva y delincuencia georreferencial;
III. Estudios de agencias de cooperación y centros de investigación locales, nacionales o internacionales;
IV. En su caso, la situación específica del grupo social al que se encuentra dirigido el protocolo específico;
V. El uso de herramientas tecnológicas en términos que establece esta Ley;
VI. Análisis de datos y estadísticas oficiales que muestren las tendencias históricas;
VII. Evaluaciones participativas a través de diferentes medios como encuestas voluntarias, estructuradas o semiestructuradas a Familiares para evaluar la percepción o la eficacia de las medidas y procedimientos contemplados en la presente Ley, y
VIII. Las mejores prácticas internacionales y los avances de la ciencia.

Los protocolos deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo 101**. Además de lo establecido en el artículo anterior, los protocolos contendrá las medidas que deberán realizar la Comisión Nacional y las Comisiones Locales así como las Fiscalías Especializadas en colaboración con otras dependencias e instituciones, públicas y privadas. Dichas medidas serán obligatorias a todas las instancias que integran el Sistema Nacional.

## CAPÍTULO SÉPTIMO
## DE LOS REGISTROS

### SECCIÓN PRIMERA
### DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS

**Artículo 102**. El Registro Nacional es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación.

**Artículo 103**. El Registro Nacional se conforma con la información que recaban las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas.

El Registro Nacional contendrá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

**Artículo 104.** Corresponde a la Comisión Nacional administrar y coordinar la operación del Registro Nacional.

Es obligación de las autoridades de las Entidades Federativas y de la Federación recopilar la información para el Registro Nacional y proporcionar dicha información de forma oportuna a la Comisión Nacional, en términos de lo que establece esta Ley y su reglamento.

**Artículo 105.** El Registro Nacional debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello. La información deberá ser recabada de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Para cumplir con sus fines de búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda, las Procuradurías Locales y las Fiscalías Especializadas pueden consultar en cualquier momento el Registro Nacional.

La Fiscalía Especializada competente debe actualizar el Registro Nacional, indicando si la carpeta corresponde al delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.

Si de las investigaciones se desprende que se trata de un delito diferente a los previstos en esta Ley, así se hará constar en el Registro Nacional actualizando el estado del folio, sin perjuicio de que continúe la investigación correspondiente.

Si la Persona Desaparecida o No Localizada ha sido encontrada viva o si fueron encontrados sus restos, se dará de baja del Registro Nacional y se dejará constancia de ello, sin perjuicio del seguimiento de la investigación correspondiente.

**Artículo 106.** El Registro Nacional debe contener los siguientes campos:

I. En relación con la persona que reporta la desaparición o no localización, salvo que sea anónima:

**a)** Nombre completo;
**b)** Sexo;
**c)** Edad;
**d)** Relación con la Persona Desaparecida;
**e)** Clave Única de Registro de Población o cualquier documento de identificación oficial;
**f)** Domicilio, y
**g)** Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con ella;

II. En relación con la Persona Desaparecida o no localizada:

**a)** Nombre;
**b)** Edad;
**c)** Sexo;
**d)** Nacionalidad;
**e)** Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona, videos u otros medios gráficos;
**f)** Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos que permitan su identificación;
**g)** Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista;
**h)** Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;
**i)** Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación oficial;

j) Escolaridad;
k) Ocupación al momento de la desaparición;
l) Pertenencia grupal o étnica;
m) Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o equipos;
n) Historia clínica, dental, cirugías, y demás datos que permitan su identificación;
o) Estatus migratorio;
p) Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles;
q) Información sobre toma de muestras biológicas a familiares y perfiles genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses;
r) Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco Nacional de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro, y
s) Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar con el paradero de la Persona;

III. Los hechos relacionados con la desaparición o no localización, así como si existen elementos para suponer que está relacionada con la comisión de un delito;
IV. El nombre del servidor público que recibió el Reporte, denuncia o Noticia;
V. El nombre del servidor público que ingresa la información al registro;
VI. El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y
VII. El rubro o registro de la carpeta de investigación que indique el delito por el que se inició y el nombre de la autoridad ministerial encargada de dicha investigación.

Cuando la autoridad competente genere un registro debe de asignar un folio único que deberá proporcionar a la persona que realizó el Reporte, denuncia o Noticia.

Asimismo, se deben incorporar toda la información novedosa que resulte de las diligencias de búsqueda o investigación.

**Artículo 107**. Los datos obtenidos inicialmente a través de la denuncia, Reporte o Noticia deberán asentare en el Registro Nacional de manera inmediata.

Los datos e información que no puedan ser asentados de forma inmediata o que por su naturaleza requieran de un procedimiento para su obtención previsto en los protocolos a que se refiere esta Ley, deberán ser recabados por personal debidamente capacitado. Asimismo, se deberán llevar a cabo una o más entrevistas con familiares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o con otras personas, de conformidad con el protocolo homologado que corresponda, con el fin de obtener la información detallada sobre la persona. Una vez que se recabe la información deberá incorporarse inmediatamente al Registro Nacional.

El personal que lleve a cabo las entrevistas para la obtención de datos forenses deberá ser capacitado en atención psicosocial.

En caso de que la persona que denuncie o reporte la desaparición o no localización de una persona, desconozca información para su incorporación en el registro, se asentará en el reporte y no podrá negarse el levantamiento de su reporte o denuncia.

**Artículo 108.** Los datos personales contenidos en el Registro Nacional deben ser utilizados exclusivamente con el fin de determinar la suerte o paradero de la Persona Desaparecida o No Localizada y esclarecer los hechos.

Los Familiares que aporten información para el Registro Nacional tendrán el derecho a manifestar que dicha información sea utilizada exclusivamente para la búsqueda e identificación de la Persona Desaparecida o No Localizada. Los Familiares deberán ser informados sobre este derecho antes de proporcionar la información. De igual forma, podrán solicitar que no se haga pública la información de la Persona Desaparecida o No Localizada que se refieren los incisos a) al g) de la fracción II del artículo 106 de esta Ley por motivos de seguridad.

Las muestras biológicas y perfiles genéticos únicamente podrán ser utilizados para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

**Artículo 109.** El Registro Nacional puede ser consultado en su versión pública, a través de la página electrónica que para tal efecto establezca la Comisión Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo que determine el protocolo respectivo y las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

**Artículo 110.** El Registro Nacional deberá contener como mínimo los siguientes criterios de clasificación de Personas Localizadas:

I. Persona localizada que no fue víctima de ningún delito;
II. Persona localizada víctima de un delito materia de esta Ley, y
III. Persona localizada víctima de un delito diverso.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS FALLECIDAS NO IDENTIFICADAS Y NO RECLAMADAS

**Artículo 111.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas se encuentra a cargo de la Procuraduría, formará parte del Banco Nacional de Datos Forenses y contiene información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior identificación.

El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas se integra con la información proporcionada por las autoridades competentes la Federación y las Entidades Federativas.

El objetivo de este Registro Nacional es el de concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de los familiares de personas fallecidas no reclamadas.

La Procuraduría emitirá los lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan dicha información de forma homologada.

**Artículo 112.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contener como mínimo, los siguientes campos:

I. Información homologada sobre los datos del cadáver o los restos, la ropa, calzado y otras prendas u objetos. También, cuando sea posible, señas particulares como tatuajes, lunares y cualquier otro dato que permita la identificación;
II. Informe homologado sobre necropsia médico legal y dictámenes, antropología forense, odontología forense, dactiloscopia, genética forense, entre otras, así como las fotografías del cadáver o los restos;
III. Información sobre el lugar, la fecha y las circunstancias de la localización y recuperación del cadáver o los restos. En caso de provenir de una exhumación se generará también la información arqueológica forense y otra información relevante;
IV. Información sobre la inhumación o destino final del cadáver o los restos;
V. Información que se desprenda de la cadena de custodia de los informes y el tratamiento del cadáver o los restos;
VI. Datos de la carpeta de investigación, averiguación previa, Noticia o acta

circunstanciada vinculada al hallazgo;

VII. En caso de un accidente, una catástrofe o cualquier otra situación en donde exista un número de víctimas en lugar determinado, se deberá incluir la información disponible sobre ese evento;

VIII. Datos sobre las personas identificadas no reclamadas, tales como su nombre, fotografía, lugar de destino final y, cuando se requiera conforme, al protocolo homologado que corresponda, el informe forense multidisciplinario en que se confirma la identificación, y

IX. Lugar donde se encuentra el soporte documental de la información vertida en el registro.

Una vez que se logra la identificación del cadáver o de los restos de la persona, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá notificar a los familiares de la persona fallecida de acuerdo al Protocolo Homologado de Investigación.

Las autoridades tendrán la obligación de identificar y localizar a los familiares de la persona fallecida. En caso de que no se pueda identificar o localizar a algún familiar, la información contenida en este registro deberá enviarse al subregistro de personas identificadas no reclamadas, a fin de iniciar el proceso de localización de familiares conforme al protocolo correspondiente.

Una vez realizada la identificación positiva, la notificación a las familias y la aceptación de las familias del resultado o que se haya realizado el peritaje independiente solicitado, se podrán hacer las modificaciones respectivas al Registro Nacional y cesar las acciones de búsqueda, sin perjuicio del derecho de los Familiares de interponer los recursos legales correspondientes para impugnar la identificación.

**Artículo 113.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas es una herramienta de búsqueda e identificación. La información contenida se actualiza en tiempo real por parte de los servicios periciales o los servicios médicos forenses de la Federación y las Entidades Federativas, en cuanto se recabe la información, de conformidad con los lineamientos que emita la Procuraduría y la Secretaría de Salud o en su caso, el protocolo que corresponda.

Para cumplir con sus obligaciones de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisiones Locales pueden consultar en cualquier momento este registro.

**Artículo 114.** El personal de servicios periciales y servicio médicos forenses deberá estar permanentemente capacitado y actualizado de conformidad con el protocolo que corresponda.

**Artículo 115**. La Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y de los servicios periciales y servicios médicos forenses se encuentran obligados a realizar las acciones pertinentes para la verificación de una probable hipótesis de identificación a partir de la información contenida en los registros previstos en esta Ley, dejando constancia del resultado.

**Artículo 116.** La información contenida en el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas estará sujeta a las disposiciones en materia de protección de datos personales y se utilizará únicamente para lograr la identificación de las personas fallecidas.

**Artículo 117.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contar con las herramientas tecnológicas necesarias para permitir la interrelación, el resguardo y la confiabilidad de la información.

**Artículo 118.** Ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación, en fosas comunes, de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de cumplir obligatoriamente con lo que establece el protocolo homologado aplicable.

## SECCIÓN TERCERA
## DEL BANCO NACIONAL DE DATOS FORENSES

**Artículo 119.** El Banco Nacional de Datos Forenses está a cargo de la Procuraduría y que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos materia de esta Ley.

El Banco Nacional de Datos Forenses se conforma con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real.

El Banco Nacional de Datos Forenses debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley que conforman del Sistema Nacional y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello.

La información deberá ser recabada de conformidad con los protocolos correspondientes.

El Banco Nacional de Datos Forenses deberá realizar cruces de información de manera permanente y continua con el Registro Nacional y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas. Así como, con otros registros que no forman parte del Sistema Nacional que contengan información forense relevante para la búsqueda de personas.

La Procuraduría emitirá los lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan dicha información de forma homologada. Estos lineamientos se elaborarán considerando la opinión de autoridades competentes y expertos en la materia y de acuerdo a estándares internacionales.

**Artículo 120.** Corresponde a la Procuraduría coordinar la operación y centralizar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, así como administrar el Registro Forense Federal, en términos de lo que establezca el Reglamento.

Corresponde a las Procuradurías Locales coordinar la operación de su respectivo registro forense y compartir la información con la Procuraduría, en términos de lo que establece esta Ley.

**Artículo 121.** Los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las Entidades Federativas deben capturar en el registro forense que corresponda, la información que recaben, de conformidad con la presente sección y el protocolo correspondiente.

Las autoridades correspondientes en la Federación y las Entidades Federativas, deben garantizar que el personal de los servicios periciales y médicos forenses esté capacitado de forma permanente y continua en las diferentes materias que se requieren para el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

**Artículo 122.** La autoridad pericial encargada de la toma de muestras debe informar a la persona que suministra la muestra o a su representante legal el uso que le dará a la información que recabe y entregarle una constancia de la diligencia ministerial.

La información genética suministrada por los Familiares será utilizada exclusivamente con fines de identificación de Personas Desaparecidas.

**Artículo 123.** La persona que proporcione información para análisis pericial debe otorgar previamente su consentimiento por escrito, y tiene derecho a designar, a su cargo, a peritos independientes para que en su presencia se recabe la muestra.

Los servicios periciales deberán almacenar las muestras y otros objetos relevantes para la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con lo que establezca esta Ley, el protocolo correspondiente y los estándares internacionales en la materia.

Los peritos independientes a que se refiere el párrafo anterior deben contar con la certificación legalmente expedida por instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, asegurando que cumplan con los estándares de certificación nacional o internacional y cuenten con una especialidad acreditada en el ramo de las ciencias forenses que correspondan. Los peritos serán acreditados ante la autoridad judicial o ministerial que corresponda, mismas que no pueden negarla injustificadamente ni demorarse en hacer la acreditación correspondiente.

La designación y aceptación de los peritos independientes, y los dictámenes periciales que éstos formulen deben cumplir las disposiciones de la legislación procesal penal aplicable.

**Artículo 124.** El Banco Nacional de Datos Forenses, además de la información pericial y forense, útil para la identificación de una persona, debe contar con una base de datos de información genética que contenga, como mínimo:

I. La información genética de los Familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o segundo grado en línea colateral, de las Personas Desaparecidas y No Localizadas, conforme se requiera, y
II. La información genética de terceras personas en los casos en que así lo requiera la autoridad ministerial o judicial que corresponda, como datos o medios de prueba.

Las muestras para análisis pericial y su subsecuente incorporación al registro forense que corresponda en términos de esta Ley, sólo pueden recabarse a las personas mencionadas en la fracción I del presente artículo con su aceptación expresa, informada y por escrito en una diligencia ministerial.

**Artículo 125.** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede utilizarse en otras investigaciones cuando aporte elementos para la localización de una persona, cuando sea de utilidad para otros procedimientos penales o para el ejercicio del derecho de la víctima a obtener la reparación integral.

**Artículo 126.** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede ser confrontada con la información que esté en poder de otras autoridades e instituciones, nacionales o extranjeras, así como otros bancos forenses que puedan ser útiles para identificar a una persona.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben establecer los mecanismos de colaboración necesarios para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior. Asimismo, podrán coordinarse con las autoridades de otros países que posean bases de datos, prioritariamente con aquellos países que tengan frontera o flujo migratorio relevante con México.

Cuando se trate de personas migrantes desaparecidas en México, se estará a lo que establece las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 127.** Los datos personales contenidos en el Banco Nacional de Datos Forenses deberán ser tratados de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La obtención, administración, uso y conservación de información forense deben realizarse con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, así como otros acuerdos con las instituciones internacionales que cuenten con bases de datos o bancos de datos forenses.

Una vez identificada la Persona Desaparecida o no Localizada, los titulares de los datos personales o sus familiares, según sea el caso, podrán solicitar el tratamiento de sus datos en los términos de la legislación de la materia.

## SECCIÓN CUARTA
## DE LA DISPOSICIÓN DE CADÁVERES DE PERSONAS

**Artículo 128.** Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.

Las Procuradurías y otras autoridades que tengan a su cargo servicios forenses deben tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados.

Cuando las investigaciones revelen la identidad del cadáver o los restos de la persona, el agente del Ministerio Público competente podrá autorizar que los Familiares dispongan de él y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios para continuar con las investigaciones o para el correcto desarrollo del proceso penal, en cuyo caso dictará las medidas correspondientes.

En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría de Salud.

**Artículo 129.** Las autoridades correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas con propósito de la identificación un cadáver o resto humano antes de inhumarlo, a partir de los procedimientos establecidos por el protocolo homologado aplicable.

Una vez recabadas las muestras a que se refiere el párrafo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá autorizar la inhumación de un cadáver o resto humano no identificado. En el caso de inhumación, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que ésta sea digna, en una fosa individualizada, con las medidas que garanticen toda la información requerida para el adecuado registro y en un lugar claramente identificado que permita su posterior localización.

**Artículo 130.** Para efectos de lo dispuesto en esta Sección, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Secretaría de Salud, determinarán las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres o restos de personas, mediante lineamientos conforme a los más altos estándares internacionales que deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación.

## SECCIÓN QUINTA
## DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

**Artículo 131.** Las bases y los registros a que se refiere esta Ley deben estar diseñados de tal forma que:

I. No exista duplicidad de registros;
II. Permitan utilizar en la búsqueda y en la investigación de los delitos, las herramientas de análisis de contexto, con enfoque transnacional, a fin de determinar patrones de criminalidad, modo de operación, mapas

criminológicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada, entre otros;

III. Cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Procuraduría, los que deberán ser acordes con los lineamientos que emita la Comisión Nacional en términos de la fracción XIV del artículo 53 de esta Ley, y

IV. Permitan su actualización permanente por parte de las Fiscalías Especializadas y demás autoridades competentes, en términos de lo previsto en esta Ley.

**Artículo 132.** La Procuraduría debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses a que se refiere este Título cuenten con las características siguientes:

I. Reflejen automática e inmediatamente cada registro en el Registro Nacional para efectos estadísticos;
II. Estén interconectados en tiempo real y su información esté respaldada;
III. Una vez ingresada la información de un Reporte, denuncia o Noticia en el Registro Nacional, puedan realizar una búsqueda automática en las bases de datos referidas en esta Ley, y
IV. No cuenten con la posibilidad de eliminar registros.

La Procuraduría, con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, emitirá los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas se interconecten en tiempo real con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

**Artículo 133.** Además de lo establecido en este Capítulo, la Federación y las Entidades Federativas, deberán contar, al menos, con:

I. El Registro Administrativo de Detenciones, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y
II. El Registro Nacional de Fosas, el cual deberá contar con la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen.

## CAPÍTULO OCTAVO
## DEL PROGRAMA NACIONAL DE BÚSQUEDA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE EXHUMACIONES

**Artículo 134.** El Programa Nacional de Búsqueda y Localización, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deberá contener, como mínimo:

I. Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del Programa.
II. El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre la desaparición y los posibles paraderos de personas.
III. Las metodologías y procesos para recopilar y sistematizar información de las diferentes fuentes disponibles y para su incorporación y procesamiento en bases de datos o sistemas particulares para facilitar las labores de búsqueda y localización.
IV. La identificación de tiempo y lugar de episodios críticos de desaparición de personas en el país, la definición de los contextos de las desapariciones y las metodologías a emplearse para la búsqueda y localización en cada uno de esos contextos.
V. Las estrategias regionales o locales de búsqueda que se determinen de acuerdo a contextos y temporalidades específicas.
VI. Las estrategias específicas a seguir con base en la información y el análisis de contexto, para la búsqueda de personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores u otras personas o grupos que dadas sus características requieran medidas o mecanismos diferenciados de búsqueda.
VII. Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado.
VIII. El método específico de análisis de contexto que contribuya en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en episodios de violencia política del pasado, en términos de las disposiciones aplicables.
IX. El proceso para la depuración y organización de la información contenida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y su integración y armonización con otros registros que contengan información relevante para la búsqueda y localización de personas.
X. Los procesos, sistemas y mecanismos para la coordinación con el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

XI. Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa.
XII. La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación.
XIII. El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa.
XIV. Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición.
XV. El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

**Artículo 135.** La elaboración del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, a cargo de la Procuraduría General de la República, deberá contener, como mínimo:

I. Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del programa;
II. El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre las personas fallecidas sin identificar que permita aportar información sobre la hipótesis de identificación de las personas inhumadas;
III. Información estadística sobre el número de cuerpos inhumados sin identificar;
IV. El listado de todos los panteones y cementerios del país, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar inhumados en cada uno y las circunstancias y contextos correspondientes;
V. El listado de todos los lugares de inhumación clandestina de cuerpos que se hayan localizado, a partir de la información que proporcionen las Procuradurías y Fiscalías Especializadas, especificando si ya se ha procesado la zona y si se han localizado restos, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar recuperados en cada uno, las circunstancias y contextos correspondientes y el estatus de los procesos de identificación respectivos;
VI. Las estrategias regionales o locales de exhumación que se determinen de acuerdo a contextos y/o patrones específicos;
VII. Los criterios logísticos de priorización de las actuaciones de exhumaciones e identificación forense, de acuerdo a información recabada;
VIII. La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación;
IX. El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa;

X. Las actuaciones previstas para la identificación de las personas inhumadas y para proceder a las inhumaciones controladas, así como los tiempos previstos para su realización;

XI. Los procesos para el intercambio de información y coordinación con el Programa Nacional de Búsqueda y Localización;

XII. Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado;

XIII. Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa;

XIV. Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición, y

XV. El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

La Procuraduría, al ejercer la facultad a la que se refiere este artículo, deberá solicitar información a las autoridades competentes que cuenten con información necesaria y considerar la opinión de la Comisión Nacional de Búsqueda y expertos en la materia.

## TÍTULO CUARTO
## DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 136.** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y atención, por sí mismas o en coordinación con otras instituciones competentes, en los términos del presente Título y de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 137.** Las víctimas directas de los delitos desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes:

I. A la protección de sus derechos, personalidad e intereses jurídicos;

II. A que las autoridades inicien las acciones de búsqueda y localización, bajos los principios de esta Ley, desde el momento en que se tenga Noticia de su desaparición;

III. A ser restablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado con vida;
IV. A proceder en contra de quienes de mala fe hagan uso de los mecanismos previstos en esta Ley para despojarlo de sus bienes o derechos;
V. A recibir tratamiento especializado desde el momento de su localización para la superación del daño sufrido producto de los delitos previstos en la presente Ley, y
VI. A que su nombre y honra sean restablecidos en casos donde su defensa haya sido imposible debido a su condición de Persona Desaparecida.

El ejercicio de los derechos contenidos en las fracciones I, II, IV y VI de este artículo, será ejercido por los familiares y personas autorizadas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y en la legislación aplicable.

**Artículo 138.** Los familiares de las víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:

I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida;
II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser fundada y motivada por escrito
III. Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación;
IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los expedientes de búsqueda;
V. Acceder a las medidas de ayuda asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial.
VI. Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promueva ante autoridad competente;
VII. Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales en las acciones de búsqueda, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable;

VIII. Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia;
IX. Acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y mecanismos que emanen de la presente Ley;
X. Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la presente Ley;
XI. Participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de familiares, de acuerdo a los protocolos en la materia, y
XII. Acceder a los programas y servicios especializados que las autoridades competentes diseñen e implementen para la atención y superación del daño producto de los delitos contemplados en la presente Ley.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN

**Artículo 139.** Los Familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 140.** Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas en tanto realizan las gestiones para que otras instituciones públicas brinden la atención respectiva.

La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere el presente Título y la Ley General de Victimas, en forma individual, grupal o familiar, según corresponda.

**Artículo 141.** Cuando durante la búsqueda o investigación exista un cambio de fuero, las Víctimas deben seguir recibiendo las medidas de ayuda, asistencia y atención por la Comisión de Atención a Víctimas que le atiende al momento del cambio, en tanto se establece el mecanismo de atención a Víctimas del fuero que corresponda.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA

**Artículo 142.** Los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo que dispuesto en esta Ley y las leyes aplicables.

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia será estrictamente voluntario. Las autoridades en contacto con los Familiares deberán informar del procedimiento y efectos de la Declaración a éstos.

**Artículo 143.** Para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional que conozca de la Declaración Especial de Ausencia se estará a cualquiera de los siguientes criterios:

I. El último domicilio de la Persona Desaparecida;
II. El domicilio de la persona quien promueva la acción;
III. El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición; o
IV. El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.

**Artículo 144.** Las leyes de la Federación y de las Entidades Federativas deben establecer el procedimiento a que se refiere este capítulo, sin que el plazo para resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia exceda de seis meses a partir de iniciado el procedimiento.

Los procedimientos deberán contemplar aquellos casos en los cuales se haya declarado la presunción de ausencia o de muerte de una persona desaparecida, para permitirle acceder a la Declaratoria Especial de Ausencia y corregir el estatus legal de la persona desaparecida.

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia o Reporte de desaparición, o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante un organismo público de protección de los derechos humanos de las Entidades Federativas.

El procedimiento para emitir la Declaración Especial de Ausencia se regirá bajo los principios de inmediatez, celeridad y gratuidad. Los gastos derivados de este procedimiento, incluyendo publicación de edictos, no causarán contribución alguna en el caso de publicación en medios oficiales. La Comisión Ejecutiva, o a la Comisión de Víctimas que corresponda, podrá otorgar las medidas de asistencia necesarias a los Familiares durante el procedimiento, incluido el gasto que se genere con motivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y demás normativa aplicable.

Los procedimientos a que se refiere este Capítulo deben contemplar la posibilidad de emitir medidas provisionales durante el procedimiento y deberán omitir requisitos que resulten onerosos para la emisión de las declaratorias. Los Familiares podrán en cualquier momento antes de emitida la Declaratoria desistirse de continuar con el procedimiento.

**Artículo 145**. La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad:

I. Reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida, y
II. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares de la Persona Desaparecida.

**Artículo 146.** La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:

I. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;
II. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en los términos de la legislación civil aplicable;
III. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;
IV. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por la ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;
V. Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida, continúen gozando de

todos los beneficios aplicables a este régimen;

VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes dela Persona Desaparecida;

VII. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo;

VIII. Proveer sobre la representación legal de la persona ausente cuando corresponda, y

IX. Establecer las reglas aplicables en caso de que la persona sea localizada con vida para el restablecimiento de sus derechos y cumplimiento de obligaciones.

**Artículo 147.** La Declaración Especial de Ausencia sólo tiene efectos de carácter civil, por lo que no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

**Artículo 148.** La Comisión Nacional de Búsqueda debe continuar con la búsqueda, de conformidad con esta la Ley, así como de las Fiscalías Especializadas de continuar con la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, aun cuando alguno de los Familiares o persona legitimada haya solicitado la Declaración Especial de Ausencia.

**Artículo 149.** Si la Persona Desaparecida declarada ausente es localizada con vida, ésta puede solicitar, ante el órgano jurisdiccional que declaró la ausencia, la recuperación de sus bienes.

Si la persona declarada ausente es encontrada sin vida, sus Familiares pueden solicitar al juez civil competente iniciar los procedimientos que conforme a la legislación civil aplicable correspondan.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

**Artículo 150.** Las víctimas de los delitos establecidos en la presente Ley tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas.

El derecho para que la víctima solicite la reparación integral es imprescriptible.

**Artículo 151.** La reparación integral a las víctimas de los delitos establecidos en la presente Ley comprenderá, además de lo establecido en la Ley General de Víctimas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en normas del derecho internacional, los elementos siguientes:

I. Medidas de satisfacción:
   **a)** Construcción de lugares o monumentos de memoria;
   **b)** Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas;
   **c)** Recuperación de escenarios de encuentro comunitario;
   **d)** Recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas, o
   **e)** Recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante, y

II. Medidas de no repetición que, entre otras acciones, deben incluir la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de los servidores públicos investigados o sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso y previo desahogo de los procedimientos administrativos y/o judiciales que correspondan.

**Artículo 152.** La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, son responsables de asegurar la reparación integral a las víctimas por Desaparición Forzada de Personas cuando sean responsables sus servidores públicos o particulares bajo la autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de éstos.

La Federación y las Entidades Federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a las víctimas de desaparición cometida por particulares en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

**Artículo 153.** Las Fiscalías Especializadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben establecer programas para la protección de las víctimas, los Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal o las leyes análogas de las Entidades Federativas.

También deberán otorgar el apoyo ministerial, pericial, policial y de otras fuerzas de seguridad a las organizaciones de Familiares y a Familiares en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas en campo, garantizando todas las medidas de protección a su integridad física.

**Artículo 154.** Las Fiscalías Especializadas pueden otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas, como medida urgente de protección la reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo anterior, conforme a los procedimientos y con las autorizaciones aplicables.

**Artículo 155.** Las Fiscalías Especializadas pueden otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas, como medida de protección para enfrentar el riesgo, la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados, y demás medios de protección que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, conforme a la legislación aplicable.

Cuando se trate de personas defensoras de los derechos humanos o periodistas se estará también a lo dispuesto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas.

**Artículo 156.** La incorporación a los programas de protección de personas a que se refiere el artículo 153 de esta Ley debe ser autorizada por el agente del Ministerio Público encargado de la investigación o por los titulares de las Fiscalías Especializadas correspondientes.

**Artículo 157.** La información y documentación relacionada con las personas protegidas debe ser tratada con estricta reserva o confidencialidad, según corresponda.

## TÍTULO QUINTO
## DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 158.** La Secretaría de Gobernación, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deberán coordinarse para implementar las medidas de prevención previstas en el artículo 161 de esta Ley.

Lo anterior con independencia de las establecidas en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 159.** Todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Las grabaciones deberán almacenarse de forma segura por dos años.

**Artículo 160.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben administrar bases de datos estadísticas relativas a la incidencia de los delitos previstos en esta Ley, garantizando que los datos estén desagregados, al menos, por género, edad, nacionalidad, Entidad Federativa, sujeto activo, rango y dependencia de adscripción, así como si se trata de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

Las bases de datos a que se refiere el párrafo que antecede deben permitir la identificación de circunstancias, grupos en condición de vulnerabilidad, modus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de alto riesgo en los que aumente la probabilidad de comisión de alguno de los delitos previstos en esta ley para garantizar su prevención.

**Artículo 161.** El Sistema Nacional, a través de la Comisión Nacional Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, Procuraduría y las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, debe respecto de los delitos previstos en esta Ley:

I. Llevar a cabo campañas informativas dirigidas a fomentar la denuncia de los delitos y sobre instituciones de atención y servicios que brindan;
II. Proponer acciones de capacitación a las Instituciones de Seguridad Pública, a las áreas ministeriales, policiales y periciales y otras que tengan como objeto la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación y sanción de los delitos previstos en esta Ley, así como la atención y protección a víctimas con una perspectiva psicosocial;
III. Proponer e implementar programas que incentiven a la ciudadanía, incluyendo a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, a proporcionar la información con que cuenten para la investigación de los delitos previstos en la presente Ley, así como para la ubicación y rescate de las Personas Desaparecidas o No Localizadas;
IV. Promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales para fortalecer la prevención de las conductas delictivas;
V. Recabar y generar información respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en materia de búsqueda de personas, prevención e investigación;
VI. Identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos, así como hacer pública dicha información de manera anual;
VII. Proporcionar información y asesoría a las personas que así lo soliciten, de manera presencial, telefónica o por escrito o por cualquier otro medio, relacionada con el objeto de esta Ley, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos;
VIII. Reunirse, por lo menos dos veces al año, para intercambiar experiencias que permitan implementar políticas públicas en materia de prevención de los delitos;
IX. Emitir un informe anual respecto de las acciones realizadas para el

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

X. Diseñar instrumentos de evaluación e indicadores para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, en donde se contemple la participación voluntaria de familiares;

XI. Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre la problemática de desaparición de personas y otras conductas delictivas conexas o de violencia vinculadas a este delito, que permitan la elaboración de políticas públicas que lo prevengan, y

XII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 162.** Las Fiscalías Especializadas deben intercambiar la información que favorezca la investigación de los delitos previstos en esta Ley y que permita la identificación y sanción de los responsables.

**Artículo 163.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben diseñar los mecanismos de colaboración que correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

**Artículo 164.** El Sistema Nacional, a través de la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, debe coordinar el diseño y aplicación de programas que permitan combatir las causas que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial referencia a la marginación las condiciones de pobreza, la violencia comunitaria, la presencia de grupos delictivos, la operación de redes de trata, los antecedentes de otros delitos conexos y la desigualdad social.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA PROGRAMACIÓN

**Artículo 165.** Los programas de prevención a que se refiere el presente Título deben incluir metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a servidores públicos.

**Artículo 166.** La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligados a remitir anualmente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos generados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estudios sobre las causas, distribución geográfica de la frecuencia delictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos previstos en esta Ley, así como su programa de prevención sobre los mismos. Estos estudios deberán ser

públicos y podrán consultarse en la página de internet del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA CAPACITACIÓN

**Artículo 167.** La Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y la autoridad municipal que el titular del Ayuntamiento determine deben establecer programas obligatorios de capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a los principios referidos en el artículo 5 de esta Ley, para servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública involucrados en la búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos.

**Artículo 168.** La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deben capacitar, en el ámbito de sus competencias, al personal ministerial, policial y pericial conforme a los más altos estándares internacionales, respecto de las técnicas de búsqueda, investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere esta Ley, con pleno respeto a los derechos humanos y con enfoque psicosocial.

**Artículo 169.** Las Instituciones de Seguridad Pública seleccionarán, de conformidad con los procedimientos de evaluación y controles de confianza aplicables, al personal policial que conformará los Grupos de Búsqueda.

**Artículo 170.** La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los lineamientos que permitan a cada orden de gobierno determinar el número de integrantes que conformarán los Grupos de Búsqueda de conformidad con las cifras de los índices del delito de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como de Personas No Localizadas que existan en cada Entidad Federativa o Municipio.

**Artículo 171.** La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar y certificar, a su personal conforme a los criterios de capacitación y certificación que al efecto establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

**Artículo 172.** Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 170 y 171, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar a todo el personal policial respecto de los protocolos de actuación inmediata y las acciones específicas que deben realizar cuando tengan conocimiento, por cualquier medio, de la desaparición o no localización de una persona.

**Artículo 173.** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben capacitar a sus servidores públicos, conforme a los más altos estándares internacionales, para brindar medidas de ayuda, asistencia y atención con un enfoque psicosocial y técnicas especializadas para el acompañamiento de las víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben implementar programas de difusión a efecto de dar a conocer los servicios y medidas que brindan a las víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley, en términos de lo previsto en este ordenamiento.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se **REFORMA** el tercer párrafo del artículo 25; se **DEROGA** el Capítulo III Bis del Título Décimo conformado por los artículos 215-A a 215-D, y se **ADICIONA** un artículo 280-Bis al Título Décimo Séptimo, todos del Código Penal Federal, para quedar como siguen:

**Artículo 25.-** ...

...

El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo no es aplicable para los delitos que se sancionen de conformidad con lo estipulado en otras leyes.

**CAPITULO III BIS**
**Desaparición forzada de personas**
**(Derogado)**

**Artículo 215-A.-** Derogado

**Artículo 215-B.-** Derogado

**Artículo 215-C**.- Derogado

**Artículo 215-D**.- Derogado.

**Artículo 280 Bis.- Se impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcial el cadáver o restos humanos de una persona no identificada, sin autorización de las autoridades competentes en la materia.**

**ARTÍCULO TERCERO**. Se **REFORMAN** los artículos 348, segundo párrafo; 350 bis 3, segundo párrafo; 350 Bis 4 y 350 Bis 5, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

**Artículo 348.-**...

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. **Para el caso de cadáveres de personas no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.**

...

**Artículo 350 Bis 3.-**...

Tratándose de cadáveres de personas desconocidas o no identificados se estará a lo dispuesto en la **Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas**.

**Artículo 350 Bis 4.-** Las instituciones educativas **sólo podrán utilizar cadáveres respecto de los que tengan el consentimiento, ante mortem de la persona fallecida o de sus familiares después de su muerte.**

**Las instituciones educativas que reciban cadáveres para efectos de investigación o de docencia deberán tener un registro que contenga, por lo menos:**

I. **Nombre completo de la persona fallecida;**

II. **El domicilio en el que habitaba la persona fallecida;**

III. **Edad que tenía la persona al fallecer;**

IV. **Sexo de la persona fallecida;**

V. **Estado civil de la persona fallecida;**

VI. **Nombre y domicilio del cónyuge, concubina o concubinario;**

VII. **Nombre y domicilio de los padres y en caso de haber fallecido éstos, la mención de este hecho;**

VIII. **En caso de no tener cónyuge, concubina o concubinario, o padres, el señalamiento del nombre y domicilio de alguno de sus familiares más cercanos, y**

IX. **El nombre de la institución educativa beneficiaria del cadáver.**

**Artículo 350 Bis 5.-** Los cadáveres que se hayan destinado para fines de docencia e investigación serán inhumados o incinerados.

## TRANSITORIOS

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la emisión de los instrumentos a que se refiere el Artículo Décimo Cuarto Transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y demás autoridades deberán cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a esta Ley.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales, además de los protocolos previstos en esta Ley, continuarán aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad.

**SEGUNDO.** Se abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**TERCERO.** Las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los treinta días siguientes a que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los protocolos rectores para su funcionamiento previstos en el artículo 53, fracción VIII, de esta Ley.

Dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, ésta deberá emitir el Programa Nacional de Búsqueda.

Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda deberán estar certificados dentro del año posterior a su creación.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los criterios previstos en el artículo 53, fracción L, de esta Ley, dentro de los noventa días posteriores a su entrada en funciones.

La Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales podrán, a partir de que entren en funcionamiento, ejercer las atribuciones que esta Ley les confiere con relación a los procesos de búsqueda que se encuentren pendientes. La Comisión Nacional de Búsqueda coordinará la búsqueda de las personas desaparecidas relacionadas con búsquedas en las que, a la entrada en vigor de esta Ley, participen autoridades federales.

**CUARTO.** Las Comisiones Locales de Búsqueda deberán entrar en funciones a partir de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

La Comisión Nacional de Búsqueda deberá brindar la asesoría necesaria a las entidades federales para el establecimiento de sus Comisiones Locales de Búsqueda.

**QUINTO.** El Consejo Ciudadano deberá estar conformado dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

En un plazo de treinta días posteriores a su conformación el Consejo Ciudadano deberá emitir sus reglas de funcionamiento.

**SEXTO.** El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto.

En la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, se deberán emitir los lineamientos y modelos a que refiere el artículo 49, fracciones I, VIII, XV y XVI de esta Ley.

En la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, que se lleve conforme a lo dispuesto por esta Ley, se deberán emitir los criterios de certificación y especialización previstos en el artículo 55.

**SÉPTIMO.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos previstos en el artículo transitorio anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, las Entidades Federativas deberán poner en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

**OCTAVO.** En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas, las Procuradurías Locales deberán incorporar en un registro provisional, electrónico o impreso, la información de los Reportes, denuncias o Noticias recibidas conforme a lo que establece el artículo 106 de esta Ley.

La Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la información contenida en los registros provisionales a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

**NOVENO.** El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable.

**DÉCIMO.** A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que las disposiciones contenidas en el mismo contemplen la descripción legal de conductas previstas en otras normas como delitos y por virtud de la presente Ley se denominan, tipifican, penalizan o agravan de forma diversa, siempre y cuando la conducta y los hechos correspondan a la descripción que ahora se establece, se estará a lo siguiente:

I. En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos de esta ley, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la presente Ley;
II. En las investigaciones iniciadas en las que aún no se ejerza acción penal, el Ministerio Público la ejercitará de conformidad con la traslación del tipo que resulte procedente;
III. En los procesos iniciados conforme al sistema penal mixto en los que el Ministerio Público aún no formule conclusiones acusatorias, procederá a su elaboración y presentación de conformidad con la traslación del tipo penal que, en su caso, resultare procedente;
IV. En los procesos iniciados conforme al sistema acusatorio adversarial, en los que el Ministerio Público aún no presente acusación, procederá a su preparación y presentación atendiendo a la traslación del tipo que pudiera proceder;
V. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal que corresponda, podrá efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado, incluyendo sus modalidades, sin exceder el monto de las penas señaladas en la respectiva ley vigente al momento de la comisión de los hechos, y
VI. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, según las modalidades correspondientes.

**DÉCIMO PRIMERO.** El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Dentro de los treinta días siguientes a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le transferirá las herramientas tecnológicas y la información que haya recabado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dentro de los noventa días siguientes a que reciba la información a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá transmitir a las fiscalías especializadas la información de las Personas Desaparecidas o No Localizadas que correspondan al ámbito de su competencia.

Las Fiscalías Especializadas deberán actualizar el contenido del Registro Nacional, conforme a lo siguiente:

I. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que reciban la información, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá recabar información sobre las personas inscritas en el Registro previsto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que correspondan a su ámbito de competencia, a fin de que dicha información esté apegada a lo dispuesto en el artículo 106 y, en su caso, al artículo 112 de esta Ley;
II. En términos de la fracción anterior, las Fiscalías Especializadas que estén impedidas materialmente para actualizar la información dentro del plazo previsto, deberán publicar un padrón con el nombre de las Personas Desaparecidas o no Localizadas cuya información no haya sido actualizada, a efecto de que, dentro de los ciento veinte días siguientes, los Familiares y organizaciones de la sociedad civil proporcionen la información que pudiera resultar útil para realizar dicha actualización;
III. Una vez actualizada la información, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá ingresarla al registro que corresponda, a excepción de que la actualización revele que la persona fue localizada, en cuyo caso, se asentará en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y
IV. Al haberse realizado la acción prevista en la fracción II de este artículo, de no haberse actualizado el registro, la Fiscalía Especializada que corresponda estará materialmente imposibilitada para actualizarlo. En este supuesto, el registro permanecerá con la anotación de actualización pendiente y será migrado, con ese carácter, al registro que corresponda.

**DÉCIMO TERCERO.** El Banco Nacional de Datos Forenses, los registros forenses Federal y el de las Entidades Federativas comenzarán a operar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los tres meses siguientes a que inicie la operación de dichos registros, las autoridades que posean información forense deberán incorporarla al registro que corresponda.

**DÉCIMO CUARTO.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deberá emitir el Protocolo Homologado de Investigación a que se refiere el artículo 99 de esta Ley.

**DÉCIMO QUINTO.** Las autoridades e instituciones que recaban la información a que se refiere el artículo 103 la deberán incorporar en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**DÉCIMO SEXTO.** En las Entidades Federativas en las que no exista una Comisión de Atención a Víctimas, las instituciones públicas competentes de la Entidad Federativa deberán brindar la atención a Víctimas conforme a lo establecido en el Título Cuarto de esta Ley.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Las legislaturas de las Entidades Federativas, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.

**DÉCIMO OCTAVO.** Los lineamientos para determinar las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres o restos de personas a que refiere el artículo 130 de esta Ley deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

**DÉCIMO NOVENO.** La Procuraduría General de la República debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, conforme a lo previsto en los artículos 131, fracción III y 132, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior la Procuraduría General de la República emitirá los lineamientos necesarios para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan en forma homologada la información que será integrada al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y al Banco Nacional de Datos Forenses previstos en la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por Particulares.

**VIGÉSIMO.** En tanto las entidades federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de Búsqueda, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

Asimismo, las Entidades Federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto.

**VIGÉSIMO PRIMERO.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá emitir los lineamientos a que se refiere la fracción XIV del artículo 53 de la Ley.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.-
Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ
Vicepresidenta

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
Secretaria

Se remite a la Honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.

DR. ARTURO GARITA
Secretario General de Servicios Parlamentarios

**LA SUSCRITA, SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 220.4 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE ES COPIA DEL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y QUE SE REMITE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.**

**SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA**
**Secretaria**

# VOLUMEN II

## CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 14 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017

### DICTAMEN DE DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y MODIFICA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE SALUD

**La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:** Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

**Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos**
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

**DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, REFERENTE A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD.**

**HONORABLE ASAMBLEA:**

Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de lo siguiente: Declaratoria de Publicidad. Octubre 10 del 2017

**I. Antecedentes.**

**1.** Con fecha 13 de febrero de 2014, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

En la misma fecha, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

**2.** En sesión del Pleno de la Colegisladora, celebrada el 18 de marzo de 2015, el Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

**3.** En sesión del Pleno del Senado de la República, celebrada el 24 de marzo de 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas; y se reforman y adicionan los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

**4.** En sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, celebrada el 16 de abril de 2015, el Senador Omar Fayad Meneses, con el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa

con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

**5.** En sesión del Pleno de la Colegisladora, celebrada el 17 de septiembre de 2015, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández, Layda Sansores San Román y Silvia Guadalupe Garza Galván, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares.

En esa misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

**6.** En sesión del Pleno del Senado de la República, celebrada el 14 de diciembre de 2015, en representación y por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos remitió a la Colegisladora la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas; y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinó el turno de la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos.

**7.** En fecha 27 de abril de 2017, en sesión del Senado de la República, fue aprobado por 89 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, que contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

**8.** En fecha 2 de mayo de 2017, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

En esa misma fecha, la Minuta de mérito fue recibida en las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, conforme al turno emitido para su dictamen correspondiente.

**II. Contenido de la Minuta.**

La Minuta de la Colegisladora propone expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Asimismo, plantea realizar

reformas y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

La propuesta de nueva Ley tiene por objeto: establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como para esclarecer los hechos; prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desapariciones cometidas por particulares, así como de los delitos vinculados a los mismos; establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las de otros delitos vinculados a los mismos con sus correspondientes sanciones; crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; crear la Comisión Nacional de Búsqueda y establecer la obligación de las entidades federativas para que establezcan Comisiones Locales de Búsqueda; garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; garantizar la atención, asistencia, protección y, en su caso, la reparación integral, así como las garantías de no repetición en términos de la Ley que se propone y demás legislación aplicable; crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar que coadyuven en las etapas de la investigación, a fin de que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias; entre otras modificaciones que se expondrán a lo largo del presente dictamen.

Por lo que hace a las modificaciones y derogaciones propuestas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, las mismas se plantean a fin de dar armonía y articulación al sistema jurídico. Para ello, se propone derogar los tipos penales contemplados en el Código Penal Federal (los

cuales serán regulados ahora en la Ley General), así como en lo concerniente al tratamiento de los cadáveres y restos de personas no identificadas.

## III. Consideraciones de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos

***Sobre la necesidad de legislar y el Compromiso del Estado Mexicano.***

Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos externan su condena enérgica a crímenes atroces como la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares. En ese sentido, cumpliendo con nuestro deber constitucional, así como con los compromisos asumidos en el plano internacional y, ante todo, guiados por el principio de máxima protección al ser humano que nos instruye el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), estas Comisiones dictaminadoras tienen a bien someter a consideración de esta H. Asamblea, el presente Dictamen, en sentido positivo, a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

La necesidad de expedir una Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y las cometidas por particulares, atiende a un grave y sentido problema existente en nuestro país y frente al cual el Congreso de la Unión no puede ser omiso.

Como es del dominio público, después de un amplio periodo de invisibilización del problema, finalmente, en febrero de 2013, el Gobierno Federal dio a conocer una cifra sobre personas que habían desaparecido entre el 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Si bien en algunos casos dicha cifra fue criticada y mostró disparidades con otras

estimaciones formuladas por distintas instancias públicas y sociales, tanto nacionales como internacionales, la emisión de dicha información fue una muestra clara del reconocimiento e interés gubernamental para atender la problemática de desapariciones que azota a nuestro país, así como de las demandas de los colectivos que han sido encabezados, principalmente, por los familiares de personas desaparecidas.

Como se recordará, antes de la fecha citada, había prevalecido la falta de interés (tanto de autoridades estatales como federales) por informar a la sociedad sobre la magnitud del problema. En ese tenor, la cantidad que se reportó en aquel momento fue de 26,121 personas desaparecidas. Sin embargo, a esta fecha, se sigue trabajando en la actualización y validación de datos.

Por otra parte, organizaciones internacionales y nacionales se han dado a la tarea de visibilizar información que revela el grave problema que en este rubro enfrenta nuestro país, dando cuenta de distintos puntos débiles que se deben atender para dar respuesta y solución a las desapariciones ocurridas en el territorio nacional.

Adicionalmente, como se señaló en el apartado de antecedentes del presente dictamen, en los años inmediatos anteriores, han sido presentadas diversas iniciativas por parte de legisladores de distintos Grupos Parlamentarios, en algunos casos actuando de motu proprio y, en otros, retomando proyectos legislativos esbozados y trabajados conjuntamente con distintos colectivos sociales enfocados al combate y prevención de los crímenes aberrantes objeto del presente dictamen.

De manera paralela, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, ha manifestado que la protección de los derechos humanos es un tema preponderante de su gobierno y, para fortalecer ese rubro, se requieren cambios estructurales sustentados en normas jurídicas que permitan prevenir

y sancionar con eficacia la tortura y los actos de desaparición forzada de personas, entre otros muchos temas.

En ese tenor, el Gobierno Federal ha prestado particular atención a la problemática de las personas desaparecidas. A manera ilustrativa, pueden citarse las siguientes acciones que se han venido impulsando:

- La creación, en 2013, de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR[1], la cual investiga los casos de personas desaparecidas y posibles desapariciones forzadas. Esta Unidad ha establecido diversos acuerdos con dependencias de procuración de justicia de entidades federativas para la investigación de casos de desaparición forzada.

- Asimismo, en febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja para salvaguardar la integridad de las personas y garantizar el acceso a la justicia, sumando las capacidades de ambas instituciones en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas. En el marco de ese convenio, se creó un Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada en el que participa el Comité, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, y se aborda el problema de desaparición forzada de personas desde una perspectiva jurídica, forense, tecnológica y de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas a través de subgrupos especializados.

[1] Véase el Acuerdo A/066/13 por el que se crea la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se establecen sus facultades, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2013. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303411&fecha=21/06/2013

- Por lo que hace al plano legislativo, el 14 de diciembre de 2015, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó una de las iniciativas que dieron origen a la Minuta remitida por la Colegisladora, dando así respuesta a una de las demandas más sensibles en materia de derechos humanos que han sido señaladas reiteradamente por la población, las organizaciones sociales y los sistemas internacional e interamericano de protección.

- Igualmente, no hay que pasar por alto que, con antelación, el Presidente de la República había presentado, en octubre de 2013, dos iniciativas con el objeto de retirar las reservas que el Estado mexicano había formulado previamente, sobre la expulsión de personas extranjeras y sobre los alcances de la jurisdicción militar en materia de desaparición forzada de personas, a los siguientes instrumentos internacionales:

1. La Convención sobre Condiciones de los Extranjeros;
2. La Convención sobre el Estatuto de Refugiados;
3. La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas;
4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
5. La declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Internacional de Derechos Humanos;
6. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias; y
7. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

- Adicionalmente, en fecha 22 de octubre de 2013, el Presidente de la República presentó ante el Senado una iniciativa para reformar los artículos 215-A, 215-B y 215-C, y por la que se adiciona un artículo 215-E, al Código Penal Federal. En la misma, se propuso tipificar el

delito de desaparición forzada conforme a los estándares internacionales fijados por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Igualmente, la iniciativa planteó ampliar el supuesto típico, a efecto de que se configure el delito no sólo cuando el sujeto activo propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento, sino por la simple negativa a reconocer tal privación o a informar sobre el paradero de la persona cuando se tenga conocimiento de ello.

A la par, proponía incrementar el rango de pena y precisar que, en el caso de que el sujeto sentenciado por tal delito sea un particular, quedará impedido para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos; asimismo, se amplía el rango para la sanción de inhabilitación del cargo para ejercer cualquiera otro de forma permanente.

Finalmente, establecía que de ninguna manera procederá la prescripción de la acción penal, ni la amnistía, el indulto, ni beneficios preliberacionales, ni sustitutivo alguno.

Lo anterior es muestra clara de los esfuerzos que desde el plano federal se han venido impulsando para la atención de esta severa problemática que, lamentable, afecta a miles de personas y familias en nuestro país.

***Normativa Nacional e Internacional contra las desapariciones.***

La desaparición forzada ha sido considerada, con toda la razón, uno de los crímenes más graves que pueden cometerse no solamente contra las

personas de una sociedad o un país en particular, sino contra la humanidad entera. De ello hace prueba el hecho de que la Corte Penal Internacional ha reconocido este delito como uno de los doce crímenes de lesa humanidad, siendo imprescriptible y susceptible de ser denunciado por cualquier Estado miembro del Estatuto de la Corte Penal Internacional.[2] Así, el Estatuto recién citado define a la desaparición forzada como:

> *"... la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado."*

Una vez precisado lo anterior, se estima oportuno señalar también que, conforme al sistema universal de protección, la desaparición forzada es entendida como:

> *"La detención o secuestro de una persona contra su voluntad (...) por agentes del gobierno o (...) grupos organizados o de particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, quienes se niegan a revelar la suerte (...) o el lugar donde se encuentran, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la Ley".*[3]

Como se puede apreciar, la naturaleza de este delito conlleva violaciones a otros derechos humanos, entre los que se puede citar, de manera

[2] Estatuto de la Corte Penal Internacional, Artículo 7, numeral 1, inciso i).
[3] Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, 1992.

enunciativa, los siguientes: el reconocimiento de la personalidad jurídica; la libertad y seguridad de las personas; el no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida; a la integridad física, psíquica y moral; la libertad de tránsito; la seguridad jurídica; entre otros.

Paralelamente, esta conducta delictiva puede ocasionar perjuicios en derechos de los familiares o de las personas cercanas a la persona desaparecida, así este delito puede causar agravios en derechos como: la protección y asistencia a la familia; al nivel de vida adecuado; a la salud; a la educación; a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, entre otros.

En el sistema normativo mexicano, el delito de desaparición forzada se encuentra previsto desde la CPEUM, misma que determina en su artículo 29 que bajo ninguna circunstancia podrá restringirse ni suspenderse en nuestro país, entre otras, la prohibición de la desaparición forzada.

A la par, el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la CPEUM dispone la facultad del Congreso de la Unión para expedir:

> **a)** *Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.* (El subrayado es propio)

Por otro lado, en el orden federal se prevé en el artículo 215 A del Código Penal Federal dicho delito y, en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establecen los supuestos en los que los jueces federales conocerán de los delitos del orden federal. Igualmente, las entidades federativas son competentes para investigar y juzgar, por medio de

los Ministerios Públicos estatales y los jueces locales, respectivamente, estos delitos en sus correspondientes ámbitos de actuación.

Derivado de la situación anterior, hoy en día los distintos Códigos Penales de nuestro país (estatales y federal) y, en algunos contados casos, leyes estatales, se regula el delito de desaparición forzada de manera dispar, lo cual ha generado problemas de antinomias y de persecución de este delito.

Igualmente, es importante señalar que, por lo que hace a los sistemas normativos de las entidades federativas, no todos los Estados de la Federación tipifican el delito de desaparición forzada (y menos aún el de desaparición cometida por particulares), lo que sin duda, afecta la definición de las conductas punitivas y dificulta fincar responsabilidades.[4]

Para dar muestra de lo anterior, se ilustra a continuación el siguiente cuadro comparativo que da muestra de la regulación local y federal de los tipos penales en materia de desaparición:

| DESAPARICIÓN FORZADA | | |
|---|---|---|
| **Entidad** | **Legislación** | **Contenido** |
| **Orden Federal** | Código Penal Federal | **Artículo 215-A.-** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.<br>**Artículo 215-B.-** A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión.<br>Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.<br>Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la pena aplicable será de dos a ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.<br>Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.<br>**Artículo 215-C.-** Al servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de |

[4] Para ejemplificar lo anterior, baste señalar que en Aguascalientes, a pesar de que se prevé la figura de la desaparición forzada, ésta se circunscribe estrictamente a la responsabilidad de los servidores públicos, cuando en el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce que puede ser cometido el delito por particulares bajo el auspicio, connivencia u omisión manifiesta de actuar de parte del Estado.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

**Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos**
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

| | | |
|---|---|---|
| | | uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.<br>**Artículo 215-D.-** La oposición o negativa a la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte del servidor público responsable del mismo, será sancionada con la destitución de su cargo, comisión o empleo, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los demás delitos que pudiera incurrir motivo de su conducta. |
| **Aguascalientes** | Código Penal para el Estado de Aguascalientes | **Artículo 136.-** Desaparición forzada de personas. La Desaparición Forzada de Personas consiste en:<br>I. Detener y mantener oculta a una o varias personas; o<br>II. Autorizar, apoyar o consentir que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o negar información sobre su paradero.<br>Tales acciones solo podrán imputarse a los servidores públicos del Estado de Aguascalientes que las lleven a cabo con motivo de sus atribuciones.<br>Al responsable de la Desaparición Forzada de Personas se le aplicarán de 10 a 30 años de prisión, de 300 a 600 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y con inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos. |
| **Baja California** | Código Penal para el Estado de Baja California | **Artículo 167 BIS.-** Al servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculto a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de cien a quinientos días multa. Además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por un término igual al de la pena de prisión.<br>Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrá prisión de ocho a quince años y de cincuenta a trescientos días multa.<br>Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. |
| **Baja California Sur** | Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur | **Artículo 191.** Desaparición forzada de personas. Se considerará desaparición forzada de personas el arresto, la detención o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de servidores públicos o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.<br><br>A quienes teniendo la calidad de servidores públicos, participen en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán de diez a veinte años de prisión y multa de doscientos a ochocientos días y destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión de carácter público hasta por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta, con independencia de las penas que le correspondan por los demás delitos que pudieran concurrir.<br><br>A quien sin tener la calidad de servidor público y por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público, participe en los actos descritos en este artículo, se le impondrán de siete a quince años de prisión y de cien a trescientos días multa.<br><br>El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de desaparición forzada de persona o el paradero de la víctima, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere se le impondrán de ocho a quince años prisión y multa de cien a quinientos días y destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión de carácter público, hasta por el mismo tiempo de la pena impuesta.<br><br>La pena prevista en el párrafo que antecede se impondrá así mismo al servidor público que teniendo conocimiento de la privación de la libertad o del paradero de la víctima, se niegue a proporcionar los datos de ubicación de la misma. |
| **Campeche** | Código Penal del Estado de Campeche | **Artículo 181.-** Al agente estatal que, con motivo de sus atribuciones, prive de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales procedentes, se le impondrán de diez a veinte años de prisión.<br>Para los efectos del presente Capítulo se considera agente estatal a cualquiera de los servidores públicos señalados en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como aquella persona que actúe con el apoyo, autorización o aquiescencia de un agente estatal.<br>Se impondrán dos terceras partes de la sanción, cuando el sujeto activo suministre |

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

**Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos**
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

| | | |
|---|---|---|
| | | información que permita esclarecer los hechos, y una mitad de la sanción, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. |
| **Chiapas** | Ley para la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Chiapas | **Artículo 4.-** Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público, que en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, con causa justificada o sin ella, detenga, prive de la libertad o mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, tenga conocimiento, apoye o consienta que otros lo hagan, cualquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o las personas desaparecidas de manera forzada, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales procedentes.<br>**Artículo 5.-** Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de desaparición forzada de personas quienes aun cuando no sean formalmente servidores públicos, actúen aprovechando la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.<br>**Artículo 6.-** A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le sancionará con pena privativa de la libertad de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quinientos a mil días de salarios mínimo vigente en el Estado de Chiapas, además de la inhabilitación definitiva e inconmutable de ejercer un cargo público a nivel estatal o municipal, independientemente de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos conexos. |
| **Chihuahua** | Código Penal del Estado de Chihuahua | **Artículo 165.** Al servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil días multa, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.<br>Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa.<br>Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. |
| **Coahuila de Zaragoza** | Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza | **Artículo 212 BIS.** SANCIONES Y FIGURA TÍPICA DE DESAPARICIÓN DE PERSONA. Se aplicará una pena de veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma a una o varias personas, o bien autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, sustrayéndola con ello de la protección de la ley.<br>Las mismas penas se impondrán al particular que por orden, autorización, apoyo, consentimiento o aquiescencia de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior.<br>Se le aplicará una pena de diez a cuarenta años de prisión a quien incurra en la conducta anteriormente descrita, cuando sea obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado.<br>Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de quien hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con vida o el paradero de la víctima.<br>Los delitos a que se refiere este Artículo son de ejecución permanente hasta que se esclarezca el paradero de la víctima.<br>La acción penal derivada de los delitos a que se refiere este Artículo y la pena que se imponga judicialmente al responsable, no estarán sujetas a prescripción.<br>Lo relativo a la reparación del daño a favor del ofendido o víctima en caso de resultar procedente, se atenderá a lo que se establece en el título quinto, capítulo noveno del presente ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables. |
| | Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de | **Artículo 1.-** La Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos a la identidad y personalidad jurídica de la víctima sometida a desaparición y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima. |

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

**Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos**
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

| | | |
|---|---|---|
| | Coahuila de Zaragoza | A falta de disposición expresa en esta ley se aplicará de manera supletoria en todo lo que beneficie y a solicitud de parte interesada las disposiciones del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. |
| **Colima** | Código Penal para el Estado de Colima | **Artículo 202 BIS.-** Al servidor público del Estado de Colima o sus Municipios que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le impondrá de quince a cuarenta años de prisión, y de trescientos a mil unidades de multa, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público hasta por quince años.<br>Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán de ocho a quince años de prisión y de 150 a 500 unidades de multa.<br>La oposición, negativa o desacato hacia la autoridad competente luego de haber sido requerido por ésta para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte del servidor público responsable del mismo, será sancionada con la inhabilitación de su cargo, comisión o empleo públicos, sin perjuicio de la aplicación de las penas por los demás delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta.<br>Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando el sujeto activo suministre información que permita esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima o víctimas.<br>**Artículo 202 BIS 1.-** Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio. |
| **Ciudad de México** | Código Penal para el Distrito Federal | **Artículo 168.** Al servidor público del Distrito Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil días multa, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.<br>Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa.<br>Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.<br>Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren. |
| | Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en el Distrito Federal | **ARTICULO 6.-** Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público del Distrito Federal, que de cualquier forma prive de la libertad a una o más personas, o bien, ordene, autorice, apoye, consienta, o tolere que otros lo hagan, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer la existencia de tal privación o a proporcionar información sobre su paradero o localización, substrayendo con ello a la víctima de la protección de la Ley e impidiendo el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes vigentes en el Distrito Federal; y, se le impondrá una pena de veinte a cuarenta años de prisión y multa de 67,290 a 100,935 Unidades de Cuenta, además de la destitución e inhabilitación definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisión en la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.<br><br>También comete el delito de desaparición forzada el particular que por orden, autorización, aquiescencia o con el apoyo de uno o más servidores públicos del Gobierno Distrito Federal realice los actos descritos en el párrafo anterior, y se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y multa de 16,822 a 20,187 Unidades de Cuenta, además de la inhabilitación definitiva a ejercer un cargo, empleo o comisión en la Administración Pública del Distrito Federal.<br><br>Las sanciones impuestas en estos casos, serán independientes de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos. |

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

**Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos**
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

| | | |
|---|---|---|
| | | Este delito no prescribirá.<br><br>**ARTÍCULO 7.-** Comete el delito de desaparición por particulares, la persona que no teniendo el carácter de servidor público del Gobierno del Distrito Federal y que sin actuar por orden, autorización, aquiescencia o apoyo de uno o más servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, priven de cualquier forma la libertad de la o las personas, o bien autorice, apoye, consienta o tolere que otros lo hagan, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer la existencia de tal privación con la finalidad de ocultar o no proporcionar información sobre el paradero o localización de la víctima; y, se le impondrá una pena de quince a treinta años de prisión y multa de 67,290 a 100,935 Unidades de Cuenta.<br><br>Las sanciones impuestas en estos casos, serán independientes de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos.<br><br>Este delito no prescribirá. |
| **Durango** | Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango | **Artículo 158.** Al servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de diez a treinta años y multa de setecientos veinte a dos mil ciento sesenta días de salario, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.<br>Las mismas penas se impondrán al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior.<br>Las penas previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando el sujeto activo suministre información que permita esclarecer los hechos y en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. |
| **Estado de México** | No se encuentra tipificada | |
| **Guanajuato** | Código Penal del Estado de Guanajuato | **Artículo 262-a.-** Al servidor público que propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de una o varias personas que hubieren sido previamente detenidas por autoridad, se le aplicará de cinco a cuarenta años de prisión, de mil a dos mil días multa, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta.<br>**Artículo 262-b.-** Si se suspende el ocultamiento de manera espontánea dentro de las setenta y dos horas de haberse realizado, la pena privativa de libertad será de uno a cinco años de prisión y multa de cien a quinientos días, destitución del empleo cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta. |
| **Guerrero** | Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero | **Artículo 3.-** Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes.<br>Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de desaparición forzada de personas; aquellas personas que aun cuando no sean formalmente autoridades ni funcionarios, actúen aprovechando la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos.<br>**Artículo 4.-** A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le sancionará con pena privativa de la libertad de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quinientos a mil salarios mínimos vigentes en la región, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.<br>El que cometa este delito no tendrá derecho a gozar de la conmutación de sanciones, remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad preparatoria o cualquiera de los otros beneficios que la Ley respectiva establece. |
| **Hidalgo** | Código Penal para el Estado de Hidalgo | **Artículo 322 TER.-** Comete el delito de desaparición forzada de personas, y se le impondrá prisión de veinte a cuarenta años, multa de 200 a 500 días y privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la punibilidad señalada, al servidor público que actuando con ese |

| | | |
|---|---|---|
| | | carácter o aduciendo su cargo, por sí o a través de un tercero, tenga conocimiento o intervenga de cualquier modo, en la detención legal o privación ilegal de la libertad de una o varias personas, propiciando o manteniendo dolosamente su ocultamiento, al negarse a reconocer la privación de la libertad o a proporcionar información sobre el paradero de la víctima.<br>Se impondrá la misma punibilidad a quien, aun careciendo de la calidad de servidor público, pero instigado, apoyado o autorizado por éste, explícita o implícitamente, realice o participe en la desaparición forzada de una persona.<br>El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de desaparición forzada de personas o el paradero de la víctima, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán de diez a veinte años de prisión, multa de 100 a 300 días y suspensión del cargo hasta por el máximo de la punibilidad señalada.<br>Las penas previstas en este artículo, podrán ser disminuidas hasta en una tercera parte, en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.<br>No podrá invocarse como causa de justificación, en la comisión de la conducta descrita en el párrafo primero de este artículo, la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.<br>La oposición o negativa a la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte del servidor público responsable del mismo, será sancionada con la destitución de su cargo, comisión o empleo, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los demás delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta. |
| **Jalisco** | Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco | **Artículo 154-A.** Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.<br>Es sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas quien intervenga actuando con la autorización, la ayuda, la aquiescencia o tolerancia directa o indirecta de servidores públicos o de integrantes de seguridad pública.<br>Serán igualmente considerados como sujeto activo el particular que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, aunque en ello no participen servidores públicos en ningún grado<br>El delito de desaparición forzada se considera permanente e imprescriptible.<br>**Artículo 154-B.** Se impondrá una pena de doce a cuarenta años de prisión y multa de seiscientos a mil días de salario mínimo a quien cometa el delito de desaparición forzada de personas.<br>Se incrementará la pena hasta en una tercera parte cuando la víctima del delito sea menor de edad, mujer, persona con discapacidad, indígena o persona de la tercera edad.<br>Si dentro de los cinco días siguientes a su detención se diera la liberación de la víctima, la pena aplicable será de seis a doce años de prisión, sin perjuicio del concurso de delitos.<br>Las penas previstas para el delito de desaparición forzada se aumentarán hasta el doble cuando la desaparición forzada sea perpetrada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.<br>Estas penas podrán ser disminuidas hasta en cincuenta por ciento en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos y cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.<br>El Estado proporcionará medidas de protección y resguardará la identidad de la persona o personas que sirvan como testigos o que proporcionen información que conduzca a la efectiva localización de la víctima, con el fin de salvaguardar su integridad física.<br>**Artículo 154 C.** Al servidor público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además de las penas anteriores, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará permanentemente para desempeñar cargo, comisión o empleo públicos. |
| **Michoacán** | Código Penal del Estado de Michoacán | **Artículo 230.-** Comete el delito de desaparición forzada el servidor público o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquél u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima o impida a esta el ejercicio de su derecho de protección legal y de las garantías procesales que otorga la ley.<br>**Artículo 231.-** El delito de desaparición forzada de personas, será sancionado con pena privativa de la libertad de veinte a treinta años de prisión, e inhabilitación definitiva para ejercer la función pública.<br>La pena podrá ser aumentada hasta una tercera parte cuando: |

| | | |
|---|---|---|
| | | I. Quien lo cometa sea superior jerárquico de un servidor público participante en la comisión del delito que haya tenido conocimiento de su comisión y no ejerciere su autoridad para evitarlo;<br>II. El sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, migrante, menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años, mujer embarazada, indígena, periodista, defensor de derechos humanos o sociales;<br>III. La víctima haya sido sometida a tortura, tratos crueles e inhumanos, lesiones o sea violentada sexualmente;<br>IV. Se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito:<br>V. Se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque; o,<br>VI. Como consecuencia de la desaparición forzada se ocasione la muerte de la víctima. |
| **Morelos** | Código Penal para el Estado de Morelos | **Artículo 148 QUINTUS.**- Al servidor público del Estado de Morelos que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de quinientos a mil días multa, destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión del servicio público.<br>Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días multa.<br>Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando el agente suministre información que permita esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.<br>**Artículo 148 SEXTUS.**- Se impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, cuando en la comisión del delito de desaparición forzada de personas concurriere alguna de las agravantes siguientes:<br>I. Que por causa o con ocasión de la desaparición forzada a la víctima le sobrevenga la muerte;<br>II. Que la víctima haya sido sometida a tortura, tratos crueles e inhumanos o lesiones;<br>III. Que los responsables del delito realicen acciones tendientes a ocultar el cadáver de la víctima;<br>IV. Que la víctima sea violentada sexualmente;<br>V. Que la víctima tenga alguna discapacidad, mujer embarazada, persona menor de 18 años o mayor de sesenta años o madre o padre de hijos menores de edad;<br>VI. Que se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito;<br>VII. Que sea cometida contra testigos o víctimas de hechos punibles;<br>VIII. Que se ejecute como consecuencia de una práctica policial en la investigación y persecución de los delitos y;<br>IX. Que haya sido ejecutada por un grupo en asociación delictuosa.<br>Las penas a que se refiere el presente artículo, se aplicarán con independencia de las que puedan corresponder, por otros delitos cometidos en las circunstancias anteriores. |
| **Nayarit** | Código Penal para el Estado de Nayarit | **ARTÍCULO 329.**- Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, prive de la libertad, mantenga oculta o desaparecida a una o más personas, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre el paradero de la o de las víctimas.<br>Es igualmente responsable del delito de desaparición forzada de personas, aquel que sin ser servidor público, incurra en la conducta descrita en el párrafo anterior, con la autorización, ayuda, aquiescencia o tolerancia de servidores públicos.<br>Se impondrá una pena de doce a cuarenta años de prisión y multa de cuatrocientos a mil días a quien cometa el delito de desaparición forzada de personas, así como destitución e inhabilitación de cinco a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos<br>Igualmente será responsable del delito de desaparición forzada de personas y será acreedor a una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a setecientos días, así como destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, comisión o empleo públicos de tres a diez años, el servidor público que sin ser partícipe y teniendo conocimiento de la perpetración de este delito, no diere aviso a la autoridad competente o conociendo los planes para su comisión, no adopte las medidas necesarias para evitarlo.<br>Las penas previstas en los dos párrafos anteriores podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio del responsable, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en la mitad, cuando contribuya a lograr la localización y liberación de la víctima con vida.<br>La pena que corresponda se incrementará hasta en una tercera parte, cuando la víctima sea menor de edad o incapaz, mujer embarazada, persona mayor de sesenta años o perteneciente a comunidad indígena.<br>El delito de desaparición forzada se considera permanente, en tanto no se logre la |

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

**Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos**
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

| | | |
|---|---|---|
| | | localización de la víctima o sus restos.<br>Los términos para la prescripción previstos en este Código, respecto del delito de desaparición forzada de personas, comenzarán a computarse a partir de que se localice a la víctima o sus restos. |
| **Nuevo León** | Código Penal para el Estado de Nuevo León | **Artículo 432.-** Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquel u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y las garantías procesales procedentes.<br>Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima.<br>Si durante la comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicaran las reglas del concurso.<br>**Artículo 433.-** A quien cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le sancionara con pena de quince a cuarenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil cuotas. |
| **Oaxaca** | Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca | **Artículo 348 Bis D.-** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que por sí o a través de otros realice, consienta, autorice o apoye la privación de la libertad de una o más personas y propicie o mantenga su ocultamiento bajo cualquier forma, se niegue a reconocer dicha privación de la libertad o se niegue a informar sobre el paradero de la persona.<br>Lo dispuesto en el párrafo anterior, también podrá ser cometido por un particular cuando actúe por autorización, consentimiento o apoyo de un servidor público.<br>Se equipara al delito de desaparición forzada de persona, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.<br>**Artículo 348 Bis E.-** Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrá una pena de prisión de veinte a treinta años de prisión y multa de trescientos a setecientos salarios mínimos, así como la inhabilitación por el tiempo de la pena fijada en la sentencia ejecutoriada, para el desempeño de cualquier cargo o empleos públicos.<br>Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrán prisión de cinco a veinticinco años y multa de doscientos a quinientos salarios mínimos.<br>La pena de prisión podrá ser disminuida hasta en una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando administre información que permita esclarecer los hechos; y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. |
| **Puebla** | Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla | **Artículo 304 Bis.-** Al servidor público que con motivo de sus atribuciones sin causa legítima, detenga a una o varias personas con la finalidad de ocultarlo, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, se le sancionará con prisión de quince a cuarenta años y de trescientos a mil días de salario mínimo, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.<br>Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos días de salario mínimo. |
| **Querétaro** | Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas en el Estado de Querétaro | **Artículo 4.** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que actúe con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos, que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.<br>Esta conducta será sancionada con una pena de quince a cuarenta y cinco años de prisión y de quinientos a setecientos cincuenta días multa, sin perjuicio del concurso de delitos.<br>**Artículo 5.** Comete el delito de desaparición de personas por particulares, el que sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos, prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.<br>Esta conducta será sancionada con una pena de doce a cuarenta años de prisión y de cuatrocientos a setecientos días multa; sin perjuicio del concurso de delitos. |
| **Quintana Roo** | **No se encuentra tipificada** | |
| **San Luis Potosí** | Código Penal del Estado de San Luis | **Artículo 157.** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y |

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

**Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos**
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

| | | |
|---|---|---|
| | Potosí | mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes.<br>Este delito se castigará con una pena de quince a cuarenta años de prisión; y sanción pecuniaria de mil quinientos a cuatro un mil días de salario mínimo, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.<br>La misma sanción privativa de libertad y pecuniaria que señala el párrafo anterior, se aplicará al particular que por orden, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, partícipe en la comisión del delito de desaparición forzada de personas.<br>El delito al que se refiere este capítulo es de consumación permanente en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima, por lo que no prescribe ni la acción penal, ni las penas que deriven de su comisión. |
| **Sinaloa** | Código Penal para el Estado de Sinaloa | **Artículo 172 Bis.-** Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o la persona o grupo de personas que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o sus servidores públicos, arreste, detenga, secuestre o prive de cualquier otra forma de su libertad a una persona, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida, con lo cual se le impide a ésta el ejercicio de recursos legales y las garantías procesales procedentes.<br>**Artículo 172 Bis A.-** A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le sancionará con pena de veinticinco a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa; en caso de ser servidor público se le impondrá también inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de diez a veinte años.<br>Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.<br>El delito de desaparición forzada de personas se considerará permanente e imprescriptible. |
| **Sonora** | Código Penal para el Estado de Sonora | **Artículo 181 Bis.-** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta, a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes.<br>Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima.<br>Si durante la comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicarán las reglas del concurso.<br>**Artículo 181 Bis 1.-** A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de quince a cuarenta años de prisión, además de la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública de diez a veinte años. |
| **Tabasco** | **No se encuentra tipificada** | |
| **Tamaulipas** | **No se encuentra tipificada** | |
| **Tlaxcala** | Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala | **Artículo 249.** Al servidor público que con motivo de sus atribuciones, prive de su libertad personal y mantenga oculta a una o varias personas o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de diez a treinta años y multa de setecientos veinte a dos mil ciento sesenta días de salario, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.<br>Las mismas penas se impondrán al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior.<br>Las penas previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera parte, cuando el sujeto activo suministre información que permita esclarecer los hechos y en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. |
| **Veracruz** | Código Penal para el Estado Libre y | **Artículo 318 Bis.** Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público que realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y además incurra en una o más de las siguientes |

| | | |
|---|---|---|
| | Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave | hipótesis:<br>a). Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad;<br>b). Omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad;<br>c). Oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento de la víctima;<br>d). Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre la detención, la privación de libertad o el paradero de la víctima;<br>e). Dolosamente proporcione información falsa o rinda informes falsos sobre la detención, la privación de libertad o el paradero de la víctima.<br>Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de diez a treinta años de prisión y multa de mil a cuatro mil días de salario, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la función pública. |
| **Yucatán** | **No se encuentra tipificada** | |
| **Zacatecas** | Código Penal para el Estado de Zacatecas | **Artículo 195 Ter.-** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.<br>**Artículo 195 Quater.-** A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas. |

Ahora bien, por lo que toca a la normativa de orden internacional, debe recordarse que México forma parte de diversos instrumentos internacionales en los que se prevé la desaparición forzada de personas, lo que implica que, conforme a nuestra Ley Suprema y diversos criterios jurisprudenciales, sus disposiciones constituyan obligaciones vinculantes e irrenunciables frente a las que se tiene el deber de dar cuenta.

En otras palabras expresado, el delito de desaparición forzada se encuentra previsto también en diversos instrumentos internacionales que, conforme a los artículos 1° y 133 de nuestra Constitución y de acuerdo al control de convencionalidad, constituyen derecho positivo y, por tanto, obligatorio para todos los servidores públicos de nuestro país.[5] Sin embargo, en muchos casos las normas no son de carácter auto-aplicativas, o lo son en un sentido muy vago, por lo que se requiere de la armonización legislativa que les permita instrumentarse.

[5] Como referencia adicional, cabe señalar que entre las múltiples determinaciones contenidas en la sentencia del caso Radilla, se determina en su párrafo 339 que: "*Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un "control de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.*"

Al respecto, se cita la siguiente tesis de nuestro máximo tribunal:

> ***CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.*** *De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.*[6]

Ahora bien, a nivel internacional, los principales instrumentos en la materia son la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra

[6] El Tribunal Pleno, el 28 de noviembre de 2011, aprobó, con el número LXVII/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

las Desapariciones Forzadas, de 18 de diciembre de 1992[7] y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del 23 de septiembre de 2005[8]. Esta última, vigente para México desde 2010, define la desaparición forzada como:

> *(...) el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley."* (Artículo 2)

Además, señala dicho instrumento que:

> *"Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables."* (Artículo 3).

Como se puede apreciar, de acuerdo con la Convención Internacional citada, una desaparición forzada se define por tres elementos acumulativos:

1. La privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada;
2. La participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia;
3. La negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

En cuanto al procedimiento y actuación de las autoridades, el artículo 12 de la Convención citada indica:

> *"Artículo 12*
>
> *1. Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a*

[7] Resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[8] Resolución 61/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

*denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Se tomarán medidas adecuadas, en su caso, para asegurar la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como de quienes participen en la investigación, contra todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada.*

*2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.*

*3. Los Estados Partes velarán para que las autoridades mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo:*

*a) Dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes para la misma;*

*b) Tengan acceso, previa autorización judicial si fuera necesario emitida a la mayor brevedad posible, a cualquier lugar de detención y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse la persona desaparecida.*

*4. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En particular, deberán garantizar que las personas de las que se supone que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación."* (El subrayado es propio)

En ese mismo sentido, la Convención en comento, estableció el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, los cuales tienen como misión colaborar y coordinar sus actividades con el fin de fortalecer los esfuerzos conjuntos para prevenir y erradicar las desapariciones.

Por lo que hace al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, derivado de su visita a México en marzo de 2011, desarrolló una amplia agenda con autoridades federales y estatales, así como con víctimas y familiares, organizaciones sociales y especialistas académicos. En su informe, derivado de su visita a México, el citado Grupo[9] emitió diversas recomendaciones generales, de las que se pueden destacar las siguientes:

*"Que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación".*

*"La generación de datos estadísticos, desagregados por sexo, edad, lugar y autoridades presuntamente involucradas, sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación".*

*"El delito de desaparición Forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las Desapariciones forzadas involuntarias."*

"*Con la participación de los familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas que garantice que los familiares, abogados; Defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a la reparación integral."*

[9] Citado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *La Desaparición Forzada en México: Una Mirada desde los Organismos del Sistema de Naciones Unidas,* pp. 51 y 52, noviembre de 2015. Disponible en http://www.hchr.org.mx/images/20151022_DesapForz_IBA_ONUDH_WEB.pdf

En ese tenor, y de acuerdo al Informe citado[10], el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias recibió información diversa sobre el número de desapariciones forzadas, desprendiéndose que:

> *"La CNDH registró un aumento sostenido en el número de quejas recibidas sobre desapariciones forzadas, pasando de cuatro quejas en 2006 a 77 en 2010."*
>
> *"El Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH registró la presunta desaparición de 346 personas en el 2010. La PGR ha iniciado 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada (49 relacionadas con la —Guerra Sucia)."*
>
> *"Por su parte, organizaciones civiles reportaron que —de acuerdo con sus estimaciones— más de 3.000 personas habrían sido desaparecidas en el país desde el 2006. De acuerdo con la información recibida por el Grupo de Trabajo, algunas de éstas podrían calificarse como desapariciones forzadas debido a la participación directa o indirecta de agentes estatales. Sólo mediante una investigación independiente, imparcial y completa se puede descartar una potencial desaparición forzada. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad sin la debida investigación."*
>
> *"Las autoridades federales sostuvieron que el 92% de los delitos cometidos en México se encuentran en el fuero local y no federal."*

En lo que hace al sistema regional de protección de los derechos humanos, la desaparición forzada se prevé en la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, adoptada en Belem do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994 y en vigor desde el 28 de marzo de 1996, siendo México parte desde 2002. En esta Convención se define a la desaparición forzada (artículo II) como:

[10] Ibíd., citado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

*(...) la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.*

De la misma manera, en el instrumento interamericano citado se señala la obligación del Estado de adoptar medidas internas para tipificar como delito a esta figura. Así, señala su artículo I:

*"Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:*

*a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;*

*b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;*

*c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y*

*d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención."*

Como se desprende de las disposiciones recién señaladas, existen obligaciones del Estado que deben ser asumidas para encontrar a la persona desaparecida de una manera rápida y sin trabas o, en su caso, facilitar todo proceso de investigación con el acopio de facultades y recursos que, en nuestro país, aún carecen gran parte de las autoridades locales.

El valor de los instrumentos jurídicos señalados es de pleno derecho y constituye, por tanto, una obligación ineludible para todas las autoridades del Estado en sus distintos órdenes. Por si fuera poco, la problemática de las desapariciones resulta tan preocupante para la comunidad internacional,

dando cuenta de ello también las diversas sentencias en la materia que han sido emitidas por tribunales internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la desaparición forzada.

***Algunos criterios judiciales relacionados.***

En lo que hace a nuestro derecho interno, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son *soft law*, recomendaciones potestativas u otra forma jurídica alternativa que carezca de carácter vinculante para el Estado Mexicano. Por el contrario, México aceptó su jurisdicción desde 1998 y, por tanto, las sentencias que dicha Corte emita son obligatorias para los servidores públicos de todos los niveles y, consecuentemente, deben ser cumplidas a cabalidad. Dicho criterio ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tal como se puede constatar en la siguiente tesis:

> ***SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.*** *El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el*

*Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.*[11]

En adición a lo anterior, y como un gran avance jurisdiccional derivado de la Contradicción de Tesis 293/2011, la SCJN fue más allá al establecer que, aún y cuando en el caso concreto de la Corte de San José no hubiera sido parte el Estado mexicano, la jurisprudencia interamericana le resulta vinculante. Así puede apreciarse de la tesis derivada de dicha contradicción:

**JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.** Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1° constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya

[11] El Tribunal Pleno, el 28 de noviembre de 2011, aprobó, con el número LXV/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Unanimidad de once votos en relación con la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; votaron con salvedades: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Mayoría de ocho votos en cuanto a la posibilidad de revisar si se configura alguna de las excepciones del Estado Mexicano al reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de aquélla, o alguna de las reservas o declaraciones interpretativas formuladas por el Estado Mexicano; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

> emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.[12]

La CoIDH tiene en su jurisprudencia diversos casos en los que la figura de la desaparición forzada de personas ha sido ampliamente desarrollada. Sobre México recaen dos sentencias en la materia: la primera de ellas corresponde al caso Campo Algodonero (González y otras Vs México) y la otra sobre el caso Radilla Pacheco.

Caso Campo Algodonero.

Esta resolución es relativa al caso planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y en el que se constataron conductas totalmente reprochables como la actitud misógina, despótica y apática de las autoridades locales.

En la sentencia Campo Algodonero se advirtió cómo las autoridades locales, al acudir los familiares en búsqueda de apoyo, respondían que probablemente las víctimas "se habrían ido con su novio" o que "tendrían una vida reprochable", así como también, recurrían a preguntas en torno a sus preferencias sexuales y conexas que dejaron claramente a la vista una actitud misógina y llena de estereotipos.

[12] Tesis: P./J. 21/2014 (10a.). SCJN. 10a. Época; Instancia Pleno; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de 2014, Tomo I; Pág. 204.

La Corte de San José señaló que la indiferencia hacía los familiares y las víctimas son una muestra mínima del común denominador tratándose de desapariciones forzadas ocurridas en México.[13]

En este caso, la Corte interamericana reafirmó su jurisprudencia en el sentido de que:

> *(...) no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.*[14]

Lamentablemente, es ampliamente difundido que las autoridades locales tienden a ser omisas en este tema, bien por la falta de recursos o de capacitación, profesionalismo u otras tantas circunstancias. Sin embargo, como se señaló líneas atrás, ello no las exime de ser responsables por omisión al no cumplir con el deber de proteger y garantizar los derechos humanos y tampoco exime al Estado mexicano de su deber de garantía, ya que, finalmente, el único responsable internacionalmente ante las violaciones de derechos humanos es el propio Estado.

En consecuencia, ante la omisión de las autoridades locales, debe corresponder a la federación la adopción de medidas necesarias que corrijan esta situación y que permitan a México cumplir con su ineludible deber de prevenir, respetar y garantizar los derechos humanos.

Caso Radilla Pacheco Vs México.

En lo que corresponde a este caso, relativo a la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco en 1974 y cometida a manos de efectivos del ejército en el Estado de Guerrero, la Corte Interamericana dispuso que:

[13] Caso González y otras Vs. México. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Párrafo 200-208.
[14] Ibíd. Párrafo 243.

> *"... El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente Sentencia."*

En este caso, se condenó al Estado mexicano quien, como sujeto internacional, debe cumplir con las determinaciones de la Corte Interamericana. En otras palabras, se pronunció sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada del Señor Radilla.

Por otra parte, cabe destacar que dicha resolución motivó un histórico debate en la Suprema Corte de Justicia con relación a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de las obligaciones derivadas para el Poder Judicial de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana contra México, así como de la entrada en vigor de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011. Fue así, que se adoptaron importantes decisiones que tienen que ver con la cláusula de convencionalidad y la determinación de limitar la jurisdicción militar en casos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas.

Finalmente, respecto a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, se determinó responsabilidad para el Estado Mexicano y no para una entidad federativa en particular.

***Algunos estudios, recomendaciones, informes e instrumentos elaborados.***

A la par de los casos antes indicados, organizaciones internacionales y nacionales se han dado a la tarea de visibilizar información que revela el grave problema que, en el rubro de desapariciones, enfrenta nuestro país. En ese contexto, cabe mencionar que el ***Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias*** (el Grupo de Trabajo), en su visita a nuestro país en 2011, detectó diversos problemas y formuló sendas recomendaciones.

En su Informe de misión a México realizado con motivo de tal visita, el Grupo detectó faltas de coordinación entre instituciones y órganos de gobierno en la materia y problemas del Estado mexicano para trabajar conjuntamente y hacer justicia a las víctimas de desapariciones forzadas, así como a sus familiares. Se estima oportuno mencionar algunas de las recomendaciones que hizo el Grupo de Trabajo a México:

> *"... garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas y la armonización de la definición de la desaparición forzada de la legislación penal con lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes; garantizar la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar adecuadamente la desaparición forzada de personas; garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata; y garantizar el derecho a la reparación integral a las víctimas de desaparición forzada."*[15]

[15] Informe de misión a México. Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México. 2012. Pág. 13.

Asimismo, el Grupo de Trabajo durante su visita a México en 2011, en conjunto con el Gobierno mexicano, realizó acciones con el fin de detectar, investigar y colaborar con el Estado en el fortalecimiento de esfuerzos conjuntos para erradicar y disminuir la cifra de desapariciones forzadas de nuestro país.

Durante su estancia en el país, se informó al Grupo de Trabajo sobre el descubrimiento de fosas comunes y casos que se han presentado respecto a la problemática de desapariciones forzadas. Así, bajo esa tesitura, el Grupo de Trabajo concentró sus estudios en la delincuencia organizada y en la impunidad de autoridades del Estado que han cometido desapariciones forzadas.

Igualmente, el Grupo de Trabajo detectó un problema en la falta de coordinación de las instituciones y autoridades del Estado, las cuales trabajan de manera individual y dispersa con respecto a la búsqueda de las personas desaparecidas o no encontradas, por lo que señalaron que el delito de desaparición forzada en México requiere un marco legal homologado en los ámbitos federal y estatales que permita combatir dicho delito, así como a las autoridades actuar con transparencia, coordinación y armonización.

Precisó que los delitos de desaparición forzada no pueden ser olvidados y quedar impunes, pues el Estado debe regular, en sus leyes, el derecho de las víctimas a una plena justicia: "*De acuerdo con varias fuentes, las autoridades —especialmente los Ministerios Públicos— intentan desacreditar a las personas desaparecidas declarando que estaban involucradas con grupos delictivos sin ninguna evidencia o investigación en su contra. En varios casos, familiares de las personas desaparecidas*

*forzosamente han sido objeto de intimidaciones, amenazas y represalias por haber exigido una adecuada investigación.*"[16]

El Grupo de Trabajo enfatizó sobre el "derecho a la verdad" y observó que muchas de las familias de las víctimas en México desconocen la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos; igualmente, encontró fallas en las instituciones del Estado, las cuales, lejos de investigar y comunicar a las familias sobre el paradero de la persona desaparecida, obstaculizan una búsqueda exitosa porque la base de datos es descentralizada.

El Grupo de Trabajo recomienda establecer un programa nacional de búsqueda de personas, señalando que el mismo debe contemplar los siguientes parámetros:

**a)** Implementar la búsqueda ex oficio y sin dilación en casos de desapariciones;

**b)** Coordinar los esfuerzos de las diferentes agencias de seguridad para localizar a la persona;

**c)** Eliminar cualquier obstáculo legal o fáctico que reduzca la efectividad de la búsqueda o evite que se inicie;

**d)** Asignar los recursos humanos, financieros, logísticos, científicos, o de cualquier otro tipo necesarios para que la búsqueda se realice de forma exitosa;

[16] Ibídem, pág. 24

**e)** Contar con personal altamente capacitado en la exhumación e identificación de restos mortales;

**f)** Contrastar el reporte de la persona no localizada con todas las bases de datos existentes en la materia;

**g)** Dar prioridad a la zona de búsqueda en donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas;

**h)** Acceder y utilizar plenamente la Plataforma México; y

**i)** Garantizar que el programa se ejecute con plena independencia presupuestaria y operativa.[17]

Como es sabido, el Estado mexicano atraviesa un arduo conflicto ante la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, esta problemática hace más vulnerable a la sociedad mexicana debido a que el crimen organizado realiza desapariciones de personas y muchas de ellas han sido descubiertas en fosas clandestinas: "*La identificación de los restos en dichas fosas demuestran diferentes insuficiencias tales como falta de equipos forenses profesionales para identificar propiamente los cuerpos, la notificación a los familiares, el cruzamiento de la información con diferentes bases de datos y conservación de archivos suficientes de aquellos cuerpos que fueron enterrados en cementerios municipales.*"[18]

En razón de ello, el Grupo de Trabajo hizo un llamado a las autoridades mexicanas para la creación de un registro que contemple la protección de la

[17] Ibídem, p. 38.
[18] Ibídem, p. 27-28.

información genética de los cuerpos de las víctimas, mantenga un registro de la desaparición de las personas y notifique el paradero a sus familiares:

*"El Grupo de Trabajo recomienda crear y mantener actualizada permanentemente una base de datos con la información personal disponible sobre víctimas de desapariciones forzadas a nivel nacional (tanto del fuero federal como del estatal) incluyendo información genética, principalmente el ADN y muestras de tejido obtenidas de restos mortales y de familiares de víctimas, con su previo consentimiento. El Estado debe proteger permanentemente la información personal en estas bases de datos."*[19]

A la par de lo anterior, en el citado Informe de misión, otros de los temas abordados fue el relativo al *derecho a la reparación.* Con respecto a este tópico, el Grupo de Trabajo reconoció los avances legislativos del Congreso al incluir en el presupuesto de 2011 una partida para los casos de desapariciones forzadas. Sin embargo, destacó que aún se debía adoptar e implementar, en la legislación mexicana, una reparación adecuada e integral a las víctimas de desaparición forzada.

También se recomendó al Estado mexicano asegurar una plena independencia de sus órganos de gobierno para tratar el tema de las desapariciones forzadas y cumplir los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado para garantizar la protección de los derechos humanos, así como garantizar el derecho a la justicia y el combate a la impunidad.

En lo que hace a la estructura federal y, la consecuente distribución de competencias, el Grupo de Trabajo dio cuenta de la problemática que se

[19] Ibídem, p. 38.

presenta al carecer de un parámetro general a seguir en materia de desaparición forzada de personas.

La existencia de fuerzas de seguridad a nivel federal o estatal, señala el informe, dependiendo de quién haya sido el autor imputado, diluye la responsabilidad de las autoridades federales y locales. Además, se indica que la mayoría de los servidores públicos, organizaciones no gubernamentales y víctimas de desaparición forzada enfatizan el problema de la falta de coordinación vertical y horizontal entre las autoridades gubernamentales en la prevención y búsqueda de las personas desaparecidas, así como en su investigación.

En las reuniones que el grupo de trabajo celebró con autoridades federales, se explicó que algunas de las tareas relacionadas con las desapariciones forzadas eran de competencia estatal. Por su parte, las autoridades estatales informaron que el gobierno federal es el ámbito gubernamental competente en cuestiones centrales tal como el combate al crimen organizado, así como el responsable de garantizar la seguridad mediante la presencia de la Policía Federal, el Ejército y la Marina[20].

Por su parte, ***Human Rights Watch*** concluyó en su *Informe "Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada"* que, en nuestro país, resulta habitual que las autoridades no respondan oportunamente cuando las víctimas, sus familiares o testigos denuncian las privaciones ilegales de la libertad en el momento en que éstas se producen.

Por el contrario, precisa dicho informe que cuando los familiares denuncian la desaparición, es común que los agentes del Ministerio Público y los funcionarios de seguridad no actúen inmediatamente conforme lo mandata la *Alerta Amber*. Equivocadamente, los agentes públicos indican que, por ley,

[20] Ibídem, pp. 17-18.

aquellos deben esperar que transcurran varios días para presentar la denuncia formal y aconsejan a los familiares que sean ellos mismos quienes busquen a la persona desaparecida, lo que supone un serio riesgo para la familia. Otras veces, los agentes determinan prematuramente que no tienen competencia para investigar el caso o, bien, señalan que la persona desaparecida tiene algún nexo con actividades ilícitas y que por eso le ocurrió lo sucedido, o que se ha ido con alguna persona (novio, amante, etcétera).

El informe continúa señalando que en los casos en que los agentes del Ministerio Público sí inician una investigación, con frecuencia se solicita a los familiares de las víctimas que se ocupen de algunas tareas que son parte de la investigación y que deberían ser realizadas por los propios funcionarios; así, son los familiares quienes entrevistan testigos e intentan localizar a los presuntos responsables.

En todos los casos examinados, Human Rights Watch comprobó que se dependía de una manera desproporcionada, o incluso absoluta, de la colaboración de los familiares para llevar a cabo tareas de investigación básicas. En este círculo vicioso, los familiares asumen responsabilidades que corresponden a las autoridades porque saben que los funcionarios a cargo de la investigación no actuarán por iniciativa propia. Entonces, en lugar de cumplir con aspectos de la investigación que son de su incumbencia, algunos agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública, delegan tareas a familiares de las víctimas.[21]

Además de depender excesivamente de los familiares, señala el informe, a menudo los agentes del Ministerio Público no adoptan medidas básicas para la investigación. Entre las omisiones documentadas se incluyen las siguientes: no entrevistar a familiares de las víctimas, testigos u otras

[21] Informe "Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada." Human Rights Watch. Estados Unidos de América, 2013. Pág. 7.

personas que podrían haber aportado datos relevantes; no entrevistar a posibles responsables; no seguir pasos de investigación obvios como obtener los nombres de policías y soldados asignados a unidades implicadas en las desapariciones, y no visitar el lugar de los hechos para recabar pruebas.

En algunos casos, los agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública extraviaron pruebas cruciales, como muestras de ADN de familiares de víctimas y cometieron errores al recopilar información clave sobre los hechos, tales como registrar datos erróneos respecto de dónde o cuándo desaparecieron las víctimas.

Además, se comenta en el informe que algunas instancias policíacas y judiciales falsificaron pruebas y, en otros casos, manipularon o destruyeron evidencias importantes, lo cual sugiere que podrían haberlo hecho con el fin de proteger a los responsables del delito.[22]

Todas estas demoras y omisiones injustificadas, señala el informe, provocaron la pérdida irreversible de información que podría haber salvado la vida de las víctimas y ayudado a ubicar a los responsables.

En 2013, en el trabajo *Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México*[23], ***Amnistía Internacional***, a través de una labor de investigación basada en entrevistas a familiares, testigos y organizaciones de derechos humanos, además de una exhaustiva revisión a los expedientes e información provista por autoridades, instituciones y órganos de gobierno, realizó un recuento sobre la magnitud del problema de las desapariciones en México,. Derivado de lo anterior, Amnistía Internacional hizo un llamado a los

[22] Ibidem. Pág. 7-8.
[23] Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México, Amnistía Internacional, 2013. Disponible en: https://amnistia.org.mx/contenido/junio-de-2013-enfrentarse-a-una-pesadilla-la-desaparicion-de-personas-en-mexico/

gobiernos federal y estatales para que emprendieran acciones específicas[24] entre las que destacan para los fines de este dictamen:

- *Armonizar la legislación federal y estatal con las normas internacionales de derechos humanos, entre otras medidas creando una Ley General sobre Desapariciones Forzadas.*

- *Tipificar, conforme a las normas internacionales, la desaparición forzada como delito separado en todos los estados y en la jurisdicción federal, de modo que se garantice que todas las denuncias de desapariciones se investigan exhaustivamente, con independencia de quién sea el presunto autor, y que el delito de desaparición forzada se enjuicia cuando haya indicios de implicación de funcionarios públicos, incluso cuando se trate de autorización, apoyo o aquiescencia.*

- *Asegurar que los funcionarios públicos acusados de no emprender investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas sobre denuncias de desapariciones son investigados y se les hace rendir cuentas.*

- *Crear una base de datos detallada y fiable de ámbito nacional sobre personas desaparecidas, que incorpore información sobre ADN, así como una base de datos de ámbito nacional sobre restos no identificados, de conformidad con las mejores prácticas internacionales sobre localización e identificación de víctimas de desaparición, incluidos migrantes.*

[24] Ibídem, p. 16.

- *Establecer un mecanismo nacional de búsqueda rápida basado en protocolos estandarizados acordados para dar respuestas interinstitucionales inmediatas, coordinadas y efectivas centradas en localizar vivas a las víctimas.*

- *Elaborar, implementar y supervisar protocolos estandarizados de investigación, en consulta con la sociedad civil, que garanticen la coordinación, cooperación y rendición de cuentas de los organismos municipales, estatales y federales con el fin de asegurar que se llevan a cabo investigaciones prontas, exhaustivas y eficaces de todas las desapariciones denunciadas.*

Como se esbozó anteriormente, otro escenario internacional en el que el tema de la desaparición forzada de personas en nuestro país fue motivo de preocupación es el correspondiente a la Segunda Evaluación de México ante el ***Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas*** (realizado en octubre de 2013). Debe señalarse que todas las recomendaciones en la materia, formuladas en el mismo, fueron aceptadas por el Estado mexicano, éstas son:

| Recomendación | País | Respuesta |
|---|---|---|
| 148.5 Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), asegurar la incorporación de la Convención al marco jurídico nacional y crear un registro oficial de personas desaparecidas. Aceptar la competencia del CED para recibir peticiones individuales. Reconocer la competencia del CED de | Francia<br>España<br>Uruguay | Aceptada |

| | | |
|---|---|---|
| conformidad con los artículos 31 y 32. | | |
| 148.15 Acelerar los esfuerzos con las Comisiones Unidas del Senado sobre Justicia, Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos, para la pronta aprobación de la reforma para tipificar el delito de desaparición forzada conforme a las normas establecidas por la Convención Internacional en la materia, de conformidad con el párrafo 86 del informe. | Chile | Aceptada |
| 148.52 Seguir esforzándose por que se investiguen debidamente las denuncias de casos de tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones. | Turquía | Aceptada |
| 148.54 Elaborar un protocolo nacional para la búsqueda de personas cuya desaparición se haya denunciado e investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y garantizar que los responsables sean enjuiciados y las víctimas obtengan una reparación. | Irán | Aceptada |
| 148.55 Adoptar las medidas institucionales y jurídicas adecuadas para dar una respuesta eficaz al problema de las desapariciones forzadas y los homicidios internacionales impunes. | Uzbekistán | Aceptada |
| 148.56 Aplicar las recomendaciones pendientes que figuran en el informe de diciembre de 2011 del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. | Irlanda | Aceptada |
| 148.57 Realizar una investigación a | Suiza | Aceptada |

| | | |
|---|---|---|
| fondo y sistemática de todas las denuncias de desapariciones forzadas, enjuiciar a los responsables y garantizar que todas las víctimas obtengan reparación, en particular las familias de las personas desaparecidas. | | |
| 148.58 Crear una base de datos de migrantes desaparecidos, y promover la cooperación de todas las autoridades para prevenir y sancionar los delitos contra este grupo. | Noruega | Aceptada |
| 148.59 Redoblar sus esfuerzos en la lucha contra las desapariciones forzadas. Seguir adoptando medidas para abordar de forma efectiva el fenómeno de la desaparición forzada. | Argentina<br>España | Aceptada |
| 148.95 Fortalecer el sistema de justicia penal en el país, para investigar con prontitud y eficacia todos los supuestos casos de desapariciones forzadas, el uso desproporcionado de la fuerza, los ataques, las amenazas y el caso contra defensores de los derechos humanos y asegurar que los responsables sean enjuiciados y que las víctimas obtengan reparación. | Azerbaiyán | Aceptada |

En adición a las recomendaciones que fueron formuladas al Estado mexicano en el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ***el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU*** **(CED)**, instancia encargada de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas

las personas contra las desapariciones forzadas, en febrero de 2015, aprobó también una serie de observaciones y señalamientos en la materia.[25]

Al respecto, el citado Comité considera que el marco normativo en vigor, así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención. Relata que la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, por lo que, en consecuencia, alienta al Estado mexicano a adoptar las recomendaciones que dicha instancia le emite y adoptar una ley que establezca distintos mecanismos para prevenir, investigar y sancionar todo lo relativo a la desaparición forzada.[26]

Igualmente, insta al Estado mexicano para que:

> *"... adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención. Al respecto, lo alienta a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas, así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas. Asimismo, el Comité recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la CNDH en todo el proceso encaminado a la adopción de esta ley."*[27]

---

[25] Comité contra la Desaparición Forzada Observaciones finales sobre el informe presentado por México, CED, 2015. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/2015_DesapForz_CNDH_ONUDH_WEB.pdf

[26] Ibidem, p. 18, párrafo número 10.

[27] Ibidem, p. 19, párrafo número 16.

Agrega:

*"El Estado Mexicano deberá adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que a la mayor brevedad posible la desaparición forzada sea tipificada, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y que prevea penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. A la luz del artículo 8 de la Convención, debería también garantizar que, en caso de que se aplique un régimen de prescripción al delito de desaparición forzada, el plazo del mismo sea prolongado y proporcionado a su extrema gravedad y que, teniendo en cuenta el carácter continuo de la desaparición forzada, se cuente a partir del momento en que cesa el delito."*[28]

Además, señala que el Estado mexicano en su legislación en materia de desaparición forzada, debe garantizar lo dispuesto en el artículo 24 párrafo tercero de la convención mismo que a letra dice:

*"El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos con miras a la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos."*[29]

Por ende, el comité recomienda en cuanto a la investigación y localización de las víctimas del delito de desaparición:

- Garantizar en la práctica que cuando se tenga noticia de una desaparición se inicie la búsqueda de oficio y sin dilaciones de modo de acrecentar las posibilidades de ***encontrar a la persona con vida***;

[28] Ibidem, p. 21, párrafo número 20.
[29] Ibidem, p. 27 párrafo número 41.

- Asegurar que la búsqueda sea llevada adelante por las autoridades competentes con la ***participación de los allegados de la persona desaparecida***;

- Fortalecer la ***Base de Datos Ante Mortem – Post Mortem***, asegurar que esté plenamente operativa en todas las entidades federativas a la mayor brevedad posible, y garantizar que sea completada con la información pertinente de todos los casos de personas desaparecidas, sin excepción, en estricta conformidad con los protocolos relevantes;

- Fortalecer la ***Base de Datos Genéticos de la PGR*** con miras a garantizar que incorpore información relativa a todas las personas que hubieran desaparecido en el Estado parte;

- Garantizar la ***efectiva coordinación, cooperación y cruce de datos*** entre los órganos con competencia para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de sus restos cuando hubieran fallecido y asegurar que cuenten con los recursos económicos, técnicos y de personal necesarios.[30]

- [...] adoptar las medidas necesarias a fin de contar con **un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional** que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante. Dicho registro debería, como mínimo: a) reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de 4 desaparición; b) incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estales; c) permitir generar datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aun cuando hayan sido esclarecidos; y d) ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente. En este contexto, el Estado parte debería valerse de

[30] Ibidem, p. 27 párrafo número 41

> la oportunidad que ofrece el hecho de que la reglamentación de la ley del RNDPED aún esté pendiente para asegurar que cumpla con los criterios antes expuestos. Asimismo, debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades encargadas de ingresar los datos pertinentes lo hagan de manera uniforme, exhaustiva e inmediata luego de que se tenga conocimiento de una desaparición.[31]

En el anexo intitulado "Observaciones Preliminares de la Visita *in Loco* (en el lugar) de la CIDH a México", documento que dio cuenta de un panorama general sobre la situación de los derechos humanos en el país a partir de lo observado por la delegación de la ***Comisión Interamericana de Derechos Humanos*** (CIDH) durante el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015[32], se hizo un especial énfasis en el tema de las desapariciones forzadas. A pesar de que la Comisión reconoció los avances legislativos para la defensa y respeto a los derechos humanos, detalló la multifactorialidad que prevalece en las violaciones a los derechos humanos actualmente.

Agrega ese órgano internacional que, si bien, las cifras y los testimonios recogidos atestiguan un fuerte vínculo entre grupos de delincuencia organizada y las desapariciones forzadas, son especialmente graves las informaciones que dan razón de la existencia de desapariciones forzadas por parte de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de los mismos. Además, se reportaron problemas en los procesos de investigación, ausencia de protocolos homologados y una falta de coordinación y cooperación general entre las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, específicamente aquellas del ámbito local.

Partiendo de estas y otras observaciones no menos importantes, la CIDH emitió, en el documento en mención, una serie de recomendaciones al

[31] Ibidem, p. 20 párrafo número 18.
[32] Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp.

Estado mexicano, concernientes a la situación de los derechos humanos, entre las cuales, para fines del presente dictamen rescatamos las siguientes:

- *Adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura. Para ello, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.*
- *Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada.*
- *Fortalecer las instituciones forenses para que cuenten con registros de personas desaparecidas actualizadas, confiables que contengan toda la información necesaria para el proceso de identificación.*

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2015, la CIDH emitió un informe detallado que contempló la visita in loco a México -además de otras visitas realizadas en el país por la Comisión y sus Relatorías Temáticas-. El informe *Situación de derechos humanos en México*[33], en su apartado "Violencia y Seguridad Ciudadana", atendió la problemática de las desapariciones y desapariciones forzadas. En él, se hizo particular mención y se exhortó al Estado mexicano: *"a adoptar una legislación general en materia de desaparición, en consulta con la sociedad civil, víctimas y familiares, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos"*[34].

Por otro lado, además de un llamado al reconocimiento de las autoridades respecto a la magnitud del fenómeno de las desapariciones, la CIDH prestó especial atención a los procesos de investigación y sanción de

[33] Situación de derechos humanos en México, CIDH, 2015. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf
[34] Ibídem, p.72.

los casos de desaparición forzada, en donde estableció como prioridad la protección de grupos vulnerables como los migrantes, las mujeres, niñas y niños. Finalmente, el informe destacó la ausencia de fiscalías especializadas de investigación y atención a las víctimas de este delito, y a las irregularidades en la búsqueda ante la carencia de mecanismos nacionales coordinados, ante lo cual precisó *"es urgente establecer un sistema nacional de búsqueda inmediata de personas desaparecidas"*[35].

Adicionalmente, en el año 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein, formuló diversas recomendaciones a México, derivadas de su visita oficial realizada en octubre de 2015.[36] Entre tales recomendaciones, pueden destacarse las siguientes:

> [...] *"Debida investigación de graves violaciones a los derechos humanos: Fortalecer los esfuerzos para asegurar que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas adecuadamente por una oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República* (...)
>
> *Registro de todas las detenciones: Complementar los esfuerzos existentes del Gobierno a fin de registrar a las personas privadas de su libertad, mediante la adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado, de todo tipo de detenciones y personas privadas de la libertad, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones* (...)

[35] Ibídem, p.77.
[36] Disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesMX_AltoComisionadoDH_ES.pdf

*Ratificación de instrumentos internacionales: (...) reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención (...)*

*Leyes generales sobre tortura y desaparición forzada: Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideraciones. Asegurar su efectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesarios."*

Como se puede apreciar, la lectura de la información citada demuestra claramente la existencia de un problema en el que, con el apoyo nacional e internacional de diversos actores, se ha podido identificar las principales carencias normativas y de política pública sobre las que debe trabajarse, mismas que la Minuta objeto del presente dictamen plantea cubrir.

**Reuniones con organizaciones sociales, colectivos y familiares de personas desaparecidas.**

Desde la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, cabe mencionar que los legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se reunieron en junta de trabajo con integrantes de la ***Organización FUUNDEC- FUUNDEM***, "Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México". En dicha reunión, las diputadas y diputados tuvieron la oportunidad de escuchar e intercambiar opiniones con familiares de víctimas de desaparición, así como conocer datos y los hechos que llevaron a alguno de sus familiares (hermanos, hermanas, padres, tíos,

tías, entre otros) a ser desaparecidos, sin ninguna otra culpa que la de haber salido de su casa.

Las víctimas de desaparición expresaron a la Comisión de Derechos Humanos de este Órgano Legislativo el calvario que han tenido que atravesar ante diversas instancias estatales para poder obtener atención y resultados que les permitan saber qué es lo que ocurrió con su familiar.

En ese tenor, señalaron que las respuestas habían sido invariablemente promesas incumplidas, apatía y desinterés, pero también reconocieron el interés que habían encontrado en algunos gobiernos estatales (contados) como es el caso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Igualmente, en la LXII Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara legislativa organizó un espacio de dialogo con miembros de la ***Fundación "Nuestras hijas de regreso a casa"***, en la que madres de Ciudad Juárez Chihuahua, compartieron la dolorosa experiencia que conllevó el perder a una hija como resultado de las desapariciones que impunemente se dieron en Ciudad Juárez desde el año de 1993 y, sin que hasta ese momento, se hubiera obtenido algún resultado por parte de las autoridades locales.

En esa reunión, las madres de familia dieron a conocer el calvario por el que han tenido que atravesar para que las autoridades cumplan sencillamente con su deber, un calvario en el que indiferencia era la nota característica.

De los escenarios que fueron expuestos por los integrantes de las organizaciones mencionadas, así como de los datos que sustentan los informes de las instancias internacionales citadas en apartados anteriores del presente dictamen, se desprende que los escasos resultados en la

localización de personas desaparecidas, así como el alto número de esos delitos que no han sido sancionados, escapan de las capacidades de actuación por parte de las autoridades locales.

Por lo que hace a la LXIII Legislatura, en el mes de septiembre de 2016, el diputado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, a solicitud de diversos legisladores del Grupo Parlamentario de MORENA, sostuvo una reunión de trabajo con diputadas y diputados de esa fracción parlamentaria, así como con integrantes de la ***Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada***.

En dicho encuentro, los legisladores de MORENA hicieron entrega al diputado Presidente de la Comisión, un proyecto de iniciativa para expedir una nueva Ley General en materia de Desapariciones, el cual, conforme a lo señalado en esa ocasión, retomaba la propuesta que los integrantes de la Campaña Nacional les habían hecho llegar a los legisladores. Asimismo, durante esa reunión, los legisladores de MORENA dieron cuenta de que en el Senado de la República ya habían sido presentadas previamente diversas iniciativas que habían surgido de la Campaña citada, las cuales, principalmente, habían sido retomadas y presentadas por la Senadora Angélica de la Peña. Al respecto, cabe precisar que tales iniciativas, como se señala en el apartado de Antecedentes del presente dictamen, han sido tomadas en consideración por la Colegisladora al momento de dictaminar el Proyecto de Decreto que ahora se analiza en esta Cámara de Diputados.

Posteriormente, en fecha 26 de abril de 2017, el diputado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, sostuvo una reunión de trabajo ahora con familiares integrantes del ***Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México***. En dicho encuentro, las integrantes de las organizaciones citadas externaron al Presidente de la Comisión legislativa señalada que el proyecto de Ley General de Desapariciones (que en aquel

momento estaba próximo a remisión a esta Soberanía) había sido producto de más de dos años de trabajo con la Colegisladora y que, tras múltiples reuniones de trabajo, diálogos y retroalimentaciones, por fin se había logrado llegar a un consenso respecto al proyecto de ley que sería sometido a la consideración del Senado, primero, y, posteriormente, remitido a esta Cámara de Diputados.

Es oportuno indicar que, si bien, las integrantes de las organizaciones expresaron al legislador Luna Canales que diversos temas del proyecto de la Ley General no fueron plasmados como hubieran esperado, también externaron que la relevancia del tema objeto de la ley es alta y, en ese sentido, podría perder empuje el impulso de la ley si se postergaba y retrasaba su aprobación. Por lo anterior, se llegó al acuerdo de trabajar en conjunto (Cámara de Diputados, las organizaciones y sus equipos técnicos) a efecto de ir diseñando una propuesta de temas que puedan ser impulsados en posteriores reformas una vez que la nueva Ley General de Desapariciones sea publicada.

Vale la pena citar también que las integrantes de las organizaciones compartieron a la Presidencia de la Comisión como fue el proceso de construcción del proyecto de ley en el Senado, precisándole que, inclusive, fueron realizados tres foros regionales con mesas técnicas que tuvieron una duración de dos años, como se ha indicado. A la par, dieron cuenta de que en el proceso legislativo desarrollado ante la Colegisladora encontraron el respaldo de senadoras y senadores de distintos Grupos Parlamentarios.

Fue así que, al término de la reunión en mención, se sugirió que, en esta fase del proceso legislativo, lo mejor era aprobar el proyecto de Decreto remitido por la Colegisladora en sus términos ya que, como lo indicaron las organizaciones de familiares, ya no se está en posibilidad de seguir esperando la publicación de la Ley General objeto del presente dictamen y, en

consonancia, este es el momento para aprobarlo y responder a esta sentida demanda social. Igualmente, como se ha indicado, se acordó trabajar un proyecto de reformas que atiendan diversos aspectos identificados por las familias, los cuales, eventualmente, sean presentados ante el H. Congreso de la Unión, una vez que entré en vigor la Ley General en materia de Desapariciones.

Posteriormente, el día 30 de agosto de 2017, con motivo de la conmemoración del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, fue llevado a cabo en la Cámara de Diputados un evento organizado por distintos integrantes y asociaciones que forman parte del ***Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México***. Dicho evento, a la par de conmemorar la fecha internacional decretada por la ONU, tuvo como propósito fortalecer la concientización de las y los legisladores de la Cámara de Diputados para que a la prontitud iniciaran el proceso de discusión y votación de la Minuta objeto del presente dictamen.

En aquella ocasión, además de contar con la presencia y participación de decenas de integrantes de las organizaciones que conforman el movimiento, también estuvieron presentes representantes de diversos organismos nacionales e internaciones, quienes, desde sus trincheras, han realizado múltiples acciones para impulsar la aprobación de la Ley General en materia de Desapariciones en los mejores términos posibles. En esa tesitura, tanto el ***Ombudsman Nacional***, el ***Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México***, el ***Comité Internacional de la Cruz Roja***, la ***Comisión Interamericana de Derechos Humanos***, entre otras instancias y actores, instaron a la Cámara de Diputados para que, con prontitud, sometiera a consideración la votación del Proyecto de nueva ley remitido por el Senado de la República, sin omitir mencionar, a la vez, los múltiples retos que conllevó la construcción del proyecto legislativo que hoy se somete a consideración y la necesidad de no realizar modificaciones

regresivas que pudieran debilitar su contenido. Igualmente resaltaron la necesidad de aprobarlo a la mayor brevedad a efecto de que en la futura discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación pueda analizarse la debida asignación de recursos para las partidas, programas e instituciones que habrán de instrumentarse con la entrada en vigor de la nueva ley.

El 7 de septiembre de 2017, a solicitud de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, diputados federales de esa fracción parlamentaria y la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos sostuvieron una reunión de diálogo con representantes de la ***Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada*** en la que, los representantes de la misma, hicieron entrega de un documento petitorio de 12 puntos respecto de los que solicitan se realicen adecuaciones a la Minuta remitida por el Senado.

Dichas adecuaciones, de manera concisa, versan sobre aspectos como:

- Eliminación y adecuación de términos, como los relativos a: "Persona No Localizada", "Persona desaparecida de manera forzada" y "Persona desaparecida a manos de particulares";
- Modificación del Título correspondiente al Registro Nacional, a fin de realizarle modificaciones nominativas y otras que sean necesarias al articulado para su congruencia. Solicitan, asimismo, crear los mínimos a contener en el caso de registro de las víctimas de desaparición forzada;
- Establecer la responsabilidad del superior jerárquico en los casos de desaparición forzada como lo señala la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada;
- Realizar modificaciones respecto a las instancias creadas para la búsqueda de personas, incorporando mayores aspectos relacionados

con el acceso y la actuación de las autoridades encargadas de la mismas;

- Creación de un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses que dependa del Banco Nacional de Datos Forenses;
- Creación de una instancia especial para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la época de la "Guerra Sucia";
- Establecer que los agentes del Estado, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, deben ser juzgados bajo la jurisdicción civil;
- Detallar la reclasificación de los delitos, cuando estos hayan sido clasificados bajo otros que no sean desaparición forzada o desaparición cometida por particulares;
- Asegurar que las medidas de seguridad y reparación integral del daño cuenten con presupuesto necesario no dependiente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;
- Especificar que todos los agentes del Estado involucrados quedarán inhabilitados de por vida para ejercer cualquier cargo público;
- Explicitar que la pena mínima, aún con beneficios procesales, no pude ser menor a 20 años de privación de la libertad para los casos de desaparición forzada; y
- Establecer el tipo penal adecuado para la desaparición cometida por particulares.

Respecto a los puntos recién enunciados, la Campaña Nacional exigió su inclusión y reiteró su postura, externada en su momento ante el Senado en el mes de abril de 2017, en el sentido de *no avalar* el proyecto de Ley General, debido a que consideran que aún existen serias deficiencias en el mismo. Señalan, a la vez, que el proyecto elaborado por la Colegisladora se encuentra alejado de las exigencias de las familias y de muchas de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

Indican que la Ley General, tal y como está elaborada, no permitirá ver un cambio real de la situación que hoy se vive en México. A la par, señalan que la existencia de un marco jurídico en materia de desaparición forzada es sumamente necesaria en estos momentos, pero resaltan que el mismo debe ser acorde a los marcos internacionales.

Destacan que gracias a la lucha y exigencia de los familiares hoy existe la posibilidad de contar con una ley en la materia, pero estiman que es necesario que dicho ordenamiento no tenga deficiencias desde el origen. En ese sentido, exigen a la Cámara de Diputados adoptar las observaciones y exigencias señaladas por los familiares y organizaciones de dicha Campaña Nacional, ya que consideran que, de ser aprobada en los términos remitidos por la Colegisladora, se seguiría perpetuando la impunidad y el Estado mexicano no garantizaría a las víctimas, familiares y sociedad el cúmulo de derechos que les corresponden ante la realización de estos crímenes aberrantes.

Paralelamente, externan que se opondrán ante cualquier cambio que implique un retroceso respecto a lo que consideran los pocos aspectos positivos del proyecto de Ley General, por lo cual lucharán para que se mantengan, y se mejore donde haya carencias e insuficiencias.

Por otra parte, con posterioridad a la reunión a la que se acaba de hacer mención, la mayoría de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos sostuvo una reunión de diálogo con integrantes del equipo técnico del ***Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México***, también en fecha 7 de septiembre de 2017 y a solicitud de estos últimos. En dicho encuentro, los representantes técnicos del Movimiento compartieron al diputado Presidente y a los diputados Secretarios de la Comisión de Derechos humanos, diversos puntos que fueron objeto de análisis en la Colegisladora, así como aspectos del proceso legislativo que llevaron a la aprobación del

Proyecto remitido por la Colegisladora después de dos años de análisis e intensa negociación en la que participaron tanto servidores públicos del Gobierno de la República, representantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, representantes y organizaciones del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, diversos organismos nacionales e internaciones como la CNDH, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, legisladores de diversos Grupos Parlamentarios, entre otros actores. Asimismo, se profundizó sobre aspectos técnicos de los contenidos de la Minuta en mención y se aclararon dudas con relación a puntos concretos que los legisladores quisieron abordar.

Igualmente, en un documento remitido a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, señalaron que:

> *"El proceso participativo en torno a la generación de esta Ley ha sido muy abierto. Primero a través del propio proceso de articulación y construcción de acuerdo tanto técnico como político al interior del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, donde confluyen tanto colectivos de familiares de personas desaparecidas como organizaciones de Derechos Humanos.*
>
> *En ese sentido se llevaron a cabo por parte del MNDM seis consultas regionales, con el objetivo de recoger las propuestas y preocupaciones de las familias, las cuales debieran estar reflejadas en la ley. De estas consultas emanó un documento base que fue entregado en septiembre del 2015 por las familias a representantes del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Cámara de Diputados y otros Diputados y Diputadas así como a Senadoras de la República.*
>
> *En cuanto al proceso formal de interlocución se abrieron espacios de seguimiento en dos rutas:*

*Por un lado en contacto directo con el Poder Ejecutivo Federal, en específico con el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, quien ha sido el interlocutor directo del Movimiento.*

*Por el otro lado, se abrió la interlocución directa con el Senado de la República quien es la cámara de origen en esta propuesta. Se generó interlocución con las y los senadores que presiden las comisiones que estuvieron a cargo de la dictaminación de la iniciativa. A saber: Senadora Angélica de la Peña (PRD), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Senadora Cristina Díaz (PRI), presidente de la Comisión de Gobernación y Senador Yunez (PAN) y después Senadora Pilar Ortega (PAN) presidente de la Comisión de Justicia.*

*Una vez presentada la iniciativa del Ejecutivo en diciembre del 2015, estas tres comisiones convocan en el primer trimestre del 2016 la realización de tres audiencias regionales para asegurar la participación de las y los familiares. Dos de estas audiencias se llevaron fuera del recinto legislativo. Y tanto el diseño de las audiencias como la lista de participantes fue diseñada de forma conjunta entre el MNDM y las Comisiones anfitrionas.*

*Durante los últimos meses del 2016 se llevaron a cabo algunas reuniones de trabajo entre las comisiones del Senado, representantes del Movimiento y representantes de la Campaña contra la Desaparición Forzada, donde no hubo mayores avances.*

*En febrero del 2017 se reestablece la comunicación y la estrategia. Donde la Senadora de la Peña estaría a cargo de generar un primer nivel de acuerdo entre las Comisiones y los Movimientos de familiares y organizaciones civiles. En este proceso se contó con amplia participación de representantes de las familias nombradas por los propios colectivos para dar seguimiento al proceso de la Ley. Asimismo, en el caso del MNDM, se crea un dispositivo de comunicación y toma de decisiones para asegurar las propuestas y preocupaciones, así como la retroalimentación a cambios concretos, durante todo el proceso de interlocución.*

*A partir de marzo del 2017 se abre la interlocución directa con el Ejecutivo una vez más y se hace el proceso de negociación final. El dispositivo*

*de participación y toma de decisiones al interior de los colectivos de familiares de víctimas se mantiene en este periodo también."*

A diferencia de la postura externada por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México indica que si bien el proyecto remitido por el Senado no constituye una "panacea" y omite diversos puntos y aspectos por los que los colectivos de las familias del Movimiento han luchado incansablemente, reconocen, al igual que diversas instancias nacionales e internacionales, que la aprobación del proyecto remitido por el Senado (en sus términos) representaría un gran avance y el establecimiento de un piso base que posibilitaría un mejor combate a este flagelo. En ese tenor, el Movimiento instó, a los diputados Secretarios presentes en la reunión, a la aprobación del Proyecto de Decreto tal como fue remitido por el Senado y, en su lugar, sugirió a los legisladores que, una vez aprobada y publicada la ley, puedan trabajarse aquellas modificaciones que sean necesarias para el perfeccionamiento de la misma.

Con relación a lo anterior, el Movimiento Nacional compartió el siguiente balance:

*"Se valora positivamente la aprobación de la minuta por parte del Senado de la República. Aunque el documento es perfectible, el texto actual representa un avance significativo para ordenar los recursos y herramientas existentes para la investigación y búsqueda en casos de desaparición de personas, así como como generar nuevas herramientas y reglas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Así, dada la gravedad de la crisis en materia de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, es urgente que la Ley pueda ser aprobada de manera inmediata, con el fin de arrancar lo antes posible el proceso de implementación..."*

Asimismo, destacan diversos aspectos que no fueron retomados en el dictamen de la Colegisladora o que estiman contrarios a la propuesta del Movimiento Nacional, pero al mismo tiempo, resaltan una amplitud de "pros"

del Proyecto de nueva ley, resaltando, a la vez, aquellos elementos que fueron retomados de las propuestas del Movimiento. Así, de manera concisa, pueden citarse los siguientes:

- Se crean tipos penales ajustados a los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como reglas para evitar la impunidad de éstos;
- Adopta elementos de estándares internacionales (imprescriptibilidad, extradición, tipo penal, entre otros);
- Se establece el derecho de toda persona a ser buscada;
- Crea el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda, con la posibilidad de llevar a cabo búsquedas simultáneas y conjuntas en todo el país, independientemente de que se traten de casos del fuero local;
- Entre las facultades de la Comisión Nacional de Búsqueda está la de crear grupos de búsqueda, grupos de trabajo y solicitar la participación de peritos independientes nacionales e internacionales;
- Se crean unidades de análisis de contexto y de gestión de información en la Comisión Nacional de Búsqueda, con lo que se puede generar información de inteligencia y la capacidad de cruce de información en registros para la búsqueda;
- Se crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y se crean plataformas de información (Registro de Búsqueda, Registro de Personas Fallecidas No Identificadas, Registro de Fosas, Banco de Datos Forense) y elementos tecnológicos para la búsqueda y localización efectiva, así como para la producción de información sobre personas desaparecidas en México;
- Se crean Programas Nacionales de Búsqueda y Exhumaciones para establecer las políticas públicas y bases para la organización de las autoridades en todo el país para la búsqueda, localización e

identificación. Se estipula la participación de las víctimas en estos planes;

- Se crea un Consejo Nacional Ciudadano, y dentro de ese Consejo se crea la figura del Comité de Evaluación y Seguimiento. Se aumentaron el número de representantes de familiares y sociedad civil en el Consejo Nacional Ciudadano y de estos en el Sistema Nacional de Búsqueda. Se crearon, además de la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisiones Locales que también tendrán espacios de participación y funcionarán con las mismas atribuciones que la Nacional, pero a nivel local;
- El Consejo Nacional Ciudadano tiene la facultad de solicitar información a cualquier miembro del Sistema Nacional de Búsqueda y a emitir recomendaciones;
- La Comisión Nacional de Búsqueda mantiene la atribución para generar política pública en la materia;
- La Comisión Nacional de Búsqueda tiene facultades de coordinación en cuanto al Mecanismo de Apoyo Exterior; para dar trámite a las denuncias de desapariciones de personas migrantes;
- La Comisión Nacional de Búsqueda tiene la facultad de crear grupos específicos de trabajo para búsquedas regionales; puede tener acceso a plataformas de información y; puede celebrar convenios con cualquier institución para el cumplimiento de funciones;
- Por primera vez en una Ley se hace énfasis en el tema de la Guerra Sucia y un plan de búsqueda;
- Se establecen principios generales para la declaración especial de ausencia por desaparición; y
- Se crean derechos especiales aplicables para las víctimas de desaparición, adicionalmente a lo establecido en la Ley General de Víctimas.

A lo largo del presente dictamen se exponen las consideraciones técnico- jurídicas que han llevado a estas dictaminadoras a la determinación del sentido en que se aprueba.

**Otras Iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados.**

Como se ha señalado, la problemática de las desapariciones ha planteado una atención especial por parte de diversos actores públicos y sociales. Derivado de lo anterior, en la Cámara de Diputados se han presentado proyectos legislativos, tanto la actual como en la anterior legislatura, que surgieron, precisamente, de la preocupación por otorgar a los ciudadanos un marco jurídico que coadyuve a solucionar la severa problemática de desapariciones en nuestro país. Por lo que hace a esta LXIII Legislatura, han sido presentado diversas iniciativas, las cuales han sido turnadas a la Comisión de Justicia de esta Cámara legislativa.

Derivado de lo anterior, a continuación se hace un breve recuento de las iniciativas turnadas a la Comisión de Justicia y que se dan por atendidas con el presente dictamen.

El Grupo Parlamentario de MORENA presentó tres iniciativas: la primera fue propuesta por el diputado Juan Romero Tenorio, en fecha 29 de septiembre de 2015; la segunda por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de ese partido político, en fecha 29 de noviembre de 2016; y la tercera fue presentada por el diputado Juan Romero Tenorio y suscrita a la vez por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, el 7 de diciembre de 2016. Cada una de las iniciativas recién citadas contienen proyectos de decreto que plantean expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometidas por Particulares.

El objetivo de las iniciativas recién citadas es crear una nueva ley en la cual se prevenga y determine la investigación y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas, así mismo el delito de desaparición de personas cometida por particulares. Dado que las tres iniciativas tienen el mismo objetivo, cabe hacer aclarar que dichas iniciativas se dan por atendidas con el presente dictamen, ya que al realizar un análisis comparativo de los decretos contenidos en las tres propuestas de ley, estas dictaminadoras han apreciado que tales proyecto de decreto son prácticamente los mismos y sólo existen variantes entre el de la iniciativa presentada en fecha 29 de septiembre de 2015 y los otros dos. Igualmente se han apreciado algunas variaciones en lo que hace a la adecuación de términos, la adición de algunos párrafos aclaratorios, o la adición de unas cuantas fracciones para dar claridad a lo estipulado en la propuesta de decreto, situación que no afecta de manera alguna el fondo ni la esencia de las propuestas presentadas por los legisladores de la fracción parlamentaria de MORENA.

En ese sentido, a continuación se esboza un breve análisis en el que se hace alusión a los principales elementos de las iniciativas en cita y que son atendidos con el presente dictamen. Igualmente, una vez que ha sido aclarado lo señalado en el párrafo que antecede, se tomarán en cuenta las tres propuestas de decreto presentadas por MORENA como si fuera una misma.

Uno de los principales objetivos de la Ley General es tipificar el delito de desaparición forzada de personas, lo cual se contiene tanto en la propuesta del Grupo Parlamentario de MORENA, así como en el Proyecto de Decreto contenido en el presente dictamen y, aunque no textualmente se atiende la propuesta, en sí los elementos que se contemplen en las iniciativas son contenidos en el presente Proyecto de Decreto, pero con una variante en la pena, ya que estas dictaminadores retoman la propuesta del Senado,

misma que propone que sea mayor que la planteada en la iniciativa. Igualmente, ambos proyectos proponen la tipificación del delito de desaparición cometida por particulares y contemplan sancionar a quien no entregue a la persona que haya nacido durante la privación de la libertad de una mujer víctima de desaparición forzada.

Igualmente, existe concordancia en que los delitos materia de la ley serán considerados como continuos o permanentes, asimismo prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad que impidan la investigación, procesamiento o sanción y cualquier otra medida. Se contempla la investigación y persecución de oficio.

Se plantea la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual, si bien con variantes orgánicas, se homologa al Comité de Seguimiento propuesto en la iniciativa de la fracción de MORENA. A la vez, ambas contemplan lo referente a los grupos especializados de búsqueda de personas desaparecidas, así como la creación de fiscalías especializadas.

Se incorporan diversos principios de actuación, como el correspondiente a que las búsquedas siempre se definirán con base en la presunción de vida de la víctima. Por otra parte, se atiende lo relativo a la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas; asimismo, se prevé en el presente dictamen la creación del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, situación que comparte la esencia del Banco de Datos de Cadáveres No Identificados propuesto en la iniciativa de MORENA.

Una parte fundamental del proyecto de Ley, es establecer los derechos de las víctimas directas y de los familiares de estas, por lo que en el proyecto de Decreto del presente dictamen se establecen distintos derechos, los cuales engloban diversos de los contenidos en la iniciativa de la fracción

parlamentaria de MORENA. Igualmente, ambos proyectos contemplan lo relativo a la reparación integral y atienden lo correspondiente a la protección de víctimas, familiares, testigos y cualquier persona involucrada en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.

En materia civil, ambos proyectos prevén que los familiares y otras personas legitimadas puedan solicitar a la autoridad jurisdiccional civil, la declaración especial de ausencia. Asimismo, se establecen medidas que abonen a la prevención de los delitos en la materia, y el establecimiento de indicadores de los programas en materia de prevención que sean puestos en funcionamiento.

En adición a lo anterior, es importante mencionar que el Grupo Parlamentario del PRD también presentó las siguientes iniciativas en la materia objeto de dictaminación en el presente dictamen: con Proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, propuesta por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, presentada el 15 de diciembre de 2015. A grandes rasgos, dicha iniciativa plantea crear un ordenamiento cuyo objeto sea prevenir la desaparición forzada de personas; tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; sancionar a los autores del delito; inhibir la práctica de la desaparición forzada de personas; establecer directrices para la creación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas; establecer las acciones para la protección de los derechos de las víctimas; definir criterios generales para la creación de bancos de datos genéticos y de cadáveres no identificados, entre otros no menos importantes.

Posteriormente, en fecha 28 de abril de 2016, los legisladores Erik Juárez Blanquet y María Concepción Valdés Ramírez, ambos integrantes de la fracción parlamentaria del PRD, presentaron una iniciativa con Proyecto de

Decreto que propone reformar el artículo 215-A del Código Penal Federal. Dicha iniciativa busca que el tipo penal de desaparición forzada incorpore recomendaciones hechas por organismos internacionales. Al respecto, si bien el Proyecto de Decreto contenido en el presente dictamen propone derogar el artículo 215-A del Código Penal Federal, es importante señalar que tales recomendaciones sí son tomadas en consideración dentro de la propuesta de Ley General que se somete a consideración de esta Cámara legislativa.

En complemento a lo anterior, el 29 de septiembre de 2016, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presente una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. A grandes rasgos, la iniciativa de mérito propone modificar el tipo penal de desaparición forzada de personas para adecuarlo con los estándares internacionales en la materia, contenidos en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado y que forman parte de la jurisprudencia de los tribunales, así como tipificar el delito de desaparición cometida por particulares y la declaración especial de ausencia.

Finalmente, el 7 de diciembre de 2016, la diputada Julieta Fernández Márquez, a nombre propio y del diputado Armando Luna Canales, ambos del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Víctimas, a efecto de que se consideré el pago de una compensación subsidiaria en los casos de desaparición forzada de personas.

Estas son sólo algunas de las iniciativas que se dan por atendidas con el presente dictamen. En la Comisión de Justicia se encuentran algunas otras relativas al tema, pero que reforman otras disposiciones normativas, reiterándose el compromiso de seguir trabajando en su análisis para, a la brevedad posible, emitir un dictamen objetivo las mismas.

Como se puede apreciar son múltiples las propuestas que han sido presentadas al interior de esta Cámara de Diputados con el propósito de regular con mayor detalle la grave problemática de desapariciones y para poder estructurar un mejor marco jurídico que coadyuve a su eficaz prevención y combate, mediante diversas políticas públicas e instituciones focalizadas a tal objetivo.

Como se verá en el apartado que se describe a continuación, el contenido de la Minuta remitida por la Colegisladora comprende y desarrolla gran parte de los aspectos que han sido objeto de preocupación de diversos legisladores en esta Cámara de Diputados.

**IV. Sobre el contenido de la Minuta.**

En este apartado, se analizará la Minuta recibida del Senado de la República a fin de determinar sí su contenido resulta compatible con el ordenamiento jurídico nacional e internacional y, sí la misma, de aprobarse y promulgarse, representaría un instrumento que posibilite a nuestro Estado pueda cumplir con las exigencias que se le demandan en esta materia.

El proyecto de Decreto sujeto a análisis pretende expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en adelante la Ley General de Desapariciones). Asimismo, se realizan adecuaciones normativas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud.

Tratándose de las modificaciones realizadas al Código Penal Federal, se indica que, el delito de desaparición forzada de personas pasará a ser desarrollado en la nueva Ley General de Desapariciones, por lo que la parte conducente a la tipificación de dicho ilícito quedaría abrogada en el Código

Penal Federal, es decir, aquella conformada por el Capítulo III Bis del Título Décimo, el cual a su vez es conformado por los artículos 215-A a 215-D. De igual modo, dentro de ese ordenamiento legal, se realizan adecuaciones técnicas al artículo 25, relativas a la duración de la pena de privación de la libertad. Se adiciona también un artículo 280-Bis al Título Décimo Séptimo a efecto de prever el tipo penal de destrucción de cadáveres o restos humanos de persona no identificada sin autorización de la autoridad competente.

Para el caso de la Ley General de Salud, se realizan modificaciones a los artículos 348, 350 Bis 3, 350 Bis 4 y 350 Bis 5, a fin de establecer reglas para el tratamiento de cadáveres o restos humanos de personas no identificadas, haciendo también remisión directa a las disposiciones contempladas en la Ley General de Desapariciones.

En cuanto a la expedición de la nueva Ley General de Desapariciones, debe indicarse que ésta tiene el carácter, precisamente, de una "Ley General". Como es sabido, las leyes generales son normas (conjuntos normativos) expedidas por el Congreso de la Unión, en las que se distribuyen competencias y formas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en las materias concurrentes y, además, en ellas se sientan las bases para su regulación. Las leyes generales no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades federativas puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. La facultad para la emisión de una ley de carácter general debe provenir forzosamente de una facultad expresa contenida en la Carta Marga y para el caso concreto, se contiene en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De este modo, se cuenta con la facultad y el mandato constitucional para expedir una Ley General en la materia que fije las bases mínimas a partir de las cuales, la federación y las entidades federativas combatan la desaparición forzada.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido a estas Leyes en los siguientes términos:

> **LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.** La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.[37]

En cuanto a su contenido, la Ley General de Desapariciones que pretende expedirse se compone de 173 artículos, distribuidos en cinco títulos:

1) Título Primero. Disposiciones Generales.
2) Título Segundo. De los Delitos y de las Responsabilidades Administrativas.
3) Título Tercero. Del Sistema Nacional.
4) Título Cuarto. De los Derechos de las Víctimas.
5) Título Quinto. De la Prevención de los Delitos.

[37] Tesis: P. VII/2007. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, abril de 2007. Pág. 5. Pleno. Tesis Aislada (Constitucional).

A continuación, se desarrollará de manera sintetizada, el contenido de los títulos recién indicados.

**Título Primero. Disposiciones Generales.**

En él se contienen las disposiciones generales en las cuales se señala el ámbito de aplicación material y territorial de la Ley. Se indica que la misma es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Como objeto de la Ley, queda previsto la distribución de competencias y la forma de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y para esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y de desapariciones cometidas por particulares, así como los delitos vinculados y sus sanciones.

A la par, dentro del objeto de la Ley, se busca establecer los tipos penales y sanciones en materia de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados a los mismos. Se prevé también en el mismo, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y otros registros, así como el deber de garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; además de garantizar la atención, asistencia, protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Cabe precisar que también dentro del objeto de la Ley, se reconoce expresamente y se valora la participación de los familiares de las personas

desaparecidas y no localizadas, a efecto de garantizar su intervención en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas y no localizadas, además de garantizar su coadyuvancia en las distintas etapas de las investigaciones, de manera tal, que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

Se destaca la incorporación directa del derecho internacional, así como el principio de interpretación conforme y pro persona, que se plasma en el artículo 3º del proyecto. De esa manera, la interpretación de la Ley se realizará de conformidad con la Constitución, así como con el derecho internacional, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia en favor de las personas víctimas de los delitos objeto de la Ley y sus familiares.

En el mismo título, se incluye un catálogo de definiciones, proporcionándose las relativas a figuras como: el Banco Nacional de Datos Forenses, la Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda, el Consejo Ciudadano, la Declaración Especial de Ausencia, una definición amplia de las personas que serán consideradas "Familiares", las Fiscalías Especializadas, el Grupo de Búsqueda, el Mecanismo de Apoyo Exterior, la distinción entre "Persona Desaparecida" y "Persona No Localizada", el Protocolo Homologado de Búsqueda, el Protocolo Homologado de Investigación, el Registro Nacional, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, el Registro Nacional de Fosas, el Sistema Nacional, entre otras no menos importantes.

Igualmente, son incorporados principios normativos de gran valía en el ámbito internacional, mismos que deberán de ser puestos en práctica en todas las acciones, medidas y procedimientos previstos en la Ley. Tales principios son los de: efectividad y exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no

discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida y verdad.

Como es sabido, varios de dichos principios encuentran su origen en el derecho internacional de los derechos humanos, así como en su jurisprudencia y en el *soft law* internacional. A guisa de ejemplo, respecto de la *"debida diligencia"*, el mismo es un concepto ampliamente desarrollado en el sistema interamericano por vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual, a través de múltiples casos en los que ha sentado una sólida línea jurisprudencial ha permitido derivar de este principio general reglas particulares a aplicar en todo momento, como lo son: la oficiosidad, la oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad y la participación de víctimas y sus familiares.[38]

Así también, se incluye el principio de *"enfoque diferencial y especializado"* para diversos sectores de la población, atendiendo a sus condiciones culturales, históricas, de vulnerabilidad y otros elementos, logrando así tener una aplicación más justa ante la Ley. Este criterio, ampliamente desarrollado por el Poder Judicial de la Federación, puede expresarse en los siguientes términos:

> ***"PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE.*** *El principio de igualdad tiene un carácter complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y tercer párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII. Esto es, los preceptos constitucionales referidos constituyen normas particulares de igualdad que imponen*

[38] *Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos.* CEJIL. Buenos Aires, 2010. Pág. 22. Disponible en: https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/debida_diligencia_en_la_investigacion_de_graves_viol_a_dh.pdf

*obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos en relación con el principio indicado; sin embargo, tales poderes, en particular el legislador, están vinculados al principio general de igualdad, establecido, entre otros, en el artículo 16 constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por el otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida."*[39] (El subrayado es propio).

En un segundo capítulo, se prevén disposiciones generales a aplicarse tratándose de personas desaparecidas menores de 18 años de edad. Se destaca el deber de actuación inmediato y bajo un enfoque diferenciado, integral y transversal de las autoridades cuando tengan conocimiento de la desaparición de dichas personas, así como el respeto permanente en todos los procedimientos del interés superior de la niñez.

[39] Tesis: P. XC/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, junio de 2000. 9ª época. Pág. 26. Pleno. Tesis Aislada (Constitucional).

**Título Segundo. De los Delitos y de las Responsabilidades Administrativas.**

El título segundo se compone de seis capítulos. El primero de ellos denominado "Disposiciones Generales" contempla reglas generales a utilizarse en los delitos previstos en la Ley en materia de desaparición forzada. Se prevé que, atento a la importancia del bien jurídico tutelado, los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares, sean perseguidos de oficio y tendrán el carácter de permanentes o continuados, es decir que, para efectos técnico- jurídicos, el delito seguirá cometiéndose hasta en tanto no se determine la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Se destaca que, tratándose de tales delitos, no procederá el archivo temporal de la investigación aun cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal. Lo anterior, con el correlativo deber de la búsqueda de la verdad y la máxima protección de las víctimas y de sus familiares.

Es de destacar la previsión que contempla la imprescriptibilidad de la acción penal y de la ejecución de sanciones penales, logrando con ello armonizar la ley con los más altos estándares en materia de derechos humanos que reconocen la especial gravedad de estos crímenes y la necesidad de adoptar medidas coherentes con los mismos. En consonancia, se prevé la prohibición de aplicar amnistías, indultos y otras medidas similares de impunidad que pudieran impedir la investigación, procesamiento o sanción y cualquier otra medida para determinar la verdad y obtener reparación plena de los delitos materia de la Ley.

A fin de facilitar la colaboración internacional, y con base en la experiencia histórica que sobre éstos delitos han tenido otros países de la región, se contempla que, para efectos de la extradición, la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares no serán considerados delitos de carácter político, delito conexo a un delito político ni

delito inspirado en motivos políticos. De este modo, se busca también reconocer ante la comunidad internacional de Estados que delitos de éste género no podrán bajo excusa de motivaciones políticas encontrar espacios para la impunidad y evitar que se haga justicia para las víctimas y sus familias. De igual modo, se busca hacer justicia evitando toda forma de exclusión de responsabilidad por figuras como la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten a la comisión de estos delitos.

Tal como se reconoce en nuestro artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales que prevén los estados de excepción, también se dispone que en ningún caso podrán invocarse circunstancias especiales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, suspensión de derechos y sus garantías, perturbación grave de la paz pública, como causas de justificación o inculpabilidad para cometer los delitos a que se refiere la Ley.

La correspondencia de las anteriores previsiones con el sistema universal puede verse si se le compara con los diversos instrumentos internacionales en los que se prevé la desaparición forzada de personas. Así, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas dispone:

***Artículo 1***

*1. ...*

*2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada.*

***Artículo 6.***

*1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos:*

*a ) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma;*

*b ) Al superior que:*

*i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente;*

*ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y*

*iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento;*

*c ) El inciso b ) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar.*

*2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada.*

***Artículo 8.***

*Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5,*

*1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a la desaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal:*

*a ) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito;*

*b ) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito.*

*2. El Estado Parte garantizará a las víctimas de desaparición forzada el derecho a un recurso eficaz durante el plazo de prescripción.*

***Artículo 11***

*1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si no procede a su extradición, o a su entrega a otro Estado conforme a sus obligaciones internacionales, o a su transferencia a una instancia penal internacional cuya jurisdicción haya reconocido, someterá el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal.*

*2...*

*3...*

***Artículo 13***

*1. A efectos de extradición entre Estados Partes, el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este único motivo.*

*2. a 6. ...*

***Artículo 16.***

*1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.*

*2...*

(El subrayado es propio)

En aras de facilitar la aplicación sistemática del ordenamiento jurídico en materia penal, la Minuta prevé que, en la persecución, investigación, procesamiento y sanción, serán aplicables las reglas de autoría, participación y concurso, y tentativa, previstas en la legislación penal. Igualmente, respecto a las reglas de acumulación de procesos se estará a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Capítulo Segundo, denominado "De la Competencia de los Delitos", fija las reglas que habrán de observarse en la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la Ley. En ese sentido, se señala que corresponderá a las autoridades federales tales funciones, cuando: I. Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley; II. Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación; III. Exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional en la que se determine la responsabilidad u obligación del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley; IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo; V. Durante la investigación se encuentren indicios que en la comisión del hecho participo una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada y; VI. Se dispone que la víctima podrá pedir al Ministerio Público de la

Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder de forma fundada y motivada.

De este modo, como se puede apreciar, se respetan las reglas de competencia generales previstas para las autoridades federales, pero también se deja abierta la posibilidad de que incluso a solicitud de la víctima puedan conocer las autoridades federales, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas para que estas últimas investiguen tales hechos y, en caso de que no sea así, se dispone que el Ministerio Público Federal *deberá* dar respuesta a la solicitud de forma fundada y motivada. Ahora bien, de manera excluyente, aquellos supuestos de intervención no contemplados para la federación, corresponderán a las autoridades de las Entidades Federativas.

Es de resaltar que bajo ningún motivo podrán conocer de los delitos previstos en el proyecto de ley, autoridades federales o estatales que no sean estrictamente del orden civil.

El capítulo tercero desarrolla el delito de "Desaparición Forzada de Personas." Así, el precepto 27 del proyecto, siguiendo los lineamientos más elevados en materia de derechos humanos, dispone que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona; seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. En este caso, se prevé la pena de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa. Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces por el lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.

Junto con el delito genérico de desaparición forzada de personas, se prevén otros delitos conexos. En ese sentido, se dispone que se impondrá pena de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 días multa a quien omita entregar a la autoridad o familiares, al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el período de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia. Adicionalmente, se impondrá pena de 25 a 35 años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de dicha circunstancia.

Se establecen agravantes para la comisión del delito de desaparición forzada de personas, mismas que contemplan un aumento de hasta la mitad de la pena, cuando: I. Durante o después de la desaparición, la persona desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito; II. La persona desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor; III. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer el delito; IV. La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para cometer del delito; V. La persona haya sido desaparecida por su actividad como defensora de derechos humanos; VI. La persona haya sido desaparecida en razón de su labor como periodista; VII. La persona desaparecida sea integrante de las Instituciones de Seguridad Pública; VIII. El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima; y, IX. Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

Adicionalmente, ponderando el principio de búsqueda de la verdad y el de integridad de la persona desaparecida, son fijadas circunstancias en las cuales, sin excluir por ningún motivo la responsabilidad penal derivada de la comisión de los delitos previstos en el proyecto de ley, se contemplan disminuciones en las sanciones cuando: los autores o partícipes liberen a la víctima espontáneamente; los autores o partícipes proporcionen información efectiva que conduzca a la localización con vida de la persona desaparecida; los autores o partícipes proporcionen información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de las persona desaparecida y; los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables. En cada caso, se contemplan disminuciones diversas de las sanciones y sujeto al hecho de que se logren los objetivos previstos para cada caso en concreto.

Con relación a este capítulo, es importante señalar que la propia Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas prevé circunstancias atenuantes y agravantes, así:

***Artículo 7.***

*1. Los Estados Partes considerarán el delito de desaparición forzada punible con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad.*

*2. Los Estados Partes podrán establecer:*

*a ) Circunstancias atenuantes, en particular para los que, habiendo sido partícipes en la comisión de una desaparición forzada, hayan contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida o hayan permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar a los responsables de una desaparición forzada;*

*b ) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, especialmente en caso de deceso de la persona desaparecida, o para quienes sean culpables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas con*

*discapacidades u otras personas particularmente vulnerables.* (El subrayado es propio)

Por lo que hace a la responsabilidad de los superiores jerárquicos, se prevé que los mismo serán considerados autores del delito de desaparición forzada, en términos de lo previsto en la legislación penal aplicable. Ahora bien, sobre este punto, se estima oportuno traer a colación que en lo que toca a la legislación sustantiva penal del orden federal, el Código Penal Federal contempla también la ***responsabilidad por omisión***, así, el artículo 7 del Código en cita dispone que, en los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, sí éste tenía el deber jurídico de evitarlo (tal como es el caso de ***todo*** servidor público). En dichos supuestos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley (como es el caso de la que se propone expedir), de un contrato o de su propio actuar precedente.

De lo anterior se desprende que, los diversos supuestos de responsabilidad penal en que pudieran incurrir los superiores jerárquicos si se encontrarán bien regulados en la nueva ley. Lo anterior ya que, además de los supuestos de responsabilidad previstos en la definición del tipo penal, con la remisión a la normativa penal aplicable no se dejarán márgenes que den lugar a eventuales lagunas legales.

Adicionalmente, no hay que perder de vista lo señalado anteriormente, cuando se resaltó el mandato de interpretación contenido en el propio proyecto de ley, el cual hace remisión directa a lo previsto en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, mismos que, dicho sea de paso, en la materia que nos atañe contemplan a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las

Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por citar un par de ejemplos.

Con relación a las dos últimas Convenciones citadas en el párrafo que antecede, debe resaltarse que las mismas contemplan la responsabilidad penal por omisión de los superiores jerárquicos (artículo 6 de la Convención Internacional y artículo I de la Convención Interamericana), con lo cual y en complemento a lo previsto en el orden jurídico nacional, se garantizará la persecución y el establecimiento de responsabilidad penal a todo servidor público que haya participado, por acción u omisión, en la comisión de una o más desapariciones.

El capítulo cuarto se regula el delito de "Desaparición cometida por Particulares", previéndose la comisión de este delito cuando se prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Esta situación se diferencia de la desaparición forzada de personas en el hecho de no tenerse certeza respecto de la calidad del sujeto activo como servidor público y, mientras no se determine el carácter de servidor público, el reproche es menor previéndose una sanción de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa. Para el caso de este delito también resultan aplicables las agravantes y las hipótesis de disminución de la pena previstas para el delito de desaparición forzada de personas.

El capítulo quinto prevé las definiciones y sanciones de otros delitos vinculados con la desaparición de personas. Dentro de estos "Delitos Vinculados" se contemplan: la destrucción de restos humanos o cadáveres de personas, con el fin de ocultar la comisión de un delito; la negativa injustificada de un servidor público para permitir el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas o de la investigación de los delitos establecidos en

la Ley, a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas; la obstaculización dolosa, por parte de un servidor público, en las acciones de búsqueda e investigación; el ocultamiento doloso de información que pueda conducir a encontrar a una niña o niño bajo los supuestos de los artículos 31 y 35 de la Ley; el ocultamiento o destrucción de documentos que puedan conducir a conocer la verdadera identidad de un niño o niña bajo los supuestos antes indicados; entre otros.

Finalmente, el capítulo sexto del Título Segundo prevé las "Responsabilidades Administrativas", recalcándose las sanciones a las que serán acreedores los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en la Ley y que no constituyan un delito de los previstos en la ley que se propone expedir.

**Título Tercero. Del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.**

El Título Tercero desarrolla una de las grandes y ambiciosas figuras creadas con motivo de la Ley, el "Sistema Nacional" entendido como el conjunto de personas representativas de diversas instancias públicas que, de manera coordinada, tienen como objetivos diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de la Ley General en materia de Desaparición Forzada.

Este Título Tercero se integra por ocho capítulos: Capítulo Primero, "Del Sistema Nacional"; Capítulo Segundo, "De la Comisión Nacional de Búsqueda"; Capítulo Tercero, "Del Consejo Nacional Ciudadano"; Capítulo Cuarto, "De los Grupos de Búsqueda"; Capítulo Quinto, "De las Fiscalías

Especializadas"; Capítulo Sexto, "De la Búsqueda de Personas"; Capítulo Séptimo, "De los Registros"; y, el Capítulo Octavo, "Del Programa Nacional de Búsqueda y del Programa Nacional de Exhumaciones."

En relación con el Sistema Nacional, debe indicarse que la Minuta la retoma de una propuesta planteada en la iniciativa del Ejecutivo Federal, entendiéndolo como una instancia superior para la articulación de esfuerzos en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como de los procesos que conlleven la homologación de protocolos y registros en la materia. La Minuta de la Colegisladora considera diversas instituciones integrantes del Sistema a fin de lograr una coordinación interinstitucional entre los órganos del Estado mexicano en una materia tan trascendental como lo es el objeto de la Ley General de desapariciones.

El Sistema tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal para la búsqueda y localización de personas desaparecidas con la participación directa de las familias de las víctimas en todos los procesos del sistema, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos.

Asimismo, se coincide con la propuesta formulada por la Colegisladora en el sentido de que el Sistema se integre por las siguientes instituciones: la persona titular de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; la persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la persona titular de la Procuraduría General de la República; la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva; la persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; tres representantes del Consejo Ciudadano; la persona titular de la Policía Federal; las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda; y, la persona que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Asimismo, se considera conveniente dejar la puerta abierta para que toda

institución que pueda colaborar en la atención de dicha materia sea susceptible también de participación dentro del Sistema mediante invitación de la presidencia del mismo.

Es de destacarse como uno de los grandes avances contemplados en esta Ley, la propuesta realizada para que el Sistema Nacional utilice como herramientas de su trabajo las siguientes: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Registro Administrativo de Detenciones; la Alerta Amber; el Protocolo Homologado de Búsqueda y demás protocolos autorizados (como el Homologado de Investigación); así como otros registros que coadyuven al adecuado funcionamiento del Sistema.

Igualmente, se prevén de manera expresa las atribuciones que tendrá el Sistema Nacional, entre las que destacan facultades para la emisión de modelos, lineamientos y acciones; de coordinación; de seguimiento y evaluación; para la creación de mecanismos; de emisión, atención y seguimiento de recomendaciones en los temas materia de la ley; emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda; y, en general, las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la ley.

El Capítulo Segundo desarrolla la figura de la Comisión Nacional de Búsqueda, entendida como la instancia de coordinación en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Se conformará como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determinará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas, en todo el territorio nacional. Igualmente, le corresponderá impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de

personas. Queda dispuesto que, además de la Comisión Nacional de Búsqueda, corresponderá a cada una de las entidades federativas crear sus correspondientes Comisiones Locales con funciones análogas a la nacional.

Es importante mencionar que, en el proceso de designación del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, queda establecido un procedimiento con participación ciudadana y representativa de los familiares de personas desaparecidas, así también, se fijan requisitos que aseguran la calidad profesional y el compromiso de la persona titular de dicha Comisión (y de las comisiones estatales) con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos.

Dentro de las múltiples funciones que se disponen deberá realizar la Comisión Nacional de Búsqueda se incluyen: emitir y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda; emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional y coordinar la operación del mismo; integrar un informe sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda; solicitar informes a las Comisiones Locales sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda; emitir los protocolos rectores que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones; promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda; diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas; acceder, sin restricciones, a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros de todas las autoridades para realizar la búsqueda de las personas desaparecidas o no localizadas; solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas; colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos; conocer y opinar sobre las

políticas y estrategias para la identificación de personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas comunes y clandestinas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y de las entidades federativas; celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional, así como de sus atribuciones; disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro medio de comunicación de acceso gratuito para proporcionar información, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas; solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad competente y con la previa autorización de los familiares, la difusión de boletines relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas; asesorar a las Comisiones Locales de Búsqueda.

Es de destacar también que, en el capítulo en mención, se faculta a la Comisión Nacional de Búsqueda para que establezca mecanismos de coordinación con autoridades de otros países, ello en aras de garantizar la efectividad en la búsqueda de las personas migrantes. Igualmente, se le faculta para que proponga al Ministerio Público federal el ejercicio de la facultad de atracción. Adicionalmente, se le faculta para que pueda incorporar a expertos independientes o peritos internacionales a los procesos de búsqueda realizados por la misma, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales previstos en el proyecto de ley.

A la par de lo anterior, se le dan atribuciones para que elabore distintos diagnósticos e informes de análisis; así como para que realice diversas acciones tendientes al cumplimiento de su objeto, labores de asesoramiento y

complementarias a las de las Comisiones Estatales; entre otras facultades trascendentales para el cumplimiento de su misión.

Igualmente, se enuncian cuáles serán las atribuciones de los grupos de búsqueda señalados en el proyecto de ley; se detalla cual deberá ser el contenido de los informes de avances y resultados del cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y se precisan las áreas mínimas con las que la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Estatales deberán contar para el desempeño de sus labores.

El Capítulo Tercero desarrolla la figura del Consejo Nacional Ciudadano, el cual como su nombre lo indica, será un órgano representante de la ciudadanía, de los familiares y de la sociedad civil dentro del Sistema Nacional. Se trata de un órgano ciudadano de consulta en materia de búsqueda de personas. En su integración participarán: cinco familiares de víctimas de los delitos de esta ley; cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en materia de investigación y persecución de los delitos previstos por esta Ley; y, cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Para la integración del Consejo se prevé un procedimiento en el que el Senado nombrará a los integrantes, previa consulta pública con las organizaciones de familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de víctimas y expertos en materia de desapariciones.

Se contempla que los integrantes del Consejo ejercerán su cargo en forma honorífica y se proporcionan lineamientos para regular su funcionamiento interno. A la par, se establecen las funciones que corresponderán al Consejo Ciudadano, entre las cuales se encuentran: proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda acciones para acelerar o profundizar sus labores, en el ámbito de sus competencias;

proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema Nacional para ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y forenses; proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y herramientas materia de la Ley; proponer y acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas; solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes; acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con las que cuenta el Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones; contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de la Ley; emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda; dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control, respecto a las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con labores de búsqueda e investigación, reconociéndosele interés legítimo dentro de las investigaciones para determinación de responsabilidades de los servidores públicos recién mencionados; entre otras igual de importantes.

A la par, se dispone la integración y atribuciones de un Comité (al interior del propio Consejo) para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda; así como el deber a cargo de las entidades federativas para que creen consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda.

En el Capítulo Cuarto se desarrollan las disposiciones relativas a los llamados "Grupos de Búsqueda" que, como su nombre lo indica, son grupos integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas quienes dependerán de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Entre las atribuciones de tales grupos les corresponderá: generar la metodología para la búsqueda inmediata de personas, considerando el Protocolo Homologado de Búsqueda y los demás existentes; solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de investigación específicos sobre la probable comisión de un delito, a efecto de que puedan llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los hechos; implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas y no Localizadas y salvaguarde sus derechos humanos; garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas.

Además, queda dispuesto que las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno deberán contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado, capacitado y certificado en materia de búsqueda de personas. Dicho personal atenderá las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las Comisiones Locales de Búsqueda, según corresponda.

En el Capítulo Quinto del título que se analiza se regula la figura correspondiente a las Fiscalías Especializadas que, según sea el caso, estarán adscritas a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia Locales. Su función será la de investigar y perseguir los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

Se mandata que las mismas contarán con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados, así como los multidisciplinarios necesarios para el desempeño de sus funciones, además de una unidad de análisis de contexto.

A la par, se busca que los servidores públicos que las integren dispongan de determinados requisitos dirigidos a garantizar su idoneidad para el cargo y su compromiso en la atención de estas problemáticas. Para tal efecto, a tales servidores se les capacitará conforme a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a víctimas, sensibilización y relevancia específica de la desaparición de personas, aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros.

Entre otras atribuciones, se destaca que corresponde a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República (y también a las Fiscalías especializadas de las Procuradurías Estatales): recibir las denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de la Ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente; mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de la Ley; dar aviso de manera inmediata, a través del Registro Nacional, a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos materia de la Ley; mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de compartir información que pudiera contribuir en las acciones para la búsqueda y localización de personas; informar de manera inmediata a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Comisión Local de Búsqueda, según sea el caso, sobre la localización o identificación de una persona; mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes a efecto de recibir, recabar y proporcionar información sobre las acciones de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley cometidos en contra de personas migrantes; solicitar a la

autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, términos de la normatividad correspondiente; solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones Estatales de Víctimas, así como a las instituciones y organizaciones de derechos humanos y de protección civil; establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de los servidores públicos especializados en la materia; localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas, en coordinación con las instituciones correspondientes a fin de poder hacer la entrega de cadáveres o restos humanos; celebrar convenios de colaboración o cooperación, para el óptimo cumplimiento de las atribuciones que le corresponden; entre otro amplio cúmulo de atribuciones fundamentales para el desempeño de sus labores, sustentadas bajo el principio de máxima diligencia y no obstaculización de las investigaciones.

Adicionalmente, no debe pasarse por alto señalar que, dentro de las atribuciones, se contempla la obligación para que las Fiscalías Especiales faciliten la participación de los familiares en la investigación de los delitos previstos en la Ley, así como el deber de brindarles información de manera periódica acerca de los avances en los procesos de investigación y persecución de tales ilícitos. Igualmente, la Fiscalía Especializada dependiente de la Procuraduría General de la República deberá proporcionar asistencia técnica a las Fiscalías Especializadas locales que se lo soliciten.

Queda previsto que las Fiscalías Especializadas deberán generar los criterios y metodologías específicas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición, incluyéndose aquellos ocurridos por motivos políticos en décadas pasadas.

Adicionalmente y en consonancia al tratamiento dado en otros proyectos de Decreto que han sido aprobados previamente por estas

Comisiones legislativas[40] y con el propósito de que los servidores públicos que sean señalados como imputados por el delito de desaparición forzada de personas y que, por razón de su encargo o influencia, puedan interferir u obstaculizar las acciones de búsqueda o las investigaciones, se prevé que los mismos podrán ser sujetos de *medidas cautelares* como lo son: la suspensión temporal de su encargo, entre otras, determinada por la autoridad judicial competente de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente, se prevé que el superior jerárquico pueda adoptar las *medidas administrativas* y *adicionales* que sean necesarias para impedir que el (los) servidor(es) público(s) interfiera(n) con las investigaciones.

Cabe señalar que, en su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[41] (si bien con relación a la investigación y persecución de la tortura) señaló que la incorporación de una previsión como la que ahora se plantea se ajusta a los estándares internacionales. Al respecto la Oficina internacional señalada, en su momento externó:

> *[...] La medida referida constituye una salvaguarda importante para el éxito de la investigación, ya que una de las razones que organismos y expertos internacionales han detectado y por las cuales no prosperan las investigaciones de actos de tortura* –en este caso

[40] Véase: Artículo 16 de la Adenda con Propuesta de Modificación al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. Disponible en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del miércoles 19 de abril de 2017. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/20170419-IV-Bis2.pdf

[41] Véase: Observaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Dictamen de las Comisiones Unidas de justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Ley General en materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, remitidas a esta Soberanía el 23 de enero de 2017.

aplicaría el mismo argumento para las desapariciones- *es que las víctimas se ven obligadas a denunciar los hechos ante las mismas autoridades involucradas en la tortura17. Esta medida está dirigida entonces a garantizar la independencia e imparcialidad de las investigaciones, así como a impedir su obstaculización.*

*Asimismo, la medida está encaminada a garantizar la seguridad de las víctimas, testigos y sus familias ante posibles represalias de presuntos torturadores que se mantienen en una posición de poder frente a aquéllos. Adicionalmente, la medida tiene por objetivo evitar que se reproduzcan los hechos..."*

Como se puede apreciar, y como lo señaló en su momento la Oficina del Alto Comisionado, la adopción de una previsión similar en la Ley General de Desapariciones abonará a garantizar la independencia e imparcialidad de las investigaciones y búsquedas, así como a impedir su obstaculización. Igualmente, ayudará a garantizar la seguridad de las víctimas, testigos y sus familiares ante eventuales represalias de autoridades que se mantienen en una posición de poder frente a ellos.

A la vez, se estima oportuno señalar que en aquellos supuestos en que se sospeche que la(s) víctima(s) ha sido privada de la vida y, para efectos de realizar las diligencias pertinentes a la exhumación de restos, se contempla como derechos de los familiares el relativo a solicitar la participación de peritos especializados independientes de conformidad con la legislación aplicable.

De suma importancia también, resulta el mandato expreso a cargo de todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno, correspondiente a su deber de proporcionar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el auxilio

e información que las Fiscalías Especializadas les soliciten para la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley.

En el Capítulo Sexto se regula la *Búsqueda de Personas*, para ello dicho Capítulo se divide en dos secciones, la primera relativa a la Solicitud de Búsqueda y la segunda a los Protocolos.

Como un principio base de la búsqueda y de todo proceder de los servidores públicos, se dispone que los mecanismos de búsqueda deberán agotarse totalmente hasta que se determine la suerte o el paradero de la persona. Cualquier persona podrá solicitar la búsqueda de una Persona Desaparecida o No Localizada mediante: noticia, reporte o denuncia que podrán ser realizados en forma anónima. En el articulado se detalla los requisitos que habrán de reunirse para el caso de dicha noticia, reporte o denuncia. Una vez recibido dicho reporte, noticia o denuncia, se deberán implementar, inmediatamente, acciones de búsqueda conforme al protocolo correspondiente. Así también, una vez que la Comisión Nacional o la Comisión Local que corresponda reciba un Reporte o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada, deberá ingresar de inmediato la información correspondiente al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y generar un folio único de búsqueda.

A fin de optimizar la protección de la víctima, se considerará que existe la presunción de un delito cuando: la persona de la que se desconoce su paradero es menor de 18 años de edad; de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito; de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito; hayan transcurrido setenta y dos horas sin tener Noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona, y; cuando antes del plazo

establecido en el inciso anterior aparezcan indicios o elementos que hagan suponer la probable comisión de un delito.

Se refuerza la participación de los familiares al disponerse que la Comisión Nacional de Búsqueda y, en su caso, la Comisión Local de Búsqueda correspondiente deberá implementar mecanismos para que los familiares tengan conocimiento del resultado de las acciones de búsqueda, las diligencias, los indicios, evidencias y pruebas que surjan de los mismos.

En las acciones de búsqueda se deberá consultar de manera periódica y exhaustiva las bases de datos o registros de: hospitales, clínicas, centros de atención psiquiátrica, centros de Desarrollo Integral para la Familia, centros de salud, centros de atención de adicciones y rehabilitación, públicos y privados; centros de detención y reclusorios a cargo del sistema penitenciario; registros de los centros de detención administrativos; servicios médicos forenses y banco de datos forenses; Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas; albergues públicos y privados, e instituciones de asistencia social; panteones o lugares en los que se depositen restos mortales o cadáveres, públicos y privados; estaciones migratorias y listas de control migratorio; terminales de autotransporte terrestre, aéreo y marítimo, de pasajeros y de carga; así como todo otro registro y base de datos que contenga información que pueda contribuir a la localización e identificación de las personas.

Se prevé que cuando la persona sea localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente deberá, por lo menos: dar aviso a la Fiscalía Especializada que corresponda, cuando exista carpeta de investigación. En caso de que no se haya cometido ningún delito, deberá darse por concluida la carpeta de investigación; dar aviso inmediato a la autoridad competente en materia de atención a víctimas; aplicar el procedimiento correspondiente a la identificación de identidad

regulado en el Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual establecerá el modo de obtención de la declaración de la persona localizada en la cual se señalen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su desaparición o no localización, así como los motivos de ésta y los probables responsables de la misma; una vez identificada, declarar localizada a la persona y notificarlo a quien solicitó la búsqueda, a sus familiares o, en su caso, a la persona que ésta designe; en caso de que se localizara sin vida a la persona, se deberán aplicar las reglas para el tratamiento e identificación forense y el de notificación y entrega de restos a familiares, contenido en el protocolo homologado que corresponda, garantizando siempre la protección, respeto y restitución de los restos humanos de manera digna a sus familiares, así como entregar un informe de las circunstancias de la muerte y la forma en que se identificaron dichos restos; así como actualizar el Registro Nacional que corresponda.

Por lo que hace a las personas extranjeras que puedan ser objeto de una desaparición o no sean localizadas en nuestro país, se prevé que las oficinas consulares de México deberán recibir las solicitudes de búsqueda y remitirán sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda. En adición a lo anterior, se contempla que las autoridades involucradas en la búsqueda deberán de proveer información a los familiares que se encuentren en el exterior, a través de las autoridades consulares correspondientes o de la(s) persona(s) que haya(n) designado para tales efectos.

Una previsión trascendental que ha sido incorporada es la correspondiente la *presunción de vida* de las personas desaparecidas o no localizadas. Al respecto, el proyecto establece que, durante la búsqueda, se presumirá que dichas personas se encuentran con vida, por lo que, en consecuencia, no podrán concluirse las acciones de búsqueda, salvo que haya certeza sobre la suerte o paradero de la(s) persona(s) o hasta que sus restos hayan sido encontrados y plenamente identificados.

La Sección Segunda de este Capítulo Sexto regula los Protocolos, correspondiendo al Sistema Nacional la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda. Por su parte, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia le corresponderá la emisión del Protocolo Homologado de Investigación. En ambos protocolos, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá emitir, con antelación a su emisión, una opinión previa respecto a los mismos. Adicionalmente, dichos instrumentos deberán elaborarse con la participación de expertos en la materia, de la sociedad civil y familiares, en apego a los más altos estándares internacionales.

Se prevé que los protocolos contendrán, por lo menos: las formas en las que las autoridades recibirán el reporte, denuncia o noticia respecto a que una persona se encuentra desaparecida o no localizada; los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, incluidos en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; las acciones de búsqueda en el lugar de los hechos o del hallazgo; el procedimiento para definir los polígonos en donde deba realizarse la búsqueda; el mecanismo de búsqueda inmediata; los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial; los procedimientos de búsqueda e investigación específicos para niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, así como para desapariciones cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos políticos; los procedimientos de actuación e identificación forense; el mecanismo de notificación a familiares; los procedimientos para notificar y entregar los restos a familiares de personas localizadas sin vida; los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales, y para la difusión del perfil de la(s) persona(s) desaparecida(s) o no localizada(s); las medidas para atender a personas en situación de vulnerabilidad; los procedimientos para la participación de los familiares en la búsqueda e investigaciones; entre otros.

Se contemplan también los elementos que se deberán considerar para la elaboración y actualización de los protocolos homologados de búsqueda e investigación señalados, asimismo, se dispone que ambos protocolos deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

El Capítulo Séptimo de la Ley, se destina a la regulación de los Registros. El capítulo se compone de cinco secciones: la Primera relativa al "Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas"; la Segunda correspondiente al "Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas; la Tercera referente al "Banco Nacional de Datos Forenses"; la Cuarta respecto a la "Disposición de Cadáveres de Personas"; y la Quinta en lo tocante a "las Herramientas Tecnológicas."

Por lo que hace al *Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas*, el mismo constituye una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre personas desaparecidas y no localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación.

Dicho Registro Nacional se conformará con la información que recaban las autoridades de la federación y de las entidades federativas. En ese tenor, corresponderá a la Comisión Nacional de Búsqueda administrar y coordinar la operación del citado Registro Nacional. Igualmente, dicho Registro deberá estar interconectado con las demás herramientas de búsqueda e identificación previstas en la ley y ser actualizado en tiempo real.

Se prevé el contenido mínimo de dicho Registro Nacional, el cual deberá ser alimentado también con toda aquella información novedosa que resulte de las diligencias de búsqueda o investigación. El Registro podrá consultarse públicamente mediante página electrónica, pero se deja a salvo el

derecho de los familiares para que soliciten que no se haga pública la información de la persona desaparecida o no localizada.

Adicionalmente, en el caso de las personas localizadas, deberá contar, como mínimo, con criterios de clasificación distribuidos en: persona localizada que no fue víctima de ningún delito; persona localizada víctima de un delito materia de la ley, y persona localizada víctima de un delito diverso (regulado en otras leyes).

Por otra parte, el *Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas* se encontrará a cargo de la Procuraduría General de la República (la cual emitirá sus lineamientos), formará parte del Banco Nacional de Datos Forenses y contendrá información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, así como del lugar de su hallazgo, del lugar de inhumación o destino final y la demás información que sea relevante para su posterior identificación. Su información, se integrará con los datos proporcionados por las autoridades competentes de la federación y de las entidades federativas. El objetivo de este Registro será el de concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de los familiares de personas fallecidas no reclamadas.

Se prevé cuál será su contenido mínimo y, al igual que con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, se contempla que su información será actualizada en tiempo real por parte de los servicios periciales y/o los servicios médicos forenses de la federación y de las entidades federativas.

Se contempla la obligación para que las autoridades, una vez lograda la identificación de un cadáver o restos de una persona, lo notifiquen a sus familiares de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación,

teniendo estos últimos, derecho a impugnar la identificación. Igualmente, se prohíbe a las autoridades que ordenen inhumaciones en fosas comunes, de cadáveres o restos humanos sin identificar, si antes no han cumplido con lo previsto en el protocolo homologado aplicable.

El Banco Nacional de Datos Forenses estará también a cargo de la Procuraduría General de la República y tendrá por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como para la investigación de los delitos materia de la nueva Ley. Su información se conformará con las bases de datos de los registros forenses de la federación y de las entidades federativas los cuales deberán estar interconectados en tiempo real entre sí y realizar cruces de información con las demás herramientas de búsqueda e identificación del Sistema Nacional.

Corresponderá a la Procuraduría General de la República coordinar la operación y centralizar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, así como administrar el Registro Forense Federal. El Banco contendrá información pericial y forense que sea útil para la identificación de una persona, así como una base de datos de información genética que contenga, como mínimo: la información genética de los familiares (previa aceptación expresa, informada y por escrito) en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o de los de segundo grado en línea colateral, de las personas desaparecidas y no localizadas; así como información genética de terceras personas, en los casos en que así lo requiera la autoridad ministerial o judicial que corresponda, como datos o medios de prueba.

En cuanto a la Sección Cuarta, relativa a la "Disposición de Cadáveres de Personas", en ella se establecen las reglas a observarse tratándose de los cadáveres o restos de personas no identificadas. Se prevé que los mismos no

podrán ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.

Las Procuradurías y otras autoridades que tengan a su cargo servicios forenses deberán tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados. Sólo cuando las investigaciones revelen la identidad del cadáver o los restos de la persona, el agente del Ministerio Público competente podrá autorizar que los familiares dispongan de él y de sus pertenencias. También se prevé que en caso de emergencia sanitaria o de desastres naturales, se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría de Salud.

Se contempla la obligación para que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Secretaria de Salud emitan y publiquen en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos sobre los procedimientos para la conservación de cadáveres o restos de personas, en concordancia con los más altos estándares internacionales en la materia.

En la Sección Quinta se disponen reglas para la utilización de las *herramientas tecnológicas*. Se indica que, las bases y los registros previstos en la Ley, serán diseñados de tal forma que: no exista duplicidad de registros; permitan utilizar (en la búsqueda y en la investigación de los delitos) las herramientas de análisis de contexto, con enfoque transnacional, a fin de determinar patrones de criminalidad, modos de operación, mapas criminológicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada, entre otros; cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado; y, permitan su actualización permanente.

Es destacable la previsión legal de este apartado que dispone que tanto la federación, como las entidades federativas, deberán contar al menos

con: el *Registro Administrativo de Detenciones* (previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública), y el *Registro Nacional de Fosas* (mismo que contará con información sobre las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, además de las fosas clandestinas que la procuradurías –federal y locales- localicen).

El Capítulo Octavo regula lo concerniente al "Programa Nacional de Búsqueda y Localización" y al "Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense". En ese sentido, se disponen los contenidos que, como mínimo, deberán de contener cada uno de ellos.

Para el caso del *Programa Nacional de Búsqueda y Localización* estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda y contendrá: el diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del Programa; el proceso y las metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre la desaparición y los posibles paraderos de las personas; las metodologías y procesos para recopilar y sistematizar información de las diferentes fuentes disponibles y para su incorporación y procesamiento en bases de datos o sistemas particulares para facilitar las labores de búsqueda y localización; la identificación de tiempo y lugar de episodios críticos de desaparición de personas en el país; las estrategias regionales o locales de búsqueda que se determinen de acuerdo a contextos y temporalidades específicas; las estrategias específicas a seguir para la búsqueda de personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores u otras personas o grupos que dadas sus características requieran medidas o mecanismos diferenciados de búsqueda; las instituciones que participarán en la implementación del Programa; el método específico de análisis de contexto; el proceso para la

depuración y organización de la información contenida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; entre otros.

Para el caso del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, el mismo estará a cargo de la Procuraduría General de la República y contendrá, como mínimo: el diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del programa; el proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre las personas fallecidas sin identificar que permita aportar información sobre la hipótesis de identificación de las personas inhumadas; información estadística sobre el número de cuerpos inhumados sin identificar; listado de todos los panteones y cementerios del país, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar inhumados en cada uno y las circunstancias y contextos correspondientes; listado de todos los lugares de inhumación clandestina de cuerpos que se hayan localizado; estrategias regionales o locales de exhumación; criterios logísticos de priorización de las actuaciones de exhumaciones e identificación forense; evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación; el presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa; las actuaciones previstas para la identificación de las personas inhumadas y para proceder a las inhumaciones controladas; las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado; los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa, entre otros contenidos.

**Título Cuarto. De los Derechos de las Víctimas.**

El Título Cuarto de la Ley se dedica a los "Derechos de las Víctimas" y se compone de cinco capítulos: el primero correspondiente a las "Disposiciones Generales"; el segundo sobre las "las medidas de ayuda, asistencia y atención"; el tercero relativo a la "Declaración Especial de Ausencia; el cuarto concerniente a "las medidas de reparación integral a las víctimas"; y, el quinto referente a "la protección de personas."

En lo tocante a las *disposiciones generales* se resalta el derecho que asiste a las víctimas para tener acceso a las medidas de ayuda, asistencia, atención y a una reparación integral, de conformidad con la nueva Ley y la Ley General de Víctimas.

De manera enunciativa, pero no limitativa, se dispone que además de los derechos a la verdad, al acceso a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición y aquellos derechos contenidos en otros ordenamientos legales, las víctimas tendrán derecho a: la protección de sus derechos, personalidad e intereses jurídicos; a que las autoridades inicien las acciones de búsqueda y localización bajo los principios de la nueva Ley y desde el momento en que se tenga noticia de una desaparición; a ser restablecidos en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado(s) con vida; a proceder en contra de quienes, de mala fe, hagan uso de los mecanismos previstos en la Ley para despojarlo de sus bienes o derechos; a recibir tratamiento especializado desde el momento de su localización para la superación del daño sufrido, producto de los delitos previstos en la Ley; y, a que su nombre y honra sean restablecidos en aquellos casos donde su defensa haya sido imposible debido a su condición de persona desaparecida.

Los familiares de las víctimas también tendrán derecho, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, a: participar dando

acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen para la localización de la(s) persona(s) desaparecida(s); proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o planeen; acceder a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación; acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención; beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promuevan ante la autoridad competente; solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales en las acciones de búsqueda; ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia; entre otros.

Se considera valioso resaltar la inclusión de una disposición que establece que, cuando la autoridad se niegue a atender las diligencias sugeridas por los familiares, dicha negativa deberá ser fundada y motivada por escrito.

El Capítulo Segundo, destinado a las "Medidas de Ayuda, Asistencia y Atención", recalca el derecho a recibir de *inmediato* y *sin restricción alguna*, las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas. Las medidas deben ser proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas en tanto realizan las gestiones para que otras instituciones públicas brinden la atención respectiva. Igualmente se establece el procedimiento a seguir en la atención de las víctimas cuando, durante la búsqueda o investigación, exista un cambio de fuero. Lo anterior a efecto de no desamparar a las víctimas.

El Capítulo Tercero prevé una de las grandes demandas de los familiares y una medida que ha sido aplaudida, especialmente, por la comunidad internacional. Se trata de la figura de la *"Declaración Especial de Ausencia"*.

Como antecedente de esta figura en nuestro país y como respuesta a la necesidad de instaurar un procedimiento rápido para los casos de declaración de ausencia por motivo de desaparición, es pertinente señalar que, en atención a esta exigencia, se incluyó dentro del decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado el 3 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, la figura de la "declaración especial de ausencia por desaparición". En ese sentido, al ser este un procedimiento civil, tocaba ahora a cada una de las entidades federativas armonizar sus respectivas leyes y procedimientos civiles. La disposición en cuestión indica:[42]

> *"Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes en la materia, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar."*

Dentro de esa tesitura, en el año 2014, Rubén Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el artículo 7 de la Constitución Política de

[42] Véase el artículo 21, párrafo octavo de la Ley General de Víctimas.

esa entidad federativa, así como el Código Penal del Estado, y para expedir la *Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Coahuila.*[43]

Dicha Ley, producto de la lucha de las familias de personas desaparecidas y no localizadas, representó un referente y un ejemplo de ley de avanzada que marcó un punto de partida en el país, ya que con la misma el Estado mexicano comenzó a construir, bajo estándares internacionales, el marco jurídico que se requiere para atender esta problemática de inminente violación a los derechos humanos.

En ese sentido, dicha ley local se consideró un ejemplo de legislación que rebasó las fronteras nacionales, ya que no sólo se adelantó a la elaboración de una ley general (como la que se propone en la Minuta que se analiza) que le hubiera facilitado el proceso de diseño y concepción del problema de las desapariciones forzadas; sino también, porque fue uno de las primeras entidades que cumplió con el mandato estipulado en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

Así, apoyándose de la figura de "declaración de ausencia por desapariciones" otorgada en la Ley General de Atención a víctimas, se dispuso que en la mencionada Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas *"las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos sus derechos. El Estado adoptará las medidas apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuyo paradero no haya sido esclarecido".*

[43] Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza el viernes 20 de mayo de 2014. Disponible en: http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa202.pdf

Las ventajas de la aplicación de esta ley no se hicieron esperar. Con su puesta en marcha, se obligó a las autoridades a iniciar la búsqueda de personas no localizadas desde el momento en que se tiene la presunción de su desaparición.

Consecuentemente se reguló la declaración de ausencia por desaparición, conservando la personalidad jurídica de la víctima, lo cual, además, no presupone la muerte de la víctima, por lo que los familiares pueden obtener este término legal (desaparición) en tan sólo tres meses, cuando antes era necesario que transcurrieran cinco años. La Ley también repercutió positivamente en los efectos patrimoniales y laborales, porque permitió suspender la relación laboral, pero dejándola viva, generando obligaciones para los patrones a fin de que mantengan esa relación laboral y efectos de representación legal.

A la par, la ley citada estableció que tendría los siguientes efectos: garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida; garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio del interés superior de la niñez; garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes; garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios y prestaciones, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familiares; declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desaparecida; toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo.

Asimismo, dispuso que las personas declaradas como ausentes por Desaparición de Personas que tengan sus labores en territorio de Coahuila, tendrán, en virtud de la misma, la siguiente protección: se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que sean localizadas; si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad; si el trabajador es localizado sin vida, se indemnizará a sus deudos; a los beneficiarios del trabajador, en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable; se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a la persona; los créditos y prestaciones sociales adquiridos contractualmente por la persona desaparecida serán ejercidos por la o el cónyuge, los hijos o las hijas, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana.

Fue así como por vez primera, se desarrolló un esfuerzo articulado en la materia constituido según los estándares internacionales de atención y reglas de operación, que permitió atender el problema de la desaparición a nivel local.

Una vez esbozados los antecedentes de la figura de la Declaración Especial de Ausencia, y volviendo a la regulación que se propone en el Decreto contenido en la Minuta que se analiza en el presente dictamen, esta última dispone que los familiares y otras personas legitimadas por la ley, así como el Ministerio Público, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda, que emita la Declaración Especial de Ausencia.

Para ello, se prevén reglas generales para la competencia de la autoridad jurisdiccional competente, así como el deber de la federación y de las entidades federativas para que establezcan (en sus respectivas legislaciones) el procedimiento para la Declaración Especial de Ausencia,

precisando que el mismo no podrá exceder de seis meses a partir de que se inicie. Igualmente, se prevé que dicho procedimiento podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia, el reporte de desaparición o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o ante un organismo público de protección de los derechos fundamentales de las entidades federativas.

Se dispone también que los procedimientos de declaración especial permitirán corregir el estatus legal de las personas desaparecidas respecto de las cuales previamente se haya declarado la presunción de ausencia o de muerte.

El proyecto plantea que la Declaración Especial de Ausencia tendrá como finalidad reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida, así como otorgar medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares.

Asimismo, los efectos mínimos de la misma serán: garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años edad; fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de edad; proteger el patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca; fijar la forma y plazos para que los familiares, u otras personas legitimadas por la ley, puedan acceder al patrimonio de la persona desaparecida; garantizar la seguridad social de las personas que dependan de una persona desaparecida; suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida; declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo; proveer la representación legal de la persona ausente cuando

corresponda; establecer las reglas aplicables en caso de que la persona desaparecida sea localizada con vida, para el restablecimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Cabe mencionar que, la Declaración Especial de Ausencia no prejuzga respecto de la suerte de la persona desaparecida, por lo que, no obstante que se haya iniciado el procedimiento de la misma, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá continuar con las acciones de búsqueda, así como las Fiscalías Especializadas las correlativas labores de investigación y de persecución de los delitos previstos. Asimismo, se precisa que la declaración solamente tiene efectos de carácter civil, por lo que no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

Un punto quizá menor, pero de gran apoyo para los familiares de las personas desaparecidas, es el relativo la inclusión de los principios de inmediatez, celeridad y gratuidad que deberán regir en el procedimiento de declaración especial. Así, se especifica que los gastos derivados del mismo, incluyendo la publicación de edictos, no causarán contribución alguna por lo que hace a la publicación en medios oficiales. A la vez, se precisa que tales procedimientos deberán contemplar la posibilidad de emitir medidas provisionales, así como omitir aquellos requisitos que resulten onerosos para la emisión de convocatorias.

Posteriormente, en el Capítulo Cuarto se reiteran las "Medidas de Reparación Integral a las Víctimas". En ese sentido y a fin de no dejar dudas, queda dispuesto que las víctimas de los delitos establecidos en la Ley tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas, señalándose que dicho derecho a la reparación integral es de carácter imprescriptible.

Es de destacar que la figura de la reparación integral ha sido ampliamente desarrollada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e integrada a nuestro ordenamiento jurídico por vía de importantes precedentes judiciales como lo son, la contradicción de tesis 293/2011. Es así que, guiados por esos precedentes, el Senado de la República ha tenido a bien incorporar como contenido de la reparación integral a las medidas de satisfacción y las de no repetición. Igualmente, se enuncia de manera expresa que la reparación integral comprenderá, además de lo señalado en la Ley General de Víctimas, lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las normas del derecho internacional, lo cual es muestra clara de una norma maximizadora en plena sintonía con el principio pro persona enunciado en el artículo 1o. de la Ley Suprema.

Con relación a las medidas de satisfacción, se enuncia que las mismas abarcarán elementos como: la construcción de lugares o monumentos de memoria; disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas; recuperación de escenarios de encuentro comunitario; recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas; y, recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante.

Por lo que hace a las medidas de no repetición, se mencionan elementos, como lo son: la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de los servidores públicos investigados o sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso, y previo desahogo de los procedimientos administrativos y/o judiciales que correspondan.

Se estipula que la federación y las entidades federativas serán *responsables directas* de asegurar la reparación integral cuando sean responsables sus servidores públicos o los particulares que hayan actuado bajo la autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de los primeros. Igualmente, se contempla la *compensación subsidiaria* a cargo de ambos órdenes de gobierno, cuando las desapariciones hayan sido perpetradas por particulares en términos de lo previsto en la Ley General de Víctimas.

El Capítulo Quinto prevé medidas dirigidas a la "Protección de Personas." A tal efecto, se prevé que las Fiscalías Especializadas deberán establecer programas para la protección de las víctimas, los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas o no localizada, así como en la investigación o procesos penales, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos.

También se contempla que tales Fiscalías deberán otorgar el apoyo ministerial, pericial, policial, y de otras fuerzas de seguridad, a las organizaciones de familiares y a los propios familiares involucradas en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas en campo, garantizándoles todas las medidas de protección a su integridad física.

Como medida urgente, se prevé que las Fiscalías Especializadas podrán otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las Comisiones Estatales de Víctimas, la reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas.

También se contempla que las Fiscalías Especializadas podrán, con apoyo de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones Locales de Víctimas, otorgar medidas para enfrentar el riesgo, tales como entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados, y demás medios de protección que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas.

Se añade que tratándose de personas defensoras de derechos humanos y periodistas se estará también a lo dispuestos, es decir, la Ley se complementará, con lo previsto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de derechos humanos y Periodistas.

**Título Quinto. De la Prevención de los Delitos.**

El último título de la Ley se dedica a la "Prevención de los Delitos" y se compone de tres capítulos: "Disposiciones Generales", "De la Programación", y "De la Capacitación". En las disposiciones generales se prevén medidas de coordinación interinstitucional entre las diferentes autoridades involucradas en la aplicación de la Ley propuesta, ello a fin de prevenir la comisión de los delitos a que se refiere la misma. A la par, dentro de las medidas generales de prevención queda fijado, entre otras cosas, que todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas privadas de la libertad, deberán de contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar.

También se dispone que las Procuradurías de Justicia (federal y locales) deberán administrar bases de datos estadísticas relativas a la incidencia de los delitos previstos en la Ley, a fin de permitir la identificación

de circunstancias, grupos en condición de vulnerabilidad, modus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de alto riesgo en los que aumente la probabilidad de la comisión de alguno de los delitos previstos en la ley, ello a efectos de garantizar su prevención. Igualmente, deberán diseñar mecanismos de colaboración para que dar cumplimiento a lo anterior y demás acciones previstas en la ley que se propone expedir.

Asimismo, se contempla que el Sistema Nacional, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, deberán llevar a cabo, ente otras medidas de prevención: campañas informativas dirigidas a fomentar la denuncia de los delitos y cuales son las instituciones de atención y los servicios que brindan; proponer acciones de capacitación a las Instituciones de Seguridad Pública; proponer e implementar programas que incentiven a la ciudadanía a proporcionar la información para la investigación de los delitos previstos en la Ley, así como para la ubicación y rescate de las personas desaparecidas o no localizadas; promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales para fortalecer la prevención de las conductas delictivas; recabar y generar información respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en materia de búsqueda de personas, prevención e investigación; identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que aumente la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de los delitos previstos en la ley; proporcionar información y asesoría; diseñar instrumentos de evaluación e indicadores para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la ley; realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre la problemática de desaparición de personas.

El Capítulo Segundo se dedica a "La Programación" y en el mismo se incluyen los programas de prevención de los delitos materia de la Ley. En

ellos, queda dispuesto, deberán fijarse metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a los servidores públicos. Igualmente, corresponderá a las autoridades de todos los órdenes de gobierno remitir anualmente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, estudios (que serán públicos y consultables) sobre las causas, distribución geográfica de la frecuencia delictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos previstos en la Ley, a la vez, deberán remitir su programa de prevención sobre los mismos.

Finalmente, se dedica un Capítulo Tercero relativo a "La Capacitación". En el mismo se indica que la Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y las autoridades municipales correspondientes, deberán establecer programas obligatorios de capacitación en materia de derechos humanos, con base en los principios contenidos en la Ley, dirigidos a los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública involucrados en la búsqueda y en la realización de las acciones previstas en la Ley, ello con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos materia del proyecto de Ley.

Se contempla también que deberá recibir capacitación *obligatoria* el personal ministerial, policial y pericial de conformidad con los más altos estándares internacionales, respecto de las técnicas de búsqueda, investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere la Ley, así como de los protocolos de actuación inmediata y las acciones específicas que deben realizar.

Se prevé que las instituciones de seguridad pública seleccionarán al personal policial que conformará los Grupos de Búsqueda, para lo cual la Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los lineamientos que permitan determinar su número de integrantes. Adicionalmente, se señala que la

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales en la materia deberán implementar programas de difusión que den a conocer los servicios y medidas que brindan a las víctimas de los delitos previstos en el proyecto de Ley.

**Reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud.**

Como se señaló en el proemio del presente dictamen, con las reformas a otras disposiciones legales se busca dar armonía en el orden jurídico nacional respecto a las previsiones que serán emitidas en la nueva Ley General de Desapariciones que se propone expedir.

Así por lo que hace al Código Penal Federal, se plantean derogar los preceptos 215-A a 215-D, ya que en la nueva ley general serán regulados (y mejor desarrollados) sus contenidos, como lo son: la definición del tipo penal; penalidades; atenuantes; destitución e inhabilitación de servidores públicos; así como sanciones a la oposición o negativa de la autoridad para permitir el acceso a lugares donde se crea que pueda encontrarse una persona desaparecida.

Por lo que hace a la Ley General de Salud, se plantea armonizar los contenidos de dicho cuerpo legal que tienen conexión directa con las previsiones de la nueva Ley General de Desapariciones, particularmente en lo que atañe a: inhumación, incineración o embalsamiento de cadáveres; utilización de cadáveres de personas desconocidas para fines de docencia e investigación, especificando que en tales casos se estará a lo dispuesto en la nueva ley general que se propone y precisando que solo podrán utilizarse dichos cadáveres cuando se tenga el consentimiento (ante mortem) de la persona fallecida o de sus familiares después de su muerte; se enuncian e incorporan los datos que deberá contener el Registro que lleven las

instituciones educativas que reciban cadáveres para efectos de investigación y docencia.

**Régimen Transitorio.**

En lo que respecta al Régimen Transitorio, se determina que el periodo de *vacatio legis* será de 60 días a partir de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, se abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas al contemplarse su función ya dentro de los Registros a que se refiere la nueva Ley General de Desapariciones.

Se establece también que, las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto y, dentro de los 30 días siguientes a que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los protocolos rectores para su funcionamiento; igualmente, a los 180 días posteriores a la entrada en función de la Comisión Nacional de Búsqueda, ésta deberá emitir el Programa Nacional de Búsqueda y, en los 90 días posteriores a su entrada en funciones deberá emitir los criterios de capacitación, certificación y evaluación del personal de acciones de búsqueda; por su parte las Comisiones Locales de Búsqueda deberán entrar en funciones a partir de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del Decreto; se concede un plazo de un año para la certificación de los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda.

Para el caso del Consejo Ciudadano, éste deberá conformarse dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del Decreto y, en un plazo de 30 días posteriores a su conformación, deberá emitir sus reglas de funcionamiento.

Respecto al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, él mismo deberá quedar instalado dentro de los 180 días posteriores a la publicación del Decreto y, en su primera y segunda sesión deberá emitir los diversos lineamientos, modelos y criterios que son enunciados en la Ley, tras haber sido emitidos dichos lineamientos la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas. Una vez que esté operando el Registro recién citado, las entidades federativas deberán poner en marcha también sus respectivos registros, dentro de los 90 días siguientes.

Se establece que el Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que entre en vigor el Decreto. Igualmente, las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

En cuanto a los tipos penales, se prevén reglas para la traslación de los mismos.

Se prevé que el Ejecutivo Federal deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias correspondientes en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del Decreto. Asimismo, dentro de los 30 días siguientes de que sea creada la Comisión Nacional de Búsqueda, a ésta le deberán ser transferidas las herramientas tecnológicas y la información que en su momento haya sido recabada en términos de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y, una vez recibida dicha información, la Comisión Nacional deberá transmitirla a las

Fiscalías Especiales de las entidades federativas dentro de los 90 días siguientes.

Por su parte, el Banco Nacional de Datos Forenses, los registros forenses (tanto el federal como los estatales) comenzarán a operar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del Decreto.

En un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del Decreto, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos para determinar las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse en la conservación de cadáveres o restos de personas. Asimismo, en el mismo plazo, la Procuraduría General de la República deberá emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses cuenten con las características y el soporte tecnológico adecuado, a la par, en ese mismo plazo, deberá emitir los lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan la información que será integrada al Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, así como al Banco Nacional de Datos Forenses.

También, dentro los 180 días siguientes a la publicación del Decreto, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá emitir los lineamientos para acceder sin restricciones a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros a efecto de que realicen labores de búsqueda de personas.

Se especifica que el Protocolo Homologado de Investigación deberá ser expedido por parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto.

En términos presupuestarios, queda fijado que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del Decreto para las dependencias

y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Por su parte, las legislaturas de las entidades federativas deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen.

Igualmente, a efecto de generar certeza jurídica respecto a eventuales omisiones de autoridades, se prevé que cuando las entidades federativas no hayan creado y/u operen en sus territorios comisiones locales de víctimas, las instituciones que resulten competentes en dicho orden de gobierno serán las encargadas de brindar la atención a las víctimas conforme a lo previsto en el proyecto de Ley. A la par, se enuncia que mientras en los Estados se estén integrando las comisiones locales de búsqueda, sus obligaciones serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de la entidad de que se trate.

**V. Las Personas Desaparecidas. Guía para los Parlamentarios del Comité Internacional de la Cruz Roja.**

A continuación, se esbozarán algunos de los aspectos abordados en el documento denominado *"Las Personas Desaparecidas. Guía para los Parlamentarios"* (en adelante la Guía Parlamentaria). Dicho documento fue preparado *"... por iniciativa y con la contribución de los miembros del Comité de la Unión Interparlamentaria encargado de promover el respeto del derecho internacional humanitario. Se basa, en gran parte, en el informe sobre las personas desaparecidas presentado por la señora B. Gadient (parlamentaria suiza) y el señor L. Nicolini (parlamentario uruguayo) con ocasión de la 115ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria. La guía también recibió*

*contribuciones de la secretaría de la Unión Interparlamentaria y del Comité Internacional de la Cruz Roja."*[44]

Igualmente, dicho Manual "*... es el resultado de una colaboración entre la Unión Interparlamentaria, organización mundial de parlamentos, y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que realiza diversas acciones con el apoyo de los demás componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a fin de resolver el problema de las personas dadas por desaparecidas en el marco de un conflicto armado o de una situación de violencia interna, así como de ayudar a sus familiares. Su finalidad es asistir a los Parlamentos y sus miembros en la tarea de sensibilizar a los gobiernos respectivos, por todos los medios a su alcance, sobre el problema de las personas desaparecidas, a fin de que se adopten políticas nacionales globales destinadas a evitar las desapariciones, resolver el problema de las personas dadas por desaparecidas y prestar ayuda de manera más eficaz a los familiares de las víctimas.*"

Entre otros contenidos, la Guía Parlamentaria hace referencia a las responsabilidades de las autoridades estatales en el marco del Derecho Internacional, explica el papel fundamental de los parlamentarios en la atención de dicha problemática, y presenta una *propuesta* de ley tipo sobre las personas desaparecidas (elaborada por el Servicio de Asesoramiento en derecho internacional humanitario del CICR).

La Guía Parlamentaria está orientada por distintas normas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, además de los principios del derecho internacional consuetudinario (soft- law internacional) relativos a la protección y el respeto de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares. Tales principios

[44] Comité Internacional de la Cruz Roja e Inter- Parliamentary Union, *Las Personas Desaparecidas. Guía para los Parlamentarios*, número 17, 2009, p. 2. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_1117.pdf

fundamentan y complementan las disposiciones adoptadas en los tratados internacionales (hard law internacional).

En la Guía se enuncian cinco ámbitos de acción prioritarios para responder a los problemas vinculados con la desaparición de personas.[45] Tales ámbitos fueron identificados en la Conferencia Internacional de expertos gubernamentales y no gubernamentales sobre las personas desaparecidas, celebrada en Ginebra, Suiza del 19 al 21 de febrero de 2003 por invitación del CICR. A saber, dichos ámbitos corresponden a las siguientes materias:

1) ***Prevenir las desapariciones***. - Este ámbito abarca, entre otras, la implementación de medidas para: identificar los miembros de las fuerzas armadas y grupos armados organizados; registro de los datos de grupos específicos de personas vulnerables y de personas expuestas a riesgos particulares, respetando las normas de protección de los datos personales; debido registro de los datos de las personas privadas de libertad (fecha y lugar del arresto, lugar de detención o de encarcelamiento, traslado, fallecimiento o inhumación) realizado en estricta conformidad con las disposiciones de la ley; así como el respeto al derecho a intercambiar noticias con familiares.
2) ***Averiguar lo ocurrido a las personas dadas por desaparecidas***. – Comprende aspectos relativos a: responsabilidad de las autoridades para dar información sobre, e investigar los casos, de personas desaparecidas; responsabilizar a las autoridades estatales cuando obstaculizan el acceso a la información o dan informaciones inexactas; existencia de mecanismos múltiples para averiguar lo ocurrido a personas desaparecidas (humanitarios, gubernamentales, judiciales y no judiciales) que cubran las necesidades de las familias y comunidades, que sean independientes e imparciales, coordinen sus actividades e intercambien información; creación, en cada país, de una

[45] Ibídem, pp. 21- 26.

base de datos centralizada sobre todas las personas dadas por desaparecidas, la cual una única institución debería encargarse de administrarla y de procesar toda la información recolectada.

3) ***Administrar la información y los expedientes relativos a las personas dadas por desaparecidas.*** - En este ámbito se señalan acciones relacionadas con: la recolección e intercambio de información de manera coordinada, activa y adecuada; recolección de información precisa (que permita determinar los hechos) sin poner en peligro a la persona o fuente de información; alentar la elaboración y la aplicación de normas que rijan la recolección y la administración de la información; crear una Oficina Nacional de Información cuya tarea será obtener y centralizar toda la información posible, entre otros aspectos, sobre personas dadas por desaparecidas, con el propósito de que comunique esa información a las autoridades competentes y a los familiares, así como para que responda a todos los pedidos de información relativos a las personas protegidas e inicie las gestiones necesarias para obtener información requerida que no esté en su posesión; establecimiento de un marco legal que rija la protección de datos personales y de restos humanos, incluida la información genética.

4) ***Tratamiento de los restos humanos y de la información relativa a las personas fallecidas.*** – Enuncia la adopción de acciones relacionadas con: identificación de las personas fallecidas en situaciones de conflicto armado o de violencia interna, adoptando muestras de consideración y respeto hacia las personas fallecidas; adopción de medidas para trasladar a las personas fallecidas y exhumar los restos humanos no identificados cuando sea necesario y en el menor plazo posible; recabar la mayor cantidad de información que se pueda sobre los restos humanos y los hechos que provocaron la muerte de una persona; conservar todos los restos humanos que no fueron devueltos a los familiares; informar a las familias cuando uno de

sus miembros ha muerto, entregándoles la correspondiente acta de defunción y restituirles todos los efectos personales y, cuando sea posible, los restos mortales; se precisa que el método adoptado para la identificación de los restos humanos debe adaptarse a cada contexto y ser aceptado por todos los interesados antes de dar inicio al proceso de identificación.

5) ***Apoyar a las familias de las personas dadas por desaparecidas.*** - Prevé que las necesidades específicas de los familiares en los planos material, financiero, psicológico y jurídico deben ser objeto de medidas adoptadas por las autoridades estatales directamente vinculadas, teniendo siempre en cuenta el contexto local y cultural; determinar en el marco jurídico el estatuto de la persona desaparecida, ya que la falta de esclarecimiento del mismo agrava los problemas de sus familiares, a manera de ejemplo pueden citarse los siguientes aspectos que comúnmente se ven afectados al desaparecer una persona: derechos en materia de administración de bienes, herencia, custodia de los hijos, posibilidad de beneficiarse de prestaciones o de tener la perspectiva de volver a casarse, entre otros.

A la par de lo anterior, la Guía Parlamentaria señala cuáles son los *principales elementos* que deben ser contemplados en una ley sobre las personas desaparecidas, entre los cuales se enuncian los siguientes:

- *Una definición clara de la noción de personas desaparecidas y el reconocimiento de un estatuto jurídico a las personas dadas por desaparecidas y sus familiares.*
- *El reconocimiento del derecho a saber y, por ende, de la necesidad de informar a los familiares sobre lo acontecido a la persona desaparecida.*
- *La incriminación, en la legislación penal nacional, de las violaciones de las normas del derecho internacional humanitario y del derecho*

*internacional de los derechos humanos aplicables a las desapariciones y, en particular, la incriminación de la desaparición forzada.*

- *La instauración de mecanismos de investigación y de enjuiciamiento para garantizar la aplicación de la legislación penal antes mencionada.*
- *El reconocimiento de los derechos de los familiares de las personas desaparecidas durante el período en que sus seres queridos están desaparecidos, prestando particular atención a las personas vulnerables.*
- *La adopción de medidas que garanticen que todas las personas, en particular los menores y otras personas vulnerables, dispongan de los medios de identificación personal.*
- *La adopción de medidas que garanticen que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad dispongan de medios de identificación personal (al menos una placa de identidad) y que esos medios de identificación sean obligatoria y correctamente utilizados.*
- *El intercambio de noticias entre familiares, sean cuales sean las circunstancias.*
- *En el caso particular de las personas privadas de libertad, la adopción de medidas que garanticen que se informe a los familiares, los abogados y toda otra persona que tenga un interés legítimo en su situación, así como el contacto con los familiares y los abogados.*
- *El derecho a ser detenido y a que se registren los datos personales en un sitio oficial.*
- *La protección de las personas contra los riesgos de desaparición, en particular las personas privadas de libertad, autorizando las visitas de inspección regulares, independientes, no anunciadas y*

*sin restricciones, por el Comité Internacional de la Cruz Roja o por cualquier otro organismo nacional o internacional independiente.*

- *La designación de una autoridad nacional competente en la materia.*
- *La creación de una Oficina Nacional de Información encargada de centralizar y transmitir información relativa a los heridos, los enfermos y los náufragos, así como a las personas privadas de libertad y las personas fallecidas.*
- *El tratamiento correcto de los restos humanos."*[46]

Respecto a los elementos recién señalados, la Guía Parlamentaria presenta un *proyecto de modelo de ley* que retoma cada una de las facetas que deben tratarse en el ámbito de las personas desaparecidas.[47] *"...Dicho modelo de ley o "ley tipo" fue elaborada con el propósito de ayudar a los Estados a perfeccionar su legislación nacional sobre las personas desaparecidas. Está basada en los principios del derecho internacional, en particular los relativos a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario."*

Una vez que han sido expuestos diversos contenidos enunciados en la Guía Parlamentaria del CICR, estas Comisiones dictaminadoras observan con beneplácito que los mismos han sido incorporados en el proyecto de Decreto remitido por la Colegisladora. Igualmente, es importante mencionar que distintos aspectos señalados por el CICR en la Guía Parlamentaria también han sido incorporados, con antelación, en otras disposiciones jurídicas nacionales, como lo son, por citar algunas: la Ley General de Víctimas; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la recién aprobada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otras disposiciones vinculadas en la materia.

[46] Ibídem, p. 34.
[47] Ibídem, pp. 43- 82.

Como propone el CICR en su modelo de ley tipo, el proyecto de Decreto remitido por la Colegisladora se alinea con las nociones claves esbozadas por esa institución humanitaria. Así, se incluyen disposiciones referentes a: la finalidad de la ley; definiciones; los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, así como las obligaciones del Estado para garantizar y salvaguardar esos derechos; estatuto jurídico de las personas desaparecidas y derechos conexos, incluyendo los correspondientes a sus familiares; medidas de implementación que se aplican en situaciones anteriores a la desaparición de personas, cuando la desaparición ya se ha producido y en caso de defunción (presunta o comprobada); prevé también la adopción de medidas preventivas de identificación; el órgano público competente en materia de búsqueda de personas desaparecidas, sus atribuciones y deberes; lo correspondiente a la Oficina Nacional de Información y el Registro Nacional de Información sobre personas desaparecidas; lo correspondiente a los procedimientos de búsqueda; el acceso a la información sobre las personas desaparecidas y la protección de los datos; lo tocante a las personas fallecidas no identificadas; la responsabilidad penal, enunciando las infracciones de la ley y sus sanciones penales, entre otros elementos que desarrolla con mayor amplitud (y de conformidad con la estructura institucional y legal de nuestro país) el proyecto de Ley remitido por el Senado.

**VI. Mejores prácticas de la legislación penal nacional en materia de desapariciones forzadas: Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.**

A la par de la Guía Parlamentaria esbozada en el apartado que antecede, estas Comisiones dictaminadoras estiman oportuno dar cuenta del contenido del documento intitulado "Mejores prácticas de la legislación penal nacional en materia de desapariciones forzadas", el cual fue una adición al Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la

ONU que *[...] En su resolución 14/10 de 18 de junio de 2010, titulada "Desapariciones forzadas o involuntarias", el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Grupo de Trabajo que elaborara un informe para presentarlo ante el Consejo de Derechos Humanos en su 16° período de sesiones. Sobre la base de la legislación vigente y de la jurisprudencia correspondiente, se destacan las mejores prácticas con el fin de ayudar a los Estados a mejorar su actual legislación y elaborar nuevas disposiciones sobre la desaparición forzada. En las conclusiones figura una lista de esas mejores prácticas que deberían seguir todos los Estados."*[48]

En el documento, el Grupo de Trabajo da cuenta de que, tras elaborar un estudio sobre el trato de las desapariciones forzadas en la legislación penal de diversos Estados[49], llegó a la conclusión de que pocos Estados habían tipificado a la desaparición forzada como delito separado en su legislación interna. Asimismo, derivado del estudio comparado realizado por el Grupo de Trabajo, el mismo identificó y señala en el citado documento, diversas experiencias nacionales de las que pueden extraerse numerosos ejemplos que pueden resultar de utilidad para los Estados que se propongan promulgar nuevas leyes o revisar las vigentes en el futuro próximo.[50]

Se resalta, por parte del Grupo de Trabajo, la importancia de que se prevea desde la Constitución el derecho humano a no ser objeto de desaparición forzada, tal como acontece en el Estado mexicano, donde en el artículo 29 de la Ley Suprema se contempla tal previsión.

El informe se estructura en seis partes: 1) Tipificación como delito de la desaparición forzada; 2) Elementos constitutivos del delito; 3) Carácter

[48] Organización de las Naciones Unidas, Adición del Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias "Mejores prácticas de la legislación penal nacional en materia de desapariciones forzadas", resolución 14/10 de 18 de junio de 2010. Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/179/57/PDF/G1017957.pdf?OpenElement

[49] La idea original del Grupo de Trabajo era analizar la legislación de todos los Estados del mundo, pero solamente algunos dieron respuesta al cuestionario remitido mediante una nota verbal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

[50] Ibídem, p. 3, párrafo 6.

permanente del delito y consecuencias para el derecho penal; 4) Participación en la desaparición forzada; 5) Sanciones; y, 6) Garantías contra la impunidad.

Ahora bien, por lo que hace a la primera parte, referente a la ***tipificación como delito de la desaparición forzada***, se da cuenta que, desde 1995, el Grupo de Trabajo aprobó un comentario general en el que señaló la obligación de tipificar la desaparición forzada como delito separado en la legislación penal interna, a fin de dar cumplimiento al artículo 4 de la Declaración.[51] Igualmente indica que *[...] la existencia de una pluralidad fragmentada de delitos no refleja la complejidad y el carácter particularmente grave de la desaparición forzada. Los delitos mencionados* -secuestro, detención ilegal, privación ilegal de libertad, trata, constricción ilegal y abuso de poder- *pueden formar parte de un tipo de desaparición forzada, pero ninguno de ellos es suficiente para abarcar todos los elementos constitutivos de esa figura delictiva, y en muchos casos no conllevan sanciones que tengan en cuenta la extrema gravedad de ese delito, por lo que no llegan a garantizar una protección completa."*[52]

En lo que hace a la segunda parte, correspondiente a los e***lementos constitutivos del delito***, se señala:

> *[...] Desde 1995, el Grupo de Trabajo ha clarificado que los Estados no están obligados a seguir estrictamente la definición del delito contenida en la Declaración, pero deben asegurarse "de que el acto de la desaparición forzada se defina de forma que lo distinga claramente de otros delitos afines", como la privación forzada de libertad, el rapto, el secuestro, la detención en régimen de incomunicación, etc. Toda definición debe contener como mínimo los tres elementos acumulativos siguientes: a) privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada; b) participación*

[51] Ibídem, p. 4, párrafo 9.
[52] Ibídem, p. 4, párrafo 11.

*de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia; y c) negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada."*[53]

Añade también que toda desaparición forzada comienza por la privación de libertad de la víctima, cualquiera que sea la forma que revista (legal o ilegal), por lo que, en consecuencia, la definición del tipo no debe limitarse a los casos de privación ilegal de libertad y debe abarcar todas las posibles situaciones comprendidas en el concepto general de "privación de libertad". Señala que las buenas prácticas pueden consistir en leyes que utilicen el concepto de "privación de libertad de la víctima" o, mejor todavía, "privación de libertad en cualquier forma",[54] (esta última contenida en la definición del tipo que enuncia el proyecto de Ley de la Colegisladora.

Se precisa que, respecto a los autores del delito, *[...] a efectos de su labor, las desapariciones forzadas sólo se consideran tales cuando el acto en cuestión lo cometen* ***agentes estatales o particulares*** *o grupos organizados (por ejemplo grupos paramilitares)* ***que actúan en nombre o con el apoyo*** *directo o indirecto* ***del Gobierno o con su consentimiento o aquiescencia"*** *(...) El Grupo de trabajo ha señalado asimismo que "está de acuerdo con las disposiciones del artículo 3 de la Convención Internacional en el sentido de que los Estados tomarán las medidas apropiadas para investigar los* ***actos equiparables a las desapariciones*** *forzadas* ***cometidos por personas o grupos de personas*** *que actúen* ***sin*** *la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado y procesar a los responsables."*[55] (El remarcado es propio). En ese sentido, es importante destacar que el Grupo de Trabajo observa como una buena práctica la definición de la desaparición forzada

[53] Ibídem, p. 7, párrafo 21.
[54] Ibídem, pp. 7 y 8, párrafos 22, 23 y 24.
[55] Ibídem, p. 8, párrafo 25.

como delito autónomo, es decir, que se prevea la posibilidad de que el crimen lo puede llegar a cometer *"cualquier persona"*.[56]

Especifica el Grupo que, acorde las definiciones de la desaparición forzada en el derecho internacional, "uno de los elementos constitutivos del delito es la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Este elemento es lo que distingue la desaparición forzada de otros delitos, como el de detención arbitraria."[57]

Igualmente, indica que:

> *"Todas las definiciones de desaparición forzada en el derecho internacional indican que la víctima es sustraída de la protección de la ley. Esa peculiaridad de la desaparición forzada entraña la suspensión del goce de todos los demás derechos humanos y libertades de la víctima, a la que se coloca en una situación de total indefensión. Ese aspecto se relaciona con el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, que es un requisito previo para el goce de todos los demás derechos humanos."*[58]

Respecto a la tercera parte del informe que se analiza, tocante al ***carácter permanente del delito y consecuencias para el derecho penal***, se señala que:

> *"El artículo 17.1 de la Declaración establece que "toda* (sic) *acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras los autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos". En su observación general sobre la desaparición forzada*

[56] Ibídem, p. 8, párrafo 26.
[57] Ibídem, p. 9, párrafo 28.
[58] Ibídem, p. 9, párrafo 29.

*como delito permanente, el Grupo de Trabajo señaló que "[l]as desapariciones forzadas son prototípicos actos continuos. El acto comienza en el momento del secuestro y se extiende por todo el período de tiempo en que el crimen tiene lugar, es decir, hasta que el Estado reconoce la detención o proporciona información relativa a la suerte o al paradero de la persona desaparecida".*[59]

En ese sentido, el Grupo de Trabajo considera como buena práctica el hecho de que los Estados definan explícitamente en su legislación penal la desaparición forzada como delito permanente, continuo o continuado, tal como acontece con el proyecto de Ley remitido por el Senado.

La cuarta parte del informe, relativa a la ***participación en la desaparición forzada***, indica que *"Las diferentes formas de participación en la comisión de la desaparición forzada, como complicidad, responsabilidad por órdenes o instrucciones, instigación, consentimiento, aquiescencia y ocultamiento activo, también serán delitos punibles en la legislación penal nacional."*[60] En ese tenor, se resalta que lo anterior tiene especial importancia en la comisión de una desaparición forzada, ya que en la misma, generalmente, están implicadas varias personas y, no todas ellas tienen necesariamente conocimiento del paradero o la suerte de la víctima.

La quinta parte, destinada a las ***sanciones***, se da cuenta de que "En el párrafo 1 del artículo 4 de la Declaración se dispone que "todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su *extrema gravedad.*"[61] A la par *[...] el Grupo de Trabajo considera que, si la desaparición forzada es abominable en tanto que crimen de lesa humanidad, también como delito autónomo reviste extrema gravedad y merece una*

[59] Ibídem, p. 10, párrafo 33.
[60] Ibídem, p. 11, párrafo 35.
[61] Ibídem, p. 12, párrafo 39.

*condena consiguientemente severa."*[62] Pero a la par de lo anterior, el Grupo afirma "En el párrafo 2 del artículo 4 de la Declaración se dispone que "[l]as legislaciones nacionales podrán establecer circunstancias atenuantes para quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada, contribuyan a la reaparición con vida de la víctima o den voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada"[63] y *[...] la legislación penal que "dispone medidas de atenuación punitiva sólo en el caso de que los perpetradores cooperen en la liberación de la víctima o en la recuperación de los restos de la víctima, según el caso" cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 4 de la Declaración."*[64]

Prosigue el Grupo de Trabajo

*"Diversos Estados establecen circunstancias agravantes o atenuantes concretas para la desaparición forzada, y otros remiten a las circunstancias genéricas previstas en el Código Penal, si las hubiere. Cuando se contemplan circunstancias agravantes concretas, estas consisten, por ejemplo, en que se haya infligido grave daño físico o psicológico a la víctima, en que ésta pertenezca a un grupo especialmente vulnerable, en que el autor del delito sea funcionario público, o en que la desaparición forzada se defina como delito permanente. En otros Estados se considera circunstancia agravante el hecho de que el delito se cometa a lo largo de un período prolongado. En cuanto a las circunstancias atenuantes, se cuentan entre ellas el hecho de que la víctima sea puesta en libertad al cabo de cierto tiempo o el de que la persona*

[62] Ibídem, p. 12, párrafo 41.
[63] Ibídem, p. 12 y 13, párrafo 42.
[64] Ibídem, p. 13, párrafo 43.

*de que se trate facilite información que permita esclarecer el caso o identificar a los autores."*[65]

En lo tocante a las llamadas "sanciones accesorias", el Grupo indica que la legislación debe prever medidas de inhabilitación administrativa para los autores del delito que hayan sido condenados por la comisión de una desaparición, concretamente en lo que hace a los servidores públicos. A la par, precisa que debe garantizarse a las víctimas que obtengan una plena reparación civil, por lo que, en adición a las sanciones penales, los autores de las desapariciones serán sujetos de responsabilidad civil general.

Finalmente, en lo que toca a la sexta parte del informe, correspondiente a las ***garantías contra la impunidad***, se abordan distintos puntos relacionados con las figuras de: amnistía, obediencia debida a órdenes superiores, prescripción, tribunal competente para enjuiciar las desapariciones, los principios de jurisdicción universal y de "*aut dedere aut judicare*".

Se inicia diciendo que, desde 1994, se ha reiterado a los Estados su obligación de no elaborar ni promulgar leyes que tuvieran por efecto otorgar inmunidad a los autores de desapariciones, ya que ello genera un círculo vicioso; ya que la impunidad es, a la vez, una de las causas subyacentes de las desapariciones forzadas y uno de los principales obstáculos para el esclarecimiento de esos delitos (y estas dictaminadoras añadirían: que de otro sin número de delitos también).

En lo tocante a la ***amnistía***, se indica que las mejores prácticas son las que excluyen, explícitamente, el delito de desaparición forzada de la aplicación de leyes de amnistía o medidas similares, con independencia de sí el ilícito se define o no como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, debe señalarse que el Grupo de trabajo interpreta dicha prohibición en conjunto con

[65] Ibídem, p. 13, párrafo 44.

otras disposiciones de la Declaración, ya que el artículo 18 de la misma permite la aplicación de *medidas limitadas y excepcionales* que conduzcan directamente a la prevención y cesación de las desapariciones, dando una enumeración detallada de los tipos de medidas que podían adoptarse, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas por dicho Grupo.[66]

En lo que hace a la ***obediencia debida de órdenes superiores***, el Grupo de trabajo asevera categóricamente que: *"Todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que tratan de la desaparición forzada establecen claramente que ninguna orden ni instrucción de ninguna autoridad pública, ya sea esta civil, militar o de otra índole, podrá ser invocada para justificar una desaparición forzada..."*[67]

Sobre la ***prescripción***, el Grupo observa mejores prácticas en los Estados en los que las desapariciones no están sujetas a esa figura y, precisa que:

> *"La indicación de que los casos de desaparición forzada no prescriben constituye una garantía contra la impunidad. Así debe establecerse siempre cuando el delito se comete en un contexto en el que constituye un crimen de lesa humanidad. En otros casos, si los Estados deciden establecer plazos de prescripción, debe disponerse claramente en la legislación nacional que esos plazos no empezarán a contar hasta que se esclarezca la suerte o el paradero de las víctimas."*[68]

En lo correspondiente al ***tribunal competente para enjuiciar las desapariciones forzadas***, indica que las personas responsables por la comisión de tales delitos, solamente podrán ser juzgadas por jurisdicciones de

[66] Ibídem, p. 14, párrafos 48 y 49.
[67] Ibídem, p. 15, párrafo 52.
[68] Ibídem, p. 16, párrafo 55.

derecho común (tribunales ordinarios) y jamás por ninguna jurisdicción especial (sobre todo la militar u organismo o tribunales administrativos).[69]

Con relación a los ***principios de jurisdicción universal y de aut dedere aut judicare***, el Grupo señala:

> *"Como garantía fundamental contra la impunidad, las legislaciones internas deben contemplar la aplicación, en los casos de desaparición forzada, del principio de jurisdicción universal, además del de aut dedere aut judicare, o en combinación con él. Ello permite a los Estados llevar ante la justicia a todas las personas presuntamente responsables de desapariciones forzadas que se encuentren en su territorio."*[70]

El informe del que se hace mención en el presente apartado, cierra con una serie de conclusiones[71] que son esbozadas a guisa de recomendaciones generales para los Estados, a saber:

> *"a) Ratificar e incorporar a la legislación nacional los instrumentos internacionales pertinentes, en particular el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;*
>
> *b) Introducir en la legislación nacional una figura delictiva separada de desaparición forzada lo suficientemente amplia para que abarque las desapariciones forzadas cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, pero también los actos aislados;*

[69] Ibídem, p. 18, párrafos 57 y 58.
[70] Ibídem, p. 18, párrafo 59.
[71] Ibídem, pp. 19 y 20.

*c) Introducir en la definición del delito como mínimo los tres elementos acumulativos siguientes: i) privación de libertad de la víctima; ii) participación de agentes gubernamentales, por lo menos indirectamente por aquiescencia; y iii) negativa a revelar la suerte y el paradero de la persona desaparecida;*

*d) Incluir el elemento de "sustracción de la víctima de la protección de la ley" como consecuencia de los otros elementos constitutivos;*

*e) Definir el delito de desaparición forzada como delito permanente;*

*f) Establecer en relación con las desapariciones forzadas un amplio régimen de responsabilidad individual, que abarque la responsabilidad superior;*

*g) Establecer sanciones apropiadas que tengan en cuenta la extrema gravedad del delito, se defina este o no como crimen de lesa humanidad;*

*h) Establecer las circunstancias atenuantes o agravantes pertinentes, así como las sanciones accesorias apropiadas;*

*i) Excluir de la aplicación de leyes de amnistía o medidas similares el delito de desaparición forzada, se defina este o no como crimen de lesa humanidad;*

*j) Disponer que no pueda invocarse ninguna orden ni instrucción para justificar una desaparición forzada, se defina esta o no como crimen de lesa humanidad;*

*k) Disponer la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, se defina este o no como crimen de lesa humanidad;*

*l) Disponer que la desaparición forzada no puede considerarse nunca como delito cometido en acto de servicio, y que los tribunales militares y otros tribunales especiales carecen de jurisdicción en casos de desaparición forzada;*

*m) Establecer los principios de jurisdicción universal y de aut dedere aut judicare en relación con el delito de desaparición forzada, se defina este o no como crimen de lesa humanidad."*

Como puede advertirse, el proyecto de Ley remitido por la Colegisladora comprende aquellos puntos respecto a los que se hace referencia en el Informe del que se acaba de dar cuenta.

En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras coinciden en que el Proyecto de Ley, y de reformas, contenido en el Decreto remitido por la Colegisladora contiene disposiciones de avanzada en materia de derechos humanos, mismas que han sido elaboradas tomando en cuenta la experiencia nacional como la internacional, las previsiones de los diversos tratados internacionales existentes en la materia, las observaciones y recomendaciones vertidas a nuestro país -vía los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos-, así como los precedentes obligatorios de la Corte de San José. Igualmente, el proyecto regula una política nacional estructurada que no sólo se limitará a la adopción de una legislación, sino que establecerá claramente diversas acciones, instrumentos, obligaciones, mecanismos, medidas presupuestarias, reglamentarias y administrativas, a cargo de todos los órdenes de gobierno.

En ese sentido, el proyecto de Ley que se propone expedir se alinea a las previsiones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual permite disponer de un proyecto normativo que aspira a cubrir las lagunas jurídicas existentes hoy en

día y maximizar los derechos de las víctimas y sus familiares, así como prevenir, combatir y castigar los delitos contemplados en el proyecto de Ley.

Igualmente, en atención al mandato impuesto al Poder Legislativo Federal en el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, y atendiendo a que los delitos de desaparición constituyen violaciones graves a los derechos humanos, es necesario regular con precisión tales ilícitos. Lo anterior, en consonancia con el precepto 1o, párrafo tercero de la Ley Suprema, mismo que nos impone el deber, a todas las autoridades, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, en los términos previstos por la ley.

Por ello y bajo las consideraciones antes indicadas, las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, comparten el contenido de la Minuta recibida en todos sus términos y, atendiendo a lo indicado en los diversos párrafos precedentes, someten a consideración de esta Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, para los efectos del Apartado A del artículo 72 constitucional, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD.**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

# LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

## TÍTULO PRIMERO
## DISPOSICIONES GENERALES

### CAPÍTULO PRIMERO

**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 2.** La presente Ley tiene por objeto:

**I.** Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley;

**II.** Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

**III.** Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**IV.** Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas;

**V.** Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;

**VI.** Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y

**VII.** Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

**Artículo 3.** La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro persona.

**Artículo 4.** Para efectos de esta Ley se entiende por:

**I. Banco Nacional de Datos Forenses:** a la herramienta del Sistema Nacional que concentra las bases de datos de las Entidades Federativas y de la Federación; así como, otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**II. Comisión Ejecutiva:** a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

**III. Comisiones de Víctimas:** a las Comisiones de Atención a Víctimas de las Entidades Federativas;

**IV. Comisión Nacional de Búsqueda:** a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

**V. Comisiones Locales de Búsqueda:** a las Comisiones de Búsqueda de Personas en las Entidades Federativas;

**VI. Consejo Ciudadano:** al Consejo Nacional Ciudadano, órgano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**VII. Declaración Especial de Ausencia:** a la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición;

**VIII. Entidades Federativas:** a las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**IX. Familiares:** a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la Persona Desaparecida o No Localizada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; él o la cónyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas análogas.

Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida o No Localizada, que así lo acrediten ante las autoridades competentes;

**X. Fiscalías Especializadas:** a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales cuyo objeto es la investigación y persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares;

**XI. Grupo de Búsqueda:** al grupo de personas especializadas en materia de búsqueda de personas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que realizarán la búsqueda de campo, entre otras;

**XII. Instituciones de Seguridad Pública:** a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, y otras autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encargadas o que realicen funciones de Seguridad Pública en los órdenes federal, local y municipal;

**XIII. Mecanismo de Apoyo Exterior:** el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación es el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño, en el ámbito de su competencia, a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones del ordenamiento jurídico mexicano establecidas en esta Ley, coadyuvar en la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda y en la investigación y persecución de los delitos que realicen las Fiscalías Especializadas en coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, así como para garantizar los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las víctimas y ofendidos del delito. El Mecanismo de Apoyo Exterior funciona a través del personal que labora en los Consulados, Embajadas y Agregadurías de México en otros países;

**XIV. Noticia:** a la comunicación hecha por cualquier medio, distinto al reporte o la denuncia, mediante la cual, la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

**XV. Persona Desaparecida:** a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

**XVI. Persona No Localizada:** a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito;

**XVII. Protocolo Homologado de Búsqueda:** al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas;

**XVIII. Protocolo Homologado de Investigación:** al Protocolo Homologado para la investigación de los delitos materia de esta Ley;

**XIX. Procuraduría:** a la Procuraduría General de la República;

**XX. Procuradurías Locales:** a las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas;

**XXI. Registro Nacional:** al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra la información de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la Federación como de las Entidades Federativas;

**XXII. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas:** al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas que concentra la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen;

**XXIII. Registro Nacional de Fosas:** al Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen;

**XXIV. Reglamento:** al Reglamento de esta Ley;

**XXV. Reporte:** a la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

**XXVI. Sistema Nacional:** al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**XXVII. Tratados:** a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y

**XXVIII. Víctimas:** aquellas a las que hace referencia la Ley General de Víctimas.

**Artículo 5.** Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley son diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

**I. Efectividad y exhaustividad:** todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación. Bajo ninguna circunstancia se podrán invocar condiciones particulares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o la actividad que realizaba previa o al momento de la desaparición para no ser buscada de manera inmediata;

**II. Debida diligencia:** todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos. En toda investigación y proceso penal que se inicie por los delitos previstos en esta Ley, las autoridades deben garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo;

**III. Enfoque diferencial y especializado:** al aplicar esta Ley, las autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las Víctimas. De igual manera, tratándose de las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos materia de esta Ley;

**IV. Enfoque humanitario:** atención centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los Familiares;

**V. Gratuidad:** todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, no tendrán costo alguno para las personas;

**VI. Igualdad y no discriminación:** para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos y garantías de las Víctimas a los que se refiere esta Ley, las actuaciones y diligencias deben ser conducidas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos o la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial debe fundarse en razones de enfoque diferencial y especializado;

**VII. Interés superior de la niñez:** las autoridades deberán proteger primordialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar que cuando tengan la calidad de Víctimas o testigos, la protección que se les brinde sea armónica e integral, atendiendo a su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

**VIII. Máxima protección:** la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno, la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las Víctimas a que se refiere esta Ley;

**IX. No revictimización:** la obligación de aplicar las medidas necesarias y justificadas de conformidad con los principios en materia de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados, para evitar que la Persona Desaparecida o No Localizada y las Víctimas a que se refiere esta Ley, sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoseles a sufrir un nuevo daño;

**X. Participación conjunta:** las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, permitirán la participación directa de los Familiares, en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, en las tareas de búsqueda, incluido el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares, como en políticas públicas y prácticas institucionales;

**XI. Perspectiva de género:** en todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, así como para investigar y juzgar los delitos previstos en esta Ley, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad;

**XII. Presunción de vida:** en las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deben presumir que la Persona Desaparecida o No Localizada está con vida, y

**XIII. Verdad:** el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos constitutivos de los delitos previstos en esta Ley, en tanto que el objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la protección de las Víctimas, el castigo de las personas responsables y la reparación de los daños causados, en términos de los artículos 1o. y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 6.** En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y las legislaciones civiles aplicables, así como la Ley General de Víctimas y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DISPOSICIONES GENERALES PARA PERSONAS DESAPARECIDAS MENORES DE 18 AÑOS

**Artículo 7.** Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda.

**Artículo 8.** Las autoridades que administran las herramientas del Sistema Nacional deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, y deben establecer la información segmentada por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación.

La divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de telecomunicación sobre la información de una persona menor de 18 años de edad desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones aplicables.

**Artículo 9.** Todas las acciones que se emprendan para la investigación y búsqueda de personas menores de dieciocho años de edad desparecidas, garantizarán un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos de la niñez, que tome en cuenta las características particulares, incluyendo su identidad y nacionalidad.

**Artículo 10.** Las autoridades de búsqueda e investigación en el ámbito de sus competencias se coordinarán con las Procuradurías de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para efectos de salvaguardar sus derechos, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 11.** En los casos de niñas, niños o adolescentes, las medidas de reparación integral, así como de atención terapéutica y acompañamiento, deberán realizarse por personal especializado en derechos de la niñez y adolescencia y de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 12.** Para el diseño de las acciones, herramientas y el protocolo especializado para la búsqueda e investigación de niñas, niños y adolescentes, el Sistema Nacional tomará en cuenta la opinión de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

## TÍTULO SEGUNDO
## DE LOS DELITOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 13.** Los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.

En los casos de los delitos previstos en esta Ley no procederá el archivo temporal de la investigación, aun cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal y no aparece que se puedan practicar otras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público estará obligada en todo momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

**Artículo 14.** El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza.

**Artículo 15.** Se prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad que impidan la investigación, procesamiento o sanción y cualquier otra medida para determinar la verdad y obtener reparación plena de los delitos materia de esta Ley.

**Artículo 16.** A efectos de la extradición, la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares no serán considerados delitos de carácter político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este motivo.

**Artículo 17.** No constituyen causas de exclusión de los delitos establecidos en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Segundo de esta Ley, ni de responsabilidad en términos de lo previsto en las disposiciones aplicables, la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten a la comisión de estos delitos.

En ningún caso pueden invocarse circunstancias especiales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, suspensión de derechos y sus garantías, perturbación grave de la paz pública, como causa de justificación o inculpabilidad para cometer los delitos a que se refiere esta Ley.

El Estado está obligado a garantizar que cualquier persona que se rehúse a obedecer una orden para cometer el delito de desaparición forzada no sea sancionada o sea objeto de ninguna represalia.

**Artículo 18.** Para la imposición de una multa es aplicable el concepto días multa previsto en el Código Penal Federal.

**Artículo 19.** Los delitos previstos en esta Ley deben ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados conforme a las reglas de autoría, participación y concurso previstas en la legislación penal aplicable, y las reglas de acumulación de procesos previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 20.** La tentativa punible de los delitos previstos en esta Ley se sancionará en términos del artículo 63 del Código Penal Federal.



*..... CONTINÚA EN EL VOLUMEN III*

# VOLUMEN III

# CONTINUACIÓN DEL VOLUMEN II DE LA SESIÓN 14 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017



**Artículo 21.** Queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a una Desaparición Forzada de Personas o a una Desaparición cometida por Particulares en el Estado al que sería entregada.

**Artículo 22.** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos distintos a los previstos en esta Ley, el agente del Ministerio Público advierte la probable comisión de algún delito previsto en el presente ordenamiento, debe identificar y remitir copia de la investigación a la Fiscalía Especializada competente.

**Artículo 23.** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos previstos en esta Ley, la Fiscalía Especializada advierte la probable comisión de alguno o varios delitos distintos a los previstos en el presente ordenamiento, deberá remitir copia de la investigación a las autoridades ministeriales competentes, salvo en el caso de delitos conexos.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS

**Artículo 24.** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades federales cuando:

**I.** Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley;

**II.** Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación;

**III.** Exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado Internacional en la que se determine la responsabilidad u obligación del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley;

**IV.** El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo;

**V.** Durante la investigación se encuentren indicios que en la comisión del hecho participó una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada.

La víctima podrá pedir al Ministerio Público de la Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder de forma fundada y motivada.

**Artículo 25.** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades de las Entidades Federativas en los casos no previstos en el artículo anterior.

**Artículo 26.** La investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos previstos en esta Ley deberá ser competencia exclusiva de las autoridades federales o estatales del orden civil, aun cuando esté involucrado un servidor público.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

**Artículo 27.** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

**Artículo 28.** Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.

**Artículo 29.** Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.

**Artículo 30.** Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28.

Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.

**Artículo 31.** Se impondrá pena de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de veinticinco a treinta y cinco años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 32.** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando:

**I.** Durante o después de la desaparición, la Persona Desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito;

**II.** La Persona Desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor;

**III.** La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer el delito;

**IV.** La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para cometer el delito;

**V.** La persona haya sido desaparecida por su actividad como defensora de derechos humanos;

**VI.** La persona haya sido desaparecida en razón de su labor como periodista;

**VII.** La Persona Desaparecida sea integrante de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VIII.** El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, o

**IX.** Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

**Artículo 33.** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas, conforme lo siguiente:

**I.** Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en una mitad;

**II.** Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una tercera parte;

**III.** Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una cuarta parte, y

**IV.** Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una quinta parte.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LA DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES

**Artículo 34.** Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

**Artículo 35.** Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 36.** Las penas aplicables para los delitos establecidos en los artículos 34 y 35 de esta Ley pueden ser determinadas y modificadas conforme a las reglas previstas en los artículos 32 y 33 de esta Ley.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LOS DELITOS VINCULADOS CON LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

**Artículo 37.** A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

**Artículo 38.** Se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas o de la investigación de los delitos establecidos en los artículos 27, 28, 31, 34 y 35 de la Ley a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas.

**Artículo 39.** Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 40.** Se impondrá pena de tres a siete años de prisión a quien, conociendo el paradero o destino final de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecidos en los artículos 31 y 35 de la Ley, y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

**Artículo 41.** Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil días multa a quien falsifique, oculte o destruya documentos que prueben la verdadera identidad de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecidos en los artículos 31 y 35 de la Ley durante el periodo de ocultamiento, con conocimiento de dicha circunstancia.

Se aplicarán las mismas penas a quien, dolosamente, utilice los documentos falsificados de una niña o niño a que se refiere el párrafo anterior, con el conocimiento de dicha circunstancia.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**Artículo 42.** Los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

**Artículo 43.** Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerará grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes.

# TÍTULO TERCERO
# DEL SISTEMA NACIONAL

## CAPÍTULO PRIMERO
## DEL SISTEMA NACIONAL

**Artículo 44.** El Sistema Nacional tiene como objetivo diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley.

**Artículo 45.** El Sistema Nacional se integra por:

**I.** La persona titular de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

**II.** La persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

**III.** La persona titular de la Procuraduría General de la República;

**IV.** La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Ejecutiva;

**V.** La persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

**VI.** Tres personas del Consejo Ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo integran;

**VII.** La persona titular de la Policía Federal;

**VIII.** Las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, y

**IX.** La persona que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Las personas integrantes del Sistema Nacional deben nombrar a sus respectivos suplentes, los cuales deben contar con el nivel jerárquico inmediato inferior. Para el caso de las fracciones VI y IX, el suplente será designado por los propios órganos a los que se refieren las citadas fracciones. Las personas integrantes e invitados del Sistema Nacional no recibirán pago alguno por su participación en el mismo.

La persona que preside el Sistema Nacional podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de los órganos con autonomía constitucional, de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los municipios de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como organismos internacionales según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz pero sin voto.

Las instancias y las personas que integran el Sistema Nacional están obligadas, en el marco de sus competencias, a cumplir con las acciones que deriven del ejercicio de las atribuciones de dicho órgano.

**Artículo 46.** El Sistema Nacional sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes y sus resoluciones deben ser tomadas por mayoría de votos. El Presidente tiene voto dirimente en caso de empate.

**Artículo 47.** Las sesiones del Sistema Nacional deben celebrarse de manera ordinaria, por lo menos, cada seis meses por convocatoria del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, por instrucción de su Presidente, y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario a propuesta de un tercio de sus integrantes.

Las convocatorias deben realizarse por oficio o por cualquier medio electrónico que asegure y deje constancia de su recepción, con al menos cinco días hábiles a la fecha de celebración de la sesión correspondiente, y dos días hábiles de anticipación para las sesiones extraordinarias. En ambos casos debe acompañarse el orden del día correspondiente.

**Artículo 48.** El Sistema Nacional para el ejercicio de sus facultades contará con las siguientes herramientas:

**I.** El Registro Nacional;

**II.** El Banco Nacional de Datos Forenses;

**III.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas;

**IV.** El Registro Nacional de Fosas;

**V.** El Registro Administrativo de Detenciones;

**VI.** La Alerta Amber;

**VII.** El Protocolo Homologado de Búsqueda y los protocolos previstos en el artículo 73 de esta Ley, y

**VIII.** Otros registros necesarios para su operación en términos de lo que prevé esta Ley.

**Artículo 49.** El Sistema Nacional tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Expedir modelos de lineamientos que permitan la coordinación entre autoridades en materia de búsqueda de personas así como de investigación de los delitos previstos en esta Ley. La legislación de las Entidades Federativas deberá prever los mecanismos para incorporar a su sistema jurídico los modelos a que se refiere esta fracción;

**II.** Establecer, en coordinación con las autoridades federales y las Entidades Federativas, la integración y funcionamiento de un sistema único de información tecnológica e informática que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como para la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley;

**III.** Proponer acuerdos de colaboración entre sus integrantes y los del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el intercambio, sistematización y actualización de la información de seguridad pública que contribuyan a la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**IV.** Dar seguimiento y evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda;

**V.** Evaluar permanentemente las políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VI.** Generar mecanismos para favorecer que las capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas permitan la búsqueda eficiente y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VII.** Generar los mecanismos y acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones y requerimientos que hagan los integrantes del Sistema Nacional para el mejoramiento de políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VIII.** Emitir los modelos de instrumentos rectores para el funcionamiento y la coordinación con las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas;

**IX.** Evaluar el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones;

**X.** Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses;

**XI.** Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional de Fosas;

**XII.** Recomendar a las Procuradurías Locales el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda, así como la evaluación de las mismas;

**XIII.** Proporcionar la información que sea solicitada por el Consejo Ciudadano para el ejercicio de sus funciones;

**XIV.** Atender y dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas materia de esta Ley;

**XV.** Dictar los lineamientos que regulen la participación de los Familiares en las acciones de búsqueda;

**XVI.** Emitir el Protocolo Homologado de Búsqueda, y

**XVII.** Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA

**Artículo 50.** La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Nacional de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley.

Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 51.** La Comisión Nacional de Búsqueda está a cargo de una persona titular nombrada y removida por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Gobernación.

Para el nombramiento, la Secretaría de Gobernación realizará una consulta pública previa a los colectivos de Víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Para ser titular se requiere:

**I.** Ser ciudadana o ciudadano mexicano;

**II.** No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

**III.** Contar con título profesional;

**IV.** No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento;

**V.** Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, y

**VI.** Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.

En el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, debe garantizarse el respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación.

La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Las Entidades Federativas deben prever, como mínimo, los mismos requisitos que contempla el presente artículo para la selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda Local que corresponda.

**Artículo 52.** Para la consulta pública a la que se hace referencia en el artículo anterior, la Secretaría de Gobernación deberá observar, como mínimo, las siguientes bases:

**I.** Generar un mecanismo a través del cual la sociedad civil presente candidatos;

**II.** Publicar toda la información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados, y

**III.** Hacer público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.

**Artículo 53.** La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Emitir y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda, rector en la materia, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

**II.** Emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional y coordinar la operación del mismo, en términos de lo que establezca esta Ley y las leyes aplicables;

**III.** Atender y formular solicitudes a las Instituciones de Seguridad Pública, previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de cumplir con su objeto;

**IV.** Solicitar el acompañamiento de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno, así como del personal al que se refiere el artículo 67 de esta Ley, cuando sea necesario que el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda realice trabajos de campo;

**V.** Integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de esta Ley;.

**VI.** Presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, los informes sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, en coordinación con las autoridades competentes;

**VII.** Solicitar informes a las Comisiones Locales sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda;

**VIII.** Emitir los protocolos rectores que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

**IX.** Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda;

**X.** Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XI.** Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada para que, de ser el caso, realicen la Denuncia correspondiente;

**XII.** Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con las Comisiones Locales, realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo;

**XIII.** Acceder sin restricciones a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, de conformidad con las disposiciones aplicables;

**XIV.** Emitir los lineamientos para acceder a la información a que se refiere la fracción anterior;

**XV.** Solicitar a la Policía Federal que se realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XVI.** Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XVII.** Mantener comunicación con autoridades estatales y municipales, y establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación del Consejo;

**XVIII.** Integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda, así como analizar el fenómeno de desaparición, incluso a nivel regional;

**XIX.** Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de intercambiar experiencias y buscar las mejores prácticas para la localización de personas;

**XX.** Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que corresponda sobre la existencia de información relevante y elementos que sean útiles para la investigación de los delitos materia de ésta y otras leyes, de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda;

**XXI.** Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos;

**XXII.** Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con la normativa aplicable;

**XXIII.** Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información obtenida en la investigación de los delitos materia de esta Ley;

**XXIV.** Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinarse en la ejecución de las acciones de búsqueda y localización de personas migrantes;

**XXV.** Evaluar las políticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y Entidades Federativas;

**XXVI.** Conocer y opinar sobre las políticas y estrategias para la identificación de personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas comunes y clandestinas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y Entidades Federativas;

**XXVII.** Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional, así como de sus atribuciones;

**XVIII.** Proponer la celebración de convenios con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para la expedición de visas humanitarias a familiares de personas extranjeras desaparecidas en territorio mexicano;

**XXIX.** Disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro medio de comunicación de acceso gratuito para proporcionar información, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXX.** Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXXI.** Establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de personas vinculadas con movimientos políticos.

En caso de que durante las acciones de búsqueda se encuentre algún indicio de la probable comisión de un delito, se dará aviso inmediato a la fiscalía correspondiente;

**XXXII.** Establecer medidas extraordinarias y emitir alertas cuando en una Entidad Federativa o municipio aumente significativamente el número de desapariciones, que serán atendidas por las autoridades competentes a quienes vayan dirigidas;

**XXXIII.** Diseñar, en colaboración con las Comisiones Locales que correspondan, programas regionales de búsqueda de personas;

**XXXIV.** Proponer celebrar los convenios que se requieran con las autoridades competentes, nacionales y extranjeras, para la operación de los mecanismos de búsqueda transnacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXXV.** Recibir de las embajadas, consulados y agregadurías las Denuncias o Reportes de personas migrantes desaparecidas o no localizadas en territorio mexicano. Así como, establecer los mecanismos de comunicación e intercambio de información más adecuados que garanticen la efectividad en la búsqueda de las personas migrantes en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Mecanismo de Apoyo Exterior;

**XXXVI.** Dar seguimiento y, en su caso, atender las recomendaciones y sentencias de órganos internacionales de derechos humanos en los temas relacionados con la búsqueda de personas;

**XXXVII.** Dar seguimiento y atender a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas relacionados con las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda;

**XXXVIII.** Recibir la información que aporten los particulares en los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y remitir a la Comisión de búsqueda correspondiente y, en su caso, a la Fiscalía Especializada competente;

**XXXIX.** Proponer al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

**XL.** Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sobre las acciones u omisiones que puedan constituir una violación a esta Ley;

**XLI.** Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en términos que prevean las leyes;

**XLII.** Solicitar a la Comisión Ejecutiva y a las Comisiones de Víctimas que implementen los mecanismos necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los Familiares de las Personas Desaparecidas por la presunta comisión de los delitos materia de esta Ley, de conformidad con la ley en la materia;

**XLIII.** Recomendar a las autoridades que integran el Sistema Nacional el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda;

**XLIV.** Incorporar a los procesos de búsqueda relacionados con Personas Desaparecidas o No Localizadas a expertos independientes o peritos internacionales, cuando no cuente con personal nacional capacitado en la materia y lo considere pertinente o así lo soliciten los Familiares. Dicha incorporación se realizará de conformidad con las leyes;

**XLV.** Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda;

**XLVI.** Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer la existencia de características y patrones de desaparición, de conformidad con el principio de enfoque diferenciado;

**XLVII.** Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información de hechos y datos sobre la desaparición de personas, así como de los delitos en materia de esta Ley;

**XLVIII.** Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las acciones de búsqueda;

**XLIX.** Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar la información contenida en las bases de datos y registros que establece esta Ley, así como con la información contenida en otros sistemas que puedan contribuir en la búsqueda, localización e identificación de una Persona Desaparecida o No Localizada;

**L.** Emitir conforme a los más altos estándares internacionales, los criterios de capacitación, certificación y evaluación del personal que participe en las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**LI.** Asesorar a las Comisiones Locales de Búsqueda;

**LII.** Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en todo el territorio nacional, independientemente de aquellas que se hayan iniciado localmente;

**LIII.** Promover, en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo y otras disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en peligro, y

**LIV.** Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento.

La información que la Comisión Nacional de Búsqueda genere con motivo del ejercicio de sus facultades estará sujeta a las reglas de acceso a la información previstas en la legislación en la materia.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Nacional de Búsqueda contará con las áreas necesarias en términos de lo establecido en el Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 54.** En la integración y operación de los grupos a que se refiere el artículo 53, fracción XVIII, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Determinar las autoridades que deben integrar los grupos, en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno;

**II.** Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo;

**III.** Solicitar al área de análisis de contexto informes para el cumplimiento de sus facultades, y

**IV.** Disolver los grupos de trabajo cuando hayan cumplido su finalidad.

**Artículo 55.** Los servidores públicos integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda deben estar certificados y especializados en materia de búsqueda, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional.

**Artículo 56.** Los informes previstos en el artículo 53, fracción V, deben contener, al menos, lo siguiente:

**I.** Avance en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Búsqueda con información del número de personas reportadas como desaparecidas Víctimas de los delitos materia de esta Ley y no localizadas; número de personas localizadas, con vida y sin vida; cadáveres o restos humanos que se han localizado e identificado; circunstancias de modo, tiempo y lugar de la localización;

**II.** Resultados de la gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Sistema Nacional;

**III.** Avance en la actualización y adecuado cumplimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda a que se refiere el artículo 99 de esta Ley;

**IV.** Resultado de la evaluación sobre el sistema al que se refiere el artículo 49, fracción II, de esta Ley, y

**V.** Las demás que señale el Reglamento.

**Artículo 57.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizará los informes sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en la ejecución de los programas previstos en esta Ley, a fin de adoptar en coordinación con el Sistema Nacional todas aquellas medidas y acciones que se requieran para su cumplimiento.

**Artículo 58.** La Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, para realizar sus actividades, deben contar como mínimo con:

**I.** Grupo especializado de búsqueda, cuyas funciones se encuentran en el artículo 66 de esta Ley;

**II.** Área de Análisis de Contexto, la cual desempeñará, además de las funciones que esta Ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se refieren las fracciones XLV, XLVI, XLVII y XLVIII del artículo 53;

**III.** Área de Gestión y Procesamiento de Información, la cual desempeñará, además de las funciones que esta Ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se refiere la fracción XLIX del artículo 53, y

**IV.** La estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

## CAPÍTULO TERCERO
## DEL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO

**Artículo 59.** El Consejo Ciudadano es un órgano ciudadano de consulta del Sistema Nacional, en materia de búsqueda de personas.

**Artículo 60.** El Consejo Ciudadano está integrado por:

**I.** Cinco Familiares;

**II.** Cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley. Se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense, y

**III.** Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados por el Senado de la República previa consulta pública con las organizaciones de Familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de Víctimas y expertos en las materias de esta Ley.

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.

**Artículo 61.** Los integrantes del Consejo Ciudadano ejercerán su función en forma honorífica, y no deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño.

Los integrantes del Consejo Ciudadano deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por mayoría de votos, quien durará en su encargo un año.

El Consejo Ciudadano emitirá sus reglas de funcionamiento en las que determinará los requisitos y procedimientos para nombrar a su Secretario Técnico, la convocatoria a sus sesiones bimestrales y contenidos del orden del día de cada sesión.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Ciudadano deberán ser comunicadas a los integrantes del Sistema Nacional, y podrán ser consideradas para la toma de decisiones. El integrante del Sistema Nacional que determine no adoptar las recomendaciones que formule el Consejo Ciudadano, deberá explicar las razones para ello.

La Secretaría de Gobernación proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.

**Artículo 62.** El Consejo Ciudadano tiene las funciones siguientes:

**I.** Proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda acciones para acelerar o profundizar sus acciones, en el ámbito de sus competencias;

**II.** Proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema Nacional para ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y forenses;

**III.** Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y herramientas materia de esta Ley;

**IV.** Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas;

**V.** Solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes;

**VI.** Acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con las que cuenta el Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones;

**VII.** Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;

**VIII.** Dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se le reconocerá interés legítimo dentro de las investigaciones para la determinación de responsabilidades de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**IX.** Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda;

**X.** Elaborar, aprobar y modificar la Guía de procedimientos del Comité, y

**XI.** Las demás que señale el Reglamento.

Las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda.

**Artículo 63.** Las decisiones que el Consejo Ciudadano adopte son públicas, en apego a la legislación de transparencia y protección de datos personales.

**Artículo 64.** El Consejo Ciudadano integrará de entre sus miembros un Comité para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá las siguientes atribuciones:

**I.** Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión Nacional;

**II.** Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la Comisión Nacional;

**III.** Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas;

**IV.** Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, a la participación directa de los Familiares en el ejercicio de sus atribuciones, y

**V.** Las demás que determine el Consejo Nacional Ciudadano, en el marco de sus atribuciones.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA

**Artículo 65.** La Comisión Nacional de Búsqueda contará con Grupos de Búsqueda integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas.

Con independencia de lo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda podrá auxiliarse por personas especializadas en búsqueda de personas, así como por cuerpos policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 66.** Los Grupos de Búsqueda, para el adecuado cumplimiento de sus acciones, tienen las siguientes atribuciones:

**I.** Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo Homologado de Búsqueda y otros existentes.

**II.** Solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de investigación específicos sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los hechos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades con que cuentan las Comisiones de Búsqueda para realizar acciones relacionadas con la búsqueda de personas previstas en esta ley;

**III.** Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas y No Localizadas y salvaguarde sus derechos humanos, y

**IV.** Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas.

**Artículo 67.** Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho personal debe atender las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, según corresponda.

El personal al que se refiere el párrafo anterior, además de cumplir con la certificación respectiva, debe acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comisión Nacional.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS

**Artículo 68.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas.

Las Fiscalías Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con las Fiscalías Especializadas para el cumplimiento de la Ley.

**Artículo 69.** Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:

**I.** Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de la institución respectiva, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

**II.** Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y

**III.** Acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, según corresponda.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar, conforme a los más altos estándares internacionales, a los servidores públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a las Víctimas, sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas, aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros. De igual forma, podrán participar con las autoridades competentes, en la capacitación de los servidores públicos conforme a los lineamientos que sobre la materia emita el Sistema Nacional, en términos de esta Ley.

**Artículo 70.** La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

**I.** Recibir las Denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de esta Ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente;

**II.** Mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme al Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;

**III.** Dar aviso de manera inmediata, a través del Registro Nacional, a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos materia de esta Ley, a fin de que se inicien las acciones correspondientes a la búsqueda; así como compartir la información relevante, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;

**IV.** Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de compartir información que pudiera contribuir en las acciones para la búsqueda y localización de personas, en términos de las disposiciones aplicables;

**V.** Informar de manera inmediata a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Comisión Local de Búsqueda, según sea el caso, la localización o identificación de una Persona;

**VI.** Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes para recibir, recabar y proporcionar información sobre las acciones de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley cometidos en contra de personas migrantes;

**VII.** Solicitar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados, en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales;

**VIII.** Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables;

**IX.** Realizar y comunicar sin dilación todos aquellos actos que requieran de autorización judicial que previamente hayan sido solicitados por la Comisión que corresponda para la búsqueda y localización de una Persona Desaparecida;

**X.** Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos de los delitos materia de esta Ley, cuando de la información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más Entidades Federativas o se trata de una persona extrajera en situación de migración, independientemente de su situación migratoria;

**XI.** Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las tareas de investigación en campo;

**XII.** Recabar la información necesaria para la persecución e investigación de los delitos previstos en esta u otras leyes;

**XIII.** Remitir la investigación y las actuaciones realizadas a las autoridades competentes cuando advierta la comisión de uno o varios delitos diferentes a los previstos en esta Ley;

**XIV.** Solicitar al Juez de Control competente las medidas cautelares que sean necesarias, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales;

**XV.** Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas, así como a las instituciones y organizaciones de derechos humanos y de protección civil, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**XVI.** Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de los servidores públicos especializados en la materia;

**XVII.** Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas, en coordinación con las instituciones correspondientes, para poder hacer la entrega de cadáveres o restos humanos, conforme a lo señalado por el Protocolo Homologado de Investigación y demás normas aplicables;

**XVIII.** Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de las exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas;

**XIX.** Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes el traslado de las personas internas a otros centros de reclusión salvaguardando sus derechos humanos, siempre que esta medida favorezca la búsqueda o localización de las Personas Desaparecidas o a la investigación de los delitos materia de esta Ley, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal;

**XX.** Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los delitos previstos en esta Ley, incluido brindar información periódicamente a los Familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

**XXI.** Celebrar convenios de colaboración o cooperación, para el óptimo cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con la presente Ley;

**XXII.** Brindar la información que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas le soliciten para mejorar la atención a las Víctimas, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;

**XXIII.** Brindar la información que el Consejo Ciudadano le solicite para el ejercicio de sus funciones, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;

**XXIV.** Proporcionar asistencia técnica a las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas que lo soliciten, y

**XXV.** Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 71.** Las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas deben contar al menos, con las características y atribuciones previstas en el artículo anterior.

Las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas deben remitir inmediatamente a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría los expedientes de los que conozcan cuando se actualicen los supuestos previstos en el artículo 24 de la presente Ley, o iniciar inmediatamente la carpeta de investigación, cuando el asunto no esté contemplado expresamente como competencia de la Federación.

**Artículo 72.** El servidor público que sea señalado como imputado por el delito de desaparición forzada de personas, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las acciones de búsqueda o las investigaciones, podrá ser sujeto de medidas cautelares como la suspensión temporal de su encargo, entre otras, por la autoridad jurisdiccional competente, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, el superior jerárquico puede adoptar las medidas administrativas y adicionales necesarias para impedir que el servidor público interfiera con las investigaciones.

**Artículo 73.** Las Fiscalías Especializadas deberán generar criterios y metodología específica para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas. En el caso de las desapariciones forzadas por motivos políticos de décadas pasadas, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y esta Ley, las Fiscalías Especializadas deberán emitir criterios y metodología específicos que deberán permitir realizar, al menos, lo siguiente:

**A)** Los procedimientos de búsqueda permanente que se lleven a cabo para buscar personas en cualquier lugar donde se presuma pudieran estar privadas de libertad como son centros penitenciarios, centros clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud y cualquier otro lugar en donde se pueda presumir pueda estar la persona desaparecida;

**B)** Cuando se sospeche que la víctima ha sido privada de la vida, realizar las diligencias pertinentes para la exhumación de los restos en los lugares que se presume pudieran estar, de acuerdo a los estándares internacionales, siendo derecho de los Familiares solicitar la participación de peritos especializados independientes, en términos de las disposiciones legales aplicables. En la generación de los criterios y metodología específicos, se tomarán en cuenta las sentencias y resoluciones nacionales e internacionales en materia de búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada.

**Artículo 74.** En el supuesto previsto en el artículo 66, la Fiscalía Especializada de la Procuraduría debe continuar sin interrupción la investigación de los delitos previstos en esta Ley, en términos de lo que establezca el Protocolo Homologado de Investigación y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 75.** Las autoridades de todos los órdenes de gobierno están obligadas a proporcionar, en el ámbito de su competencia, el auxilio e información que las Fiscalías Especializadas les soliciten para la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 76.** La Procuraduría celebrará acuerdos interinstitucionales con autoridades e instituciones para coordinar las acciones de investigación de mexicanos en el extranjero y migrantes extranjeros en el país.

**Artículo 77.** Las personas físicas o jurídicas que cuenten con información que pueda contribuir a la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, están obligadas a proporcionarla a las Fiscalías Especializadas directamente, a través del número telefónico previsto en esta Ley o cualquier otro medio, en términos de la normativa aplicable.

**Artículo 78.** Las Fiscalías Especializadas no pueden condicionar la recepción de la información a que se refiere el párrafo anterior al cumplimiento de formalidad alguna.

## CAPÍTULO SEXTO
## DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

### SECCIÓN PRIMERA
### DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA

**Artículo 79.** La búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados.

La búsqueda a que se refiere la presente Ley se realizará de forma conjunta, coordinada y simultánea por la Comisión Nacional y las Comisiones Locales.

Los mecanismos de búsqueda deberán agotarse totalmente hasta que se determine la suerte o paradero de la persona. La Comisión Nacional de Búsqueda garantizará que los mecanismos se apliquen conforme a las circunstancias propias de cada caso, de conformidad con esta Ley y el Protocolo Homologado de Búsqueda.

**Artículo 80.** Cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una Persona Desaparecida o No Localizada mediante:

**I.** Noticia;

**II.** Reporte, o

**III.** Denuncia.

La Noticia, el Reporte o la Denuncia pueden realizarse en forma anónima.

Tratándose de Denuncia, no será necesaria su ratificación. Tanto la búsqueda como la investigación se llevarán a cabo sin dilación.

**Artículo 81.** El Reporte puede realizarse las veinticuatro horas del día, todos los días del año, a través de cualquiera de los siguientes medios:

**I.** Telefónico, a través del número único nacional habilitado para tal efecto;

**II.** Medios Digitales;

**III.** Presencial, ante la Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda y el Ministerio Público;

**IV.** Tratándose de personas que no residen en el territorio nacional, a través de las oficinas consulares o embajadas de México en el extranjero, las cuales deberán remitir sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría y a la Fiscalía Especializada que corresponda, o

**V.** El Sistema Nacional, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, puede establecer medios adicionales a los previstos en este artículo para recibir Reportes.

Cuando la distancia o los medios de comunicación no permitan realizar el Reporte en términos de las fracciones anteriores, este puede realizarse ante la policía o la autoridad municipal que el Ayuntamiento designe para tal efecto y que cuente con la capacitación para aplicar el protocolo de búsqueda correspondiente.

En el caso de Reportes realizados en términos de la fracción I de este artículo, la autoridad que reciba el reporte deberá proporcionar el folio único de búsqueda a la persona que lo realizó. En el caso de la fracción III, quien reciba el Reporte deberá entregar a la persona que lo realizó constancia por escrito en el que constará el folio único de búsqueda.

**Artículo 82.** La presentación de Denuncias se sujetará a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 83.** Cuando se trate de una Noticia, las autoridades que no pertenezcan a la Comisión Nacional o a las Comisiones Locales y que tengan conocimiento de ésta, deben:

**a)** Recabar los datos mínimos que se desprendan de la Noticia, como se señala en el artículo 85, y

**b)** Transmitir la información de manera inmediata a la Comisión correspondiente.

**Artículo 84.** Las oficinas consulares de México deben recibir las solicitudes de búsqueda de los Familiares en México y remitirán sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional.

Cuando la búsqueda requiera de diligencias en otro país, bien sea el de origen, el de tránsito o el de llegada de la persona migrante, se deberá activar el Mecanismo de Apoyo Exterior a fin de garantizar que la información y elementos probatorios que sean necesarios puedan ser tramitados de forma inmediata y efectiva a lo largo del proceso de búsqueda.

**Artículo 85.** La autoridad distinta a la Comisión Nacional de Búsqueda que reciba el Reporte debe recabar por lo menos, la información siguiente:

**I.** El nombre, la edad y demás datos generales de la persona que lo presenta, salvo que se trate de Noticia o Reporte anónimo;

**II.** La ubicación desde la cual se realiza el Reporte, Denuncia o Noticia;

**III.** El número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con la persona, salvo que se trate de Noticia o Reporte anónimo;

**IV.** La persona que se reporta como desaparecida o No Localizada y, en su caso, sus características físicas o cualquier otro dato que permita su identificación y localización;

**V.** La narración pormenorizada de los hechos ocurridos, incluyendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar;

**VI.** La mención de las personas probablemente involucradas, con el señalamiento de todos los datos que puedan conducir a su identificación, incluida su media filiación, y

**VII.** Cualquier otra información, documentos o elementos que faciliten la búsqueda de las Personas Desaparecidas o No Localizadas y la investigación de los hechos.

Si la persona que realiza el Reporte o Denuncia no otorga la información señalada en este artículo, la instancia que la recabe debe asentar las razones de esa imposibilidad. La objeción de señalar datos por temor o imposibilidad de aportarlos por parte de quien haga la Denuncia o Reporte, no será obstáculo para el inicio de la búsqueda inmediata por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La autoridad que recabe la información, documentos y elementos a que se refiere el presente artículo deberá asentar su nombre, cargo y dependencia gubernamental a la que se encuentre adscrito al momento de recibir el

Reporte o Denuncia. La autoridad estará obligada a entregar una copia del Reporte o Denuncia a la persona que haya acudido a realizarla.

**Artículo 86.** La autoridad que recabe la Denuncia, Reporte o Noticia debe transmitirlo inmediatamente, a través de cualquier medio tecnológico o de telecomunicación, a la comisión que corresponda en términos de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, se encuentra obligada a aplicar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización.

Las autoridades que reciban la Denuncia, el Reporte o Noticia deberán implementar, inmediatamente, las acciones de búsqueda que les correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo correspondiente.

El incumplimiento por parte de la autoridad obligada a la transmisión inmediata será sancionado de conformidad con la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

**Artículo 87.** Una vez que la Comisión Nacional o la Comisión Local que corresponda reciba, en términos del artículo anterior, un Reporte o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada, debe ingresar de inmediato la información correspondiente al Registro Nacional y generar un folio único de búsqueda.

El folio único de búsqueda debe contener como mínimo:

**a)** La información sobre la Persona Desaparecida o No Localizada a que hace referencia el artículo 85 de la Ley, y

**b)** El nombre del servidor público de la Comisión o autoridad que recibió la Noticia, Reporte o Denuncia.

La Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda deben actualizar constantemente el expediente de búsqueda, para lo cual pueden solicitar, y deben proporcionar, información a los Familiares en los términos previstos en las disposiciones legales aplicables. Cuando la Persona Desaparecida o No Localizada sea de una nacionalidad distinta a la mexicana, las autoridades involucradas en la búsqueda de dicha persona deben proveer información a los Familiares que se encuentren en el exterior, a través de las autoridades consulares correspondientes o de la persona que hubieren designado para tales efectos.

Los Familiares y sus representantes tienen acceso de manera íntegra al expediente de búsqueda de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 88.** En el caso de la presentación de una Denuncia, el agente del Ministerio Público que la reciba debe proceder sin dilación a aplicar el Protocolo Homologado de Investigación y remitir la información a la Fiscalía Especializada competente, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 89.** Cuando la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente tenga Noticia o Reporte de una Persona Desaparecida o No Localizada, iniciará la búsqueda de inmediato.

Asimismo, informará sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando considere que la desaparición de la persona se debe a la comisión de un delito.

Para establecer la presunción de un delito se atenderá a los siguientes criterios:

**I.** Cuando la persona de la que se desconoce su paradero es menor de 18 años de edad;

**II.** Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito;

**III.** Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito;

**IV.** Cuando, aun sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener Noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona, y

**V.** Cuando antes del plazo establecido en el inciso anterior aparezcan indicios o elementos que hagan suponer la probable comisión de un delito.

En todos los casos, la Unidad de Gestión podrá solicitar constituirse como coadyuvante en los procesos que se sigan por los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares.

**Artículo 90.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe instrumentar acciones de búsqueda inmediatamente, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual incluirá, entre otros, el cruce de la información ingresada al Registro Nacional con los registros o bases de datos a que se refiere el artículo 94 de esta Ley.

Asimismo, al momento de iniciar la búsqueda, debe informar a los Familiares sobre la posibilidad de canalizarlos a la autoridad de atención a Víctimas que corresponda, de conformidad con la legislación en materia de Víctimas.

**Artículo 91.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe solicitar a los Familiares, preferentemente a través del cuestionario establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda, la información que estime necesaria para localizar e identificar a la Persona Desaparecida o No Localizada.

**Artículo 92.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe asegurar la existencia de mecanismos eficientes para que los Familiares y sus representantes siempre tengan acceso a los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda, y puedan proponer acciones de investigación para la búsqueda y localización de la persona.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe implementar mecanismos para que los Familiares tengan conocimiento del resultado de las acciones de búsqueda, las diligencias, los indicios, evidencias y pruebas que surjan de los mismos.

Los Familiares y sus representantes podrán acompañar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, lo cual estará garantizado en todo momento, de acuerdo con las medidas previstas en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en el Protocolo Homologado de Investigación y siempre velando por salvaguardar su integridad física y emocional.

Lo dispuesto en este artículo está sujeto a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 93.** Durante la búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente presumirá que la Persona Desaparecida o No Localizada, se encuentra con vida.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente no podrá concluir con las acciones de búsqueda, incluso en los casos en que la Persona Desaparecida o No Localizada sea declarada ausente, en términos de lo establecido en esta Ley y la legislación aplicable,

salvo que haya certeza sobre la suerte o paradero de la persona o hasta que sus restos hayan sido encontrados y plenamente identificados.

**Artículo 94.** A efecto de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida o No Localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe consultar, mediante los sistemas informáticos instrumentados para ello, de manera periódica y exhaustiva las bases de datos o registros de:

**I.** Hospitales, clínicas, centros de atención psiquiátrica, centros de Desarrollo Integral para la Familia, centros de salud, centros de atención de adicciones y rehabilitación, públicos y privados;

**II.** Centros de detención y reclusorios a cargo del sistema penitenciario;

**III.** Los registros de los centros de detención administrativos;

**IV.** Servicios Médicos Forenses y banco de datos forenses;

**V.** Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas;

**VI.** Albergues públicos y privados, e instituciones de asistencia social, en términos de la Ley de Asistencia Social;

**VII.** Panteones o lugares en los que se depositan restos mortales o cadáveres, públicos y privados;

**VIII.** Identidad de personas;

**IX.** Estaciones migratorias y listas de control migratorio;

**X.** Terminales de autotransporte terrestre, aéreo y marítimo, de pasajeros y carga, y

**XI.** Los demás registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización e identificación de las personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Las autoridades o instituciones, públicas o privadas, que administran las bases de datos o registros a que se refiere este artículo deben tomar las medidas necesarias para que dichas bases de datos y registros contengan la información de las personas a las que prestan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente proporcionará asistencia a las autoridades e instituciones a que se refiere el párrafo anterior a fin de facilitar el acceso a la información contenida en sus bases de datos o registros, para lo cual celebrarán los convenios correspondientes.

**Artículo 95.** Cuando sea necesario para la búsqueda de una Persona Desaparecida, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente podrá solicitar al Ministerio Público que ordene los actos de investigación previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o que recabe autorización judicial para efectuar actos de investigación que requieran tal autorización previa, de acuerdo con el mismo ordenamiento, indicando, en su caso, las que tengan el carácter de urgentes.

Las peticiones señaladas tendrán que ser resueltas sin dilación alguna cuando sean urgentes, debiendo la Comisión motivar dicho carácter.

**Artículo 96.** Si en cualquier momento durante la búsqueda la persona es localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe, como mínimo:

**I.** Dar aviso a la Fiscalía Especializada que corresponda, cuando exista carpeta de investigación. En caso de que no se haya cometido ningún delito, deberá darse por concluida la carpeta de investigación;

**II.** Dar aviso inmediato a la autoridad competente en materia de atención a Víctimas;

**III.** Aplicar el procedimiento correspondiente a la identificación de identidad regulado en el Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual establecerá el modo de obtención de la declaración de la persona localizada, en la cual señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su desaparición o no localización, así como los motivos de ésta y los probables responsables de la misma;

**IV.** Una vez identificada, declarar localizada a la persona y notificarlo a quien solicitó la búsqueda, a sus Familiares o, en su caso, a la persona que ésta designe;

**V.** En caso de que se localizara sin vida a la persona, se deberán aplicar las reglas para el Tratamiento e Identificación Forense y el de Notificación y Entrega de restos a Familiares, contenido en el Protocolo Homologado que

corresponda, garantizando siempre proteger, respetar y restituir de manera digna a sus Familiares los restos humanos, así como entregar un informe de las circunstancias de la muerte y la forma en que se identificaron dichos restos. En este caso, las autoridades competentes deberán continuar con la investigación para la ubicación y sanción de los probables responsables, y

**VI.** Actualizar el Registro Nacional que corresponda en términos del artículo 105 de esta Ley.

**Artículo 97.** Cuando alguna autoridad identifique a una persona que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de parentesco, identidad y domicilio, debe dar aviso a la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente, a efecto de que se verifique si su desaparición o no localización fue reportada en el Registro Nacional. En caso de no existir Reporte o Denuncia, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente deberá informarlo a la Fiscalía Especializada que corresponda para incorporar los datos respectivos al Registro Nacional en términos del artículo 106 de esta Ley.

**Artículo 98.** Las autoridades involucradas en la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en el ámbito de sus competencias, deben asegurar la cadena de custodia de la información e indicios, dando vista inmediata a la Fiscalía Especializada para su procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El servidor público que incumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, será sancionado conforme a la normativa correspondiente.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DE LOS PROTOCOLOS

**Artículo 99.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que le confiere esta Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos correspondientes.

Corresponderá al Sistema la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la del Protocolo Homologado de Investigación. La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá opinión previa a la emisión de los protocolos.

Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos.

En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente:

**I.** Las formas en las que las autoridades recibirán el Reporte, Denuncia o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada;

**II.** Los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, incluidos en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares;

**III.** Las acciones de búsqueda en el lugar de los hechos o del hallazgo;

**IV.** El procedimiento para definir los polígonos en donde debe realizarse la búsqueda;

**V.** El mecanismo de búsqueda inmediata, el cual deberá considerar la intervención de las autoridades desde el momento que se recibe el Reporte, Denuncia o Noticia de hechos de la desaparición, partiendo del supuesto de que la víctima se encuentra con vida;

**VI.** Los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial para buscar y localizar con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;

**VII.** Los procedimientos de búsqueda e investigación específicos para niñas, niños y adolescentes;

**VIII.** Los procedimientos de búsqueda e investigación para desapariciones cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos políticos;

**IX.** Los procedimientos de búsqueda y localización de personas migrantes, sin importar su calidad migratoria, que hayan desaparecido durante su estancia en el país, conforme los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior;

**X.** Los procedimientos de Actuación e Identificación Forense, que contendrá como mínimo los procedimientos para la localización, recuperación e identificación forense, con los criterios de actuación en antropología, odontología forense, autopsia médico legal, entre otros;

**XI.** El mecanismo de notificación a Familiares y acciones de investigación a realizar cuando se ha localizado con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;

**XII.** Los procedimientos para notificar y entregar los restos a Familiares de personas localizadas sin vida;

**XIII.** Los mecanismos de coordinación con otras autoridades para realizar la búsqueda y la investigación;

**XIV.** El proceso para levantar el cuestionario de información ante mortem con Familiares, personas allegadas y autoridades que puedan tener información que contribuya a la búsqueda, localización e identificación;

**XV.** El procedimiento para consultar la información en los registros y bases de datos a que se refiere el artículo 94 de esta Ley;

**XVI.** Los mecanismos para confrontar información con otros registros o bases de datos locales, nacionales o internacionales;

**XVII.** El procedimiento para entrevistar a autoridades y personas que puedan tener información que contribuya a la búsqueda;

**XVIII.** El mecanismo para ingresar a personas a los programas de protección, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y las disposiciones análogas en las Entidades Federativas;

**XIX.** Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales; y para la difusión del perfil de la Persona Desaparecida o No Localizada; en los términos de la legislación aplicable, y en su caso, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado;

**XX.** Las medidas para atender a personas en situación de vulnerabilidad;

**XXI.** Los mecanismos para mantener a los Familiares informados respecto de las acciones de búsqueda realizadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**XXII.** Los plazos y procedimientos para realizar la búsqueda;

**XXIII.** Los procedimientos para la participación de los Familiares en la búsqueda e investigación;

**XXIV.** Los criterios para definir las acciones óptimas para la búsqueda y racionalizar los recursos empleados en la búsqueda, y

**XXV.** Aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley.

Ambos protocolos deberán elaborarse con la participación de expertos en la materia, sociedad civil y Familiares, conforme a estándares internacionales.

**Artículo 100.** Para elaborar y actualizar los protocolos a que se refiere el presente Capítulo, se debe considerar, entre otros, los elementos siguientes:

**I.** Instrumentos de investigación, consultas comunitarias, análisis de los actores involucrados, estudios comparativos de modelos o prácticas exitosas, referencias hemerográficas, recorridos exploratorios y evaluaciones de impacto, entre otros;

**II.** Mapas de Denuncias, victimización, incidencia delictiva y delincuencia georreferencial;

**III.** Estudios de agencias de cooperación y centros de investigación locales, nacionales o internacionales;

**IV.** En su caso, la situación específica del grupo social al que se encuentra dirigido el protocolo específico;

**V.** El uso de herramientas tecnológicas en términos que establece esta Ley;

**VI.** Análisis de datos y estadísticas oficiales que muestren las tendencias históricas;

**VII.** Evaluaciones participativas a través de diferentes medios como encuestas voluntarias, estructuradas o semiestructuradas a Familiares para evaluar la percepción o la eficacia de las medidas y procedimientos contemplados en la presente Ley, y

**VIII.** Las mejores prácticas internacionales y los avances de la ciencia.

Los protocolos deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo 101.** Además de lo establecido en el artículo anterior, los protocolos contendrán las medidas que deberán realizar la Comisión Nacional y las Comisiones Locales así como las Fiscalías Especializadas en colaboración con otras dependencias e instituciones, públicas y privadas. Dichas medidas serán obligatorias a todas las instancias que integran el Sistema Nacional.

## CAPÍTULO SÉPTIMO
## DE LOS REGISTROS

### SECCIÓN PRIMERA
### DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS

**Artículo 102.** El Registro Nacional es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación.

**Artículo 103.** El Registro Nacional se conforma con la información que recaban las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas.

El Registro Nacional contendrá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

**Artículo 104.** Corresponde a la Comisión Nacional administrar y coordinar la operación del Registro Nacional.

Es obligación de las autoridades de las Entidades Federativas y de la Federación recopilar la información para el Registro Nacional y proporcionar dicha información de forma oportuna a la Comisión Nacional, en términos de lo que establece esta Ley y su Reglamento.

**Artículo 105.** El Registro Nacional debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello. La información deberá ser recabada de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Para cumplir con sus fines de búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda, las Procuradurías Locales y las Fiscalías Especializadas pueden consultar en cualquier momento el Registro Nacional.

La Fiscalía Especializada competente debe actualizar el Registro Nacional, indicando si la carpeta corresponde al delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.

Si de las investigaciones se desprende que se trata de un delito diferente a los previstos en esta Ley, así se hará constar en el Registro Nacional actualizando el estado del folio, sin perjuicio de que continúe la investigación correspondiente.

Si la Persona Desaparecida o No Localizada ha sido encontrada viva o si fueron encontrados sus restos, se dará de baja del Registro Nacional y se dejará constancia de ello, sin perjuicio del seguimiento de la investigación correspondiente.

**Artículo 106.** El Registro Nacional debe contener los siguientes campos:

**I.** En relación con la persona que reporta la desaparición o no localización, salvo que sea anónima:

**a)** Nombre completo;

**b)** Sexo;

**c)** Edad;

**c)** Relación con la Persona Desaparecida;

**e)** Clave Única de Registro de Población o cualquier documento de identificación oficial;

**f)** Domicilio, y

**g)** Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con ella;

**II.** En relación con la Persona Desaparecida o No Localizada:

**a)** Nombre;

**b)** Edad;

**c)** Sexo;

**d)** Nacionalidad;

**e)** Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona, videos u otros medios gráficos;

**f)** Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos que permitan su identificación;

**g)** Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista;

**h)** Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;

**i)** Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación oficial;

**j)** Escolaridad;

**k)** Ocupación al momento de la desaparición;

**l)** Pertenencia grupal o étnica;

**m)** Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o equipos;

**n)** Historia clínica, dental, cirugías, y demás datos que permitan su identificación;

**o)** Estatus migratorio;

**p)** Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles;

**q)** Información sobre toma de muestras biológicas a Familiares y perfiles genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses;

**r)** Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco Nacional de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro, y

**s)** Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar con el paradero de la Persona;

**III.** Los hechos relacionados con la desaparición o no localización, así como si existen elementos para suponer que está relacionada con la comisión de un delito;

**IV.** El nombre del servidor público que recibió el Reporte, Denuncia o Noticia;

**V.** El nombre del servidor público que ingresa la información al registro;

**VI.** El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y

**VII.** El rubro o registro de la carpeta de investigación que indique el delito por el que se inició y el nombre de la autoridad ministerial encargada de dicha investigación.

Cuando la autoridad competente genere un registro debe de asignar un folio único que deberá proporcionar a la persona que realizó el Reporte, Denuncia o Noticia.

Asimismo, se deben incorporar toda la información novedosa que resulte de las diligencias de búsqueda o investigación.

**Artículo 107.** Los datos obtenidos inicialmente a través de la Denuncia, Reporte o Noticia deberán asentare en el Registro Nacional de manera inmediata.

Los datos e información que no puedan ser asentados de forma inmediata o que por su naturaleza requieran de un procedimiento para su obtención previsto en los protocolos a que se refiere esta Ley, deberán ser recabados por personal debidamente capacitado. Asimismo, se deberán llevar a cabo una o más entrevistas con Familiares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o con otras personas, de conformidad con el protocolo homologado que corresponda, con el fin de obtener la información detallada sobre la persona. Una vez que se recabe la información deberá incorporarse inmediatamente al Registro Nacional.

El personal que lleve a cabo las entrevistas para la obtención de datos forenses deberá ser capacitado en atención psicosocial.

En caso de que la persona que denuncie o reporte la desaparición o no localización de una persona, desconozca información para su incorporación en el registro, se asentará en el reporte y no podrá negarse el levantamiento de su Reporte o Denuncia.

**Artículo 108.** Los datos personales contenidos en el Registro Nacional deben ser utilizados exclusivamente con el fin de determinar la suerte o paradero de la Persona Desaparecida o No Localizada y esclarecer los hechos.

Los Familiares que aporten información para el Registro Nacional tendrán el derecho a manifestar que dicha información sea utilizada exclusivamente para la búsqueda e identificación de la Persona Desaparecida o No Localizada. Los Familiares deberán ser informados sobre este derecho antes de proporcionar la información. De igual forma, podrán solicitar que no se haga pública la

información de la Persona Desaparecida o No Localizada a que se refieren los incisos a) al g) de la fracción II del artículo 106 de esta Ley por motivos de seguridad.

Las muestras biológicas y perfiles genéticos únicamente podrán ser utilizados para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

**Artículo 109.** El Registro Nacional puede ser consultado en su versión pública, a través de la página electrónica que para tal efecto establezca la Comisión Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo que determine el protocolo respectivo y las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

**Artículo 110.** El Registro Nacional deberá contener como mínimo los siguientes criterios de clasificación de Personas Localizadas:

**I.** Persona localizada que no fue víctima de ningún delito;

**II.** Persona localizada víctima de un delito materia de esta Ley, y

**III.** Persona localizada víctima de un delito diverso.

## SECCIÓN SEGUNDA
## DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS FALLECIDAS NO IDENTIFICADAS Y NO RECLAMADAS

**Artículo 111.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas se encuentra a cargo de la Procuraduría, formará parte del Banco Nacional de Datos Forenses y contiene información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior identificación.

El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas se integra con la información proporcionada por las autoridades competentes, la Federación y las Entidades Federativas.

El objetivo de este Registro Nacional es el de concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de los Familiares de personas fallecidas no reclamadas.

La Procuraduría emitirá los lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan dicha información de forma homologada.

**Artículo 112.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contener como mínimo, los siguientes campos:

**I.** Información homologada sobre los datos del cadáver o los restos, la ropa, calzado y otras prendas u objetos. También, cuando sea posible, señas particulares como tatuajes, lunares y cualquier otro dato que permita la identificación;

**II.** Informe homologado sobre necropsia médico legal y dictámenes, antropología forense, odontología forense, dactiloscopia, genética forense, entre otras, así como las fotografías del cadáver o los restos;

**III.** Información sobre el lugar, la fecha y las circunstancias de la localización y recuperación del cadáver o los restos. En caso de provenir de una exhumación se generará también la información arqueológica forense y otra información relevante;

**IV.** Información sobre la inhumación o destino final del cadáver o los restos;

**V.** Información que se desprenda de la cadena de custodia de los informes y el tratamiento del cadáver o los restos;

**VI.** Datos de la carpeta de investigación, averiguación previa, Noticia o acta circunstanciada vinculada al hallazgo;

**VII.** En caso de un accidente, una catástrofe o cualquier otra situación en donde exista un número de Víctimas en lugar determinado, se deberá incluir la información disponible sobre ese evento;

**VIII.** Datos sobre las personas identificadas no reclamadas, tales como su nombre, fotografía, lugar de destino final y, cuando se requiera conforme, al protocolo homologado que corresponda, el informe forense multidisciplinario en que se confirma la identificación, y

**IX.** Lugar donde se encuentra el soporte documental de la información vertida en el registro.

Una vez que se logra la identificación del cadáver o de los restos de la persona, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá notificar a los Familiares de la persona fallecida de acuerdo al Protocolo Homologado de Investigación.

Las autoridades tendrán la obligación de identificar y localizar a los Familiares de la persona fallecida. En caso de que no se pueda identificar o localizar a algún familiar, la información contenida en este registro deberá enviarse al subregistro de personas identificadas no reclamadas, a fin de iniciar el proceso de localización de Familiares conforme al protocolo correspondiente.

Una vez realizada la identificación positiva, la notificación a las familias y la aceptación de las familias del resultado o que se haya realizado el peritaje independiente solicitado, se podrán hacer las modificaciones respectivas al Registro Nacional y cesar las acciones de búsqueda, sin perjuicio del derecho de los Familiares de interponer los recursos legales correspondientes para impugnar la identificación.

**Artículo 113.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas es una herramienta de búsqueda e identificación. La información contenida se actualiza en tiempo real por parte de los servicios periciales o los servicios médicos forenses de la Federación y las Entidades Federativas, en cuanto se recabe la información, de conformidad con los lineamientos que emita la Procuraduría y la Secretaría de Salud o en su caso, el protocolo que corresponda.

Para cumplir con sus obligaciones de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales pueden consultar en cualquier momento este registro.

**Artículo 114.** El personal de servicios periciales y servicios médicos forenses deberá estar permanentemente capacitado y actualizado de conformidad con el protocolo que corresponda.

**Artículo 115.** La Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y de los servicios periciales y servicios médicos forenses se encuentran obligados a realizar las acciones pertinentes para la verificación de una probable hipótesis de identificación a partir de la información contenida en los registros previstos en esta Ley, dejando constancia del resultado.

**Artículo 116.** La información contenida en el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas estará sujeta a las disposiciones en materia de protección de datos personales y se utilizará únicamente para lograr la identificación de las personas fallecidas.

**Artículo 117.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contar con las herramientas tecnológicas necesarias para permitir la interrelación, el resguardo y la confiabilidad de la información.

**Artículo 118.** Ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación, en fosas comunes, de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de cumplir obligatoriamente con lo que establece el protocolo homologado aplicable.

## SECCIÓN TERCERA
## DEL BANCO NACIONAL DE DATOS FORENSES

**Artículo 119.** El Banco Nacional de Datos Forenses está a cargo de la Procuraduría y que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos materia de esta Ley.

El Banco Nacional de Datos Forenses se conforma con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real.

El Banco Nacional de Datos Forenses debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley que conforman el Sistema Nacional y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello.

La información deberá ser recabada de conformidad con los protocolos correspondientes.

El Banco Nacional de Datos Forenses deberá realizar cruces de información de manera permanente y continua con el Registro Nacional y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas. Así como, con otros registros que no forman parte del Sistema Nacional que contengan información forense relevante para la búsqueda de personas.

La Procuraduría emitirá los lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan dicha información de forma homologada. Estos lineamientos se elaborarán considerando la opinión de autoridades competentes y expertos en la materia y de acuerdo a estándares internacionales.

**Artículo 120.** Corresponde a la Procuraduría coordinar la operación y centralizar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, así como administrar el Registro Forense Federal, en términos de lo que establezca el Reglamento.

Corresponde a las Procuradurías Locales coordinar la operación de su respectivo registro forense y compartir la información con la Procuraduría, en términos de lo que establece esta Ley.

**Artículo 121.** Los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las Entidades Federativas deben capturar en el registro forense que corresponda, la información que recaben, de conformidad con la presente sección y el protocolo correspondiente.

Las autoridades correspondientes en la Federación y las Entidades Federativas, deben garantizar que el personal de los servicios periciales y médicos forenses esté capacitado de forma permanente y continua en las diferentes materias que se requieren para el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

**Artículo 122.** La autoridad pericial encargada de la toma de muestras debe informar a la persona que suministra la muestra o a su representante legal el uso que le dará a la información que recabe y entregarle una constancia de la diligencia ministerial.

La información genética suministrada por los Familiares será utilizada exclusivamente con fines de identificación de Personas Desaparecidas.

**Artículo 123.** La persona que proporcione información para análisis pericial debe otorgar previamente su consentimiento por escrito, y tiene derecho a designar, a su cargo, a peritos independientes para que en su presencia se recabe la muestra.

Los servicios periciales deberán almacenar las muestras y otros objetos relevantes para la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con lo que establezca esta Ley, el protocolo correspondiente y los estándares internacionales en la materia.

Los peritos independientes a que se refiere el párrafo anterior deben contar con la certificación legalmente expedida por instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, asegurando que cumplan con los estándares de certificación nacional o internacional y cuenten con una especialidad acreditada en el ramo de las ciencias forenses que correspondan. Los peritos serán acreditados ante la autoridad judicial o ministerial que corresponda, mismas que no pueden negarla injustificadamente ni demorarse en hacer la acreditación correspondiente.

La designación y aceptación de los peritos independientes, y los dictámenes periciales que éstos formulen deben cumplir las disposiciones de la legislación procesal penal aplicable.

**Artículo 124.** El Banco Nacional de Datos Forenses, además de la información pericial y forense, útil para la identificación de una persona, debe contar con una base de datos de información genética que contenga, como mínimo:

**I.** La información genética de los Familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o segundo grado en línea colateral, de las Personas Desaparecidas y No Localizadas, conforme se requiera, y

**II.** La información genética de terceras personas en los casos en que así lo requiera la autoridad ministerial o judicial que corresponda, como datos o medios de prueba.

Las muestras para análisis pericial y su subsecuente incorporación al registro forense que corresponda en términos de esta Ley, sólo pueden recabarse a las personas mencionadas en la fracción I del presente artículo con su aceptación expresa, informada y por escrito en una diligencia ministerial.

**Artículo 125.** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede utilizarse en otras investigaciones cuando aporte elementos para la localización de una persona, cuando sea de utilidad para otros procedimientos penales o para el ejercicio del derecho de la víctima a obtener la reparación integral.

**Artículo 126.** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede ser confrontada con la información que esté en poder de otras autoridades e instituciones, nacionales o extranjeras, así como otros bancos forenses que puedan ser útiles para identificar a una persona.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben establecer los mecanismos de colaboración necesarios para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior. Asimismo, podrán coordinarse con las autoridades de otros países que posean bases de datos, prioritariamente con aquellos países que tengan frontera o flujo migratorio relevante con México.

Cuando se trate de personas migrantes desaparecidas en México, se estará a lo que establecen las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 127.** Los datos personales contenidos en el Banco Nacional de Datos Forenses deberán ser tratados de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La obtención, administración, uso y conservación de información forense deben realizarse con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, así como otros acuerdos con las instituciones internacionales que cuenten con bases de datos o bancos de datos forenses.

Una vez identificada la Persona Desaparecida o No Localizada, los titulares de los datos personales o sus Familiares, según sea el caso, podrán solicitar el tratamiento de sus datos en los términos de la legislación de la materia.

## SECCIÓN CUARTA
## DE LA DISPOSICIÓN DE CADÁVERES DE PERSONAS

**Artículo 128.** Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.

Las Procuradurías y otras autoridades que tengan a su cargo servicios forenses deben tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados.

Cuando las investigaciones revelen la identidad del cadáver o los restos de la persona, el agente del Ministerio Público competente podrá autorizar que los Familiares dispongan de él y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios para continuar con las investigaciones o para el correcto desarrollo del proceso penal, en cuyo caso dictará las medidas correspondientes.

En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría de Salud.

**Artículo 129.** Las autoridades correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas con el propósito de la identificación de un cadáver o resto humano antes de inhumarlo, a partir de los procedimientos establecidos por el protocolo homologado aplicable.

Una vez recabadas las muestras a que se refiere el párrafo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá autorizar la inhumación de un cadáver o resto humano no identificado. En el caso de inhumación, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que ésta sea digna, en una

fosa individualizada, con las medidas que garanticen toda la información requerida para el adecuado registro y en un lugar claramente identificado que permita su posterior localización.

**Artículo 130.** Para efectos de lo dispuesto en esta Sección, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Secretaría de Salud, determinarán las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres o restos de personas, mediante lineamientos conforme a los más altos estándares internacionales que deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación.

## SECCIÓN QUINTA
## DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

**Artículo 131.** Las bases y los registros a que se refiere esta Ley deben estar diseñados de tal forma que:

**I.** No exista duplicidad de registros;

**II.** Permitan utilizar en la búsqueda y en la investigación de los delitos, las herramientas de análisis de contexto, con enfoque transnacional, a fin de determinar patrones de criminalidad, modo de operación, mapas criminológicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada, entre otros;

**III.** Cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Procuraduría, los que deberán ser acordes con los lineamientos que emita la Comisión Nacional en términos de la fracción XIV del artículo 53 de esta Ley, y

**IV.** Permitan su actualización permanente por parte de las Fiscalías Especializadas y demás autoridades competentes, en términos de lo previsto en esta Ley.

**Artículo 132.** La Procuraduría debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses a que se refiere este Título cuenten con las características siguientes:

**I.** Reflejen automática e inmediatamente cada registro en el Registro Nacional para efectos estadísticos;

**II.** Estén interconectados en tiempo real y su información esté respaldada;

**III.** Una vez ingresada la información de un Reporte, Denuncia o Noticia en el Registro Nacional, puedan realizar una búsqueda automática en las bases de datos referidas en esta Ley, y

**IV.** No cuenten con la posibilidad de eliminar registros.

La Procuraduría, con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, emitirá los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas se interconecten en tiempo real con el Registro Nacional.

**Artículo 133.** Además de lo establecido en este Capítulo, la Federación y las Entidades Federativas, deberán contar, al menos, con:

**I.** El Registro Administrativo de Detenciones, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

**II.** El Registro Nacional de Fosas, el cual deberá contar con la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen.

## CAPÍTULO OCTAVO
## DEL PROGRAMA NACIONAL DE BÚSQUEDA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE EXHUMACIONES

**Artículo 134.** El Programa Nacional de Búsqueda y Localización, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deberá contener, como mínimo:

**I.** Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del Programa.

**II.** El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre la desaparición y los posibles paraderos de personas.

**III.** Las metodologías y procesos para recopilar y sistematizar información de las diferentes fuentes disponibles y para su incorporación y procesamiento en bases de datos o sistemas particulares para facilitar las labores de búsqueda y localización.

**IV.** La identificación de tiempo y lugar de episodios críticos de desaparición de personas en el país, la definición de los contextos de las desapariciones y las metodologías a emplearse para la búsqueda y localización en cada uno de esos contextos.

**V.** Las estrategias regionales o locales de búsqueda que se determinen de acuerdo a contextos y temporalidades específicas.

**VI.** Las estrategias específicas a seguir con base en la información y el análisis de contexto, para la búsqueda de personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores u otras personas o grupos que dadas sus características requieran medidas o mecanismos diferenciados de búsqueda.

**VII.** Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado.

**VIII.** El método específico de análisis de contexto que contribuya en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en episodios de violencia política del pasado, en términos de las disposiciones aplicables.

**IX.** El proceso para la depuración y organización de la información contenida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y su integración y armonización con otros registros que contengan información relevante para la búsqueda y localización de personas.

**X.** Los procesos, sistemas y mecanismos para la coordinación con el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

**XI.** Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa.

**XII.** La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación.

**XIII.** El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa.

**XIV.** Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición.

**XV.** El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

**Artículo 135.** La elaboración del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, a cargo de la Procuraduría General de la República, deberá contener, como mínimo:

**I.** Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del programa;

**II.** El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre las personas fallecidas sin identificar que permita aportar información sobre la hipótesis de identificación de las personas inhumadas;

**III.** Información estadística sobre el número de cuerpos inhumados sin identificar;

**IV.** El listado de todos los panteones y cementerios del país, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar inhumados en cada uno y las circunstancias y contextos correspondientes;

**V.** El listado de todos los lugares de inhumación clandestina de cuerpos que se hayan localizado, a partir de la información que proporcionen las Procuradurías y Fiscalías Especializadas, especificando si ya se ha procesado la zona y si se han localizado restos, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar recuperados en cada uno, las circunstancias y contextos correspondientes y el estatus de los procesos de identificación respectivos;

**VI.** Las estrategias regionales o locales de exhumación que se determinen de acuerdo a contextos y/o patrones específicos;

**VII.** Los criterios logísticos de priorización de las actuaciones de exhumaciones e identificación forense, de acuerdo a información recabada;

**VIII.** La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación;

**IX.** El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa;

**X.** Las actuaciones previstas para la identificación de las personas inhumadas y para proceder a las inhumaciones controladas, así como los tiempos previstos para su realización;

**XI.** Los procesos para el intercambio de información y coordinación con el Programa Nacional de Búsqueda y Localización;

**XII.** Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado;

**XIII.** Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa;

**XIV.** Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición, y

**XV.** El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

La Procuraduría, al ejercer la facultad a la que se refiere este artículo, deberá solicitar información a las autoridades competentes que cuenten con información necesaria y considerar la opinión de la Comisión Nacional de Búsqueda y expertos en la materia.

## TÍTULO CUARTO
## DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 136.** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y atención, por sí mismas o en coordinación con otras instituciones competentes, en los términos del presente Título y de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 137.** Las Víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes:

**I.** A la protección de sus derechos, personalidad e intereses jurídicos;

**II.** A que las autoridades inicien las acciones de búsqueda y localización, bajo los principios de esta Ley, desde el momento en que se tenga Noticia de su desaparición;

**III.** A ser restablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado con vida;

**IV.** A proceder en contra de quienes de mala fe hagan uso de los mecanismos previstos en esta Ley para despojarlo de sus bienes o derechos;

**V.** A recibir tratamiento especializado desde el momento de su localización para la superación del daño sufrido producto de los delitos previstos en la presente Ley, y

**VI.** A que su nombre y honra sean restablecidos en casos donde su defensa haya sido imposible debido a su condición de Persona Desaparecida.

El ejercicio de los derechos contenidos en las fracciones I, II, IV y VI de este artículo, será ejercido por los Familiares y personas autorizadas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y en la legislación aplicable.

**Artículo 138.** Los Familiares de las Víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:

**I.** Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida;

**II.** Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser fundada y motivada por escrito;

**III.** Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación;

**IV.** Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los expedientes de búsqueda;

**V.** Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial;

**VI.** Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promueva ante autoridad competente;

**VII.** Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales en las acciones de búsqueda, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable;

**VIII.** Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia;

**IX.** Acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y mecanismos que emanen de la presente Ley;

**X.** Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la presente Ley;

**XI.** Participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de Familiares, de acuerdo a los protocolos en la materia, y

**XII.** Acceder a los programas y servicios especializados que las autoridades competentes diseñen e implementen para la atención y superación del daño producto de los delitos contemplados en la presente Ley.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN

**Artículo 139.** Los Familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 140.** Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas en tanto realizan las gestiones para que otras instituciones públicas brinden la atención respectiva.

La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere el presente Título y la Ley General de Víctimas, en forma individual, grupal o familiar, según corresponda.

**Artículo 141.** Cuando durante la búsqueda o investigación exista un cambio de fuero, las Víctimas deben seguir recibiendo las medidas de ayuda, asistencia y atención por la Comisión de Atención a Víctimas que le atiende al momento del cambio, en tanto se establece el mecanismo de atención a Víctimas del fuero que corresponda.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA

**Artículo 142.** Los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo que dispuesto en esta Ley y las leyes aplicables.

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia será estrictamente voluntario. Las autoridades en contacto con los Familiares deberán informar del procedimiento y efectos de la Declaración a éstos.

**Artículo 143.** Para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional que conozca de la Declaración Especial de Ausencia se estará a cualquiera de los siguientes criterios:

**I.** El último domicilio de la Persona Desaparecida;

**II.** El domicilio de la persona quien promueva la acción;

**III.** El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición, o

**IV.** El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.

**Artículo 144.** Las leyes de la Federación y de las Entidades Federativas deben establecer el procedimiento a que se refiere este Capítulo, sin que el plazo para resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia exceda de seis meses a partir de iniciado el procedimiento.

Los procedimientos deberán contemplar aquellos casos en los cuales se haya declarado la presunción de ausencia o de muerte de una persona desaparecida, para permitirle acceder a la Declaratoria Especial de Ausencia y corregir el estatus legal de la persona desaparecida.

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho la Denuncia o Reporte de desaparición, o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o ante un organismo público de protección de los derechos humanos de las Entidades Federativas.

El procedimiento para emitir la Declaración Especial de Ausencia se regirá bajo los principios de inmediatez, celeridad y gratuidad. Los gastos derivados de este procedimiento, incluyendo publicación de edictos, no causarán contribución alguna en el caso de publicación en medios oficiales. La Comisión Ejecutiva, o a la Comisión de Víctimas que corresponda, podrá otorgar las medidas de asistencia necesarias a los Familiares durante el procedimiento, incluido el gasto que se genere con motivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y demás normativa aplicable.

Los procedimientos a que se refiere este Capítulo deben contemplar la posibilidad de emitir medidas provisionales durante el procedimiento y deberán omitir requisitos que resulten onerosos para la emisión de las declaratorias. Los Familiares podrán en cualquier momento antes de emitida la Declaratoria desistirse de continuar con el procedimiento.

**Artículo 145.** La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad:

**I.** Reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida, y

**II.** Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares de la Persona Desaparecida.

**Artículo 146.** La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:

**I.** Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;

**II.** Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en los términos de la legislación civil aplicable;

**III.** Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;

**IV.** Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por la ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;

**V.** Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida, continúen gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen;

**VI.** Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida;

**VII.** Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo;

**VIII.** Proveer sobre la representación legal de la persona ausente cuando corresponda, y

**IX.** Establecer las reglas aplicables en caso de que la persona sea localizada con vida para el restablecimiento de sus derechos y cumplimiento de obligaciones.

**Artículo 147.** La Declaración Especial de Ausencia sólo tiene efectos de carácter civil, por lo que no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

**Artículo 148.** La Comisión Nacional de Búsqueda debe continuar con la búsqueda, de conformidad con esta Ley, así como de las Fiscalías Especializadas de continuar con la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, aun cuando alguno de los Familiares o persona legitimada haya solicitado la Declaración Especial de Ausencia.

**Artículo 149.** Si la Persona Desaparecida declarada ausente es localizada con vida, ésta puede solicitar, ante el órgano jurisdiccional que declaró la ausencia, la recuperación de sus bienes.

Si la persona declarada ausente es encontrada sin vida, sus Familiares pueden solicitar al juez civil competente iniciar los procedimientos que conforme a la legislación civil aplicable correspondan.

## CAPÍTULO CUARTO
## DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

**Artículo 150.** Las Víctimas de los delitos establecidos en la presente Ley tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas.

El derecho para que la víctima solicite la reparación integral es imprescriptible.

**Artículo 151.** La reparación integral a las Víctimas de los delitos establecidos en la presente Ley comprenderá, además de lo establecido en la Ley General de Víctimas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en normas del derecho internacional, los elementos siguientes:

**I.** Medidas de satisfacción:

**a)** Construcción de lugares o monumentos de memoria;

**b)** Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas;

**c)** Recuperación de escenarios de encuentro comunitario;

**d)** Recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas, o

**e)** Recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante, y

**II.** Medidas de no repetición que, entre otras acciones, deben incluir la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de los servidores públicos investigados o sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso y previo desahogo de los procedimientos administrativos y/o judiciales que correspondan.

**Artículo 152.** La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, son responsables de asegurar la reparación integral a las Víctimas por Desaparición Forzada de Personas cuando sean responsables sus servidores públicos o particulares bajo la autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de éstos.

La Federación y las Entidades Federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a las Víctimas de desaparición cometida por particulares en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas.

## CAPÍTULO QUINTO
## DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

**Artículo 153.** Las Fiscalías Especializadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben establecer programas para la protección de las Víctimas, los Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal o las leyes análogas de las Entidades Federativas.

También deberán otorgar el apoyo ministerial, pericial, policial y de otras fuerzas de seguridad a las organizaciones de Familiares y a Familiares en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas en campo, garantizando todas las medidas de protección a su integridad física.

**Artículo 154.** Las Fiscalías Especializadas pueden otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas, como medida urgente de protección la reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo anterior, conforme a los procedimientos y con las autorizaciones aplicables.

**Artículo 155.** Las Fiscalías Especializadas pueden otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas, como medida de protección para enfrentar el riesgo, la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados, y demás medios de protección que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, conforme a la legislación aplicable.

Cuando se trate de personas defensoras de los derechos humanos o periodistas se estará también a lo dispuesto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

**Artículo 156.** La incorporación a los programas de protección de personas a que se refiere el artículo 153 de esta Ley debe ser autorizada por el agente del Ministerio Público encargado de la investigación o por los titulares de las Fiscalías Especializadas correspondientes.

**Artículo 157.** La información y documentación relacionada con las personas protegidas debe ser tratada con estricta reserva o confidencialidad, según corresponda.

## TÍTULO QUINTO
## DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS

### CAPÍTULO PRIMERO
### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 158.** La Secretaría de Gobernación, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deberán coordinarse para implementar las medidas de prevención previstas en el artículo 161 de esta Ley.

Lo anterior con independencia de las establecidas en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 159.** Todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Las grabaciones deberán almacenarse de forma segura por dos años.

**Artículo 160.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben administrar bases de datos estadísticas relativas a la incidencia de los delitos previstos en esta Ley, garantizando que los datos estén desagregados, al menos, por género, edad, nacionalidad, Entidad Federativa, sujeto activo, rango y dependencia de adscripción, así como si se trata de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

Las bases de datos a que se refiere el párrafo que antecede deben permitir la identificación de circunstancias, grupos en condición de vulnerabilidad, modus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de alto riesgo en los que aumente la probabilidad de comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley para garantizar su prevención.

**Artículo 161.** El Sistema Nacional, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, debe respecto de los delitos previstos en esta Ley:

**I.** Llevar a cabo campañas informativas dirigidas a fomentar la Denuncia de los delitos y sobre instituciones de atención y servicios que brindan;

**II.** Proponer acciones de capacitación a las Instituciones de Seguridad Pública, a las áreas ministeriales, policiales y periciales y otras que tengan como objeto la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación y sanción de los delitos previstos en esta Ley, así como la atención y protección a Víctimas con una perspectiva psicosocial;

**III.** Proponer e implementar programas que incentiven a la ciudadanía, incluyendo a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, a proporcionar la información con que cuenten para la investigación de los delitos previstos en la presente Ley, así como para la ubicación y rescate de las Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**IV.** Promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales para fortalecer la prevención de las conductas delictivas;

**V.** Recabar y generar información respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en materia de búsqueda de personas, prevención e investigación;

**VI.** Identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que aumente la probabilidad de que una o más personas sean Víctimas de los delitos, así como hacer pública dicha información de manera anual;

**VII.** Proporcionar información y asesoría a las personas que así lo soliciten, de manera presencial, telefónica o por escrito o por cualquier otro medio, relacionada con el objeto de esta Ley, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos;

**VIII.** Reunirse, por lo menos dos veces al año, para intercambiar experiencias que permitan implementar políticas públicas en materia de prevención de los delitos;

**IX.** Emitir un informe anual respecto de las acciones realizadas para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

**X.** Diseñar instrumentos de evaluación e indicadores para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, en donde se contemple la participación voluntaria de Familiares;

**XI.** Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre la problemática de desaparición de personas y otras conductas delictivas conexas o de violencia vinculadas a este delito, que permitan la elaboración de políticas públicas que lo prevengan, y

**XII.** Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 162.** Las Fiscalías Especializadas deben intercambiar la información que favorezca la investigación de los delitos previstos en esta Ley y que permita la identificación y sanción de los responsables.

**Artículo 163.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben diseñar los mecanismos de colaboración que correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

**Artículo 164.** El Sistema Nacional, a través de la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, debe coordinar el diseño y aplicación de programas que permitan combatir las causas que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial referencia a la marginación las condiciones de pobreza, la violencia comunitaria, la presencia de grupos delictivos, la operación de redes de trata, los antecedentes de otros delitos conexos y la desigualdad social.

## CAPÍTULO SEGUNDO
## DE LA PROGRAMACIÓN

**Artículo 165.** Los programas de prevención a que se refiere el presente Título deben incluir metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a servidores públicos.

**Artículo 166.** La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligados a remitir anualmente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos generados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estudios sobre las causas, distribución geográfica de la frecuencia delictiva, estadísticas, tendencias históricas y

patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos previstos en esta Ley, así como su programa de prevención sobre los mismos. Estos estudios deberán ser públicos y podrán consultarse en la página de Internet del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

## CAPÍTULO TERCERO
## DE LA CAPACITACIÓN

**Artículo 167.** La Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y la autoridad municipal que el titular del Ayuntamiento determine deben establecer programas obligatorios de capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a los principios referidos en el artículo 5 de esta Ley, para servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública involucrados en la búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos.

**Artículo 168.** La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deben capacitar, en el ámbito de sus competencias, al personal ministerial, policial y pericial conforme a los más altos estándares internacionales, respecto de las técnicas de búsqueda, investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere esta Ley, con pleno respeto a los derechos humanos y con enfoque psicosocial.

**Artículo 169.** Las Instituciones de Seguridad Pública seleccionarán, de conformidad con los procedimientos de evaluación y controles de confianza aplicables, al personal policial que conformará los Grupos de Búsqueda.

**Artículo 170.** La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los lineamientos que permitan a cada orden de gobierno determinar el número de integrantes que conformarán los Grupos de Búsqueda de conformidad con las cifras de los índices del delito de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como de Personas No Localizadas que existan en cada Entidad Federativa o Municipio.

**Artículo 171.** La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar y certificar, a su personal conforme a los criterios de capacitación y certificación que al efecto establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

**Artículo 172.** Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 170 y 171, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar a todo el personal policial respecto de los protocolos de actuación inmediata y las acciones específicas que deben realizar cuando tengan conocimiento, por cualquier medio, de la desaparición o no localización de una persona.

**Artículo 173.** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben capacitar a sus servidores públicos, conforme a los más altos estándares internacionales, para brindar medidas de ayuda, asistencia y atención con un enfoque psicosocial y técnicas especializadas para el acompañamiento de las Víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben implementar programas de difusión a efecto de dar a conocer los servicios y medidas que brindan a las Víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley, en términos de lo previsto en este ordenamiento.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se reforma el tercer párrafo del artículo 25; se deroga el Capítulo III Bis del Título Décimo conformado por los artículos 215-A a 215-D, y se adiciona un artículo 280 Bis al Título Décimo Séptimo del Código Penal Federal, para quedar como siguen:

**Artículo 25.- ...**

**...**

El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo no es aplicable para los delitos que se sancionen de conformidad con lo estipulado en otras leyes.

**CAPÍTULO III BIS**
**Desaparición forzada de personas**
**(Derogado)**

**Artículo 215-A.-** Derogado

**Artículo 215-B.-** Derogado

**Artículo 215-C.-** Derogado

**Artículo 215-D.-** Derogado.

**Artículo 280 Bis.-** Se impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcial el cadáver o restos humanos de una persona no identificada, sin autorización de las autoridades competentes en la materia.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Se reforman los artículos 348, segundo párrafo; 350 Bis 3, segundo párrafo; 350 Bis 4 y 350 Bis 5, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

**Artículo 348.- ...**

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. Para el caso de cadáveres de personas no identificadas se estará a lo dispuesto en la ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

...

**Artículo 350 Bis 3.- ...**

Tratándose de cadáveres de personas desconocidas o no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

**Artículo 350 Bis 4.-** Las instituciones educativas sólo podrán utilizar cadáveres respecto de los que tengan el consentimiento, ante mortem de la persona fallecida o de sus familiares después de su muerte.

Las instituciones educativas que reciban cadáveres para efectos de investigación o de docencia deberán tener un registro que contenga, por lo menos:

**I.** Nombre completo de la persona fallecida;

**II.** El domicilio en el que habitaba la persona fallecida;

**III.** Edad que tenía la persona al fallecer;

**IV.** Sexo de la persona fallecida;

**V.** Estado civil de la persona fallecida;

**VI.** Nombre y domicilio del cónyuge, concubina o concubinario;

**VII.** Nombre y domicilio de los padres y en caso de haber fallecido éstos, la mención de este hecho;

**VIII.** En caso de no tener cónyuge, concubina o concubinario, o padres, el señalamiento del nombre y domicilio de alguno de sus familiares más cercanos, y

**IX.** El nombre de la institución educativa beneficiaria del cadáver.

**Artículo 350 Bis 5.-** Los cadáveres que se hayan destinado para fines de docencia e investigación serán inhumados o incinerados.

## Transitorios

**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la emisión de los instrumentos a que se refiere el Artículo Décimo Cuarto Transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y demás autoridades deberán cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a esta Ley.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales, además de los protocolos previstos en esta Ley, continuarán aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad.

**Segundo.** Se abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**Tercero.** Las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los treinta días siguientes a que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los protocolos rectores para su funcionamiento previstos en el artículo 53, fracción VIII, de esta Ley.

Dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, ésta deberá emitir el Programa Nacional de Búsqueda.

Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda deberán estar certificados dentro del año posterior a su creación.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los criterios previstos en el artículo 53, fracción L, de esta Ley, dentro de los noventa días posteriores a su entrada en funciones.

La Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales podrán, a partir de que entren en funcionamiento, ejercer las atribuciones que esta Ley les confiere con relación a los procesos de búsqueda que se encuentren pendientes. La Comisión Nacional de Búsqueda coordinará la búsqueda de las personas desaparecidas relacionadas con búsquedas en las que, a la entrada en vigor de esta Ley, participen autoridades federales.

**Cuarto.** Las Comisiones Locales de Búsqueda deberán entrar en funciones a partir de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

La Comisión Nacional de Búsqueda deberá brindar la asesoría necesaria a las entidades federales para el establecimiento de sus Comisiones Locales de Búsqueda.

**Quinto.** El Consejo Ciudadano deberá estar conformado dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

En un plazo de treinta días posteriores a su conformación el Consejo Ciudadano deberá emitir sus reglas de funcionamiento.

**Sexto.** El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto.

En la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, se deberán emitir los lineamientos y modelos a que se refiere el artículo 49, fracciones I, VIII, XV y XVI de esta Ley.

En la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, que se lleve conforme a lo dispuesto por esta Ley, se deberán emitir los criterios de certificación y especialización previstos en el artículo 55.

**Séptimo.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos previstos en el artículo transitorio anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las Entidades Federativas deberán poner en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

**Octavo.** En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las Procuradurías Locales deberán incorporar en un registro provisional, electrónico o impreso, la información de los Reportes, Denuncias o Noticias recibidas conforme a lo que establece el artículo 106 de esta Ley.

La Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la información contenida en los registros provisionales a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

**Noveno.** El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable.

**Décimo.** A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que las disposiciones contenidas en el mismo contemplen la descripción legal de conductas previstas en otras normas como delitos y por virtud de la presente Ley se denominan, tipifican, penalizan o agravan de forma diversa, siempre y cuando la conducta y los hechos correspondan a la descripción que ahora se establece, se estará a lo siguiente:

**I.** En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos de esta Ley, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la presente Ley;

**II.** En las investigaciones iniciadas en las que aún no se ejerza acción penal, el Ministerio Público la ejercitará de conformidad con la traslación del tipo que resulte procedente;

**III.** En los procesos iniciados conforme al sistema penal mixto en los que el Ministerio Público aún no formule conclusiones acusatorias, procederá a su elaboración y presentación de conformidad con la traslación del tipo penal que, en su caso, resultare procedente;

**IV.** En los procesos iniciados conforme al sistema acusatorio adversarial, en los que el Ministerio Público aún no presente acusación, procederá a su preparación y presentación atendiendo a la traslación del tipo que pudiera proceder;

**V.** En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal que corresponda, podrá efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado, incluyendo sus modalidades, sin exceder el monto de las penas señaladas en la respectiva ley vigente al momento de la comisión de los hechos, y

**VI.** La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, según las modalidades correspondientes.

**Décimo Primero.** El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

**Décimo Segundo.** Dentro de los treinta días siguientes a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le transferirá las herramientas tecnológicas y la información que haya recabado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dentro de los noventa días siguientes a que reciba la información a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá transmitir a las Fiscalías Especializadas la información de las Personas Desaparecidas o No Localizadas que correspondan al ámbito de su competencia.

Las Fiscalías Especializadas deberán actualizar el contenido del Registro Nacional, conforme a lo siguiente:

**I.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que reciban la información, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá recabar información sobre las personas inscritas en el Registro previsto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que correspondan a su ámbito de competencia, a fin de que dicha información esté apegada a lo dispuesto en el artículo 106 y, en su caso, al artículo 112 de esta Ley;

**II.** En términos de la fracción anterior, las Fiscalías Especializadas que estén impedidas materialmente para actualizar la información dentro del plazo previsto, deberán publicar un padrón con el nombre de las Personas Desaparecidas o No Localizadas cuya información no haya sido actualizada, a efecto de que, dentro de los ciento veinte días siguientes, los Familiares y organizaciones de la sociedad civil proporcionen la información que pudiera resultar útil para realizar dicha actualización;

**III.** Una vez actualizada la información, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá ingresarla al registro que corresponda, a excepción de que la actualización revele que la persona fue localizada, en cuyo caso, se asentará en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y

**IV.** Al haberse realizado la acción prevista en la fracción II de este artículo, de no haberse actualizado el registro, la Fiscalía Especializada que corresponda estará materialmente imposibilitada para actualizarlo. En este supuesto, el registro permanecerá con la anotación de actualización pendiente y será migrado, con ese carácter, al registro que corresponda.

**Décimo Tercero.** El Banco Nacional de Datos Forenses, los registros forenses Federal y el de las Entidades Federativas comenzarán a operar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los tres meses siguientes a que inicie la operación de dichos registros, las autoridades que posean información forense deberán incorporarla al registro que corresponda.

**Décimo Cuarto.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deberá emitir el Protocolo Homologado de Investigación a que se refiere el artículo 99 de esta Ley.

**Décimo Quinto.** Las autoridades e instituciones que recaban la información a que se refiere el artículo 103 la deberán incorporar en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**Décimo Sexto.** En las Entidades Federativas en las que no exista una Comisión de Atención a Víctimas, las instituciones públicas competentes de la Entidad Federativa deberán brindar la atención a Víctimas conforme a lo establecido en el Título Cuarto de esta Ley.

**Décimo Séptimo.** Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.

**Décimo Octavo.** Los lineamientos para determinar las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres o restos de personas a que refiere el artículo 130 de esta Ley deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

**Décimo Noveno.** La Procuraduría General de la República debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, conforme a lo previsto en los artículos 131, fracción III y 132, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior la Procuraduría General de la República emitirá los lineamientos necesarios para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan en forma homologada la información que será integrada al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y al Banco Nacional de Datos Forenses previstos en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

**Vigésimo.** En tanto las Entidades Federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de Búsqueda, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

Asimismo, las Entidades Federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto.

**Vigésimo Primero.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá emitir los lineamientos a que se refiere la fracción XIV del artículo 53 de la Ley.

12-10-2017
Cámara de Diputados.
**DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.
**Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 396 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 10 de octubre de 2017.
Discusión y votación 12 de octubre de 2017.

**DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, Y DE DERECHOS HUMANOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD**

# Diario de los Debates

México, DF, jueves 12 de octubre de 2017

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

**La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:** Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

VOLUMEN IV

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

Permítame un segundo, nada más para saber si proseguimos con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No.

Quiero explicar a la asamblea, antes de iniciar el debate de este dictamen, que tenemos inscritos, además del fundamento de la comisión, el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios. Pasaríamos después a la discusión en lo general y están inscritos siete oradores de distintos grupos parlamentarios, pero todos los oradores son en pro.

Por lo tanto, al pasar tres oradores tal y como lo establece el Reglamento, la Mesa va a preguntar si se encuentra suficientemente discutido. La Mesa no tiene ningún inconveniente en que otros oradores en pro también se expresen, por lo que les pediríamos sírvanse a aprobar como asamblea que pasen otros tres oradores y haremos lo propio con el restante.

Así es que, hechas estas aclaraciones, vamos a darle el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado, al señor presidente de la Comisión de Justicia, el diputado don Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar el dictamen en materia de desaparición forzada de personas a nombre de la Comisión de Justicia.

**El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa**: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento a su consideración de este honorable pleno, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y se derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. Lo anterior es relevante ya que en México desde hace tiempo se enfrenta un problema serio en materia de desapariciones.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tiene constancia, de más de 30 mil personas desaparecidas. Diversos organismos internacionales han establecido que el delito de desaparición forzada de personas en nuestro país no responde a estándares internacionales, lo que impacta en la investigación, persecución y sanción de dicho delito.

La falta de legislación idónea al respecto impacta directamente en las víctimas de la desaparición y de sus familiares. Por ejemplo, al no haber mecanismos claros para la indagación, se ha propiciado que las autoridades que revisan la investigación no tengan la coordinación o la información suficiente para la búsqueda, o en algunos casos que los propios familiares realicen la búsqueda de sus seres queridos, muchas veces arriesgando su integridad.

También, compañeras y compañeros, en muchos casos se enfrenta ese problema legal de índole crediticio o civil, ya que la legislación actualmente no es homogénea en reconocer los derechos que deben prevalecer cuando una persona se encuentra desaparecida.

Quienes integramos las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos coincidimos en la necesidad de escuchar las justas exigencias de las víctimas y sus familiares, por lo que, por amplia mayoría en la reunión de comisiones, todos los partidos políticos votamos a favor de la ley, misma que contempla lo siguiente.

La tipificación de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares conforme a estándares internacionales, lo cual permite mayor garantía a las víctimas y una mejor persecución de este fenómeno, por lo que estos delitos se perseguirán de oficio y tendrán carácter permanente y serán imprescriptibles.

El establecimiento de la declaración especial de ausencia, con la finalidad de proteger los derechos de las personas desaparecidas, así como también de brindar la seguridad y tranquilidad a sus familiares.

Algunos beneficios son la protección de sus bienes, incluidas cuestiones crediticias hipotecarias, el mantenimiento de los derechos sociales quienes dependan de una persona desaparecida, y la suspensión provisional de los actos jurídicos en contra de sus derechos o bienes. Esto responde a una serie de necesidades inmediatas de los familiares de personas desaparecidas. La declaración especial de ausencia logrará brindarles tranquilidad durante el difícil proceso al que enfrentan.

La creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual operará en coordinación con diversas autoridades, lo que permitirá agilizar y hacer más eficiente la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, atendiendo al derecho a la verdad de las víctimas.

La instauración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, principal herramienta para la realización de las investigaciones. El reconocimiento de la reparación integral del daño, con lo cual se busca que las víctimas puedan superar los hechos victimizantes y materializar su proyecto de vida.

Con la expedición de esta ley, México será el primer país con una legislación especializada en esta materia, garantizando los derechos como la verdad, la justicia y la reparación.

Compañeras y compañeros diputados, como representantes de la nación es nuestra responsabilidad dar voz a quienes están ausentes y brindar tranquilidad a sus familias. Debemos garantizar que el tiempo no signifique olvido y evitar que el sufrimiento de las víctimas sea silenciado, sobre todo debemos asegurar que el crimen no quede impune.

Por lo tanto, exhorto a votar a favor del presente dictamen, acción histórica e impostergable para atender uno de los flagelos que más ha impactado a nuestro país. Es cuanto, señora presidente.

**Presidencia de la diputada Martha Hilda González Calderón**

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Muchas gracias, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado en primer lugar para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, y con esto le concedo el uso de la palabra, a la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

**La diputada Ana Guadalupe Perea Santos**: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad en su conjunto condena enérgicamente a la desaparición forzada y reconoce el compromiso derivado del deber impuesto por nuestra Carta Magna y por los instrumentos internacionales de protección a la persona humana, que constituyen obligaciones vinculantes que hacen indispensable la armonización legislativa que permita su debida instrumentación.

Los principales instrumentos en la materia son la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2005, vigente para México desde 2010, la que en su artículo 2o. define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

En 2013, el gobierno de la República dio a conocer que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012 habían desaparecido 26 mil 121 personas, derivado de lo anterior múltiples legisladores de distintos grupos parlamentarios, algunos trabajando conjuntamente con distintos colectivos sociales, se dieron a la tarea de presentar diversas iniciativas en esta materia.

Por su parte, el Estado mexicano emprendió, entre otras acciones para la atención de este problema, la creación de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y la suscripción del convenio de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, del actual se derivó la creación de un grupo de trabajo de desaparición forzada, en la que participa el Comité, la Secretaría de Gobernación, la PGR, la Policía Federal, para abordar de manera integral este problema.

El dictamen de la minuta que hoy nos ocupa, tiene por objeto expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, así como reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley General de Salud.

Estas últimas, a fin de armonizar y articular el sistema jurídico al derogar tipos penales que ahora serán regulados por la Ley General en comento. Así como adecuar lo relativo al tratamiento de cadáveres y restos de personas no identificadas.

La minuta en comento comprende aquellos puntos referidos por el informe emitido por el grupo de trabajo antes referido y contiene disposiciones de avanzada en materia de derechos humanos.

Tomando en consideración la experiencia nacional e internacional, las previsiones de los tratados internacionales y las observaciones y recomendaciones hechas a nuestro país por los sistemas universal e interamericano de derechos humanos, asimismo establecen la distribución de competencia y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como esclarecer los hechos. En esta oportunidad, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará en favor del dictamen de mérito.

Celebramos que el Congreso de la Unión en el ámbito de su competencia atienda esta grave problemática. Se lo debemos a las víctimas, a sus familiares, se lo debemos a México y a sus generaciones por venir.

Un país verdaderamente comprometido contra la desaparición forzada es posible. Por eso, hagámoslo nosotros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Muchas gracias, diputada Ana Guadalupe Perea Santos. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

**El diputado Carlos Gutiérrez García:** Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México atraviesa por una profunda crisis en materia de derechos humanos, así lo han manifestado diversas organizaciones internacionales, quienes reiteradamente señalan que el territorio mexicano se sigue percibiendo como un lugar en donde de manera cotidiana se violan los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La desaparición forzada de las personas forma parte de este clima de violaciones a los derechos fundamentales, que data de la época de la llamada Guerra Sucia, iniciada en la década de los años sesenta.

Más allá, la desaparición forzada en México no solo se lleva a cabo por motivos políticos, ahora se vive un nuevo fenómeno de desapariciones perpetradas por el crimen organizado, que se han extendido a sectores de la población que no representan oposición política al Estado.

En Nueva Alianza creemos firmemente en el respeto a las libertades fundamentales y el Estado de derecho. Por ello, estamos plenamente comprometidos en la búsqueda de la verdad sobre las personas que de manera forzada han desaparecido.

El dictamen por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas brinda los mecanismos para garantizar que la desaparición forzada de personas no quede más en la impunidad.

En primer lugar, porque prohíbe la prescripción del delito de desaparición forzada, para el cual no aplicará ni amnistías ni indultos que puedan conducir a la impunidad. Además, establece los tipos penales en materia de desaparición de personas, así como sus sanciones, que pueden llegar hasta los 90 años de cárcel. Es de resaltar la creación de la declaratoria especial de ausencia, que procederá a tres meses de iniciada la búsqueda a petición de los familares del desaparecido, a quienes, además, se les otorgarán los medios y las medidas de asistencia necesarias durante el procedimiento de búsqueda.

Asimismo, establece la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un registro nacional de fosas, un banco nacional de datos forenses, además del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y una Comisión Nacional de Búsqueda, atendiendo con ello una de las principales demandas de los familiares de las víctimas.

De igual manera, contempla los mecanismos de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, para prevenir, sancionar y erradicar este aberrante delito.

Compañeras y compañeros, con este dictamen respondemos a la obligación que tenemos con la sociedad, pues mientras no podamos garantizar la seguridad integral de los ciudadanos, tendremos una deuda pendiente con ellos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Muchas gracias, diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario del de Nueva Alianza.

Permítanme abrir un paréntesis para saludar la presencia de estudiantes y profesores de la licenciatura en economía y finanzas de la Universidad Iberoamericana campus del estado de Puebla. Invitados por nuestra compañera, Fabiola Rosas Cuautle. Muchas gracias por su presencia.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

**La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:** Gracias, presidenta. Hoy nos acompañan familiares de Veracruz, Jalisco, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Tamaulipas. Muchas gracias por estar aquí.

Hace varios años en esta tribuna, una mujer clamó por la búsqueda de las y los desaparecidos y a ella debemos tenerla en cuenta aquí hoy y traerla a nombrarla, la señora Rosario Ibarra de Piedra, a quien le desaparecieron a su hijo. Desde entonces esta práctica no ha disminuido, sino al contrario, pareciera que hoy estamos peor. Que el dictamen que hoy discutimos es el reflejo del doble dolor de cientos de familias que han padecido la desaparición de familiares y seres queridos.

Desde los años setenta del siglo pasado, durante la llamada Guerra Sucia, vivimos el flagelo de la desaparición forzada, casos como el de Jesús Piedra, Rosendo Radilla y hoy los 43 de Ayotzinapa, así como los que cada día se suman más, han sido el grito de: vivos se los llevaron, vivos los queremos. La desaparición forzada constituye un acto de abuso de poder por parte de la autoridad, un abuso de poder porque se conculca, en perjuicio de la víctima, el principio de presunción de inocencia, se borra. Un abuso de poder porque se avasallan los derechos humanos y garantías de las víctimas.

El dictamen que hoy discutimos contiene un avance que a muchos pudiera parecer insuficiente, pero que es de las pocas leyes que cuenta con el aval de familiares de las víctimas. En Movimiento Ciudadano creemos que es perfectible, pero estamos conscientes que queremos y vamos a aprobarla. Esperemos que haya 485 votos para que la voten.

La imprescriptibilidad del delito que aun cuando operará a partir del inicio de la vigencia de esta norma es un avance, así como la responsabilidad de los superiores jerárquicos del autor material del delito de desaparición forzada de personas, serán considerados también autores del delito; también la desaparición forzada por particulares, la desaparición de un cadáver por diferentes métodos, entre otros.

Se prevé una Comisión Nacional de Búsqueda cuyo objeto es dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. No nos parece viable la propuesta de que el titular de dicha comisión sea designado por el presidente, ya que el gobierno federal, a quien se le imputa el mayor número de actos de desaparición forzada, además será el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, como lo establece el artículo 50.

Esto es un riego porque es poner todo el sistema en manos del gobierno. Pero creemos que debe establecerse un organismo descentralizado y no sectorizado. Seguiremos impulsándolo.

Por otro lado, esta ley debe contar con los recursos económicos para su operación y eso lo vamos a tener que integrar en el Presupuesto de Egresos, a punto de empezar la discusión.

La creación del Consejo Nacional Ciudadano, de fiscalías especializadas en el ámbito federal y en los estados, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, la creación del Banco Nacional de Datos Forenses; en este sentido en la fracción ciudadana propusimos el instituto nacional de antropología forense que todavía no ha sido votado.

Sobre este tema creemos que falta también el registro de marcas genéticas, como lo ha recomendado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y será una tarea a los ministerios especializados.

Se reconocen los derechos de las víctimas, se incorporan las medidas de reparación integral del daño como un reconocimiento a la responsabilidad del Estado por acción y omisión en la desaparición forzada de personas.

No quiero dejar de mencionar que Jalisco es la tercera entidad con más casos registrados de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas con un 8.9 por ciento del total nacional, y antecedido solo por el Estado de México y Tamaulipas. Hasta el momento las cifras de denuncias ante la Fiscalía General del Estado sobre personas desaparecidas es de 2 mil 430. Durante el periodo de 2006 a 2016 los reportes de desapariciones se duplicaron en la entidad de 987 a mil 950.

Aunque las autoridades estatales no tienen registros actualizados, sin embargo reportaron que en 2015, mil 161 mujeres desaparecieron en Jalisco, la mayoría menores de 18 años. Jalisco es el quinto estado con mayor número de mujeres adolescentes desaparecidas con una cifra de 139.

Vamos a destiempo, pero esta larga espera que valga la pena y que ninguna familia vuelva a padecer la angustia de no saber de un ser querido. En memoria de ellos votaremos a favor. Muchas gracias.

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Gracias, diputada Candelaria Ochoa Avalos. Hasta por cinco minutos se le concede el uso de la palabra a la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

**La diputada Lia Limón García:** Con la venia de la Presidencia. No hay dolor más grande que a mí me haya tocado ver, que el de una persona que está buscando a un familiar, el de las madres —hoy aquí algunas de ellas presentes— que por años han estado buscando a sus hijos.

A las víctimas de este delito les debemos la aprobación de la ley, a las víctimas de este delito les debemos la implementación de esta ley, a las víctimas de este delito les debemos un esfuerzo conjunto de todas las autoridades por avanzar para que no haya más mujeres que por años siguen buscando a sus hijos.

Además —también hay que decirlo— constituye una respuesta a recomendaciones tanto de instancias nacionales como internacionales en materia de derechos humanos.

Este dictamen refleja un esfuerzo importante tanto de la Cámara alta como del Ejecutivo federal y organizaciones nacionales, internacionales en materia de derechos humanos, así como organismos de derechos humanos, la CNDH, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, y por supuesto —además— también cuenta con las valiosísimas aportaciones de organizaciones específicas que se han creado para el tema de búsqueda de personas en las cuales participan principalmente los familiares de las mismas.

Por ello el Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de este dictamen, toda vez que su aprobación genere herramientas que permitan una búsqueda más eficiente de las personas. Además de crear sanciones adecuadas para quienes cometan este tipo de delitos, y destaco algunos de los aspectos que me parecen los más relevantes de esta ley.

Primero se deroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que había sido aprobada en 2012 y que fue una ley, no solo que nunca sirvió, sino que no ayudó a una eficiente búsqueda de personas.

Se establecen las reglas para la distribución de competencias y coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Y aquí hay que decirlo, si no se hace un esfuerzo conjunto entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, será muy difícil avanzar en este tema.

La implementación de esta ley depende del esfuerzo comprometido, conjunto de las autoridades y, por supuesto, de que las instancias que se crean cuenten con el presupuesto necesario para funcionar.

Se establecen también disposiciones para la tipificación de las conductas punibles y otras de observancia durante el procedimiento penal, tales como el establecimiento de tres tipos de delitos con sanciones ejemplificativas, el de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados.

¿Por qué es de gran relevancia esto? Porque esto permitirá sancionar aquellos casos en donde no se prueba participación del Estado, pero la desaparición se dio en términos similares, y por lo tanto se sanciona también la desaparición que es cometida por particulares con características similares, pero sin la participación de agentes del Estado.

Por otro lado también, se agravan las penas en caso de que la persona desaparecida pertenezca a un grupo vulnerable, es decir, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer embarazada, persona con discapacidad o adultos mayores, también periodistas o defensores de derechos humanos.

Además, se establecen estos delitos como imprescriptibles. Se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas cuyo objeto es diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda y localización de estas personas desaparecidas.

Y, para el desarrollo de sus funciones esta instancia contará con diversas herramientas: un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y un banco de datos forense, esto ¿por qué es fundamental? Porque hasta hoy no está establecida en ninguna ley, herramientas que permitan hacer el cruce de información entre un cadáver no identificado y una denuncia de una persona desaparecida. Cuando estos casos incluso pueden suceder, la denuncia en un estado y el cadáver encontrado en otro estado, hasta hoy no existe una forma legal de cruzar esa información. Esta ley obliga a crear un registro y un sistema que se cruce y que permita con mayor facilidad la búsqueda y localización de personas.

Además, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, quien tendrá a su cargo la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Y se crea también un Consejo Ciudadano.

¿Por qué me parece fundamental este Consejo Ciudadano? Porque son los ciudadanos, y particularmente las madres de personas desaparecidas, quienes tienen ya hoy una experiencia acumulada, que tienen muchísimo que aportar al funcionamiento de este nuevo sistema. Muchas madres y muchos miembros de organizaciones que en distintas entidades federativas han impulsado mecanismos que en algunos casos han dado buenos resultados y que se debe buscar que se repliquen a nivel nacional.

Por ello, la participación de los ciudadanos, y particularmente de las víctimas, será fundamental. Además, congruente con la Ley General de Víctimas, esta ley establece diversos derechos de las víctimas...

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Concluya, diputada.

**La diputada Lia Limón García:** Y de las víctimas indirectas, que son los familiares de las personas desaparecidas, entre ellos la reparación integral y protección de las mismas. Por estos elementos y por el último punto que quiero señalar, es el que tiene que ver con la declaración especial de ausencia, hoy no existe una herramienta que permita a los familiares ejercer los derechos patrimoniales cuando una persona está desaparecida, porque los familiares evidentemente no quieren que se le declare muerta porque se le dejaría de buscar. Con la declaración de ausencia se permitirá que los familiares de personas desaparecidas puedan ejercer derechos, como lo son los derechos patrimoniales.

Por estos temas que acabamos de destacar, e insisto, porque esta ley se le debe a las víctimas de este delito, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del mismo. Gracias. Es cuanto.

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Gracias, diputada Lia Limón García. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

**La diputada Ernestina Godoy Ramos:**Gracias, presidenta. Saludo con mucha admiración. Hago un reconocimiento a las familias que hoy nos acompañan. Familias de desaparecidos que han sacado fuerza de su dolor y luchado para encontrar a sus seres queridos, y empujado a este Congreso a aprobar un marco jurídico para transformar a las instituciones del Estado en responsables de la búsqueda de las miles de personas desaparecidas.

Las miles de personas desaparecidas son dolor continuado, es maldad extendida que siembra fosas, acaba con la vida, pisotea la esperanza, destroza familias, es la cara de la indiferencia y la indolencia de la sociedad entera.

En México se desaparece a personas porque está permitido. Es herencia del PRI gobierno y la Guerra Sucia, donde fuerzas del Estado mexicano persiguieron, torturaron, eliminaron y desaparecieron a disidentes políticos, luchadores sociales y jóvenes combatientes.

La guerra iniciada por el PAN y Calderón ha dejado muerte y destrucción. En México se desaparece personas para silenciar periodistas, para sembrar terror, para tapar la corrupción, para eliminar adversarios políticos, para acabar con la protesta, para apropiarse del patrimonio de personas, para acabar con la competencia, para reafirmar el machismo, para obtener ganancia económica, por disgusto, por quedar bien, por despecho, porque son jóvenes, porque son mujeres, por su religión, por su preferencia sexual, por su color de piel, por sus ideas, por su profesión. Por todo. Se ha instalado la maldad entre nosotros y todos lo hemos permitido.

De acuerdo a las cifras, al cierre de 2016 existía registro de 30 mil 499 personas desaparecidas o no localizadas. En cada uno de esos números vamos a encontrar a personas iguales a nosotros, a nuestras hijas, iguales a nuestros hijos, iguales a nuestros padres, hermanos, vecinas, amigas, primos, compañeros. Todos y todas son víctimas no culpables de uno de los crímenes más atroces y más recurrente en México, que es la desaparición forzada. La mayoría de jóvenes con una vida por delante.

Para los familiares, dolor extendido, punzada que se prolonga en el tiempo. Es angustia, desesperación, impotencia, indignación, coraje, esperanza, pesadilla, ausencia, recuerdos, silencio, búsqueda, organización, lucha contra el olvido, enojo, exigencia. Sufren impunidad, complicidad, colusión, corrupción, indiferencia, estigma. Enfrentan la criminalización, la normalización de la violencia, la insensibilidad de las autoridades, de ministerios públicos, policías y militares, incapaces de integrar averiguaciones para buscar y encontrar a las personas desaparecidas.

Los familiares tienen los corazones destrozados porque se llevan sus sueños y su tranquilidad y su esperanza. Para ellos no hay consuelo, se acaba todo, su vida se sustituye por la búsqueda. No son ni viudas ni son huérfanos, se quedan en el limbo, se convierten en nómadas y buscadores. Luchan, salen a la calle, sustituyen a la autoridad, investigan, abren fosas, encuentran, arriesgan su vida.

Lo más terrible es que la mayoría de la sociedad nos acostumbramos. Es mejor seguir de largo y asumir que estamos lejos de las balas. El país está carcomido en su espíritu, pocas cosas nos cimbran ya y nos movilizan.

En estos últimos años han sucedido en México los crímenes más atroces y terribles, ante ello es mejor voltear y asumir que a nosotros no nos va a pasar.

Por ello es importante que el Congreso, aunque sea tarde, asuma como una tarea del Estado la búsqueda y localización con vida de las personas desaparecidas. Que el Estado y la sociedad asuman como propio el dolor y la indignación de los familiares y luchemos porque nunca más la desaparición forzada en México sea parte de lo cotidiano.

Morena votará a favor, porque esta ley representa un avance, aunque no cumple con una serie de recomendaciones, tenemos que seguir luchando. No se prevé el tipo penal que se encuentra definido en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El artículo 29, al referirse a la responsabilidad del superior jerárquico en la comisión del delito, no guarda correspondencia con el artículo 6 de la mencionada convención. En caso de delito de desaparición forzada por agentes del Estado, en lo particular a perteneciente a Fuerzas Armadas, estos tienen que estar sujetos a la jurisdicción civil.

En este sentido, falta coincidencia con los estándares internacionales y lo que tenemos en el dictamen.

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Concluya, por favor.

**La diputada Ernestina Godoy Ramos:** Sin embargo, con este conjunto de leyes que hoy se someten a consideración se da un paso hacia adelante en el cumplimiento de las obligaciones, para respetar, promover y garantizar los derechos humanos.

Por ello, a pesar de que no es suficiente la creación de este marco normativo, reconocemos el avance y votaremos a favor. Sin las familias, no, porque vivos se los llevaron. Es cuanto.

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Gracias, diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

**El diputado Erik Juárez Blanquet:** Con el permiso de la Presidencia. Amigos y amigas diputados, con esta ley de cierto modo se le hace justicia a los muertos sin tumba, a las tumbas sin muertos, a los que nunca regresaron, al dolor de las familias, al corazón roto de cada una de las madres que sufren la ausencia de sus hijos, a los que levantó el crimen organizado, a los que acalló la voz del Estado mexicano.

Compañeros y compañeras, con esta Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas, de Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aunque de manera tardía, se hace justicia a las más de 32 mil víctimas registradas en este país y, desde luego, había que reconocer el papel que han jugado las víctimas, los diferentes órganos de esta Cámara y las comisiones que trabajaron este dictamen.

Para algunos esta ley pareciera insuficiente, sin embargo nos muestra grandes avances, de acuerdo a la triste realidad y a la grave crisis humanitaria que vive nuestro país, por eso yo entiendo que esta ley es de las más especiales, de las más humanas y de las más sentidas, que es uno de los más grandes legados que deja esta Legislatura al pueblo de México y en especial a las miles de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Les adelanto que en el PRD votaremos a favor de este dictamen. En el PRD ha sido esta ley una prioridad en nuestra agenda legislativa. Pero además, históricamente nuestro partido ha luchado por los derechos humanos, por la vida, por la dignidad humana y por nuestras libertades democráticas. Por eso estaremos a favor.

Quiero aprovechar esta tribuna para de alguna forma rendir homenaje a las víctimas del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, que fueron miles acribillados en manos del Ejército. Desde luego, también recordar ese Jueves de Corpus en 1971. Las víctimas de la Guerra Sucia, los periodistas desaparecidos, los activistas de los ochenta y de los noventa. Y desde luego, también un homenaje muy sentido a las víctimas que aportamos el PRD cuando la fundación de nuestro partido y por la lucha de la democratización en la vida pública de este país.

Y no puedo dejar de mencionar, compañeras y compañeros, a los 43 normalistas de Ayotzinapa, que hace 3 años y 15 días nos faltan, están ausentes y que tenemos la esperanza de contar con su regreso porque no nos convence la versión oficial de la Procuraduría General de la República.

Por eso en esta tribuna quería aprovecharlo y ojalá que ustedes también valoren la importancia que tiene este legado y esta ley para todo el pueblo de México.

Decirles también a aquellos que piensan que esta ley es insuficiente, que es todo lo contrario, es al revés. Con esta ley se está garantizando la protección integral a los derechos de las personas desaparecidas en tanto no conozcamos su suerte y su paradero.

Es importante la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el que se establezca y se obligue a las entidades federativas a consolidar sus comisiones locales. Y desde luego, es importante que se tome en cuenta en el proceso de investigación a las familias de las víctimas.

Esta ley nos va a permitir obligar la coordinación de las autoridades de todos los niveles en la búsqueda de las personas desaparecidas. Con esta ley se crean los tipos penales en materia de desaparición forzada, pero no solo eso, se obliga al esclarecimiento de los hechos, algo que no existía. Se obliga también a la investigación, a la prevención, a la sanción y a la erradicación de los delitos en materia de desaparición forzada de personas.

Por eso, hoy tenemos mucho que celebrar. Este es un mensaje de esperanza para esos cientos y miles de víctimas en todo nuestro país. En el PRD seguiremos trabajando en estos temas que son tan sensibles para la población, porque con esta ley estamos acercando a las víctimas a la verdad, a la reparación y a la justicia. Seguiremos trabajando, compañeros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchísimas gracias.

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Gracias, diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Continuando con nuestro orden de participaciones, se le concede el uso de la palabra a la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

**La diputada Lorena del Carmen Alfaro García:** Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Ningún delito deja tantos agravios, incertidumbres y desgarramiento social y familiar como lo es la desaparición forzada de personas. El ejercicio abusivo más perverso, alevoso y aterrador de poder se da cuando se desaparece a una persona, dejando a sus seres queridos con la eterna incertidumbre de su existencia, de su agonía o de su muerte.

Compañeras y compañeros diputados, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia nos presentan un dictamen de la mayor trascendencia para nuestro país. Con la emisión de la Ley General en

materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas el Congreso de la Unión paga una deuda histórica en materia de derechos humanos y el Estado mexicano queda obligado a observar los más altos estándares en el respeto de la libertad, ya sea política, de conciencia, de expresión, de militancia o de compromiso social.

Las disposiciones que hoy están a nuestra consideración implican la homologación del delito de desaparición forzada de acuerdo a instrumentos internacionales. Así, esta ley general que habrá de regir en todo el país tiene como objeto prevenir y combatir una de las conductas que mayor lesión generan a los mexicanos.

En un Estado de derecho no hay nada más reprobable que el hecho de que las autoridades abusen de los gobernados por sí o coaligándose con otros particulares. Desafortunadamente en nuestro país tuvimos un periodo ominoso conocido como el de la Guerra Sucia, en el que algunos elementos del Estado participaron en la desaparición de líderes sociales y activistas. Se trata de un episodio del pasado con afrentas graves, algunas de ellas se han llevado a la justicia internacional como es el caso de Rosendo Radilla Pacheco.

México ha cumplido con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años, además se reformó la Constitución para garantizar la vigencia del régimen universal de defensa de los derechos humanos y es precisamente en esta reivindicación del Estado mexicano a favor de la dignidad humana que se inscribe esta necesaria ley. No obstante, recientemente hemos sido testigos de terribles actos en los que se conjuga el poder político con el crimen organizado, resultando en la desaparición de personas, eventos que aún esperan a que se haga justicia.

Así el Grupo Parlamentario del PAN reitera enérgicamente su exigencia de que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa se lleve hasta las últimas consecuencias. No hay ley que valga, ni palabras que devuelvan a muchísimas familias la paz ante la tragedia de que son víctimas. Y hoy quiero reconocer desde esta alta tribuna, la participación activa y comprometida de diversas organizaciones sociales, muchas de ellas en las que participan familiares de víctimas que han sido desaparecidas. A lo largo de estos dos años han estado trabajando en el análisis de esta ley con el único interés de que esta nueva ley llegue a buen puerto.

La ley que vamos a aprobar y cuyo voto a favor anuncia el Grupo Parlamentario del PAN, contiene componentes muy importantes de tres categorías: sustantiva, adjetiva y orgánica.

Se unifica el tipo penal de la desaparición forzada con sus modalidades y agravantes. Se disponen elementos en virtud de los cuales se habrán de poner todos los recursos del Estado: humanos, tecnológicos, legales, para dar con el paradero de las personas desaparecidas y se crea el Sistema Nacional de Búsqueda.

El Grupo Parlamentario del PAN entrega esta ley y exhorta a todas las autoridades a su aplicación irrestricta. Al hacerlo queremos rendir un homenaje a todos los ciudadanos que han perdido la vida y a sus familiares que viven en permanente angustia. Para todos ustedes nuestra solidaridad y nuestro apoyo.

Al unísono con la sociedad, el día de hoy queremos afirmar: Ni un desaparecido más en México. Es cuanto, señora presidenta.

**La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón:** Muchas gracias, diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**El diputado Armando Luna Canales:** Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Saludo con especial afecto a los familiares de personas desaparecidas, a quienes integran los distintos colectivos que nos acompañan el día de hoy, y en general a todos los activistas, a los presentes y a los que nos siguen a través del Canal del Congreso. Aprovecho para reconocer su trabajo y el seguimiento que han dado al proyecto que el día de ponemos a discusión.

Diputadas y diputados, por favor miren a la galería. Ellos son los autores de esta ley. Señoras y señores, esta es su ley. No se trata de una ley cualquiera, es —sin lugar a dudas— la ley más importante que votaremos en la presente Legislatura, es una ley especial por su proceso de elaboración, por su contenido y especialmente por su motor que no es otro más que el amor infinito que en ella depositaron quienes en forma incansable y permanente buscan a sus seres queridos.

Cada artículo lleva una enorme carga de dolor, pero también de esperanza. Cada artículo busca resolver problemas reales que estas familias han y siguen enfrentando en su incansable tarea de búsqueda.

Veo con tristeza que algunos de los grupos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, cedieron ante la tentación de politizar este tema. Qué pena.

Hago mías las palabras que hace un par de años en esta misma Cámara hiciera o pronunciara la señora Yolanda Morán, los partidos, y hago énfasis, todos, no tienen derecho a utilizar a los desaparecidos para sus fines políticos. Al igual que la señora Yolanda, les aseguro que los diputados tampoco tenemos ese derecho, por humanidad, por respeto, por sensibilidad, no tenemos ese derecho, hacerlo es inmoral.

En la bancada del PRI impulsamos el fortalecimiento al Estado de derecho y a las instituciones de prevención, persecución y administración de justicia. Nuestros documentos básicos dan cuenta de ello y nuestras acciones —como la del día de hoy— así lo demuestran.

El PRI ha hecho de los derechos humanos el centro de su agenda política y de gobierno. Siguiendo ese mandato hoy impulsamos y respaldamos esta ley en contra de las desapariciones.

Al aprobar esta ley, daremos cumplimiento a las recomendaciones que han formulado distintos organismos internacionales: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos ellos aquí presentes. A todos ustedes nuestro eterno agradecimiento.

La desaparición es —sin duda— una de las más graves violaciones de derechos humanos, atenta contra los derechos más elementales de las personas, hiere a las familias de las víctimas, rasga el tejido social y pone a prueba las capacidades y recursos de todos los órdenes de gobierno.

Es por ello que el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, tomó la determinación de afrontar este problema, no con retóricas, sino con acciones, empezando por reconocerlo y dejar atrás una política que invisibilizaba a los desaparecidos para pasar así de un gobierno que criminalizaba y revictimizaba, a uno que busca proteger y garantizar los derechos. Por ello era necesario formalizar esta nueva actitud en un nuevo marco legislativo.

Así, el presidente Peña inició la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para aprobar la ley que hoy estamos discutiendo. Presentó también esta ley el propio Ejecutivo federal.

El dictamen que votaremos recoge las preocupaciones y propuestas hechas por familiares, movimientos sociales, organismos internacionales y por las propias autoridades mexicanas.

Debo destacar que en el articulado de esta ley están las bases para hacer una búsqueda sistemática, permanente, profesional, coordinada, y más importante aún, la búsqueda en vida de las personas desaparecidas.

En este proyecto están también los elementos necesarios para esclarecer los hechos mediante una investigación profesional y especializada, esta ley tiene la clave para dar justicia y verdad a las víctimas. Asimismo establece el mecanismo para garantizar los derechos de las personas desaparecidas, específicamente a través de la declaración especial de ausencia.

La ley que hoy votamos es, sin lugar a dudas, la primera buena noticia que en mucho tiempo reciben miles de familias de todo el país. Es una muestra de cumplimiento de obligaciones humanitarias internacionales, sin duda, pero es al mismo tiempo, la ruta para llegar a un país sin desaparecidos.

Castigo para los responsables, justicia y verdad para las víctimas, garantizar la no repetición de este terrible delito. Esa es la idea en la que convergemos los diputados del PRI al aprobar esta ley.

La desaparición de una persona representa un reto ineludible para cualquier Estado, pues su maquinaria de justicia e investigación se ponen a prueba, no solo frente a sus ciudadanos, sino ante el mundo entero.

El día de hoy se empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, la historia de un México sin desaparecidos, un camino largo, pero hoy vemos el final de esta ardua etapa. La puesta en marcha requerirá sin duda de un gran impulso, hay muchísimas cosas por hacer aún, pero un gran impulso seguro se lo tendremos que dar como en el que en esta Cámara dio nuestro coordinador, César Camacho Quiroz, al priorizar la discusión y votación de este tema.

A las familias de desaparecidos aquí presentes y a las de todo el país, les decimos que los diputados del PRI votaremos a favor de este dictamen porque estamos convencidos que es para su beneficio y el de todos los mexicanos. Votaremos a favor porque estamos empeñados en construir un país de respeto pleno a los derechos humanos. Es cuanto, presidente.

**Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín**

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Se informa a la asamblea que ha concluido el plazo con esta intervención para la presentación de reservas al dictamen a discusión.

Al respecto quisiera ampliar un poco la información sobre lo que estamos discutiendo. Esta es una minuta del Senado, una minuta que obedece a iniciativas presentadas por distintos senadores, el propio Ejecutivo federal, grupos parlamentarios, y fue recibida en esta Cámara el 28 de abril de 2017.

Siendo una minuta del Senado y procesándose con nosotros sin cambios, lo que acontece es que de aprobarse se turna inmediatamente al Ejecutivo para que surtan los efectos correspondientes. En caso de que se aprobara alguna de las reservas, tendría que regresar nuevamente al Senado para el procesamiento del cambio que nosotros hubiéramos autorizado.

Informado lo anterior, me permito pedirles a todos ustedes, señores diputados y diputadas, saludar la presencia de los siguientes luchadores sociales: Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Red Eslabones por los Derechos Humanos, Uniendo Cristales Estado de México, Colectivo Nos Hacen Falta, Cauce Ciudadano, Ideas Litigo Estratégico en Derechos Humanos, Comité Cerezo, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

Todos ustedes son bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Hacemos esta ley para que ustedes puedan estar más tranquilos también. Muchas gracias. Son bienvenidos.

Dicho lo anterior, entonces me permito informar a esta Cámara que pasaremos a la discusión en lo general. Al respecto se han inscrito, como les había informado, siete oradores. Procesaremos los primeros tres y preguntaré a la asamblea si está suficientemente discutido. Deseo muy atentamente que la asamblea me diga que no, para que podamos procesar a los siguientes tres oradores.

Tiene la palabra en pro la diputada Sofía González Torres, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por tres minutos, diputada.

**La diputada Sofía González Torres:**Gracias, presidente. Con su permiso. Uno de los crímenes más graves que pueden cometerse, no solamente en contra de las personas en particular, sino contra la humanidad entera, sin duda es la desaparición forzada.

La Corte Penal Internacional ha reconocido este delito como uno de los 12 crímenes de lesa humanidad, siendo imprescriptible y siendo susceptible de ser denunciado por cualquier Estado miembro. México forma parte de diversos instrumentos internacionales en los que se prevén acciones contra la desaparición forzada de personas, entre ellos la Convención Nacional de Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que conlleva obligaciones vinculantes e irrenunciables frente a las que tiene que tener ciertos deberes.

En marzo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada visitó nuestro país con el propósito de desarrollar una amplia agenda con autoridades federales y estatales, así como con las víctimas, familiares, organizaciones sociales y especialistas académicos. De esta misión derivaron diversas recomendaciones generales, entre la que destaca la necesidad de reconocer este problema con el fin de desarrollar medidas integrales y efectivas para poder erradicarlo.

En 2013, el gobierno de la República, comprometido con atender estas recomendaciones, estableció la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas dentro de la procuraduría general, y de estas diversas sentencias recaídas sobre el Estado mexicano, principalmente los casos de Campo Algodonero y por supuesto el emblemático caso de Rosendo Radilla, derivaron en sendas recomendaciones para el Estado mexicano y concretamente para nosotros, para el Poder Legislativo, para poder adoptar ciertas reformas legislativas a fin de armonizar el Código Penal Federal con los estándares internacionales y con el Convenio Interamericano de Desaparición de Personas Forzadas.

Ante estas justas demandas que vinieron, tanto de Amnistía Internacional como del Observatorio de Derechos Humanos, el Poder Legislativo empezó un arduo trabajo en conjunto con todos los actores involucrados en la materia, haciendo suyo el tema con la finalidad de dar respuesta a los familiares de las víctimas desaparecidas, que siguen en búsqueda de sus seres queridos.

Durante más de dos años esta labor en el Senado, y tras múltiples reuniones y diálogo y retroalimentación con diversas organizaciones civiles, se llegó a un consenso respecto al proyecto de ley que se está aprobando en esta colegisladora.

Ahora, si bien persisten algunas observaciones de diversas organizaciones civiles y de algunos de los legisladores, lo cierto es que el tema es de absoluta relevancia para nuestro país y por ello resulta urgente concretar la aprobación del presente dictamen, pues con ello estamos dando la respuesta a una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana.

Es por esto que el Partido Verde celebra la aprobación del dictamen dando nuestro voto a favor, pues con esto se están atendiendo diversas recomendaciones de la ONU y de múltiples organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional. Pero, sobre todo, aprueba la medida legislativa más importante en búsqueda de los desaparecidos y la atención integral de sus familiares. Muchas gracias.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Gracias a usted, diputada González Torres. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Víctor Sánchez Orozco. Él pertenece a Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.

**El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:**Mientras reine la impunidad, la justicia será solo un anhelo para los mexicanos. Esta ley llega muy tarde ante la gran tragedia humanitaria que se vive en el país, porque las desapariciones forzadas en México tienen una negra historia desde los años sesenta y setenta, con la llamada Guerra Sucia.

La desaparición forzada de personas es una estrategia de miedo, de terror. Por eso decimos que es una tragedia terrible que pasa en nuestro país.

En este tema de la desaparición forzada no solo participan servidores públicos, sino también particulares y crimen organizado. Tenemos que decir que en este país, todos y todas somos víctimas potenciales de este delito en cualquier momento, nadie se escapa y mientras estoy hablando aquí, alguien está siendo desaparecido.

Los recuerdos de incontables experiencias de la Guerra Sucia han forjado una memoria llena de negros y lamentables episodios, como el caso Rosendo Radilla Pacheco, efectuado en los años sesenta y que denotan las deficientes actuaciones de todas las instituciones, sobre todo las de procuración de justicia.

El principal obstáculo ha sido la falta de voluntad de quienes imparten justicia en este país, porque México, en términos generales, ha tenido un papel bastante deficiente o incipiente en el tema de la aplicación de las leyes, que ha dejado a los ciudadanos en un estado de indefensión.

Tenemos altos índices de impunidad, hasta el 98 por ciento en tanto a las violaciones a derechos humanos se refieren y en tanto esas violaciones no se persigan y no se castiguen a los funcionarios púbicos y a las personas involucradas en este tipo de delitos de violaciones a los derechos humanos, no vamos a tener un cambio efectivo por más leyes que elaboremos.

El Estado mexicano, y hay que decirlo con todas sus letras, se negaba a reconocer la responsabilidad que tenía enfrente, siendo el Estado mexicano por su omisión el principal responsable para rendir cuentas a las familias, haciendo notar que la impunidad es el resultado de la falta de actuación de las autoridades de procurar justicia, toda vez que en la mayoría de los casos de desaparición no se adoptan medidas exhaustivas para buscar a las personas ni tampoco para investigar lo sucedido, mucho menos para castigar a los responsables.

La pasividad e indolencia de gobernantes ha causado gran indignación en la comunidad nacional e internacional y este caso ha servido como detonador para que el tema de las desapariciones forzadas en México se plantee como un asunto de interés nacional, prioritario para el país y por el cual la sociedad reclama justicia y fin a la impunidad.

Si bien es cierto que se requieren las reformas legislativas, también se requiere que esta reforma legislativa se desdoble en políticas eficaces, porque si no terminamos con la impunidad que también se vive dentro de las instituciones públicas, por terminar y cambiar la corrupción que ahí se ha enquistado, si no modificamos esas maquinarias caducas, el problema de las desapariciones en México va a seguir siendo esa gran tragedia que vivimos día con día. Es cuanto, presidente.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Gracias, diputado Sánchez Orozco. Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Delfina Gómez Álvarez, ella es del Grupo Parlamentario de Morena.

**La diputada Delfina Gómez Álvarez:**Buenas tardes, compañeros diputados, diputadas, y muy en especial a asociaciones civiles y organizaciones que han luchado por este logro.

Este dictamen que estamos discutiendo por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es precisamente como respuesta a lo que han luchado las asociaciones civiles y lo que ha luchado la participación social.

Ante el descrédito de las instituciones, la corrupción y la inoperancia de las autoridades encargadas de procuración e impartición de justicia y el silencio de muchos actores políticos, ha sido la sociedad civil la que eleva la voz y han logrado que se escuche y tengan eco como nunca antes se ha tenido.

El grito de "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!" ha sido bandera de lucha y símbolo de resistencia de organizaciones civiles y familiares de víctimas, académicos, amas de casa, estudiantes, periodistas, campesinos y todos aquellos que han vivido, padecido o conocido la tragedia.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! claman todos aquellos que se identifican y se acuerpan en el empeño de la presentación con vida de los nuestros, de dar forma a los miles de personas anónimas que no salen en los medios pero que tienen rostro, nombre y apellido.

Aquellos que en el mar de violencia en que vivimos pasan desapercibidos y son uno más en la cuenta macabra de números que han hecho de todo México un cementerio clandestino. Exigimos verdad y justicia.

La presión internacional, además de la participación ciudadana, ha sido, sin duda, otro factor para que el poder permita la realización de estas reformas. Por su parte, el Grupo Parlamentario Morena también ha luchado por la expedición de esta ley, a fin de poder afrontar la crisis humanitaria en México sobre desaparición forzada.

Sin embargo y aun cuando votemos a favor de este dictamen es necesario señalar que México vive la más profunda crisis de derechos humanos de su historia y el Estado mexicano tiene la responsabilidad y la obligación directa en esa solución de la desaparición.

Miles de connacionales que se toparon con la irracionalidad del poder y con instituciones de procuración e impartición de justicia caducas e insensibles.

El Registro Nacional de Datos del Personal Extraviado nos ha señalado que existen 34 mil 277 personas desaparecidas. Junto con ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la conexión entre la impunidad por los crímenes de la Guerra Sucia y los trágicos acontecimientos sufridos en

Ayotzinapa. Es decir, que desde Díaz Ordaz hasta Peña Nieto han quedado impunes y estamos en un Estado sin derecho. Sin embargo, lo que ahora tenemos que preguntarnos es qué hacemos nosotros como funcionarios.

Da vergüenza, o en lo personal me da vergüenza que sean organizaciones civiles, organizaciones de ciudadanos y jóvenes muy en especial, que luchan con lo que nos correspondería a nosotros como servidores públicos.

Por ello, la pregunta que nos queda es por qué han continuado este baño de sangre, si sabemos que en nuestro país la desaparición forzada de personas ocurre desde hace cincuenta años. Que se transformó de ser una actividad criminal, selectiva y dirigida fundamentalmente contra los opositores políticos o militantes de izquierda o sindicalistas o líderes obreros y campesinos, y pasó a ser un delito sistemático que se ha agudizado contra toda la población, ¿para qué, y a quién beneficia?

Sin embargo, hoy podemos decir que hay un factor que no van a poder acallar, que es la participación civil, hombres y mujeres y en especial jóvenes que luchan por una mejor calidad de vida y un mejor Estado de derecho.

Ellos son quienes merecen nuestro respeto...

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Concluya, diputada.

**La diputada Delfina Gómez Álvarez:** ...y nuestra admiración y nuestro reconocimiento. A ellos, a esos ciudadanos son a los que les decimos todos los que integramos Morena: estamos a sus órdenes. Y de verdad, una disculpa por no saber desarrollar y defender lo que por obligación nos corresponde. Muchas gracias.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Gracias. Vamos a preguntar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido, para que la negativa de la asamblea ratifique la oportunidad de los cuatro diputados que aún esperan el uso de la palabra. Adelante, secretario.

**El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:** Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la negativa.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández. Muchas gracias, señores diputados y señoras diputadas.

**La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández**: Mamá, si desaparezco ¿adónde voy? —No lo sé, hijo. Solo sé que exigiría en todos y cada uno de los días a cada instancia obligada a buscarte que lo hiciera. Y si no me escucharan, hijo, buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Si no desaparecieras, hijo, como así lo deseo y quiero, abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Va por ustedes, familiares de desaparecidos en México.

Con su venia, señor presidente. Los desaparecidos nos faltan a todos. En su informe sobre la situación de derechos humanos en México, una de las tantas víctimas de nuestro país le dijo a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: a los mexicanos nos hacen falta muchas verdades sobre nuestras propias historias y sobre nuestras propias tragedias.

Desde la época de la Guerra Sucia, hasta nuestros días, la desaparición de personas ha sido uno de los grandes dolores de nuestro país, ya suman más de 32 mil personas que han sido inscritas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

El voto a favor en esta Cámara es la respuesta, aunque tardía, como varios hemos coincidido, a los cientos de miles de víctimas en este país, así como el respaldo a los compromisos internacionales del Estado mexicano. Sin embargo, debemos estar plenamente conscientes de lo que esta responsabilidad, y hacer real esta ley, significa, la aprobación de esta ley es el reflejo de una lamentable realidad nacional, que junto con la Ley General contra la Tortura constituyen reflejos fehacientes de la crisis humanitaria que sufre nuestro país, porque no

estamos hablándole de la comisión de cualquier delito, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, en la que agentes del Estado, que deberían de ser los responsables de protegernos a los mexicanos, torturan y desaparecen a niños, mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y a nuestros jóvenes, porque nos siguen faltando 43.

El ordenamiento que hoy aprobaremos reconoce el fenómeno de la desaparición provocada por funcionarios del Estado, así como de las desapariciones cometidas por la delincuencia organizada, todo esto con lo que mandan los mayores estándares internacionales al respecto. Asimismo, establece la creación de un sistema nacional de búsqueda, el cual generará las directrices, procedimientos y lineamientos de política pública para la erradicación de este fenómeno. Es decir, implementa un sistema integral que a la vez que atiende a las necesidades inmediatas de las víctimas y sus familias genera la información necesaria para el diseño, implementación y evaluación de acciones. Todo esto debiera tender a erradicar la desaparición forzada en nuestro país y no a normalizarla, ese es el reto.

Siendo congruentes con ello exigimos al gobierno mexicano, que retire la reserva a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada y que reconozca la competencia del Comité para que pueda conocer de peticiones individuales presentadas por el suceso de este terrible fenómeno en nuestro país.

Tenemos, compañeras y compañeros diputados, que confirmar que nuestro compromiso es real y que le dotaremos de todos los recursos suficientes a esta ley para que pueda responder a las víctimas, por lo que el Grupo Parlamentario del PRD se suma a las miles de voces en pro del presente dictamen, porque estamos convencidos de que esta ley logrará acercar a las víctimas a la verdad, la reparación y la justicia.

Por el profesor Avilés Rojas, por los 43 estudiantes de Ayotzinapa; Rosendo Radilla Pacheco, Jesús Piedra Ibarra, las desaparecidas en Ciudad Juárez, las y los defensores de derechos humanos desaparecidos. Por nuestros hermanos y hermanas migrantes que siguen desapareciendo en el territorio nacional, por las periodistas y los periodistas en este país. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Gracias, diputada. Tiene la palabra —recuerdo a ustedes, hasta por tres minutos— la diputada Kathia María Bolio Pinelo, diputada yucateca de Acción Nacional.

**La diputada Kathia María Bolio Pinelo:**Con el permiso de la Presidencia. Saludo a todos los familiares de las víctimas y a las organizaciones que aquí se encuentran presentes.

Este es un tema por demás doloroso para mi familia. Carlos Castillo Bolio, 33 años, 14 de agosto de 2012. Iba a cumplir con su encomienda en su trabajo, y al pasar por un retén de la policía del estado nadie lo volvió a ver, nadie volvió a saber de él. Fue detenido y privado de su libertad. Logró mandar dos mensajes a su familia para avisar que estaba en manos de la policía y después ni un mensaje más.

En ese momento empieza la tragedia y el peregrinar para la familia. Al día de hoy existe un expediente con más de 12 tomos donde autoridad estatal y federal se han declarado incompetentes para resolver.

En Yucatán, un estado seguro, tranquilo, donde se han invertido miles de millones de pesos en cámaras de vigilancia y en un sistema de seguridad, le han le han dicho a la familia de Carlos que la cámara ubicada junto al retén donde desaparece, ese día, en ese momento, la luz se había ido y no había grabación.

La familia Castillo Bolio ha recorrido todas las instancias estatales y federales de derechos humanos. Ha juntado miles de firmas para pedir justicia y que la señora que gobernaba el estado de Yucatán los pudiera recibir para acompañarlos en su dolor.

Unos y otros les han dado largas y evasivas. Han amenazado a Lorena, su hermana, de muerte, por seguir buscando a su hermanito, un joven bueno y con un problema cognitivo intelectual que junto con su vehículo se lo tragó la tierra.

Hasta el día de hoy los padres y hermanos de Carlos no han sido considerados víctimas de la comisión de algún delito. Con el corazón en la mano les digo que no sólo destruyeron la vida de Carlos, sino la de toda su familia, que hasta el día de hoy no han descansado en su búsqueda.

Después de cuatro fiscales, miles de firmas, recursos económicos invertidos y gastados, la autoridad se ha escudado en que no existen protocolos de búsqueda, lo que constituye un insulto a los derechos humanos de los mexicanos.

Yo confío en que estos nuevos ordenamientos jurídicos puedan evitar el dolor evitable de las víctimas de las personas desaparecidas.

En Acción Nacional vamos a favor del presente dictamen, y desde aquí pido justicia, justicia para Carlos y todos aquellos que desconocemos nombres y apellidos.

Estas nuevas leyes van a crear la organización y la coordinación para encontrar a las personas que sean reportadas como desaparecidas. Se establecen los tipos penales de conductas y se definen de manera clara los demás tipos vinculados a la comisión delictuosa de la desaparición forzada. Se establece mediante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la implementación de las políticas y hacer partícipes a las familias de los desaparecidos en el monitoreo de acciones y búsqueda de los ausentes. Es cuanto, señor presidente, es cuanto, honorable Cámara, y en Acción Nacional estamos comprometidos con los derechos humanos de los mexicanos. Muchas gracias.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Gracias, diputada Bolio Pinelo. Tiene la palabra la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**La diputada María Gloria Hernández Madrid:**Con el permiso del presidente. Compañeras y compañeros diputados, es la desaparición forzada un crimen que atenta en contra de toda la sociedad. Saludo a quienes aquí se encuentran, familiares de desaparecidos.

Ya lo ha señalado Jan Jarab, representante de la ONU, para los derechos humanos en nuestro país, considerando el dolor existente es imperioso que México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición, dolor que se origina en un delito atroz.

La desaparición forzada no solo atenta contra la libertad de las personas, sino que lastima a la nación entera. Como legisladores, no podemos ser omisos ante la gravedad de este crimen y, en consecuencia, debemos actuar para erradicar la desaparición forzada.

Los priistas pugnamos por el fortalecimiento del Estado de derecho a fin de hacerlo efectivo e implacable. Efectivo para garantizar la libertad de las personas, e implacable en contra de quienes atenten contra la libertad.

Por eso, desde el Partido Revolucionario Institucional, en nuestra plataforma electoral, nos comprometimos a fortalecer las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, a promover la justicia reparativa, a fortalecer los mecanismos de prevención del delito y garantizar el acceso de las instancias de procuración de justicia, incluyendo la atención a las víctimas.

Ahora como lo asumimos y priorizamos en nuestra agenda legislativa para el presente periodo ordinario, profundizaremos en los trabajos para prevenir, combatir y erradicar los delitos que atentan contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad —subrayadamente— la desaparición forzada. Ya lo ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto, combatir frontalmente la desaparición forzada y la tortura, es una condición básica para lograr la plena vigencia del Estado de derecho.

Por eso, desde el inicio de su administración ha logrado fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia. Ha fomentado el fortalecimiento de los protocolos y procedimientos para que en casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.

Ha expedido el Reglamento de la Ley General de Víctimas y para poner en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas, e impulsar la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada.

Resuelto lo anterior, nos corresponde a los legisladores hacer de esa facultad un esfuerzo activo dándole vida a esta ley. Votaremos a favor del presente decreto que expide la Ley General en materia de Desaparición

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con lo que permitiremos establecer los tipos penales de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares.

Con esto crearemos un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de comisiones homologadas en los estados de la República. Impulsaremos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Estableceremos la Declaración Especial de Ausencia y reconoceremos la reparación integral del daño a las víctimas de los delitos que sean materia de esta ley.

Compañeras y compañeros legisladores, parafraseando a Rousseau, todo aquel que pierde su libertad pierde la calidad de ser humano y no existe indemnización posible de quien lo pierde todo. Por eso debemos prevenir que más personas...

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Concluya, diputada.

**La diputada María Gloria Hernández Madrid:** Puedan verse despojadas de su bien más preciado a la par de combatir frontalmente aquellos que intenten arrebatárselos. Debemos actuar privilegiando el interés superior de la nación, conscientes de que más que aprobar una nueva ley estaremos dando un paso más hacia el México justo y en paz que todos queremos. Es cuanto, diputado presidente.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Muchas gracias, diputada Hernández. Tiene la palabra Cuitláhuac García Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.

**El diputado Cuitláhuac García Jiménez:**Gracias, presidente. Quizá este pleno esté acostumbrado a ser omiso con la responsabilidad del gobierno mexicano. Pero nadie puede negar que el principal culpable de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa fue el Estado por la directa participación de sus autoridades y por sus mentiras cómplices en la investigación. Y el responsable del Estado tiene nombre, es el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.

El culpable de las desapariciones por la Guerra Sucia contra dirigentes campesinos y líderes opositores al gobierno autoritario y fascistoide de los años 70 fue el régimen por su encubierta participación.

Asimismo, los culpables de los desaparecidos en las últimas décadas son estos gobiernos ineptos que han implementado políticas equivocadas, teniendo como resultado cientos de miles de víctimas y más de 30 mil desaparecidos de manera forzada, delitos en los que el gobierno no tuvo acción inmediata ni oportuna para impedirlos.

Lamentamos y duele que lo que hoy se encuentra en búsquedas sean solo fosas clandestinas. Esta ley es el triunfo de familiares de los desaparecidos y de organizaciones políticas y civiles, y sobre todo de las madres que todavía hoy esperan a sus hijos vivos. Es un reconocimiento del problema más inhumano y crudo que padece México por una serie de gobiernos autoritarios, ineptos y cómplices.

Bienvenida la ley, votamos a favor, pero que quede claro que este avance no necesariamente significa la solución del problema, porque hasta ahora existe desafortunadamente un manto que no hemos logrado desaparecer, y ese es el de la impunidad y la corrupción de este gobierno. Es cuanto.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Gracias, diputado García Jiménez. Ha concluido la lista de oradores autorizada por la asamblea, por lo tanto el tema está suficientemente discutido. Pasaremos a la discusión de las reservas, previa votación en lo general y en lo particular de los asuntos no reservados.

Informo a la asamblea que se han registrado, pese a que todos los grupos parlamentarios se pronunciaron en pro, se han registrado 54 propuestas de modificación a la ley. Cualquiera de ellas significaría que regresara el Senado para reconducirse el trámite. 54 propuestas de modificación, seis proponentes en total. 38 de estas propuestas corresponden a la diputada Araceli Damián y todas ellas se concretan en la nueva Ley en Materia de Desaparición Forzada, con excepción de tres que se refieren a los transitorios generales del decreto.

Por lo tanto, pido a la Secretaría informe cuáles son los artículos que quedarán reservados en la nueva ley, antes de pasar en la votación en lo general y en lo particular de los no reservados. Adelante, diputado.

**El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:** Los artículos que quedan reservados son el 2, 3, 4, 5, 17, 29, 30, 34, 49, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 91, 93, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 127, 133, 134, 145, 153, 161, 170, primero, segundo, séptimo, octavo y décimo segundo transitorios.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Por lo tanto, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

**El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:**Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Diputado Ojeda, el sentido de su voto? Diputado Ojeda, adelante.

**El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano** (desde la curul): A favor.

**El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:** ¿Algún diputado o diputada que falte por emitir su voto? El sistema continúa abierto. ¿Algún compañero o compañera diputado que falte por emitir su voto?

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Clausure el sistema, diputado.

**El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:** Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 396 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, diputado presidente. 396 votos a favor.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 396 votos.**

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, procederemos a la discusión en lo particular. Informo a la asamblea que han sucedido los siguientes cambios, que estoy absolutamente seguro que la asamblea agradece.

Esta Presidencia informa que el Grupo Parlamentario de Morena ha retirado 53 propuestas de modificación, por lo que únicamente tenemos el registro de la reserva de la diputada Cristina Ismene, quien entiendo retirará su propuesta desde su curul.

**La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández**(desde la curul): Gracias, señor presidente. Precisamente en ese sentido, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la reserva que habíamos realizado sobre el artículo 29, relativo a la responsabilidad de los superiores jerárquicos, esta reserva la presentaremos posteriormente como iniciativa, insistiendo en que es una recomendación que de manera internacional se ha planteado hacia esta ley. La retiramos seguros de que esta aprobación abona en mucho a las necesidades del país.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Muchas gracias, diputada. Con el reconocimiento de la asamblea para los grupos parlamentarios de Morena y el PRD, ábrase el sistema electrónico...

**El diputado Juan Romero Tenorio**(desde la curul): Presidente.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Don Juan Romero, ¿con qué objeto?

**El diputado Juan Romero Tenorio** (desde la curul): Gracias, señor presidente. Quiero aclarar que yo presenté algunas reservas y no las he retirado.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Ah, bien. Disculpe usted, honorable diputado.

En tanto que recibimos, entonces, nos lleva de un extraordinario júbilo a un no tanto júbilo. Tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar sus dos reservas que son sobre, la primera sobre el cuerpo de la ley, el 17, adición de un párrafo, el 29, el 51, el 53, el 54, el 66, el 68 y el 73. Y sobre dos artículos transitorios sobre el cuerpo del decreto. Adelante, abogado.

**El diputado Juan Romero Tenorio** (desde la curul): Con su venia, presidente. Quiero aclarar que no son dos reservas. Yo presenté el artículo 17, 29, 51, 53, 54, 66, 68, 73, primero y segundo transitorios. Yo abono, —digo, el tiempo es muy reducido, sin embargo vamos a aprovecharlo—, abono en la congratulación que presenta esta Cámara de Diputados al aprobar esta Ley General contra la Desaparición Forzada. No es una ley que haga justicia, es una ley que va a atender un problema añejo y es una ley que tiene problemas en su aplicación.

Dentro de las reservas, el artículo primero transitorio, estoy proponiendo que esta Cámara apruebe presupuesto para atender esta política contra la desaparición forzada.

Otro artículo transitorio, la designación, quien va a presidir esta Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda la propone el secretario de Gobernación y la ratifica el presidente.

En el Informe de Peña Nieto no aparece la desaparición forzada. Aparece en la parte correspondiente a la Secretaría de Gobernación. No, mentira, en Gobernación tampoco aparece, aparece en la parte correspondiente a la Procuraduría General de Justicia, y únicamente da cuenta de desaparecidos en este año de ejercicio. No da cuenta de las grandes cantidades de desaparecidos.

No solamente son 43, eso ha sido acreditado y quiero que tomen el peso de las afirmaciones que aquí se han dicho. La Cámara de Diputados, como parte del Poder Legislativo, como parte de uno de los Poderes de la Unión, reconoce abiertamente la desaparición forzada. Reconoce este delito de lesa humanidad en más de 32 mil ciudadanas y ciudadanos.

Vean el peso y la importancia que tiene esta ley, reconocer en un documento legislativo la desaparición forzada. Y aquí está la diputada Lia Limón. Ella en un informe presenta, en 2012, 26 mil 121 desaparecidos y en la exposición de motivos hablamos de más de 30 mil desaparecidos en 2017.

Son más de 4 mil personas que en este ejercicio del señor Peña Nieto están desaparecidas, 4 mil. Esta ley viene tarde, es una ley de la ignominia porque hemos permitido 4 mil desaparecidos en este gobierno, responsabilidad de los Ejecutivos federal, estatal, de los procuradores.

Por favor, vean la dimensión que tiene esta ley. Cualquier ciudadano con esta ley puede irse a tribunales internacionales, porque es el Estado quien está reconociendo esta gravedad.

Esta ley reconoce la incapacidad del Estado mexicano de garantizar principios constitucionales básicos, derecho a la vida, derecho a la seguridad. Esta ley pretende subsanar esta omisión, tanto en la administración como en el Legislativo, que agravia a miles de mexicanos. Es más grave de lo que ustedes suponen.

Abono a esta alegría de esta Cámara de Diputados al aprobar por unanimidad de los presentes esta ley, pero esto no la hace una ley que sea ejecutable. Necesitamos presupuesto, necesitamos determinar responsabilidades en los tres niveles de gobierno, que rindan cuenta a lo ya sucedido.

Las propuestas que presento le pido al señor presidente que se inserten en el Diario de los Debates, para que quede constancia de las propuestas que reafirmarían un sentido equitativo, imparcial y objetivo de esta ley.

Los fiscales encargados de la desaparición forzada necesitan autonomía. No queremos fiscales de papel y aquí se crean fiscales de papel que no tienen el personal, no tienen los peritos, no tienen los recursos para las investigaciones reales.

Muchos de ustedes conocen a familiares, amigos o vecinos que han sido víctimas de desaparición forzada. No se establece la responsabilidad de desaparición forzada entre cuerpos de militares, también ahí se da la desaparición forzada. Hay familiares de militares que están buscando a sus familiares, esta ley es bien vista porque avanza. Avanza, pero es responsabilidad de esta Cámara de Diputados determinar el presupuesto y

aprobar una política pública, eficiente y eficaz que nos quite la cara de vergüenza frente a las más de 4 mil víctimas que se han sucedido en este sexenio. Es cuanto, señor presidente.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Gracias, señor diputado. Pregunte, señor secretario, si se acepta la proposición de modificaciones realizadas por el diputado Juan Romero Tenorio.

**El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:**En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la negativa.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Se desecha.

Por lo tanto, ábrase el sistema de votación para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y que son los artículos 2, 3, 4, 5, 17, 29, 30, 34, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 91, 93, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 127, 133, 134, 145, 153, 161 y 170, y los transitorios primero, segundo, séptimo, octavo, y décimo segundo, transitorios del decreto.

Con la votación de ustedes todos estos artículos regresarán a incorporarse al dictamen, por lo tanto, ábrase por cinco minutos el sistema de votación.

**El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:** Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos 2, 3, 4, 5, 17, 29, 30, 34, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 91, 93, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 127, 133, 134, 145, 153, 161 y 170, primero, segundo, séptimo, octavo y decimosegundo transitorios del decreto, en términos del dictamen.

(Votación)

Diputado Ojeda, el sentido de su voto.

**El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano** (desde la curul): A favor.

**El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:** Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Ordene el cierre del sistema, secretario.

**El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes:** Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 361 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, diputado presidente.

**El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:** Aprobados los artículos reservados por 361 votos y quedan en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular, y previo el cumplimiento de las facultades que otorga a la Mesa Directiva el artículo 93, numeral 1, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, **se turna al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Que sea para bien. Muchas gracias. Gracias.**

# PODER EJECUTIVO

# SECRETARIA DE GOBERNACION

**DECRETO por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

**ENRIQUE PEÑA NIETO**, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

**DECRETO**

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

**SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD.**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

## LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

### TÍTULO PRIMERO

### DISPOSICIONES GENERALES

### CAPÍTULO PRIMERO

**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 2.** La presente Ley tiene por objeto:

**I.** Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley;

**II.** Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

**III.** Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**IV.** Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas;

**V.** Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;

**VI.** Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y

**VII.** Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

**Artículo 3.** La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de conformidad con los principios de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro persona.

**Artículo 4.** Para efectos de esta Ley se entiende por:

**I. Banco Nacional de Datos Forenses:** a la herramienta del Sistema Nacional que concentra las bases de datos de las Entidades Federativas y de la Federación; así como, otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**II. Comisión Ejecutiva:** a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

**III. Comisiones de Víctimas:** a las Comisiones de Atención a Víctimas de las Entidades Federativas;

**IV. Comisión Nacional de Búsqueda:** a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas;

**V. Comisiones Locales de Búsqueda:** a las Comisiones de Búsqueda de Personas en las Entidades Federativas;

**VI. Consejo Ciudadano:** al Consejo Nacional Ciudadano, órgano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**VII. Declaración Especial de Ausencia:** a la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición;

**VIII. Entidades Federativas:** a las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**IX. Familiares:** a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la Persona Desaparecida o No Localizada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; él o la cónyuge, la concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida o No Localizada, que así lo acrediten ante las autoridades competentes;

**X. Fiscalías Especializadas:** a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría y de las Procuradurías Locales cuyo objeto es la investigación y persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares;

**XI. Grupo de Búsqueda:** al grupo de personas especializadas en materia de búsqueda de personas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que realizarán la búsqueda de campo, entre otras;

**XII. Instituciones de Seguridad Pública:** a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario, y otras autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encargadas o que realicen funciones de Seguridad Pública en los órdenes federal, local y municipal;

**XIII. Mecanismo de Apoyo Exterior:** el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación es el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño, en el ámbito de su competencia, a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones del ordenamiento jurídico mexicano establecidas en esta Ley, coadyuvar en la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda y en la investigación y persecución de los delitos que realicen las Fiscalías Especializadas en coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, así como para garantizar los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las víctimas y ofendidos del delito. El Mecanismo de Apoyo Exterior funciona a través del personal que labora en los Consulados, Embajadas y Agregadurías de México en otros países;

**XIV. Noticia:** a la comunicación hecha por cualquier medio, distinto al reporte o la denuncia, mediante la cual, la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

**XV. Persona Desaparecida:** a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito;

**XVI. Persona No Localizada:** a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito;

**XVII. Protocolo Homologado de Búsqueda:** al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas;

**XVIII. Protocolo Homologado de Investigación:** al Protocolo Homologado para la investigación de los delitos materia de esta Ley;

**XIX. Procuraduría:** a la Procuraduría General de la República;

**XX. Procuradurías Locales:** a las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas;

**XXI. Registro Nacional:** al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra la información de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la Federación como de las Entidades Federativas;

**XXII. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas:** al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas que concentra la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen;

**XXIII. Registro Nacional de Fosas:** al Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen;

**XXIV. Reglamento:** al Reglamento de esta Ley;

**XXV. Reporte:** a la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona;

**XXVI. Sistema Nacional:** al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**XXVII. Tratados:** a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y

**XXVIII. Víctimas:** aquellas a las que hace referencia la Ley General de Víctimas.

**Artículo 5.** Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley son diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

**I. Efectividad y exhaustividad:** todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada se harán de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación. Bajo ninguna circunstancia se podrán invocar condiciones particulares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o la actividad que realizaba previa o al momento de la desaparición para no ser buscada de manera inmediata;

**II. Debida diligencia:** todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos. En toda investigación y proceso penal que se inicie por los delitos previstos en esta Ley, las autoridades deben garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo;

**III. Enfoque diferencial y especializado:** al aplicar esta Ley, las autoridades deben tener en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, religión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como

otras circunstancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las Víctimas. De igual manera, tratándose de las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deberán tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos materia de esta Ley;

**IV. Enfoque humanitario:** atención centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los Familiares;

**V. Gratuidad:** todas las acciones, los procedimientos y cualquier otro trámite que implique el acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, no tendrán costo alguno para las personas;

**VI. Igualdad y no discriminación:** para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos y garantías de las Víctimas a los que se refiere esta Ley, las actuaciones y diligencias deben ser conducidas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos o la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial debe fundarse en razones de enfoque diferencial y especializado;

**VII. Interés superior de la niñez:** las autoridades deberán proteger primordialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar que cuando tengan la calidad de Víctimas o testigos, la protección que se les brinde sea armónica e integral, atendiendo a su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

**VIII. Máxima protección:** la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar el trato digno, la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las Víctimas a que se refiere esta Ley;

**IX. No revictimización:** la obligación de aplicar las medidas necesarias y justificadas de conformidad con los principios en materia de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados, para evitar que la Persona Desaparecida o No Localizada y las Víctimas a que se refiere esta Ley, sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoseles a sufrir un nuevo daño;

**X. Participación conjunta:** las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, permitirán la participación directa de los Familiares, en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, en las tareas de búsqueda, incluido el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares, como en políticas públicas y prácticas institucionales;

**XI. Perspectiva de género:** en todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, así como para investigar y juzgar los delitos previstos en esta Ley, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad;

**XII. Presunción de vida:** en las acciones, mecanismos y procedimientos para la búsqueda, localización y desarrollo de las investigaciones, las autoridades deben presumir que la Persona Desaparecida o No Localizada está con vida, y

**XIII. Verdad:** el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos constitutivos de los delitos previstos en esta Ley, en tanto que el objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la protección de las Víctimas, el castigo de las personas responsables y la reparación de los daños causados, en términos de los artículos 1o. y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 6.** En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y las legislaciones civiles aplicables, así como la Ley General de Víctimas y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

## CAPÍTULO SEGUNDO

## DISPOSICIONES GENERALES PARA PERSONAS DESAPARECIDAS MENORES DE 18 AÑOS

**Artículo 7.** Las niñas, niños y adolescentes respecto de los cuales haya Noticia, Reporte o Denuncia que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada de manera inmediata y diferenciada, de conformidad con el protocolo especializado en búsqueda de personas menores de 18 años de edad que corresponda.

**Artículo 8.** Las autoridades que administran las herramientas del Sistema Nacional deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, y deben establecer la información segmentada por género, edad, situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación.

La divulgación que hagan o soliciten las autoridades responsables en medios de telecomunicación sobre la información de una persona menor de 18 años de edad desaparecida, se hará de conformidad con las disposiciones aplicables.

**Artículo 9.** Todas las acciones que se emprendan para la investigación y búsqueda de personas menores de dieciocho años de edad desparecidas, garantizarán un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos de la niñez, que tome en cuenta las características particulares, incluyendo su identidad y nacionalidad.

**Artículo 10.** Las autoridades de búsqueda e investigación en el ámbito de sus competencias se coordinarán con las Procuradurías de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para efectos de salvaguardar sus derechos, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 11.** En los casos de niñas, niños o adolescentes, las medidas de reparación integral, así como de atención terapéutica y acompañamiento, deberán realizarse por personal especializado en derechos de la niñez y adolescencia y de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 12.** Para el diseño de las acciones, herramientas y el protocolo especializado para la búsqueda e investigación de niñas, niños y adolescentes, el Sistema Nacional tomará en cuenta la opinión de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

# TÍTULO SEGUNDO

# DE LOS DELITOS Y DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

## CAPÍTULO PRIMERO

## DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 13.** Los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.

En los casos de los delitos previstos en esta Ley no procederá el archivo temporal de la investigación, aun cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal y no aparece que se puedan practicar otras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público estará obligada en todo momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

**Artículo 14.** El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza.

**Artículo 15.** Se prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad que impidan la investigación, procesamiento o sanción y cualquier otra medida para determinar la verdad y obtener reparación plena de los delitos materia de esta Ley.

**Artículo 16.** A efectos de la extradición, la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares no serán considerados delitos de carácter político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este motivo.

**Artículo 17.** No constituyen causas de exclusión de los delitos establecidos en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Segundo de esta Ley, ni de responsabilidad en términos de lo previsto en las disposiciones aplicables, la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten a la comisión de estos delitos.

En ningún caso pueden invocarse circunstancias especiales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, suspensión de derechos y sus garantías, perturbación grave de la paz pública, como causa de justificación o inculpabilidad para cometer los delitos a que se refiere esta Ley.

El Estado está obligado a garantizar que cualquier persona que se rehúse a obedecer una orden para cometer el delito de desaparición forzada no sea sancionada o sea objeto de ninguna represalia.

**Artículo 18.** Para la imposición de una multa es aplicable el concepto días multa previsto en el Código Penal Federal.

**Artículo 19.** Los delitos previstos en esta Ley deben ser perseguidos, investigados, procesados y sancionados conforme a las reglas de autoría, participación y concurso previstas en la legislación penal aplicable, y las reglas de acumulación de procesos previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 20.** La tentativa punible de los delitos previstos en esta Ley se sancionará en términos del artículo 63 del Código Penal Federal.

**Artículo 21.** Queda prohibido entregar, extraditar, expulsar, deportar o devolver a cualquier persona cuando haya razones fundadas para suponer que estaría en peligro de ser sometida a una Desaparición Forzada de Personas o a una Desaparición cometida por Particulares en el Estado al que sería entregada.

**Artículo 22.** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos distintos a los previstos en esta Ley, el agente del Ministerio Público advierte la probable comisión de algún delito previsto en el presente ordenamiento, debe identificar y remitir copia de la investigación a la Fiscalía Especializada competente.

**Artículo 23.** Si de las diligencias practicadas en la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos previstos en esta Ley, la Fiscalía Especializada advierte la probable comisión de alguno o varios delitos distintos a los previstos en el presente ordenamiento, deberá remitir copia de la investigación a las autoridades ministeriales competentes, salvo en el caso de delitos conexos.

## CAPÍTULO SEGUNDO

## DE LA COMPETENCIA DE LOS DELITOS

**Artículo 24.** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades federales cuando:

**I.** Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley;

**II.** Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación;

**III.** Exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado Internacional en la que se determine la responsabilidad u obligación del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley;

**IV.** El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, o

**V.** Durante la investigación se encuentren indicios que en la comisión del hecho participó una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada.

La víctima podrá pedir al Ministerio Público de la Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder de forma fundada y motivada.

**Artículo 25.** La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades de las Entidades Federativas en los casos no previstos en el artículo anterior.

**Artículo 26.** La investigación, persecución, procesamiento y sanción de los delitos previstos en esta Ley deberá ser competencia exclusiva de las autoridades federales o estatales del orden civil, aun cuando esté involucrado un servidor público.

## CAPÍTULO TERCERO

## DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

**Artículo 27.** Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

**Artículo 28.** Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.

**Artículo 29.** Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.

**Artículo 30.** Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28.

Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.

**Artículo 31.** Se impondrá pena de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de veinticinco a treinta y cinco años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 32.** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando:

**I.** Durante o después de la desaparición, la Persona Desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de dicha desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito;

**II.** La Persona Desaparecida sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor;

**III.** La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena o cualquier otro equiparable, sea la motivación para cometer el delito;

**IV.** La identidad de género o la orientación sexual de la víctima sea la motivación para cometer el delito;

**V.** La persona haya sido desaparecida por su actividad como defensora de derechos humanos;

**VI.** La persona haya sido desaparecida en razón de su labor como periodista;

**VII.** La Persona Desaparecida sea integrante de las Instituciones de Seguridad Pública;

**VIII.** El o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, o

**IX.** Los delitos se realicen con el propósito de impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

**Artículo 33.** Las sanciones para el delito de desaparición forzada de personas previstas en esta Ley, pueden ser disminuidas, conforme lo siguiente:

**I.** Si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los diez días siguientes a la desaparición, disminuirán hasta en una mitad;

**II.** Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una tercera parte;

**III.** Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la Persona Desaparecida, disminuirán hasta en una cuarta parte, y

**IV.** Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que permita esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuirán hasta en una quinta parte.

## CAPÍTULO CUARTO

## DE LA DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES

**Artículo 34.** Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

**Artículo 35.** Se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien omita entregar a la autoridad o Familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Asimismo, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

**Artículo 36.** Las penas aplicables para los delitos establecidos en los artículos 34 y 35 de esta Ley pueden ser determinadas y modificadas conforme a las reglas previstas en los artículos 32 y 33 de esta Ley.

## CAPÍTULO QUINTO

## DE LOS DELITOS VINCULADOS CON LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

**Artículo 37.** A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa.

**Artículo 38.** Se impondrá pena de dos a cinco años de prisión, de cien a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas o de la investigación de los delitos establecidos en los artículos 27, 28, 31, 34 y 35 de la Ley a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas.

**Artículo 39.** Se impondrá pena de dos a siete años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación hasta por el mismo lapso de la pena de privación de la libertad impuesta para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión público, al servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 40.** Se impondrá pena de tres a siete años de prisión a quien, conociendo el paradero o destino final de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecidos en los artículos 31 y 35 de la Ley, y a sabiendas de la misma, no proporcione información para su localización.

**Artículo 41.** Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil días multa a quien falsifique, oculte o destruya documentos que prueben la verdadera identidad de una niña o niño a los que se refieren los delitos establecidos en los artículos 31 y 35 de la Ley durante el periodo de ocultamiento, con conocimiento de dicha circunstancia.

Se aplicarán las mismas penas a quien, dolosamente, utilice los documentos falsificados de una niña o niño a que se refiere el párrafo anterior, con el conocimiento de dicha circunstancia.

## CAPÍTULO SEXTO

## DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

**Artículo 42.** Los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

**Artículo 43.** Para efectos de lo previsto en esta Ley, se considerará grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes.

# TÍTULO TERCERO

# DEL SISTEMA NACIONAL

## CAPÍTULO PRIMERO

## DEL SISTEMA NACIONAL

**Artículo 44.** El Sistema Nacional tiene como objetivo diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como para la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de esta Ley.

**Artículo 45.** El Sistema Nacional se integra por:

**I.** La persona titular de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

**II.** La persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

**III.** La persona titular de la Procuraduría General de la República;

**IV.** La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; quién fungirá como Secretaria Ejecutiva;

**V.** La persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

**VI.** Tres personas del Consejo Ciudadano que representen a cada uno de los sectores que lo integran;

**VII.** La persona titular de la Policía Federal;

**VIII.** Las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, y

**IX.** La persona que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Las personas integrantes del Sistema Nacional deben nombrar a sus respectivos suplentes, los cuales deben contar con el nivel jerárquico inmediato inferior. Para el caso de las fracciones VI y IX, el suplente será designado por los propios órganos a los que se refieren las citadas fracciones.

Las personas integrantes e invitados del Sistema Nacional no recibirán pago alguno por su participación en el mismo.

La persona que preside el Sistema Nacional podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de los órganos con autonomía constitucional, de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los municipios de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como organismos internacionales según la naturaleza de los asuntos a tratar, quienes intervendrán con voz pero sin voto.

Las instancias y las personas que integran el Sistema Nacional están obligadas, en el marco de sus competencias, a cumplir con las acciones que deriven del ejercicio de las atribuciones de dicho órgano.

**Artículo 46.** El Sistema Nacional sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus integrantes y sus resoluciones deben ser tomadas por mayoría de votos. El Presidente tiene voto dirimente en caso de empate.

**Artículo 47.** Las sesiones del Sistema Nacional deben celebrarse de manera ordinaria, por lo menos, cada seis meses por convocatoria del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, por instrucción de su Presidente, y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario a propuesta de un tercio de sus integrantes.

Las convocatorias deben realizarse por oficio o por cualquier medio electrónico que asegure y deje constancia de su recepción, con al menos cinco días hábiles a la fecha de celebración de la sesión correspondiente, y dos días hábiles de anticipación para las sesiones extraordinarias. En ambos casos debe acompañarse el orden del día correspondiente.

**Artículo 48.** El Sistema Nacional para el ejercicio de sus facultades contará con las siguientes herramientas:

**I.** El Registro Nacional;

**II.** El Banco Nacional de Datos Forenses;

**III.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas;

**IV.** El Registro Nacional de Fosas;

**V.** El Registro Administrativo de Detenciones;

**VI.** La Alerta Amber;

**VII.** El Protocolo Homologado de Búsqueda y los protocolos previstos en el artículo 73 de esta Ley, y

**VIII.** Otros registros necesarios para su operación en términos de lo que prevé esta Ley.

**Artículo 49.** El Sistema Nacional tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Expedir modelos de lineamientos que permitan la coordinación entre autoridades en materia de búsqueda de personas, así como de investigación de los delitos previstos en esta Ley. La legislación de las Entidades Federativas deberá prever los mecanismos para incorporar a su sistema jurídico los modelos a que se refiere esta fracción;

**II.** Establecer, en coordinación con las autoridades federales y las Entidades Federativas, la integración y funcionamiento de un sistema único de información tecnológica e informática que permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como para la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley;

**III.** Proponer acuerdos de colaboración entre sus integrantes y los del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el intercambio, sistematización y actualización de la información de seguridad pública que contribuyan a la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**IV.** Dar seguimiento y evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda;

**V.** Evaluar permanentemente las políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VI.** Generar mecanismos para favorecer que las capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas permitan la búsqueda eficiente y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VII.** Generar los mecanismos y acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones y requerimientos que hagan los integrantes del Sistema Nacional para el mejoramiento de políticas públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**VIII.** Emitir los modelos de instrumentos rectores para el funcionamiento y la coordinación con las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas;

**IX.** Evaluar el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones;

**X.** Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses;

**XI.** Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional de Fosas;

**XII.** Recomendar a las Procuradurías Locales el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda, así como la evaluación de las mismas;

**XIII.** Proporcionar la información que sea solicitada por el Consejo Ciudadano para el ejercicio de sus funciones;

**XIV.** Atender y dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas materia de esta Ley;

**XV.** Dictar los lineamientos que regulen la participación de los Familiares en las acciones de búsqueda;

**XVI.** Emitir el Protocolo Homologado de Búsqueda, y

**XVII.** Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

## CAPÍTULO SEGUNDO

## DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA

**Artículo 50.** La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión Nacional de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley.

Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 51.** La Comisión Nacional de Búsqueda está a cargo de una persona titular nombrada y removida por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Gobernación.

Para el nombramiento, la Secretaría de Gobernación realizará una consulta pública previa a los colectivos de Víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Para ser titular se requiere:

**I.** Ser ciudadana o ciudadano mexicano;

**II.** No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

**III.** Contar con título profesional;

**IV.** No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento;

**V.** Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento, y

**VI.** Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.

En el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, debe garantizarse el respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación.

La persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

Las Entidades Federativas deben prever, como mínimo, los mismos requisitos que contempla el presente artículo para la selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda Local que corresponda.

**Artículo 52.** Para la consulta pública a la que se hace referencia en el artículo anterior, la Secretaría de Gobernación deberá observar, como mínimo, las siguientes bases:

**I.** Generar un mecanismo a través del cual la sociedad civil presente candidatos;

**II.** Publicar toda la información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados, y

**III.** Hacer público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.

**Artículo 53.** La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Emitir y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda, rector en la materia, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

**II.** Emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional y coordinar la operación del mismo, en términos de lo que establezca esta Ley y las leyes aplicables;

**III.** Atender y formular solicitudes a las Instituciones de Seguridad Pública, previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de cumplir con su objeto;

**IV.** Solicitar el acompañamiento de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno, así como del personal al que se refiere el artículo 67 de esta Ley, cuando sea necesario que el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda realice trabajos de campo;

**V.** Integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de esta Ley;

**VI.** Presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, los informes sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, en coordinación con las autoridades competentes;

**VII.** Solicitar informes a las Comisiones Locales de Búsqueda sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda;

**VIII.** Emitir los protocolos rectores que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

**IX.** Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda;

**X.** Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XI.** Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada para que, de ser el caso, realicen la Denuncia correspondiente;

**XII.** Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con las Comisiones Locales de Búsqueda, realizar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo;

**XIII.** Acceder sin restricciones a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, de conformidad con las disposiciones aplicables;

**XIV.** Emitir los lineamientos para acceder a la información a que se refiere la fracción anterior;

**XV.** Solicitar a la Policía Federal que se realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XVI.** Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XVII.** Mantener comunicación con autoridades estatales y municipales, y establecer enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación del Consejo;

**XVIII.** Integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda, así como analizar el fenómeno de desaparición, incluso a nivel regional;

**XIX.** Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de intercambiar experiencias y buscar las mejores prácticas para la localización de personas;

**XX.** Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que corresponda sobre la existencia de información relevante y elementos que sean útiles para la investigación de los delitos materia de ésta y otras leyes, de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda;

**XXI.** Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de otros delitos;

**XXII.** Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con la normativa aplicable;

**XXIII.** Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la coordinación de acciones de búsqueda y localización, a partir de la información obtenida en la investigación de los delitos materia de esta Ley;

**XXIV.** Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinarse en la ejecución de las acciones de búsqueda y localización de personas migrantes;

**XXV.** Evaluar las políticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y Entidades Federativas;

**XXVI.** Conocer y opinar sobre las políticas y estrategias para la identificación de personas localizadas con vida y personas fallecidas localizadas en fosas comunes y clandestinas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y Entidades Federativas;

**XXVII.** Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de coordinación, colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional, así como de sus atribuciones;

**XVIII.** Proponer la celebración de convenios con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores para la expedición de visas humanitarias a familiares de personas extranjeras desaparecidas en territorio mexicano;

**XXIX.** Disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro medio de comunicación de acceso gratuito para proporcionar información, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, para contribuir en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXX.** Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXXI.** Establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de personas vinculadas con movimientos políticos.

En caso de que durante las acciones de búsqueda se encuentre algún indicio de la probable comisión de un delito, se dará aviso inmediato a la fiscalía correspondiente;

**XXXII.** Establecer medidas extraordinarias y emitir alertas cuando en una Entidad Federativa o municipio aumente significativamente el número de desapariciones, que serán atendidas por las autoridades competentes a quienes vayan dirigidas;

**XXXIII.** Diseñar, en colaboración con las Comisiones Locales de Búsqueda que correspondan, programas regionales de búsqueda de personas;

**XXXIV.** Proponer celebrar los convenios que se requieran con las autoridades competentes, nacionales y extranjeras, para la operación de los mecanismos de búsqueda transnacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**XXXV.** Recibir de las embajadas, consulados y agregadurías las Denuncias o Reportes de personas migrantes desaparecidas o no localizadas en territorio mexicano. Así como, establecer los mecanismos de comunicación e intercambio de información más adecuados que garanticen la efectividad en la búsqueda de las personas migrantes en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Mecanismo de Apoyo Exterior;

**XXXVI.** Dar seguimiento y, en su caso, atender las recomendaciones y sentencias de órganos internacionales de derechos humanos en los temas relacionados con la búsqueda de personas;

**XXXVII.** Dar seguimiento y atender a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas relacionados con las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda;

**XXXVIII.** Recibir la información que aporten los particulares en los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y remitir a la Comisión de búsqueda correspondiente y, en su caso, a la Fiscalía Especializada competente;

**XXXIX.** Proponer al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

**XL.** Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sobre las acciones u omisiones que puedan constituir una violación a esta Ley;

**XLI.** Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en términos que prevean las leyes;

**XLII.** Solicitar a la Comisión Ejecutiva y a las Comisiones de Víctimas que implementen los mecanismos necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los Familiares de las Personas Desaparecidas por la presunta comisión de los delitos materia de esta Ley, de conformidad con la ley en la materia;

**XLIII.** Recomendar a las autoridades que integran el Sistema Nacional el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda;

**XLIV.** Incorporar a los procesos de búsqueda relacionados con Personas Desaparecidas o No Localizadas a expertos independientes o peritos internacionales, cuando no cuente con personal nacional capacitado en la materia y lo considere pertinente o así lo soliciten los Familiares. Dicha incorporación se realizará de conformidad con las leyes;

**XLV.** Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda;

**XLVI.** Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer la existencia de características y patrones de desaparición, de conformidad con el principio de enfoque diferenciado;

**XLVII.** Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información de hechos y datos sobre la desaparición de personas, así como de los delitos en materia de esta Ley;

**XLVIII.** Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las acciones de búsqueda;

**XLIX.** Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar la información contenida en las bases de datos y registros que establece esta Ley, así como con la información contenida en otros sistemas que puedan contribuir en la búsqueda, localización e identificación de una Persona Desaparecida o No Localizada;

**L.** Emitir conforme a los más altos estándares internacionales, los criterios de capacitación, certificación y evaluación del personal que participe en las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas;

**LI.** Asesorar a las Comisiones Locales de Búsqueda;

**LII.** Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en todo el territorio nacional, independientemente de aquellas que se hayan iniciado localmente;

**LIII.** Promover, en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo y otras disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en peligro, y

**LIV.** Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento.

La información que la Comisión Nacional de Búsqueda genere con motivo del ejercicio de sus facultades estará sujeta a las reglas de acceso a la información previstas en la legislación en la materia.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Nacional de Búsqueda contará con las áreas necesarias en términos de lo establecido en el Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 54.** En la integración y operación de los grupos a que se refiere el artículo 53, fracción XVIII, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones:

**I.** Determinar las autoridades que deben integrar los grupos, en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno;

**II.** Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo;

**III.** Solicitar al área de análisis de contexto informes para el cumplimiento de sus facultades, y

**IV.** Disolver los grupos de trabajo cuando hayan cumplido su finalidad.

**Artículo 55.** Los servidores públicos integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda deben estar certificados y especializados en materia de búsqueda, de conformidad con los criterios que establezca el Sistema Nacional.

**Artículo 56.** Los informes previstos en el artículo 53, fracción V, deben contener, al menos, lo siguiente:

**I.** Avance en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Búsqueda con información del número de personas reportadas como desaparecidas Víctimas de los delitos materia de esta Ley y no localizadas; número de personas localizadas, con vida y sin vida; cadáveres o restos humanos que se han localizado e identificado; circunstancias de modo, tiempo y lugar de la localización;

**II.** Resultados de la gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Sistema Nacional;

**III.** Avance en la actualización y adecuado cumplimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda a que se refiere el artículo 99 de esta Ley;

**IV.** Resultado de la evaluación sobre el sistema al que se refiere el artículo 49, fracción II, de esta Ley, y

**V.** Las demás que señale el Reglamento.

**Artículo 57.** El Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizará los informes sobre los avances y resultados de la verificación y supervisión en la ejecución de los programas previstos en esta Ley, a fin de adoptar en coordinación con el Sistema Nacional todas aquellas medidas y acciones que se requieran para su cumplimiento.

**Artículo 58.** La Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, para realizar sus actividades, deben contar como mínimo con:

**I.** Grupo especializado de búsqueda, cuyas funciones se encuentran en el artículo 66 de esta Ley;

**II.** Área de Análisis de Contexto, la cual desempeñará, además de las funciones que esta Ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se refieren las fracciones XLV, XLVI, XLVII y XLVIII del artículo 53;

**III.** Área de Gestión y Procesamiento de Información, la cual desempeñará, además de las funciones que esta Ley u otras disposiciones jurídicas le asignen, las atribuciones a que se refiere la fracción XLIX del artículo 53, y

**IV.** La estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

## CAPÍTULO TERCERO

## DEL CONSEJO NACIONAL CIUDADANO

**Artículo 59.** El Consejo Ciudadano es un órgano ciudadano de consulta del Sistema Nacional, en materia de búsqueda de personas.

**Artículo 60.** El Consejo Ciudadano está integrado por:

**I.** Cinco Familiares;

**II.** Cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley. Se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense, y

**III.** Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

Los integrantes a que se refieren las fracciones anteriores deben ser nombrados por el Senado de la República previa consulta pública con las organizaciones de Familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de Víctimas y expertos en las materias de esta Ley.

La duración de su función será de tres años, sin posibilidad de reelección, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.

**Artículo 61.** Los integrantes del Consejo Ciudadano ejercerán su función en forma honorífica, y no deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño.

Los integrantes del Consejo Ciudadano deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por mayoría de votos, quien durará en su encargo un año.

El Consejo Ciudadano emitirá sus reglas de funcionamiento en las que determinará los requisitos y procedimientos para nombrar a su Secretario Técnico, la convocatoria a sus sesiones bimestrales y contenidos del orden del día de cada sesión.

Las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Ciudadano deberán ser comunicadas a los integrantes del Sistema Nacional, y podrán ser consideradas para la toma de decisiones. El integrante del Sistema Nacional que determine no adoptar las recomendaciones que formule el Consejo Ciudadano, deberá explicar las razones para ello.

La Secretaría de Gobernación proveerá al Consejo Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.

**Artículo 62.** El Consejo Ciudadano tiene las funciones siguientes:

**I.** Proponer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda acciones para acelerar o profundizar sus acciones, en el ámbito de sus competencias;

**II.** Proponer acciones a las instituciones que forman el Sistema Nacional para ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y forenses;

**III.** Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y herramientas materia de esta Ley;

**IV.** Proponer y, en su caso, acompañar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas;

**V.** Solicitar información a cualquier integrante del Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes;

**VI.** Acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con las que cuenta el Sistema Nacional, para el ejercicio de sus atribuciones;

**VII.** Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;

**VIII.** Dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se le reconocerá interés legítimo dentro de las investigaciones para la determinación de responsabilidades de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**IX.** Emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda;

**X.** Elaborar, aprobar y modificar la Guía de procedimientos del Comité, y

**XI.** Las demás que señale el Reglamento.

Las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda.

**Artículo 63.** Las decisiones que el Consejo Ciudadano adopte son públicas, en apego a la legislación de transparencia y protección de datos personales.

**Artículo 64.** El Consejo Ciudadano integrará de entre sus miembros un Comité para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá las siguientes atribuciones:

**I.** Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión Nacional de Búsqueda;

**II.** Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la Comisión Nacional de Búsqueda;

**III.** Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas;

**IV.** Contribuir, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, a la participación directa de los Familiares en el ejercicio de sus atribuciones, y

**V.** Las demás que determine el Consejo Nacional Ciudadano, en el marco de sus atribuciones.

## CAPÍTULO CUARTO

## DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA

**Artículo 65.** La Comisión Nacional de Búsqueda contará con Grupos de Búsqueda integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas.

Con independencia de lo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda podrá auxiliarse por personas especializadas en búsqueda de personas, así como por cuerpos policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 66.** Los Grupos de Búsqueda, para el adecuado cumplimiento de sus acciones, tienen las siguientes atribuciones:

**I.** Generar la metodología para la búsqueda inmediata considerando el Protocolo Homologado de Búsqueda y otros existentes;

**II.** Solicitar a la Fiscalía Especializada competente que realice actos de investigación específicos sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los hechos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio directo de las facultades con que cuentan las Comisiones de Búsqueda para realizar acciones relacionadas con la búsqueda de personas previstas en esta ley;

**III.** Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta localización de personas reportadas como desaparecidas y No Localizadas y salvaguarde sus derechos humanos, y

**IV.** Garantizar, en el ámbito de sus competencias, que se mantenga la cadena de custodia en el lugar de los hechos o hallazgo, así como en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas.

**Artículo 67.** Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho personal debe atender las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, según corresponda.

El personal al que se refiere el párrafo anterior, además de cumplir con la certificación respectiva, debe acreditar los criterios de idoneidad que emita la Comisión Nacional de Búsqueda.

## CAPÍTULO QUINTO

## DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS

**Artículo 68.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas.

Las Fiscalías Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con las Fiscalías Especializadas para el cumplimiento de la Ley.

**Artículo 69.** Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas deberán cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:

**I.** Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de la institución respectiva, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

**II.** Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y

**III.** Acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, según corresponda.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben capacitar, conforme a los más altos estándares internacionales, a los servidores públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a las Víctimas, sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas, aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros. De igual forma, podrán participar con las autoridades competentes, en la capacitación de los servidores públicos conforme a los lineamientos que sobre la materia emita el Sistema Nacional, en términos de esta Ley.

**Artículo 70.** La Fiscalía Especializada de la Procuraduría tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:

**I.** Recibir las Denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de esta Ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente;

**II.** Mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme al Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;

**III.** Dar aviso de manera inmediata, a través del Registro Nacional, a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos materia de esta Ley, a fin de que se inicien las acciones correspondientes a la búsqueda; así como compartir la información relevante, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;

**IV.** Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de compartir información que pudiera contribuir en las acciones para la búsqueda y localización de personas, en términos de las disposiciones aplicables;

**V.** Informar de manera inmediata a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Comisión Local de Búsqueda, según sea el caso, la localización o identificación de una Persona;

**VI.** Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes para recibir, recabar y proporcionar información sobre las acciones de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley cometidos en contra de personas migrantes;

**VII.** Solicitar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados, en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales;

**VIII.** Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables;

**IX.** Realizar y comunicar sin dilación todos aquellos actos que requieran de autorización judicial que previamente hayan sido solicitados por la Comisión que corresponda para la búsqueda y localización de una Persona Desaparecida;

**X.** Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la investigación de hechos probablemente constitutivos de los delitos materia de esta Ley, cuando de la información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más Entidades Federativas o se trata de una persona extranjera en situación de migración, independientemente de su situación migratoria;

**XI.** Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las tareas de investigación en campo;

**XII.** Recabar la información necesaria para la persecución e investigación de los delitos previstos en esta u otras leyes;

**XIII.** Remitir la investigación y las actuaciones realizadas a las autoridades competentes cuando advierta la comisión de uno o varios delitos diferentes a los previstos en esta Ley;

**XIV.** Solicitar al Juez de Control competente las medidas cautelares que sean necesarias, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales;

**XV.** Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas; así como a las instituciones y organizaciones de derechos humanos y de protección civil, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**XVI.** Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de los servidores públicos especializados en la materia;

**XVII.** Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas, en coordinación con las instituciones correspondientes, para poder hacer la entrega de cadáveres o restos humanos, conforme a lo señalado por el Protocolo Homologado de Investigación y demás normas aplicables;

**XVIII.** Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de las exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas Desaparecidas;

**XIX.** Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes el traslado de las personas internas a otros centros de reclusión salvaguardando sus derechos humanos, siempre que esta medida favorezca la búsqueda o localización de las Personas Desaparecidas o a la investigación de los delitos materia de esta Ley, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal;

**XX.** Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los delitos previstos en esta Ley, incluido brindar información periódicamente a los Familiares sobre los avances en el proceso de la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

**XXI.** Celebrar convenios de colaboración o cooperación, para el óptimo cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad con la presente Ley;

**XXII.** Brindar la información que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas le soliciten para mejorar la atención a las Víctimas, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;

**XXIII.** Brindar la información que el Consejo Ciudadano le solicite para el ejercicio de sus funciones, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;

**XXIV.** Proporcionar asistencia técnica a las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas que lo soliciten, y

**XXV.** Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 71.** Las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas deben contar al menos, con las características y atribuciones previstas en el artículo anterior.

Las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas deben remitir inmediatamente a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría los expedientes de los que conozcan cuando se actualicen los supuestos previstos en el artículo 24 de la presente Ley, o iniciar inmediatamente la carpeta de investigación, cuando el asunto no esté contemplado expresamente como competencia de la Federación.

**Artículo 72.** El servidor público que sea señalado como imputado por el delito de desaparición forzada de personas, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las acciones de búsqueda o las investigaciones, podrá ser sujeto de medidas cautelares como la suspensión temporal de su encargo, entre otras, por la autoridad jurisdiccional competente, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, el superior jerárquico puede adoptar las medidas administrativas y adicionales necesarias para impedir que el servidor público interfiera con las investigaciones.

**Artículo 73.** Las Fiscalías Especializadas deberán generar criterios y metodología específica para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas. En el caso de las desapariciones forzadas por motivos políticos de décadas pasadas, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y esta Ley, las Fiscalías Especializadas deberán emitir criterios y metodología específicos que deberán permitir realizar, al menos, lo siguiente:

**A)** Los procedimientos de búsqueda permanente que se lleven a cabo para buscar personas en cualquier lugar donde se presuma pudieran estar privadas de libertad como son centros penitenciarios, centros clandestinos de detención, estaciones migratorias, centros de salud y cualquier otro lugar en donde se pueda presumir pueda estar la persona desaparecida;

**B)** Cuando se sospeche que la víctima ha sido privada de la vida, realizar las diligencias pertinentes para la exhumación de los restos en los lugares que se presume pudieran estar, de acuerdo a los estándares internacionales, siendo derecho de los Familiares solicitar la participación de peritos especializados independientes, en términos de las disposiciones legales aplicables. En la generación de los criterios y metodología específicos, se tomarán en cuenta las sentencias y resoluciones nacionales e internacionales en materia de búsqueda e investigación de los casos de desaparición forzada.

**Artículo 74.** En el supuesto previsto en el artículo 66, la Fiscalía Especializada de la Procuraduría debe continuar sin interrupción la investigación de los delitos previstos en esta Ley, en términos de lo que establezca el Protocolo Homologado de Investigación y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 75.** Las autoridades de todos los órdenes de gobierno están obligadas a proporcionar, en el ámbito de su competencia, el auxilio e información que las Fiscalías Especializadas les soliciten para la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley.

**Artículo 76.** La Procuraduría celebrará acuerdos interinstitucionales con autoridades e instituciones para coordinar las acciones de investigación de mexicanos en el extranjero y migrantes extranjeros en el país.

**Artículo 77.** Las personas físicas o jurídicas que cuenten con información que pueda contribuir a la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, están obligadas a proporcionarla a las Fiscalías Especializadas directamente, a través del número telefónico previsto en esta Ley o cualquier otro medio, en términos de la normativa aplicable.

**Artículo 78.** Las Fiscalías Especializadas no pueden condicionar la recepción de la información a que se refiere el párrafo anterior al cumplimiento de formalidad alguna.

## CAPÍTULO SEXTO

## DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

### SECCIÓN PRIMERA

### DE LA SOLICITUD DE BÚSQUEDA

**Artículo 79.** La búsqueda tendrá por objeto realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados.

La búsqueda a que se refiere la presente Ley se realizará de forma conjunta, coordinada y simultánea por la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda.

Los mecanismos de búsqueda deberán agotarse totalmente hasta que se determine la suerte o paradero de la persona. La Comisión Nacional de Búsqueda garantizará que los mecanismos se apliquen conforme a las circunstancias propias de cada caso, de conformidad con esta Ley y el Protocolo Homologado de Búsqueda.

**Artículo 80.** Cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una Persona Desaparecida o No Localizada mediante:

**I.** Noticia;

**II.** Reporte, o

**III.** Denuncia.

La Noticia, el Reporte o la Denuncia pueden realizarse en forma anónima.

Tratándose de Denuncia, no será necesaria su ratificación. Tanto la búsqueda como la investigación se llevarán a cabo sin dilación.

**Artículo 81.** El Reporte puede realizarse las veinticuatro horas del día, todos los días del año, a través de cualquiera de los siguientes medios:

**I.** Telefónico, a través del número único nacional habilitado para tal efecto;

**II.** Medios Digitales;

**III.** Presencial, ante la Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda y el Ministerio Público;

**IV.** Tratándose de personas que no residen en el territorio nacional, a través de las oficinas consulares o embajadas de México en el extranjero, las cuales deberán remitir sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría y a la Fiscalía Especializada que corresponda, o

**V.** El Sistema Nacional, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, puede establecer medios adicionales a los previstos en este artículo para recibir Reportes.

Cuando la distancia o los medios de comunicación no permitan realizar el Reporte en términos de las fracciones anteriores, este puede realizarse ante la policía o la autoridad municipal que el Ayuntamiento designe para tal efecto y que cuente con la capacitación para aplicar el protocolo de búsqueda correspondiente.

En el caso de Reportes realizados en términos de la fracción I de este artículo, la autoridad que reciba el reporte deberá proporcionar el folio único de búsqueda a la persona que lo realizó. En el caso de la fracción III, quien reciba el Reporte deberá entregar a la persona que lo realizó constancia por escrito en el que constará el folio único de búsqueda.

**Artículo 82.** La presentación de Denuncias se sujetará a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 83.** Cuando se trate de una Noticia, las autoridades que no pertenezcan a la Comisión Nacional de Búsqueda o a las Comisiones Locales de Búsqueda y que tengan conocimiento de ésta, deben:

**a)** Recabar los datos mínimos que se desprendan de la Noticia, como se señala en el artículo 85, y

**b)** Transmitir la información de manera inmediata a la Comisión correspondiente.

**Artículo 84.** Las oficinas consulares de México deben recibir las solicitudes de búsqueda de los Familiares en México y remitirán sin dilación el Reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Cuando la búsqueda requiera de diligencias en otro país, bien sea el de origen, el de tránsito o el de llegada de la persona migrante, se deberá activar el Mecanismo de Apoyo Exterior a fin de garantizar que la información y elementos probatorios que sean necesarios puedan ser tramitados de forma inmediata y efectiva a lo largo del proceso de búsqueda.

**Artículo 85.** La autoridad distinta a la Comisión Nacional de Búsqueda que reciba el Reporte debe recabar por lo menos, la información siguiente:

**I.** El nombre, la edad y demás datos generales de la persona que lo presenta, salvo que se trate de Noticia o Reporte anónimo;

**II.** La ubicación desde la cual se realiza el Reporte, Denuncia o Noticia;

**III.** El número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con la persona, salvo que se trate de Noticia o Reporte anónimo;

**IV.** La persona que se reporta como desaparecida o No Localizada y, en su caso, sus características físicas o cualquier otro dato que permita su identificación y localización;

**V.** La narración pormenorizada de los hechos ocurridos, incluyendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar;

**VI.** La mención de las personas probablemente involucradas, con el señalamiento de todos los datos que puedan conducir a su identificación, incluida su media filiación, y

**VII.** Cualquier otra información, documentos o elementos que faciliten la búsqueda de las Personas Desaparecidas o No Localizadas y la investigación de los hechos.

Si la persona que realiza el Reporte o Denuncia no otorga la información señalada en este artículo, la instancia que la recabe debe asentar las razones de esa imposibilidad. La objeción de señalar datos por temor o imposibilidad de aportarlos por parte de quien haga la Denuncia o Reporte, no será obstáculo para el inicio de la búsqueda inmediata por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La autoridad que recabe la información, documentos y elementos a que se refiere el presente artículo deberá asentar su nombre, cargo y dependencia gubernamental a la que se encuentre adscrito al momento de recibir el Reporte o Denuncia. La autoridad estará obligada a entregar una copia del Reporte o Denuncia a la persona que haya acudido a realizarla.

**Artículo 86.** La autoridad que recabe la Denuncia, Reporte o Noticia debe transmitirlo inmediatamente, a través de cualquier medio tecnológico o de telecomunicación, a la comisión que corresponda en términos de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, se encuentra obligada a aplicar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización.

Las autoridades que reciban la Denuncia, el Reporte o Noticia deberán implementar, inmediatamente, las acciones de búsqueda que les correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo correspondiente.

El incumplimiento por parte de la autoridad obligada a la transmisión inmediata será sancionado de conformidad con la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

**Artículo 87.** Una vez que la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda que corresponda reciba, en términos del artículo anterior, un Reporte o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada, debe ingresar de inmediato la información correspondiente al Registro Nacional y generar un folio único de búsqueda.

El folio único de búsqueda debe contener como mínimo:

**a)** La información sobre la Persona Desaparecida o No Localizada a que hace referencia el artículo 85 de la Ley, y

**b)** El nombre del servidor público de la Comisión o autoridad que recibió la Noticia, Reporte o Denuncia.

La Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda deben actualizar constantemente el expediente de búsqueda, para lo cual pueden solicitar, y deben proporcionar, información a los Familiares en los términos previstos en las disposiciones legales aplicables. Cuando la Persona Desaparecida o No Localizada sea de una nacionalidad distinta a la mexicana, las autoridades involucradas en la búsqueda de dicha persona deben proveer información a los Familiares que se encuentren en el exterior, a través de las autoridades consulares correspondientes o de la persona que hubieren designado para tales efectos.

Los Familiares y sus representantes tienen acceso de manera íntegra al expediente de búsqueda de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 88.** En el caso de la presentación de una Denuncia, el agente del Ministerio Público que la reciba debe proceder sin dilación a aplicar el Protocolo Homologado de Investigación y remitir la información a la Fiscalía Especializada competente, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda.

**Artículo 89.** Cuando la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente tenga Noticia o Reporte de una Persona Desaparecida o No Localizada, iniciará la búsqueda de inmediato.

Asimismo, informará sin dilación a la Fiscalía Especializada competente cuando considere que la desaparición de la persona se debe a la comisión de un delito.

Para establecer la presunción de un delito se atenderá a los siguientes criterios:

**I.** Cuando la persona de la que se desconoce su paradero es menor de 18 años de edad;

**II.** Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito;

**III.** Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito;

**IV.** Cuando, aun sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener Noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona, y

**V.** Cuando antes del plazo establecido en el inciso anterior aparezcan indicios o elementos que hagan suponer la probable comisión de un delito.

En todos los casos, la Unidad de Gestión podrá solicitar constituirse como coadyuvante en los procesos que se sigan por los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares.

**Artículo 90.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe instrumentar acciones de búsqueda inmediatamente, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual incluirá, entre otros, el cruce de la información ingresada al Registro Nacional con los registros o bases de datos a que se refiere el artículo 94 de esta Ley.

Asimismo, al momento de iniciar la búsqueda, debe informar a los Familiares sobre la posibilidad de canalizarlos a la autoridad de atención a Víctimas que corresponda, de conformidad con la legislación en materia de Víctimas.

**Artículo 91.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe solicitar a los Familiares, preferentemente a través del cuestionario establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda, la información que estime necesaria para localizar e identificar a la Persona Desaparecida o No Localizada.

**Artículo 92.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe asegurar la existencia de mecanismos eficientes para que los Familiares y sus representantes siempre tengan acceso a los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda, y puedan proponer acciones de investigación para la búsqueda y localización de la persona.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe implementar mecanismos para que los Familiares tengan conocimiento del resultado de las acciones de búsqueda, las diligencias, los indicios, evidencias y pruebas que surjan de los mismos.

Los Familiares y sus representantes podrán acompañar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, lo cual estará garantizado en todo momento, de acuerdo con las medidas previstas en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en el Protocolo Homologado de Investigación y siempre velando por salvaguardar su integridad física y emocional.

Lo dispuesto en este artículo está sujeto a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

**Artículo 93.** Durante la búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente presumirá que la Persona Desaparecida o No Localizada, se encuentra con vida.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente no podrá concluir con las acciones de búsqueda, incluso en los casos en que la Persona Desaparecida o No Localizada sea declarada ausente, en términos de lo establecido en esta Ley y la legislación aplicable, salvo que haya certeza sobre la suerte o paradero de la persona o hasta que sus restos hayan sido encontrados y plenamente identificados.

**Artículo 94.** A efecto de determinar la ubicación de la Persona Desaparecida o No Localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe consultar, mediante los sistemas informáticos instrumentados para ello, de manera periódica y exhaustiva las bases de datos o registros de:

**I.** Hospitales, clínicas, centros de atención psiquiátrica, centros de Desarrollo Integral para la Familia, centros de salud, centros de atención de adicciones y rehabilitación, públicos y privados;

**II.** Centros de detención y reclusorios a cargo del sistema penitenciario;

**III.** Los registros de los centros de detención administrativos;

**IV.** Servicios Médicos Forenses y banco de datos forenses;

**V.** Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas;

**VI.** Albergues públicos y privados, e instituciones de asistencia social, en términos de la Ley de Asistencia Social;

**VII.** Panteones o lugares en los que se depositan restos mortales o cadáveres, públicos y privados;

**VIII.** Identidad de personas;

**IX.** Estaciones migratorias y listas de control migratorio;

**X.** Terminales de autotransporte terrestre, aéreo y marítimo, de pasajeros y carga, y

**XI.** Los demás registros y bases de datos que contengan información que pueda contribuir a la localización e identificación de las personas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Las autoridades o instituciones, públicas o privadas, que administran las bases de datos o registros a que se refiere este artículo deben tomar las medidas necesarias para que dichas bases de datos y registros contengan la información de las personas a las que prestan servicios, beneficios o tienen bajo su custodia.

La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente proporcionará asistencia a las autoridades e instituciones a que se refiere el párrafo anterior a fin de facilitar el acceso a la información contenida en sus bases de datos o registros, para lo cual celebrarán los convenios correspondientes.

**Artículo 95.** Cuando sea necesario para la búsqueda de una Persona Desaparecida, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente podrá solicitar al Ministerio Público que ordene los actos de investigación previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o que recabe autorización judicial para efectuar actos de investigación que requieran tal autorización previa, de acuerdo con el mismo ordenamiento, indicando, en su caso, las que tengan el carácter de urgentes.

Las peticiones señaladas tendrán que ser resueltas sin dilación alguna cuando sean urgentes, debiendo la Comisión motivar dicho carácter.

**Artículo 96.** Si en cualquier momento durante la búsqueda la persona es localizada, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente debe, como mínimo:

**I.** Dar aviso a la Fiscalía Especializada que corresponda, cuando exista carpeta de investigación. En caso de que no se haya cometido ningún delito, deberá darse por concluida la carpeta de investigación;

**II.** Dar aviso inmediato a la autoridad competente en materia de atención a Víctimas;

**III.** Aplicar el procedimiento correspondiente a la identificación de identidad regulado en el Protocolo Homologado de Búsqueda, el cual establecerá el modo de obtención de la declaración de la persona localizada, en la cual señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su desaparición o no localización, así como los motivos de ésta y los probables responsables de la misma;

**IV.** Una vez identificada, declarar localizada a la persona y notificarlo a quien solicitó la búsqueda, a sus Familiares o, en su caso, a la persona que ésta designe;

**V.** En caso de que se localizara sin vida a la persona, se deberán aplicar las reglas para el Tratamiento e Identificación Forense y el de Notificación y Entrega de restos a Familiares, contenido en el Protocolo Homologado que corresponda, garantizando siempre proteger, respetar y restituir de manera digna a sus Familiares los restos humanos, así como entregar un informe de las circunstancias de la muerte y la forma en que se identificaron dichos restos. En este caso, las autoridades competentes deberán continuar con la investigación para la ubicación y sanción de los probables responsables, y

**VI.** Actualizar el Registro Nacional que corresponda en términos del artículo 105 de esta Ley.

**Artículo 97.** Cuando alguna autoridad identifique a una persona que por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de parentesco, identidad y domicilio, debe dar aviso a la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente, a efecto de que se verifique si su desaparición o no localización fue reportada en el Registro Nacional. En caso de no existir Reporte o Denuncia, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente deberá informarlo a la Fiscalía Especializada que corresponda para incorporar los datos respectivos al Registro Nacional en términos del artículo 106 de esta Ley.

**Artículo 98.** Las autoridades involucradas en la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en el ámbito de sus competencias, deben asegurar la cadena de custodia de la información e indicios, dando vista inmediata a la Fiscalía Especializada para su procesamiento, traslado, análisis y almacenamiento, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El servidor público que incumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior, será sancionado conforme a la normativa correspondiente.

## SECCIÓN SEGUNDA

## DE LOS PROTOCOLOS

**Artículo 99.** La Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente y las Fiscalías Especializadas, de conformidad con las atribuciones que le confiere esta Ley, deberán realizar las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme a los protocolos correspondientes.

Corresponderá al Sistema la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la del Protocolo Homologado de Investigación. La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá opinión previa a la emisión de los protocolos.

Los protocolos deberán elaborarse con perspectivas de género, de niñez y de derechos humanos.

En lo que corresponda a cada uno contendrán, al menos, lo siguiente:

**I.** Las formas en las que las autoridades recibirán el Reporte, Denuncia o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada;

**II.** Los procesos de búsqueda diferenciados en función de la causa y circunstancias en que hubiere ocurrido la desaparición o no localización, incluidos en los casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares;

**III.** Las acciones de búsqueda en el lugar de los hechos o del hallazgo;

**IV.** El procedimiento para definir los polígonos en donde debe realizarse la búsqueda;

**V.** El mecanismo de búsqueda inmediata, el cual deberá considerar la intervención de las autoridades desde el momento que se recibe el Reporte, Denuncia o Noticia de hechos de la desaparición, partiendo del supuesto de que la víctima se encuentra con vida;

**VI.** Los procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial para buscar y localizar con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;

**VII.** Los procedimientos de búsqueda e investigación específicos para niñas, niños y adolescentes;

**VIII.** Los procedimientos de búsqueda e investigación para desapariciones cometidas en contra de personas vinculadas con movimientos políticos;

**IX.** Los procedimientos de búsqueda y localización de personas migrantes, sin importar su calidad migratoria, que hayan desaparecido durante su estancia en el país, conforme los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior;

**X.** Los procedimientos de Actuación e Identificación Forense, que contendrá como mínimo los procedimientos para la localización, recuperación e identificación forense, con los criterios de actuación en antropología, odontología forense, autopsia médico legal, entre otros;

**XI.** El mecanismo de notificación a Familiares y acciones de investigación a realizar cuando se ha localizado con vida a una Persona Desaparecida o No Localizada;

**XII.** Los procedimientos para notificar y entregar los restos a Familiares de personas localizadas sin vida;

**XIII.** Los mecanismos de coordinación con otras autoridades para realizar la búsqueda y la investigación;

**XIV.** El proceso para levantar el cuestionario de información ante mortem con Familiares, personas allegadas y autoridades que puedan tener información que contribuya a la búsqueda, localización e identificación;

**XV.** El procedimiento para consultar la información en los registros y bases de datos a que se refiere el artículo 94 de esta Ley;

**XVI.** Los mecanismos para confrontar información con otros registros o bases de datos locales, nacionales o internacionales;

**XVII.** El procedimiento para entrevistar a autoridades y personas que puedan tener información que contribuya a la búsqueda;

**XVIII.** El mecanismo para ingresar a personas a los programas de protección, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y las disposiciones análogas en las Entidades Federativas;

**XIX.** Los mecanismos de difusión para la colaboración ciudadana en la búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales; y para la difusión del perfil de la Persona Desaparecida o No Localizada; en los términos de la legislación aplicable, y en su caso, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado;

**XX.** Las medidas para atender a personas en situación de vulnerabilidad;

**XXI.** Los mecanismos para mantener a los Familiares informados respecto de las acciones de búsqueda realizadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**XXII.** Los plazos y procedimientos para realizar la búsqueda;

**XXIII.** Los procedimientos para la participación de los Familiares en la búsqueda e investigación;

**XXIV.** Los criterios para definir las acciones óptimas para la búsqueda y racionalizar los recursos empleados en la búsqueda, y

**XXV.** Aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley.

Ambos protocolos deberán elaborarse con la participación de expertos en la materia, sociedad civil y Familiares, conforme a estándares internacionales.

**Artículo 100.** Para elaborar y actualizar los protocolos a que se refiere el presente Capítulo, se debe considerar, entre otros, los elementos siguientes:

**I.** Instrumentos de investigación, consultas comunitarias, análisis de los actores involucrados, estudios comparativos de modelos o prácticas exitosas, referencias hemerográficas, recorridos exploratorios y evaluaciones de impacto, entre otros;

**II.** Mapas de Denuncias, victimización, incidencia delictiva y delincuencia georreferencial;

**III.** Estudios de agencias de cooperación y centros de investigación locales, nacionales o internacionales;

**IV.** En su caso, la situación específica del grupo social al que se encuentra dirigido el protocolo específico;

**V.** El uso de herramientas tecnológicas en términos que establece esta Ley;

**VI.** Análisis de datos y estadísticas oficiales que muestren las tendencias históricas;

**VII.** Evaluaciones participativas a través de diferentes medios como encuestas voluntarias, estructuradas o semiestructuradas a Familiares para evaluar la percepción o la eficacia de las medidas y procedimientos contemplados en la presente Ley, y

**VIII.** Las mejores prácticas internacionales y los avances de la ciencia.

Los protocolos deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo 101.** Además de lo establecido en el artículo anterior, los protocolos contendrán las medidas que deberán realizar la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda, así como las Fiscalías Especializadas en colaboración con otras dependencias e instituciones, públicas y privadas. Dichas medidas serán obligatorias a todas las instancias que integran el Sistema Nacional.

## CAPÍTULO SÉPTIMO

## DE LOS REGISTROS

### SECCIÓN PRIMERA

### DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS

**Artículo 102.** El Registro Nacional es una herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación.

**Artículo 103.** El Registro Nacional se conforma con la información que recaban las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas.

El Registro Nacional contendrá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por el público en general, respecto de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

**Artículo 104.** Corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda administrar y coordinar la operación del Registro Nacional.

Es obligación de las autoridades de las Entidades Federativas y de la Federación recopilar la información para el Registro Nacional y proporcionar dicha información de forma oportuna a la Comisión Nacional de Búsqueda, en términos de lo que establece esta Ley y su Reglamento.

**Artículo 105.** El Registro Nacional debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello. La información deberá ser recabada de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Para cumplir con sus fines de búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda, las Procuradurías Locales y las Fiscalías Especializadas pueden consultar en cualquier momento el Registro Nacional.

La Fiscalía Especializada competente debe actualizar el Registro Nacional, indicando si la carpeta corresponde al delito de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.

Si de las investigaciones se desprende que se trata de un delito diferente a los previstos en esta Ley, así se hará constar en el Registro Nacional actualizando el estado del folio, sin perjuicio de que continúe la investigación correspondiente.

Si la Persona Desaparecida o No Localizada ha sido encontrada viva o si fueron encontrados sus restos, se dará de baja del Registro Nacional y se dejará constancia de ello, sin perjuicio del seguimiento de la investigación correspondiente.

**Artículo 106.** El Registro Nacional debe contener los siguientes campos:

**I.** En relación con la persona que reporta la desaparición o no localización, salvo que sea anónima:

**a)** Nombre completo;

**b)** Sexo;

**c)** Edad;

**d)** Relación con la Persona Desaparecida;

**e)** Clave Única de Registro de Población o cualquier documento de identificación oficial;

**f)** Domicilio, y

**g)** Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que permita que las autoridades estén en contacto con ella;

**II.** En relación con la Persona Desaparecida o No Localizada:

**a)** Nombre;

**b)** Edad;

**c)** Sexo;

**d)** Nacionalidad;

**e)** Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado de la persona, videos u otros medios gráficos;

**f)** Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos que permitan su identificación;

**g)** Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista;

**h)** Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;

**i)** Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación oficial;

**j)** Escolaridad;

**k)** Ocupación al momento de la desaparición;

**l)** Pertenencia grupal o étnica;

**m)** Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a clubes o equipos;

**n)** Historia clínica, dental, cirugías, y demás datos que permitan su identificación;

**o)** Estatus migratorio;

**p)** Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles;

**q)** Información sobre toma de muestras biológicas a Familiares y perfiles genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses;

**r)** Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco Nacional de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro, y

**s)** Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan dar con el paradero de la Persona;

**III.** Los hechos relacionados con la desaparición o no localización, así como si existen elementos para suponer que está relacionada con la comisión de un delito;

**IV.** El nombre del servidor público que recibió el Reporte, Denuncia o Noticia;

**V.** El nombre del servidor público que ingresa la información al registro;

**VI.** El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y

**VII.** El rubro o registro de la carpeta de investigación que indique el delito por el que se inició y el nombre de la autoridad ministerial encargada de dicha investigación.

Cuando la autoridad competente genere un registro debe de asignar un folio único que deberá proporcionar a la persona que realizó el Reporte, Denuncia o Noticia.

Asimismo, se deben incorporar toda la información novedosa que resulte de las diligencias de búsqueda o investigación.

**Artículo 107.** Los datos obtenidos inicialmente a través de la Denuncia, Reporte o Noticia deberán asentarse en el Registro Nacional de manera inmediata.

Los datos e información que no puedan ser asentados de forma inmediata o que por su naturaleza requieran de un procedimiento para su obtención previsto en los protocolos a que se refiere esta Ley, deberán ser recabados por personal debidamente capacitado. Asimismo, se deberán llevar a cabo una o más entrevistas con Familiares de la Persona Desaparecida o No Localizada, o con otras personas, de conformidad con el protocolo homologado que corresponda, con el fin de obtener la información detallada sobre la persona. Una vez que se recabe la información deberá incorporarse inmediatamente al Registro Nacional.

El personal que lleve a cabo las entrevistas para la obtención de datos forenses deberá ser capacitado en atención psicosocial.

En caso de que la persona que denuncie o reporte la desaparición o no localización de una persona, desconozca información para su incorporación en el registro, se asentará en el reporte y no podrá negarse el levantamiento de su Reporte o Denuncia.

**Artículo 108.** Los datos personales contenidos en el Registro Nacional deben ser utilizados exclusivamente con el fin de determinar la suerte o paradero de la Persona Desaparecida o No Localizada y esclarecer los hechos.

Los Familiares que aporten información para el Registro Nacional tendrán el derecho a manifestar que dicha información sea utilizada exclusivamente para la búsqueda e identificación de la Persona Desaparecida o No Localizada. Los Familiares deberán ser informados sobre este derecho antes de proporcionar la información. De igual forma, podrán solicitar que no se haga pública la información de la Persona Desaparecida o No Localizada a que se refieren los incisos a) al g) de la fracción II del artículo 106 de esta Ley por motivos de seguridad.

Las muestras biológicas y perfiles genéticos únicamente podrán ser utilizados para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

**Artículo 109.** El Registro Nacional puede ser consultado en su versión pública, a través de la página electrónica que para tal efecto establezca la Comisión Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo que determine el protocolo respectivo y las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

**Artículo 110.** El Registro Nacional deberá contener como mínimo los siguientes criterios de clasificación de Personas Localizadas:

**I.** Persona localizada que no fue víctima de ningún delito;

**II.** Persona localizada víctima de un delito materia de esta Ley, y

**III.** Persona localizada víctima de un delito diverso.

## SECCIÓN SEGUNDA

## DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS FALLECIDAS NO IDENTIFICADAS Y NO RECLAMADAS

**Artículo 111.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas se encuentra a cargo de la Procuraduría, formará parte del Banco Nacional de Datos Forenses y contiene información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior identificación.

El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas se integra con la información proporcionada por las autoridades competentes, la Federación y las Entidades Federativas.

El objetivo de este Registro Nacional es el de concentrar la información que permita la identificación de las personas fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de los Familiares de personas fallecidas no reclamadas.

La Procuraduría emitirá los lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan dicha información de forma homologada.

**Artículo 112.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contener como mínimo, los siguientes campos:

**I.** Información homologada sobre los datos del cadáver o los restos, la ropa, calzado y otras prendas u objetos. También, cuando sea posible, señas particulares como tatuajes, lunares y cualquier otro dato que permita la identificación;

**II.** Informe homologado sobre necropsia médico legal y dictámenes, antropología forense, odontología forense, dactiloscopia, genética forense, entre otras, así como las fotografías del cadáver o los restos;

**III.** Información sobre el lugar, la fecha y las circunstancias de la localización y recuperación del cadáver o los restos. En caso de provenir de una exhumación se generará también la información arqueológica forense y otra información relevante;

**IV.** Información sobre la inhumación o destino final del cadáver o los restos;

**V.** Información que se desprenda de la cadena de custodia de los informes y el tratamiento del cadáver o los restos;

**VI.** Datos de la carpeta de investigación, averiguación previa, Noticia o acta circunstanciada vinculada al hallazgo;

**VII.** En caso de un accidente, una catástrofe o cualquier otra situación en donde exista un número de Víctimas en lugar determinado, se deberá incluir la información disponible sobre ese evento;

**VIII.** Datos sobre las personas identificadas no reclamadas, tales como su nombre, fotografía, lugar de destino final y, cuando se requiera conforme, al protocolo homologado que corresponda, el informe forense multidisciplinario en que se confirma la identificación, y

**IX.** Lugar donde se encuentra el soporte documental de la información vertida en el registro.

Una vez que se logra la identificación del cadáver o de los restos de la persona, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá notificar a los Familiares de la persona fallecida de acuerdo al Protocolo Homologado de Investigación.

Las autoridades tendrán la obligación de identificar y localizar a los Familiares de la persona fallecida. En caso de que no se pueda identificar o localizar a algún familiar, la información contenida en este registro deberá enviarse al subregistro de personas identificadas no reclamadas, a fin de iniciar el proceso de localización de Familiares conforme al protocolo correspondiente.

Una vez realizada la identificación positiva, la notificación a las familias y la aceptación de las familias del resultado o que se haya realizado el peritaje independiente solicitado, se podrán hacer las modificaciones respectivas al Registro Nacional y cesar las acciones de búsqueda, sin perjuicio del derecho de los Familiares de interponer los recursos legales correspondientes para impugnar la identificación.

**Artículo 113.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas es una herramienta de búsqueda e identificación. La información contenida se actualiza en tiempo real por parte de los servicios periciales o los servicios médicos forenses de la Federación y las Entidades Federativas, en cuanto se recabe la información, de conformidad con los lineamientos que emita la Procuraduría y la Secretaría de Salud o en su caso, el protocolo que corresponda.

Para cumplir con sus obligaciones de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda pueden consultar en cualquier momento este registro.

**Artículo 114.** El personal de servicios periciales y servicios médicos forenses deberá estar permanentemente capacitado y actualizado de conformidad con el protocolo que corresponda.

**Artículo 115.** La Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y de los servicios periciales y servicios médicos forenses se encuentran obligados a realizar las acciones pertinentes para la verificación de una probable hipótesis de identificación a partir de la información contenida en los registros previstos en esta Ley, dejando constancia del resultado.

**Artículo 116.** La información contenida en el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas estará sujeta a las disposiciones en materia de protección de datos personales y se utilizará únicamente para lograr la identificación de las personas fallecidas.

**Artículo 117.** El Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas deberá contar con las herramientas tecnológicas necesarias para permitir la interrelación, el resguardo y la confiabilidad de la información.

**Artículo 118.** Ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación, en fosas comunes, de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de cumplir obligatoriamente con lo que establece el protocolo homologado aplicable.

## SECCIÓN TERCERA

## DEL BANCO NACIONAL DE DATOS FORENSES

**Artículo 119.** El Banco Nacional de Datos Forenses está a cargo de la Procuraduría y que tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas, así como para la investigación de los delitos materia de esta Ley.

El Banco Nacional de Datos Forenses se conforma con las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real.

El Banco Nacional de Datos Forenses debe estar interconectado con las herramientas de búsqueda e identificación previstas en esta Ley que conforman el Sistema Nacional y ser actualizado en tiempo real, mediante personal designado y capacitado para ello.

La información deberá ser recabada de conformidad con los protocolos correspondientes.

El Banco Nacional de Datos Forenses deberá realizar cruces de información de manera permanente y continua con el Registro Nacional y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas. Así como, con otros registros que no forman parte del Sistema Nacional que contengan información forense relevante para la búsqueda de personas.

La Procuraduría emitirá los lineamientos para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan dicha información de forma homologada. Estos lineamientos se elaborarán considerando la opinión de autoridades competentes y expertos en la materia y de acuerdo a estándares internacionales.

**Artículo 120.** Corresponde a la Procuraduría coordinar la operación y centralizar la información del Banco Nacional de Datos Forenses, así como administrar el Registro Forense Federal, en términos de lo que establezca el Reglamento.

Corresponde a las Procuradurías Locales coordinar la operación de su respectivo registro forense y compartir la información con la Procuraduría, en términos de lo que establece esta Ley.

**Artículo 121.** Los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las Entidades Federativas deben capturar en el registro forense que corresponda, la información que recaben, de conformidad con la presente sección y el protocolo correspondiente.

Las autoridades correspondientes en la Federación y las Entidades Federativas, deben garantizar que el personal de los servicios periciales y médicos forenses esté capacitado de forma permanente y continua en las diferentes materias que se requieren para el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

**Artículo 122.** La autoridad pericial encargada de la toma de muestras debe informar a la persona que suministra la muestra o a su representante legal el uso que le dará a la información que recabe y entregarle una constancia de la diligencia ministerial.

La información genética suministrada por los Familiares será utilizada exclusivamente con fines de identificación de Personas Desaparecidas.

**Artículo 123.** La persona que proporcione información para análisis pericial debe otorgar previamente su consentimiento por escrito, y tiene derecho a designar, a su cargo, a peritos independientes para que en su presencia se recabe la muestra.

Los servicios periciales deberán almacenar las muestras y otros objetos relevantes para la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con lo que establezca esta Ley, el protocolo correspondiente y los estándares internacionales en la materia.

Los peritos independientes a que se refiere el párrafo anterior deben contar con la certificación legalmente expedida por instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, asegurando que cumplan con los estándares de certificación nacional o internacional y cuenten con una especialidad acreditada en el ramo de las ciencias forenses que correspondan. Los peritos serán acreditados ante la autoridad judicial o ministerial que corresponda, mismas que no pueden negarla injustificadamente ni demorarse en hacer la acreditación correspondiente.

La designación y aceptación de los peritos independientes, y los dictámenes periciales que éstos formulen deben cumplir las disposiciones de la legislación procesal penal aplicable.

**Artículo 124.** El Banco Nacional de Datos Forenses, además de la información pericial y forense, útil para la identificación de una persona, debe contar con una base de datos de información genética que contenga, como mínimo:

**I.** La información genética de los Familiares en primer grado en línea recta ascendente o descendente, o segundo grado en línea colateral, de las Personas Desaparecidas y No Localizadas, conforme se requiera, y

**II.** La información genética de terceras personas en los casos en que así lo requiera la autoridad ministerial o judicial que corresponda, como datos o medios de prueba.

Las muestras para análisis pericial y su subsecuente incorporación al registro forense que corresponda en términos de esta Ley, sólo pueden recabarse a las personas mencionadas en la fracción I del presente artículo con su aceptación expresa, informada y por escrito en una diligencia ministerial.

**Artículo 125.** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede utilizarse en otras investigaciones cuando aporte elementos para la localización de una persona, cuando sea de utilidad para otros procedimientos penales o para el ejercicio del derecho de la víctima a obtener la reparación integral.

**Artículo 126.** La información contenida en los registros forenses a que se refiere esta Sección puede ser confrontada con la información que esté en poder de otras autoridades e instituciones, nacionales o extranjeras, así como otros bancos forenses que puedan ser útiles para identificar a una persona.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben establecer los mecanismos de colaboración necesarios para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior. Asimismo, podrán coordinarse con las autoridades de otros países que posean bases de datos, prioritariamente con aquellos países que tengan frontera o flujo migratorio relevante con México.

Cuando se trate de personas migrantes desaparecidas en México, se estará a lo que establecen las disposiciones legales aplicables.

**Artículo 127.** Los datos personales contenidos en el Banco Nacional de Datos Forenses deberán ser tratados de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La obtención, administración, uso y conservación de información forense deben realizarse con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados, así como otros acuerdos con las instituciones internacionales que cuenten con bases de datos o bancos de datos forenses.

Una vez identificada la Persona Desaparecida o No Localizada, los titulares de los datos personales o sus Familiares, según sea el caso, podrán solicitar el tratamiento de sus datos en los términos de la legislación de la materia.

## SECCIÓN CUARTA

## DE LA DISPOSICIÓN DE CADÁVERES DE PERSONAS

**Artículo 128.** Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias.

Las Procuradurías y otras autoridades que tengan a su cargo servicios forenses deben tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados.

Cuando las investigaciones revelen la identidad del cadáver o los restos de la persona, el agente del Ministerio Público competente podrá autorizar que los Familiares dispongan de él y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios para continuar con las investigaciones o para el correcto desarrollo del proceso penal, en cuyo caso dictará las medidas correspondientes.

En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría de Salud.

**Artículo 129.** Las autoridades correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas con el propósito de la identificación de un cadáver o resto humano antes de inhumarlo, a partir de los procedimientos establecidos por el protocolo homologado aplicable.

Una vez recabadas las muestras a que se refiere el párrafo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá autorizar la inhumación de un cadáver o resto humano no identificado. En el caso de inhumación, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que ésta sea digna, en una fosa individualizada, con las medidas que garanticen toda la información requerida para el adecuado registro y en un lugar claramente identificado que permita su posterior localización.

**Artículo 130.** Para efectos de lo dispuesto en esta Sección, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Secretaría de Salud, determinarán las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres o restos de personas, mediante lineamientos conforme a los más altos estándares internacionales que deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación.

### SECCIÓN QUINTA

### DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

**Artículo 131.** Las bases y los registros a que se refiere esta Ley deben estar diseñados de tal forma que:

**I.** No exista duplicidad de registros;

**II.** Permitan utilizar en la búsqueda y en la investigación de los delitos, las herramientas de análisis de contexto, con enfoque transnacional, a fin de determinar patrones de criminalidad, modo de operación, mapas criminológicos, estructura y actividad de grupos de delincuencia organizada, entre otros;

**III.** Cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Procuraduría, los que deberán ser acordes con los lineamientos que emita la Comisión Nacional de Búsqueda en términos de la fracción XIV del artículo 53 de esta Ley, y

**IV.** Permitan su actualización permanente por parte de las Fiscalías Especializadas y demás autoridades competentes, en términos de lo previsto en esta Ley.

**Artículo 132.** La Procuraduría debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses a que se refiere este Título cuenten con las características siguientes:

**I.** Reflejen automática e inmediatamente cada registro en el Registro Nacional para efectos estadísticos;

**II.** Estén interconectados en tiempo real y su información esté respaldada;

**III.** Una vez ingresada la información de un Reporte, Denuncia o Noticia en el Registro Nacional, puedan realizar una búsqueda automática en las bases de datos referidas en esta Ley, y

**IV.** No cuenten con la posibilidad de eliminar registros.

La Procuraduría, con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, emitirá los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas se interconecten en tiempo real con el Registro Nacional.

**Artículo 133.** Además de lo establecido en este Capítulo, la Federación y las Entidades Federativas, deberán contar, al menos, con:

**I.** El Registro Administrativo de Detenciones, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

**II.** El Registro Nacional de Fosas, el cual deberá contar con la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Procuraduría y las Procuradurías Locales localicen.

## CAPÍTULO OCTAVO

## DEL PROGRAMA NACIONAL DE BÚSQUEDA Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE EXHUMACIONES

**Artículo 134.** El Programa Nacional de Búsqueda y Localización, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deberá contener, como mínimo:

**I.** Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del Programa;

**II.** El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre la desaparición y los posibles paraderos de personas;

**III.** Las metodologías y procesos para recopilar y sistematizar información de las diferentes fuentes disponibles y para su incorporación y procesamiento en bases de datos o sistemas particulares para facilitar las labores de búsqueda y localización;

**IV.** La identificación de tiempo y lugar de episodios críticos de desaparición de personas en el país, la definición de los contextos de las desapariciones y las metodologías a emplearse para la búsqueda y localización en cada uno de esos contextos;

**V.** Las estrategias regionales o locales de búsqueda que se determinen de acuerdo a contextos y temporalidades específicas;

**VI.** Las estrategias específicas a seguir con base en la información y el análisis de contexto, para la búsqueda de personas migrantes, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores u otras personas o grupos que dadas sus características requieran medidas o mecanismos diferenciados de búsqueda;

**VII.** Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado;

**VIII.** El método específico de análisis de contexto que contribuya en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en episodios de violencia política del pasado, en términos de las disposiciones aplicables;

**IX.** El proceso para la depuración y organización de la información contenida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y su integración y armonización con otros registros que contengan información relevante para la búsqueda y localización de personas;

**X.** Los procesos, sistemas y mecanismos para la coordinación con el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense;

**XI.** Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa;

**XII.** La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación;

**XIII.** El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa;

**XIV.** Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición, y

**XV.** El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

**Artículo 135.** La elaboración del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, a cargo de la Procuraduría General de la República, deberá contener, como mínimo:

**I.** Diagnóstico, línea de base e información metodológica sobre la elaboración del programa;

**II.** El proceso y metodologías multidisciplinarias para la revisión sistemática y exhaustiva, por parte de las autoridades competentes, de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información sobre las personas fallecidas sin identificar que permita aportar información sobre la hipótesis de identificación de las personas inhumadas;

**III.** Información estadística sobre el número de cuerpos inhumados sin identificar;

**IV.** El listado de todos los panteones y cementerios del país, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar inhumados en cada uno y las circunstancias y contextos correspondientes;

**V.** El listado de todos los lugares de inhumación clandestina de cuerpos que se hayan localizado, a partir de la información que proporcionen las Procuradurías y Fiscalías Especializadas, especificando si ya se ha procesado la zona y si se han localizado restos, así como información sobre el número de cuerpos sin identificar recuperados en cada uno, las circunstancias y contextos correspondientes y el estatus de los procesos de identificación respectivos;

**VI.** Las estrategias regionales o locales de exhumación que se determinen de acuerdo a contextos y/o patrones específicos;

**VII.** Los criterios logísticos de priorización de las actuaciones de exhumaciones e identificación forense, de acuerdo a información recabada;

**VIII.** La evaluación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su implementación;

**IX.** El presupuesto asignado para la implementación y seguimiento del Programa;

**X.** Las actuaciones previstas para la identificación de las personas inhumadas y para proceder a las inhumaciones controladas, así como los tiempos previstos para su realización;

**XI.** Los procesos para el intercambio de información y coordinación con el Programa Nacional de Búsqueda y Localización;

**XII.** Las instituciones que participarán en la implementación del Programa, estableciendo sus responsabilidades e indicadores específicos de gestión, proceso y resultado;

**XIII.** Los mecanismos y modalidades de participación de las familias, colectivos de familias y organizaciones de la sociedad civil o personas acompañantes en los procesos de diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Programa;

**XIV.** Los objetivos del Programa y sus indicadores de gestión, proceso y resultados, determinando tiempos para su medición, y

**XV.** El cronograma de implementación del Programa, estableciendo acciones a corto, mediano y largo plazo.

La Procuraduría, al ejercer la facultad a la que se refiere este artículo, deberá solicitar información a las autoridades competentes que cuenten con información necesaria y considerar la opinión de la Comisión Nacional de Búsqueda y expertos en la materia.

## TÍTULO CUARTO

## DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

### CAPÍTULO PRIMERO

### DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 136.** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas de ayuda, asistencia y atención, por sí mismas o en coordinación con otras instituciones competentes, en los términos del presente Título y de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 137.** Las Víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes:

**I.** A la protección de sus derechos, personalidad e intereses jurídicos;

**II.** A que las autoridades inicien las acciones de búsqueda y localización, bajo los principios de esta Ley, desde el momento en que se tenga Noticia de su desaparición;

**III.** A ser restablecido en sus bienes y derechos en caso de ser encontrado con vida;

**IV.** A proceder en contra de quienes de mala fe hagan uso de los mecanismos previstos en esta Ley para despojarlo de sus bienes o derechos;

**V.** A recibir tratamiento especializado desde el momento de su localización para la superación del daño sufrido producto de los delitos previstos en la presente Ley, y

**VI.** A que su nombre y honra sean restablecidos en casos donde su defensa haya sido imposible debido a su condición de Persona Desaparecida.

El ejercicio de los derechos contenidos en las fracciones I, II, IV y VI de este artículo, será ejercido por los Familiares y personas autorizadas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y en la legislación aplicable.

**Artículo 138.** Los Familiares de las Víctimas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los siguientes derechos:

**I.** Participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida;

**II.** Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser fundada y motivada por escrito;

**III.** Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación;

**IV.** Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los expedientes de búsqueda;

**V.** Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas medidas de apoyo psicosocial;

**VI.** Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión Nacional de Búsqueda o promueva ante autoridad competente;

**VII.** Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, nacionales o internacionales en las acciones de búsqueda, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable;

**VIII.** Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia;

**IX.** Acceder de forma informada y hacer uso de los procedimientos y mecanismos que emanen de la presente Ley;

**X.** Ser informados de los mecanismos de participación derivados de la presente Ley;

**XI.** Participar en los diversos espacios y mecanismos de participación de Familiares, de acuerdo a los protocolos en la materia, y

**XII.** Acceder a los programas y servicios especializados que las autoridades competentes diseñen e implementen para la atención y superación del daño producto de los delitos contemplados en la presente Ley.

## CAPÍTULO SEGUNDO

## DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN

**Artículo 139.** Los Familiares, a partir del momento en que tengan conocimiento de la desaparición, y lo hagan del conocimiento de la autoridad competente, pueden solicitar y tienen derecho a recibir de inmediato y sin restricción alguna, las medidas de ayuda, asistencia y atención previstas en los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas.

**Artículo 140.** Las medidas a que se refiere el artículo anterior deben ser proporcionadas por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas en tanto realizan las gestiones para que otras instituciones públicas brinden la atención respectiva.

La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben proporcionar las medidas de ayuda, asistencia y atención a que se refiere el presente Título y la Ley General de Víctimas, en forma individual, grupal o familiar, según corresponda.

**Artículo 141.** Cuando durante la búsqueda o investigación exista un cambio de fuero, las Víctimas deben seguir recibiendo las medidas de ayuda, asistencia y atención por la Comisión de Atención a Víctimas que le atiende al momento del cambio, en tanto se establece el mecanismo de atención a Víctimas del fuero que corresponda.

## CAPÍTULO TERCERO

## DE LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA

**Artículo 142.** Los Familiares, otras personas legitimadas por la ley y el Ministerio Público podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional en materia civil que corresponda según la competencia, que emita la Declaración Especial de Ausencia en términos de lo dispuesto en esta Ley y las leyes aplicables.

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia será estrictamente voluntario. Las autoridades en contacto con los Familiares deberán informar del procedimiento y efectos de la Declaración a éstos.

**Artículo 143.** Para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional que conozca de la Declaración Especial de Ausencia se estará a cualquiera de los siguientes criterios:

**I.** El último domicilio de la Persona Desaparecida;

**II.** El domicilio de la persona quien promueva la acción;

**III.** El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición, o

**IV.** El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.

**Artículo 144.** Las leyes de la Federación y de las Entidades Federativas deben establecer el procedimiento a que se refiere este Capítulo, sin que el plazo para resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia exceda de seis meses a partir de iniciado el procedimiento.

Los procedimientos deberán contemplar aquellos casos en los cuales se haya declarado la presunción de ausencia o de muerte de una persona desaparecida, para permitirle acceder a la Declaratoria Especial de Ausencia y corregir el estatus legal de la persona desaparecida.

El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho la Denuncia o Reporte de desaparición, o la presentación de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o ante un organismo público de protección de los derechos humanos de las Entidades Federativas.

El procedimiento para emitir la Declaración Especial de Ausencia se regirá bajo los principios de inmediatez, celeridad y gratuidad. Los gastos derivados de este procedimiento, incluyendo publicación de edictos, no causarán contribución alguna en el caso de publicación en medios oficiales. La Comisión Ejecutiva, o la Comisión de Víctimas que corresponda, podrá otorgar las medidas de asistencia necesarias a los Familiares durante el procedimiento, incluido el gasto que se genere con motivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y demás normativa aplicable.

Los procedimientos a que se refiere este Capítulo deben contemplar la posibilidad de emitir medidas provisionales durante el procedimiento y deberán omitir requisitos que resulten onerosos para la emisión de las declaratorias. Los Familiares podrán en cualquier momento antes de emitida la Declaratoria desistirse de continuar con el procedimiento.

**Artículo 145.** La Declaración Especial de Ausencia tiene como finalidad:

**I.** Reconocer y proteger la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida, y

**II.** Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares de la Persona Desaparecida.

**Artículo 146.** La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:

**I.** Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;

**II.** Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en los términos de la legislación civil aplicable;

**III.** Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;

**IV.** Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por la ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;

**V.** Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida, continúen gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen;

**VI.** Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida;

**VII.** Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo;

**VIII.** Proveer sobre la representación legal de la persona ausente cuando corresponda, y

**IX.** Establecer las reglas aplicables en caso de que la persona sea localizada con vida para el restablecimiento de sus derechos y cumplimiento de obligaciones.

**Artículo 147.** La Declaración Especial de Ausencia sólo tiene efectos de carácter civil, por lo que no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

**Artículo 148.** La Comisión Nacional de Búsqueda debe continuar con la búsqueda, de conformidad con esta Ley, así como de las Fiscalías Especializadas de continuar con la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, aun cuando alguno de los Familiares o persona legitimada haya solicitado la Declaración Especial de Ausencia.

**Artículo 149.** Si la Persona Desaparecida declarada ausente es localizada con vida, ésta puede solicitar, ante el órgano jurisdiccional que declaró la ausencia, la recuperación de sus bienes.

Si la persona declarada ausente es encontrada sin vida, sus Familiares pueden solicitar al juez civil competente iniciar los procedimientos que conforme a la legislación civil aplicable correspondan.

## CAPÍTULO CUARTO

## DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

**Artículo 150.** Las Víctimas de los delitos establecidos en la presente Ley tienen derecho a ser reparadas integralmente conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas.

El derecho para que la víctima solicite la reparación integral es imprescriptible.

**Artículo 151.** La reparación integral a las Víctimas de los delitos establecidos en la presente Ley comprenderá, además de lo establecido en la Ley General de Víctimas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en normas del derecho internacional, los elementos siguientes:

**I.** Medidas de satisfacción:

**a)** Construcción de lugares o monumentos de memoria;

**b)** Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas;

**c)** Recuperación de escenarios de encuentro comunitario;

**d)** Recuperación de la honra y memoria de la persona o personas desaparecidas, o

**e)** Recuperación de prácticas y tradiciones socioculturales que, en su caso, se perdieron por causa de un hecho victimizante, y

**II.** Medidas de no repetición que, entre otras acciones, deben incluir la suspensión temporal o inhabilitación definitiva de los servidores públicos investigados o sancionados por la comisión del delito de desaparición forzada de personas, según sea el caso y previo desahogo de los procedimientos administrativos y/o judiciales que correspondan.

**Artículo 152.** La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, son responsables de asegurar la reparación integral a las Víctimas por Desaparición Forzada de Personas cuando sean responsables sus servidores públicos o particulares bajo la autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de éstos.

La Federación y las Entidades Federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a las Víctimas de desaparición cometida por particulares en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas.

## CAPÍTULO QUINTO

## DE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

**Artículo 153.** Las Fiscalías Especializadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben establecer programas para la protección de las Víctimas, los Familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, investigación o proceso penal de los delitos previstos en esta Ley, cuando su vida o integridad corporal pueda estar en peligro, o puedan ser sometidas a actos de maltrato o intimidación por su intervención en dichos procesos, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal o las leyes análogas de las Entidades Federativas.

También deberán otorgar el apoyo ministerial, pericial, policial y de otras fuerzas de seguridad a las organizaciones de Familiares y a Familiares en las tareas de búsqueda de personas desaparecidas en campo, garantizando todas las medidas de protección a su integridad física.

**Artículo 154.** Las Fiscalías Especializadas pueden otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas, como medida urgente de protección la reubicación temporal, la protección de inmuebles, la escolta de cuerpos especializados y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo anterior, conforme a los procedimientos y con las autorizaciones aplicables.

**Artículo 155.** Las Fiscalías Especializadas pueden otorgar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas, como medida de protección para enfrentar el riesgo, la entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, vigilancia a través de patrullajes, entrega de chalecos antibalas, detector de metales, autos blindados, y demás medios de protección que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas protegidas a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, conforme a la legislación aplicable.

Cuando se trate de personas defensoras de los derechos humanos o periodistas se estará también a lo dispuesto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

**Artículo 156.** La incorporación a los programas de protección de personas a que se refiere el artículo 153 de esta Ley debe ser autorizada por el agente del Ministerio Público encargado de la investigación o por los titulares de las Fiscalías Especializadas correspondientes.

**Artículo 157.** La información y documentación relacionada con las personas protegidas debe ser tratada con estricta reserva o confidencialidad, según corresponda.

# TÍTULO QUINTO

# DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS

## CAPÍTULO PRIMERO

## DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 158.** La Secretaría de Gobernación, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deberán coordinarse para implementar las medidas de prevención previstas en el artículo 161 de esta Ley.

Lo anterior con independencia de las establecidas en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

**Artículo 159.** Todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Las grabaciones deberán almacenarse de forma segura por dos años.

**Artículo 160.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben administrar bases de datos estadísticas relativas a la incidencia de los delitos previstos en esta Ley, garantizando que los datos estén desagregados, al menos, por género, edad, nacionalidad, Entidad Federativa, sujeto activo, rango y dependencia de adscripción, así como si se trata de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

Las bases de datos a que se refiere el párrafo que antecede deben permitir la identificación de circunstancias, grupos en condición de vulnerabilidad, modus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de alto riesgo en los que aumente la probabilidad de comisión de alguno de los delitos previstos en esta Ley para garantizar su prevención.

**Artículo 161.** El Sistema Nacional, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, debe respecto de los delitos previstos en esta Ley:

**I.** Llevar a cabo campañas informativas dirigidas a fomentar la Denuncia de los delitos y sobre instituciones de atención y servicios que brindan;

**II.** Proponer acciones de capacitación a las Instituciones de Seguridad Pública, a las áreas ministeriales, policiales y periciales y otras que tengan como objeto la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación y sanción de los delitos previstos en esta Ley, así como la atención y protección a Víctimas con una perspectiva psicosocial;

**III.** Proponer e implementar programas que incentiven a la ciudadanía, incluyendo a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, a proporcionar la información con que cuenten para la investigación de los delitos previstos en la presente Ley, así como para la ubicación y rescate de las Personas Desaparecidas o No Localizadas;

**IV.** Promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales para fortalecer la prevención de las conductas delictivas;

**V.** Recabar y generar información respecto a los delitos que permitan definir e implementar políticas públicas en materia de búsqueda de personas, prevención e investigación;

**VI.** Identificar circunstancias, grupos vulnerables y zonas de alto riesgo en las que aumente la probabilidad de que una o más personas sean Víctimas de los delitos, así como hacer pública dicha información de manera anual;

**VII.** Proporcionar información y asesoría a las personas que así lo soliciten, de manera presencial, telefónica o por escrito o por cualquier otro medio, relacionada con el objeto de esta Ley, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos;

**VIII.** Reunirse, por lo menos dos veces al año, para intercambiar experiencias que permitan implementar políticas públicas en materia de prevención de los delitos;

**IX.** Emitir un informe anual respecto de las acciones realizadas para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

**X.** Diseñar instrumentos de evaluación e indicadores para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, en donde se contemple la participación voluntaria de Familiares;

**XI.** Realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre la problemática de desaparición de personas y otras conductas delictivas conexas o de violencia vinculadas a este delito, que permitan la elaboración de políticas públicas que lo prevengan, y

**XII.** Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 162.** Las Fiscalías Especializadas deben intercambiar la información que favorezca la investigación de los delitos previstos en esta Ley y que permita la identificación y sanción de los responsables.

**Artículo 163.** La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben diseñar los mecanismos de colaboración que correspondan con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

**Artículo 164.** El Sistema Nacional, a través de la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, debe coordinar el diseño y aplicación de programas que permitan combatir las causas que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial referencia a la marginación, las condiciones de pobreza, la violencia comunitaria, la presencia de grupos delictivos, la operación de redes de trata, los antecedentes de otros delitos conexos y la desigualdad social.

## CAPÍTULO SEGUNDO

## DE LA PROGRAMACIÓN

**Artículo 165.** Los programas de prevención a que se refiere el presente Título deben incluir metas e indicadores a efecto de evaluar las capacitaciones y procesos de sensibilización impartidos a servidores públicos.

**Artículo 166.** La Federación, las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligados a remitir anualmente al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos generados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estudios sobre las causas, distribución geográfica de la frecuencia delictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos previstos en esta Ley, así como su programa de prevención sobre los mismos. Estos estudios deberán ser públicos y podrán consultarse en la página de Internet del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

## CAPÍTULO TERCERO

## DE LA CAPACITACIÓN

**Artículo 167.** La Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y la autoridad municipal que el titular del Ayuntamiento determine deben establecer programas obligatorios de capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a los principios referidos en el artículo 5 de esta Ley, para servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública involucrados en la búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento, con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos.

**Artículo 168.** La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública, con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, deben capacitar, en el ámbito de sus competencias, al personal ministerial, policial y pericial conforme a los más altos estándares internacionales, respecto de las técnicas de búsqueda, investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere esta Ley, con pleno respeto a los derechos humanos y con enfoque psicosocial.

**Artículo 169.** Las Instituciones de Seguridad Pública seleccionarán, de conformidad con los procedimientos de evaluación y controles de confianza aplicables, al personal policial que conformará los Grupos de Búsqueda.

**Artículo 170.** La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los lineamientos que permitan a cada orden de gobierno determinar el número de integrantes que conformarán los Grupos de Búsqueda de conformidad con las cifras de los índices del delito de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, así como de Personas No Localizadas que existan en cada Entidad Federativa o Municipio.

**Artículo 171.** La Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar y certificar, a su personal conforme a los criterios de capacitación y certificación que al efecto establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

**Artículo 172.** Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 170 y 171, la Procuraduría, las Procuradurías Locales y las Instituciones de Seguridad Pública deben capacitar a todo el personal policial respecto de los protocolos de actuación inmediata y las acciones específicas que deben realizar cuando tengan conocimiento, por cualquier medio, de la desaparición o no localización de una persona.

**Artículo 173.** La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben capacitar a sus servidores públicos, conforme a los más altos estándares internacionales, para brindar medidas de ayuda, asistencia y atención con un enfoque psicosocial y técnicas especializadas para el acompañamiento de las Víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas deben implementar programas de difusión a efecto de dar a conocer los servicios y medidas que brindan a las Víctimas de los delitos a que se refiere esta Ley, en términos de lo previsto en este ordenamiento.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se reforma el tercer párrafo del artículo 25; se deroga el Capítulo III Bis del Título Décimo conformado por los artículos 215-A a 215-D, y se adiciona un artículo 280 Bis al Título Décimo Séptimo del Código Penal Federal, para quedar como siguen:

**Artículo 25.- ...**

**...**

El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo no es aplicable para los delitos que se sancionen de conformidad con lo estipulado en otras leyes.

**CAPÍTULO III BIS**

**Desaparición forzada de personas**

**(Derogado)**

**Artículo 215-A.-** Derogado.

**Artículo 215-B.-** Derogado.

**Artículo 215-C.-** Derogado.

**Artículo 215-D.-** Derogado.

**Artículo 280 Bis.-** Se impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcial el cadáver o restos humanos de una persona no identificada, sin autorización de las autoridades competentes en la materia.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Se reforman los artículos 348, segundo párrafo; 350 Bis 3, segundo párrafo; 350 Bis 4 y 350 Bis 5, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

**Artículo 348.- ...**

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. Para el caso de cadáveres de personas no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

**...**

**Artículo 350 Bis 3.- ...**

Tratándose de cadáveres de personas desconocidas o no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

**Artículo 350 Bis 4.-** Las instituciones educativas sólo podrán utilizar cadáveres respecto de los que tengan el consentimiento, ante mortem de la persona fallecida o de sus familiares después de su muerte.

Las instituciones educativas que reciban cadáveres para efectos de investigación o de docencia deberán tener un registro que contenga, por lo menos:

**I.** Nombre completo de la persona fallecida;

**II.** El domicilio en el que habitaba la persona fallecida;

**III.** Edad que tenía la persona al fallecer;

**IV.** Sexo de la persona fallecida;

**V.** Estado civil de la persona fallecida;

**VI.** Nombre y domicilio del cónyuge, concubina o concubinario;

**VII.** Nombre y domicilio de los padres y en caso de haber fallecido éstos, la mención de este hecho;

**VIII.** En caso de no tener cónyuge, concubina o concubinario, o padres, el señalamiento del nombre y domicilio de alguno de sus familiares más cercanos, y

**IX.** El nombre de la institución educativa beneficiaria del cadáver.

**Artículo 350 Bis 5.-** Los cadáveres que se hayan destinado para fines de docencia e investigación serán inhumados o incinerados.

**Transitorios**

**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la emisión de los instrumentos a que se refiere el Artículo Décimo Cuarto Transitorio, la Procuraduría y las Procuradurías Locales y demás autoridades deberán cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a esta Ley.

La Procuraduría y las Procuradurías Locales, además de los protocolos previstos en esta Ley, continuarán aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de vulnerabilidad.

**Segundo.** Se abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

**Tercero.** Las Fiscalías Especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda entrarán en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los treinta días siguientes a que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los protocolos rectores para su funcionamiento previstos en el artículo 53, fracción VIII, de esta Ley.

Dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, ésta deberá emitir el Programa Nacional de Búsqueda.

Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas y las Comisiones de Búsqueda deberán estar certificados dentro del año posterior a su creación.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda emitirá los criterios previstos en el artículo 53, fracción L, de esta Ley, dentro de los noventa días posteriores a su entrada en funciones.

La Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales podrán, a partir de que entren en funcionamiento, ejercer las atribuciones que esta Ley les confiere con relación a los procesos de búsqueda que se encuentren pendientes. La Comisión Nacional de Búsqueda coordinará la búsqueda de las personas desaparecidas relacionadas con búsquedas en las que, a la entrada en vigor de esta Ley, participen autoridades federales.

**Cuarto.** Las Comisiones Locales de Búsqueda deberán entrar en funciones a partir de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

La Comisión Nacional de Búsqueda deberá brindar la asesoría necesaria a las entidades federales para el establecimiento de sus Comisiones Locales de Búsqueda.

**Quinto.** El Consejo Ciudadano deberá estar conformado dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

En un plazo de treinta días posteriores a su conformación el Consejo Ciudadano deberá emitir sus reglas de funcionamiento.

**Sexto.** El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas deberá quedar instalado dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto.

En la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, se deberán emitir los lineamientos y modelos a que se refiere el artículo 49, fracciones I, VIII, XV y XVI de esta Ley.

En la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, que se lleve conforme a lo dispuesto por esta Ley, se deberán emitir los criterios de certificación y especialización previstos en el artículo 55.

**Séptimo.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la emisión de los lineamientos previstos en el artículo transitorio anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Dentro de los noventa días siguientes a que comience la operación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las Entidades Federativas deberán poner en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

**Octavo.** En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las Procuradurías Locales deberán incorporar en un registro provisional, electrónico o impreso, la información de los Reportes, Denuncias o Noticias recibidas conforme a lo que establece el artículo 106 de esta Ley.

La Federación y las Entidades Federativas deberán migrar la información contenida en los registros provisionales a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

**Noveno.** El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

Las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

En aquellas Entidades Federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta Ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido Capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable.

**Décimo.** A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que las disposiciones contenidas en el mismo contemplen la descripción legal de conductas previstas en otras normas como delitos y por virtud de la presente Ley se denominan, tipifican, penalizan o agravan de forma diversa, siempre y cuando la conducta y los hechos correspondan a la descripción que ahora se establece, se estará a lo siguiente:

**I.** En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos de esta Ley, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la presente Ley;

**II.** En las investigaciones iniciadas en las que aún no se ejerza acción penal, el Ministerio Público la ejercitará de conformidad con la traslación del tipo que resulte procedente;

**III.** En los procesos iniciados conforme al sistema penal mixto en los que el Ministerio Público aún no formule conclusiones acusatorias, procederá a su elaboración y presentación de conformidad con la traslación del tipo penal que, en su caso, resultare procedente;

**IV.** En los procesos iniciados conforme al sistema acusatorio adversarial, en los que el Ministerio Público aún no presente acusación, procederá a su preparación y presentación atendiendo a la traslación del tipo que pudiera proceder;

**V.** En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal que corresponda, podrá efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado, incluyendo sus modalidades, sin exceder el monto de las penas señaladas en la respectiva ley vigente al momento de la comisión de los hechos, y

**VI.** La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, según las modalidades correspondientes.

**Décimo Primero.** El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

**Décimo Segundo.** Dentro de los treinta días siguientes a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le transferirá las herramientas tecnológicas y la información que haya recabado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Dentro de los noventa días siguientes a que reciba la información a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá transmitir a las Fiscalías Especializadas la información de las Personas Desaparecidas o No Localizadas que correspondan al ámbito de su competencia.

Las Fiscalías Especializadas deberán actualizar el contenido del Registro Nacional, conforme a lo siguiente:

**I.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a que reciban la información, la Fiscalía Especializada que corresponda deberá recabar información sobre las personas inscritas en el Registro previsto en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que correspondan a su ámbito de competencia, a fin de que dicha información esté apegada a lo dispuesto en el artículo 106 y, en su caso, al artículo 112 de esta Ley;

**II.** En términos de la fracción anterior, las Fiscalías Especializadas que estén impedidas materialmente para actualizar la información dentro del plazo previsto, deberán publicar un padrón con el nombre de las Personas Desaparecidas o No Localizadas cuya información no haya sido actualizada, a efecto de que, dentro de los ciento veinte días siguientes, los Familiares y organizaciones de la sociedad civil proporcionen la información que pudiera resultar útil para realizar dicha actualización;

**III.** Una vez actualizada la información, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá ingresarla al registro que corresponda, a excepción de que la actualización revele que la persona fue localizada, en cuyo caso, se asentará en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y

**IV.** Al haberse realizado la acción prevista en la fracción II de este artículo, de no haberse actualizado el registro, la Fiscalía Especializada que corresponda estará materialmente imposibilitada para actualizarlo. En este supuesto, el registro permanecerá con la anotación de actualización pendiente y será migrado, con ese carácter, al registro que corresponda.

**Décimo Tercero.** El Banco Nacional de Datos Forenses, los registros forenses Federal y el de las Entidades Federativas comenzarán a operar dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dentro de los tres meses siguientes a que inicie la operación de dichos registros, las autoridades que posean información forense deberán incorporarla al registro que corresponda.

**Décimo Cuarto.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deberá emitir el Protocolo Homologado de Investigación a que se refiere el artículo 99 de esta Ley.

**Décimo Quinto.** Las autoridades e instituciones que recaban la información a que se refiere el artículo 103 la deberán incorporar en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

**Décimo Sexto.** En las Entidades Federativas en las que no exista una Comisión de Atención a Víctimas, las instituciones públicas competentes de la Entidad Federativa deberán brindar la atención a Víctimas conforme a lo establecido en el Título Cuarto de esta Ley.

**Décimo Séptimo.** Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.

**Décimo Octavo.** Los lineamientos para determinar las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres o restos de personas a que refiere el artículo 130 de esta Ley deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

**Décimo Noveno.** La Procuraduría General de la República debe emitir los lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco Nacional de Datos Forenses cuenten con las características técnicas y soporte tecnológico adecuado, conforme a lo previsto en los artículos 131, fracción III y 132, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior la Procuraduría General de la República emitirá los lineamientos necesarios para que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno remitan en forma homologada la información que será integrada al Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y al Banco Nacional de Datos Forenses previstos en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

**Vigésimo.** En tanto las Entidades Federativas se encuentren en la integración de sus Comisiones de Búsqueda, las obligaciones previstas para estas Comisiones en la Ley serán asumidas por la Secretaría de Gobierno de cada entidad.

Asimismo, las Entidades Federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto.

**Vigésimo Primero.** Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá emitir los lineamientos a que se refiere la fracción XIV del artículo 53 de la Ley.

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2017.- Sen. **Ernesto Cordero Arroyo**, Presidente.- Dip. **Jorge Carlos Ramírez Marín**, Presidente.- Sen. **Lorena Cuéllar Cisneros**, Secretaria.- Dip. **Ana Guadalupe Perea Santos**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.- **Enrique Peña Nieto**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Miguel Ángel Osorio Chong**.- Rúbrica.